



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Acerca de este libro

Esta es una copia digital de un libro que, durante generaciones, se ha conservado en las estanterías de una biblioteca, hasta que Google ha decidido escanearlo como parte de un proyecto que pretende que sea posible descubrir en línea libros de todo el mundo.

Ha sobrevivido tantos años como para que los derechos de autor hayan expirado y el libro pase a ser de dominio público. El que un libro sea de dominio público significa que nunca ha estado protegido por derechos de autor, o bien que el período legal de estos derechos ya ha expirado. Es posible que una misma obra sea de dominio público en unos países y, sin embargo, no lo sea en otros. Los libros de dominio público son nuestras puertas hacia el pasado, suponen un patrimonio histórico, cultural y de conocimientos que, a menudo, resulta difícil de descubrir.

Todas las anotaciones, marcas y otras señales en los márgenes que estén presentes en el volumen original aparecerán también en este archivo como testimonio del largo viaje que el libro ha recorrido desde el editor hasta la biblioteca y, finalmente, hasta usted.

Normas de uso

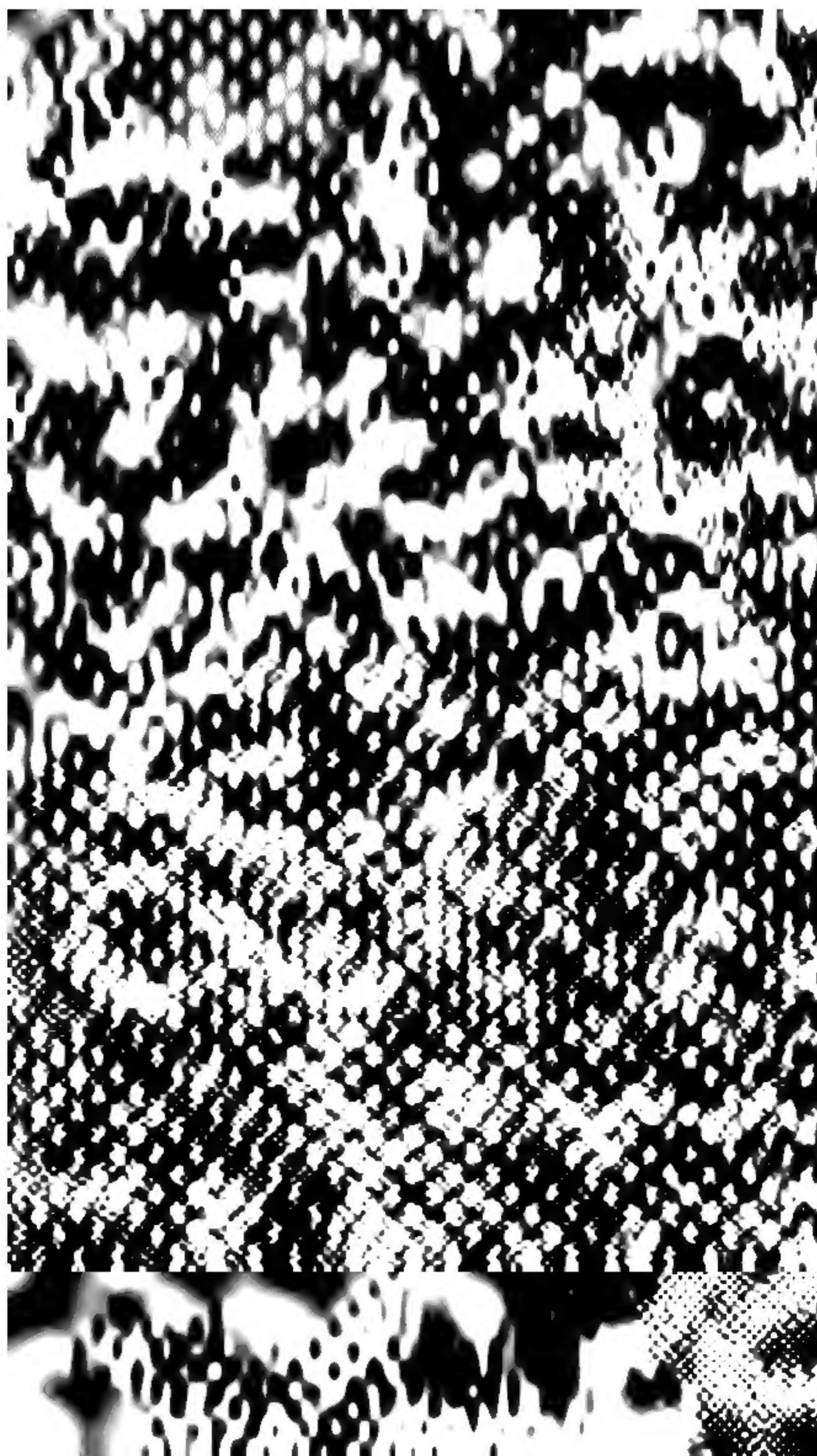
Google se enorgullece de poder colaborar con distintas bibliotecas para digitalizar los materiales de dominio público a fin de hacerlos accesibles a todo el mundo. Los libros de dominio público son patrimonio de todos, nosotros somos sus humildes guardianes. No obstante, se trata de un trabajo caro. Por este motivo, y para poder ofrecer este recurso, hemos tomado medidas para evitar que se produzca un abuso por parte de terceros con fines comerciales, y hemos incluido restricciones técnicas sobre las solicitudes automatizadas.

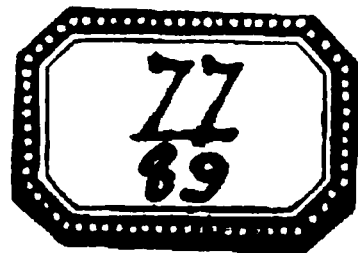
Asimismo, le pedimos que:

- + *Haga un uso exclusivamente no comercial de estos archivos* Hemos diseñado la Búsqueda de libros de Google para el uso de particulares; como tal, le pedimos que utilice estos archivos con fines personales, y no comerciales.
- + *No envíe solicitudes automatizadas* Por favor, no envíe solicitudes automatizadas de ningún tipo al sistema de Google. Si está llevando a cabo una investigación sobre traducción automática, reconocimiento óptico de caracteres u otros campos para los que resulte útil disfrutar de acceso a una gran cantidad de texto, por favor, envíenos un mensaje. Fomentamos el uso de materiales de dominio público con estos propósitos y seguro que podremos ayudarle.
- + *Conserve la atribución* La filigrana de Google que verá en todos los archivos es fundamental para informar a los usuarios sobre este proyecto y ayudarles a encontrar materiales adicionales en la Búsqueda de libros de Google. Por favor, no la elimine.
- + *Manténgase siempre dentro de la legalidad* Sea cual sea el uso que haga de estos materiales, recuerde que es responsable de asegurarse de que todo lo que hace es legal. No dé por sentado que, por el hecho de que una obra se considere de dominio público para los usuarios de los Estados Unidos, lo será también para los usuarios de otros países. La legislación sobre derechos de autor varía de un país a otro, y no podemos facilitar información sobre si está permitido un uso específico de algún libro. Por favor, no suponga que la aparición de un libro en nuestro programa significa que se puede utilizar de igual manera en todo el mundo. La responsabilidad ante la infracción de los derechos de autor puede ser muy grave.

Acerca de la Búsqueda de libros de Google

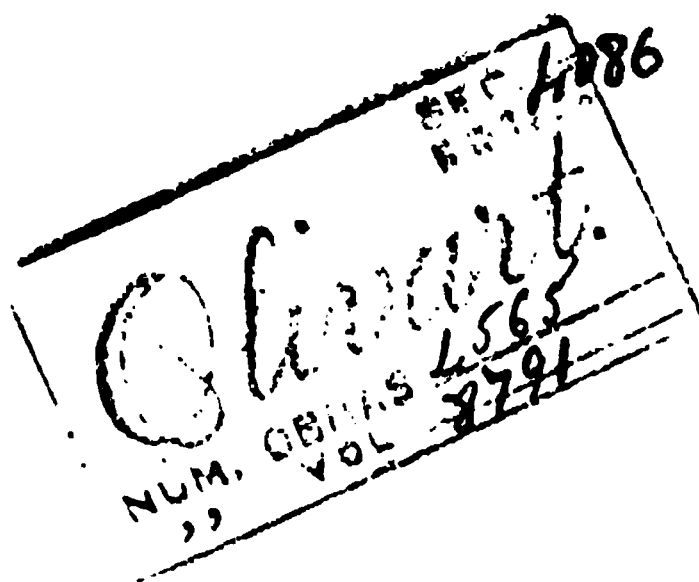
El objetivo de Google consiste en organizar información procedente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de forma universal. El programa de Búsqueda de libros de Google ayuda a los lectores a descubrir los libros de todo el mundo a la vez que ayuda a autores y editores a llegar a nuevas audiencias. Podrá realizar búsquedas en el texto completo de este libro en la web, en la página <http://books.google.com>





LA REFORMA POLÍTICA DE ULTRAMAR

1868-1900



77
9

OLÍTICA

co

1AR

DS

ABRA

NSO

CTOR

e libro dicen suficien-
o al publicarlo. Paré-
ante para explicar la
bra formada por va-
letos, con que solicité
ña en el agitado perío-
ntre la gforiosa Revo-
3 afrentosos desastres

cir y coleccionar esos
obras de carácter pura-
xpresión de mi manera
ueden muy bien servir
o de los hechos á que
ugar considerable en la
pañola.—Y pienso que
ran valor para los que,
ran y deban formar un
emas españoles del si-
ia las posiciones y los
ráncos, no ya por me-
ramente retrospectivo,
lecciones que de aque-
en obsequio al presti-

gio y el porvenir de España y al progreso regular de la Humanidad.

No es verosímil que se reproduzca en España la situación de estos últimos treinta años. Es decir, no es verosímil que se repitan los problemas coloniales que nos han preocupado en este tiempo. Pero las lecciones que de los aludidos sucesos se desprenden no pueden menos de interesar á todos cuantos, entrando en el fondo de las cosas y conocedores de la economía moral de las sociedades, se den buena cuenta de que la cuestión colonial era uno de los problemas fundamentales de la España contemporánea, y que las causas de los últimos desastres eran, no las entrañadas única y exclusivamente en el viejo régimen ultramarino, si que las que viciaban y todavía vician la vida entera de la sociedad española.

En el libro de ahora trato sólo del PROBLEMA POLÍTICO de Ultramar. Y aun respecto de éste me atengo á trabajos de carácter general. Por eso no se incluyen en la colección los dos folletos con que comencé en 1869 mi campaña, y que se titulan: *La pérdida de las Américas*—y *La Cuestión Colonial en 1869*. Aquél es un estudio histórico relativo al período de 1810 á 1825, para probar *que no fué, no, la libertad quien perdió las Américas*. El otro es una descripción del estado de nuestras Colonias en la época de la Revolución de Septiembre, y que concluye con la doble afirmación de que *el porvenir de nuestras colonias estaba á la sombra de España*, y que *España, sólo por la libertad, podía asegurar su imperio allende los mares*.

Después he publicado un estudio sobre *La Cuestión de Puerto Rico en 1870*, con fórmulas atenuadas de autonomía colonial, que hay que relacionar con mi discurso sobre el *Presupuesto de Puerto Rico de 1889*, que explica una fórmula de transacción calcada en el régimen foral de las Provincias Vascongadas; y mi libro titulado *Una campaña parlamentaria*, que comprende todos mis discursos políticos de 1871 á 73; y mi discurso de 1880, sobre el *Primer presupuesto de Cuba*, con cuyo motivo se formuló por primera vez en el Parlamento español, dentro de la Restauración borbónica, la aspiración francamente autonomista; y mis *Conferencias del Abuli* de 1890, sobre política colonial; y la colección de mis discursos de 1896, sobre *la Reforma electoral en las Antillas*; y mi folleto del propio año sobre la *Política antilana en la Metrópoli española*; y mi libro sobre la *Autonomía colonial* de 1892; y mis discursos de 1895, sobre la *Reforma política y económica en las Antillas*, etc., etc.

Claro está que todos estos trabajos se relacionan también con el PROBLEMA MORAL Y SOCIAL antillano, entrañado en la pavorosa *cuestión de la esclavitud*; pero no es ésta su propia materia, que siempre reservé para esfuerzos excepcionales, por mí realizados como parlamentario, publicista, propagandista y Presidente de la *Sociedad Abolicionista Española*.

Tengo el propósito de coleccionar también buena parte de mis folletos y discursos sobre este particular, que estimé siempre bajo la doble presión de un requerimiento de conciencia y de un deber

de patriotismo. Porque, aparte de haber yo nacido en Cuba y formado parte de su clase dominante, pocas cosas me han preocupado y avergonzado tanto, fuera de España, como la consideración de ser mi Patria la única nación de Europa que, con aspiración á representar algo, dentro de la civilización cristiana y la cultura contemporánea, en la agonía del siglo XIX, cubría con su bandera la infame y corruptora esclavitud de los negros. Así lo digo al redactar la protesta que, contra aquella afrenta, votó la Junta revolucionaria de Madrid en 1868.

El nuevo libro que preparo también podrá servir de enseñanza, por los hechos á que se contrae; porque la empresa abolicionista de estos últimos años es uno de los empeños más gloriosos y de éxito más completo de la Historia política moderna de España.

Pensando en ello, no puedo explicarme el silencio que nuestros políticos y nuestra prensa observan respecto de este particular. Menos aún, cuando todo el mundo baja la cabeza ante el desastre de 1898. Por esto mismo debían ser más potentes la protesta y el recuerdo de la abolición de la esclavitud, que se realizó en Puerto Rico de un modo *incomparable* y en Cuba, de manera y con consecuencias superiores á todas las demás experiencias abolicionistas del siglo XIX.

Colecciono, pues, para la *Historia*.

: 30-Noviembre-1911
Madrid.

tigio de que disfrutó el Parlamento español, y una gran facilidad para que la generalidad de las gentes crea que el empeño parlamentario es cosa sencillísima, ó que diputados y senadores no son otra cosa que unas figuras más ó menos decorativas, consagradas en vista del esplendor de la gobernación del Estado y el provecho de un millar de personas de diferentes partidos.

La verdad es que la institución parlamentaria responde á otros fines y supone otras condiciones. De todos modos, y á despecho de todos los abusos, la tribuna parla-

prevenciones que respecto del período del 20 al 23, ya dentro de la época constitucional. Quizá en España se ha pecado de mayor injusticia que la notoria con que los franceses se ocuparon, por mucho tiempo, de la República del 48, sin la cual quizá habría sido imposible la instauración y sobre todo el desarrollo de la tercera República francesa de nuestros días. Sin embargo, nuestra República del 73 fué menos censurable que la vecina del 48 y tiene de común con esta, su carácter de *preparatoria*. Lo cual no quita para que ambas ofrezcan mucho margen á una crítica justa y desinteresada.

Con este criterio preparaba yo un trabajo especial sobre los *Ensayos y los ejemplos republicanos del siglo XIX*, cuando algunas circunstancias de valor inexcusable me han determinado á ordenar apresuradamente mis datos y á escribir estas líneas dedicadas concretamente á exponer lo que la República española y nuestros republicanos han hecho en favor de las libertades antillanas (1).

Uno de los motivos de mi resolución es el evidente fracaso de la política... colonial (llamémosla así) de todos los partidos monárquicos de nuestra Patria. No tengo para qué razonar el hecho. Me parece de evidencia. El famoso empeño de la *asimilación* ya es tenido por todo el mundo no sólo por imposible en lo futuro, sino por desastroso hasta el presente. Las *reformas liberales* del 95, aceptadas por los autonomistas de las Antillas y por los diputados republicanos con *muchas y bien señaladas* reservas (contra lo que propala ahora mismo la prensa liberal peninsular) ya parecen á todos deficientes. A última hora se han querido

(1) Aquel trabajo está en prensa. En él me ocupo primeramente de las Repúblicas de Francia y de los Estados Unidos de América.

biernos extraños y la simpatía de todos los hombres justos y progresivos parece que va á inaugurarse en Cuba y en Puerto Rico, para presidir al afianzamiento y desarrollo de las nuevas instituciones.

Además, y como una de las consecuencias de lo antes afirmado, hay que establecer que los únicos elementos abonados por sus antecedentes y su devoción, para hacer que las instituciones autonomistas vivan y prosperen mediante una política de fe y sinceridad, son los elementos republicanos. Porque solo ellos han proclamado de muy atrás la solución autonomista como medio de evitar lo que ahora pasa en nuestras Antillas y como modo de organizar definitivamente el gobierno de las colonias. Y porque solo puesta la viata en ellos puede afirmarse, frente á la susceptibilidad del honor español, que en España ha habido siempre muchos y buenos españoles, que independientemente de lo que pensara y dijera el extranjero, han creído y dicho á toda hora, que la mejor política en Ultramar es la de la paz y la confianza en los cubanos y portorriqueños, así como que la solución positiva de los problemas antillanos estaba y está en la Autonomía colonial.

De donde se sigue que la *Cuestión colonial*, por su inmensa gravedad, por el compromiso internacional que entraña, por lo que su actual solución afecta al honor de la Patria española, por la devoción que exige y por el estado de asombrosa descomposición de todos nuestros partidos monárquicos, la *Cuestión colonial*; repito, es una razón más en favor de la restauración de la República en España. En pro de esta restauración trabaja también otro problema vital de nuestra Patria; problema que resulta de toda nuestra historia, del sentido del derecho público contemporáneo y de las

tido en desgracias secundarias las que no han tiempo parecían insufribles».

Ese infortunio lo producían el proyecto de ley la esclavitud en Puerto Rico y el decreto de 13 de bre de 1872 referente al planteamiento inmediato de la isla de la ley municipal que debió aplicarse á de 1870 y por la cual se establecían alcaldes y electos por los vecinos mayores de 25 años que leer y escribir ó pagaran alguna contribución á En ella se concedían, también, facultades de cierr los Ayuntamientos reducidos antes á mera decorac

¡Un *infortunio* todo eso!

Sin duda alguna antes de este movido período lución de Septiembre había hecho sentir sus efectos orden colonial, pero solo en cierto grado y medida que se hubieran debido esperar si la lógica fuera ocasiones la ley del mundo político.

Antes de la Revolución se había iniciado y por algunos elementos democráticos de la Pen algunos naturales de las Antillas residentes e trópoli, una campaña en favor de soluciones n tuadas y expansivas en materia colonial. Buena de ello son el programa y los artículos del famoso *La Discusión* (1) fundado y dirigido desde 185 por D. Nicolás M. Rivero así como los meetings d dad abolicionista española, que por iniciativa de queño D. Julio Vizcarrondo fundamos en 1863, y en Madrid desde esta fecha hasta 1866. Pero en este

(1) En este periódico emencé ya en 1860 mi campaña las libertades coloniales.

el abolicionista redujo sus pretensiones de la libertad del negro, sin tocarlo. Aun para llegar á aquella afirmación contra la *trata*, necesitaron el abolicionismo español refirir muy á la misma Sociedad. En cuanto al *proyecto* (que lo llegó á ser de toda la *deputación*) conviene recordar que en lo relativo á mero enunciado de la *abolición de la trata en Cortes* de las provin-

comendado á la opinión por los *deputados*, era algo muy modesto y *ante* para determinar á nuestros *deputados* más á la generalidad de las *provincias* radical. No hay, pues, *des* surgidas en el seno de la *Junta* de Madrid, ni los términos *tem-* *porales* de Septiembre del 68.

revolucionaria de Madrid (resumen *del* *movimiento* revolucionario de 1868) hizo *ya* punto menos que olvidadas, *dar*, máxima cuando á todo andar *condiciones* y de las responsabilidades.

1868, D. Nicolás M. Rivero, sostu-

esclavitud de los negros es un *ul-* *traje* y una afrenta para la Nación *o* civilizado la conserva en toda su *su* historia, por su carácter, por lo

relacionada que está con todas las esferas de vida en nuestras Antillas, por la transcendencia de cualquier medida que sobre ella se tome y la gravedad que todo golpe irreflexivo entraña aun para los mismos negros, la *esclavitud* es una de esas instituciones repugnantes, cuya desaparición no debe hacerse esperar, pero que exige en cambio la adopción sesuda y bien pensada de otras medidas previas y coetáneas de índole muy diversa, que hagan fácil, fecunda y definitiva la obra de la abolición.

Considerando que estos miramientos, sin embargo, no obstan para que interin las Cortes constituyentes, oyendo á los diputados de Ultramar, decreten la abolición inmediata de la esclavitud, el Gobierno provisional pueda tomar alguna medida en desagravio de la justicia ofendida y sin temor á ninguna de esas complicaciones que obligan á esperar el acuerdo de las Cortes.

La Junta superior revolucionaria de Madrid propone al Gobierno provisional como medida de urgencia y salvadora.

Quedan declarados libres todos los nacidos de mujer esclava á partir del 17 de Septiembre próximo pasado.»

En la misma fecha (esto es, el propio 15 de Septiembre de 1868), la misma Junta votó otro Decreto, que también propuso el Sr. Rivero y decla así:

«La Junta superior revolucionaria, á propuesta de varios de sus miembros, acordó por aclamación proponer al Gobierno que llame á la representación de las próximas Cortes constituyentes á las provincias de Ultramar.»

Por cierto que recuerdo bien que estas declaraciones no se hicieron sin reparo por parte de alguno de los miembros de aquella Junta, un poco alarmada por el efecto inmediato que las tales declaraciones podían producir en las Antillas, donde se suponía incontrastable al elemento conservador y casi en pleno salvajismo al negro *nacido para la servidumbre*.

Y en cuanto á la declaración sobre derechos políticos ya se supondrá que su redacción original sería otra, en términos más comprensivos y con sus considerandos correspondientes.

ces, circuló en Madrid una Exposición al
cional pidiendo mucho más y precisando el
de llamar á los diputados de Cuba y Puer-
tes Constituyentes. Aquella Exposición fué
de trecientos peninsulares muy conocidos
políticos de Madrid. Pero desgraciadamente
. Lo mismo que en 1810. Porque la insisten-
es uno de nuestros mayores pecados.

, para que corra muy válida la especie de
ón de Septiembre inundó á las Antillas con
les... y que esas fueron la causa del movi-
sta de Yara. Como ahora se dice que las
(que no se han planteado todavía) han sido
ctual insurrección de Cuba.

o como de los obstáculos que produjo la in-
[ara, bien explotada en la Península por los
la reforma fundamental de nuestras colo-
blar yo como pocos, porque (ya es hora de
intervine directa y constantemente en todo
etrópoli se intentó por aquel entonces para
ido de los mares, con el espíritu de la demo-
, y el sentido de la Revolución de Septiem-
da garantía del imperio de España. Las dos
referidas fueron por mí redactadas y por mí
ntó á la Junta Revolucionaria el Sr. Rive-
té y presenté al Sr. Duque de la Torre la
ción sobre el mejor modo de consultar la opi-
s Antillas para su reforma política, económi-

as *declaraciones* de Septiembre no pasaron

de una fórmula simpática, de términos muy modestos y dentro de la tendencia de encomendar la resolución del problema ultramarino á los Poderes Públicos organizados, en una situación ya regular y definida.

Inaugúrase la obra del Gobierno provisional con la Circular de 27 de Octubre de 1868, en la cual el Ministerio de Ultramar (regido entonces por un hombre del criterio conservador y de la historia acentuadísima de D. Adelardo López de Ayala) explicaba á las autoridades de Cuba y Puerto Rico los propósitos del Gobierno. En esta circular, después de muchos rodeos, frases retóricas y generalidades ya prohibidas por la ley 41, título III, libro 3.º del Código de Indias, el Gobierno anuncia que *estudia* «la forma electoral más adecuada á la diversidad del estado social en las provincias Ultramarinas y que al definir las tendrá muy en cuenta las *naturales diferencias y condiciones* de los habitantes de nuestras Antillas».—Y añade que «dentro de *los límites prácticos* que no le es dado traspasar, el Gobierno adoptará un sistema de elección *tan amplio como sea posible*.»

Para *precisar* los compromisos de la Revolución de Septiembre el ministro de Ultramar escribe lo siguiente:

«La Revolución actual que se ha captado las simpatías de propios y extraños por su templanza y su espíritu justiciero, no aplicará á las provincias de Ultramar medida alguna violenta, ni atropellará derechos adquiridos al amparo de las leyes, no dará tampoco nueva sanción á inveterados abusos ni á manifiestas trasgresiones de la ley natural. Acepta en el orden político todo lo que tiende á aumentar las inmunidades de las provincias ultramarinas, sin relajar los lazos que las unen al centro de la Patria; admite en el orden todo lo que conspira á un fin humanitario y civilizador, pero sin alterar de un modo brusco y ocasionado á gra-

aciones fundamentales de la sociedad, cuando se hallan agitados por el apasionamiento que es el pueblo inexperto en el uso de los derechos sería más que temerario y el Gobierno, que como letrado á V. E. propondrá á las Cortes en su día, la solución legal y humanitaria de aquel difícil problema, sentir que se convirtiera hoy en ocasión de juicios y amenazas.

Por lo tanto, se prohíbe absolutamente combatir de palabra la integridad del territorio y el dominio de

el Sr. ministro, Sr. López de Ayala, reconoció en su discurso al presentarse á las Cortes Constituyentes en 20 de Mayo de 1869 que su conducta y sus declaraciones habían sido *malamente* juzgadas por algunos órganos de la prensa que le atribuían ideas que él no tenía, y que le atribuían *la* *idea* *de* *quienes* *extraviaba* *en* *este* *asunto* *la* *nación* *de* *las* *ideas* *propias* *de* *los* *periódicos* *revolucionarios* *y* *expansivos*.

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo que pasaba en Cuba después del Decreto de 12 de Febrero de 1867, sobre la abolición de los esclavos y luego del fracaso de la Junta de información y de las reformas ultramarinas de 1866 y apreciando el estado de ánimo después de las declaraciones oficiales del Sr. López de Ayala (radicalmente opuestas al sentido de las resoluciones de 19 de Octubre 1868 con que el Gobierno propuso á conocer de las potencias extranjeras) no debe causar extrañeza la facilidad con que los partidarios de las opiniones ultraconservadoras atribuyen á sus adversarios, por modo exclusivo, una perniciosa exaltación de la realidad, comprometiendo todas las cosas que pretenden defender con el mejor deseo. Ciertamente es, que no se dará mayor intransigencia ni mayor apartamiento de toda la realidad po-

lítica y aun social que los de esos ultraconservadores que por su profunda aversión á todas las teorías expansivas, se empeñan en cerrar los ojos ante la irresistible ola que sobre ellos avanza con la fuerza de las nuevas exigencias y los nuevos ideales. No hay utopia comparable á las ilusiones reaccionarias.

Por eso las revoluciones hay que explicarlas no solo por sus motivos directos —buenos ó malos—sino también por la escasa aptitud, por la prevención y por las provocaciones de los elementos hostiles que se jactan constantemente, con un éxito siempre deplorable, de vencerlas y dominarlas.

Pero ya lo he dicho, ahora el Gobierno provisional pecó respecto de Cuba de lo mismo que pecó la Regencia de Cádiz en 1810. Se repitió la historia en el conjunto y aun en el detalle. La tendencia política del Ayala de 1868 es idéntica á la del Lardizabal de 1810.

El sentido político de las tibias y hasta contraproducentes manifestaciones de Octubre y Diciembre de 1868, no pudo ser dominado por otras disposiciones verdaderamente plausibles que en otros órdenes se dieron por el Gobierno de Madrid hasta el año 70. Por ejemplo: la habilitación de los títulos extranjeros en Cuba, decretada en 11 de Diciembre de 1868; el decreto de unificación de fueros, de 1.º de Febrero de 1869; la reorganización de las Audiencias antillanas con competencia para entender en los negocios contencioso-administrativos de 7 de Febrero y 6 de Abril del mismo año; la reforma de las clases pasivas de 23 de Mayo; la revisión de los expedientes de la magistratura y la inamovilidad judicial decretada en 6 de Diciembre; la proclamación de la libertad religiosa en 20 de Septiembre; la reforma expansiva de la anti-

ciudades anónimas; la anulación del decreto de 1867, y la extensión á las dos de 1867 que modificó la del enjuiciamiento. Luego vinieron, dentro del año 70; los Decretos de Contabilidad administrativa, la ley de Extranjería (seguramente de modificación de la Hacienda ultramarina, expedientes de limpieza de sangre, el decreto para las aduanas de la Grande Antilla, la ley de 1870 y la ley preparatoria para la promulgación de 4 de Julio del propio año.

El Arancel referido ha dicho después, todo cuanto podría oponerse á obra, pero sólo bajo la presión de las circunstancias acudir con toda urgencia á la necesidad de recursos al Tesoro de Cuba. El Ministerio modificó el decreto de 9 de Septiembre para acercarse á la libertad de comercio absoluta que es la verdadera base de las relaciones y en especial de los países colonizados. En donde á esta idea el Arancel de 1870, abandonó la vieja teoría del pacto colonial y desmanteló los derechos de exportación de bandera, derechos casi prohibidos para las extranjeras, triples y cuádruples para las colonias y los tejidos de fuera sin la justa compensación de los frutos coloniales en la importación. Este Arancel mejoraba el anterior de 1853 que á su vez modificó el monstruoso Arancel de 1853.

La ley preparatoria para la abolición de la esclavitud.

Por todo esto no pudo tener cumplimiento en Cuba, ni se intentó siquiera que lo tuviese, el art. 108 de la Constitución de 1869 que á la letra dice: «Las Cortes constituyentes reformarán el sistema actual de gobierno de las provincias de Ultramar cuando hayan tomado asiento los diputados de Cuba ó Puerto Rico, para hacer extensivos á las mismas, con las modificaciones que se creyeran necesarias, los derechos consignados en la Constitución.» (1)

En Puerto Rico ya fueron bastante mejor las cosas. Como se ha visto, el decreto ley de 14 de Diciembre de 1868 reconoció á la pequeña Antilla el derecho de enviar (como envió) á las Constituyentes de 1869, once diputados. Por aquella ley, para ser elector se necesitaba ser español, mayor de edad y pagar por impuesto territorial ó por subsidio industrial ó de comercio 50 pesetas al año.

En 1.º de Abril de 1871 variaron estas condiciones. Se reconocieron á la Isla, que ya tenía 616.465 habitantes libres (amén de 43 mil esclavos) quince diputados y cuatro senadores y se estableció que disfrutase del voto todo español mayor de veinticinco años, que supiese leer y escribir ó que pagase 40 pesetas de contribución directa al Estado.

(1) No quiero que pase esta oportunidad sin rendir público tributo de admiración y gratitud al ilustre cubano D. Nicolás de Azcárate, comisionado que fué en la Junta de reformas de 1865, fundador, propietario y director del periódico *El Siglo*, que se publicó en Madrid en el otoño de 1869 y director del periódico democrático *La Constitución*, que en Madrid fundó y publicó D. Nicolás María Rivero en 1872. Azcárate fué uno de los cubanos que más trabajaron en aquella época por las libertades coloniales y uno de los más devotos y entusiastas de la bandera de España en América. Muerto hace poco en la miseria y en el olvido, bien merece que se desagravie su memoria.

Pero la reforma política casi no pasó de aquí. Por de contado tampoco se cumplió respecto de la pequeña Antilla el artículo 108 de la Constitución del 69, y en Puerto Rico continuaron rigiendo (por virtud de la Real orden de 22 de Abril de 1837), las anacrónicas leyes de la vieja colonia. El decreto de 14 de Diciembre de 1868 se limitó á suspender las facultades arbitrarias de la Real orden de 28 de Mayo de 1825 (la llamada de las *facultades omnímodas* de los Capitanes generales), sólo durante el período electoral, y aun dentro de éste se mantuvieron las excepciones que las Leyes de Indias concedían para *la tranquilidad de la tierra*. Con estas subsistieron el bando de policía y buen gobierno dictado, con el voto consultivo del Real acuerdo, por el Gobernador y Capitán general D. Juan de la Pezuela en 15 de Diciembre de 1849; la organización municipal de 27 de Febrero de 1846, 31 de Julio y 28 de Agosto de 1847; el régimen penal de la Novísima, reformado por el Reglamento provisional para la Administración de Justicia llevado á Puerto Rico en 26 de Septiembre de 1835; el procedimiento secreto y de la prueba tasada de nuestro antiguo sistema judicial; los gobiernos y subgobiernos político-militares, etc.

Es decir: la centralización política y administrativa; la esclavitud negra á despecho de la ley de 1870; la previa censura para la prensa, la negación de la vida municipal, la inseguridad personal y la servidumbre enervante y desmoralizadora.

Parece ocioso repetir que todo eso era fundamentalmente incompatible con el espíritu de la Revolución de Septiembre, con la Constitución de 1869, y con la representación y el sentido de las Cortes españolas, en cuyo seno figuraban los diputados de Puerto Rico, con los mismos

todos los demás, como *diputados de la Nación*, comprende á la distancia á que ahora estamos. fué efecto—como antes he insinuado—de la extraordinaria que en la Metrópoli produjo el desguerra de Cuba y del influjo que en la política mantuvieron los elementos conservadores, se del pretexto ultramarino.

Hubo esto poco á la caída del Gobierno repitiéndose ahora el mismo fenómeno ob- 314, 1823 y 1856. Porque nada más absurdo que la reacción triunfante en Ultramar limita la vida colonial. Este error se ha pagado con as y mucha sangre y muchos desastres en todo en la Edad contemporánea. No me atrevo a decir si el error se haya rectificado en nuestros días. En 1870, Puerto Rico vivió con ciertas aspiraciones liberales y allí se constituyó el partido reformista. Se hizo una vigorosa campaña en pro de la abolición de la esclavitud y de la igualdad de los derechos civiles de portorriqueños y peninsulares, enviando diputados á las Cortes y logrando influir de un modo en los círculos directores de la política de la época. En aquel tiempo el espíritu de la Revolución de 1808

se usó para explicar de qué suerte los diputados portorriqueños, agrupados por un pequeño pero entusiasta grupo en la pequeña Antilla, residentes por aquel entonces en Barcelona, se identificaron con aquella causa y intervinieron activamente en el desarrollo de

En mi libro *Los diputados americanos en las Cortes* se describe la campaña parlamentaria de 1878.

la política general del país y en el curso de los sucesos de la Península. La explicación de todo esto pide mucho espacio y no responde á mi propósito de ahora. Pero conviene señalar el hecho y proclamar su importancia, entre otros motivos, porque quizás buena parte, la mayor parte de lo que en la Metrópoli se hizo desde 1869 al 73 respecto de Puerto Rico, se debió á la actitud y disposición de los portorriqueños antes citados, muy en armonía con el sentido dominante en la pequeña Antilla, de espíritu profundamente democrático y de un localismo mucho menos acentuado que el de Cuba.

De ese modo no fué fácil á los elementos reaccionarios ultramarinos discutir aquí el problema colonial, poniendo como términos del mismo, á los insulares de un lado y á los peninsulares de otro; posición desventajosísima para los primeros, toda vez que el problema se había de resolver en la Península. El espíritu de la Revolución de Septiembre y el tacto político de los portorriqueños de entonces, hicieron que por cima de todas esas diferencias y de otras históricas análogas, se colocase la razón del derecho y el reclamo de los principios.

Claro se está que esto no se consiguió cómodamente ni se consiguió del todo. Pero la cosa revistió suma importancia y hay que estimarla, entre otras razones, para explicar las dificultades que han surgido después en la campaña política ultramarina, desarrollada en condiciones muy distintas á las de 1868-73 (1).

(1) Puede verse mi discurso sobre *Joaquín M. Sanromá*, diputado que fué de Puerto Rico en 1872 y mi compañero de muchas campañas parlamentarias y extraparlamentarias, desde 1865 á 1890.

Resultado de la influencia revolucionaria, de la virilidad de los reformistas portorriqueños, del celo de los representantes parlamentarios de éstos y de la sinceridad y las patrióticas disposiciones del partido radical dirigido por el Sr. D. Manuel Ruiz Zorrilla (y en cuyas filas tomamos puesto casi todos los diputados reformistas de la pequeña Antilla), fué la actitud de este partido y del ministerio que lo representó en el poder, á partir del otoño de 1872.

El mérito de lo que los radicales hicieron entonces no es discutible; pero también hay que reconocer que su nobilísima acción no pudo pasar de una vigorosa iniciativa, cuyos efectos se palparon inmediatamente en la crisis de la monarquía, determinada por la conjura de todos los elementos reaccionarios de la época, los cuales como antes he indicado, buscaron como los mejores pretextos, la política que se iniciaba respecto de Ultramar y la célebre cuestión de la reforma del Cuerpo de artillería.

•

III

Estamos ya en 1873: en aquel tempestuoso período en el cual Cuba se hallaba entregada á las pasiones de la guerra civil, y la Península luchaba desesperadamente con dificultades de tal número y tal naturaleza, que quizá no tienen parecido en toda nuestra historia contemporánea. No es posible olvidar un momento que por aquel entonces hubo en la Península la guerra carlista y la sublevación cantonal, amen de la conspiración alfonsina, complicada con las graves consecuencias de la desorganización del cuerpo de artillería y de la reserva ó casi hostilidad de todos los Gobiernos de Europa. Mas tarde explicaré cómo no fueron tampoco muy lisonjeras nuestras relaciones de entonces con la República norteamericana.

El dato es de monta para apreciar el mérito y alcance de ciertas resoluciones. Porque evidentemente no tiene el mismo valor lo hecho, ni aun lo intentado en aquella angustiosa época y lo realizado en épocas recientes de calma y de orden relativos.

Aparte de la gravedad intrínseca del problema ultramarino y de la circunstancia de que sus asperezas y conflictos hayan sido sistemáticamente utilizados por nuestros parti-

dos conservadores y en general por los monárquicos para dar batalla á los liberales y concitar en daño de éstos todas las susceptibilidades y preocupaciones, no es de olvidar que durante aquel crítico período, la insurrección cubana se mantuvo en una intransigencia absoluta, sin que sus directores ó sus soldados, se prestaran á escuchar una sola palabra que no tuviera, por supuesto, el reconocimiento explícito de la independencia de la Isla.

Error de los insurrectos ó fuerza de la insurrección. No discuto la causa. Establezco el hecho; así como el de la absoluta imposibilidad del partido republicano español de aceptar ni por un momento el tal supuesto.

Pero además es imposible excusar la actitud por todo extremo alarmante de las autoridades de la Grande Antilla en los primeros días de la instauración de la República. Recientemente el Sr. D. Miguel Morayta ha publicado en su *Historia de España* un interesante documento, que releva de toda otra prueba.

El citado historiador dice que llegado un telegrama del Ministro de Ultramar, D. Francisco Salmerón, al General Ceballos Gobernador Capitán General de Cuba participándole la proclamación de la República, reunió Ceballos Junta de Autoridades locales de la Isla y luego expidió esta circular telegráfica.

»Proclamada la República en España por abdicación de
»D. Amadeo, las Autoridades reunidas en Junta han acordado por unanimidad resistir á todo trance cualquiera reforma que viniera á poner en peligro, la integridad del territorio ó el modo de ser de esta sociedad. Sírvasse V. E. á participar así á los leales habitantes de ese departamento, para que descansen tranquilos ante semejantes sucesos, confiando en el patriotismo de sus Autoridades.—Ceballos.»

Todavía después de esto, especialmente con otros motivos tuvo el Gobierno de la República dos graves rozamientos con las autoridades de Cuba. Primero, con ocasión del decreto de 15 de Octubre de 1873 que suprimió las facultades excepcionales de *gobernador de plaza sitiada*, concedidas á los Capitanes generales de aquella isla la Real orden de 28 de Mayo de 1825 y que ractificó el Real decreto de 28 de Noviembre de 1867. Esta resolución de 15 de Octubre, vino á acentuar la tirantez producida por otro decreto de 11 del propio mes, por el cual se revoca el del Gobernador general de 16 de Octubre de 1872 sobre deslinde de atribuciones entre el Gobernador civil de la Habana y el jefe de la policía de aquella ciudad. En el referido decreto de 11 de Octubre de 1873 se dice: «que la autoridad superior de la Isla *se atenderá* (sic) á lo preceptuado en el Reglamento de 30 de Enero del 66 y á los decretos de 27 de Marzo y 7 de Junio de 1876, que claramente determinan las atribuciones que en punto á policía competen al Gobernador político de la Habana.»

El otro rozamiento, ó mejor dicho, la otra serie de rozamientos se produjo con ocasión del viaje que hizo á las Antillas el ministro de Ultramar D. Santiago Soler y Plá, á fines de 1873. El Capitán general de Cuba, en el primer caso, hizo observaciones manifestando su opinión de que se le desarmaba en medio de muy críticas circunstancias. En el segundo, aquella misma autoridad discutió insistentemente la inspección del Ministro en el territorio sometido á la jurisdicción del Gobernador general antillano. No eran estas las mejores circunstancias para que el Gobierno republicano pudiera obrar con la energía que pedían sus compromisos políticos y la grave situación de nuestras Antillas.

Añádase á esto otra consideración: la de que así como toda reforma en sentido liberal que los conservadores adopten ó pueden adoptar contará siempre con el apoyo ó por lo menos el respeto de todas las oposiciones liberales, de suerte que realmente no tendrá oposición, así las reformas hechas ó intentadas por los partidos avanzados han tenido siempre que luchar con la resistencia de todos los demás partidos, de lo que no es pequeña muestra la famosa Liga de carlistas, moderados, conservadores y constitucionales de fines de 1872 contra la reforma provincial y la abolición de la esclavitud en Puerto Rico, acometida por nuestros radicales y republicanos.

Lo cual quiere decir que el solo pensamiento de aquellas reformas tiene más mérito que las tres cuartas partes de lo hecho de 1879 á esta parte, en condiciones perfectamente favorables para los que han realizado ahora, en este último período, *mucho menos* de lo que los radicales y republicanos pretendieron y realizaron á despecho de una ciega oposición, hace veinte años.

Con tales antecedentes, veamos lo que la República hizo en obsequio de nuestras Antillas en aquel período de prueba.

Luego veremos lo que hicieron después y lo que hacen hoy los republicanos en relación con las soluciones liberales ultramarinas, más ó menos resistidas en público y de una manera oficial, por los elementos gobernantes.

Porque obras son amores é importa llevar todas las partidas á la cuenta.

La primera partida la constituye una de las medidas de mayor transcendencia adoptada por el Gobierno español respecto de los complicados—verdadera ó falsamente—en la insurrección separatista cubana. Tal es el decreto de 15 de

Julio de 1873, que declaró «alzados todos los embargos de bienes realizados en los de los insurrectos é infidentes de la Isla de Cuba, por *disposición gubernativa*, á consecuencia del decreto de 20 de Abril de 1869.»

Poco tiempo después, el mismo Gobierno (en 16 de Septiembre de 1873) «suspendía la venta de los bienes procedentes de causas incoadas á reos de infidencia declarada», concluyendo en 15 de Octubre del propio año por disponer que «no se tomase en la Habana resolución alguna sobre este delicado particular sin previa y especial consulta del Gobierno de la República.»

El valor de estos acuerdos debe apreciarse, no ya sólo bajo el punto de vista del derecho de gentes y de la moralidad pública que en los preámbulos de estos decretos se invocan, si que también, muy singularmente, como medios para facilitar el regreso á la legalidad y á la ciudadanía española de centenares de personas ya castigadas por la miseria y el ostracismo, ya constreñidas á permanecer en el campo separatista por el embargo de sus bienes y la ninguna esperanza de recobrarlos, sin volver á Cuba y ponerse al alcance de las pasiones de la guerra civil.

Lejos de mí el escatimar el menor aplauso al señor general Martínez Campos por la resolución con que mucho después de la época á que me refiero, puso término á toda clase de embargos, acordando la devolución de los bienes á todos cuantos habían sido privados de ellos por cualquier procedimiento; pero sí me ha de ser lícito observar que si esta medida, dictada en vista de la sumisión de los insurrectos y ya casi establecida la paz, (hacia 1878) ha sido justa y grandemente celebrada entrando por no poco en las simpatías que han acompañado al señor General citado en el

penúltimo período de su mando en Cuba, ¡con cuánto mayor motivo no deben ser celebrados los decretos del Gobierno de la República de Julio, Septiembre y Octubre, expedidos en el período álgido de la guerra, por puro amor á los principios de Derecho y á pesar de todo género de preocupaciones y censuras!

Y estas resoluciones se concertaban con otros decretos, como los de 17 de Abril, 12 de Julio y 1.º de Agosto sobre deportados y confinados cubanos cuya situación económica y penal recibió un grande alivio, digno de tanta mayor estima, cuanto que aquello tenía efecto en un período en el cual no regían aun en Cuba la ley de Orden público, ni el Código Penal, ni la Ley de Enjuiciamiento criminal. Después de concluida la guerra y dentro de la Restauración, los confinados no gozaron de mayores ventajas, siendo así que lo que procedía, por el mero hecho de haberse promulgado la Constitución en las Antillas en 1881 (y dado que su *deportación* en la mayor parte de los casos fué producto de medidas excepcionales de Justicia que no podían imponer una pena borrada de nuestros Códigos y nuestras prácticas hace más de cincuenta años) era su libertad inmediata é incondicional.

Pero no pararon aquí los cuidados del Gobierno republicano respecto de la isla de Cuba. Bien por lo contrario de lo que hicieron los partidos de la Restauración hasta 1881, el Ministerio de Ultramar, que desempeñaron sucesivamente los Sres. Sorní, Palanca, Suñer, y Soler, tomó otras medidas muy graves respecto de la política ultramarina.

La cuestión social cubana fué estudiada en sus dos aspectos: la de los asiáticos y la de los negros.

A principios de 1873 se había planteado la ley de abolición inmediata en la isla de Puerto Rico (de que hablaré

después) y en 15 de Septiembre se autorizaba la constitución en la Habana de una Sucursal ó delegación de la Sociedad Abolicionista Española, cuyo fin no es necesario expresar, cuya actividad y celo fueron extraordinarios, y cuyos efectos podrían calcularse sobre el texto de la orden de 24 de Marzo de 1873, que denegó la peregrina cuanto anti-patriótica resolución propuesta por el Gobernador general de Cuba, respecto á la situación de los esclavos empadronados fuera de término.

En esta orden el Gobierno de la República estableció que era de todo punto necesario «poner inmediatamente en libertad á los negros» que á despecho del Real decreto de 29 de Septiembre de 1866 sobre represión y castigo del tráfico negrero, no aparecían inscritos como tales esclavos en el censo que debió concluirse en 1867. Y concluía el Sr. Ministro Sorní, «recomendando muy especialmente el pronto y estricto cumplimiento de la orden reservada de 5 de Agosto de 1872 respecto á la remisión de *datos estadísticos, abundantes y detallados*, sobre la cuestión de esclavitud.»

De esto resultó la libertad de unos 10.000 negros en todo el año 73. Pero la República cayó, y cayó en olvido el decreto de 24 de Marzo. Diez años después, los amigos del Sr. Núñez de Arce, Ministro de Ultramar del partido liberal, solicitaban para éste, con justicia, el aplauso de los filántropos y los hombres rectos por el decreto de 9 de Febrero de 1883, que lisa y llanamente reprodujo el decreto del Gobierno de la República.

Lo que la *Sucursal de la Sociedad Abolicionista* en la Habana (presidida en 1880 por el Dr. Francisco Giralt (1), y

(1) Me propongo publicar dentro de poco un estudio sobre la empresa abolicionista española de 1863 á 1890. En él se registrará todo.

en cuyos trabajos tomaron muy activa parte jóvenes de tanto entusiasmo é inteligencia como los Sres. Chomat, Broch, Lamar y muchos otros que ahora se escapan á mi mente), representó en todo esto casi nadie lo sabe. Sin ella quizá habría sido imposible la depuración de los expedientes incoados á fin de conseguir la libertad de los negros sexagenarios y los no inscriptos en los registros de esclavos. Pero el mérito de aquella calurosa y sostenida gestión, hay que estimarlo tanto en relación con el número de libertos proclamados por virtud de la rectificación y el esclarecimiento de los mencionados expedientes, como también por la animación que á la causa abolicionista comunicaron en la propia isla de Cuba, los trabajos ya atinados de la Sucursal. Después esta influyó no poco en la transformación de los antiguos cabildos de negros africanos y en la constitución de sociedades y escuelas de gente de color, merecedoras de particular estudio, como uno de los datos que más avaloran la historia de la abolición de la esclavitud en las Antillas españolas (1).

Respecto de la cuestión asiática ó de los chinos, el Gobierno de la República en 26 de Mayo de 1873 dispuso que el Gobernador de Cuba hiciera que se cumpliesen en toda su extensión las leyes sobre contratación de colonos chinos, y que se castigase con arreglo á las mismas á las empresas que, ocupándose de dicho negocio, las infringiesen.

En tanto puede consultarse mi estudio sobre *D. Fernando de Castro* (Presidente de la Sociedad Abolicionista). Un folleto, 1888. Y mi discurso de 1.º de Enero de 1874 sobre *La Abolición de la Sociedad Abolicionista* en 1873. Un folleto en 8.º Madrid 1894. Y la colección del periódico *El Abolicionista*, que se publicó en Madrid desde 1864 á 1890.

(1) Sobre esto puede verse el folleto que publiqué en 1895, titulado: *La raza de color, de Cuba*.

Y en la propia fecha se manifestaba al mismo Gobernador superior «la extrañeza con que se habían visto las contradicciones y exageradas apreciaciones de los informantes» en el expediente incoado para la revocación de la Real orden de 27 de Abril de 1871 sobre suspensión de emigración china. Además se mandó que se oyese en este asunto al Consejo de Estado.

Por aquel entonces se adoptaron otras dos medidas de trascendencia.

Por la una quedaba autorizado el nombramiento de dos funcionarios públicos que inspeccionaran el trato recibido por los chinos en la travesía de China á Cuba, y recogiesen en la Habana las quejas que los chinos formularan á su desembarco. Por la otra se mandaba que se diese cuenta al Gobierno de la Metrópoli, de todas las resoluciones que se adoptaran en Cuba sobre inmigración asiática y se concluía disponiendo que se suspendiese la aprobación del reglamento de recontratación de chinos hasta que sobre esta materia de la inmigración asiática se estableciesen medidas generales inspiradas en aquel sentido expansivo que había provocado en 1872 la creación de una Comisión central de Colonización de la isla de Cuba, protegida vivamente por el Gobierno republicano por sus decretos de 26 de Mayo y 13 de Junio, 4 de Agosto y 26 de Septiembre de 1873.

A la par el Gobierno se ocupaba de los intereses esencialmente políticos de la Isla. Pocas pruebas más concluyentes que estas. Por Decreto de 15 de Octubre de 1873 fué derogada la famosa Real orden de 28 de Mayo de 1825 que (contra el parecer del antiguo Consejo de Indias) confirió al Gobernador superior de la Isla *todo el lleno de facultades* de los Gobernadores de plazas sitiadas; Real

ce el Decreto) que «ó nada añade á las amplísimas
res que las leyes de aquellas provincias conceden
extraordinarios á los Gobernadores generales de la
to que se refiere á las Ordenanzas del ejército en
e ellas que no puede ser aplicable á los asuntos
no, ó supone una autoridad omnímoda é ilimitada
a ha disfrutado ni disfruta representante ni dele-
uno de naciones que tienen provincias ultra-

le Octubre se aprobó el reglamento sobre organi-
licial en Ultramar para la ejecución del Decreto
Octubre de 1870. Es decir, no solo para que la
de los puestos judiciales se hiciese por oposición y
por concurso, previa revisión de los expedientes,
poner todo el personal y la acción toda de la jus-
ltramar bajo *la autoridad y dependencia exclu-
Tribunal Supremo*, conforme á la admirable y
tante aplaudida innovación que en este particular
produjo el advenimiento de la República hace
o años.

taban esta medida los Decretos de Octubre plan-
Cuerpo notarial en las dos Antillas.

tra parte, se dió el decreto de 26 de Mayo que
la pretensión de los Padres jesuitas y escolapios
de que se constituyese en favor de los estableci-
e instrucción por ellos sostenidos, ventajas y
inadmisibles en una sociedad organizada fuera
a teocrática.

mo, en 14 de Octubre de 1873 fué autorizado el
e Ultramar para visitar las islas de Cuba y
co con objeto de estudiar los medios de poner tér-

mino á la insurrección, mejorar su situación económica y preparar otras reformas.

Con efecto, el Sr. Soler y Plá se embarcó para la isla de Cuba en el penúltimo mes de 1873, y allá le sorprendió la caída de la República.

IV

Por lo antes dicho, claramente se comprende el sentido profundamente simpático que para las reformas democráticas en Cuba tenía el Gobierno republicano de 1873; sin que bastara á negar este hecho la diferente acentuación de estas simpatías, mucho más enérgicas en los Ministerios presididos sucesivamente por los Sres. Figueras, Pi y Suñer, que en el Gabinete dirigido por el Sr. Castelar.

Puede afirmarse perfectamente que todo el pensamiento de la situación republicana era llevar á Cuba la plenitud de los derechos y las libertades antillanas. Las diferencias se reducían á que, mientras algunos pensaban que era preciso esperar que la paz se hiciese, bien por la fuerza de las armas, bien, sobre todo, por efecto del convencimiento y de los nobles oficios de la gente conciliadora, otros estimaban que la adopción de medidas radicales servirían á maravilla para producir la paz anhelada. Por lo mismo, todos hacían idénticas protestas, y en el Gobierno todos los grupos daban, en la esfera administrativa, verdaderos pasos de gigante en la obra de la redención de la hermosa Antilla.

Todo esto tomó mayor realce con la presentación á las Cortes Constituyentes, por el Sr. Ministro de Ultramar,

D. Francisco Suñer y Capdevila, del siguiente proyecto de ley, que reproduzco al pie de la letra, tanto por su gravedad y alcance, como por ser muy poco conocido.

Dice así:

«Considerando que el fundamento de la actual situación política de la Nación española lo constituyen los principios de la Democracia, cuyo primer dogma es el de «los Derechos naturales del hombre, anteriores y superiores á toda ley positiva;»

Considerando que estos Derechos están consagrados en el Título I de la Constitución de 1869;

Considerando que los títulos siguientes se refieren á la organización de los Poderes públicos, sobre lo cual muy especialmente están llamados á entender y resolver, en definitiva y dentro de breve plazo, las actuales Cortes;

Considerando que la situación político-militar de la isla de Cuba no puede ser parte á evitar la proclamación de los derechos aludidos, porque mientras los unos oponen á esta proclamación el estado excepcional de la Isla, los otros dan por causa á este estado el mantenimiento de nuestro anacrónico régimen colonial en toda su absurda integridad;

Considerando que de todas maneras y en último caso, el estado de insurrección sólo podría obstar al pleno imperio de la libertad allí donde la insurrección arde, cosa que no sucede felizmente en la mayor parte del territorio de Cuba;

Considerando que el advenimiento de la República ha despertado toda clase de esperanzas en los divididos y hasta hoy opuestos españoles de Ultramar, produciendo un fuerte movimiento político en Cuba, inspirado en un alto sentido de justicia y de libertad y en un generoso espíritu de concordia;

Considerando que el estado en que se halla una pequeña parte del territorio de Cuba exige la adopción de medidas extraordinarias, al modo que al juicio de las Cortes lo exige la situación de algunas otras provincias de la Metrópoli;

Considerando que por el mero hecho de la proclamación del Título I de la Constitución de 1869 en Cuba, queda virtualmente abolida la esclavitud, pero que la manera y los procedimientos para estirpar la servidumbre requieren una particular atención y exigen una ley especial, como ha sucedido en todos los pueblos cultos;

Considerando, por último, que es llegada la hora de salir de las vanas fórmulas, las promesas indeterminadas, las condiciones irresolubles y los temperamentos doctrinarios, y que á la honra de la patria, y al interés de la República, importa demostrar que sus principios son una verdad, sus palabras una ley, y sus procedimientos una razón,

El Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de las Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY

«Artículo 1.º Se declara vigente en la provincia de Cuba, á excepción del territorio que ocupan ú ocuparen los insurrectos, el Título 1 de la Constitución promulgada el 6 de Junio de 1869.

Art. 2.º El Gobernador superior de la provincia de Cuba queda autorizado para plantear la ley de facultades extraordinarias promulgada para la Península el 2 del corriente Julio. En virtud de esta ley, el Gobernador superior de la provincia de Cuba podrá tomar desde luego, respecto de la insurrección, todas las medidas extraordinarias que exijan las necesidades de la guerra, y puedan contribuir al pronto restablecimiento de la paz.

Art. 3.º La abolición de la esclavitud, implícitamente consagrada por los artículos 2.º, 6.º, 12, 13 y 14 de la Constitución de 1869, se realizará con arreglo á una ley especial.

Madrid 10 de Julio de 1873.—El Ministro de Ultramar, Francisco Suñer y Capdevila.»

Sobre este proyecto de ley (1) emitió dictamen la comisión correspondiente, produciéndose dos dictámenes cuya diferencia corresponde á lo que antes hemos indicado.

El primero de esos dictámenes decía así:

• Á LAS CORTES

La Comisión permanente de Ultramar ha examinado detenidamente, y con el esmero que le ha sido posible, el pro-

(1) Tuve el honor de intervenir activamente en su redacción y puedo proclamar así la noble disposición que desde el primer momento encontré en el Sr. Suñer, como las resistencias de todo género que, aun dentro de la situación republicana, se opusieron á la presentación [del proyecto al Congreso.

yecto de ley presentado por el señor Ministro de Ultramar y tomado en consideración por las Cortes Constituyentes, por el que se extiende á la provincia de Cuba el Título primero de la Constitución española de 1869.

La Comisión acepta en todos sus extremos los luminosos Considerandos que al Proyecto preceden y que demuestran que de hoy más el Ministro de Ultramar se inspira en un alto criterio de justicia y de expansión, único que puede mantener vivo el sentimiento de la Unidad nacional allende el Atlántico, suficiente á asegurar, no sólo la integridad de la Patria, si que la realización de los grandes destinos que á España están reservados en el mundo descubierto por nuestros grandes navegantes del siglo xvi.

La Comisión ha retardado, bien á su pesar, la emisión de su dictamen en asunto tan importante, porque ha tenido en consideración que se discutía por las Cortes Constituyentes el proyecto de Constitución federal; y como quiera que en opinión de la Comisión este proyecto de Constitución lleva en sí más libertades y un alto criterio de justicia, acordó retrasar aquel dictamen hasta tanto que el referido proyecto se convirtiera en el Código fundamental de la nación española, haciéndolo extensivo entonces á la isla de Cuba.

Tal era el pensamiento que animaba á la Comisión; pero después, por circunstancias imprevistas y que no estaban al alcance de ésta, la discusión del proyecto constitucional ha sido suspendida. Y no siendo el ánimo de la Comisión contribuir en manera alguna á que los habitantes de la isla de Cuba, nuestros hermanos, estén privados de los derechos políticos que gozan felizmente los demás españoles, la Comisión, inspirada en estos vehementes deseos, acuerda lo siguiente:

1.º Según el art. 31 de la Constitución de 1869, se necesita una ley cuando la seguridad del Estado exija la suspensión de las garantías consignadas en los artículos 2.º, 5.º, 6.º y 17 del mismo Código. La Comisión no discute ahora la bondad de esa doctrina; la considera como legal, y se ocupa sólo de ponerla en armonía con lo existente en Ultramar; esto es, con todo aquello que no puede borrarse de una plumada, y cuya sinrazón, en último caso, apreciarán detenidamente las Cortes cuando sean llamadas á entender de la organización de los Poderes en nuestras provincias trasatlánticas, si es que semejante punto no queda libremente entregado á la iniciativa de los Estados particulares dentro de la Federación española.

Porque resulta de una parte, que dada la distancia é que

se halla la isla de Cuba, y luego, la falta de continuas y rápidas comunicaciones, será punto menos que imposible en ciertos casos, que el art. 31 aludido sea perfectamente observado, puesto que á serlo, la ley votada por las Cortes llegaría á deshora en algunas ocasiones. Conviene, pues, poner en armonía todas estas dificultades que la distancia, cuando menos, podría suscitar á veces.

2.º Por estas razones, la Comisión opina que es de toda necesidad dar cierto desenvolvimiento y con él cierta precisión, á un extremo consignado en el segundo párrafo del art. 31, determinando la ley de Orden público, que ha de regir en la is'a de Cuba, como en la Península, en ciertos y determinados casos.

3.º Se declara vigente en la provincia de Cuba, á excepción del territorio que ocupan ú ocuparen los insurrectos, el Título I de la Constitución promulgada el 6 de Junio de 1869.

4.º La experiencia acredita la necesidad de relacionar los Poderes para que éstos puedan funcionar libre y desembarazadamente, y en esta atención la Comisión cree de alta y justa urgencia que el Gobierno de la Metrópoli invista al Gobernador civil de la isla de Cuba de las mismas facultades que gozan los de la Península, si la aplicación de las leyes ha de dar el saludable resultado que estas entrañan. Cuando las circunstancias políticas lo exijan, el Gobernador civil, á su juicio, resignará el mando en el Capitán general.

5.º El Capitán general de la provincia de Cuba queda entonces autorizado para plantear la suspensión de las garantías consignadas en los artículos 2.º, 5.º, 6.º y 17 del mismo Código cuando así lo exijan las circunstancias políticas en aquella provincia, dando inmediatamente cuenta al Gobierno supremo de la nación para que éste lo ponga en conocimiento de las Cortes, las cuales aprobarán, si lo estimaren, en el más breve plazo. Si las Cortes tuviesen suspendidas sus sesiones, el Gobierno podrá determinar en este caso lo que crea más conveniente, dando cuenta á las Cortes cuando éstas funcionen.

6.º Por lo demás, la Comisión está en un todo conforme con el Proyecto referido, y cuya aprobación somete á la sabia y alta consideración de las Cortes Constituyentes.

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.º Se declara vigente en la provincia de Cuba, á excepción del territorio que ocupan ú ocuparen los insu-

rectos, el Título I de la Constitución promulgada en 6 de Junio de 1869.

Art. 2.º El Gobernador superior de la provincia de Cuba queda autorizado para plantear la ley de facultades extraordinarias promulgada para la Península el 2 del próximo pasado Julio. En virtud de esta ley, el Gobernador superior de la provincia de Cuba podrá tomar desde luego, respecto de la insurrección, todas las medidas extraordinarias que exijan las necesidades de la guerra y puedan contribuir al pronto restablecimiento de la paz.

Art. 3.º La abolición de la esclavitud, implícitamente consagrada por los artículos 2.º, 6.º, 12, 13 y 15 de la Constitución de 1869, se realizará con arreglo á una ley especial.

Palacio de las Cortes 2 de Septiembre de 1873.—José Ramón Fernández.—Manuel García Marqués.—Enrique Calvo.—Manuel Corchado.»

El Sr. Corchado era diputado reformista de Puerto Rico. Los demás eran diputados de la Península y todos federales.

El segundo de los dictámenes aludidos, decía lo siguiente:

«Los Diputados que suscriben, individuos de la Comisión de Ultramar,

Considerando que el planteamiento del Título I de la Constitución en la isla de Cuba, según lo propone la Comisión, podría ofrecer gravísimos inconvenientes en la situación excepcional por que atraviesa la mencionada provincia;

Considerando que cuando se trata de la suspensión de garantías en la Península, y se funda esta medida en que hay en ella quien con las armas en la mano grita «¡muera la República!» no sería lógico llevar dichas garantías á Cuba, donde hay quien de la misma manera grita «¡muera España!»

Considerando que es casi seguro que los partidarios de la insurrección separatista intentarían, á la sombra de las garantías constitucionales, levantar la bandera de dicha insurrección en la parte occidental de la isla, que afortunadamente se ha mantenido hasta ahora dentro del orden;

Considerando que los insurrectos de Cuba no han depuesto las armas, á pesar de las repetidas ofertas hechas por el Gobierno de que cuando esto tuviera lugar se llevarían á dicha isla todas las libertades de la Metrópoli;

Considerando que en la dignidad del Gobierno no cabe la concesión de las libertades que se piden con las armas en la mano y al grito de «¡muera España!»,

Y considerando, por último, que no es razonable ni justo realizar las antedichas reformas en tanto que aquella provincia no tenga en las Cortes su legítima, y para ello necesaria representación,

Piden á las Cortes se sirvan disponer que por ahora no ha lugar á declarar vigente en la isla de Cuba el Título I de la Constitución.

Palacio de las Cortes 12 de Septiembre de 1873.—Juan Fernández de Cuevas.—Pablo Bernalles.—Gumersindo Méndez Brandón.—F. Puente Jiménez.»

Importa mucho insistir en la especie de que aun los que en las Cortes Constituyentes del 73 parecían un tanto reacios á las reformas ultramarinas con aplicación á Cuba, no lo eran en principio y sólo ponían como condición de una política radical análoga á la de la Península, el previo establecimiento de la paz en aquella comarca. Es decir, que Cuba se colocase en la propia condición en que se hallaban Galicia ó Castilla.

Por de contado esto no quiere decir que dentro del partido republicano dejaran de existir individualidades, que antes como ahora, por contradicciones que explican varios motivos, pero de modo siempre lamentable, fueran adversarios de toda política expansiva. Aquí y fuera de aquí no faltan demócratas de esos que creyendo en el dogma de los *derechos naturales del hombre*, sin embargo solo ven y comprenden al ser humano dentro de la latitud europea. Ni faltan demagogos que una vez llevados á la secretaría de un gobierno civil, entienden que es causa de una declaración de estado de sitio el hecho de que dos personas hablen alto en un café. Tampoco puede sorprender á nadie que el republicano que gozaba de un privilegio como el de las harinas de Santander

en Cuba, ó la casi prohibición de los tejidos ó los hierros extranjeros en el mercado antillano, ó la pingüe cesantía de un empleado ultramarino, con el mismo calor con que atacaba en la Península los consumos, las quintas y los títulos nobiliarios de que él no disfrutaba, defendiera la dictadura colonial y la explotación mercantil de nuestras Antillas que le favorecía.

Son excepciones que confirman la regla general. Esta en el caso presente la acusan el proyecto y los dictámenes antes reproducidos. Y lo demuestra elocuentemente lo sucedido después de 1873 en las filas de la oposición republicana, muy trabajada, bien que sin éxito, para que rechazase á los autonomistas antillanos. De ello hablaré en su oportunidad.

Todavía además del problema político existía en 1873 una cuestión: la abolición de la esclavitud. Respecto de ella, después del decreto del Sr. Sorní (24 de Marzo de 1873) sobre libertad de los negros no inscriptos en el censo de esclavos de 1868, hay que atenerse á las explícitas manifestaciones de los señores ministros Sorní, Suñer y Palanca.

En la sesión de 28 de Junio de 1873, preguntado el señor ministro Suñer por el diputado Sr. Araus, anunció su propósito de presentar, *tan luego como el tiempo le consintiera enterarse de la cuestión*, un proyecto de ley «al objeto de poner inmediatamente en libertad á los 300 ó 400.000 esclavos que gemían en la isla de Cuba.» Esta noticia fué acogida por grandes aplausos de toda la Cámara.

En la sesión del 26 de Julio del propio año, el ministro Sr. Palanca, preguntado por el Sr. Betancourt, diputado reformista de Puerto Rico, anunció «que el proyecto de abolición de la esclavitud en Cuba estaba muy adelantado, y que por más que pensaba librarse cuanto antes de la pesada

carga del poder, abrigaba la esperanza de que todos sus sacrificios serían por Dios recompensados, permitiéndole leer pronto aquel proyecto de ley desde la tribuna del Congreso.»

Y el Sr. Sorní, en la propia sesión, afirmaba que «si él hubiera continuado en el Ministerio (de donde salió en el mes de Mayo), no hubieran transcurrido más de cuatro ó cinco días sin que hubiera traído á la Cámara una ley de abolición de la esclavitud,» con tanto mayor motivo cuanto que los propietarios de Cuba estaban «conformes en aceptar la abolición inmediata y sin indemnización.»

Al lado de todas estas declaraciones y de los decretos positivos de aquel laboriosísimo período de diez meses, pónganse las vagas promesas, las frases huecas, las medidas contradictorias y las resoluciones tímidas de los siete años de la Restauración.

Porque dados todos los datos antes consignados, ¿qué hubiera hecho el Gobierno de la República en Cuba si en esta isla se hubiera producido la paz como se estableció en 1878?

Responda el ejemplo de Puerto Rico.

V

Se lleva Cuba de tal suerte la atención del público, que con mucha frecuencia por aquí se ha entendido que Puerto Rico era, como Puerto Príncipe, una provincia cubana. Y es tal la flaqueza de muchos liberales de reservar su admiración para los hombres y los hechos de los conservadores, que no sorprende el sistemático olvido y hasta el desdén que aun los propios reservan para la isla borinqueña en uno de los períodos más brillantes de nuestra historia colonial.

Por eso aquí apenas se oye hablar de lo sucedido en 1873 en Puerto Rico. En cambio los cónsules extranjeros en sus extensos informes á sus respectivos Gobiernos, los discursos de los Regentes de la Audiencia de Puerto Rico sobre la moralidad y criminalidad del país, los estados de Aduanas respecto de la importación y exportación, los artículos de revistas y periódicos de Inglaterra, Venezuela, Norte América, Francia y Hamburgo arrojan datos á montón para robustecer un juicio favorabilísimo respecto de la obra realizada en aquella isla hace diez años por el Gobierno de la República.

No voy ahora á entrar en muchos pormenores. El que quiera algunos puede consultar la Memoria que hacia 1874

publiqué por encargo de la *Sociedad Abolicionista Española* con el título de «Una Experiencia abolicionista.» O los dos últimos discursos que yo pronuncié en uno de los banquetes con que los abolicionistas españoles conmemoraban anualmente la abolición de la esclavitud decretada para Puerto Rico el 22 de Marzo de 1873.

Vamos á los hechos oficiales que reduciré á tres.

Las leyes provincial y municipal de 1872.

La Ley de abolición inmediata y simultánea de la esclavitud.

La extensión á Puerto Rico del Título I de la Constitución de 1869.

Después de esto hay que poner la administración serena é imparcial del señor General D. Rafael Primo de Rivera; el decreto de 26 de Julio de 1873 para que se remitieran por el Gobernador de la Isla al Ministerio «cuantas publicaciones y periódicos diesen á conocer tendencias ó intereses sociales ó políticos, para formar verdadero juicio acerca del estado de la provincia y de las necesidades principales» y el decreto de 14 de Octubre que autorizó al Ministro de Ultramar para visitar la isla de Puerto Rico, apreciar el resultado de las reformas allí introducidas y resolver lo que estimara conveniente á su administración y gobierno.

Hay que repetir que las leyes provincial y municipal de 1872 tienen la fecha de 1870. Sin embargo, en esta última no se planteó más que la ley provincial con algunos recortes é interpretaciones contraproducentes. Con todo eso los Ministros que hicieron aquella reforma y las situaciones que parecieron aceptarlas, quedaron bien con la opinión liberal de la Península, con los Gobiernos extranjeros y con el mundo culto. Pero tampoco no quedaron mal

con los elementos conservadores y burocráticos de Puerto Rico que consiguieron que en el particular de la vida más íntima de aquel país no se saliese del *statuo quo*, dejando las leyes citadas para inofensivo ornamento de la Colección legislativa. La opinión quedó desorientada. Repito que no es este el menor pecado de la política colonial española.

Fué necesaria la venida de los últimos días de la monarquía democrática y los primeros de la República, para que el Ministerio presidido por el Sr. Ruiz Zorrilla decretase el planteamiento inmediato é íntegro de las dos leyes de 1870.

Es por todo extremo instructivo el preámbulo del Real decreto de 13 de Diciembre de 1872 que dispuso que desde luego se aplicase á Puerto Rico la ley municipal de 1870 y en el cual se hace brevemente la historia de lo sucedido desde esta última fecha hasta fines del año 72.

El Ministerio de Ultramar, *por decreto*, y á pesar de existir las Cortes, dispuso en 28 de Agosto de 1870 que se plantease en Puerto Rico el proyecto de ley municipal presentado á las Constituyentes, pero el Gobernador superior de Puerto Rico hizo observaciones en el sentido de modificar el proyecto. Consecuencia de esto fué el aplazamiento de la aplicación de éste.

El Gobierno de Madrid estimó y aprobó las modificaciones propuestas por el de la pequeña Antilla y dispuso que con estas novedades se aplicase enseguida la reforma municipal portorriqueña. Pero después de publicado este decreto de 1870, reformado, en la *Gaceta de Puerto Rico*, el Gobierno de aquella isla suspendió su ejecución, porque estimó necesarias otras modificaciones. Y la reforma quedó en suspenso hasta que en 13 de Diciembre de 1872 el Gobierno metropolitico, aceptando las nuevas rectificaciones y

aclaraciones de la autoridad superior de la Antilla menor, dispuso otra vez que se llevara á efecto lo resuelto dos años antes, teniendo en cuenta que en el discurso de la Corona de 1872 se había dicho «que no había peligro en llevar á Puerto Rico las reformas necesarias para su organización política y administrativa».

Así y todo, en el Real decreto de 1872 se autorizó al Gobernador de Puerto Rico para introducir un artículo adicional en la reforma de 1870. Después de esto es ocioso decir la fuerza que todavía dentro de la Revolución de Septiembre tenía el prejuicio favorable al poder ministerial respecto de Ultramar, así como los grandes motivos que los liberales ultramarinos han tenido siempre para dudar de que las victorias alcanzadas por la justicia y la libertad en el Parlamento y la *Gaceta*, trasciendan inmediata y positivamente á la vida colonial.

Por lo mismo puede dudarse mucho que el decreto de 13 de Diciembre de 1872 se hubiese convertido en realidad allende el Atlántico á no sobrevenir en la Metrópoli la República y con ella algunas disposiciones especiales del Ministerio de Ultramar en sentido favorable al vigoroso planteamiento y desarrollo de la doble reforma municipal y provincial de 1870.

La importancia de las leyes citadas la demuestra la reproducción de algunos de los conceptos del Preámbulo de la ley provincial y un simple extracto de las disposiciones principales de esta y de la ley municipal.

«Basada la ley provincial de la Península—dice el mencionado Preámbulo—en un elevado espíritu descentralizador y armonizadas en ella del modo que la sabiduría de las Cortes halló más oportuno, las facultades del Poder central representado por el Gobernador, con la independencia y vita-

lidad de los intereses provinciales, una ley para Puerto Rico inspirada en ese espíritu, solo necesita dar mayor desarrollo á estos extremos y ponerlos en armonía con las condiciones especiales de aquella isla. A la distancia á que de la Península se encuentran las provincias de América, la vida local reclama para su desarrollo una independencia completa en la dirección de los intereses y en la gestión de sus negocios especiales, y exige en cambio una concentración más vigorosa y una acción más desembarazada y más enérgica de las facultades del Poder central.

A este punto de vista general obbedecen las modificaciones que con relación á la ley de la Península encierra el proyecto. Así, en el punto más importante, que es el de las atribuciones políticas del Gobernador, además del derecho de publicar las leyes, dictar los bandos, imponer multas y reclamar el auxilio de la fuerza armada, se le autoriza para suspender las asociaciones que comprometan la seguridad del Estado y cerrar los establecimientos de enseñanza que se encuentren en el mismo caso, para convocar la junta de Autoridades, para suplir la acción de las corporaciones populares cuando esta no sea suficiente, y además para suspender los decretos del Gobierno y de otras autoridades, aunque con los requisitos, limitaciones y fórmulas necesarias.

Asimismo se ha creído conveniente y necesario para la buena administración establecer un sistema especial de recursos de alzada contra los actos del Gobernador, ya para ante el mismo, ya para ante el Gobierno supremo.

De la misma fuente emanan las facultades administrativas concedidas al Gobernador para trasladar los funcionarios, suspenderlos en casos necesarios, imponer multas á las corporaciones y á los mismos funcionarios dependientes de su autoridad, y suscitar las competencias que fuesen necesarias.

La aplicación de este principio exigía como su inmediata consecuencia una extensión análoga de las facultades de la Diputación provincial para atender á la misión que se la confía. Por esto el Ministro que suscribe ha creído necesario dar más amplitud á las atribuciones naturales de una Diputación, determinando especialmente todas sus facultades, y autorizándola para dictar medidas de carácter general y obligatorio sobre instrucción, obras públicas, bancos y sociedades, así como para contratar empréstitos que excedan de 250.000 pesetas; pero estas medidas exigirán la aproba-

ción del Poder legislativo ó que éste deje transcurrir un año sin revocarlas, en cuyo caso se entenderán definitivamente aprobadas.

Igualmente podrá la Diputación presentar para los cargos eclesiásticos, informar sobre el establecimiento de nuevos impuestos, proponer la creación ó la modificación de los arbitrios y recursos locales, y, en una palabra, tomar la iniciativa en todas aquellas cuestiones que, aun cuando de competencia exclusiva del Gobierno, necesiten reformas que puedan convenir al buen régimen de la Isla.....

Al mismo tiempo y á fin de completar las facultades de la Diputación, se le reconoce la de mantener la integridad de su jurisdicción estableciendo al efecto las competencias que por defenderlas creyesen oportunas.....

Las antiguas críticas dirigidas al sistema colonial español se han fundado de un lado en la arbitrariedad de las autoridades; del otro en la centralización absurda y exagerada de la vida colonial. Al concluir con este sistema y al modificar profundamente la vida colonial segun el espíritu de la revolución de Septiembre, solo había dos caminos que elegir: ó la independencia completa de las antiguas colonias, ó su asimilación con la Metrópoli. llamándolas á la participación de la vida nacional. La Cámara Constituyente ha adoptado este último camino, y al Ministro que suscribe solo le toca procurar interpretar fielmente el espíritu de la Asamblea Soberana.

Pero al hacerlo hubiera sido pretensión injustificada querer igualar en un todo la vida de una provincia unida al continente americano y separada del europeo por la inmensidad de los mares sin tener en cuenta sus condiciones geográficas, su historia, sus tendencias, sus simpatías, sus relaciones. La asimilación así entendida sería la muerte de todo espíritu local, y obligaría al cabo á abandonar un sistema que, á fuerza de semejanzas, acabaría por quitar el carácter peculiar.

Era, pues, preciso al establecer este sistema dejar toda la expansión posible y todo el desarrollo más vigoroso á los elementos de la vida propia local y al mismo tiempo hacer entrar este nuevo desarrollo dentro de un círculo legal donde la arbitrariedad no se conociese, y donde, al mismo tiempo, la acción del poder central solo se sintiera para el bien y no se la encontrase nunca en el camino del desarrollo y de la vida propia.»

Inspirada, pues, esta reforma en un elevado espíritu descentralizador, la administración provincial quedó arreglada de esta manera:

Al frente de la provincia existirían: un Gobernador superior, auxiliado en ciertos casos por la *Junta de Autoridades*, y una Diputación provincial, formada por un Diputado por cada 25.000 almas.

El Gobernador superior, autoridad puramente civil, hasta el extremo de que *se hacía incompatible este cargo con el ejercicio de cualquier mando militar*, no solo era el *primer Magistrado* de la provincia en el orden administrativo, sino que también desempeñaba funciones políticas en el concepto de *representante y delegado* del Poder central, cuyas atribuciones asumía para que la acción del Gobierno pudiera sentirse en los casos precisos pronta y eficazmente, y no sirviera de rémora y de embarazo como ocurre hoy, que la resolución de casi todos los asuntos está encomendada al Ministerio de Ultramar ó al Gobierno supremo, los cuales, por la multiplicidad de negocios y por la distancia á que de las Antillas se hallan, no puede resolverlos tan pronto como fuera de desear, ni con perfecto conocimiento de las necesidades de estas comarcas, viniendo así el expedienteo y la excesiva centralización á matar la iniciativa individual y á impedir el desarrollo de la vida ultramarina.

Como *Jefe superior de la Administración*, correspondía al Gobernador:

Mantener la integridad de la jurisdicción administrativa, suscitando al efecto competencias á los Tribunales contencioso-administrativos ó judiciales;

Representar á la provincia en todos los asuntos;

Vigilar todos los ramos de la Administración pública.

Proponer al Gobierno cuanto concerniese al fomento de los intereses morales y materiales de la Isla;

Suspender, por causas justificadas en expediente, á los funcionarios de la Administración cuyo nombramiento correspondiese al Poder central, dando á éste cuenta inmediatamente;

Trasladar los funcionarios públicos, poniéndolo en conocimiento del Gobierno, y

Cubrir las vacantes interinamente, é imponer multas á los funcionarios que de su autoridad dependiesen.

Como *Representante del Gobierno supremo*, competente:

Publicar, circular y hacer ejecutar las leyes y reglamentos, dictando los bandos y disposiciones que juzgase necesarios;

Reclamar el auxilio de la fuerza armada;

Suspender toda asociación que delinquiese, ó cuyo objeto comprometiera la seguridad del Estado, y cerrar, en caso de delincuencia, cualquier establecimiento de enseñanza;

Instruir las primeras diligencias en los delitos descubiertos por su Autoridad;

Convocar la Junta de Autoridades;

Nombrar, en los pueblos donde fuere necesario, delegados que ejerciesen las atribuciones del Gobierno y supliesen la acción de los Ayuntamientos;

Suspender la ejecución de los acuerdos dictados por otras autoridades, aunque fuese de la competencia de las mismas, y de los decretos y disposiciones del Gobierno, siempre que pudiesen ocasionar perturbación en el orden moral ó material, ó comprometer de una manera grave los intereses públicos, dando de ello cuenta razonada al Ministro de Ultramar;

Ejercitar la gracia de indulto;

Señalar los establecimientos en que debían cumplirse las condenas;

Y, en una palabra, ejercer todas las atribuciones de gobierno que las leyes le señalaren ó compitieran al Poder central.

Por último; como *Delegado de éste* cerca de las Corporaciones locales, podría:

Presidir, sin voto, la Diputación provincial, y convocarla cuando lo estimase conveniente;

Suspender, mediante ciertos requisitos, los acuerdos de la Diputación provincial y de los Ayuntamientos;

Suplir, por sí ó por sus delegados, la acción municipal y provincial, y suspender en el ejercicio de su cargo á los Alcaldes, Tenientes y Concejales, concurriendo las circunstancias prescritas en la ley Municipal.

La Junta de Autoridades la constituían: el Gobernador superior, el Militar, el Comandante de Marina, el Regente y Fiscal de la Audiencia, el Intendente de Hacienda y el Vicepresidente de la Diputación provincial, y debía ser oída en los casos graves, y sobre todo para la suspensión de las garantías constitucionales, hasta que recaiga el acuerdo de la Metrópoli.

De esta ligera enumeración de las atribuciones que el Decreto de 1870 otorgaba al Gobernador superior de Puerto Rico, se desprende que por grande que fuese la amplitud concedida á dicha Autoridad, no afectaba en lo más mínimo á la independencia de la Corporación provincial. Solo en circunstancias extraordinarias y por motivos muy graves era lícito al Gobernador intervenir en los asuntos propios de la Diputación, y siempre había de hacerlo con causa

justificada y dando cuenta al Gobierno inmediatamente.

Por supuesto, que contra las medidas del Gobernador estaban el recurso contencioso administrativo y los Tribunales ordinarios de Justicia, por aquel entonces *inamovibles*.

Por lo demás, quedaba espedita la acción de la Diputación provincial, á la que dejaba ancho campo el art. 46 del Decreto, atribuyéndole como de su exclusiva competencia:

1.º Cuanto se refería á la Administración local.

2.º El nombramiento y separación de todos sus funcionarios y dependientes.

3.º Todo lo concerniente á la administración y fomento de los intereses morales y materiales de la Isla, *que no correspondiese expresamente* á los Ayuntamientos, al Gobernador superior civil ó al Gobierno supremo.

4.º Dictar disposiciones de carácter general y obligatorio para toda la Isla en materia de instrucción, obras públicas, establecimientos de Bancos y Sociedades, contratación de empréstitos que excediesen de 250.000 pesetas y otros análogos.

Estas medidas no serían válidas sin la aprobación de las Cortes, pero *si pasaba el término de un año sin que recayese dicha aprobación*, se entendían desde luego válidas y eficaces.

5.º Proponer en terna al Gobernador superior civil los individuos que habrían de ejercer los cargos eclesiásticos de la Isla.

6.º Discutir y proponer en su caso al Gobernador superior civil y al Gobierno supremo cuanto creyese conveniente á los intereses de la Isla y no fuese de su competencia, exceptuándose tan solo las cuestiones de carácter político, acerca de las cuales les estaba velado proponer medida alguna.

7.º Informar acerca del establecimiento de nuevos im-

puestos, modificación de los que existiesen y cualquiera otra medida de carácter financiero.

8.º Proponer al Gobernador superior civil la modificación de cualquier impuesto local, y

9.º Contratar libre y definitivamente empréstitos que no excediesen de 250.000 pesetas.

Sobre esto hay que reparar la fórmula verdaderamente americana y profundamente liberal, que establece la competencia de la Diputación en el párrafo 3.º *Todo lo que no se reserva expresamente por las leyes á otras corporaciones es de la jurisdicción de la Diputación provincial.* El sentido autonomista de la disposición es evidente.

Después nótese la brevedad del término otorgado al Gobernador superior civil para suspender los acuerdos de la Diputación provincial (término que no excedía de quince días) y el concedido al Gobierno para ratificar ó anular esta suspensión, que era de dos meses, desde la salida de la comunicación del Gobernador por el primer correo trasatlántico de Puerto Rico; entendiéndose levantada la suspensión, si transcurridos cuatro meses desde que esta fué decretada, no se comunicaba á la Diputación resolución alguna del Gobierno. En otro caso el Gobierno de la Metrópoli hacía suya la resolución, quedando por tanto sometido el negocio á la competencia de las Cortes.

De la propia suerte es de monta el plazo puesto á las Cortes para resolver sobre los acuerdos de la Diputación provincial: un año.

Por de contado, la Diputación elegía la Comisión provincial encargada de ejecutar sus acuerdos.

Los diputados sólo podían ser separados por sentencia de los Tribunales.

La Diputación formaba todos los años su presupuesto de gastos é ingresos. En el de gastos figurarían precisamente ciertas partidas relativas á instrucción, beneficencia, etcétera, etc., y para cubrirlos todos podía verificar un *repartimiento* entre los pueblos de la provincia.

Estas y algunas otras disposiciones de menor importancia, pero inspiradas todas en el decidido empeño de llevar á la isla de Puerto Rico saludables reformas, garantizaban plenamente á los ciudadanos contra la arbitrariedad y el abuso por parte de los encargados de administrar ó de vigilar los intereses provinciales, y les daban completas seguridades de que eran un hecho las disposiciones consignadas en la ley en punto á descentralización administrativa.

De aquí resultó una gran descentralización, que á no haber sido restringida hasta el exagerado extremo que después lo fué, por el primer Gobierno de la Restauración, hubiera tenido beneficiosas consecuencias para la isla de Puerto Rico y sido un precedente admirable para la más complicada reforma de Cuba; ni más ni menos que como sucedió á principios del siglo con las reformas económicas que llevan la firma del Intendente Ramírez de Villaurrutia.

Pero además, el éxito de la reforma provincial de 1872, planteada en 1873, constituye un argumento potísimo á favor de los autonomistas, que insisten en sostener que el sistema que defienden no está en el círculo de las novedades peligrosas y menos en el de las cosas irrealizables.

La facultad que á la Diputación puertorriqueña se confirió, de legislar acerca de la instrucción, de las obras públicas, del establecimiento de Bancos y Sociedades, etc., etc., no es otra cosa que un ensayo de autonomía, deficiente sin duda, pero autonomía al fin, cuya práctica, como en otras

ocasiones he dicho, constituye para Puerto Rico uno de sus mayores timbres de gloria, porque demostró palpablemente que este es un pueblo digno y capaz de ejercitar todas las libertades y todos los derechos.

Igual espíritu expansivo domina en la ley Municipal.

Dado su carácter de corporaciones económico-administrativas, encomendóse á los Ayuntamientos, como de su exclusiva competencia, la gestión, gobierno y dirección de los intereses peculiares de los pueblos, y en particular cuanto se relacionaba con el establecimiento y creación de servicios municipales referentes al arreglo y ornato de la vía pública, comodidad é higiene del vecindario, fomento de sus intereses materiales y morales, buen orden y vigilancia de todos los servicios, aprovechamiento, cuidado y conservación de todas las fincas, bienes y derechos pertenecientes al Municipio y establecimientos que de él dependan, y determinación, repartimiento, recaudación, inversión y cuenta de todos los arbitrios é impuestos necesarios para la realización de los servicios municipales.

Como era natural, estableció la ley que todos los acuerdos de los Ayuntamientos en asuntos de su competencia fuesen inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de los recursos que contra los mismos cupiesen. Pero hay otro género de acuerdos, cuyos efectos trascienden de la esfera en que se mueve la vida del Municipio, por más que recaigan en asuntos de la competencia municipal, y respecto á éstos exigió la ley, para que fuesen ejecutivos, la aprobación de la Comisión provincial, de la Diputación provincial en pleno ó del Gobierno central, según los casos.

Necesitaban la aprobación de la Comisión provincial los relativos á reforma y supresión de establecimientos munici-

pales de beneficencia é instrucción, á las podas y cortas en los montes del Municipio, ó á contratos que se refiriesen á los edificios inútiles para el servicio á que estaban destinados, y á los créditos particulares á favor de los pueblos.

Era necesaria la autorización de la Diputación provincial para entablar pleitos en nombre de los pueblos menores de 10.000 habitantes.

Y, por último, requerían la aprobación del Gobierno central, así los acuerdos relativos al establecimiento de toda clase de fuerza armada, como los que hiciesen relación á contratos sobre bienes inmuebles del Municipio, derechos reales y títulos de la Deuda pública.

En el capítulo de los presupuestos municipales es digno de ser mencionado el art. 99. que fija las bases con arreglo á las cuales podrían realizar sus ingresos los Ayuntamientos. Son las siguientes:

1.^a Determinación de los arbitrios por el Ayuntamiento, aparte los productos de sus rentas y bienes y de un recargo de céntimos adicionales á la contribución directa del Estado, que nunca podría subir para este efecto más allá del 50 por 100.

2.^a Pago de las multas en un papel especial creado al efecto.

3.^a Fijación de la riqueza imponible para el repartimiento general por los mismos contribuyentes, reunidos en secciones.

4.^a Distribución entre las secciones del importe total del repartimiento hecho por el Ayuntamiento.

5.^a Nombramiento por sorteo de síndicos en cada sección, para fijar lo que correspondiera por el repartimiento

general á cada individuo, y apelación al Ayuntamiento del acuerdo de los síndicos.

6.^a Determinación por el Ayuntamiento de las especies que habrían de ser objeto del impuesto de consumos, de la forma en que habían de tener lugar y de las tarifas por que se había de regir su exacción, las cuales no excederían en ningún caso del 25 por 100 del precio medio del artículo en la localidad respectiva.

7.^a Recurso de agravios ante la Diputación provincial á los que se creyesen perjudicados por los acuerdos del Ayuntamiento.

8.^a Acción pública para acudir á la Diputación provincial y al Alcalde delegado del Gobierno contra toda ilegalidad ó extralimitación que el Ayuntamiento cometiera al designar los arbitrios y artículos para el impuesto de consumos, al determinar las tarifas y modo de percepción ó al ejecutar las demás operaciones que les estaban confiadas.

9.^a Publicidad de todas las operaciones.

Es de notar también que, dando la ley de 1870 toda la amplitud necesaria á la vida de los Municipios, y reconociendo el alcance de sus atribuciones, no puso trabas á los Ayuntamientos de Puerto Rico en la confección y aprobación de sus presupuestos, en los cuales para nada tenía que intervenir el Gobierno general, bastando la garantía de que habían de ser expuestos al público cuatro meses antes de terminar el año económico, por espacio de quince días, desde la fecha en que se hiciese el anuncio en la forma ordinaria y los recursos concedidos á los vecinos contra las ilegalidades y abusos que los Ayuntamientos pudieran cometer; aparte del derecho de inspección y vigilancia que, en representación del Gobierno central ó supremo, tenían el Goberna-

dor superior civil, sus delegados especiales y en último término el Alcalde, que á su carácter de autoridad popular y administrativa unía el de representante del Gobierno con funciones gubernativas en lo político.

La ley municipal se limitaba á exigir que en el presupuesto de los Municipios aparecieran como partidas de gastos las relativas á la conservación y arreglo del orden público, la policía urbana y rural, la policía de seguridad, la instrucción primaria, la administración de las fincas y bienes del pueblo, los servicios municipales ya establecidos y especialmente el mantenimiento del culto y de los ministros católicos, el personal y material de las dependencias y oficinas, las pensiones y cargas de justicia que pesaran sobre los fondos municipales, el fomento de arbolado, medios contra incendios y de salvamento marítimo, suscripción al *Diario oficial* de la provincia, contingente del Municipio en el reparto provincial, biblioteca municipal é impre-vistos.

Los ingresos municipales eran los provenientes de bienes de los Municipios ó de los establecimientos de instrucción, beneficencia y otros análogos; recargos sin limitación sobre las contribuciones directas que percibe el Estado; impuestos sobre determinados servicios é industrias; impuesto de consumos y repartimiento general y proporcional entre los vecinos y hacendados del término municipal.

Nuevas garantías para los administrados por el régimen municipal de 1872 y al propio tiempo para los administradores, eran los recursos y responsabilidades que con arreglo á la ley nacían de los actos de los Ayuntamientos.

El Delegado del Gobierno, el Alcalde ó el Gobernador superior civil podían suspender los acuerdos municipales

en dos casos. El primero: cuando hubieran sido dictados en asuntos que no fuesen de la competencia municipal. Segundo caso: cuando infringieran expresa y terminantemente disposiciones de carácter general. Era indispensable, siempre, que la suspensión fuera razonada y con expresión concreta y precisa de las disposiciones en que se fundaba. En el primero de los casos antes señalados, si la suspensión viniera del Alca'le, el Gobernador pasaría el negocio á la Diputación provincial para que ésta, en el término de un mes, resolviese en definitiva. En el otro caso, el Gobernador, también en el término de un mes, resolvería por sí ó elevaría el asunto al Ministerio de Ultramar.

Pero todavía iba la ley más lejos, concediendo á los particulares el derecho de acudir á los funcionarios mencionados en demanda de suspensión de los acuerdos de los Ayuntamientos, cuando debiendo haberla decretado por sí no lo hubieran hecho; y á todos los que se creyeran perjudicados en sus derechos por los acuerdos municipales no comprendidos en el caso anterior, el de reclamar contra ellos mediante demanda ante el juez ó tribunal competente. Por último, el art. 123 hacía personalmente responsables al Gobernador superior, á su delegado, al Alcalde y á los vocales de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales de los daños y perjuicios indebidamente originados por la ejecución ó suspensión de los acuerdos de aquellas corporaciones.

No solo alcanzaban las atribuciones de los funcionarios antes citados á los casos de extralimitación de las reconocidas á los Ayuntamientos, sí que también á los de omisión de los actos que las leyes les encomendaban. Y se otorgaban igualmente á los particulares el derecho de denunciar

as omisiones á las autoridades superiores, cuyas facultades en este punto variaban desde el mero requerimiento á los Municipios para que ejecutasen en un plazo fijo el acto de suspensión que no hubiesen realizado, hasta la suspensión del Ayuntamiento, y la designación de un delegado que ejerciese las funciones asignadas á éste, dando cuenta á la diputación provincial.

Sin duda alguna no es esto, en el orden provincial y colonial, todo lo que los autonomistas sostienen; no es lo que proponía el Sr. Duque de la Torre en su informe de 1866, ni lo contenido en el proyecto de Ley que llevó al Congreso el Sr. D. Manuel Becerra, modificando varios artículos de la Constitución del 1869 para hacerla aplicable á la Isla de Puerto Rico, ni en fin, lo que dice el proyecto de Ley del mismo Sr. Becerra sobre organización provincial de la citada Isla.

Pero sería negar una positiva realidad el desconocer así el sentido descentralizador de las citadas leyes de 1870 y 72, como su inmensa superioridad respecto de los decretos análogos que en 1878 llevó la Restauración á Puerto Rico y á Cuba, y que allá se han sostenido hasta estos últimos años.

No quiero hacer comparaciones. Me distraería mucho este trabajo. Pero sí advertiré que el carácter de los decretos de 1872 está explícitamente declarado en el Preámbulo de los mismos, donde se dice lo siguiente: «El Ministro que suscribe entiende que, dado el estado particular de civilización y cultura de Puerto Rico, es preciso organizar allí el Poder de tal manera, que intervenga en todos los actos administrativos de alguna importancia; que conozca el desarrollo de todos los intereses; que sancione con su autoridad

toda iniciativa; que regule todo movimiento de verdadera transcendencia; que sea, en suma, el centro moderador de todas las fuerzas, para que, aun cuando en su nacimiento y progreso se las deje en completa libertad, para enfrenarlas si llegan á traspasar los límites de la legalidad y de la conveniencia pública.

«Sin esta organización no es posible mantener en tan apartadas regiones el prestigio de la Autoridad, ni vigorizar su acción para que realice los fines de que se halla encargada.»

Tengo por cierto que cuando hayan pasado treinta años parecerá inverosímil que en el último tercio del siglo XIX hayan regido en las Antillas españolas monstruosidades políticas y administrativas como los decretos de 24 de Mayo de 1878 respecto del gobierno y la administración de aquellas *llamadas* provincias: sobre todo, si se tiene en cuenta que esos decretos anularon los de 1872, ejecutados en la pequeña Antilla con un éxito extraordinario, y que el primer artículo de la Paz del Zanjón que se hizo en 10 de Febrero de 1878, dice á la letra: «Concesión á la isla de Cuba de las mismas condiciones políticas, orgánicas y administrativas de que disfruta la isla de Puerto Rico.» Es decir, las leyes municipal y provincial del tiempo de la República.

Conforme á los decretos de 1878, el presupuesto y las ordenanzas municipales dependían del Alcalde y del Gobernador, al punto de que cuando respecto del presupuesto había discrepancias entre éste y el Municipio, y en tanto no resolvía el Ministerio de Ultramar, prevalecía la opinión del Gobernador. Los Alcaldes eran nombrados por éste, dentro ó fuera de la terna propuesta por el Ayuntamiento, y el Gobernador no resultaba responsable de nada, por haberse

suprimido, de los decretos vigentes en Ultramar, el art. 30 de la ley provincial peninsular, que establecía la responsabilidad de los Gobernadores ante el Tribunal Supremo, conforme á los artículos 204 á 235 del Código penal.

En cuanto á la Diputación provincial, hay que saber que toda ella se contenía en la Comisión provincial, y así el Presidente como los vocales de ésta eran de libre elección del Gobernador, al cual correspondía separarlos ó suspenderlos, motivando su resolución. La Diputación entera podía ser suspendida por el Gobernador y disuelta por el Ministro de Ultramar, so'o consultando al Consejo de Estado.

Pero aun comparando lo que la República realizó en 1873 con lo que después de 22 años se decidió á proponer y hacer el partido liberal de la Restauración, no creo que queda por bajo la situación revolucionaria.

Porque la reforma municipal de 1895 deja subsistente el censo electoral de los 5 pesos en las Antillas, y reconoce al Gobernador general el derecho de nombrar alcalde, eligiéndolo dentro de la corporación municipal.

Además, en Cuba, la Diputación provincial carece del derecho de resolver en definitiva sobre las suspensiones de los acuerdos municipales que resuelve solo el Gobernador.

Y cuéntese que no hablo de la *extraña manera* de haberse aplicado á Puerto Rico la ley de 1895, por los decretos de Diciembre de 1896, opuestos en muchas partes (siempre en sentido reaccionario) á la ley que pretendían desarrollar, y cuya oposición perjudica lo indecible á la confianza que debe ponerse en la eficacia de las posteriores y más expansivas reformas ultramarinas de 29 de Abril

último. Quiero atenerme á la fórmula original de la reforma de la Regencia que ha merecido mayor aplauso. Y al hacer las citas anteriores prescindo de desarrollos y de otras consideraciones que distraerían mucho la atención del lector. Me limito á hacer una llamada.

VII

De más aliento que las leyes Municipal y Provincial de 1870 y 72 fué la de la abolición de la servidumbre en Puerto Rico.

Por ella se estableció lo siguiente:

•Art. 1.º Queda abolida para siempre en la isla de Puerto Rico la esclavitud.

Art. 2.º Los libertos quedan obligados á celebrar contratos con sus actuales poseedores, con otras personas ó con el Estado, por un tiempo que no bajará de tres años. En estos contratos intervendrán, con el carácter de curadores de los libertos, tres funcionarios especiales nombrados por el Gobierno superior con el nombre de poseedores de los libertos.

Art. 3.º Los poseedores de esclavos serán indemnizados de su valor en el término de cinco meses después de publicada esta ley en la *Gaceta de Madrid*. Los poseedores con quienes no quieran celebrar contratos sus antiguos esclavos, obtendrán un beneficio de 25 por 100 sobre la indemnización que hubiera de corresponderles en otro caso.

Art. 4.º Esta indemnización se fija en la cantidad de 35 millones de pesetas, que se hará efectiva mediante un empréstito que realizará el Gobierno sobre la exclusiva garantía de la renta de la isla de Puerto Rico, comprendiendo en los presupuestos de la misma la cantidad de 3.500.000 pesetas anuales para intereses y amortización de dicho empréstito.

Art. 5.º La distribución se hará por una Junta compuesta del Gobernador superior civil de la Isla, Presidente; del Jefe económico; del Fiscal de la Audiencia; de tres Diputados provinciales elegidos por la Diputación; del Síndico del Ayuntamiento de la capital; de dos propietarios elegidos por los 50 poseedores del menor número. Los acuerdos de esta Comisión serán tomados por mayoría de votos.

Art. 6.º Si el Gobierno no colocase el empréstito, entregará los títulos á los actuales poseedores de esclavos.

Art. 7.º Los libertos entrarán en el pleno goce de los derechos políticos á los cinco años de publicada la ley en la *Gaceta de Madrid*.....»

Estas disposiciones fueron complementadas con una orden de 27 de Mayo de 1873, autorizando «la constitución en Puerto Rico de una Sociedad Abolicionista, con el benéfico objeto de cooperar al éxito de la ley de 22 de Marzo y facilitar la redención del esclavo» conforme á las siguientes bases:

1.ª Procurar á los libertos colocación favorable en los establecimientos industriales y agrícolas.

2.ª Recoger los huérfanos y desvalidos y darles educación y trabajo.

3.ª Proceder á la educación de la raza de color.

4.^a Denunciar á las Cortes, al Gobierno supremo y á las autoridades locales en su caso, los abusos que se cometan en la Isla respecto del exacto cumplimiento de la ley de abolición.

5.^a Ayudar á los protectores de libertos, ya informándolos respecto de la condición y suerte de los contratados, ya secundando los esfuerzos de aquéllos conforme á las instrucciones que de ellos reciban.

Y 6.^a Informar cada seis meses al Gobierno sobre el estado general del país y sobre la situación de la raza de color, de los libertos y de la producción agrícola, proponiéndole lo que estime oportuno.

Y con esto se relacionaba el nombramiento en Puerto Rico, como comisarios ó protectores generales de libertos, de abolicionistas tan caracterizados como los Sres. D. Pedro G. Goyco y D. Salvador Carbonell. No se repetía la pesada broma de 1870. La ley se hacía para cumplirla.

Luego, el Gobierno de la Restauración hizo la ley abolicionista de 13 de Febrero de 1880. Pero no autorizó la constitución de Sociedades abolicionistas en Cuba, y en cambio sancionó un Reglamento que establece el *cepo* y el *grillete*, y anula una buena parte de la Ley. Así aquel castigo, como todo el *patronato* (fórmula hipócrita de una nueva servidumbre, consagrada por la citada ley), no terminaron hasta 1883 y 7 de Febrero de 1886.

Detrás de la Ley abolicionista de 22 de Marzo de 1873, vino la extensión á Puerto Rico del título I de la Constitución de 1869. La propuso el Sr. Ministro de Ultramar don Francisco Suñer y Capdevila en sesión de 11 de Julio de 1873, y votada por la Asamblea Constituyente de la República, se hizo la promulgación de la ley, en 6 de Agosto.

El alcance de esta medida se puede calcular por los considerandos del proyecto del Gobierno y el preámbulo del dictamen de la Comisión.

Las razones en que el Gobierno se apoyaba son las siguientes:

«Considerando que el fundamento de la actual situación política de la nación española lo constituyen los principios de la democracia, cuyo primer dogma es el de los derechos naturales del hombre, anteriores y superiores á toda ley positiva»:

Considerando que estos derechos están consagrados en el título I de la Constitución de 1869:

Considerando que los títulos siguientes se refieren á la organización de los poderes públicos, sobre lo cual muy especialmente están llamados á entender y resolver en definitiva las actuales Cortes.

Considerando que la cultura de la isla de Puerto Rico bastaría por sí sola, si otras razones de derecho no existiesen, para proclamar en aquel país todas las libertades propias de los pueblos civilizados:

Considerando que el Gobernador superior de aquella Isla ha estimado que la situación exigía la proclamación de las libertades de imprenta, de reunión y de asociación, lo cual ha hecho con el carácter de medida administrativa:

Considerando que, tanto estas medidas como la abolición de la esclavitud, han producido la apetecible plenitud de sus efectos:

Considerando que, unidas las razones de justicia á las de conveniencia, hacen imposible el retardar por un solo momento ni bajo ningún pretexto la consagración y reconocimiento explícitos de los derechos referentes á la personali-

dad humana en la culta, pacífica y leal isla de Puerto Rico».

La Comisión se expresaba de este modo:

«La Comisión acepta en todos sus extremos los luminosos considerandos que al proyecto preceden, y que demuestran que de hoy más el Ministerio de Ultramar se inspirará en un alto criterio de justicia y de expansión, único que puede mantener vivo el sentimiento de la unidad nacional allende el Atlántico, único suficiente á asegurar, no solo la integridad de la patria, si que la realización de los grandes destinos que á España están reservados en el mundo descubierto por nuestros grandes navegantes del siglo XVI.

La Comisión se cree, sin embargo, en el caso de introducir alguna modificación en el proyecto sometido á su examen.

Según el art. 31 de la Constitución de 1869, se necesita una ley cuando la seguridad del Estado exija la suspensión de las garantías consignadas en los artículos 2.º, 5.º, 6.º y 17 del mismo Código. La Comisión no discute ahora la bondad de esta doctrina; la considera como legal, y se ocupa solo de ponerla en armonía con lo existente en Ultramar, esto es, con todo aquello que no puede borrarse de una plumada, y cuya sinrazón, en último caso, apreciarán detenidamente las Cortes, cuando sean llamadas á entender en la organización de los poderes en nuestras provincias transatlánticas, si es que semejante punto no queda libremente entregado á la iniciativa de los Estados particulares dentro de la federación española.

Porque resulta, de una parte, que dada la distancia á que se halla la isla de Puerto Rico de la Metrópoli, y la falta de continuas y rápidas comunicaciones de entrambas, será punto menos que imposible en ciertos casos que el art. 31

aludido sea perfectamente observado, puesto que, á serlo, la ley votada por las Cortes llegaría á deshora en algunas ocasiones.

Por otra parte, los Gobernadores superiores y Capitanes generales de la provincia de Puerto Rico, si bien no gozan de las facultades extraordinarias (por la menor en su plenitud), de que trata la Real orden de 1825 referente á Cuba, disfrutan de toda la autoridad y de todos los medios sancionados en la Recopilación de Indias, principalmente en el título III, libro 2.º, todo lo que es de difícil, si no imposible, relación con el Código constitucional de 1869.

Convienes, pues, poner en armonía todas estas disposiciones y hacer frente á las dificultades que la distancia, cuando menos, podría suscitar á las veces.

Para ello la Comisión ha tenido en cuenta las proposiciones de ley presentadas á estas Cortes por los dignos diputados de Puerto Rico, así como el espíritu declarado en los considerandos de que el Ministro de Ultramar ha hecho preceder el proyecto objeto ahora de examen. Pero entiéndase bien, que la Comisión pretende sólo resolver las dificultades del momento, sin aventurar opinión alguna definitiva sobre la futura organización de los que vendrán á ser Estados particulares trasatlánticos de la federación española.

Por razones análogas, la Comisión opina que es de toda necesidad dar cierto desenvolvimiento, y con él cierta precisión, á un extremo consignado en el segundo párrafo del artículo 31 determinando la ley de Orden público que ha de regir en Puerto Rico, como en la Península, en ciertos y determinados casos.»

Firmaron este dictamen, fecha 14 de Julio de 1873, los diputados D. José Ramón Fernández, D. Manuel García

Marques, D. Manuel Corchado, D. Enrique Calvo Delgado y D. Santiago Soler.

El texto de la parte dispositiva de este dictamen (que fué aprobado por las Cortes) es el que sigue:

«Art. 1.º Se declara vigente en la provincia de Puerto Rico el título I de la Constitución de 1.º de Junio de 1869.

Art. 2.º Cuando la seguridad del Estado, en circunstancias extraordinarias, exija en la provincia de Puerto Rico la suspensión de las garantías consignadas en los artículos segundo, quinto y sexto, y párrafos primero, segundo y tercero del 17, el gobernador superior lo pondrá por telégrafo en conocimiento del Gobierno central para que éste solicite de las Cortes la ley á que hace referencia la Constitución en su art. 31.

Art. 3.º En el caso de que por interrupción de comunicaciones telegráficas con carácter de permanencia ó de larga duración, no pudiese ser cumplido el anterior artículo, queda autorizado el gobernador superior civil de la provincia para suspender las garantías consignadas en los artículos segundo, quinto y sexto, y párrafos primero, segundo y tercero del 17, á menos que la Diputación provincial en pleno, á este efecto convocada, y la junta de autoridades, por mayoría de votos, no fuesen favorables á la indicada suspensión.

En el supuesto de empate, lo dirimirá el gobernador civil.

En todas las ocasiones, el gobernador superior comunicará inmediatamente la resolución tomada y los fundamentos y circunstancias del acuerdo al ministerio de Ultramar, para que éste lo transmita á las Cortes, las cuales,

por medio de una ley, si lo estimaren oportuno, ratificaran la suspensión de garantías.

En caso negativo, ó transcurridos treinta días desde la suspensión sin que las Cortes hubieren tomado acuerdo alguno, se entenderá derogada la disposición del gobernador superior de Puerto Rico.

Art. 4.º Para los efectos del art. 31 de la Constitución, se entenderá vigente en la provincia de Puerto Rico la ley de orden público de 23 de Abril de 1870.

Art. 5.º Quedan derogadas todas las leyes y disposiciones que de cualquier modo se opongan á lo consignado en la presente ley. »

Ya he dicho que esta medida fué precedida de otras muy favorables del partido radical, que en 1872 habían concedido una ampliación en el goce del derecho de sufragio, reconociéndolo á todos los que supieran leer y escribir ó pagaran alguna contribución. Además, en 11 de Marzo de 1873, con motivo de la convocatoria de Cortes Constituyentes, el Poder Ejecutivo de la República había establecido que tuvieran derecho electoral en Puerto Rico todos los españoles mayores de 21 años, siempre que pagaran alguna cuota de contribución directa al Estado ó supieran leer y escribir, «á fin (decía aquel decreto luego convertido en ley) de que sea uno mismo el censo para las elecciones de concejales, diputados provinciales y diputados á Cortes.» Y en 26 de Junio del propio año de 1873 se promulgó una ley para la renovación de Ayuntamientos y Diputaciones provinciales en la Península, Baleares y Puerto Rico, en cuya ley se ratifica la consagración del derecho electoral en los mismos términos de la ley de 11 de Marzo anterior. Pero la determinación de las Constituyentes de la Repúbli-

ea y la ley de 6 de Agosto (que aplicó el Sufragio Universal á Puerto Rico, consagrando allí todas las *libertades necesarias* y los principios de la democracia contemporánea) puso término á todas las vacilaciones y reservas, demostrando un alto sentido político al no detenerse en la consideración de si debía ó no llevarse á Ultramar, una parte del Código del 69, cuando aquí, en la Península, se dudaba de su vigencia y de si convenía ó no mejor aplazar toda modificación del estado de Puerto Rico, hasta que pudiera llevarse á la Isla la Constitución íntegra con las modificaciones y novedades entrañadas en el proyecto de Constitución federal.

Para Ultramar ha habido y continúa habiendo dos peligros.

El del *estudio y seria meditación* que al parecer ningún Ministro de Ultramar ha tenido hasta entrar en el Ministerio. Y el de la *espera* de la última reforma que se proyecta para la Península, á fin de llevar á los países trasatlánticos lo *mejor*. Por estos procedimientos Cuba y Puerto Rico han estado esperando una media libertad desde 1837 á 1869. ¡Y luego continuaron esperando las *leyes especiales* prometidas por todas las Constituciones del país por espacio de más de cincuenta años!

La República vió claro que con este criterio lo que triunfaba en Puerto Rico era el *status quo*. El título I de la Constitución del 69 era la consagración explícita de los derechos individuales y de la soberanía del pueblo, y cualquiera que fuese la suerte de esa Constitución y las novedades de la Federación proyectada, el título I referido sería siempre un término obligado en toda situación democrática.

VII

Otra de las grandes dificultades con que ha tropezado y tropieza nuestra política colonial consiste, como ya he insinuado, en el retardo con que se aplican las leyes y las disposiciones de todo género que aparecen en la *Gaceta de Madrid* para satisfacer la opinión justiciera de la Península y las exigencias de puro carácter moral, pero de una fuerza indiscutible, de todo el mundo culto, bastante atento desde hace algún tiempo á lo que ocurre en las colonias españolas.

Al lado ó si se quiere después del retardo aludido, hay que poner la falta de lógica con que frecuentemente se hacen y redactan los reglamentos para la aplicación de las leyes coloniales en Ultramar y por último la manera, por regla general poco satisfactoria, con que las leyes más expansivas y plausibles se cumplen por parte de nuestras autoridades.

Todo esto es muy viejo. Los que conocen medianamente nuestra historia colonial saben muy bien de qué deplorable manera se cumplieron en América las excelentes *Leyes nuevas* de Carlos V sobre los indios, la servidumbre de

éstos y las encomiendas. Es notorio que la mejor y más sustanciosa parte de nuestras famosas *Leyes de Indias* fué bastardeada y casi anulada en la práctica, sobre todo en el curso del siglo XVIII, al punto de que respecto de cierto particular celebradísimo por los que solo de oídas hablan de estas cosas, pudiera escribir el duque de Linares, virrey de México, frases tan elocuentes como las que siguen: «Si el que viene á gobernar este reino, no se acuerda repetidas veces de que la residencia más rigurosa es la que se ha de tomar al virrey en su juicio particular por la Majestad Divina, puede ser más soberano que el Gran Turco, pues no discurrirá maldad que no haya quien se la facilite ni practicará tiranía que no se le consienta.» No necesito decir cuáles fueron los motivos de la resuelta y admirable actitud del marqués de la Sonora, primer ministro universal de Indias, á fines del siglo pasado, y de qué manera su justamente celebrada Ordenanza de Intendentes y otras Reales cédulas por el estilo, promulgadas entonces para evitar el visible é inmediato derrumbamiento de nuestro imperio colonial, fueron rectificadas en la práctica por la malicia, la preocupación ó la rutina, produciéndose todo género de corruptelas que abrieron el camino á las insurrecciones americanas de principios de este siglo y de los últimos días del anterior, realizadas, unas veces, por los indios y otras por los blancos, pero todas perfectamente previstas en el celeberrimo Informe de D. Jorge Juan y D. Antonio de Ulloa, que corre con el nombre de «Noticias secretas de América» ó por el ilustre Humbolt, que en 1811 y después de haber visto por sus propios ojos los países americanos, publicó su conocido «Ensayo político sobre el reino de Nueva España.»

Hace ya cerca de veinte años yo publiqué un pequeño trabajo titulado *La pérdida de las Américas*, con el propósito de rectificar la especie muy divulgada de que las libertades concedidas por el Gobierno español á los reinos de América en los comienzos del siglo XIX, fueren la causa de la emancipación de aquellos países, y creo haber demostrado con citas legales indestructibles, con hechos de absoluta evidencia y con la opinión de autoridades como Flores Estrada, el diputado Urquinaona, el fiscal Costa y Gali, el historiador Gervinus y hasta D. Agustín Argüelles y el conde de Toreno, decididos adversarios de los liberales americanos, que sobre no ser cierto que en América se hicieran determinadas reformas, y mucho menos las reclamadas como urgentes para calmar el descontento de aquellos países y desbaratar las conspiraciones urdidas bastante tiempo antes y en pleno absolutismo, se dió el caso de que las reformas más satisfactorias se aplicaran tardíamente, y luego se suspendieran, siendo, por regla general, los encargados de hacerlas efectivas, las autoridades y los elementos que se habían caracterizado hasta entonces por la oposición más decidida á toda modificación del viejo *statu quo*.

Aún con referencia á época reciente algo he dicho antes respecto del modo y manera de haberse llevado á Cuba las declaraciones de la Revolución de Septiembre y de la suspensión ó aplazamiento de las leyes municipal y provincial votadas en 1870 para Puerto Rico. Y se repitió el caso en 1878, 1894 y 1898.

Excuso explicar el terrible efecto que estas habilidades, estos sorteos y estas mixtificaciones producen en Ultramar, donde es mucha la penetración de las gentes y sobrada la prevención contra los manejos de nuestros Gobiernos. La

sorpesa es allí absolutamente imposible. En cambio el mero retraso en la aplicación de una reforma produce una verdadera exasperación y una considerable merma del necesario prestigio de los poderes públicos de la Metrópoli, que allá frecuentemente, y por un error lamentabilísimo, se confunden con la opinión, los intereses y la disposición general del país peninsular.

Tampoco quiero decir nada del efecto tristísimo que todo esto produce en el extranjero, donde los publicistas y los Gobiernos están al tanto de muchas cosas de nuestras colonias; muchísimo más de lo que imaginan la parte vulgar de nuestros políticos, nuestros desorientados Gobiernos y los comprometidos en la rutina y las torpezas que constituyen el ambiente de nuestra vida oficial americana. Esa atención del extranjero la abonan el nuevo aspecto del problema colonial, la importancia extraordinaria, política, mercantil é internacional de nuestras Antillas, y el desenvolvimiento que han adquirido en estos últimos años los viajes de los publicistas, la emigración é inmigración de los europeos y el estudio de la legislación comparada. Aparte de lo que ha sido siempre, y ahora es más que nunca, el derecho colonial, que muchos tratadistas ponen completamente fuera del derecho privado de los pueblos, y en cambio, más ó menos dentro ó bajo de la acción internacional.

Quizá por estas consideraciones, quizá por la natural fuerza expansiva de la institución republicana, es el hecho que el Gobierno de 1873 se preocupó seriamente de cumplir las leyes entonces dictadas respecto de Puerto Rico, y que su admirable devoción fué correspondida con un éxito extraordinario, demostrativo tanto de la bondad y la eficacia de las soluciones generosas entonces proclamadas,

como de la cultura y el civismo de la isla de Puerto Rico, cuya aptitud para el ejercicio de los derechos más delicados, quedó absolutamente probada.

En justificación de estos últimos asertos se puede presentar el testimonio de todos los cónsules extranjeros cuyos informes oficiales se han publicado en Francia, Inglaterra, los Estados Unidos, Italia y Alemania, y además el hecho de que pasados algunos años, los ministros de la Restauración y la Regencia de España, muchos de ellos enemigos en 1873 de las reformas de Puerto Rico, hayan utilizado la feliz experiencia portorriqueña de aquella fecha como un justificante de la nueva y afortunada política colonial del Gobierno español. En último caso se podría traer al debate las cifras referentes á los presupuestos y al movimiento mercantil de la pequeña Antilla en 1868, 70 y 73 y 76; es decir, de todo aquel período, dentro del cual se verificó la abolición radical de la esclavitud, la instauración del sufragio universal, la proclamación de la Constitución democrática del 69 y la nueva organización municipal y provincial.

La preocupación y el espíritu reaccionario gritaron por mucho tiempo que el solo anuncio de esas reformas perturbaría profundamente el orden y la vida económica de la pequeña Antilla. Se habló, con una desenvoltura y una ignorancia verdaderamente superiores, de la horrenda catástrofe de Santo Domingo, explicada *por la abolición* de la esclavitud, que decretó la Revolución francesa. Se cacareó la ruina de Jamaica y las Antillas británicas, y se fabricó una peregrina historia de las causas de la Revolución hispano americana, prescindíéndose de puntos tan *insignificantes* como el de la súbita revocación del decreto de libertad de comercio dictado en 1812, y cuya anulación, hecha para conservar

el monopolio de los comerciantes de Cádiz, determinó á los indecisos revolucionarios de Buenos Aires á emanciparse de la Metrópoli española. Se llegó al punto de afirmar, dentro y fuera del Parlamento, y de modo solemne, que las reformas de Puerto Rico, quebrantando el prestigio de España y la fuerza de los elementos políticos y sociales que sostenían su bandera en el mar de las Antillas, serviría de estímulo al desarrollo de la insurrección de Cuba.

Los hechos han contestado de una manera victoriosa á todos esos argumentos de la pasión, la rutina y los intereses mal asegurados (1). La población de Puerto Rico, que en 1860 era de 583.308 almas y en 1872 de 617.328, es hoy de 798.566 habitantes. El presupuesto de aquella fecha subía á 2 millones de duros, hoy llega á 4 millones de pesos. Y los ingresos han superado á los gastos en 1.167.722 pesos. En 1872 las Aduanas producían unos 2.100.000 pesos. Ahora dan: más de 3 y $\frac{1}{2}$, millones.

La Balanza Mercantil de 1871, afirma que el comercio exterior de la pequeña Antilla fué en aquel año de 23.435.486 pesos: de ellos, 15.435.323 de importación y 8.008.125 de exportación. Ahora (datos de 1892) ese movimiento mercantil total es de unos 33.157.921 de duros. De ellos, 17.071.609 corresponden á la importación y 16.076.312 á la exportación. Pero hay que contar que el día siguiente á la abolición (ó sea en 1874), el movimiento comercial fué de unos 19.814.358; al año siguiente de 20.760.000 y pico: y á los 5 años (ó sea en 1878) de 27.847.890. El promedio de los 5 años de aparente tranquilidad de la Isla (1865-69) fué de 14,265,748 pesos: De ellos 8 626,453 la importación y

(1) Sobre esto véase mi estudio *La experiencia abolicionista de Puerto Rico* y el trabajo del Sr. Jimeno Agius sobre *Puerto Rico* en 1890.

5.639.295 la exportación. El promedio de los 5 años posteriores á la abolición (1874 78) fué de 22.653.375: De ellos 13.661.151 pertenecen á la importación y 8.992.224 á la exportación. A los 20 años de hecha la abolición el movimiento mercantil de Puerto Rico ha duplicado con creces. De 25 millones á 54.

Para la estimación de estos datos bueno será traer á la memoria lo que sucedió en las colonias británicas y en las francesas después de la abolición de la esclavitud, El duque de Broglie, en su conocido Report de 1843, refiriéndose á las Antillas inglesas, donde la abolición se hizo en 1833, afirma que el *resultado inmediato* de aquella medida fué una «reducción de un cuarto en las expediciones de azúcar y de un tercio en las de café.» Pero á los quince años la exportación de los productos coloniales había excedido á la de los tiempos de la esclavitud y del Monopolio, en Antigua, Barbada, Trinidad y en la casi totalidad de las Antillas, cuando menos, en un 26 por 100, quedando interior hasta en un 67 sólo en Jamáica, San Vicente, y Granada. En las Colonias francesas la baja inmediata fué de un 50 por 100 en Martinica, de un 55 en Guadalupe y de un 25 en la Reunión. Cinco años después (ó sea en 1850) la disminución en las cuatro principales colonias (ó sea en Martinica, Guadalupe, Reunión y Guyana) es de 11 millones de francos con relación á 1840: en 1848 la baja fué de 43 millones. Y en 1858 la exportación sube 36 millones. Pues bien, todas esas cifras son inferiores á las que arrojan las estadísticas de Puerto Rico, cuya experiencia abolicionista no tiene igual en el mundo.

El progreso no es discutible un minuto. Pero hay que añadir que todo el extraordinario cambio político y social

operado en aquella isla en el período de la Revolución, se hizo sin el más ligero desorden. Así lo declararon las autoridades.

Sobre este particular conviene reproducir lo que el Gobernador general, D. Rafael Primo de Rivera, dijo á los portorriqueños al despedirse oficialmente de ellos en 2 de Febrero de 1874. Hélo aquí:

«Al favorecerme y honrarme el Gobierno de la República con el Gobierno Superior civil de esta noble y leal provincia, me confirió la más cristiana y elevada misión que pudiera ambicionar mi alma (la de romper las ominosas cadenas del esclavo) y la cumplí en breves días.

Felicito con todo mi corazón á los libertos que con ejemplar cordura y honradez han correspondido á la justicia que les hiciera nuestra madre España por medio de las Cortes. Al despedirme, les encargo, como otras muchas veces lo he hecho, que continuen por la senda honrada del trabajo y que hagan ahorros, por que la vejez enerva las fuerzas, y así serán acreedores á mayor consideración social. Otra recomendación me hizo tambien el Gobierno, casi de tan inmenso valor como la anterior: la de asimilar esta Antilla á la Península por medio de iguales derechos, como consecuencia precisa y legítima de iguales deberes. Tengo conciencia de haber cumplido con lealtad las órdenes superiores; vuestra ejemplar sensatez ha conquistado al fin las libertades políticas que anhelábais y de que usais con singular moderación.

La paz pública, el orden que tanto amáis, han permanecido inalterables durante todo el período de mi gobierno. Reconocido estoy á ese nuevo beneficio que de vosotros he recibido.»

Y continúa luego:

«No olvidéis, conciudadanos amantes de las libertades del ciudadano español, no olvidéis que debéis las que hoy disfrutáis, solo á vuestra cordura, á vuestro inquebrantable amor al orden, á vuestro cristiano y noble sufrimiento en la adversidad y á vuestra rara moderación en el triunfo. Espero que jamás por nada ni por nadie abandonaréis esa senda y así continuará siendo esta isla la provincia española modelo.

El Señor de los cielos y de la tierra lee en lo más íntimo

de mi conciencia y sabe que sólo me ha guiado en mi corto gobierno el anhelo por vuestro bien y el más ardiente patriotismo. Si el criterio de algunos hombres me juzga mal, Dios me juzgará bien. Es el gran consuelo que lleva en su alma al despedirse de vosotros, *Vuestro Gobernador.*»

Así lo registra la historia de aquellos memorables días, y puede bien decirse que todo aquello preparó excepcionalmente á la pequeña Antilla para que pudiera después soportar sin transcendencia la positiva perturbación que produjo el famoso golpe del 3 de Enero del 74, que impuso la dictadura militar en Puerto Rico y trastornó materialmente todo aquel sistema político y administrativo, determinando en seguida una inmensa desorganización, por ejemplo, en el ramo de la instrucción pública, señalada, como lo ha sido en toda América y en todos países dominados por la reacción, como una causa de rebeldía.

Pero el más decisivo éxito y la mayor defensa de las reformas portorriqueñas de aquel agitado período está en los antecedentes, en el espíritu y hasta en la letra de la famosa capitulación del Zanjón, firmada el 10 de Febrero de 1878, y para la cual, los insurrectos cubanos que depusieron las armas, no solo tuvieron en cuenta la política reformista triunfante en la pequeña Antilla, sino que pretendieron y obtuvieron que en el art. 1.º de aquel Convenio se consignara de un modo explícito que «Cuba obtendría las mismas condiciones políticas, orgánicas y administrativas de que disfrutaba Puerto Rico.» Es decir, que las reformas de 1872 y 73, positivamente influyeron á favor de la fortificación del imperio de España en la grande Antilla.

La obra de sinceridad del Gobierno republicano en Puerto Rico se revela á cada paso. El 14 de Febrero del 73, las Constituyentes votaron una amplia amnistía para los

ecisiones republicanas y por delitos
le Marzo se vota otra ley concediendo
delitos cometidos por medio de la
ico. Ya he dicho cómo se autorizó la
lad Abolicionista antes de proclamar-
lla los derechos de reunión y asocia-
hay que poner el nombramiento del
Rafael Primo de Rivera para el Go-
tilla; es decir, el nombramiento de
ente identificada con el nuevo régi-
l, como lo demostró durante todo el
y celosísima administración, secunda-
de nota muy liberal y expansiva, y
on en la aplicación y el desarrollo de
ticas, una ocasión de demostrar la
strinas que habían proclamado como
y periódicos, ya en los mismos cen-
altramarinos. El cambio de 1873 no
uerto Rico á merced de gente impro-
de la República se cuidó tan solo de
rgados de dar realidad á las leyes y
os no fueran los adversarios de éstos,
ver por los hechos, que había sido
inspirada en una regla de sana polí-
do moral: quizá sólo de buen sentido.
el Ministerio, ratificando lo dispuesto
al en 4 de Noviembre del 72, sobre
Boletín Oficial del Ministerio de Ul-
ipliamente esta idea, disponiendo que
usual, y de gran tirada, se publiquen,
siciones legales respecto de nuestras

Colonias, sí que trabajos científicos y doctrinales de propaganda dentro de condiciones de la más completa libertad. A primera vista esto es un detalle, pero los concedores de las cuestiones ultramarinas no lo estimarán de esta suerte, porque es bien sabido que uno de los más poderosos recursos de la reacción y el monopolio, imperantes en las Colonias de todos los países, consiste en despistar á la opinión pública y fatigar al observador, ya por la confusión y el desbarajuste de las medidas administrativas que sobre las Colonias se dictan, ya haciendo dificultísimo el conocimiento directo é inmediato de las disposiciones que en Ultramar se promulgan, muchas veces, en contradicción con aquellas mismas leyes. Por tanto, la publicidad frecuente y oportuna de todo lo oficial, respecto de Ultramar, es una obra de sinceridad y de verdadero alcance político.

Aparte de esto, queda el empeño de la propaganda y de la exposición detenida de la situación de nuestras Colonias al modo que se hace en todas las Metrópolis de mediana importancia. Sin embargo, el *Boletín Oficial* del Ministerio de Ultramar solo duró hasta 1879, y desde 1875 varió completamente de carácter, tomando uno excesivamente modesto. Ahora las leyes y los principales decretos salen revueltos con todo lo demás, en la *Gaceta de Madrid*, á la cual no llegan las resoluciones que se adoptan en las Antillas. No existe Compilación legislativa ultramarina, porque si bien en 8 de Febrero de 1896 se decretó que se hiciese esa Compilación de leyes y disposiciones vigentes, y en 1888 comenzó su publicación con la inserción de un decreto del Gobierno General de la Habana de 1.º de Enero del 86, la obra está atrasadísima, hasta el punto de que pue-

se continúa publicándose. El último tomo es de las disposiciones del primer cuatrimestre de 1873, la legislación de hace cerca de diez años. En 14 de Octubre de 1873 apareció un decreto republicano, disponiendo que el Ministro visitase la isla de Cuba con el objeto «de estudiar de poner término á la insurrección que empeora su situación económica, preparar la abolición de la esclavitud y plantear las reformas necesarias en la Administración de la provincia, adoptar, dentro de sus facultades, las medidas que sean conducentes para aquellos fines.»

El decreto continúa: «visitará también la isla de Puerto Rico para apreciar el resultado de las reformas allí emprendidas, resolver, asimismo, con arreglo á las atribuciones que le competen, lo que estime conveniente á su dignidad y al bien del país y gobierno.»

El preámbulo de este decreto se habla de la necesidad de una reforma vigorosa y decisiva para concluir con la insurrección, cuya continuación priva á la grande Antilla de la paz, imposibilita el desarrollo de la agricultura, constante obstáculo al planteamiento de las reformas que reclaman de consuno la humanidad y la civilización. Se habla del estado económico que se califica de grave, disminuido el crédito y en aumento la desconfianza, ordenándose por todas partes un plan ordenado de reformas, para que los recursos para la pacificación y permita hacer que las impuestas al país redunden en su prestigio y beneficio. Se habla de la esclavitud, y este problema se ha de resolver con el concurso de todos, el preámbulo dice «que no cabe olvidar

que la conciencia pública espera con ansiedad creciente el día de la abolición.»

«La República—añade—fiel á sus principios, ha ampliado las reformas que á Puerto Rico llevó la Revolución de Septiembre. La esclavitud ha desaparecido. El título primero de la Constitución reconoce en los hijos de aquella provincia los derechos que gozan sus hermanos de la Península. Y el Gobierno que aspira á completar su obra necesita apreciar el resultado de tan trascendentales innovaciones.»

Por último concluye: «El Gobierno espera tanto de esta determinación (la del informe sobre la situación ultramarina), que no ha vacilado en aceptar el generoso ofrecimiento de uno de sus individuos, seguro de que cuantos aman el nombre de España, verán que si el progreso reclama ciertas reformas, y la opinión exige el cumplimiento de ciertas promesas, nada, absolutamente nada, hay superior para la República á la integridad de la patria.»

Conforme á este decreto, el Sr. D. Santiago Soler y Plá, Ministro de Ultramar, se embarcó para Puerto Rico y Cuba á fines de 1873, pero en la Grande Antilla le sorprendió el famoso golpe del 3 de Enero, que dió al traste con todos los propósitos y proyectos de su viaje.

Por lo pronto éste le proporcionó algunos graves rozamientos con la primera autoridad de Cuba, según lo indicado en otra parte de este trabajo. Pero de todas suertes el viaje del Sr. Soler y Plá acredita el excelente propósito del Gobierno republicano que, después de las reformas hechas, no se limitaba simplemente á desear otras. Y el viaje, con todas las dificultades y peligros que entrañaba, era tanto mas de estimar, cuanto que el matiz político que pre-

en las esferas oficiales á fines de 1873, era el munciado del republicanismo español. Con mencia los gobernantes de entonces fueron censurados y estimulados por sus demás correligionarios a urgente continuar la obra de la reforma plazamientos que suponía el viaje del Sr. Soler r tanto, la nota de éste era la más templada, y go no puede negarse su sentido reformista y su intención.

VIII

He dicho, al principio de este trabajo, que para apreciar debidamente lo que la República de 1873 hizo en favor de las libertades de Ultramar, es imposible prescindir de las extraordinarias circunstancias de aquel tiempo; circunstancias no sólo perfectamente distintas y aun opuestas á las del período posterior de la Restauración y de la Regencia, si que de gravedad muy superior á todas las que han caracterizado á las épocas señaladas por el hecho de la reforma colonial en los pueblos más poderosos y ejemplares de la política contemporánea.

Con deplorable frecuencia se ha prescindido de esta nota por no pocos antillanos, seria y naturalmente preocupados en favor de la pronta y positiva instauración de un régimen colonial progresivo.

Es preciso ser sinceros y dar á las cosas su verdadero nombre. No es digno, ni siquiera formal, prescindir de la realidad de los hechos. Además, el error de los antillanos á que me refiero puede ser de extraordinarias consecuencias. Ya ha producido algunas bien sensibles; de las cua-

les pocos como yo pueden hablar, porque somos muy contados los que en la Península hemos permanecido en el terreno del combate, alzada la bandera autonomista y sin desconfiar del éxito de la propaganda, en los interregnos parlamentarios, y en los períodos críticos de las grandes cerraciones, de los apremiantes pesimismos, de las provocaciones insoportables y de las calumnias protegidas por la ignorancia popular, la exaltación patriótica y el pánico de los días negros y terribles.

Uno de los primeros efectos del error que señalo ha sido una cierta reserva de algunos elementos políticos de la grande Antilla, respecto de los elementos republicanos de la Península; reserva correspondida á la postre y después de muchos incidentes de enojosa explicación, por parte de bastantes republicanos, con una gran desconfianza, acompañada de motes y censuras de excesiva severidad.

A mi juicio, la principal causa de esta positiva falta de intimidad está en una doble equivocación de la Península y de las Antillas. Aquí no se comprende bien la situación excepcional de los antillanos, á quienes se niega el *derecho común* de los españoles, y que por tanto necesitan consagrar preferentemente sus esfuerzos á recabar lo que ya es un supuesto indiscutible de todas las campañas de los peninsulares. Además, la especialidad de la vida colonial pide una atención especialísima, y no sería medianamente discreto, de parte de los políticos insulares, posponer este particular á la campaña que, á diario, los peninsulares hacen en nombre de toda la Nación, pero que en realidad ordinariamente es, y tiene que ser, en obsequio de las regiones ó provincias de la Península, cuyos representantes constituyen la casi totalidad de nuestras Cortes, y cuyos intereses económicos—más ó

que dispone, las probabilidades de éxito, los elementos auxiliares y cooperadores y la colocación que los problemas tienen, tanto por su importancia absoluta como por las circunstancias de tiempo y lugar. En tal supuesto es punto menos que una locura esperar que los hombres políticos, por el mero compromiso doctrinal realicen, inmediata y absolutamente, todas las ideas consagradas en su programa, ó que se deducen de éste, por su propio y único esfuerzo, quizá con la cooperación de gentes opuestas á algunas soluciones particulares, mientras los partidarios de éstas se reservan, en una relativa indiferencia y cruzados de brazos, viendo cómo los demás satisfacen sus deseos. Esto, no sólo no es político; quizá tampoco es humano.

Pero además, vuelvo á repetir que la mayor parte de las dudas que en Ultramar se tienen respecto de la consideración que las libertades coloniales han merecido á los republicanos de la Península, depende de que allí son desconocidos muchos hechos, y que son pocos los que pueden estimar á dos mil leguas de distancia las positivas dificultades con que la República del 73 luchó para realizar lo que hizo y que de todas suertes fué muchísimo más de lo que han hecho después los partidos de la Restauración. Esto, prescindiendo graciosamente de que los partidos monárquicos han sancionado respecto de Puerto Rico un evidente retroceso: el retroceso que implican los decretos de 1876, la reforma electoral del 92 y del 94, y muy buena parte de la reforma llamada de los Sres. Maura y Abarzuza de 1894 y 95, inferior, en ciertos extremos, al régimen portorriqueño de 1873. De ello hablan poco ó no dicen nada los críticos y los desdeñosos á que me refiero.

Deplorando todo esto, no me asombro ni me irrita. Aquí.

misimo, en la Península, estoy viendo á cada paso la indiferencia con que se habla de los hombres y las situaciones políticas que prepararon y consagraron, en medio de dificultades sin cuento, el régimen liberal y relativamente democrático de que hoy disfrutan, sin haberles costado casi nada, ó nada del todo, aquellos que más tachan de deficientes los trabajos realizados por sus antecesores. Es muy común quitar toda importancia á lo que uno mismo no hace, aunque de ello se aproveche, y es facilísimo exigir á los demás, en nombre de la lógica, todo género de buenas disposiciones y aun de positivos sacrificios, prescindiendo de la aplicación de esa misma lógica á la conducta del que reclama y exige.

Y paso por alto el escandaloso espectáculo que se ha dado varias veces, en estos últimos años, de las aclamaciones y los vítores con que han sido saludados, no solo por la multitud desorientada ó ignorante, sino por bastantes gentes más ó menos identificadas con las reformas ultramarinas, hombres políticos perfectamente caracterizados por sus declaraciones terminantes contra la autonomía colonial ó contra la abolición inmediata de la esclavitud ó contra la reforma electoral democrática ó contra otras soluciones expansivas coloniales, y á los cuales, el clamor de última hora los presenta como los más decididos reformistas y los benefactores más indiscutibles de las Antillas españolas. Excusado es decir que entre todas aquellas aclamaciones, de fecha bien reciente, no hubo un solo recuerdo para la República del 73 ni para la campaña autonomista de los republicanos españoles de estos últimos diecisiete años.

Repito que todos estos hechos no me sorprenden ni me desaniman de ninguna suerte. He contado siempre con

tode eso. Pero mi prudencia no llega á la longanimidad, y si como hombre justo tengo derecho, y hasta el deber de procurar la rectificación de esos abusos de la credulidad pública, como hombre político necesito ocuparme del particular, porque sé, por una larga y costosa experiencia, las dificultades que todas esas injusticias producen para continuar las campañas del derecho, mediante el concurso de elementos y fuerzas positivamente eficaces. No es cosa corriente mantener la cooperación de los elementos simpáticos á la reforma ultramarina frente á la insistencia del olvido ó de la desconsideración de esos auxiliares por parte, más ó menos importante, de aquellos que primeramente han de aprovechar el efecto de la campaña reformista que en la Península se haga.

Por todo esto no me cansaré de recordar los enormes obstáculos que para el menor avance, en el sentido de la libertad y la política colonial en 1873, oponían las circunstancias por todo extremo excepcionales de la Península y Cuba. En tal sentido, cuanto en aquella época se hizo con tendencia expansiva tiene un valor punto menos que incomparable con lo que la Restauración ha hecho en circunstancias tan favorables como las que siguieron inmediatamente á la paz del Zanjón y las de todo el período de tranquilidad y progreso de los últimos quince ó dieciséis años.

Ya he indicado buena parte de las dificultades de la política interior de la Península. Algo he dicho de los obstáculos provenientes de la actitud reservadísima que frente á la República del 73 adoptaron los Gobiernos europeos. He insinué algo también respecto de la disposición poco alentadora de la República norteamericana.

Ahora ampliaré las indicaciones.

El Gobierno francés, según despachos del Sr. Olózaga, estuvo al principio dispuesto á reconocer nuestra República. Mr. Thiers le manifestó, á mediados de Febrero, que de hecho reconocía el nuevo estado de cosas de España, pero que, por razones de política internacional tardaría algún tiempo en dar carácter oficial al reconocimiento.

Nombrado por el Sr. Salmerón para Embajador en París el Sr. Abarzuza, este no llegó á presentar sus credenciales, siendo sustituido, después del golpe del 3 de Enero, por el Sr. Marqués de la Vega Armijo, en cuya fecha reconoció Francia al Gobierno del duque de la Torre.

Alemania tampoco reconoció á la República á pesar de los esfuerzos que hizo D. Patricio de la Escosura, ministro en Berlín. Celebró este señor varias conferencias con Bismarck y le encontró propicio al reconocimiento, pero no se decidió probablemente (decía el Sr. Escosura), por la presión que ejercían los gobiernos de Viena, Rusia é Italia.

En cuanto á los demás gobiernos europeos, solo el de Suiza simpatizó con la República española, reconociéndola en 24 de Febrero de 1873, después de haberle sido notificado el advenimiento de aquella por la Embajada española de París.

Nuestra República fué reconocida en América por los Gobiernos siguientes: Estados Unidos, Guatemala y Costa Rica.

El Gobierno de los Estados Unidos reconoció enseguida el nuevo Gobierno español enviando al efecto órdenes telegráficas á Mr. Sickles para que efectuara el reconocimiento. Se convino en que fuera en forma solemne y mediante una audiencia pública ante el Presidente del Poder ejecutivo y así se realizó el día 15 de Febrero de 1873.

El 3 de Marzo siguiente, las Cámaras americanas votaron una *joint resolution* felicitando á España por la proclamación de la República y encargando al Presidente, que lo era el general Grant, que transmitiera esta resolución al Gobierno de Madrid.

Mr. Sickles dió conocimiento de este acuerdo parlamentario en Nota oficial de 20 de Abril de 1873.

En Octubre de 1873 presentó sus credenciales el señor don Carlos Gutierrez, reconociendo á la República española en nombre de los Gobiernos de Guatemala y Costa Rica.

Pero hay que decir algo más que no se halla consignado en los documentos relativos al reconocimiento de la República del 73 y que no resulta de la mera referencia á la abstención y reserva de los gobiernos europeos.

En tal sentido conviene que se conozca la contestación que el señor don José de Carvajal, Ministro de Estado en España, se vió en el caso de dar al representante oficioso de Francia á fines de 1873 y que explica bien la tirantez de relaciones de nuestro Gobierno *aun con* el de la República vecina y hermana, cuya sin razón no necesito demostrar. Es un documento curioso que se ha publicado en Madrid muy recientemente. Hélo aquí:

«Muy señor mío:

He recibido la nota que con fecha de ayer ha tenido usted la bondad de dirigirme en queja de las apreciaciones que el estado actual de los asuntos políticos en Francia ha sugerido á la prensa de Madrid que recibe, por lo que usted se figura, inspiraciones del Gobierno y especialmente de la Presidencia. Con este motivo establece usted hechos y entra en reflexiones que no puedo dignamente aceptar, sobre todo después de haber usted afirmado en dicho documento, que los presenta á mi consideración, habiendo antes apurado su paciencia y sus sentimientos conciliatorios.

Si usted hubiera formulado pura y simplemente su queja, bastaría recordarle por respuesta la libertad que disfruta la prensa en nuestro país, aun después de recientes y transitorias modificaciones introducidas en la legislación; pero como usted funda á manera de principio, que existe una prensa oficial, inspirada por el Poder Ejecutivo; como habla de ataques constantes y violentos por parte de la misma hacia la nación que usted representa; complica estos hechos con el lenguaje oficial del Gobierno, las comunicaciones de nuestro embajador en París y la sinceridad de las declaraciones del jefe del Estado; como, por último, llega su condescendencia hasta el punto de aconsejar cuál debiera ser la preocupación legítima de la prensa que supone oficiosa, no puedo menos de hacerme someramente cargo de estas diferentes cuestiones en el terreno que usted me las presenta.

No existe prensa semioficial, ni los periódicos republicanos que se publican en Madrid, reciben directa ó indirectamente las inspiraciones del Poder Ejecutivo; se encuentran en el mismo caso que los de otro color político. No recuerdo que la nación vecina haya sido juzgada por la prensa española, y mucho menos por la republicana, peor que lo ha sido y lo es constantemente nuestro propio Gobierno; y fácil será á usted comprender que éste no tiene dentro de las leyes medios de reprimir las apreciaciones que, tanto respecto de su conducta como de la de otros gobiernos europeos, hagan los periódicos españoles. Es muy sensible que usted, partiendo de aquella suposición, ligue los actos de la prensa con el lenguaje oficial del Gobierno, porque siendo usted el representante político de la nación vecina, sólo debe hacer responsable á este ministerio de sus propios actos y manifestaciones; y es todavía más sensible que confunda usted en una misma nota las quejas que el lenguaje de nuestros diarios políticos le sugieren con la correspondencia de nuestro representante en París, Sr. Abarzuza, y con la sinceridad, que nadie tiene derecho á poner en duda, de las declaraciones del presidente del Poder Ejecutivo.

Pero todavía es más penoso que ocurran á usted estas observaciones y estas analogías, por el simple hecho de que en un periódico se haya estampado la frase de que *todavía hay salvación para la Francia*, inocente y sencillísima manifestación que no ha debido despertar la susceptibilidad de usted. Si el Gobierno tuviera prensa á su devoción, sabría

la la dirección que considerase conveniente la Patria; pero al menos, como expresión de la voluntad que anima á usted, no desconoce el deber.

En la reticencia principal de su nota, relativo al gobierno es el efecto de sentir en su particular atrastan con las seguridades oficiales que me reservo hacer presente á su excelentísimo de Negocios Extranjeros las observaciones acerca del derecho que usted pueda hacer una declaración; y aun antes de que usted oficializara y lo reconociera como facultad de libre arbitrio estábamos de hacer ó no votos en favor definitiva en Francia del régimen republi-

El honor de manifestar á usted, para su conocimiento oportuno, ofreciéndole siempre mi más distinguida.

Noviembre de 1879.—El Ministro de Ultramar.

Respecto á las relaciones de España con los Estados Unidos.

En el Gobierno de los Estados de Norte se lamenta de la conducta de los Gobiernos de España en no reconocer á la República española. La cuestión cubana tenía que ser una gran cuestión íntima y deseables relaciones de España con los Estados Unidos. Momentos hubo en que fué inminente la ruptura de las representaciones oficiales de entrambos trances, el Gobierno de la República es de un tacto y una energía excepcionales. No ha sido desconocido en el transcurso de los años entre otros motivos porque no ha habido una declaración. Pero en los días presentes, desgracias de los Presidentes americanos Olney y de Kinley, de las notas de Mr. Olney y de

los debates del Congreso de Washington, y de las actitudes y resoluciones del Gobierno conservador de España respecto de cuestiones de tanta resonancia como la persecución del *Alliance*, el proceso del *Competitor*, el indulto de Sanguily, las investigaciones sobre la muerte del dentista Ruiz, los socorros á los americanos indigentes de Cuba, y otros particulares por el estilo, paréceme, repito, que no habrá hombre medianamente imparcial que no ponga por cima de todo lo hecho por los monárquicos (que dicho sea de paso, en 1861, abandonaron á Santo Domingo, en 1819 vendieron la Florida, en 1823 franquearon, en la Península, el camino á los Cien mil hijos de San Luis y en 1836 solicitaron y aprovecharon la Cuádruple alianza) la disposición viril y los procedimientos afortunados de los hombres de 1873 en sus relaciones con los Estados Unidos.

Cuéntese que no emito parecer sobre la bondad ó el error de la conducta del Ministerio presidido por el Sr. Cánovas del Castillo. Ese es otro problema, por cierto muy delicado y complejo. Me limito á afirmar que, bajo todos respectos, lo que hizo y lo que consiguió el Gobierno de 1873 fué mejor.

Debo recordar que el período álgido de la primera insurrección de Cuba fué el de los años 73, 74 y 75. A mediados de 1872 (el 14 de Mayo) el general Balmaseda firmó un decreto de indulto, llamado del Cauto Embarcadero: indulto del que fueron exceptuados Céspedes, los individuos de la Cámara insurrecta y varios cabecillas. Por diversos motivos este decreto no produjo efecto. Además las huestes de los revolucionarios se nutrieron con numerosos expedicionarios de los Estados Unidos, Venezuela y las vecinas Antillas. Balmaseda dimitió y le sucedió como Capitán general y Go-

bernados superior de Cuba el general Ceballos, el cual, falto de recursos militares ante la creciente pujanza de la rebelión, determinó reducirse á la defensiva en las jurisdicciones de Holguín y Bayamo en el Oriente de Cuba y tomar la ofensiva, con cierto vigor, en el departamento central y en la jurisdicción de Santiago. Al general Ceballos sucedió el general Pieltain, que no tuvo grandes éxitos militares, pero que mantuvo bien el orden en la Habana. Los insurrectos se concentraron y organizaron en gruesas partidas de tres y cuatro mil infantes y ochocientos á mil jinetes, con armas y medios regulares de guerra, constituyendo campamentos y aprestándose á romper la famosa trocha de Júcaro á Morón para invadir el Centro y Oeste de la Isla. El verano de 1873 fué fatal para las armas españolas. En estos momentos el general Jovellar fué á Cuba, sustituyéndole, en 1874, el general Concha. En este año los insurrectos entraron en Sancti Spiritus é invadieron la jurisdicción de Trinidad. El 6 de Enero de 1875, Máximo Gómez pasó la trocha y á fines de aquel año la insurrección era, como nunca, imponente.

Por manera que si bien la guerra cubana logró después de la República mayor importancia que la conseguida hasta entonces, el año 73 fué de muchas mayores dificultades que los anteriores, aun sin considerar más que la actitud y los recursos de los insurrectos, prescindiendo de los obstáculos que para combatir pronto y eficazmente á éstos resultaban de la crisis política de la Metrópoli, de las conspiraciones de los alfonsinos, de los alzamientos de los carlistas y cantonalistas y de la influencia que el cambio de instituciones en la Península tenía que ejercer y realmente ejerció en la Habana, donde comenzaron á publicarse algunos periódicos republi-

canos y señalarse algunas diferencias contenidas discreta y políticamente por el general Pieltain.

Esto sentado, hay que volver la vista al pueblo de los Estados Unidos.

Sería pueril negar las simpatías que todas las revoluciones de Cuba han logrado y tienen que conseguir en Norte América. No más respetable me parece el discutir la fuerza de esas simpatías. Las determinan muy diversas causas, todas potísimas. Bastarían la vecindad de los Estados Unidos y de Cuba, la circunstancia de pertenecer los unos y la otra al Continente Americano, y el hecho de que la independencia y personalidad de la República norteamericana arrancan de una revolución de trece colonias contra una Metrópoli europea. Después de esto hay otros motivos de carácter eminentemente político, pero que á mi juicio no tienen la importancia de los primeros, los cuales llegan á lo íntimo del pueblo americano y le predisponen de un modo perfectamente distinto á cuanto pudiera pensar, sentir y hacer el Gobierno de Washington, obligado á respetos, temperamentos y maneras, impuestos por las prácticas y las reglas convenidas del Derecho internacional.

No se me pueden ocultar los motivos y el fin de los políticos norteamericanos que en 1854 patrocinaban las tendencias anexionistas de López y Pintó ni la causa de las negociaciones que entonces se intentaron para la compra de Cuba, después de las Conferencias de Ostende. Ni puedo ignorar lo que desde 1869 á 1874 se hizo por los insurrectos cubanos para recabar el apoyo del Gobierno de Washington, constantemente resistente y aun opuesto (por razones que comprende muy bien) á las gestiones de nuestros separatistas. Del mismo modo creo no equivocarme al

apreciar lo que ahora pasa en el Congreso de los Estados Unidos, la razón de la actitud del Gobierno de la República, y los motivos de las aparentes vacilaciones de éste al lado de la agitación que se llegó á producir en aquel país, sobre todo hace seis ú ocho meses, en favor de la insurrección cubana.

De paso diré que pertenezco al grupo de los que dudan que los directores de la República norteamericana *ahora* verdaderamente deseen (como no desearon en 1870) la independencia de Cuba, y que ni por esta independencia ni por la *inmediata* anexión de la grande Antilla á la Gran República, el Gobierno de Washington y los hombres políticos de los Estados Unidos, estén dispuestos á una guerra con España.

Llego al punto de pensar que, hoy por hoy, lo que más convendría á Norte América y lo que realmente preocupa á aquellos estadistas, es que continúe la bandera de España en el Morro de la Habana, pero mediante: 1.º un amplio régimen liberal y autonomista cuyo florecimiento haga difícilísima la agitación de los simpatizadores del separatismo que producen no pocas dificultades en el curso de la actual política americana, y 2.º una extensa y radical reforma arancelaria que permita tanto la explotación del mercado antillano por el comercio de los Estados Unidos como la fortificación del Tesoro de este último país con los grandes ingresos provenientes de la entrada de nuestros productos coloniales por las aduanas de Norte América.

Todo esto no quita la menor fuerza á las contingencias del porvenir ni á la gravedad de los, muy meditados procedimientos del Gobierno americano en estos últimos meses.

Ahora me basta consignar esto, sin profundizar el problema y sin explicar tampoco cómo y por qué entiendo que

el Gobierno de Washington no cambiará de conducta —para nosotros muy molesta y á las veces intolerable—mientras no se haga la reforma política y arancelaria en nuestras Antillas ú otros Gobiernos no tomen una actitud más definida respecto del problema cubano, invocando para ello antecedentes de la historia internacional moderna, bien ó mal interpretados ó aplicados, pero que quizá se recuerdan en estos momentos en las Cancillerías de algunas potencias europeas.

Todo eso es de importancia; mas por cima de todo están las causas generales que primero he señalado, y de las que es imposible que prescinda ningún estadista español, porque se trata de realidades y de datos inexcusables de nuestra doble política colonial é internacional. El mundo no se gobierna con gritos ni supuestos canderosos ni sonoras palabras ni meros deseos.

Es notorio que el Gobierno americano, desde 1869 á 1878 hizo algo más que producirse de un modo correctísimo con España, correspondiendo delicadamente á la actitud que ésta habría observado, desde 1861 á 1864, durante la guerra separatista de los Estados Unidos, en cuyo período el Gobierno de Madrid, disintiendo de los de París y de Londres, se negó á reconocer á los Estados rebeldes del Sur, presididos por Jefferson Davis, y defendidos por Lee. Los hombres de Washington se mostraron francamente hostiles á los insurrectos cubanos del movimiento de Yara. Buena prueba de ello, los célebres Mensajes de Grant de 6 de Diciembre de 1869, y 13 de Junio de 1870 y Agosto de 1875, contrarios al reconocimiento de beligerancia en favor de aquellos insurrectos.

Pero con todo esto, en medio de la guerra, llegó un ins-

tante en que casi se dió por positivo un cambio de posiciones por efecto de un incidente por todo extremo lamentable: el apresamiento que en 30 de Octubre de 1874, fuera de las aguas españolas, hizo el vapor de guerra español *Tornado*, del barco americano el *Virginus*, á bordo del cual iba un grupo de cubanos insurrectos, procedente de los Estados Unidos, con el evidente propósito de desembarcar en la Grande Antilla. Fueron sometidos los insurrectos apresados á un consejo de guerra que decretó el fusilamiento de muchos de ellos y los tribunales españoles declararon buena presa el *Virginus*, por haberse demostrado que este barco izaba á su antojo todas las banderas y sólo en el acto del apresamiento enarboló la americana.

Con tal motivo el Gabinete de Washington, empujado por la opinión pública de la gran República, hizo, por medio de su representante en Madrid Mr. Sicles, una calurosa protesta y reclamaciones muy vivas, que determinaron al Gobierno español á escribir frases de tanta energía como las siguientes:

Señor Ministro:

«Acabo de recibir la nota de V. E., fecha de hoy, protestando en el ejercicio de su cargo á nombre del Gobierno de los Estados Unidos, y tomando por movimiento propio la voz de la humanidad, cuya representación no le compete exclusivamente, con motivo de las ejecuciones que se han verificado en Santiago de Cuba en los días 7 y 8 de este mes:

Presentada la protesta en términos generales y sin relación á agravio alguno inferido á la Unión Americana, no puede el Gobierno de la República Española reconocer en V. E. personalidad para ello, como no la hubiera tenido España respecto de hechos sangrientos ocurridos en nuestros días, lo mismo en los Estados Unidos que en otras naciones del Viejo y Nuevo Continente. Rechazada ya la protesta con serena energía, tengo que fijar mi atención en la du-

mas de estilo y en las palabras acaloradas é impropias con que V. S. califica la conducta de las autoridades españolas. Si el documento suscrito por V. E. carece de solemnidad que pudiera prestarle el derecho á dirigírmelo, cuando menos debiera la templanza de sus formas haber demostrado que no le dictaba la pasión.

Toearía muy á la ligera esta materia, si hubiera de enidarme sólo de la eficacia de la ofensa; pero, apreciándola en su intención, no puede el Gobierno consentir que, anticipándose á su propio juicio, el representante de una nación extranjera, si bien amiga, califique á las autoridades españolas de otro modo que como el Gobierno mismo lo considere justo; inmistión siempre inadmisible, pero tanto más extraña cuanto que ni el Gabinete de Washington, ni éste de Madrid, ni V. E. tienen á la hora presente datos bastantes á fundamentar una queja, ya sea sobre el apresamiento del *Kingpinus*, ya sobre los hechos posteriores.

No debo siquiera repetir aquí esos calificativos que alterarían la medida de mi comunicación; pero note V. E. que sin conocimiento de esos hechos hubiera sido siempre aventurado juzgar de las autoridades, y que entre tanto se alcanzaba, convenia á la elevación del carácter que V. S. ha adquirido, considerar que ellas eran guardadoras y representantes de la ley, al paso que los fusilados eran rebeldes que venian á conculcarla, enemigos de la patria, perturbadores de la paz y del imperio de una República hermana.

A despecho de cualquier apariencia, ha debido, por lo tanto, V. E. suspender su opinión, como la ha suspendido el Gobierno de España: que no quiere exponerse á la tacha de atropellado y ligero, en puntos tan delicados y complejos. En esta actitud seguirá hasta lograr plena certidumbre, y puede V. E. estar seguro de que no alterará su espíritu linaje alguno de presión, ni le apasionará la nota de V. E. al extremo de olvidar que se debe á un tiempo á la dignidad de su país y al respeto de las leyes, que están por cima de la conveniencia y de las susceptibilidades nacionales.

Termina V. E. declarando, también por orden de su Gobierno, que pedirá amplia reparación de cualquier ofensa inferida á los ciudadanos norteamericanos ó á su pabellón.

Sensible es que V. E. no haya sostenido, bajo este punto de vista, de problemática realidad, la actitud adoptada en las manifestaciones verbales á que V. E. hace determinada referencia. Fiada estaba á la espontaneidad y á los sen-

del Gobierno español, la solución que esta contingencia que V. E. prematuros provision, trae ahora al terreno ofi- huiré seguir sosteniendo que el Gobierno á resuelto á que se cumpla la ley, le río español que en nuestras relaciones que no ha de tolerar el menoscabo de

honor de comunicar á V. E., cuya vida los años.—Madrid 14 de Noviembre Jarvaja.

esto terminó satisfactoriamente. Las ne- áticas concluyeron el 25 de Noviembre. ol sostuvo que el *Virginius* era una cuanto no estaba bajo el amparo de la y había sido capturado en aguas libres. ano afirmó que el barco era de su país ón del saludo. Pero en tanto los tribu- e Unidos declararon, de buena fe, que la derecho á izar la bandera americana. o—y ésto sucedió hacia el 20 de Di- a cuestión resultaba facilísima.

después el Gobierno republicano caía por tropas del general Pavía hicieron posesio de las Cortes de Madrid y expulsan- tados constituyentes. Es decir, realizan- s grave que el desembarco del general miento de los carlistas en San Carlos de 50, cuando España estaba comprometida rica.

ocurrido después de 1873 respecto del el vivísimo deseo de la Restauración de ntes las buenas relaciones con los Esta-

dos Unidos, no arguye mucho en favor de la supuesta energía y el superior tacto de los ministros de aquella época.

Porque el concierto del ministro español Sr. Polo de Bernabé con el ministro americano Mr. Fish, de 29 de Noviembre de 1873, estableció que España devolviese á los Estados Unidos el *Virginius* y la tripulación y los pasajeros que estuvieran vivos, que saludaría á la bandera americana y que otorgaría una indemnización, solo en el caso de que se demostrase que el *Virginius* tenía derecho á enarbolar la referida bandera. Los tribunales americanos declararon luego que no existía ese derecho y el Consejo de Estado de España, bien que con deplorable retraso, dictaminó lo propio en 1876. Y sin embargo, España pagó, á principios de 1876, para socorro de las víctimas de la captura del *Virginius*, 80 mil pesos. Y renunció además á insistir en la reclamación que nuestro ministro en Washington presentó al Gobierno americano en 30 de Diciembre de 1873, pidiendo á este indemnización por las piraterías del *Virginius*.

No mucho después, el Gobierno de la Restauración y el de los Estados Unidos de América suscribían el protocolo de 12 de Enero de 1877, en vista del tratado de 1795. Bueno ó malo en su alcance, aquel concierto es un ataque á la soberanía y el prestigio de España en las Antillas.

IX

Con las indicaciones hechas podría terminar este trabajo, dedicado principalmente á precisar la política que hicieron los republicanos de 1873 respecto de Ultramar y señaladamente respecto de nuestras Antillas. Pero ya prometí decir algo sobre lo que los republicanos españoles han hecho después en obsequio de las libertades coloniales, para abonar más y más mi primera indicación relativa al derecho que los partidarios de la República tienen para considerarse (dentro del círculo de nuestros actuales políticos), como los más acentuados propagandistas de la nueva reforma colonial y para sostener que á los republicanos antes que á otros algunos, les corresponde en buena lógica la misión de plantear las reformas expansivas y especialmente la autonomía colonial en condiciones de prestigio, sinceridad y éxito.

Insisto en no discutir lo que los demás partidos y las demás situaciones políticas hicieron. Esto no obsta para que advierta que el famoso golpe de Estado del 3 de Enero de 1874, que dió al traste con la situación republicana creada el 11 de Febrero de 1873, repercutió en Ultramar, desha-

ciendo la mayor parte de lo que se había conseguido en los dos años inmediatamente anteriores.

Por el derecho de la fuerza quedaron anuladas las franquicias municipales y provinciales en Puerto Rico. Allí se prescindió totalmente de la Constitución de 1869. Se restableció la previa censura para la imprenta. Los concejales y diputados provinciales fueron nombrados por el Gobernador que puso la vida local á merced de los alcaldes de su libérrimo nombramiento, con sueldo fijo y extraños hasta á la vecindad del pueblo que administraban. Persecuciones de modo implacable á los maestros de primera enseñanza, la cual quedó realmente desbaratada. Tuvieron que emigrar algunos de los más caracterizados reformistas. De hecho se restauró el decreto de las *encomiendas* de 1823 y los partidos políticos se deshicieron, dispersándose sus individuos. La reacción triunfó de un modo completo. Solo quedó en pie la abolición de la esclavitud, sin que faltaran conservadores preocupados con la idea de desvirtuar esta gran reforma por medio de la llamada *organización* del trabajo y del régimen de las *hórretas* de trabajadores, de los contratos obligatorios y de la clasificación de la vagancia (más ó menos efectiva) entre los delitos sancionados por el Código.

Nada de esto puede extrañar á los que conozcan la historia colonial y se den mediana cuenta de la íntima relación que hay entre la política de las Metrópolis y la política de las Colonias. De ella prescinden así los que en las primeras creen que la política colonial es una excepción sin transcendencia en la vida total de la Nación, como los que en las Colonias opinan que se puede prescindir de la política general ó nacional, esperando la libertad de los que las combaten más ó menos en la Madre Patria.

Napoleón I. no se detuvo en la anulación de ciertas libertades coloniales consagradas por la Revolución francesa. Se atrevió á revocar los decretos de abolición de la esclavitud. De aquí la insurrección de los negros, que la vulgaridad y la mala fe atribuyen á la abolición. No se puede imaginar mayor falsedad. Por otra parte, son de sobra conocidas los manejos de los esclavistas franceses, después de la abolición de 1848, para desvirtuar los decretos emancipadores con los reglamentos sobre la trata china y los *coolies* y los contratos forzosos de los libertos. Algo de esto se ideó en Puerto Rico en 1874 y 75. Pero afortunadamente no prosperó por la resistencia de todo el país.

En cambio prosperaron los mayores disparates respecto del peligro que entrañaba la difusión de la enseñanza pública. Los conservadores extremaron su oposición á la creación del Instituto de segunda enseñanza y á la fundación de la Universidad portorriqueña. Estos esfuerzos al principio lograron un éxito completo. Los amparaba la invocación de la integridad de la Patria. También en la Península, los absolutistas habían conseguido, en la época del terror blanco, cerrar Institutos y Universidades, protestando *contra la fatal manía de pensar* y creando en vez de centros educativos escuelas oficiales de tauromaquia.

Estos esfuerzos á la peste resultaron estériles. La enseñanza primaria se reorganizó en 1880. El Instituto se creó en 1882 y fundado poco después el Ateneo portorriqueño, éste fué autorizado para la preparación y estudio de las carreras de Derecho y de Letras. ¡Pero cuántos años pasaron y cuántos esfuerzos no fueron necesarios dentro del período de la Restauración borbónica y en plena paz!

Como antes se ha dicho, la Restauración en 1878 reguló

la vida municipal y provincial y el gobierno general de la isla de Puerto Rico con un sentido aceptadamente centralizador y un espíritu de ofensiva desconfianza.

Restaurado D. Alfonso XII á fines de 1874, fué vetada la Constitución del 76, cuyo artículo 89 dice «que las provincias de Ultramar han de ser gobernadas por *leyes especiales*, pero que el Gobierno quedaba autorizado para aplicar á las mismas, con las modificaciones que juzgara convenientes y dando cuenta á las Cortes, las leyes promulgadas ó que se promulgaran en la Península.» Además Cuba y Puerto Rico serían representadas en las Cortes del Reino en la forma que determinase una ley especial, que podría ser diversa para cada una de estas provincias. Por último, el Gobierno determinaría cuándo y en qué forma serían elegidos los representantes á Cortes de la Isla de Cuba.

Por efecto de este artículo se hizo el título 8 de la Ley electoral de 28 de Diciembre de 1878, por la cual se establecía: 1.º que solo tendrían derecho á elegir diputados á Cortes en las Antillas los españoles que pagaran 125 pesetas anuales por impuesto territorial ó urbano ó por subsidio industrial ó de comercio; 2.º que no podrían ser admitidos como diputados los que habiéndose hallado sujetos á servidumbre en la Isla de Cuba no llevasen por lo menos diez años de ser libertos y exentos de patronato, y 3.º que no podrían ser electores en Cuba los que habiendo estado sujetos á servidumbre no llevasen por lo menos tres años de ser libertos y exentos de patronato.

Antes he hablado del decreto de 1878 respecto de la organización municipal y provincial de Puerto Rico; decreto exageradamente centralizador y de acentuadísimo espíritu de desconfianza que primero se dió para la pequeña Antilla y;

el 7 de Julio del 78) se extendió á Cuba. El tal decreto era de *ley provisional* y con su motivo oficial: "que seguiría hasta que entrasen los representantes en el Parlamento y con su concurso se hiciera definitiva. ¡Vanas frases y ociosas promesas! La ley provisional ha durado dieciocho años, y yo mismo fui del Gobierno liberal de 1882 que aceptó la ley provincial peninsular que entonces se le sometió al Congreso, para llevarla, con modificaciones, á

la no podía vivir maniatada por la ley anterior. La ley extendida á las Antillas con muchas alteraciones centralizadoras y verdaderamente insoportables. En 1882 se me aseguró que estaba próxima la ley provincial de Cuba y Puerto Rico. Y no se cesaba de repetir que estas Islas disfrutaban de las libertades que las demás provincias de España.

En 1878 es el decreto que fija las atribuciones de los gobernadores generales de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En el art. 3.º se hace referencia á las facultades de los gobernadores del antiguo régimen, ó sea á los poderes de los gobernadores de las Leyes Indias, sin sancionar la saludable limitación que se introdujo en las resoluciones de los gobernadores y de las Audiencias ultramarinas. La Reacción, sin embargo, no sólo no atenuó, sino que desarrolló de un modo formidable. Luego vino la ley de 1879 con sus atenuaciones.

La ley de 1879 se aplicó á Cuba y Puerto Rico y á las Antillas. La ley de la Península de 1879 con algunas modificaciones referentes á los esclavos y á los patrociniados. En la misma época se llevó á las Antillas la ley de 1879 de la Metrópoli y se organizó la Adminis-

tración de justicia, sustrayéndola un poco á la arbitrariedad ministerial. En 1880 se promulgó la Ley relativa al derecho de reunión y en 18 de Febrero del mismo año 1880 se proclamó la abolición de la esclavitud, si bien sancionando el patronato, fórmula hipócrita de la antigua servidumbre. A principios del año 84 se estableció en las Antillas el registro y el matrimonio civil. En 1886 el Código de Comercio. En la misma época fué abolido el patronato. Y en 1881, después de una formidable batalla parlamentaria, se declaró vigente en las Antillas (bien que con reservas), la Constitución de 1876.

Pero lo más relevante y meritorio de todo este periodo es la pacificación de Cuba por efecto del célebre Convenio del Zanjón que lleva la fecha del 10 de Enero de 1878.

Ya he dicho que la insurrección cubana tomó cuerpo el año 73 y que desde el 74 al 76 logró un desarrollo extraordinario aprovechando mil circunstancias, entre las cuales hay que poner la creciente simpatía de casi todos los pueblos de América y entre estos especialmente los Estados Unidos del Norte, Venezuela y el Perú. Las simpatías de los dos primeros pueblos que acabo de citar se tradujeron en apoyo oficioso y en expediciones de revolucionarios que desembarcaron con bastante facilidad en la grande Antilla. En el Perú se llegó á más, porque el Gobierno de aquella República no titubeó en reconocer la beligerancia de los insurrectos cubanos. También he dicho que en 1877 Máximo Gómez rebasó la trocha de Moron á Júcaro y que la guerra se extendió al territorio de las Villas. Pero á poco de haber logrado la insurrección este desarrollo extraordinario, apesar de los dos envíos de 18 mil y 20 mil hombres que por aquel entonces hizo el Gobierno español á instancias del go-

tal Concha, que al principio había creído que no necesitaba fuerzas militares, á poco, repito, de haber logrado aquel mismo vuelo, se determinaron grandes divisiones entre losurrectos, divisiones que produjeron la destitución del Presidente Céspedes y los reemplazos sucesivos de los generales Maceo y García. En este momento se inició en Cuba, tanto la política como en la campaña militar, una rectificación completa de las ideas y de los procedimientos que habían predominado antes, patrocinados por los Generales Caballero Rodas y Balmaseda. Esta trascendental rectificación está representada por el General Martínez Campos, cuyo mérito excusa todo género de comentarios.

La teoría de la guerra por la guerra vino al suelo. Entroncense los procedimientos políticos. La guerra de Cuba se considerada como una guerra civil. La generosidad y confianza en los medios morales se impuso allí donde habían el mayor prestigio y la mayor responsabilidad. Y el resultado fué el de siempre: un verdadero triunfo. El Convenio del Zanjón. No me explicaría cómo esto se olvida en los momentos por el Gobierno y por algunos periódicos de Madrid, sino estuviese al tanto de que aquí nadie se acuerda lo que pasó en Méjico, en el Sur de América y en las Cortes españolas de 1820 á 1823. Sin embargo, la lección de aquella época es elocuentísima.

Después de las alegrías del momento se ha criticado mucho el Convenio referido. No ha faltado quien le llame la hoja de parra de la insurrección separatista. Me reservo los datos para afirmar que quienes han dicho esto desconocían positivamente el estado efectivo de la insurrección de Cuba y la disposición de toda América en aquella época. No niego las divisiones de losurrectos y la deca-

dencia de su causa á fines de 1877; pero también conozco bastante la historia de Méjico desde 1818 al 23 y los compromisos de la mayoría de los Gobiernos americanos en 1878, así como el estado financiero y militar de nuestra Patria entonces y los medios suficientes que integristas y revolucionarios tenían para haber realizado por completo la destrucción de la Isla. Esto último no será inverosímil para los que sepan que Santo Domingo á fines del siglo pasado fué más rica y esplendorosa que Cuba, y sin embargo ahora no es más que una ruina. Por tanto me pongo en el grupo de los que estiman que el señor Martínez Campos mereció bien de la Patria y realizó una obra extraordinaria al preparar y suscribir el Convenio del Zanjón, que puso término á una lucha que costó, sólo á la Metrópoli española, según dicho del señor general Jovellar, más de 140 mil hombres y 700 millones de duros (1).

Y entiéndase que aplaudo la conducta del citado General, no sólo por el convenio mismo, sino por la humanización de la guerra y por el valor y la honradez con que explicó al Gobierno, para que lo supiese la nación entera, las causas de la rebelión separatista cubana y el sentido de la política que era preciso realizar para que concluyese la guerra y el separatismo dejara de ser un verdadero peligro.

Bajo este punto de vista conviene mucho vulgarizar lo que el citado General decía por aquel tiempo al Gobierno.

En una de sus comunicaciones de fecha anterior al convenio de 10 de Febrero del 78, decía lo siguiente:

«No hay que hacerse ilusiones, el peligro existe en la parte pacificada. Podrá no venir, pero amenaza. Se creía antes

(1) He tratado con insistencia de conocer el total de pérdidas de Cuba y la Península. El Gobierno lo ignora. Así vamos á ciegas.

que el carácter de estos habitantes no era propio para la guerra. Tanto el blanco como el negro nos han demostrado lo contrario. Las promesas nunca cumplidas, los abusos de todos géneros, el no haber dedicado nada al ramo de Fomento, la exclusión de los naturales de todos los ramos de la Administración, y otras porción de faltas dieron origen á la insurrección. El creer los Gobiernos que aquí no había más medio que el terror, y ser cuestión de dignidad no plantear las reformas hasta que no sonase un tiro, la han continuado. Por ese camino nunca hubiésemos concluido, aunque se enaje la isla de soldados. Es necesario, si no queremos arruinar á España, entrar francamente en el terreno de las libertades. Yo creo que si Cuba es poco para independiente es más que lo bastante para provincia española y que no venga esa serie de malos empleados, todos de la Península: que se dé participación á los hijos del país, que los destinos sean estables. Si se cree que esto es ponerles la situación en las manos, yo opino que peor son sus enemistades encubiertas y que no necesitaron el 68 tener cargos públicos para sublevarse. Hoy son aguerridos, y si entre ellos no hay grandes generales, hay, lo que necesitan, notables guerrilleros.»

Pero debemos hablar con perfecta sinceridad. Los convencionalismos, los equívocos y hasta las falsedades que corren ordinariamente en la Península y quizá han corrido siempre, respecto de la política ultramarina, nos perjudican lo indecible. Pocos son los que saben cómo y por qué vino Colón desde Santo Domingo cargado de cadenas y abrumado de calumnias por sus enemigos los explotadores de la nueva Colonia. Nadie se cuida de explicar cómo se resistieron en el continente americano las Leyes nuevas de Carlos V y por qué Vasco Núñez de Balboa murió á manos de Pedrarias en Centro América. No es tema de nuestros políticos ni de nuestros historiadores la sublevación de los Pizarro y el terrible conflicto que dominó el viril D. Pedro de Lagasca en el Perú. Nadie se cuida de desentrañar el proceso del Conde de Revillagigedo, uno de los tres grandes vi-

reyes de México. Se ha tachado de iluso al inmortal padre Las Casas y se ha estimado como acto patriótico el prescindir de las Notas secretas de Ulloa y Jorge Juan. Con esto y con decir que los extranjeros nos tienen envidia y procuran nuestro descrédito, se ha comprometido y aun compromete á esta noble y viril España, á una política absurda y en una campaña verdaderamente imposible.

Porque las cosas no dejan de ser porque nosotros las neguemos. Los problemas coloniales están hoy á la vista de todo el mundo culto y de todos los Gobiernos que publican los informes de sus cónsules y en momentos dados pretenden intervenir en esos mismos problemas en nombre y por virtud de los últimos adelantos del Derecho internacional, invocando, *oportune et importune*, la instauración del régimen constitucional en el continente europeo, la emancipación de Grecia, la unidad de Italia y la transformación de los principados danubianos por la cooperación y el concierto de las grandes naciones del mundo contemporáneo. Será esto bueno ó será malo: no lo discuto. Pero es un hecho. Y se falta á todas las conveniencias sociales y á todos los deberes del patriotismo ocultándolo al pueblo español. Es decir, á un pueblo que realmente no tiene el menor interés en una política abusiva en América.

Por estos motivos, y algunos otros que creo ocioso detallar, debe decir francamente que la Restauración no procedió con la sinceridad y la energía convenientes inmediatamente después de la Paz del Zanjón.

Antes de ahora he dicho de qué suerte quedó sorteado el cumplimiento del art. 1.º de aquel Convenio que se firmó en 10 de Febrero de 1878; es decir, cuando en el orden del derecho positivo regían en Puerto Rico las leyes y los regla-

República. Lejos de mantenerse
Revolución, en 14 de Mayo y 21
res ó cuatro meses después del
s decretos reaccionarios sobre el
y las diputaciones provinciales de
le Diciembre del 78 (es decir, diez
al Zanjón) se dictó la ley electoral
iversal en Puerto Rico,
meral Martínez Campos al señor
usa el menor razonamiento. Dice.

que ustedes y deploro ciertas li-
 exige. La fuerza no constituye
 a justicia se abren paso, tarde ó
 an ustedes los artículos de la ca-
 poner cortapisas, entendiendo que
 hasta la renovación de las Cortes.
 alguna dificultad que impida ir
 rtes, ciérranse éstas. Yo, particu-
 a le indique la conveniencia de
 uvieran ahí ya para arreglar la
 cuestión tan pavorosa que sin ella
 guerra, en la que yo no quiero en-
 incompetente, pero que la religión
 No creo que se resuelva en un día,
 Ley Moret sea suficiente. Es tan
 si aun indicarla, pero me ha cos-
 e terreno: en las conferencias que
 he visto usted que ni se habla de

a mayor de las debilidades que he
 me he atrevido á tocarla por que
 les, por que afecta al modo de ser
 no se toca por el Gobierno, las na-
 tienen por qué mirar nuestros in-
 sidero que la iniciativa debe par-
 uzar la cuestión y que no se re-
 La abolición en un día sería la
 o poner la ley del trabajo, de

instrucción y la colonización y estudiar los medios de indemnización, ya señalando el plazo para que el trabajo durante ese tiempo indemnice al dueño ó ya fijándola con cargo al Estado. Pero este último sería ruinosísimo y como no habría de qué pagar, sería un engaño».

Por manera que la buena voluntad del partido conservador, que ocupaba el poder en 1878, para cumplimentar y desarrollar la Paz del Zanjón fué bastante discutible. Afortunadamente por cima de la voluntad de los hombres está la lógica de las cosas y de las situaciones. El convenio del Zanjón con la política en él encarnada, trascendió á la Península, probándose una vez más la influencia que las cosas de Ultramar tienen en el desenvolvimiento de la política de la Metrópoli. Cayó el Ministerio Cánovas-Romero, y fué sustituido por el que presidió el señor general Martínez Campos, inaugurándose un período de relativa expansión, que facilitó tanto el advenimiento del partido liberal á las esferas del Gobierno en 1881 como la reaparición de los elementos avanzados y republicanos en la esfera de la vida legal y de la política activa.

X

Efecto de todo esto fueron: en las Antillas, la ley abolicionista de 1881, la de reunión pacífica, la instauración del juicio oral con la ley de Enjuiciamiento criminal, la reforma de la instrucción pública, la unificación de las carreras de derecho en la Península y en Ultramar, la reducción de la contribución (que era de 10 por 100 en las fincas azucareras y abacaleras y de 16 en los demás cultivos), primero, á 5 por 100 en los cultivos generales, y á 2 en las fincas de tabaco y caña; y luego, á 2 por 100 en todos los cultivos. Todo se realizó con la cooperación ó á excitación de los diputados y senadores cubanos que en 1879 entraron en las Cortes, después de una ausencia de 43 años.

Los diputados de Puerto Rico ya habían entrado en 1869, desde esta fecha no han dejado de ser llamados cuantas veces después se ha hecho la convocatoria del Parlamento español. Así vinieron á las primeras Cortes de la Restauración y en ellas funcionaron. Es decir, vinieron los diputados conservadores, pues los electores reformistas y liberales de pequeña Antilla se retrajeron después del golpe de 3 de enero de 1873 hasta 1879.

También revistieron importancia las disposiciones de carácter económico que se dictaron en esta época. El presupuesto de gastos de Cuba era en 1868 69 de unos 25.415.945 pesos. Hasta 1856-57 los presupuestos de aquella Isla no pasaron de 15 millones. Y así y todo se saldaban con *superavit* que, desde 1849 á 1859, produjeron, para el Tesoro de la Península, 31.845.312 pesos, según puede verse en las curiosas Memorias del general D. José de la Concha y del Intendente D. Mariano Cancio Villamil. El desequilibrio y la baja de los sobrantes fueron resultado de las guerras de Méjico y Santo Domingo que pagó, no sé por qué, el Tesoro de Cuba. Mas el presupuesto que se presentó á las Cortes Constituyentes para 1869 70 subía á 26.260.597 duros.

Desde 1870 á 1878 rigieron unos mismos presupuestos; el ordinario de gastos importaba 27.452.559. A esta suma había que añadir la de 745.641 pesos del presupuesto extraordinario. Total: unos 28.200.000 pesos: número redondo. Pero el desarrollo de la guerra impuso muchos más dispendios. que se atendieron con billetes del Banco Español emitidos por orden del Gobierno de la Metrópoli, y que desde 1869 á mediados de 1871 representaron unos 17 millones de duros. En 1872 y 1874 se emitieron bonos y billetes del Tesoro; en 1875 y 76 se hicieron nuevos empréstitos, se emitieron billetes por el Banco Español de la Habana y se hipotecaron las rentas de la Isla para garantizar otras obligaciones del Tesoro; en 1878 y en 1882 se creó una deuda amortizada para liquidar los créditos del Tesoro por personal y material, varios préstamos y las emisiones que vinieron á refundirse en los billetes hipotecarios emitidos en 1886, por la suma de 124 millones de duros. Esta,

cifra luego, en 1890, se amplió con otros 55.550.000.

El total de la sección 1.^a del Presupuesto de 1870-71, ó sea la de obligaciones generales (donde se comprendió la deuda, las clases pasivas, los emigrados de América, las consignaciones al duque de Veragua, los pagos de algunos censos y pensiones y los gastos del Ministerio de Ultramar) no pasaba de 2.657.635 pesos.

Convendrá advertir que, á partir de 1874, el Gobierno se dispensó del concurso de las Cortes para los presupuestos cubanos. Invocó algunas veces el artículo 27 del decreto de Administración y contabilidad de la Hacienda de Ultramar, fecha 12 de Septiembre de 1870, y como éste no autoriza variaciones, se acordó por Real orden de 26 de Agosto de 1876 que «mientras no fuesen discutidos por las Cortes del reino los presupuestos generales de gastos é ingresos de las provincias de Ultramar, en créditos extraordinarios, serían aprobados por Real decreto acordado en Consejo de ministros, con audiencia de la sección correspondiente del Consejo de Estado».

El art. 27 del Decreto de 1870, reorganizando la Hacienda pública de las provincias de Ultramar, había establecido que si por cualquier motivo las Cortes dejasen de autorizar algún año la ley de presupuestos de Ultramar, se consideraría vigente la inmediata anterior.

Por esto el Ministerio de Ultramar, en 22 de Octubre de 1873, expidió un decreto declarando en vigor para el año económico de 1873-74 en Puerto Rico, Cuba y Filipinas, los presupuestos que habían regido en aquellos países en 1872-73. Y explicaba su resolución por el hecho «de no haberse podido elevar á ley el proyecto que el ministro del ramo había presentado á las Cortes en 11 de

Septiembre de 1872. De todos modos, los presupuestos de 1873 regirían, ínterin las Cortes no resolviesen otra cosa.

Por la Real orden de 26 de Agosto de 1876 se impuso una verdadera dictadura económica en la Grande Antilla, donde se llegó á exigir al contribuyente en 1878 nada menos que el 30 por 100 de todos los productos. En 1879 se vino al 25 por 100. Y en 1874-1876 se llegó á decretar el 10 por 100 *de capital*, si bien solo se llegó á cobrar el 1 y 1¼ por 100. En 1873 (como en 1872) solo se cobró el 10 por 100 de todas las rentas.

Explícase hasta cierto punto el olvido de las prerrogativas de las Cortes en vista del desarrollo que la insurrección cubana tomó en 1875, pero no es fácil encontrar excusa el hecho de que aquella dictadura económica alcanzase también á Puerto Rico, donde continuaba sin la menor alteración el orden político.

En 1878 el presupuesto de Cuba subió á la enormidad de 46.594.688 pesos, pagados sólo por aquella isla. En 1879 80 todavía subió más: á 56.764.688. Pero el año 80-81 ese presupuesto bajó á 44.035.350 pesos. En 1882-88 fué de 35.860.249; en 1883-84 de 34.170.880 y en 1885 86 de 31.169.653.

Además, en el presupuesto de 1880 se redujo en un 15 por 100 el derecho de exportación general de frutos de Cuba, y en 1883 volvió á hacerse otra rebaja que se repitió en 1886, 1892 y 1893, hasta quedar suprimido ese impuesto en 1893.

Por último, en 30 de Junio y 20 de Julio de 1882, se hicieron las leyes llamadas de relaciones mercantiles de las Antillas y la Península, por las cuales, en prin-

, se estableció el cabotaje, que debió ser efectivo
892 (1)

En cuanto á Puerto Rico hay que establecer que el presupuesto de gastos de 1870-71, que fijaba los gastos ordinarios de la Isla en 1.999.577 pesos, subsistió (en virtud del citado art. 27 del decreto de 12 de Septiembre de 1870) hasta 1877, en cuya fecha (13 de Agosto) y prescindiendo de representantes parlamentarios ultramarinos, se dió un decreto fijando en 3.711.914 pesos los gastos ordinarios de la Isla. Desde 1878 á 1880 ese presupuesto es de 6.98 pesos; presupuesto siempre indiscutido. A partir del año 81 intervienen activamente en la discusión los diputados autonomistas. El presupuesto de gastos de 1881 es de 615.063 pesos. El de 1885 sube á 3.834.012.

El período de la Regencia que principia en 1886 fué bastante más favorable para las libertades antillanas. La promulgación de la Constitución de 1876 hecha por decreto de Abril de 1881 y después de refida batalla entre conservadores y liberales, tuvo muchas consecuencias y su eficacia se advierte en este período, bajo la influencia del partido liberal. En 5 de Enero de 1891 se publicó la Compilación general sobre administración de justicia que resume y amplía la real cédula de 1855, y los reales decretos de 12

(1) He leído en un opúsculo publicado en 1896 por el Ministerio de Ultramar, sobre el *Estado político y administrativo de Cuba*, que esta última reforma se hizo á instancias de los diputados antillanos. Declino por lo tanto, y rectifico la noticia. Los diputados autonomistas nunca fueron tales, y en cambio señalamos las consecuencias deplorables y por todos reconocidas, de aquella medida, á cuyo buen propósito había justicia. Véase mi discurso pronunciado en la sesión del Congreso de 26 de Mayo de 1882.

de Abril de 1875, 23 de Mayo de 1873, 15 de Enero de 1884 y 22 de Mayo de 1885. La libertad de imprenta y la libertad de asociación se llevaron á las dos Antillas en 11 de Noviembre de 1886 y 12 de Junio de 1888 respectivamente. El patronato se abolió en 1886. En 31 de Julio del 89 se promulgó en las Antillas el nuevo Código civil. En 28 de Enero del 86, el Código mercantil. En 14 de Julio de 1893 la reforma de la ley hipotecaria. En 5 de Julio del 87, la validación de los estudios hechos privadamente. Luego vinieron la supresión de los derechos de exportación, la rebaja de los de carga y descarga; el tratado de comercio con los Estados Unidos de América de 1891; la fijación de la cuota contributiva en Cuba de 12 por 100 en las fincas urbanas, 2 por 100 en las rústicas y 15 por 100 en la industria y el comercio; las reformas electorales de 1892 y 94 y la reforma del gobierno y administración de las dos Antillas de 15 de Marzo de 1895, con los decretos complementarios de Diciembre de 1896.

Además el presupuesto de gastos de Cuba fué en 1886-87 de 25.959.734 pesos; en 1888-89, de 25.596.441; en 1890 91, de 25.446.810, en 1891-92, de 25.214.695; en 1892-93, de 23 074.594; de 26.037.394; en 1893-94 y en los siguientes años de 26.037.394.

Con esto hay que relacionar el Arancel de 29 de Abril de 1892 (que debió regir *provisionalmente* por espacio de seis meses) y las nuevas Ordenanzas de Aduanas; estas últimas de verdadero progreso respecto de las anteriores. Los Aranceles cubanos descansan en un impuesto constante sobre los productos extranjeros de diferente importancia según los géneros y en un impuesto transitorio del 10 al 15 por 100 sobre todas las procedencias:

En Puerto Rico el presupuesto 1886 fué de 3.898.612 pe-

cos. En 1889 es de 3.859.055. En 1892 es de 3.768 590. Y en 1894 de 3.977.500. Ya he dicho que hoy es de 4 millones.

En este trabajo de referencia á la obra de la Restauración y de la Regencia no he omitido nada que constituya un mérito para los reformistas de esta época. Ahora sinceramente he de declarar que esa obra tiene no pocas manchas, cuyo detalle me sería facilísimo. Bástame decir que la reforma electoral de 1892 consagrando la escandalosa farra de los *socios de ocasión*, dando el privilegio del voto á los empleados públicos, y manteniendo la cuota electoral de los 25 pesos, contradecía toda la tendencia de la época y provocó el retraimiento de los autonomistas y liberales sueltos de Cuba. La reforma del 94 (también hecha por el partido liberal) infirió un verdadero agravio á los habitantes de Puerto Rico, á quienes aún hoy se exige la cuota de 10 pesos como base del derecho de sufragio, mientras se pide la de cinco al contribuyente cubano. De aquí el retraimiento de los autonomistas portorriqueños que protestaron ruidosamente contra la calificación de *españoles de tercera clase* que sancionaba el decreto del Sr. Maura. Y así se dió una prueba más de la ofrecida por los cubanos en 1893, de que los habitantes de las Antillas estaban ya resueltos á no consentir que se rebajase su consideración frente á los demás ciudadanos españoles.

La ley de relaciones mercantiles de 1882 se ha barrenado por numerosos decretos del Ministerio de Ultramar y aun por artículos de leyes de presupuestos como la de 1893, de tal suerte, que ha resultado una absoluta franquicia para los productos peninsulares en las Antillas y positivas dificultades para los productos antillanos en la Península. El Arancel de 1892 se hizo para negociar sobre él con los

Estados Unidos; anulado en 1894 el convenio con esta República, subsiste el Arancel proteccionista á pesar de que hace ya cerca de cuatro años debiera, con arreglo á la ley, haberse reformado en sentido expansivo, para abarcar la vida ultramarina y hacer posible la concurrencia de nuestra producción colonial con la del extranjero.

Verdad que se promulgaron las leyes expansivas de imprenta, reunión y asociación; pero no es menos exacto que en 1890 se ha llevado á las Antillas el Código de Justicia Militar, en el cual se leen enormidades políticas y jurídicas como las consignadas en sus arts. 28 y 29 (1).

El primero de estos artículos define las atribuciones de los Capitanes Generales de distrito en la Península y señala entre ellas la aprobación de las sentencias de los Consejos de Guerra ordinario y de Oficiales Generales, cualquiera que sea la pena impuesta, *siempre que se trate de los delitos de traición, espionaje, rebelión, conjuración para la rebelión, sedición, negligencia en actos del servicio, abandono del mismo, cobardía, insulto á superiores, desobediencia y secuestro.*

El art. 29 se refiere á los Capitanes Generales de Ultramar y determina que les corresponde la aprobación de las sentencias antes citadas y *«además aquellas otras en que se trate de los delitos de robo en despoblado, siendo cualquiera el número de la cuadrilla, ó en poblado, siendo en cuadrilla de cuatro ó mas; secuestro, incendio en despoblado, amenaza de cometer los anteriores delitos, ya sea exigiendo una cantidad, ya imponiendo cualquiera otra condición*

(1) Véase mi libro *Cuestiones palpitantes de Política, Derecho y Administración en España.*

constitutiva de delito grave previsto en el Código penal ordinario y *cualesquiera otros que atenten gravemente á la seguridad de cosas y personas ó á los intereses generales de la nación y del ejército.*»

Por cima de todo esto se hallan el descrédito universal de nuestra centralizada administración ultramarina; la protección decidida, franca é incomparable que las autoridades de todo género han dado y continúan dando á los elementos y partidos conservadores antillanos contra los liberales y autonomistas; la intervención de los Alcaldes de nombramiento del gobierno en la política interior de aquellos países; los escándalos de la ya célebre lista de candidatos y diputados cuneros de Puerto Rico y las frases tan expresivas y sinceras como las del Sr. León y Castillo, Ministro de Ultramar en 1882, que reconocía en pleno Parlamento, «que en Puerto Rico se podía hacer todo impunemente», ó como las del señor Tejada de Valdosera, también Ministro de Ultramar, que candorosamente declaró que la ley electoral ultramarina se había hecho para asegurar la superioridad á los elementos conservadores.

Pero quiero prescindir de todo esto para reconocer y proclamar que en estos últimos años se han realizado progresos considerables en la vida económica y política de nuestras Antillas. Lo he dicho solemnemente varias veces, combatiendo á los intransigentes y á los pesimistas.

Téngolo por indiscutible aunque deploro que esas reformas no se hayan hecho más de prisa, más á tiempo y estimando las nuevas reclamaciones que toda positiva mejora produce y ha producido en un pueblo tan culto y tan ansioso de progreso y de justicia como el de Cuba y Puerto Rico. Para no satisfacer estas exigencias, muchos piensan

XI

Las causas son muchas. Aquí sólo voy á apreciar algunas de las de carácter puramente político. Y aun tratándose de éstas prescindiré consciente y gustosamente de aquellas que pudiera llamar generales. Es claro que en la saludable modificación del espíritu de los elementos gubernamentales de la política española, en estos últimos años, ha debido influir poderosamente, así como la demostración irrefutable, por hechos positivos, de la cultura y aptitud de nuestras Antillas para el ejercicio de los más delicados derechos políticos. Del mismo modo ha debido pesar la evidencia de que nuestros hermanos de Ultramar no se resignaban á inferioridades de ninguna especie, la lógica de la evolución política, que en la Metrópoli se realizaba con la mira de identificar (empeño ilusorio), la monarquía de los Borbones con las exigencias de la democracia contemporánea.

Lo que ahora me interesa consignar es: primero, que los avances realizados en la política colonial española, dentro

del período referido, no responden á espontaneidades de los partidos monárquicos imperantes; y segundo, que esos avances se han realizado por las excitaciones constantes y vigorosas de los partidarios de la reforma colonial, que en este último período revistió el carácter de reforma autonomista.

No es indiferente afirmar esto con la precisión con que acabo de hacerlo. Tampoco son escasos los que allá en Ultramar creen (por desconocer los lugares y las personas), que todo lo conseguido fué cosa fácil, y que, por ejemplo, el partido liberal de la Península, casi desde el primer día, por bondad de corazón ó por la lógica de los principios, se mostró decididamente favorable á llegar... á la Autonomía colonial.

¡Qué error!

Y cuéntese que de las resistencias, más ó menos positivas y duraderas del partido liberal (cuyos servicios reconozco), no saco argumento en agravio de éste. Rectifico la equivocación, perseverando en mi creencia de que *los derechos se merecen*, y que las cosas, en el orden político, no se hacen por sí solas. Aun en la vida ordinaria, los derechos hay que *pedirlos*, y para asegurarlos ante los tribunales de justicia, no basta tener razón, si no que son precisos papel sellado, procurador y abogado. Lo he repetido no sé cuántas veces.

Ahora importa decir quiénes pretendieron y consiguieron *aquí* las reformas de Ultramar.

Pues fueron: primero, los diputados y senadores autonomistas de las Antillas. Después, los republicanos de la Península.

A raíz de la paz del Zanjón se constituyeron en Cuba dos grandes partidos políticos: el *Liberal* y el de *Unión*

Por bajo aparecieron, para luego disolverse, el *Democrático*. Y fuera de todos ellos quedaban ya y disposición muy distintas los intransigentes de la colonia y los intransigentes del sepa-

del partido de *Unión Constitucional*, fué el

«Cuestión política»

ntegra á las provincias de Cuba de la Constitución, la cual distribuye y ordena los Poderes públicos, y garantiza la libertad de reunión pacífica, la de asociación para vida humana, la de petición y los demás reconoce á los españoles.

Cuba, en el sentido de *la posible y racional* as demás provincias españolas, de las leyes dictado ó se dicten para asegurar el respeto á los derechos á que se refiere el párrafo anterior á la propia Constitución, y de las orgánicas Península, así como de cuantas otras en guerra.

ales dentro del mismo criterio de asimilación, los intereses particulares de Cuba.

todo obstáculo que impida el libre ingreso público á cuantos españoles tengan aptitud cualquiera que sea el lugar de su nacimiento.

eficaz, de responsabilidad judicial, y medidas de moralidad en todos los ramos y servicios nación.

Cuestión económica

el derecho de exportación.

ancelaria en el sentido de la posible rebaja de especialmente en los artículos de primera necesidad.

de tratados entre España y las potencias particular con los Estados Unidos, mercado de nuestros frutos, sobre bases de amplia reciprocidad que favorezcan los intereses agrícolas, mercantiles y de la industria.

individuales que garantiza el título I de la Constitución á todos los españoles, á saber: Libertad de imprenta, de reunión y de asociación. Inmunidad del domicilio, del individuo, de la correspondencia y de la propiedad. Derecho de petición. — Además la libertad religiosa y la de la ciencia en la enseñanza y en el libro.

Admisión de los cubanos, al par que los demás españoles, á todos los cargos y destinos públicos, con arreglo al art. 15 de la Constitución. — Inmediata entrada en el escalafón general de los funcionarios de justicia, del ramo de instrucción pública y de las demás carreras administrativas.

Aplicación íntegra de las leyes municipal, provincial, electoral y demás orgánicas de la Península á las islas de Cuba y Puerto Rico, sin otras modificaciones que las que exijan las necesidades é intereses locales, con arreglo al espíritu de lo convenido en el Zanjón.

Cumplimiento del art. 89 de la Constitución, entendiéndose el sistema de leyes especiales que determina, en el sentido de la mayor descentralización posible dentro de la unidad nacional.

Separación é independencia de los poderes civil y militar.

Aplicación á la isla de Cuba del Código penal, de la ley de Enjuiciamiento criminal, de la ley Hipotecaria, de la del Poder judicial, del Código de Comercio novísimo y demás reformas legislativas con las modificaciones que exijan los intereses locales. — Formación de un Código penal.

Cuestión económica

Supresión del derecho de exportación sobre todos los productos de la isla.

Reforma de los aranceles de Cuba, en el sentido de que los derechos de importación sean puramente *Ascales*: desapareciendo los que existan con el carácter de derechos *diferenciales*, sean *específicos* ó de *bandera*.

Rebaja de los derechos que pagan en las aduanas de la Península los azúcares y mieles de Cuba, hasta reducirlos á derechos *Ascales*.

Tratado de comercio entre España y las naciones extranjeras, particularmente con los Estados Unidos, y sobre la base de la más completa reciprocidad arancelaria entre aquella y Cuba, y otorgando á todos los productos extranjeros en las aduanas y puertos de la isla, las mismas franquicias y privilegios que aquéllos conceden á nuestras producciones en los suyos.

periódico titulado *La Voz de Cuba*. En
con al *partido liberal* muchos de los anti-
del Zanjón, quedando el separatismo re-
ño grupo de críticos y pesimistas, dentro
círculo poco extenso y de escaso influjo de
volucionarios que se establecieron en los
e América y en las costas del Golfo de
logro de sus esperanzas, principalmente,
Gobierno español.

ervador ó *constitucional* se declaró servi-
biernos de la Metrópoli, afirmando que
n extrañas á todo exclusivismo político.
voción á la Madre patria era insuperable
mar el nombre de *partido español*.

pretensiones la positiva y justificada fué,
nte á la devoción de los constitucionales á
se incontestable. Sin que el reconocimiento
lique el aplauso á los excesos con que bas-
efecto de la dirección que aquellos elemen-
on y comprometieron su causa.

ión los llevaban convicciones profundas,
vivos é intereses tan manifiestos como
eninsulares de Cuba, trabajadores, eco-
as, merecedores de grandes respetos y
nales no se comprendería la vida cubana,
la pasan, quizá, de 200.000, tienen en la
nalias por ellos carifiosamente atendidas y
mente el deseo de volver al seno de estas,
b más años de gran labor, para gozar en
que recordando siempre á Cuba, del trato
economías.

reducían á ocupar un término medio entre los autonomistas y los constitucionales.

Hoy existe este partido *reformista* (todavía poco fuerte) con la pretensión de ser el inspirador de las últimas reformas de 1896. La pretensión es excesiva. Podría contentarse con el papel de valioso cooperador. Y buena prueba de ello es el programa del partido, que lleva la fecha de 30 de Octubre de 1894.

He aquí sus principales conceptos:

«Cuestión política»

Fiel y exacta observancia de la Constitución del Estado, que reconoce y garantiza los derechos individuales y proclama la necesidad de que las provincias de Ultramar sean gobernadas por leyes especiales, sin perjuicio de la autorización que concede el Gobierno para aplicar á las mismas, con las modificaciones que juzgue convenientes y dando cuenta á las Cortes, las leyes promulgadas ó que se promulguen para la Península.

Aplicación á esta Isla de todas las leyes que se hayan dictado ó se dicten en la Península para asegurar el respeto recíproco de los derechos que reconoce el título I de la Constitución, y de las orgánicas, sin otras modificaciones que las estrictamente indispensables, reclamadas por la naturaleza ó por las costumbres, con sujeción al mencionado criterio de especialidad.

Extensión del derecho electoral para Diputados á Cortes, Provinciales y Concejales á todos los españoles nacidos ó residentes en Cuba, según lo aconsejen y reclamen las condiciones de la Isla, y en relación con las instituciones que en este sentido rijan en la Península.

Aprobación é inmediata promulgación del proyecto de Ley presentado en el Congreso de los Diputados el día 8 de Junio último, para el Gobierno y Administración Civil de esta Isla y la de Puerto Rico.

Sin perjuicio de las reformas que pueda demandar en lo futuro la nueva organización provincial, y que la experiencia aconseje, habrá de tener la Diputación, entre otras, facultades para aprobar las cuentas de los Municipios; revisión y apelación de los acuerdos de estas Corporaciones

sean de la exclusiva competencia de las mismas, y asuntos de administración local; la de nombrar y r todos sus funcionarios y dependientes; todo lo concerniente á la administración y fomento de los intereses es y materiales de la Isla, en cuanto por la Ley Municipal ó otras especiales no corresponda á los Ayuntamientos, Gobierno General ó Gobierno Supremo; la de disposiciones de carácter general y obligatorio para toda Isla en materia de Instrucción, Obras públicas, establecimiento de Bancos y Sociedades, contratación de empréstitos y otros análogos; la de discutir y proponer, en su caso, al Gobierno General ó Gobierno Supremo, cuanto conveniente á los intereses de la Isla y no sea de su competencia; la de informar acerca del establecimiento de nuevos impuestos, modificación de los existentes y cualquier otra medida de carácter financiero; y la de proponer al Gobierno General la creación, modificación ó supresión de cualquier impuesto local.

La institución del Consejo General de Administración, y las facultades que le concede el proyecto de reformas por Mañra, acentuándose en forma directa las partes de este mismo.

que determine las atribuciones del Gobernador de la Isla, su responsabilidad, jerarquía y circunstancias personales para su nombramiento, sin excluir ninguna de las clases del Estado.

de empleados públicos, que solo autorice el ingreso en las carreras civiles á los españoles establecidos en Cuba, distinción de procedencias, en quienes concurren determinadas circunstancias, reservando al Gobierno Supremo el nombramiento de los jefes de Administración y jefes de las dependencias provinciales, y haciéndose los demás nombramientos por el Gobierno general.

examen y revisión de las cuentas correspondientes al presupuesto de la Isla, en forma que puedan ser ultimadas brevemente dentro del organismo de su administración local. del Jurado.

Cuestión económica

organización de los servicios, administración y reducción de los gastos públicos.

rogación inmediata de la Ley de Relaciones comerciales, mientras tanto no se establezca la libertad comercial en la Península.

XII

onomista cubano se nutrió, como antes he
te del país. En este sentido pudo aventu-
rn de que *Cuba es autonomista*. Tanto por
género de oposición de los *constituciona-*
tor de las autoridades de Cuba y la polí-
no de Madrid (quizás también por una
tuosa de toda la política americana), el tal
de *particularista*. Esto (que es muy difi-
a claridad en las Antillas) le quitó algunos
do en la Metrópoli, donde, sin embargo, se
r por decreto de la opinión pública y por
partidos nacionales, todas las reformas
uba.

amás que el partido autonomista cubano
ol. A mi juicio (y creo tener muchos da-
d), ese partido es *español*, pero de *otro modo*
le Unión Constitucional. Y he aventurado
altos círculos políticos y en momentos bien
ie de que el interés permanente de España

I como complemento de todo esto, la estricta, la rigurosa, la leal observancia por parte de todos, del Gobierno, del pueblo de la Metrópoli, de las colonias, de la letra y sobre todo el espíritu de la digna y felicísima paz del Zanjón, punto de partida y término de referencia del partido liberal y democrático de Cuba.

Pero debo advertir algo más: nosotros venimos aquí con

ma simpatía que S. S. me inspira, me autoriza á desear en voz alta que S. S. no se contente con pasar por un hombre de *corazonadas*, sino que sea realmente un hombre de *carácter*. La voluntad no se demuestra queriendo un poco ahora y otro poco luego, sino *queriendo bien, queriendo mucho* y sobre todo *queriendo siempre*. Y yo me temo que entre los amigos de S. S. haya bastantes que en muchas cosas, y particularmente en estas ultramarinas, deseen que el general Campos y el pacificador del Zanjón quiera solo *é ratos*.

Lo sentiría de veras, por S. S. desde luego, y sobre todo por mi patria, que harta de voces y golpes, bien necesitada está de caracteres (1). »

Dieciséis años después—el 13 de Febrero de 1895,—la

(1) De análogo modo habló después el Sr. Portuondo, en la sesión de 4 de Febrero de 1890.

11

12

13

14

15

16

Corresponderían á la primera agrupación: 1.º Las obligaciones generales del Estado y las secciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y décima de las obligaciones de los departamentos ministeriales; 2.º Las secciones primera, segunda, tercera y quinta del vigente presupuesto de gastos de Cuba; 3.º Las secciones primera, segunda, tercera y quinta del presupuesto de gastos de Puerto Rico.

Corresponderían á la segunda agrupación, las secciones sexta, séptima, octava y novena del presupuesto vigente de gastos de la Península é islas adyacentes.

Corresponderían á la tercera agrupación, las secciones cuarta, sexta y séptima del presupuesto vigente de gastos de Cuba, y las secciones cuarta, sexta y séptima del presupuesto corriente de gastos de Puerto Rico.

Todos los gastos comprendidos en la primera agrupación se incluirían en un solo presupuesto, que sería el *general de gastos del Estado*. Para cubrir estos gastos contribuirían en justa proporción *todas las provincias del Estado*.

El cálculo de la proporción en que debían contribuir las islas de Cuba y Puerto Rico se haría teniendo en cuenta

Antilla. La Directiva de la Habana estaba de acuerdo con las proposiciones presentadas y que ya conocía de tiempo atrás.

grupo de colonos residentes en la Metrópoli y atentos á la defensa constante y enérgica de la tierra de su procedencia, etc., etc. La colonia irlandesa de Londres daba y aún da un valor extraordinario á los autonomistas de la Cámara popular. Aquí en la Península, solo con intermitencias y ya hace bastante tiempo, la juvenil colonia portorriqueña prestó cierto calor á la propaganda reformista colonial. La generalidad de las gentes ultramarinas no se cuida en la Metrópoli española de ese empeño. Ni siquiera los comerciantes y productores de las Antillas han visto con claridad que las

para recabar y consolidar las instituciones democráticas, á los que han de realizarla; siempre en el supuesto, primero, de que esto no se conseguirá, con la pretensión ofensiva de que solo unos hayan de ceder para tomar la bandera ó aceptar la dirección de los otros, y segundo, que en el estado actual de la política contemporánea se necesita cerrar los ojos para no ver que en ninguna parte del mundo, ni en el Gobierno, ni en la oposición, impera total y exclusivamente un solo partido y mucho menos un grupo de sectarios y hombres de escuela.

Fuera de esto, LA TRIBUNA se propone estudiar muy particularmente algunas cuestiones de interés primordial en los momentos que vivimos.

A En primer término, la *Cuestión Colonial* que nos proponemos discutir sosteniendo:

La urgencia de la abolición completa, sincera y efectiva de la esclavitud en Caba.

La identidad de los derechos políticos y civiles de los españoles de entrambos mundos, mediante el planteamiento inmediato y la práctica leal y honrada, así de la Constitución, como de las Leyes municipal y provincial y de los Códigos comunes de la Península en nuestras Antillas.

La reforma liberal de los Aranceles para evitar la ruina inminente de la producción antillana, destruyendo así la última forma de la explotación colonial y

La comisión de grandes facultades económicas y administrativas á corporaciones insulares, de origen popular y forma representativa que, así en Cuba como en Puerto Rico, cuiden de los intereses pura y exclusivamente locales, conforme á un principio de radical descentralización bajo la unidad del Estado y supuesta la integridad de la Patria, al modo que hoy va privando, no solo en el Imperio colonial

Las leyes nuevas de Carlos V, en favor de los indios, aplicaron del modo desastroso que evidencian las *secretas del Perú*, redactadas por los marinos don Juan y D. Antonio Ulloa.

Las leyes iniciativas del año 11 y las leyes votadas por el Congreso gaditano, también se llevaron á América de un modo completamente contradictoria y la más apropiada para acerbicar los ánimos, conturbados ó suspensos por el bastardeamiento ó el positivo fracaso de la mayor parte de las grandes reformas del Marqués de la Sonora, á principios del siglo XVIII.

Así: en nuestro mismo tiempo tenemos una ley real, en la cual es constante y unánime el parecer de todos los antillanos; la ley de relaciones de 1882. Hízose

gionales; las no conferidas á los Estados regionales, reservadas á los Municipios.

»El jefe de cada región es el ejecutor de las resoluciones nacionales; el jefe de cada municipio el ejecutor de las regionales.»

El Partido democrático progresista dió un Manifiesto en 1.º de Abril de 1880. En él se contienen los siguientes párrafos dedicados á la cuestión colonial:

«Difíciles son por extremo las complicaciones traídas por la serie de los tiempos en la gobernación de las provincias ultramarinas y los daños han tomado proporciones temerosas para la grande Antilla con el azote de diez años de guerra. Prevaleció el sistema, cómodo al parecer, de los aplazamientos, cuanto funesto por exigir soluciones definitivas que no excluían meditación profunda. En vez de ello manteníase un *statu quo* absolutista, fiado á los gobernadores generales que enardecían los sentimientos de los que veían en la Metrópoli una vida política más conforme con la cultura de la época. Pusieron remedio los hombres de nuestras ideas, en lo que cabía, aboliendo la esclavitud en Puerto Rico y haciendo partícipe á la gran Antilla del ambiente liberal de la Península. Hoy debemos afirmar, como antes, que el *statu quo* y el aplazamiento han sido juzgados por sus amargos frutos y hay que decidirse por la libertad, llevándola resueltamente y desde luego á las colonias por medio de la asimilación de estas á las provincias de la Metrópoli; sistema definitivo según unos, por que aquellas deben regirse; prepatación y transición, según otros, al autonómico, el cual en ningún caso habrá de empecer ni ambargar la unidad de la patria: pero no hay que hacer una confusa mezcla de asimilación y autonomía, considerando como asimiladas aquellas provincias para lo que solo aproveche á las peninsulares y como autonómicas para tener presupuestos y deudas suyas propias.

»Esas son nuestras aspiraciones, y como condición precisa para realizarlas en su día, aspiramos á establecer con toda la democracia, pues de una obra común se trata, la debida concordia y el indispensable acuerdo: concordia y acuerdo cuya base racional no puede ser otra que la Constitución de 1869, por todos reconocida como garantía suficiente para que los partidos, sin excepción alguna, dentro de ella y por

asunto algunas palabras, hoy que los acontecimientos me han dado la razón y han hecho justicia á las afirmaciones constantemente sostenidas en toda mi vida pública, de que «nuestros hermanos de Ultramar nada tienen que esperar de la Monarquía, que retira las mezquinas concesiones que hace cuando así conviene á los intereses de los partidos que turnan en el poder ó á los particulares de los hombres influyentes.

»Concluyente prueba de estas afirmaciones es lo ocurrido con la exposición firmada por todos los centros importantes de la Habana y por todos los hombres eminentes sin distinción de opiniones. Nada piden que los republicanos no estén en el caso de decretar desde el primer día que gobiernen; y sin embargo el partido conservador que ha pretendido representar á los españoles incondicionales, ha recibido con desprecio las reclamaciones de sus amigos y protectores de toda la vida. Lamento lo ocurrido como patriota; pero ello servirá de lección á nuestros correligionarios de Ultramar para que se identifiquen con nosotros, si da tiempo, hagan lo que debieran hacer desde el primer día de mi destierro. Con nosotros vivirán la vida del derecho, en lugar de vivir como hoy, de la tolerancia de los poderes públicos.»

Indudablemente, la fórmula autonomista proclamada por el partido federal no era la de los autonomistas antillanos ni ha sido la que se ha discutido con calor y hasta apasionamiento, así en Ultramar como en la Península, en el curso de los últimos veinte años. Ni es tampoco la fórmula adoptada fuera de España por todos cuantos en libros, programas de partido y periódicos de política militante han sostenido y sostienen la Autonomía Colonial. Los federales tienen una idea de las Colonias análoga á la de los asimilistas de verda y su concepto del Estado es distinto del que supone el Derecho Colonial novísimo.

No interesa á mi propósito discutir aquí si la fórmula de los federales es mejor ó peor que la de los autonomistas propiamente dichos. Claro se está que yo creo que aquella es inferior á esta, lo mismo en el orden de la doctrina que

8.º A procurar por los medios más eficaces que esta coalición responda al decidido propósito de que el establecimiento de la República, más que obra de partidos, sea una obra nacional. »

Luego vino la segunda fórmula, suscrita en 23 de Enero de 1893, por las representaciones de los partidos Centralista, Federal y Progresista. Sus principales bases eran estas:

«1.ª El fin de la Unión Republicana es acelerar el advenimiento de la República.

»2.ª Para la consecución de este fin utilizará, con la actividad y energía que exigen las angustias de la Patria, todos los medios que las circunstancias proporcionen ó aconsejen.

»3.ª La Unión tendrá una Junta directiva residente en Madrid, compuesta de nueve individuos, elegidos tres por cada una de las direcciones nacionales de los partidos republicanos.

»A esta Junta corresponderá la suprema dirección de los tres partidos para todos sus fines generales y comunes, y estará ampliamente facultada para nombrar dentro y fuera de Madrid las delegaciones que estime necesarias para la realización de sus trabajos.

»4.ª Se constituirá inmediatamente después de proclamada la República, un gobierno provisional, en que tendrán justa representación todas las fuerzas políticas que concurren al triunfo de aquélla.

»5.ª Los partidos que constituyen la presente Unión se comprometen á someterse á la Constitución que en definitiva el país se dé, obligándose recíprocamente, cualquiera que sea la forma de la futura República, á no perseguir, fuera de los medios legales, la realización de sus peculiares aspiraciones.»

En el Manifiesto que sobre los propósitos de la Unión Republicana se dió el mismo día 23 de Enero de 1893, se leían las siguientes frases (1):

(1) Firmaron este Manifiesto los señores siguientes en representación de los partidos Centralista, Federal y Progresista:

Gumersinde Azcárate.—Juan Gualberto Ballesteros.—Vicente Bar-

ñor Pi. Este último y sus amigos (minoría en la última Asamblea federal) resisten todo congreso de carácter general y permanente.

Las principales bases de la nueva Unión fueron estas:

«I. La *Unión republicana* es la concentración de los esfuerzos de los partidos Centralista, Federal, Nacional y Progresista, para preparar el triunfo de la República en España y asegurar el arraigo y desarrollo de las instituciones republicanas.

»Por tanto, supone la existencia de esos Partidos y las afirmaciones fundamentales y comunes á los mismos.

»II. Su principal objeto es la determinación de la conducta que corresponde á los republicanos, tanto para acelerar el advenimiento de la República, como para facilitar su instauración y vida, por el concurso de todos y en vista del interés supremo de la Patria.

»III. Ante la apremiante necesidad de realizar la *Unión republicana*, los cuatro Partidos representados en esta Junta declaran que no tomarán parte en las próximas elecciones de diputados á Cortes y senadores.

»Este acuerdo tiene un carácter circunstancial. En lo sucesivo, la Junta Directiva de la *Unión republicana* acordará, en cada caso, si los Partidos unidos han de luchar ó abstenerse en cada elección de diputados á Cortes y senadores, obligándose todos, de ahora para entonces, á acatar y cumplir, sea el que fuere, el acuerdo de dicha Junta.

»IV. Los Partidos unidos se reservan el pleno derecho de propagar sus respectivos ideales; pero sin hostilizarse, ni en la tribuna, ni en la prensa.

»V. La organización de la República será determinada por las Cortes Constituyentes. Estas se elegirán por sufragio universal, conforme á la ley de 26 de Junio de 1890, con las modificaciones siguientes: Primero, el reconocimiento de la representación por el voto acumulado. Segundo, la supresión de los colegios especiales establecidos por la ley vigente. Y tercero, la fijación de la edad de 21 años para la obtención del derecho electoral.

»VI. Los Partidos unidos se comprometen al respeto absoluto de la legalidad creada por las Constituyentes, condenando desde ahora todo cuanto en contra de esa legalidad pudiera hacerse, de cualquier modo ó por cualquier concepto, fuera de la vía legal y pacífica.

«Los abajo firmantes, en nombre y representación de los partidos republicanos Centralista, Federal, Nacional y Progresista, constituidos en Unión republicana, declaran:

Que la *Unión republicana* estima que la cuestión de Cuba es hoy el problema político capital de nuestra Patria; ve con admiración y entusiasmo los heroicos esfuerzos de cuantos en la tierra cubana sostienen con el honor de nuestra bandera los sagrados derechos de España en América, y protesta enérgicamente contra el más leve propósito ó la forma más atenuada de cualquier poder extranjero, de menoscabar la soberanía indiscutible de la Nación española.

En su vista, la *Unión republicana* declara:

PRIMERO. Que es un interés supremo el de mantener á toda costa y sin reserva de ninguna especie el sagrado de la integridad de la Patria.

SEGUNDO. Que son dignos de sus calurosas simpatías y su entusiasta aplauso, todos cuantos noble y bravamente luchan por la causa española en la fratricida guerra de Cuba; siendo de condenar, ahora como nunca, el sistema imperante, por cuya virtud pueden excusarse el sagrado deber de defender la Patria y morir por ella, si necesario fuera, los reclutas que disponen de dinero para redimirse del servicio militar.

TERCERO. Que es un error funesto el considerar esta guerra como una cuestión puramente militar, siendo así que por su naturaleza, sus antecedentes y sus circunstancias, constituye un gravísimo problema, á que es preciso dar solución por medios políticos discretamente combinados con el esfuerzo de las armas.

CUARTO. Que la torpeza del actual Gobierno, en prescindir de los recursos políticos, puesto que ni siquiera ha planteado en ninguna de las Antillas, como era su deber, la ley de reformas ultramarinas, votadas con el carácter de urgencia por todos los partidos representados en las Cortes de 1895, constituye una de las más acusadas responsabilidades de la situación imperante, correspondiendo á la bochornosa tradición monárquica, á cuya cuenta hay que cargar el quebrantamiento de nuestro Imperio colonial en el

rino.—Miguel Morsyta.—José Muro —Pedro Niembro.—Manuel Ortíz.
—Manuel Pedregal.—Pablo Perales.—Fernando Romero Gil Sanz.—
Antonio Ruiz Beneyán.—Juan Salas Antón.—Nicolás Salmerón y Alen-
so.—Joaquín Sánchez.—El Marqués V. de Santa Marta.—José María
Vallés y Ribot.—Mariano Vela.—Juan Simeón Vidarte.

que en él tengan representación proporcional y equitativa todos los elementos que hayan contribuido al triunfo de la República.

La acción del Gobierno Nacional se inspirará en el más profundo respeto á los derechos naturales del hombre y á las garantías del ciudadano, consagrados por el título I de la Constitución de 1869, así como en el sentido general de la Revolución y en el deber riguroso de no prejuzgar solución alguna especial y definitiva respecto de la forma de la República.

Inmediatamente después de constituido el Gobierno, éste convocará los comicios para que, con arreglo á la ley electoral de 26 de Junio de 1890, se proceda á la elección de Ayuntamientos y Diputaciones provinciales.

4.º Los nuevos Ayuntamientos y Diputaciones provinciales se regirán por las leyes municipal y provincial de 20 de Agosto de 1870, modificadas por el Gobierno Provisional en un sentido autonomista, de suerte que todo cuanto en ellas se reconoce como de la exclusiva competencia de los Municipios y Diputaciones provinciales, ha de quedar sustraído á la intervención de las autoridades extrañas á aquellos organismos. Los recursos gubernativos serán resueltos por las Comisiones provinciales, y los demás recursos que las citadas leyes establecen por los tribunales de justicia.

5.º Las Cortes Constituyentes se elegirán por sufragio universal, conforme á la ley de 26 de Junio de 1890, con las modificaciones siguientes:

A. El reconocimiento de la representación por el voto acumulado; y

B. La supresión de los colegios especiales establecidos por la ley vigente.

6.º Los elementos fusionados se comprometen al respeto absoluto de la legalidad que establezcan las Constituyentes, condenando desde ahora todo cuanto en contra de esa legalidad pudiera hacerse, de cualquier modo ó por cualquier concepto, fuera de la vía legal y pacífica.

7.º En virtud de las bases precedentes y declarada constituida la Fusión republicana, con el fin de que nada estorbe su marcha ni sea obstáculo á la unidad y á la eficacia de su acción, considéranse desde este instante disueltos los partidos y grupos cuyos representantes han concurrido á la formación del nuevo partido de Fusión, los que se comprometen á ejecutar este acuerdo, comunicándolo á sus respectivos organismos políticos.

XVIII

Paréceme que los textos aducidos y datos expuestos no consienten la menor duda respecto del apoyo que los partidos republicanos peninsulares, después de 1873, han pres-

de Torres Solanot.—Tiberio Avila.—Juan Martí Torras.—Federico Bru.—José Prefumo.—Francisco Roque.—Aurelio Blasco Grajales.—Juan Carbonell.—Blas Enrique Jiménez.—Casto Vilar.—José Montes Sierra.—Andrés Corbacho.—Ignacio Garchitorena.—José Cao —Tomás Romero.—Cristóbal Martín Rey.—Lucio Catalina.—Ruperto J. Chávami.—Constantino Rodríguez.—Miguel Morán.—Mariano Santos Pinedo.—Cirilo Tejerina.—Gaspar Moreno Martínez.—Salvador Gómez Liaño.—Manuel Fernández Cuevas.—Clemente Selvas.—José Serra Clara.—Nicolás Amador.—José Andreu.—Francisco Agnadé.—Florencio Alguacil.—Ruben Landa —Simeón Vidart.—Angel Ruiz de Quedo.—Victoriano Castro.—Manuel Herbella.—Manuel Alcázar González.—Hipólito Calderón.—Atanasio Gil Tortosa.—Luis Simarro.—Victor Navarro Reig.—Joaquín Sánchez Covisa.—José M. Escuder.—Imael Rizo.—Francisco Zabala.—Rafael Alonso.—Manuel Unzueta.—Antonio Larrañaga.—Gaspar Leguina.—Eusebio Ruiz Chamorro.—Indalecio Corujedo.—José María García Álvarez.—Joaquín de Huelves.—Juan B. Delgado.—Agustín Sardá.—Segundo Moreno Barcia.—Juan Palau.—Diego de Rueda.—Zacarías Ruiz.—Federico Solae-

puede decirse que ninguna de aquellas respetables personas se mostró nunca propicia al mantenimiento del viejo régimen colonial ó á la solución asimilista, al modo que la definían y sostenían los partidos monárquicos gobernantes.

Me sería facilísimo aducir algunos textos: pero me bastará recordar, en primer término, que el programa autonomista antillano afirma los principios de la democracia y sostiene la identidad de los derechos políticos de peninsulares y ultramarinos, concluyendo por afirmar para las Colonias una descentralización mayor que la propia de las provincias ó regiones de la Metrópoli, á cambio de mayores cargas y responsabilidades. Respecto de este último punto, cierto que algunos republicanos no compartieron el voto de la generalidad, pero respecto de los otros dos particulares, nadie, absolutamente, nadie en el campo republicano ha mostrado reserva ni vacilación de ningún género.

Pero después de lo que queda expuesto respecto de las grandes representaciones del republicanismo español, merecen particularísima consideración las recientes declaraciones de la Fusión Republicana, constituida por republicanos de todas las procedencias, de los cuales algunos erau bien conocidos por sus opiniones individuales hostiles á la Autonomía de las Colonias. La declaración autonomista de la Asamblea que en Junio último votó la Fusión Republicana fué acogida, tanto por los representantes congregados en el Teatro Moderno de Madrid, como por el numeroso público que llenaba los corredores y galerías altas, con aplausos repetidos, prolongados, atronadores.

No hubo la menor protesta ni reserva de ninguna especie. Y puedo afirmar sin temor á la menor rectificación, por cuanto yo estaba en la Sala, que aquel acuerdo y el de la di-

Pero todavía se deben citar otros hechos en favor de esta tesis. El primero y decisivo es el de la cooperación que á la mencionada campaña autonomista ha prestado la prensa de la Península. No creo que sea dable rectificar la afirmación que aventuro de que no ha habido en estos últimos veinte años un solo periódico monárquico en la Península que haya defendido la Autonomía colonial.

En cambio recuérdense los nombres y la significación y los compromisos de los periódicos que en la Metrópoli han servido esta idea. Antes cité la *Revista de las Antillas* que dirigió el Sr. Cepeda. Ahora recuerdo el *Voto Nacional* que dirigió el Sr. Chies, *La Tribuna* que dirigí yo, *La Unión* que dirigió el Sr. Sánchez Pérez, *El Liberal* dirigido sucesivamente por los Sres. Araus y Moya, *La Justicia* desde los días de la dirección del Sr. Atienza á los de la gestión del Sr. Pérez García, *Las Dominicales* de los Sres. Chies y Lozano, *El Nuevo Régimen* del Sr. Pi y Margall... Todos esos periódicos de Madrid eran, y los que viven son republicanos. Del propio modo han sido y son republicanos y autonomistas *El Mercantil Valenciano*, *La Publicidad* de Barcelona, *La Voz Montañesa* de Santander; es decir, tres de los seis periódicos de mayor circulación é importancia de las provincias españolas.

Y cuéntese que fuera de *La Tribuna*, en ninguno de los periódicos tenía ni tiene parte el capital antillano ni influencia directa la política local ultramarina. Mas aún; con escepción de *La Tribuna*, y de la *Revista de las Antillas*; ninguno de los periódicos que en la Península han defendido ó defienden la autonomía colonial, ha tenido ni tiene suscripción de mediana importancia en Ultramar. Por manera que el apoyo de todos esos periódicos ha sido y es de

mente el Centralista—han recibido con particular satisfacción la adhesión de calificadas personalidades de la política local antillana; por ejemplo, los exdiputados D. Julián Blanco y Sosa y D. Gabriel Millet. Pero de ninguna suerte han puesto como condición, ni nada que se le parezca, para la insistente campaña en pro de la autonomía y de una política de justicia y expansión en Ultramar, la cooperación ó la mera correspondencia de los que en las Antillas viven.

Repito que no juzgo definitivamente esta conducta. Señalo el hecho como he señalado tantos otros, añadiendo que no conozco ejemplo parecido. Fortifica este concepto lo que últimamente ha hecho el partido Liberal de la Península con los autonomistas portorriqueños que solicitaron su concurso y que han tenido que entrar en aquel partido aceptando su disciplina. Lo propio exigieron los liberales de otros tiempos á los vascongados y los catalanes, que por este medio se emanciparon del régimen de desigualdad y de los estados de sitio, casi permanentes antes de 1856. Algo parecido, aunque en forma muy diversa, exigieron los liberales ingleses á los autonomistas irlandeses. Y es sabido que los asimilistas franceses (que en rigor defienden lo que los autonomistas españoles, aun cuando lleven otro nombre por razones distintas y de localidad) necesitaron ponerse dentro de los partidos republicanos de la Madre Patria para lograr la extensión á las Antillas del sufragio universal, el gobierno civil, la libertad municipal, la división de los presupuestos locales y de la nación, etc., etc.

Sobre este punto han corrido muchos errores, atribuyéndome una gestión que yo no he realizado. No han sido pocos los que han creído que yo he trabajado activamente para lograr que los autonomistas antillanos ingresasen en

obsequiaron doscientas personas, entre las que figuraban hombres como Estanislao Figueras, Eduardo Chao y Manuel Pedregal, con motivo del discurso que pronuncié en el Congreso, en Abril de 1880, defendiendo la solución autonomista. A aquel banquete concurren algunos hijos de las Antillas, más ó menos comprometidos en favor de la reforma colonial, pero la generalidad de los asistentes eran republicanos, sin la menor relación con las Antillas; gente sincera y entusiasta, cuya franca devoción me confirmó en mi idea respecto del respectivo valor de la cooperación de todos y cada uno de los partidos y los elementos políticos de la Península y de la casi imposibilidad de que la solución autonomista, en sus dos conceptos fundamentales, pudiese triunfar en la Metrópoli, por el solo esfuerzo de los autonomistas antillanos.

Después, en mis excursiones políticas por Vizcaya, Levante y Andalucía, adquirí nuevos datos que he aprovechado, sin distracción ni duda, cada vez más convencido de que es elemento capital de la acción política la detenida estimación del *medio* en que se trata de operar. Por eso, después de los principales actos de propaganda realizados en aquellas comarcas, recababa yo de los Comités directivos del Centralismo, que saludaran, telegráficamente ó por escrito, á las Directivas autonomistas antillanas, ratificando su devoción y sus compromisos en favor de la Autonomía.

Por lo mismo en toda esa campaña, aun á riesgo de pasar por preocupado é impertinente, hice siempre objeto de mi particular atención la tesis de que la reforma colonial no era un empeño exclusivo, ni debía estar colocada dentro de la jurisdicción del especialista, sino que afectaba á la vida total de la Nación y al interés político general, cuanto más al interés de los liberales y los demócratas.

En cuanto á la conveniencia—estoy por decir la necesidad—del apoyo de los partidos avanzados de la Península—y singularmente del Republicano—á la causa autonomista colonial, tengo tanto que explicar y referir que la abundancia de materia me obliga á reducir extraordinariamente el discurso. ¡No en vano se pasan más de treinta años oyendo, viendo, y bregando por una causa!

Respecto de lo pasado, he dicho varias veces y en muchas partes, que me atrevo á dudar de que sin la propaganda republicana, dentro y fuera del Parlamento, se hubieran conseguido los adelantos de estos últimos 16 años, así en la opinión pública como en la esfera del gobierno y de las leyes. Respecto del porvenir, mi convicción es tan firme, que aseguro que, aun cuando los actuales partidos gobernantes, por efecto de su última evolución, establecieran el régimen autonomista en nuestras Antillas, serían precisos para el éxito de éste, la atención, la solicitud y el esfuerzo del partido Republicano.

Todo ello se explica perfectamente.

No necesito esforzarme para abonar mi discreta reserva respecto al modo y manera con que los actuales partidos monárquicos y gobernantes hayan de plantear la Autonomía en las Antillas. Me faltan ciertos datos de intimidad y yo doy, bajo el punto de vista de la doctrina y del éxito, una gran importancia al sentido profundamente democrático con que se ha defendido la Autonomía en las Antillas y con que allí se tendrá que establecer el nuevo régimen; sobre todo en vista de la principal determinante del último decreto del partido conservador. Es decir, en vista de la pronta pacificación de Cuba.

Con esto quiero significar que no me prometo verdaderos

implicaría el abandono de la decidida protección que todos nuestros partidos monárquicos han dado á la Unión Constitucional de Cuba y á los incondicionales de Puerto Rico. El punto es de tal gravedad que, á mi juicio, prescindir de él equivale á asegurar el fracaso de la nueva política.

El grado de la intervención de los autonomistas en el planteamiento y arraigo del nuevo régimen, sería cuestión también muy importante en cualquier momento. Pero ahora de valor insuperable, por cuanto esos autonomistas necesitan fuerza excepcional y prestigios extraordinarios para realizar el doble empeño de instaurar las instituciones autonomistas y de desarmar y vencer la insurrección cubana.

No quiero tratar extensamente estos particulares. Y por no complicar el discurso prescindiendo de los varios problemas de fondo que ha producido la actual guerra de Cuba y cuya resolución no dependerá solo de lo que hasta ahora se ha llamado la Autonomía. Aludo á los problemas de la repoblación y de la reconstrucción de Cuba, de la deuda, del ejército colonial; particulares todos intactos y muy poco conocidos de la casi totalidad de nuestros políticos. Me atengo á lo que hasta ahora se ha discutido con mayor ó menor competencia y con más ó menos aprovechamiento. Y llevo á aceptar, con gusto, así las declaraciones antes aludidas del Sr. Sagasta, como el supuesto de que, en todo caso, los herederos políticos del Sr. Cánovas completarán, en buen sentido, la reforma de 1897, porque no puedo creer que se acepte locamente la probabilidad de un fracaso, por falta de los necesarios complementos de la obra iniciada en Abril último. No puedo ser más benévolo.

Pero también he dicho muchas veces (y muy espe-

redujeron el cabotaje casi á un derecho exclusivo de los productores y comerciantes peninsulares.

Por tanto, repito, no puede confiarse en la eficacia de las reformas por el mero hecho de que aparezcan en la *Gaceta* oficial y aun por la circunstancia de que se haya iniciado su planteamiento, con la mejor buena fe del mundo y los más rectos propósitos imaginables. Solo viviendo fuera de nuestro mundo político puede pensarse que los autonomistas, regimentados y sometidos á la disciplina de los partidos gobernantes, hubieran de tener bastantes medios para campañas de resultado respecto á omisiones, contradicciones ú olvidos de su propio partido general ó peninsular. Aun para facilitar su protesta ó fortificar su gestión sería preciso el acicate de los de fuera. Es decir, de personas que al realizar su inspección y su crítica no pudieran ser acusadas de indisciplinadas y perturbadoras.

De aquí la conveniencia de que, aun dentro de la situación imperante, aparezca capacitado excepcionalmente el partido republicano español para llevar la voz de los autonomistas de las Antillas que no sean monárquicos. Y de aquí la necesidad de evidenciar los títulos que para esta empresa tienen los republicanos españoles, recordando, cuando menos, lo que en circunstancias por todo extremo extraordinarias, y en el curso de una larga historia, han hecho estos en favor de nuestras colonias y especialmente de los derechos y las libertades de Cuba y Puerto Rico.

Pero además siempre convendrá tener muy en cuenta las superiores, las excepcionales facilidades que para la propaganda de los ideales democráticos y concretamente de las soluciones autonomistas, ofrecen los partidos no gobernantes de nuestra Patria. Esta es una ventaja que compen-

la situación, manteniendo, respecto de otros particulares, un criterio distinto y aun opuesto.

Esta contradicción nunca perjudicaría al éxito de la política general republicana. Porque «lo semejante llama á lo semejante» y la victoria de las ideas republicanas en la cuestión colonial traería aparejadas otras soluciones de análogo carácter, incompatibles con la Monarquía.

Con este mismo criterio (aparte de otras razones) procedió que republicanos sinceros aceptasen y aplaudiesen que en el régimen monárquico, se introdujesen las libertades de imprenta y de reunión y el sufragio universal. La eficacia de estas libertades no es discutible. Por eso, los verdaderos monárquicos se han preocupado tanto, en España, de bastardearlas y corromperlas, cuando no han conseguido impedir las.

Aceptada, pues, la hipótesis de que por motivos verdaderamente patrióticos, alguno de los partidos gobernantes, ya en el poder, se decidiera á plantear el régimen autonomista en nuestras Antillas, hay que prever esta eventualidad.

En tal momento paréceme de todo punto indiscutible: 1.º Que los republicanos debieran apoyar con resolución aquella empresa, constituyéndose en sus principales y más solícitos vigilantes, por devoción á las ideas. 2.º Que á los republicanos correspondería una parte principalísima en la obra de la instauración del nuevo régimen colonial, por cuya virtud, su voto y hasta su acción debieran ser requeri

amente la honrada y patriótica rectificación de las opiniones y los prejuicios de los antiguos adversarios de la Autonomía. Públicamente excité, en su día, al Sr. Cánovas á que

1871, titulado *La República y las libertades en Ultramar*.

aquellos historiadores y escritores del siglo XVII, que con tan peregrina inteligencia y tan acentuada afición trataban de las cosas de nuestras Indias, y á cuyos esfuerzos y á cuyos consejos fué debido aquel monumento, legal que lleva la firma de Carlos II, y constituye uno de nuestros grandes timbres como gran nación colonizadora! ¡Quién al observar que ahora mismo, si por algo pesan en nuestro juicio las cosas de Ultramar, es por la cuestión de Cuba, reducida torpemente á un empeño de fuerza, quién se atrevería á pensar en la influencia enérgica, constante, casi diaria, que en el desenvolvimiento de nuestra historia han tenido desde el siglo XVI los sucesos de América, así como en la misión que nos está confiada respecto de esos pueblos, sangre de nuestra sangre, espíritu de nuestro espíritu, que allá, tras la inmensidad del Atlántico, y en medio de los prodigios de una naturaleza abrumadora, pródiga de arrebatos y de caricias, de céfiros y de tempestades, alientan y se desenvuelven con el carácter de naciones independientes; donde viven millares de españoles, á donde van la mayor parte de nuestros emigrantes, y donde á pesar de nuestro apartamiento y nuestras diferencias, y á despecho de las convulsiones y las colisiones de estos últimos cincuenta años, todo propende visiblemente á una inteligencia franca, amorosa, íntima con la antigua madre patria, para reorganizar la gran familia española, y quizá dar nueva base y nueva vida á los gigantesco empeños de esta gente latina, que después de haber constituido el fondo de una historia de diez y nueve siglos, parece sacar de sus desastres nuevas fuerzas, de sus caídas nuevos bríos, de sus tormentas nuevas ideas, patentizando en medio de sus dolores que las grandes catástrofes, como los triunfos excepcionales, son patrimonio de esos pueblos y

prisma de sus preocupaciones, creyendo que todas las cosas dependen de aquella cuestión objeto preferente de sus estudios y de sus esfuerzos. Ni tampoco vengo aquí á pedir nada para mí, pues que si es cierto que yo he nacido en Cuba, en la Península me he educado; aquí tengo cuanto poseo, aquí de mi trabajo vivo; aquí yacen las cenizas de mi padre, aquí he obtenido todo género de alentadoras satisfacciones, y en esta tierra está naturalmente todo mi porvenir.

Así que, entendedlo bien, no reclamo franquicias para mi persona, ni seguridad para mi hogar, ni respeto para mis intereses: hablo en nombre de algo más alto; hablo en nombre de la justicia, definiendo la suerte de la Patria, y aun pudiera decir que sirvo y represento los intereses de una de nuestras mejores y más simpáticas provincias—de Asturias,—interesada como ninguna otra en que se haga la paz en nuestro mundo colonial y desaparezcan del cielo de América esas brumas y esas tempestades que tanto obstan á que los hijos de aquellas legendarias montañas, dotados de una prodigiosa fuerza expansiva que los lleva á correr todos los mares y habitar todas las tierras, encuentren hora y lugar para poner de manifiesto sus grandes virtudes, su sobriedad incomparable, sus hábitos de trabajo, su espíritu de economía: Asturias, cuyo genio inmortal siempre dispuesto á repetir el *sursum corda* en los momentos críticos para la independencia y para la honra nacional, parece como que ahora mismo me habla al oído para que venga á pedir—¡hombres de 1868! ¡revolucionarios de Septiembre!—que puesta la vista en la ley del tiempo, escuchando la voz del mundo civilizado, atentos á las evoluciones de los grandes pueblos modernos y á los movimientos del mundo tras-

vuestra mirada sobre el fondo del negocio que con tales dictorios y tales recursos se defiende; porque cuando de la verdad se trata, solo se pide luz, y la verdad siempre brota de la discusión amplia, tranquila y razonada.

¡Ah! señores diputados (no lo echéis en olvido), cuando el adjetivo escandaloso salta, cuando la diatriba corre, cuando la reticencia sustituye al razonamiento, y cuando para rechazar al adversario se prescinde del asunto invocando, empero, nombres augustos, tradiciones venerandas, intereses sagrados, es que no se tiene fé en la bondad intrínseca de la causa que se defiende, es que se trata de algo pequeño, de algo vergonzoso, de algo que suda oprobio y egoismo; y entonces, como nunca, se debe ahondar la materia, en la seguridad de hacer un acto de justicia, y de que, en todo caso, existe una verdadera cuestión.

Por manera que la dificultad del asunto no estriba en esto. Lo áspero está en cierta clase de preocupaciones que aun en espíritus rectos ha producido la fratricida guerra de Cuba, y que les hace sinceramente dudar de la conveniencia de que en estos instantes se trate de las cosas ultramarinas, que comunmente se refieren al estado de la grande Antilla. Yo me acuerdo de haber hablado muchas veces sobre esto con algunos amigos míos que figuraban en el seno de las Constituyentes, y recuerdo haberles oído decir: «Es imposible abordar en pleno Congreso la cuestión ultramarina. Si usted se hallase en él no lo haría. Las preocupaciones son grandes, y sobre todo, es muy discutible la oportunidad [de tratar los problemas coloniales, cuando en Cuba se pelea al grito de «¡muera España!» cuando allá existe un partido que pretende arrancarnos con las armas lo que de grado les daríamos, y cuando el partido que defien-

de Chattam, de Burke, de Cambden, acusados también de antipatriotas, contestaba: «No discutamos sobre eso... No se piense en revocar acuerdos antes de que América esté prosternada á nuestros pies.» Y lord Gower añadía: «Dejad á los americanos hablar de sus derechos naturales y divinos. ¡Sus derechos de hombre y de ciudadano! ¡Sus derechos recibidos de Dios y de la naturaleza!... ¡Mi opinión es emplear la fuerza!» Y la fuerza solo se empleó, é Inglaterra perdió los Estados-Unidos.

Buscad en cambio otro ejemplo. Es en 1857: la India inglesa se ha conmovido. La inquietud se propaga; brota la chispa de la insurrección, de una insurrección que reviste el doble carácter de política y religiosa. La guerra se entabla, y la lucha toma proporciones tan espantosas, que ya en Europa suena la voz que anuncia el fin de Inglaterra. La situación es crítica, terrible, angustiosa. El patriotismo británico se irrita; y, sin embargo, en pleno Parlamento se discute la cuestión de la India. Roebuck y Bright sostienen el abandono de aquellos países, y no falta en la prensa inglesa quien sostenga el derecho de los cipayos. Otros claman por la urgencia de reformas que hagan compatible la integridad nacional con las exigencias de la justicia y de la civilización. Y recordadlo, señores diputados, antes de la toma de Lucknow, y mucho antes de la conclusión de la guerra de la India, se hacen las reformas fundamentales de aquel orden de cosas. Triunfan la libertad y el derecho, ampliamente discutidos en el Parlamento británico, y desde entonces se consolida el imperio de Inglaterra en la India entre los aplausos del mundo civilizado.—¿Queréis más pruebas? ¿Necesitais más ejemplos? ¡Para qué se habrá escrito la Historia!

cómo este error se sostiene. Las puertas de Cuba están herméticamente cerradas á todo lo que aquí dicen los hombres y la prensa de la situación; por manera, que allí no se saben nuestras opiniones sino por lo que dicen nuestros adversarios. Este mismo discurso, señores diputados, tengo la seguridad de que no circulará en Cuba, por más de que sea traducido, según sus conveniencias, por la prensa esclavista.

Y no es solo que estén cerradas las puertas de la grande Antilla á las manifestaciones del liberalismo peninsular, es que hay interés en mantener la alarma de aquellas gentes, cuya mayoría, yo lo creo así, no posee esclavos, ni goza de monopolios y obra de buena fé. Así se sostienen las influencias reaccionarias y esclavistas, que lo aprovechan todo y que no perdonan medio de hacer creer que aquí andamos perdidos en medio de nuestras frecuentes colisiones, entregados al dominio de la ambición, muerto el patriotismo... quizá vendidos á ese *oro cubano* que, al parecer, ha sustituido al *oro* de los carbonarios y de los ingleses, y cuya idea entra perfectamente en aquellos espíritus dominados por las sombras propias de una sociedad entregada al culto de los intereses materiales.

Para esto ha servido, á maravilla, la reserva de las Cortes Constituyentes; porque se ha podido dar á entender que aquí no hay idea fija, que aquí no hay convicciones profundas, y que lo único que priva son esas influencias, ora de los esclavistas, ora de los separatistas que se supone trabajan nuestros ánimos y nos reduce el silencio.

Y así han pasado los días sin permitir que se forme una idea exacta de la actitud de nuestros gobernantes, expuestos á todo género de calumnias, sin que se echen las bases de

blos más libres del mundo, argumentos para todos, y la libertad ha aprovechado grandemente para que en estas críticas circunstancias no haya quedado hundida entre maldiciones y exabruptos la causa de los negros y la redención de los pueblos de Ultramar.

Pues bien, esta actitud del país exigía correspondencia en el Congreso, y hoy mismo os pido, señores diputados, que abráis vuestro espíritu á todas las opiniones y á todas las creencias.

Si las Constituyentes se equivocaron, como nuestros mayores se equivocaron en 1810 y 1820, no sigamos por este camino. Reconozcamos la necesidad de discutir los problemas ultramarinos; prescindamos de preocupaciones; fijemos la atención en lo que pasa, y con mesura, con discreción y con buen deseo, veamos de resolver lo que interesa al bien de la patria; en la inteligencia de que los problemas no se eluden con aplazarlos.

Y en este supuesto, voy á entrar en el objeto preciso de mi proposición. Quizá me he distraído un tanto; pero no lo debéis extrañar, ni yo lo lamento. Es la vez primera que aquí se plantea la cuestión colonial, y yo debía desbrozar el terreno, á riesgo de salirme de las condiciones clásicas de todo discurso. Pero yo no vengo á hacer un discurso ni á trabajar por mi gloria personal—dando de barato que yo tuviera fuerzas para ello.—Algo más alto me inspira, y á este supremo interés pienso sacrificarlo todo.

Mas es muy posible que por lo que he dicho alguno sospeche que mi objeto es tratar especialmente la cuestión de Cuba. Quizá se piense, porque á Cuba me he referido hasta ahora, si bien para hacer más notoria la inconveniencia de no tratar aquí con franqueza las cuestiones coloniales. Y no

y al separatismo por el camino de la sofocación y el aniquilamiento. Por eso no puede extrañar nunca el carácter separatista, más ó menos pronunciado, de todas las rebeliones coloniales; porque el germen del separatismo existe en todas las colonias, lo mismo en las nuestras que en las de Holanda é Inglaterra.

Ahora bien; si de esto pasais á preguntarme mi juicio sobre la insurrección, obtendréis en seguida la respuesta. La he dado desde el primer día. He condenado esa insurrección y he hecho cuanto me ha sido posible por evitar sus progresos.

Tenía yo, señores diputados, y tengo la convicción profunda de que sin esa insurrección la libertad se hubiera proclamado en Ultramar, y que esos reaccionarios que hoy se guarecen en los pliegues de la bandera nacional, y que hasta poco hace se atrevían á hablar también de la Revolución de Septiembre, hubieran corrido la misma suerte que aquí se ha deparado á los defensores del vergonzoso absolutismo de la *media-legitimidad*.

Pensaba yo y pienso, señores diputados, que no era lícito provocar una insurrección cuyas proporciones yo preveía perfectamente, cuando en el seno de la sociedad cubana había más de 300.000 desgraciados con derecho á entrar en la vida del honor y del trabajo, con otra preparación que la del campo de batalla, bajo otra luz que la del incendio, y en medio de otra atmósfera que la de odios y maldiciones que hoy pueblan el antes dichoso cielo de Cuba. Creía, en fin, y hoy creo más que entonces, que por el camino que vamos, que es el abierto en 1868, Cuba se pierde, no para España, no para la raza latina, sí que—¡horror me causa el decirlo!—porque yo he cifrado muchas

setenta y dos años en que aparecen como puntos capitales la emancipación de América, la abolición de la esclavitud, el libre cambio, la reforma colonial inglesa de 1848 y la rebelión de la India, de qué manera las colonias se desarrollan y por medio de qué vínculos se sostiene la integridad nacional.

Pero esto no me importa hoy, como no me importa la crítica de los medios utilizados por el Gobierno hasta el día. Muy por el contrario: yo quiero aceptar todo lo hecho; yo hago más, por hoy, las ideas del Gobierno; yo admito hasta sus preocupaciones. Notadlo bien: nada pongo de mi parte; en todo el desenvolvimiento de este discurso me he de referir á lo que ha obtenido ya la sección, más ó menos explícita, de las Constituyentes; á lo que existe consignado en leyes y decretos y hasta en la misma Constitución; á lo que se ha declarado hasta la saciedad por el mismo Gobierno. De suerte que mi discurso será (permítaseme la frase) verdaderamente gubernamental y político.

Para realizar este propósito veamos de fijar de una manera clara y precisa la cuestión de las cosas y los términos de la situación. Va para ocho meses que se disolvieron las Constituyentes. En todo el curso de su vida tres influencias se habían repartido los ánimos y determinado su conducta y sus acuerdos, respecto á Ultramar. De una parte estaba un gran sentido liberal, no extraño en verdad, porque notorios eran los compromisos de los partidos liberales respecto de nuestras Colonias.

No quiero decir nada del antiguo partido democrático, constante en dar cabida en sus programas á las dos ideas que por mucho tiempo se han mirado como fundamentales en nuestra cuestión colonial: la representación en Cortes de

todos nuestros partidos se alarmaron, y como he dicho, enmudecieron, y enmudeciendo, se dió ocasión y pretexto para que se repusiesen las influencias reaccionarias de allende el Atlántico, apoderándose poco á poco de una parte de la opinión pública, á pretexto de velar por la *integridad nacional*.

En cuanto á la ignorancia de que he hablado, no necesito decir cosa alguna: todos tenemos conciencia de ella, y si no hubiera otra prueba, yo apelaría á los debates que aquí se sostuvieron hace año y medio sobre Filipinas, y á los esfuerzos que necesitaron hacer los diputados de Puerto Rico para explicar cómo la pequeña Antilla se diferenciaba sustancial y profundamente de la sociedad cubana. Además, esta ignorancia producía tanto mayor y más deplorable efecto, cuanto que con ella se confundían los errores aquí generalizados sobre los sucesos de 1812 y 1822, errores en cuya virtud todavía se asegura que la libertad (esa *divina ausente* de nuestro Imperio colonial), que las reformas liberales fueron la causa de la pérdida de nuestras Américas.

Pues bien; dados estos antecedentes, fácil es comprender que la situación de nuestras colonias, al terminar sus tareas la Asamblea Constituyente, no podía ser la más satisfactoria; pero que no por eso ofrecía los caracteres de desesperada. Una verdadera transacción fué el resultado de todas aquellas causas; transacción en que el espíritu liberal y reformador consiguió estos triunfos: primero, los artículos 108 y 109 de la Constitución del 69; después, la entrada de los diputados puertorriqueños en la Cámara española; luego el paso de la democracia por el ministerio de Ultramar, y como consecuencia los decretos del Sr. Becerra sobre libertad religiosa, y los del Sr. Moret sobre la enseñanza y la administración de Filipinas; en seguida el artículo adi-

tramar si se ha aplicado en la pequeña Antilla la ley de ayuntamientos y qué importancia tiene la diputación provincial creada, hará como dos meses, en aquella isla.—Inquirid, en fin, cuál ha sido la suerte de aquella famosa ley preparatoria de la abolición de la esclavitud, que por algunos se nos presentó como un triunfo decisivo del espíritu revolucionario sobre el anacrónico orden de cosas existentes en Ultramar, todavía dos años después del movimiento de Septiembre!

Y contad, señores, con que si en alguna parte podía esperarse que estas leyes, y principalmente la última (que yo combatí á fuer de sincero abolicionista) surtiesen la plenitud de sus efectos y se realizasen con toda la facilidad y toda la prontitud apetecibles, era en Puerto Rico. Aquí los intereses de la esclavitud eran escasísimos: porque ni los esclavos pasan de 43.000, representando sólo el 6 por 100 de la población total, ni hay industria alguna que se sostenga sobre el trabajo servil, ni existe una separación radical entre las razas que pueblan el país, toda vez que los mulatos llegan á más del 50 por 100; ni en fin, la densidad de población permite la holganza y los peligros de las aboliciones repentinas, ni existen en el seno de aquella sociedad grandes masas de bozales; ni allí viven esos grandes propietarios, esos grandes capitales, esas enormes fortunas que hechas á la sombra del privilegio tienen miedo á todo lo que trasciende á reformas, y están dispuestos á hacer todo género de sacrificios para resistir la invasión del espíritu democrático, que es su implacable enemigo.

Todo, pues, hacía esperar que con voluntad y con celo Puerto-Rico daría un ejemplo magnífico de la eficacia de todas las leyes citadas, pero en particular de la ley prepa-

como la ley había dispuesto, sino que mediante esa rectificación, á todas luces contraria al espíritu y aun al texto de la ley preparatoria, han podido sustraerse á la libertad muchos esclavos mayores de 60 años, á quienes las Constituyentes habían reconocido el derecho incondicional á la honra y á la vida.

Y esto no es una hipótesis, señores diputados. De una parte tenéis la circunstancia de que existiendo de muy atrás en Puerto Rico lo que en nuestras provincias del Norte se llama la *prestación personal*, y estando dispensados de ella los esclavos mayores de 60 años, no era raro ver á los amos apresurarse á inscribir en el grupo de los sexagenarios á los que no habían llegado á esta edad, y que ahora, merced á la ley de abolición y de no haberse permitido rectificaciones de ningún género, hubieran entrado desde luego en el disfrute de su libertad. Por otro lado, en el ministerio de Ultramar existe, y el señor ministro la debe conocer, una exposición de un abolicionista de Puerto Rico, que con una bravura, con un desinterés y con una decisión verdaderamente heroicos en un país donde se carece por completo de la seguridad personal, denuncia las falsedades cometidas por determinados poseedores de esclavos en determinados distritos de la isla.

De modo, que la ley preparatoria de la abolición ha sido violentada en su espíritu y su texto, aun en aquellas mismas localidades, donde mejor hubiera podido producir sus efectos, patentizando esas excelencias que los abolicionistas habíamos negado. Pero, al lado de esto, ved lo que ha sucedido con las leyes de organización provincial y municipal, votadas por las Constituyentes con una adición en cuya virtud se debían aplicar á Puerto Rico. Y notad,

por las mismas ideas, por los mismos intereses que hacen posible la existencia de estas Cámaras, de la actual dinastía y de la situación en que todos estamos franca y lealmente comprometidos.

¡Pero qué mucho que esto ocurra, si después de esto el correo nos ha traído la tristísima nueva de haberse negado la primera autoridad de Puerto Rico, á dar posesión de su cargo de secretario de la diputación provincial á una persona elegida por aquel cuerpo, y que reúne á una inteligencia notoria, condiciones de carácter que la han hecho respetable en todos los círculos y para todos los partidos de Puerto Rico.

Y este suceso no creais que es insignificante. Lo sería si se tratase pura y simplemente de un cargo público, de un destino cualquiera ó de tal ó cual persona, por más de que ésta fuese la del exdiputado constituyente D. Román Baldorío y de Castro, á quien el país ha compensado votándole por dos distritos para que lo represente en estas Cortes. El caso es muy otro. Se trata de una de las atribuciones de la diputación, reconocida terminantemente y sin reservas por la ley de diputaciones; se trata de la negativa rotunda del señor capitán general de Puerto-Rico á dar explicaciones á la diputación, como manda la ley, so pretexto de que *informaría al Gobierno*, fórmula que prueba que allí subsiste para la primera autoridad todo el antiguo orden de cosas, y que la nueva institución, tan celebrada, tan aplaudida, tan ponderada, es pura y simplemente una vana palabra, y á lo sumo una promesa más. Y yo os pregunto: ¿es posible así la gobernación de ningún pueblo? ¿Es esto ni sombra de una política colonial?

Pero bien es que todo palidece ante el aplazamiento de la convocatoria de los comicios puertorriqueños, para que

char y que tal vez ha desaprovechado el señor ministro al permitir que en estos críticos momentos se dé una solución de continuidad en la práctica de esto que se nos ha presentado como la primera y más valiosa de las conquistas de la revolución en nuestras provincias ultramarinas!

Y contad que lo que aquí yo echo de menos es la solicitud del ministro. Otra cosa no puedo sospechar. Se trataba de un punto delicado y á la par de un pueblo separado por millares de leguas de Madrid. Siendo las comunicaciones poco frecuentes, cualquier retraso, y más cualquiera olvido, tenía que ser fatal. Se necesitaba, pues, mucho celo, extraordinaria solicitud.

Las Constituyentes se disolvieron al finalizar el año 70. En 20 de Enero de este año ya el señor ministro de la Gobernación cuidaba de que en la Península se formase la lista de mayores contribuyentes á que se refiere la ley electoral. El 26 y 27 resolvía no sé qué sobre los distritos electorales. El 16 de Febrero se convocaban las Cortes ordinarias... Pues bien; el señor ministro de Ultramar solo el 22 de Febrero envía un decreto á Puerto Rico (lo tengo aquí, como todos, absolutamente todos cuantos documentos y disposiciones cito), para que se dé principio á los trabajos preparatorios en Puerto Rico; siendo de advertir que este decreto—en que se habla, por ejemplo, del consejo de administración, que hace mucho no existe en nuestras Antillas, y de otras cosas por el estilo, que no arguyen gran cosa en favor del ministerio de Ultramar—se envió como telegrama por Cuba, tardando *veintiún días!* en llegar á Puerto Rico; esto es, cerca del doble de lo que tarda el correo ordinario de Cádiz. Comprended, señores diputados, comprended toda la diligencia demostrada en este difícilísimo asunto.

tamente de la Península, y que hoy mismo, despreciando las provocaciones de los absolutistas de Madrid y de la Habana, resistiendo las tentaciones del separatismo de Nueva York, desoyendo la ronca voz del desengaño y de la desesperación, fuerte con la conciencia de su derecho, vivas todas sus esperanzas, dueño de sus impulsos, aprovecha las pequeñas franquicias concedidas para demostrar su cultura, se organiza para conquistar lo que se le debe, acude á los comicios, vota como representantes, á pesar de las restricciones del sufragio y de las omnímodas del 23, á abolicionistas declarados y demócratas sinceros, y parece decirnos con su civismo, con su energía y su entusiasmo: «¡Españoles recordad que no os hemos faltado en los días negros del infortunio! ¡Liberales, pensad que para ser dignos de la libertad no hemos querido tener esclavos! ¡Demócratas, considerad que las brisas de América nos saturan, que el aliento del porvenir nos sostiene, que nuestras relaciones diarias, incesantes, permanentes, son con Inglaterra, el pueblo más activo de Europa; con los Estados Unidos, el pueblo más libre del mundo; con Venezuela, el pueblo más espiritual de América; con las Antillas francesas, donde se ha resuelto ya el problema de la esclavitud; con las Antillas inglesas, donde se ha consolidado el nuevo principio del *self-government* de las colonias, y que, en fin, todo lo que en nuestro país existe, todo lo que siente, todo lo que palpita, todo está demostrando que nuestra tierra se halla preparada, quizá como otra ninguna del nuevo Continente, para que aquí arraigue, crezca y fructifique el árbol de la democracia moderna!»

Pero ya habéis visto, cómo á pesar de esto, casi todo cuanto las Cortes Constituyentes decretaron para Puerto Rico,

ceden bajo otros conceptos y frente á frente de la colonización extranjera.

Recordad de qué modo, al comenzar la edad moderna, comenzaron á realizar sus empeños de exteriorización en Asia y América las grandes naciones colonizadoras. La colonización había respondido á fines distintos en el curso de la historia. Colonia por expansión, colonia por dominio, colonia por explotación: he aquí las tres formas de colonización que se presentan en el correr de los tiempos. Mas es de notar cómo dentro de cada una de estas formas apuntan las otras, y de qué manera tan diferente la realizan los distintos pueblos que toman sobre sí esta tarea, de acuerdo siempre con el carácter particular y las condiciones singulares de su vida.

La colonización moderna, bien lo sabeis, reviste por muchos motivos que afectan á la historia general de Europa, el carácter de explotación; mas el empeño se realiza de diverso modo por Inglaterra y Holanda, que por España y Portugal; y aun tratándose de estos dos últimos pueblos, son también notorias las diferencias. Inglaterra se preocupa casi exclusivamente de crear factorías, proteger su navegación y su industria é imponer tributos. Todas las cuestiones que hasta 1810 en América y 1855 en Asia sostiene la Gran Bretaña en sus colonias, revisten un carácter mercantil. Holanda, que en América aparece más expansiva y que admite á los navegantes de todos los países, en Asia llega hasta la constitución de esa colonia de Java, opuesta á todo el espíritu moderno, pero que, no obstante, algunos economistas adocenados presentan como ejemplo á nuestras Filipinas.

Los pueblos latinos ya se fijan en otra cosa cuando de

los Anda, tipos de aquella pléyade de grandes gobernantes que España dió á sus colonias, y por los que se sostuvo en Ultramar nuestro imperio, falto ya de sávia y extraño al movimiento general de los tiempos, cayeron las Filipinas ante las exigencias de la Casa de Sevilla, y por la debilidad de las Cortes de Felipe IV y Carlos II, en poder de la teocracia, que allá se aseguró y subsistió mientras Carlos III la aventaba del Paraguay, donde hoy podemos todavía contemplar sus espantosos efectos. Yo no conozco, señores diputados, un fenómeno más notable que esta negación perfecta de todos los orígenes y todo el carácter con que se inició y desarrolló nuestra gran colonia asiática.

Pero el hecho es que la teocracia era dueña de Filipinas en las condiciones más extremadas que podían imaginarse; porque su imperio se ejercía mediante una de las formas más rigurosas que la teocracia puede emplear, mediante los institutos monásticos. Y así se desenvuelve lenta y trabajosamente aquella sociedad, planteándose una serie infinita de problemas, entre los que no es el menor la viva lucha entablada casi desde principio de este siglo, entre el clero regular, de suyo exclusivo y absorbente, y el clero secular, representante de una vida más expansiva y simpática; y aun dentro del primero, entre las diversas órdenes y los grupos distintos que constituyen cada una de ellas.

Mas llega la Revolución de Septiembre, y sorprende á aquella sociedad sin que sus elementos fundamentales hubieran recibido influencias de los nuevos tiempos. Sin embargo, allí vivía el germen de grandes progresos: y ya por la maldad misma de las cosas, que no podía llegar á más; ya por esa circunstancia verdaderamente deplorable de nuestras colonias, que ha obligado á sus hijos á buscar

la luz y la instrucción fuera del país, á donde vuelven conociendo nuevos horizontes y abrigando nuevas aspiraciones; ya por el instinto mismo del pueblo, que recibe, á las veces, misteriosos avisos que le conmueven y predisponen para acoger la buena nueva, el hecho es que la revolución es saludada con amor, y desde entonces principia en Filipinas un movimiento, que loco será el que no vea ó no sienta.

Y este movimiento debía afectar á la organización teocrática de aquella sociedad, y así principió por hacerse sentir en los centros de enseñanza, y por traducirse en pretensiones respecto de la organización religiosa. Yo me prometo, señores, profundizar estas cuestiones en no lejano día, porque me prometo que no tardará mucho el señor ministro de Ultramar en traer las leyes de que habla el art. 108 de la Constitución; mas por hoy debo hacer constar que el señor Moret sintió los latidos del nuevo movimiento y se propuso secundarle, primero reformando la enseñanza, y después creando un cuerpo de administración civil.

No necesito, señores diputados, detenerme en mostrar la importancia y el enlace de estas materias; tampoco debo decir cómo y por qué las tengo por incompletas y aun equivocadas en ciertos puntos. Pero lo que sí me cumple es afirmar que llevadas á cumplido efecto, después de la reforma fundamental del Sr. Becerra, hubieran cambiado grandemente las condiciones de la sociedad filipina, preparándola de admirable manera para recibir el espíritu de la nueva época y las transformaciones que hace necesarias en nuestro imperio colonial la vida que hemos comenzado en la Península, á partir de Septiembre de 1868.

Y ¿cómo no, señores diputados? Por un lado se arrancaba el monopolio de la enseñanza á los dominicos, que allá

en Filipinas habían bastardeado la gran tradición de los omistas, ya encerrándose en su macarrónico latin, ya haciendo que en su Universidad se explicase, como se explicó hasta 1864, el sistema de Tolomeo, ya afirmando por boca del rector de aquel establecimiento en 1870, que los progresos de la inmoralidad y de la instrucción eran paralelos. Por otra parte, se constituía un cuerpo de administración, dotado de grandes condiciones de inteligencia y de estabilidad, que por su propia naturaleza había de tender á mermar el poder teocrático, más que su rival y su opuesto, su decidido enemigo.

Y no se diga que entrambos acuerdos eran deficientes y entrañaban no pocos peligros. Yo bien sé que al fin y al cabo la Universidad civil de Manila no era la libertad de enseñanza, y no se me oculta que las condiciones asignadas al cuerpo de administración civil, cuyo ingreso debía ser por oposición y de modo muy análogo al practicado en Inglaterra y Holanda, eran las más á propósito para constituir allende los mares una poderosa burocracia. Pero es innegable que estas y otras imperfecciones hubieran podido subsanarse en un brevísimo plazo, ensanchando, como antes he dicho, el círculo de los propósitos del ministerio de Ultramar, y llevando con ánimo entero á Filipinas el título I de la Constitución española de 1869.

Fuera de esto, y consideradas en sí mismas las reformas del Sr. Moret, tenían una gran importancia. La cuestión de empleados será siempre capital en Ultramar. No voy á hablar mal de ellos: soy hijo de uno que allí dejó—lícita me sea esta jactancia—un nombre venerable y venerado. Conozco muchos modelos de probidad é inteligencia; pero también se me antoja incontestable el hecho de que la inmensa ma-

rren; pero sí diré que me consta que debiendo estar formado el escalafón del cuerpo de administración, ni siquiera se ha reunido la junta calificadora; y es notorio que los ejercicios de oposición para el ingreso en el cuerpo, que debían haberse celebrado el 1.º de Junio, no han tenido efecto, con grave perjuicio de algunas personas que habían tomado en serio el decreto del Sr. Moret. De aquí deduzco claramente que todo lo relativo al cuerpo de administración está en suspenso.

Pero lo referente á la enseñanza es más incontestable. Yo no sé lo que habrá ocurrido en Filipinas; pero sí sé que aquí se había citado á todos los licenciados y doctores que quisieran hacer oposición á las cátedras de la Universidad de Manila. Acudieron muchos al llamamiento; escribieron sus Memorias; depositáronlas, como estaba dispuesto, en el Ministerio de Ultramar, y aguardaron aquí que terminase el plazo de la convocatoria. Pero este terminó y no fueron convocados, y ellos, que debían estar en Manila el 1.º de Junio de este año, hoy no saben si el decreto del Sr. Moret fué verdad ó fué broma. De aquí deduzco que también está en suspenso la reforma de la enseñanza.

Y todo me duele, pero mucho, por el Sr. Ayala. S. S. es un hombre de talento; ha vivido siempre en la región celeste de las ideas, y su espíritu ha estado siempre abierto á todas las inspiraciones generosas, á todos los afectos desinteresados. S. S. es un gran poeta que no tiene que lamentar una sola infidelidad de esas Musas á quienes recrea y enamora; S. S. ha vivido eternamente contemplando los progresos de la inteligencia y simpatizando, de seguro, con todas las tentativas del pensamiento para romper el *carcere duro* de la preocupación, de la ignorancia y del oscurantis-

excesos que naturalmente se amparan de su sombra. Y el Sr. Moret discretamente se prepara á suavizar los obstáculos y á allanar el terreno para que las Cortes puedan cumplir el art. 109 de la Constitución y dá sus decretos... Pero los decretos no se cumplen; se dejan en suspenso.

Mas todavía suceden cosas peores, y estas cosas ocurren en Cuba. Claro se está, señores, que después de lo que he dicho al principio de este discurso, no he de consagrar ahora muchas palabras á la situación tristísima de la grande Antilla. Su mero recuerdo me aflige; y aunque fuera aquí pertinente, que en verdad no lo es, el hablar de los terribles dolores que para aquella tierra, ahita de sangre y cuajada de maldiciones, ha traído la espantosa y fratricida guerra que ultraja á la naturaleza entre los bramidos del mar de los trópicos y la tristeza de aquellos espléndidos cielos, aunque fuera pertinente, digo, yo no podría consagrarle en estos momentos la atención tranquila, reposada, reflexiva, que es necesaria para recoger todos los detalles y formular juicios con arreglo á la ley moral.

¡Ah, señores! Lo que ha pasado en Cuba en esta línea de violencias y de horrores, es indescriptible. Ni me extraña, ni puedo ahora hacer más que condenarlo de pasada, pero con toda mi alma. Y no me extraña, señores diputados, porque yo pretendo conocer algo nuestro carácter, fácil á ciertos arrebatos y ciertos extravíos; y harto demuestran con su arrojo y con sus excesos los que en Cuba pelean, que por más que la lengua de los unos en el paroxismo de la rabia, maldiga de la patria que hasta poco hace les dió bandera, españoles son todos, con todas sus condiciones, sus rasgos, sus vicios, sus virtudes, sus grandezas y sus caídas, sus errores y sus inspiraciones. Porque también

desgraciados para quienes se ha hecho la apoplejía de sobremesa, y á cuya imprevisión, cuya ceguedad y cuyo abandono están reservadas las súbitas catástrofes de las ciudades malditas, la terrible sepultura de Pompeya y Herculano.

Pero de esto no me debo ocupar. Ahora no me importan los extravíos de la guerra civil; lo que me ocupa es lo ordinario, lo sistemático, lo que parece tomar carácter de normal; aquello en que puede influir el Gobierno, aquello en que *debe* influir y de lo que es responsable en esta Cámara.

Y en este sentido veamos lo que en Cuba viene sucediendo de seis meses á esta parte. Dos intereses capitales tiene el Gobierno en Cuba: el uno, el de la abolición de la esclavitud; el otro, el de la integridad nacional. Para mí, señores, todo es uno.

Yo no creo ni puedo creer que la honra de España tolere la subsistencia de la servidumbre de los negros, máxime siendo, como al parecer somos, los postreros en concluir dentro del mundo civilizado con esta infamia que tan magnífica y elocuentemente condenó la Junta revolucionaria de Madrid, allá en 1868, en aquellos memorables días en que discutíamos acaloradamente en el Circo de Price si la abolición se había de contar desde el 12 ó el 29 de Septiembre. *Quantum mutatus ab illo!*

Yo tampoco he podido nunca creer que la cuestión colonial se resolviese sin empezar por quebrantar las cadenas del esclavo, con aquella misma rapidez, con aquel mismo ánimo, con aquella misma imprevisión, si quereis, con que nuestros padres aplastaron en un solo día, sin preparaciones, ni grados, la vergüenza de los señoríos. He creído siempre esto, y hasta tal punto, que cuando algunos dignísimos

amigos muy entendidos en estas cosas ultramarinas, decían: «¡dad libertad á los blancos que ellos emanciparán á los negros,» replicaba yo; «emancipad antes á los negros, que lo demás vendrá *por añadidura*». Yo, en fin, señores, no creo hoy, no puedo creer que la insurrección de Cuba concluya, si no concluye antes la esclavitud de los negros.

Pero, en fin, para el Gobierno el interés de la abolición era un interés particular. El mundo civilizado la exigía; la reclamaban, tomando todos los tonos compatibles con la dignidad de España, los Gabinetes extranjeros; la imponía la misma conducta de los insurrectos cubanos, que la habían decretado sin condiciones, y la voluntad, en fin, de este país, nunca sordo, nunca abandonado, nunca indiferente á las grandes causas, cuando le solicita una activa propaganda. Y el Gobierno, pagando tributo á todo esto, se había resuelto á un paso: á la ley preparatoria del mes de Junio del año 70.

Vosotros recordareis que la ley tenía en rigor dos partes. La primera concedía la libertad nada menos que á 64.000 esclavos: 56.000 en Cuba y 8.000 en Puerto Rico, y esto lo hacía mediante cuatro artículos. Los niños menores de dos años y los que naciesen en lo sucesivo serían libres, aunque sometidos al *patronato*. Seríanlo también los mayores de 60 años. Deberíanlo ser los antiguos emancipados, y por último, los siervos de los insurrectos, siempre que hubiesen prestado servicios al Gobierno español. La segunda parte de la ley se refería á la esclavitud subsistente; se prohibía la separación de familias y ciertos castigos corporales.

¿Y qué ha sucedido con esta ley, que no califico ahora? Sabedlo, señores diputados: que no se cumple en Cuba. Algo

peor que esto, que se ha anulado en Cuba. Y el hecho es incontestable. Primeramente la ley promulgada aquí no se promulgó en aquella isla mientras los periódicos esclavistas de Madrid, con una frescura y una inocencia piramidales, nos daban todos los días la seguridad de que la ley había comenzado á surtir sus efectos en ambas Antillas. Y solo merced á una denuncia incesante por parte de la prensa liberal, se consiguió que el señor ministro Moret exigiese al general Caballero la promulgación de la ley en Cuba. Y la promulgación vino el 29 de Septiembre, esto es, tres meses largos después de hecha en Madrid; pero se hizo con un artículo adicional que la dejaba en suspenso. Nuevos engaños y nuevas protestas; y al cabo en Noviembre se rectifica el artículo adicional, pero no se deja en vigor la ley, sino pura y simplemente para los niños que al fin iban á entrar en patronato, y para los siervos de los insurrectos, que de seguro no suben á 200. ¿Qué se ha hecho de los 20.000 esclavos mayores de 60 años? Permanecen, á pesar de la ley, en servidumbre. ¿Qué de los 6.600 emancipados?

¡Ah! respecto de los emancipados sucedió algo más terrible. Yo no puedo hablaros de la espantosa suerte de estos desgraciados, que solo debían vivir cinco años en patronato, y cuya suerte, con arreglo á los tratados, debieran ser la envidiable de los libertos de Sierra Leona. Básteme llamar la atención sobre el precepto terminante de la ley de Junio: los emancipados debían entrar inmediatamente en el pleno goce de la libertad. No había ninguna reserva, ninguna condición, ningún patronato ni aprendizaje de ningún género.

Pues bien, esos desgraciados continúan siendo hoy siervos, mediante un contrato de trabajo por ocho años que han

de la Habana, hoy el grueso de las fuerzas de los insurrectos de Cuba está formado por negros y chinos. Y bien, señores, ante esta complicación, ¿qué medidas toma el Gobierno?

Quiero y debo ser justo: el actual señor ministro acaba de acordar la prohibición de la inmigración china, y este decreto, con el referente á los bienes embargados, quizá constituyen lo único bueno que se debe á la administración de S. S. Sin embargo, no estoy tranquilo, y posiblemente tampoco lo estará el Sr. Ayala, porque los periódicos de estos días han copiado un telegrama en que se afirma que en Cuba se resiste el decreto sobre embargos, y ayer mismo he leído que á Madrid han llegado los representantes de una *filantrópica* sociedad para pretender la revocación del decreto sobre chinos y echar las bases de una gran inmigración ¡libre! de asiáticos, africanos y europeos.

Pero aun dando por cierto que S. S. se haya de resistir á tales exigencias, evidente es que esas medidas no tienen una importancia tan de actualidad, como todo lo que se resuelva respecto á los negros. Porque yo os pregunto: ¿qué esperanza dais á esos negros que hoy corren los campos de Cuba en plena libertad, y que de ella vienen gozando hace dos años? ¿La libertad? Pues y entonces, ¿qué será de los negros no sublevados! ¿La servidumbre otra vez? Es decir, la servidumbre horrible, infernal, incomparable del *cimarrón* cogido en el *palenque*. ¡Ah, señores diputados! Pensad en esto, porque en esto estriba por mucho la cuestión de Cuba.

Aquí se habló demasiado de Santo Domingo, y sin embargo, ahora es cuando Cuba principia á tomar el carácter de la Antilla negra. Porque ¿qué otra causa que la reducción á servidumbre de todos aquellos negros que acaudilló Toussaint L'Ouverture, fué la que produjo el levantamiento

de Dessalines y Cristóbal en aquellos terribles días de 1802?
¡Dicen que la abolición!

Falso de toda falsedad. Abrid la historia. Preguntad á Thiers, á Schoelcher, á Ferie. La abolición fué decretada en 1793 y terminó las diferencias entre blancos y mulatos, suscitadas en 1790 por las tímidas declaraciones de la Constituyente. La Revolución y las matanzas no vinieron hasta que Napoleón, en 1802 y después de la paz de Amiens, quiso resucitar la trata, asesinó á Toussaint L'Ouverture y proclamó de nuevo la esclavitud en Santo Domingo, que había sido abolida nueve años antes. Por cierto que la abolición sirvió (contra todo lo que el vulgo propala) para que los entusiasmados colonos de las Antillas francesas (blancos y negros) resistieran y expulsaran de aquellos países en 1793 á los soldados ingleses. De esa suerte, la abolición sirvió á la integridad nacional francesa.

¡Pensad, señores diputados, si puede haber analogías con lo que pasa en Cuba! Pensad si podéis reducir á servidumbre á los negros libres de la insurrección; pensad si esta es la hora de anular leyes como la preparatoria para la abolición, ó si es el instante de proclamar, dejando á salvo todos los intereses (que á esto no me opongo), la abolición inmediata! (1).

El segundo interés del Gobierno en Cuba es, como he dicho, la integridad nacional; y para dar fundamento á esto, no os he de hablar de patriotismo, que esta es, como todas las virtudes, prenda de que no se debe hacer gala, ni respecto de la que se pueden adelantar explicaciones ofensivas siempre al decoro del que las da. Acostumbrémonos á pres-

(1) Véase la nota referente á la abolición en Puerto Rico.

cindir de ciertos argumentos y á hablar sin necesidad de ciertas protestas. Y esto así, ¿queréis saber dónde está el fundamento, la razón decisiva de la conservación de Cuba? En nuestro deber.

El conflicto cubano sólo tiene una de estas tres soluciones: la cesión de la grande Antilla á otro pueblo amigo; el abandono, ó sea su independencia, y el mantenimiento de nuestro imperio en aquella isla. No voy á discurrir sobre estos extremos: quiero únicamente insinuar mi juicio.

Pues bien, la cesión equivaldría al pleno reconocimiento de nuestra actual impotencia para toda obra de exteriorización; esto es, para llevar nuestro espíritu y nuestro carácter fuera del horizonte sensible de esta tierra, dotada en otros tiempos de grandes facultades para colonizar. Y esto sería tanto más grave, cuanto que nuestra impotencia se patentizaría en los mismos días en que las grandes corrientes de la civilización conducen á estos empeños de dilatación. Y tanto más vergonzoso, cuanto que después de haber consentido en que durante el último siglo y en lo que va de éste se bastardease en América y en Asia nuestra gran tradición colonial, renunciábamos á la gloriosa empresa de rectificar nuestros extravíos y curar los males de nuestras colonias.—En cuanto al abandono... sería simple y llanamente un crimen de lesa humanidad.

En este supuesto nos corresponde el mantenimiento de la integridad nacional; pero, entiéndase bien, no como una mera satisfacción á nuestro amor propio ofendido, no como una pena á los que se han rebelado contra la madre patria, no, en fin, como una empresa militar, como un empeño de fuerza. No. Cuba debe conservarse para España;

mas para que España cumpla en aquella tierra los grandes deberes que impone la justicia y la civilización.

Por esto, más que por otras razones, yo lamento los medios de que el Gobierno se está valiendo para la pacificación de Cuba. Y eso que de poco acá es necesario hacer justicia á los buenos deseos de algunas de las autoridades militares de aquella isla. Yo, señores, he combatido rudamente al señor general Valmaseda, aunque en los términos que mi educación y mi lealtad consienten. Su actitud al tiempo de publicar aquel terrible bando de Bayamo, que escandalizó á la prensa nacional y extranjera, exigía una protesta, con tanta mayor razón, cuanto que aquello podía ser meramente un pasajero extravío.

Pues por lo mismo hoy quiero enviar desde aquí mi humilde pláceme á la primera autoridad de Cuba por las tendencias humanitarias y el pensamiento político que en la actualidad revela, y le enviaría también á otros bravos soldados que allí sostienen verdaderamente nuestra honra, si no temiese que esta sencilla felicitación fuera causa de su expulsión de la isla por las muchedumbres desatentadas.

¿Pero cuáles son esos medios de que el Gobierno se vale, ó que *sufre* el Gobierno, para concluir con la insurrección de Cuba? ¿Acaso corresponden los medios al fin? ¿Por ventura con ellos terminará la guerra *pronto y bien*, dos condiciones precisas para los que no miramos la guerra de Cuba bajo el punto de vista de las zafra, de las liquidaciones y de las contratas?

Los medios hasta hoy utilizados ó tolerados son estos: el envío anual de 8 á 10.000 soldados; los fusilamientos y los embargos en grande escala; la privanza de los intereses

y las aprehensiones de un partido exclusivo sobre todo cuanto existe y cuanto se hace en la grande Antilla. Y de esta manera, yo os digo que no concluiréis la guerra de Cuba. Yo os anuncio nuevas complicaciones. Yo os profetizo mayores desastres, aunque inmediatamente consigáis refrenar la insurrección, y á pesar de que yo crea que la insurrección agoniza (1).

Porque si miramos la cuestión como cuestión de fuerza (y no es, en verdad, este el único carácter, ni siquiera el principal, del conflicto de Cuba), lo que urge es enviar de un golpe 25 ó 30.000 hombres que hagan la campaña en un breve plazo, evitando el actual copioso derramamiento de sangre que asusta y cada vez ahonda más el antagonismo de aquellos partidos, y poniendo un límite al suplicio lento á que está sometido nuestro ejército, obligado á soportar meses y meses la crudeza del clima y las privaciones y rigores excepcionales de aquella lucha que en dos años nos ha proporcionado más de 20.000 bajas.

Dad, pues, la voz de alarma; abrid los enganches; decid que necesitáis soldados para concluir la guerra en ocho ó diez meses, y tened seguridad de que os sobrarán soldados, porque aquí hay siempre afición y aliento para los empeños de armas.

Pero concluid al mismo tiempo con los fusilamientos y los embargos. Yo no sé á cuántos millones de pesos sube hoy el valor de los bienes embargados, ni á cuánto montan los perjuicios producidos por esta gravísima infracción de todas nuestras leyes procesales; pero en cambio, aquí tengo una nota circunstanciada del número de insurrectos y sim-

(1) Véase después el texto del convenio del Zanjón.

patizadores, más ó menos verdaderos, fusilados, agarrotados ó muertos violentamente, pero fuera de la lucha. Este número se eleva, señores diputados, á cerca de 5.000. Y pensad, señores, la ineficacia de este derramamiento de sangre; considerad que las ideas solo se matan con otras ideas, y que si hay algún argumento decisivo en contra de esas violencias y esas ejecuciones, lo dan esas lápidas donde están escritos los nombres de nuestros precursores; lo damos nosotros mismos sentados hoy en estos escaños, después de haber sido ayer perseguidos; lo dáis, en fin, vosotros, señores ministros, que ayer habéis tenido pregonadas vuestras cabezas. ¡Basta de sangre en Cuba, basta! Ved que esos rebeldes son nuestros hermanos, y que el verdugo nunca ha probado nada.

Pero todavía hay quizá algo más grave que todo esto. Tal como las cosas se van ofreciendo y desarrollando en la grande Antilla, no hay allí porvenir más que para las exageraciones y los arrebatos, de los cuales la primer víctima es la dignidad nacional. Porque, señores, lo que priva en Cuba es una especie de autonomía colonial, pero irregular, contradictoria, absurda; autonomía que niega el sumo imperio de la Metrópoli, pero que compromete á ésta y la arrastra vergonzosamente á donde bien parece á un partido ofuscado en el calor de la pelea.

¿Lo dudáis? Pues ved lo que sucede con las leyes de nuestras Cortes y los decretos de nuestros ministros. Ya habéis oído cómo se ha anulado la ley preparatoria de la abolición. Sabed ahora que allí se han deshecho nuestras leyes de procedimiento, poniendo á los consejos de guerra sobre los tribunales ordinarios; y, en fin, ¡vergüenza me da el decirlo! allí se ha resucitado la pena de confiscación, con el

mismo derecho con que se podrá resucitar cualquier día la pena del tormento.

Pero venid á la práctica de la vida. Recorred las columnas de aquellos diarios manchados siempre con los anuncios de *bozales*, y allí veréis series de artículos contra los derechos individuales, contra las reformas ultramarinas, contra la situación de Septiembre, y en pro de los embargos, de las confiscaciones, y ahora, de la fijación de precios á las cabezas de los insurrectos. Oid la voz de aquellos casinos, y sabréis que se pide la negación de la libertad de los portorriqueños, y hasta una excepción en nuestra vida política, una cortapisa, un límite para nuestra prensa y nuestra tribuna siempre que se trate de las cosas ultramarinas, y si el Sr. Moret estuviera aquí os explicaría de qué manera tan escandalosa se insulta, se ha insultado en la Habana á los ministros, á los diputados, á todos cuantos no opinan como los frenéticos directores de aquellas masas. ¡Y esto se hace allí donde rige la previa censura y priva el estado de guerra!

¡Ah! yo os aseguro que esto no puede seguir así. De esta manera quien en Cuba alza la voz no es España, no es el Gobierno: es simplemente un partido. Y desde este momento la cuestión toma un carácter deplorabilísimo. Ante ese partido lo sacrificamos todo; porque no olvidéis que nosotros (los que aquí vivimos) somos los que enviamos soldados á Cuba, y los que á la postre, y como es natural (y como ya lo demuestra el proyecto del Sr. Moret, para regularizar la situación del Banco de la Habana) los que en definitiva haremos frente á la deuda creada en la grande Antilla.

Además, ¿qué porvenir se le depara á la Isla, qué suerte

á los arrepentidos, á los presentados, á los vencidos, si un partido es el triunfador en vez de serlo España? ¿Qué perspectiva se les ofrece?

Tengamos resolución. Creéis que en Cuba sólo se debe hablar de guerra: no discuto ahora el procedimiento; pues bien; sea. Pero declarad el estado de sitio. Que todos enmudezcan, y sobre todo, que nadie hable para abrir las heridas y avivar los odios. No os pido que hagáis lo que los Estados Unidos en 1867: os recomiendo sólo la actitud de Inglaterra en el Canadá en 1848.

Y desde luego creo que esta actitud encontrará aplausos en los mismos defensores de España en Cuba. Yo no tengo por qué hablar ahora de los Voluntarios, y menos para agobiarlos con diatribas. En aquel cuerpo ha habido y quizá hay muchos fautores de punibles excesos; pero también en su seno se cuentan hombres llenos de buena intención, y que, amantes de su patria, no pagan tributo á las exageraciones de la guerra civil. El señor ministro de Ultramar de seguro sabe que hoy de nuevo apunta allí una tendencia pacífica y de conciliación. Apresurémonos á secundarla; apresurémonos á echar las verdaderas bases de pacificación de Cuba.

Pero, lo repito, para esto es necesario que se refrenen los ímpetus del partido dominante en Cuba: es preciso que se le haga entender que quien manda allí es el Gobierno español: es indispensable que se atajen aquellos extravíos y aquellos arrebatos.

Porque no hay que dudarle; si hoy no corregís aquellos excesos, mañana os será imposible. ¡Y mañana es indispensable, de todo punto indispensable, proclamar la libertad en las colonias! Sí, la libertad, porque á ella tiende todo en el

mundo, porque sin ella no se vive en el siglo XIX, porque por ella clama y se mueve todo cuanto es, cuanto vive, alienta y palpita en la virgen América. Sí, la libertad, porque estáis solemnemente comprometidos á proclamarla, revolucionarios de Septiembre, y para vuestros actos está el tribunal de la historia.

Y bien: si hoy enmudecéis ante el partido absolutista de nuestras Antillas; si no dáis la mano á los que quieren la integridad nacional, pero también la libertad; si consentís en que la autoridad de la Metrópoli se desconozca, ¿qué porvenir nos aguarda? Aún peor que el de Méjico en 1823. Recordadlo.

Entonces, como ahora en Cuba, el Consulado de comercio y una buena parte de los grandes personajes de aquella colonia se mostraban, no sólo enemigos de la insurrección separatista, si que aferrados á la continuación del *statu quo*. Guerrero, el cabecilla insurgente, corría los campos, pero la insurrección agonizaba. Nuestras Cortes se vieron forzadas á decretar, por la lógica de las cosas y por compromisos de honra, medidas liberales para Nueva-España, y entonces alzaron el grito contra la patria Itúrbide y el obispo Pérez, y el Consulado y todos aquellos intransigentes de la víspera. Y el imperio de España cayó porque se unieron los insurgentes y los leales; pero—bueno es que no se olvide—cayó nuestro imperio para ser á poco expulsados todos los españoles del territorio americano. ¡Lección elocuentísima que no debemos olvidar ni aquí ni en Cuba!

Pero ya no debo ni puedo extenderme más. Ya habéis oído de qué modo entiendo yo que podéis concluir con el conflicto cubano, dentro siempre de vuestras ideas y aun aceptando vuestras prevenciones. No me argumentéis di-

ciendo que podría hacerse mejor. Lo sé; pero en todo este discurso no he emitido mi opinión entera, porque tal vez me tachárais de ideólogo y de seguro no conseguiría efecto tan pronto como es necesario. Insisto en que todo cuanto he sostenido cabe dentro de vuestros principios; á todo estáis seriamente obligados; todo es por completo imprescindible. Concluid la guerra de Cuba. Se debe concluir, porque nos va en ello la honra y el porvenir. Concluidla con vuestro criterio, pero concluidla *pronto y bien*.

Mas viniendo ya al objeto principal de este discurso, y para terminarlo, permitidme que os recuerde resumiendo lo dicho, qué es lo que sucede en nuestras Antillas con las leyes de las Constituyentes y los decretos del Gobierno; y permitidme asimismo que evidencie lo equivocado de la conducta del señor ministro de Ultramar.

Lo habéis oído: en Puerto Rico se mistifican las leyes; en Filipinas se suspenden; en Cuba se anulan. He aquí lo que se ha hecho después de la disolución de las Constituyentes: he aquí toda nuestra política colonial. Ahora no es mucho que espere las explicaciones del Sr. Ayala; porque por este camino solo se va á la perdición.

Voy á concluir, señores diputados, pero antes de verificarlo os pido licencia para hacer una declaración. Mejor dicho, para consignar por vez primera una idea propia respecto de nuestras colonias, independientemente de los compromisos y de las ideas del Gobierno, que han sido, por hoy, el punto de referencia de todas mis observaciones.

No quiero sentarme sin proclamar enérgicamente que sobre todo esto urge una necesidad, y ésta se reduce á hacer la reforma democrática de nuestro mundo colonial.

Nada os hablaré de la íntima relación que por espacio de

tres siglos ha tenido nuestra historia con la de América; nada de las influencias que, á partir del siglo XIX, constantemente vienen ejerciéndose por el nuevo mundo sobre el viejo; nada de los resultados que para la causa de la libertad en nuestra patria han producido los sucesos de 1810 y 1820, allende el Atlántico. Pero en cambio fijaos por un momento en el carácter de la Revolución de Septiembre, en la situación política de la Península, y en la economía y las condiciones de nuestras colonias. Esto así, no extrañaréis que os afirme que la reforma de nuestro orden colonial es el complemento inexcusable de este movimiento de 1868 que nos ha abierto los grandes horizontes y las soberbias perspectivas de la moderna democracia.

Considerad, señores, cómo los intereses ultra-conservadores se han agrupado, por admirable instinto, sobre la cuestión colonial, y á propósito de ella libran batallas á la libertad de imprenta, al derecho de reunión, al sufragio universal, haciéndolos incompatibles con la integridad de la patria, como antes decían que lo eran con la religión, con el orden y con la propiedad. Consideradlo, y ved si esta cuestión, revestida hoy de un carácter excepcional y exclusivo, no tiene una importancia y una transcendencia inmensas para la suerte de la patria y para el arraigo y el robustecimiento de las conquistas de Septiembre.

Y no podía ser otra cosa. Si consagráseis el *statu quo* en las colonias por preocupación ó por indiferencia (hipótesis que no admito), al mismo tiempo permitiríais que el espíritu de la Reacción os echase una cadena, con la que os sería imposible hacer vuestra jornada por el camino del porvenir, porque siempre pesaría sobre vuestra conciencia la terrible injusticia de haber condenado á aquellos países á lo

mismo que aquí creéis incompatible con nuestra honra, y siempre hablaría en daño de la pureza y la sinceridad de vuestras opiniones, redundando, á la par, en perjuicio del orden político que habéis creado y tratáis de consolidar, el reconocer allende los mares el principio de las escuelas negadas ó contradichas por el tít. I de la Constitución del 69, el absurdo y anacrónico principio de que el derecho de los individuos y las libertades de los pueblos, no solo son concesiones más ó menos graciosas del Poder, sino que dependen sustancialmente de las condiciones físicas y las circunstancias históricas de las comarcas, de las exigencias de la geografía, de las latitudes, de las distancias y de los climas, lo mismo que de los mandatos y los compromisos de la tradición.

Por tanto, es preciso que no nos abandonemos ni nos distraigamos. Es necesario estar muy sobre nosotros mismos en estos momentos difíciles y no transigir, por ningún concepto, con inconsecuencias y extravíos que si al principio parecen perjudicar sólo á nuestros hermanos de Ultramar, á la postre y como siempre ha sucedido, transcenderían al orden interior de la Península: que lo semejante clama por lo semejante, y el abismo llama al abismo.

Es indispensable precavernos contra las preocupaciones que engendra la guerra no menos que contra los esfuerzos de esos reaccionarios, que al grito de ¡Viva España! pretenden imponernos el más religioso respeto á los lugares de refugio que se han buscado y de que hoy disfrutaban en Ultramar, en tanto logran de nuevas concesiones y nuevos privilegios robustez para sus fuerzas y mayor alcance para sus manejos: ¡peligro inmenso en estos instantes en que la obra revolucionaria exige toda clase de

desvelos y no consiente una atmósfera perturbada por los efluvios corruptores del *barracón* y del *refectorio*!

¡Ah, no lo olvidéis, hombres del 1869! Ahí tenéis la historia; siempre, siempre los enemigos de la libertad en América han sido los enemigos de la libertad en España. Aprended de ellos; sed avisados; sed lógicos.

Pero no es esto solo. No es únicamente el interés de la España revolucionaria; no es solo el interés de esta situación política, por cuya integridad estáis obligados á velar con tanta energía como la que muestran nuestros adversarios para destruirla. Algo más, pero muchomás, pesa en esta cuestión para excitarnos á llevar con voluntad decidida el nuevo espíritu allende los mares.

La sociedad española atraviesa un momento supremo trabajada por tantas revoluciones y por luchas tan terribles y de tan diverso género como todas las que llenan el período de 1809 á 1868. Hoy, en medio de no escasos errores y no pocos peligros, hemos llegado á conseguir un triunfo, una legalidad común para todos los partidos. Consagrada la libertad de la palabra y proclamado el sufragio universal, abiertas están las puertas del poder á todos los bandos y á todas las opiniones. Llega quizás la hora de un alto; llega el momento del descanso. Pero la vida, y la vida en estos pueblos latinos, tan hechos á perderse sin agotarse nunca, no tolera la delectación celeste, ni el estilismo, ni la paciente reflexión de los pueblos germánicos. *Pelear es nuestro descanso*, y el alto que se hace necesario en nuestro desenvolvimiento exterior, no lo podremos conseguir sino dando nueva dirección á nuestras fuerzas. De aquí la urgencia de una gran política internacional, que ya presiente nuestro pueblo con su magnífico instinto; de aquí la urgencia de una gran política de

exteriorización, sujeta á las leyes del tiempo, y que se lance en las grandes corrientes de la época. Y esta política no puede ser una política de aventuras, ni de violencias; no puede ser una segunda campaña de Africa, ni una guerra católica en Roma.

Sus objetivos son claros: Portugal aquí, América allá.

Vedlo, señores diputados, vedlo en interés de esta hermosa Patria que ha llenado el mundo con sus homéricas empresas, y que sacrificándose tantas veces por la suerte de Europa y de la civilización, ora deteniendo á los árabes, ora lanzándose á América, ora entumeciéndose en la intolerancia religiosa, ora persiguiendo todas las inverosimilitudes y entregándose á la locura de lo imposible, tiene derecho—sí, lo tiene reconocido por la Providencia—para buscar y hallar el pago en los anchos caminos de la Historia. Vedlo, señores diputados, y proclamadlo. Mas proclamad también que, así como nuestra inteligencia y nuestra unión con Portugal no se hará mientras nuestra cultura no crezca y nuestros arrebatos no se templen, así nunca llegaremos á recoger amorosamente en nuestros brazos á esa familia española repartida en el continente americano, y que tantas veces y por boca de sus mejores poetas, sus grandes oradores y sus primeros estadistas, ha evocado el sagrado nombre de su madre: nunca lo conseguiremos, mientras España aparezca en sus colonias y á la puerta de aquellos pueblos como el ciego representante del monopolio, la dictadura y la esclavitud.

He dicho.

NOTAS

I

UN DISCURSO EN ASTURIAS

El periódico más antiguo y popular de Asturias, extraño á toda parcialidad política, *El Carbayón* de Oviedo, reseñaba de la siguiente manera el *meeting* verificado en Infiesto en 2 de Septiembre de 1897:

«MEETING» DE LA FUSIÓN REPUBLICANA

Cuando el tren llegaba á Infiesto, á las doce menos cuarto, gruesos palenques fueron disparados, como saludando á los que de Oviedo iban para asistir al *meeting*.

Inmenso gentío ocupaba el andén y las inmediaciones, saludando todos á los Sres. Labra, Alvarez y Balbín, representantes, respectivamente, del Directorio de Fusión republicana, del Comité central y del provincial.

Acompañados de los Sres. D. José y D. Luis Arroyo, y seguidos de numeroso público, se dirigieron á la fonda del Sr. Pérez, donde se sirvió un espléndido banquete, en que reinó gran animación.

En el servicio se esmeraron por complacer, y lo han conseguido, las señoritas Eduarda, Filomena y Sofía, hijas de los dueños de la casa.

Terminado el banquete se trasladaron todos al local donde había de verificarse el *meeting*.

Era éste un amplio salón, capaz para más de 1.500 personas, y estaba

de bote en bote, ocupado por distinguidas señoras y bellas señoritas y casi todo el pueblo de Infiesto, no faltando representaciones de la mayoría de los pueblos del oriente de Asturias.

Principió el acto á las dos, haciendo la presentación de los oradores, en breves frases, D. Juan Bautista Sánchez, quien al mismo tiempo indicó el objeto de la reunión, que era posesionar en sus cargos á los individuos que habían de formar el Comité local de fusión republicana, en Infiesto.

El Sr. D. Eugenio Díaz, anciano sexagenario, empezó su discurso con las frases de salud y fraternidad, la paz sea con vosotros. Reseña su pasado y su presente y dice que en dieciseis años que fué concejal no hizo otra cosa que trabajar en bien del concejo. Desea que del acto de hoy resulte el bien de la patria.

El Sr. Balbín saluda á los republicanos de Infiesto en nombre de los de Oviedo y muestra su agradecimiento por las atenciones que le dispensaron, excitando á todos á que sean francos para decir lo que son.

Sigue D. Melquiades Alvarez, que en párrafos llenos de elocuencia y de calor, hace la crítica de los partidos monárquicos, quienes, dice, han perdido la fe en las ideas y el amor á la patria, no conservando más que el deseo del poder.

A todos, liberales y conservadores, alcanzan sus recriminaciones, porque todos, dice, son la causa de las desgracias que hoy pesan sobre España.

Silvela, Sagasta y Moret, ninguno se libra de sus censuras.

De Silvela, dice que enarbola la bandera de la moralidad. cuando él se negó á firmar el mensaje de los republicanos pidiendo la apertura de las Cortes para combatir la indemnización Mora. Cuando de las Cortes, cuyas elecciones siendo Ministro de la Gobernación, dijo Sagasta que estaban deshonradas antes de nacer.

Se extraña de la conducta de los Sres. Sagasta y Moret, quienes en la última crisis reclamaban el poder para salvar los altos intereses de la patria. y por la muerte de Cánovas aconsejan que los conservadores continúen gobernando.

Termina haciendo un parangón entre lo que sucede en España con los partidos políticos, y lo mismo que ha pasado en la república francesa, donde han caído de los más elevados puestos los mayores prestigios, ante la más leve sospecha de que habían pecado de inmoralidad

Su hermoso discurso fué muy aplaudido en casi todos los períodos.

Levántase el Sr. Labra y es saludado por nutrida salva de aplausos.

Celebra la animación y extraordinaria concurrencia del *meeting* y la presencia en él de muchas damas, que demuestra un positivo progreso en la cultura de la villa, y después de fijar la razón y el fin de esta reunión en Infiesto, organizada como el primer acto oficial del comité de fusión republicana, recuerda que el distrito de Infiesto fué el que hace veinticinco años le envió por primera vez al Congreso, donde sostuvo, despreciando las calumnias y arrostrando todo género de amenazas y de injurias, la abolición de la esclavitud, las libertades ultramarinas y la autonomía colonial, como el medio más seguro de afianzar la bandera y la representación de España en América, al mismo tiempo que la vida espléndida de nuestras Antillas. La pasión, la ignorancia y la codicia extendieron las injurias y las protestas que se formularon entonces contra el orador, á los electores de Infiesto y de Cangas, los cuales, como el propio Sr. Labra, disfrutaban hoy de la incomparable satisfacción de ver que todo el mundo, hasta sus antiguos enemigos, proclaman aquella política de libertades y de justicia, como la única digna y salvadora de España en los negros días que vivimos.

El público acoge con aclamaciones este recuerdo.

De esta victoria saca el Sr. Labra dos enseñanzas: una para los políticos nuevos que no deben arredrarse ni desesperar por la impopularidad momentánea de sus ideas, seguros de que teniendo razón y manteniéndolos honradamente y con perseverancia, al fin triunfan con aplauso general. La otra consecuencia es la autoridad que éxitos análogos dan á las personas que se anticiparon en la predicación de doctrinas y soluciones para recomendar otras nuevas que determinan las circunstancias. Por esto el orador se cree autorizado para asegurar que la solución de los evidentes males de ahora está en la república justiciera y expansiva, y que el medio de hacer posible la república en plazo breve es la fusión republicana, que pide, para el advenimiento, y, sobre todo, la consolidación de aquella institución, el esfuerzo disciplinado de todos los republicanos y el concurso patriótico de todos los hombres que se den cuenta de los peligros actuales, cualesquiera que hayan sido las actitudes y las opiniones que tuvieron antes.

El punto de partida de la Fusión republicana es la terrible crisis presente de la integridad moral y material de España y el peligro de

maticos de opinión dentro de una perfecta honorabilidad.—Y para lograr ese gobierno y la restauración de la república y la defensa actual de los principios democráticos, una organización seria y disciplinada de todos los republicanos, que deben posponer sus aspiraciones de escuela para cuando exista la república, que es su supuesto necesario.

Esto es el programa del momento

Para mañana las Cortes Constituyentes, donde todas las opiniones estarán representadas y producirán una Constitución reformable íntegramente por medios legales.

El orador no se explica que en estos instantes, cuando se trata de la vida de la patria y de los intereses fundamentales de la democracia, haya republicanos que se preocupen de puntos teóricos. En la fusión caben los republicanos todos, porque á nadie se niega su origen y su destino definitivo y el derecho de propagar individualmente sus particulares opiniones. Termina el Sr. Labra llamando la atención del auditorio sobre dos particulares. El primero consiste en la importancia extraordinaria que la fusión da á la acción local y á la cooperación de los comités municipales y provinciales, sin los que el Directorio no podrá hacer nada. Por eso en la fusión se reconoce al comité local pleno derecho para organizarse á su modo y para determinar la política local dentro del programa común y el interés general al partido.

El otro particular se refiere á la apremiante cuestión de Cuba, cuya guerra es preciso terminar cuanto antes; pero de un modo definitivo, de modo que en las Antillas ondee llena de prestigios la bandera de España, amparando las libertades contemporáneas. Con tal motivo el orador, profundamente emocionado, describió la intimidad de la vida antillana y la vida peninsular, produciendo hondo efecto en el auditorio, el cual le interrumpió con atronadores aplausos, cuando atribuía á los monárquicos la pérdida de los territorios hispano-americanos, primero por la venta de la Florida, luego por la torpe política, sostenida sangrientamente en Perú y México, por la intolerancia mercantil en la Plata y por afrentoso y reciente abandono de Santo Domingo.

Las últimas palabras del orador fueron para recomendar el sacrificio consciente pero absoluto de los intereses y preocupaciones personales al honor de la patria.

II

UNA CONTESTACIÓN AL MENSAJE DE LA CORONA

El Dictamen de la Comisión de Contestación al Discurso de la Corona de 1871 contenía el siguiente párrafo relativo á la cuestión de Ultramar:

«Fatal legado de antiguo régimen, durante el cual fermentaron las pasiones rencorosas y se preparó la explosión, es la guerra civil que arde en Cuba todavía; pero el Congreso de Diputados comparte con V. M. la esperanza de que pronto y dichosamente termine. La entereza del Gobierno, el patriotismo, valor y sufrimiento de la marina, del ejército y voluntarios, la pericia de sus jefes y el constante ahinco de la nación entera contribuirán á este fin, juntamente con la persuasión que ha de ganar al cabo la suerte de los rebeldes, de que sometidos alcanzarán las libertades que en balde quieren obtener por la fuerza. Su empleo estorba solo el cumplimiento de las promesas de la Revolución, las cuales no tardarán, sin duda, como el Congreso desea, en verse totalmente realizadas en la otra grande Antilla española, donde la paz no se ha turbado y donde el pleno goce de los derechos políticos y la abolición de la esclavitud no han de influir en que se turbe.»

Este Dictamen estaba fechado en 24 de Mayo de 1871 y llevaba las firmas de D. Nicolás M. Rivero, D. Francisco Romero y Robledo, D. Gabriel Rodríguez, D. Joaquín Mosquera, D. José Abascal y D. Juan Valera.

Mi enmienda tiene la fecha de 30 de Mayo de 1871 y lleva las firmas de D. Antonio Ramos Calderón, D. Ruperto Fernández de las Cuevas, D. José M. Villavicencio, don

III

MI DISCURSO SOBRE UNA ENMIENDA PARLAMENTARIA

En la sesión del 21 de Junio de 1871, el señor Presidente del Congreso de los Diputados invitó á los autores de las proposiciones ó enmiendas á la contestación al Mensaje, que todavía quedaban por discutir, á que las retiraran para facilitar la discusión de otros asuntos de interés urgente.

Con tal motivo yo pronuncié las siguientes palabras:

«Señores Diputados. muy breves palabras voy á pronunciar; pero se hacen de todo punto precisas, dada mi situación en esta Cámara, y dados los compromisos que he traído aquí. Las indicaciones del señor presidente de la comisión de Mensaje me obligan, sin duda alguna, por las muchas deferencias que á su señoría me ligan, y por las razones de gran peso que ha expuesto, á retirar mi enmienda; pero antes cumplo á mi propósito dar algunas explicaciones acerca de ella.

La enmienda que tuve la honra de presentar aquí, con otros amigos míos, tenía dos partes. La una propendía á provocar aquí y á sostener una cuestión gravísima, que tengo por la más capital de la política española. Creía yo que era llegado el momento de que se discutiesen en el Parlamento español seria y tranquilamente, pero con la frente alzada y con ánimo resuelto, las cuestiones todas que se refieren al problema ultramarino, y creía que era llegada la ocasión de que se sostuviera con hidalguía y con entereza las soluciones más patrióticas y más conducentes á dar la seguridad más absoluta á todos nuestros hermanos de Ultramar, de que aquí nadie pensaba en esas locuras de la venta de Cuba, en esas locuras de la anexión de Cuba á otras naciones; pero que al mismo tiempo, todos estábamos resueltos y teníamos la voluntad,

IV

EL PACTO DEL ZANJÓN

He aquí los términos de la capitulación del Zanjón, que concluyó la guerra separatista de Cuba de 1878:

Constituidos en Junta el pueblo y fuerza armada del departamento del centro y agrupaciones parciales de otros departamentos, como único medio hábil de poner término á las negociaciones pendientes en uno ó en otro sentido, y teniendo en cuenta el pliego de proposiciones autorizadas por el general en jefe del ejército español, resolvieron, por su parte, modificar aquéllas, presentando los siguientes artículos de capitulación:

Art. 1.º Concesión á la isla de Cuba de las mismas condiciones políticas, orgánicas y administrativas que disfruta la isla de Puerto Rico.

Art. 2.º Olvido de lo pasado respecto á los delitos políticos cometidos desde 1868 hasta el presente, y libertad de los encausados ó que se hallen cumpliendo condena dentro ó fuera de la Isla. Indulto general á los desertores del ejército español, sin distinción de nacionalidad, haciendo extensiva esta cláusula á cuantos hubiesen tomado parte directa ó indirectamente en el movimiento revolucionario.

Art. 3.º Libertad á los colonos asiáticos y esclavos que se hallen hoy en las filas insurrectas.

Art. 4.º Ningún individuo que en virtud de esta capitulación reconozca y quede bajo la acción del Gobierno español, podrá ser compelido á prestar ningún servicio de guerra, mientras no se establezca la paz en todo el territorio.

Art. 5.º Todo individuo que en virtud de esta capitulación desee

de 1879 fué virtualmente suprimida la libertad de imprenta, que existía en la pequeña Antilla, desde que en 6 de Agosto de 1873 fué llevado á ésta el título I de la Constitución de 1869. Y por el artículo 6.º del Real decreto de 9 de Julio de 1878, interpretado por resolución del Gobierno general de Cuba de 1890, correspondió á los alcaldes y sus delegados dar ó negar permiso (sin ulterior recurso), para las funciones ó reuniones que hubieran de verificarse en su respectiva localidad, así como presidir las reuniones cuando lo estimaren conveniente. Dicho se está con esto lo que vino á ser el derecho de reunión en Ultramar.

Verdad es que por efecto del golpe de Estado de 3 de Enero de 1874, en Puerto Rico de hecho quedaron suspensas las libertades allí llevadas en 1873 y se estableció un régimen arbitrario, respecto del cual, por ejemplo, la ley de imprenta de Enero del 79 fué un progreso; pero el supuesto legal á que se refirió el Pacto Zanjón fué evidentemente el de 1873, pues no era dable imaginar que los insurrectos condicionasen su sumisión, pretendiendo subsistiera en Cuba aquello mismo contra lo cual se habían levantado en armas. Para hacer eso, habrían prescindido absolutamente del artículo 1.º del Pacto.

Como se ve en la práctica, este Pacto se cumplió muy medianamente. Es decir, en lo relativo á la organización política y administrativa del país.

De los decretos de 1878 á las leyes municipal y provincial de 1870 (puestas en vigor en 1873 y que produjeron en Puerto Rico un admirable resultado, como lo produjo la ley del sufragio universal) hay abismos. Pero no son flojas las distancias que separan á los referidos decretos de

su cargo á los diputados provinciales, alcaldes, tenientes de alcalde y concejales, en los casos y en la forma prevenidos en la ley provincial y en la municipal. Por otra parte podían suplir, por sí ó por sus delegados, la acción provincial y la municipal, ya nombrando la Diputación y Ayuntamientos cuando no se reunieran, ó completando su número cuando no lo hiciesen en el suficiente para tomar acuerdo, ya supliendo las funciones de las mismas corporaciones cuando se negaran á ejercerlas y dando cuenta en todo caso al Gobernador general de las mismas Antillas. Por último, los Gobernadores antillanos estaban facultados para dirigir á las Diputaciones provinciales las excitaciones que les pareciesen oportunas sobre las cuales estaban obligadas á tomar acuerdo. Ni esto ni lo anterior pasaba en la Península.

El artículo de la ley provincial peninsular que hace responsable en cualquier momento ante el Tribunal Supremo á los Gobernadores de provincia por los delitos que cometan en el ejercicio de su cargo, no existe en los decretos sobre Ultramar, resultando por tanto perfectamente ociosos la mayor parte de los artículos 192 al 224 del Código penal de la Península, que se llevó á las Antillas en 23 de Mayo de 1879 y que se contraen á los delitos por los funcionarios públicos contra el ejercicio de los derechos individuales sancionados por la Constitución. Es verdad que subsistió el viejo *juicio de residencia* para los Gobernadores generales; pero sobre que esto es otra cosa muy distinta y ese juicio no procede sino después que el Virrey ó el Gobernador general ha dejado de serlo, los hechos ya probaron demasiado la exactitud con que el virrey de México, duque de Linares, dijo oficialmente á su sucesor: «Si el que viene á gobernar este reino no se acuer-

alcaldes se hace por el Gobernador general, previa propuesta de los Ayuntamientos respectivos. El Gobernador general nombra los Tenientes de Alcalde á propuesta en terna del Ayuntamiento; pero puede removerlos y reemplazarlos por otros concejales cuando le parezca oportuno. El Gobernador, oyendo á la Diputación provincial, aprueba ó no las Ordenanzas municipales y nombra al Secretario del Ayuntamiento á propuesta de esta corporación. Los Ayuntamientos pueden asociarse siempre que el Gobernador lo autorice. En el caso de que faltando menos de medio año para las elecciones ordinarias, ocurrieren vacantes que asciendan á la tercera parte del número total de concejales, el Gobernador nombrará como interinos á personas que en épocas anteriores hubieren pertenecido al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento y la Junta municipal votan el presupuesto municipal y enseguida lo remiten al Gobernador para que éste pueda corregir las extralimitaciones legales, si las hubiera. De los acuerdos del Gobernador podrán alzarse las Juntas municipales, no precisamente el Ayuntamiento; el Gobernador general resolverá oyendo al Consejo de Administración; pero si no resolviere dentro de los quince días antes de empezar el ejercicio del año económico, regirán los presupuestos con las correcciones introducidas por el Gobernador. La creación de arbitrios municipales se hará por los Ayuntamientos con la Junta de asociados; pero el acuerdo no será ejecutivo sin la aprobación del Gobernador general con informe de la Diputación provincial. Los repartimientos se harán á propuesta del Ayuntamiento y con el dictamen de la Diputación provincial si el Gobernador los aprueba. Pero en caso de disentimiento resolverá el Gobernador; lo mismo sucederá con las tarifas de consumo. Las multas que impo-

ne el Gobernador á los concejales no son recurribles ante la autoridad judicial: solo procede el alzamiento ante el mismo Gobernador que la impuso.

No se necesita comentario alguno. En todo caso sería comentario vivo el deplorable estado moral y material de todos los pueblos de nuestras Antillas.

Después de los decretos de 1878 y de las leyes electorales de la propia fecha vino su corruptela y mistificación.

Con efecto, en la disposición 2.^a transitoria del decreto de 21 de Junio de 1878, sobre organización municipal de las Antillas, se dice que «en tanto no se publique la ley electoral á que se refiere el art. 40 del mismo decreto, serán electores los que designa el artículo del mismo número de la ley municipal de la Península, como contribuyentes, siempre que vengán pagando la cuota de cinco pesos y los demás que el citado artículo señala».

Al fin, en 16 de Agosto de 1878 se llevó á Cuba la ley electoral municipal de 1870, con las modificaciones introducidas en ella en 16 de Diciembre de 1876; pero el Gobierno general de la Grande Antilla, en 28 de Enero de 1881, resolvió que á pesar de todo continuase rigiendo la excepción de la disposición transitoria del decreto de 21 de Julio de 1878, perfectamente opuesta al art. 1.^o de la Ley de la Península de 1870, modificada en 76, que reconoce el derecho electoral municipal á todos los que paguen *alguna cuota* de contribución ó tengan capacidad profesional ú oficial de cualquier género.

Mediante la prórroga de la excepción que ha durado hasta 1895, fué excluida del derecho electoral municipal la mayoría de los que gozaban del mismo en Puerto Rico, y además se consagró un privilegio á favor de los

sobre las anteriores de 1855, 75, 79 y 84 que aparece en la Compilación de 5 de Enero de 1891) constituye un positivo progreso que hay que relacionar con la extensión en juicio oral y público y la ley de Enjuiciamiento criminal de la Península y Cuba ó Puerto Rico en 1888.

Pero tampoco esto obstaba al creciente mal efecto que producía en las Antillas la *tiranía local*, al punto de que últimamente se llamaba por muchos á las libertades políticas antes señaladas las *libertades de lujo*.

Además, era evidente que tan pronto como se conquistasen las libertades primarias, surgirían potentes la aspiración local y el programa de la organización de la colonia patentizándose la absoluta incompatibilidad del régimen municipal y provincial de 1878, con todo lo que ya es corriente en el mundo contemporáneo, cuanto más en colonias de cierta vida y aspiraciones. ¡Cómo prescindir siquiera de la posición geográfica de Cuba y Puerto Rico y de su ambiente americano!

Agréguese á todo esto la equivocada manera de entender el problema económico y el modo de todo punto inverosímil de haberse proclamado el cabotaje mercantil en 1882, para destruirlo y anularlo después por una serie de mixtificaciones apenas comprensible en estos momentos.

Porque el cabotaje no era una solución para las Antillas, pero respondía á un espíritu de equidad grandemente plausible. Luego el cabotaje vino al suelo. ¿Pero de qué modo?

En 30 de Junio y 20 de Julio de 1882, se publicaron las leyes reguladoras de las relaciones mercantiles de las Antillas con la Península. Por la primera, desde 1.º de Julio de 1882 se admitían libres de derechos en la Metró-

poli, todos los productos antillanos y filipinos, excepto el tabaco, el azúcar, los aguardientes, el café, el cacao, y el chocolate; si bien respecto de estos productos exceptuados (quedando siempre fuera el tabaco sujeto á legislación especial) se irían reduciendo anualmente los derechos devengados por los mismos en las aduanas peninsulares, para que en 1.º de Julio de 1852 la franquicia fuera absoluta. Por la ley de 20 de Julio de 1882 se declara libre, en el transcurso de esos diez años, la importación en las Antillas de todos los productos peninsulares, en bandera nacional.

Sin embargo de esto, lo único que de veras se realizó fué la supresión de los derechos de los productos peninsulares en las Antillas. Por medio de artículos de los presupuestos ultramarinos y peninsulares de 1884, 85, 88 y 93 fueron punto menos que anuladas las franquicias otorgadas á los productos ultramarinos, y así se explica que si en 1888 la Península recibe de Cuba por valor de siete millones y pico de pesos, y en 1892 unos diez millones escasos, la Península, que en la primera de esas fechas (1888) ponía en la Grande Antilla géneros por valor de trece millones de duros, en 1892 coloque muy cerca de treinta millones. Es decir, que en este último año el 11 por 100 de la exportación viene á la Metrópoli, y el 46 por 100 de la importación en Cuba es de productos peninsulares. Todo plausible, si este no fuera un artificio y las leyes no hubiesen gravado indebidamente y contra lo acordado en 1882, los productos antillanos en el mercado peninsular.

No son menos elocuentes los siguientes datos: en 1882 pagaba el aguardiente de caña de Cuba en las Aduanas de la Península 13'75 pesetas hectólitro; con arreglo á la ley de aquella fecha en 1892 no debía pagar nada; pero de he-

cho, en 1895 pagaba 37'50 pesetas. Y el aguardiente de vino peninsular no paga nada en Cuba. El azúcar en 1882 pagaba 23'10 pesetas; en 1895 pagó 33'50. Y el impuesto sobre el azúcar peninsular, que en 1882 se calculó por alto en dos millones de pesetas al año, en 1885, por convenio con los fabricantes, se rebajó á 1.145.000 pesetas, de las cuales no se cobraron más que 975.843.

Esto aparte los rigores del arancel general respecto al extranjero: enormidad denunciada por el mero hecho de ser nuestras Antillas países de exportación y de necesitar absolutamente el mercado extranjero por la evidente insuficiencia del mercado peninsular de solo 18 millones de habitantes y por la competencia del azúcar de remolacha. Solo en el mercado de los Estados Unidos, Cuba viene colocando el 82 por 100 de su exportación.

Pero aun considerando el positivo adelanto que implican las libertades de reunión, imprenta y asociación proclamadas en 1881, 86 y 88; y sin olvidar que en 7 de Abril de 1881 se promulgó en Cuba y Puerto Rico la Constitución de 1876, y que se amplió el derecho electoral en 1893, ¿cómo prescindir de que en 1890 se publicó el Código de Justicia Militar, cuyo artículo 29 (muy distinto del 28, que se refiere á las Capitanías generales de la Península), dice que á los Capitanes generales de Ultramar les corresponde la aprobación de las sentencias á que se refiere el art. 28, pero *además* «de aquéllas en que se trate de delitos de robo en despoblado, siendo cualquiera el número ó de la cuadrilla; en poblado, siendo en cuadrilla de cuatro ó más; secuestro, incendio en despoblado, amenaza de cometer estos delitos, ya sea exigiendo una cantidad, ya imponiendo cualquiera otra condición constitutiva de delito grave previsto en el Código penal

V

LA EXPERIENCIA DE PUERTO RICO DE 1873

Esta experiencia comprende dos extremos: el relativo á la abolición de la esclavitud y el tocante á la instauración de las libertades democráticas en la pequeña Antilla.

Vamos por partes.

No es del caso extractar aquí los argumentos que desde 1868 á 1873 se hicieron contra la abolición de la esclavitud tanto en Cuba como en Puerto Rico. Aun con relación á la pequeña Antilla, donde no había guerra y donde el número de esclavos, casi todos nacidos en el país, era menor de 45.000 para una población libre de cerca de 700.000 individuos, se aseguró que un decreto abolicionista produciría inmediatamente el desorden público y la ruina de la producción colonial en el referido país, y además trascendería á Cuba, ensoberbeciendo á los negros de esta isla y desalentando á sus amos, pródigos en recursos contra los insurrectos.

Con tal motivo se produjo en la Península una gran agitación política que llegó al parosismo cuando el partido radical, dirigido por D. Manuel Ruiz Zorrilla, determinó, á fines de 1872, que se plantease en Puerto Rico la ley municipal votada para aquella isla á mediados de 1870 (ley que estaba en suspenso desde aquella misma fecha por la influen-

cia de los conservadores), y se hiciera allí la abolición inmediata de la servidumbre.

Mezolóse con esto la pasión de los partidos constitucional y alfonsino, contra el radical. Entonces se constituyó la Liga nacional contra las reformas ultramarinas, publicándose un famosísimo manifiesto de esta Liga, redactado por D. Adolfo López de Ayala, en cuyo documento llegó á decirse, con referencia al proyecto abolicionista, *que España estaba bajo el peso de un infortunio, á cuyo solo anuncio se habían convertido en desgracias secundarias las que no hacía mucho tiempo parecían insufribles.*

Pero al fin, el 22 de Marzo de 1873 fué decretada la abolición inmediata, simultánea é indemnizada de la esclavitud en Puerto Rico. Esta ley se planteó en aquella Antilla como procedía: es decir, confiando su planteamiento y aplicación á los abolicionistas de la misma. El resultado fué por todo extremo satisfactorio, destruyendo la realidad todos los temores y las siniestras profecías de los esclavistas más ó menos vergonzantes.

La Sociedad Abolicionista Española elevó al Ministerio de Ultramar en 15 de Julio de 1894 una extensa y razonada exposición respecto de los primeros efectos de la ley abolicionista en la pequeña Antilla. En ella se extractan los informes de los cónsules de Inglaterra, Francia, los Estados Unidos y Alemania en la pequeña Antilla, los del Gobernador general D. Rafael Primo de Rivera, los del Presidente de la Audiencia y del Jefe de la Guardia civil y muchas cartas de hacendados puertorriqueños de positiva importancia, sobre el estado político, económico y social de la Isla antes y después de la abolición. También se hace referencia á lo que sucedió en las Antillas francesas

é inglesas en la época de la abolición de la esclavitud en aquellos países, y de todo ello resulta que la abolición de la esclavitud en Puerto Rico ha sido una experiencia verdaderamente gloriosa, y por muchos conceptos excepcional.

Por esto sin duda los ministros de Estado españoles de 1874 y 76 invocaron en comunicaciones diplomáticas el éxito admirable de la abolición en Puerto Rico como una demostración de los buenos propósitos y de los éxitos de nuestro Gobierno en la política colonial. No detuvo á aquellos señores la consideración de que sus respectivos partidos apoyaron á la Liga esclavista de 1872; bien es que recientemente un caracterizado personaje conservador, en un discurso muy aplaudido ante los representantes de toda la prensa madrileña, se ha ufano del éxito de los decretos abolicionistas combatidos arduamente en otra época por todos los conservadores españoles. Sin embargo, nadie protestó. Buena prueba de cómo se hace y se sabe la historia contemporánea en España.

En la Exposición de la Sociedad abolicionista de 15 de Julio del 74 aparecen los siguientes párrafos:

«No hemos de molestar á V. E. con el examen detenido de la situación de la isla de Puerto Rico desde el mes de Marzo de 1873. V. E. la debe colocar perfectamente. En todo caso, por nosotros hablarían los periódicos extranjeros y los informes de los señores Cónsules de Inglaterra, los Estados Unidos y Alemania, que no pueden ser un secreto para el ministerio de Estado. Pero sí debemos afirmar que la experiencia abolicionista de Puerto Rico está en el caso de pretender el primer puesto quizá en la historia de la abolición, y que es un título á la consideración del mundo contemporáneo que España puede poner al lado de aquella nobilísima acción de Alcocer á las inmortales Cortes de Cádiz, de aquella célebre Instrucción de esclavos de 1789, de aquella patriótica renuncia de todo derecho de los propietarios de Guatemala

en el primer tercio de este siglo y de aquella varonil protesta de los comisionados de Puerto Rico en 1866.

Porque, señor, la obra de la emancipación de los esclavos se ha hecho en Puerto Rico en los mismos días en que se hacían tres elecciones generales de Diputados á Cortes, Diputados provinciales é individuos del municipio; en los momentos en que se creaban los Ayuntamientos populares; cuando una ley de la Asamblea Nacional llevaba á aquella isle, con el reconocimiento de los derechos naturales del hombre, el sufragio universal y todos los derechos políticos consignados en el título I de la Constitución del 69, y, en fin, cuando triunfante en la Península la República y abierto de nuevo el período constituyente, eran posibles todas las vaguedades, todos los deseos, todas las confusiones y todas las incertidumbres. En este último concepto, la situación de Puerto Rico tenía semejanza con la de las colonias francesas después de Febrero de 1848.

De otra parte, la insensata propaganda hecha por los esclavistas había espantado el dinero de la circulación, uniéndose á esto la grave crisis mercantil que produjo en los Estados Unidos numerosas y alarmantes quiebras que transcendieron á la pequeña Antilla, á su vez amenazada por la atroz sequía que por espacio de dos años viene cebándose en los campos de la isla y la aterradora baja de los azúcares producida por el aumento de la cosecha en la India, en Cuba y en otros países. En tal supuesto, la situación de Puerto Rico era mucho más grave que la de ninguna otra de las colonias ya libres de esclavos, que en su vecindad tenía.

Además, V. E. no desconoce que la ley de abolición se llevó á Puerto Rico, escueta. Para su completo éxito, exigíanse otras medidas que cooperasen al logro de la idea abolicionista. La reducción del presupuesto, la libertad de Bancos, la reforma de los aranceles —eran medidas por todos reclamadas, cuando menos aleccionados por el ejemplo de Francia, Inglaterra, Holanda y aun los mismos Estados Unidos. Y V. E. sabe que la indemnización á los poseedores de esclavos, de que habla el artículo 3.º de la ley de Marzo, no solo no se ha pagado, sino que hoy mismo nadie tiene noticia de que se haya hecho la tasación de los libertos, y sobre todo, que se haya intentado hacer la tirada de los bonos á que se refiere el artículo 6.º de la citada ley: extremo

sobre el que también, aunque de paso, nos tomamos la libertad de llamar la ilustrada atención de V. E., puesto que en Puerto Rico el metálico es cada vez más raro y necesario.

Por último, apenas transcurridos ocho meses desde el planteamiento de la Ley emancipadora, ocurrió el profundo y transcendental cambio político producido por los sucesos del 3 de Enero: cambio que importó en la pequeña Antilla el estado de sitio; la disolución de la Diputación provincial y de todos los Ayuntamientos populares; la suspensión de todos ó casi todos los profesores de instrucción primaria; la clausura del Instituto de segunda enseñanza recientemente creado y cuyos alumnos pasaron al seminario de Padres Jesuitas mediante una subvención de seis mil duros acordada por los nuevos diputados provinciales; la disolución de las milicias del país, tan célebres en la heroica historia de las guerras de Puerto Rico contra holandeses, ingleses y filibusteros; la muerte de la prensa liberal y reformista, el envío á la Península y á Cuba de gran número de jefes y oficiales del ejército de aquella isla; la renovación de casi todo el personal administrativo y de los primeros funcionarios del orden judicial; la disolución de la *Junta de intereses morales y materiales*, creada por el general Primo de Rivera y constituida con los hombres más importantes de todos los partidos políticos, la emigración de muchos vecinos á la Península y al extranjero, la persecución de otros, sospechados como *masones* de conspirar contra el nuevo orden de cosas; la promulgación de un severísimo reglamento dicho de vagos; el restablecimiento de las antiguas *libretas* de los obreros libres, y, por último, el Decreto de 10 de Abril contra el que respetuosamente se alza la SOCIEDAD ABOLICIONISTA, y que los favorecidos por aquella medida y algún que otro periódico de la madre patria defienden (sin razón á no dudarlo) como consecuencia obligada de las novedades introducidas después del 3 de Enero en el orden político de la tranquila y morigerada isla de Puerto Rico.

Pues bien: en estas condiciones, *todas desfavorables*, si bien de carácter accidental, se ha realizado la abolición en Puerto Rico. No comprendemos cómo hay español que no esté ufano del éxito.

Y ¿cuáles han sido los resultados? Los resultados definitivos es imposible registrarlos al año escaso de promulgada la Ley de abolición. V. E. sabe que en ningún país del mundo la emancipación ha podido

ser juzgada por sus efectos hasta finalizado el segundo quinquenio después de la reforma. —En cuanto á los resultados inmediatos, solo aproximadamente podemos hablar hoy, porque sobre faltarnos algunos datos que nuestra siempre retrasada administración ultramarina no nos suministrará hasta el último trimestre del año corriente, hay que considerar que siendo la época de la cosecha y del movimiento mercantil, que produce la necesidad de la exportación de los géneros coloniales, de Enero á Junio, da la circunstancia de que tanto la Ley de libertad como el Decreto de restauración de la servidumbre han comenzado á producir sus efectos precisamente en lo más crítico de la época aludida, de suerte que en rigor y absolutamente no puede decirse que la experiencia abolicionista de Puerto Rico cuenta un año de vida y que el trabajo libre ha producido todos sus naturales efectos en el primer año de su ejercicio.»

Y luego sigue la Exposición (publicada en 1875 con el título de *Una experiencia abolicionista de Puerto Rico*).

«En poder de la Sociedad Abolicionista existe un estado demostrativo de la exportación de Puerto Rico desde 26 de Diciembre del 72 al 1.º de Diciembre del 83, con referencia detallada al azúcar, las mieles, el café y el tabaco exportados en los años de 1869, 70, 71 y 72. De todo ello resulta que comparado el primer año de libertad (1873) con el último de esclavitud (1869, porque desde este año al 73 rigió la ley preparatoria de 1870), aquél lleva al segundo una ventaja extraordinaria, al punto de que si en los azúcares llega al 25 por 100, es casi el doble en el café y el 84 por 100 en el tabaco.

Comparado el año 73 con el anterior de media libertad (pues que en él regía la ley preparatoria de 4 de Julio de 1870, que emancipó á los negros mayores de sesenta años y fomentó con su influencia la costumbre de manumitir esclavo), el resultado es que en el año crítico la exportación ha excedido las cifras del anterior en el café, igualándolas en el azúcar y las mieles y bajando solo bien poco en el tabaco...

¿En qué colonia ha sucedido otro tanto?

.....

Vengamos al orden público. Ante todo, tiene la palabra el señor

Presidente de la Audiencia de Puerto Rico, D. Blas Díaz Mendiola, que al resumir los trabajos judiciales del año 1873, dice: «El resultado total del Estado es satisfactorio. Todos los delitos que registra son los comunes y más frecuentes en el país, sin que aparezca uno solo en que sus autores hayan obedecido á la condición de libres que han adquirido.»—«De las 129 causas formadas, las 74 lo han sido por el delito tan común en el país, de *hurto*, sin que aparezca ni uno solo por homicidio ni asesinato, como desgraciadamente cuando existía la esclavitud sucedía en alguna hacienda, por el mal trato ó sevicia... Examinado todo y hechas las comparaciones debidas, resulta que en 1873 la Audiencia de Puerto Rico aparece con menor criminalidad que ninguna de las Audiencias de la Península é islas adyacentes.»

Por último, el digno Gobernador general de la isla, al despedirse de los puertorriqueños en 2 de Febrero de 1874, escribía:

«Felicito con todo mi corazón á los libertos, que con ejemplar cordura y honradez han correspondido á la justicia que les hiciera nuestra Madre España, por medio de las Cortes. Al despedirme, les encargo como otras muchas veces lo he hecho, que continúen por la senda honrada del trabajo y que hagan ahorros, porque la vejez enerva las fuerzas, y así serán acreedores á mayor consideración social... La paz pública, el orden que tanto amáis, han permanecido inalterables durante todo el período de mi gobierno. Reconocido estoy á ese nuevo beneficio que de vosotros he recibido.

Por último, la Sociedad Abolicionista resume todos los datos aducidos diciendo:

- 1.º Que después de la abolición en Puerto Rico, se ha mantenido en todo su rigor el orden público.
- 2.º Que la delincuencia ha bajado.
- 3.º Que la producción, *cuando menos*, no ha disminuido.
- 4.º Que los libertos han cumplido la obligación que se les impuso por la ley de Marzo, verificando los obligados contratos de trabajo.
- 5.º Que la mitad de todos aquellos, el 46 por 100 de los que trabaja-

ban en el campo, y el 65 de los domésticos, han continuado con sus antiguos amos, de quienes recibieron un trato dulce durante la época de la servidumbre.

6.º Que un número considerable de los que, apenas promulgada la Ley, huyeron de las haciendas y fincas conocidas en Puerto Rico por el rigor que en ellas se empleaba con los esclavos, lo hicieron bajo la presión de los tristísimos recuerdos de su cautiverio.

7.º Que la primera y más enérgica protesta de los negros contra la esclavitud, apenas conocida la Ley de abolición, fué contra la *residencia y permanencia* de los mismos en las *haciendas* durante la noche.

8.º Que en la comisión de los delitos imputables á los libertos no ha influido la nueva condición de libres de que éstos disfrutaron desde Abril de 1874.

9.º Que ninguno de los resultados obtenidos en la pequeña Antilla encuentra rival en los alcanzados durante un período de tiempo análogo y aun mucho mayor en aquellas colonias de Francia é Inglaterra, más afines á las nuestras y que se presentan como ejemplos en la historia de la abolición. »

Todas las consideraciones expuestas adquieren un valor extraordinario por lo sucedido con posterioridad. Desde 1874 á esta parte no ha ocurrido el menor disturbio en Puerto Rico. La gente de color vive tranquila y dedicada al trabajo, de idéntico modo á como hace la gente blanca. No hay diferencia posible entre el liberto y el libre.

En cuanto al movimiento mercantil (de excepcional importancia en un país de productos coloniales, y que vive punto menos que exclusivamente de la importación y la exportación porque el consumo local del producto propio es escaso), son decisivos datos verdaderamente publicados en Puerto Rico. Reproduciré algunos.

<i>Años</i>	Importación	Exportación	<i>Total</i>
	<i>Pesos</i>	<i>Pesos</i>	
1869	9.066.902	6.535.352	15.602.254
1872	15.435.323	8.008.125	23.443.448
1873	13.564.815	8.500.533	22.065.348
1874	13.249.354	7.111.636	20.361.990
1878	13.133.582	13.129.927	26.263.109
1879	18.448.221	11.594.792	30.043.013
1883	13.785.843	11.618.882	25.404.725
1893	17.081.609	16.076.312	33.157.921

Resumen. Término medio de los cinco años anteriores á la abolición, ó sea desde 1869 á 1873: Importación. 13.406.359 pesos; exportación, 8.039.214; total. 21.445.573.

Idem de los cinco años siguientes, ó desde 1874 á 1878: Importación, 13.238.035 pesos; exportación, 9.096.272; total, 22.334.307.

Idem de los cinco años siguientes, ó desde 1879 á 1883: Importación, 14.626.246 pesos; exportación, 11.145.005; total, 25.771.251.

Me he ocupado de la abolición en Puerto Rico porque á esta Isla dediqué preferentemente mis observaciones en el discurso parlamentario de 1871, y sobre este punto fui muy contradicho, creyendo la mayoría de la gente que era una verdadera locura hablar entonces de la abolición en Cuba.

Es claro que este último problema ofrecía muchas más dificultades que el primero. Pero al fin la abolición también se hizo en Cuba. Primero se promulgó la ley de 13 Febrero de 1880, dejando en pie el patronato, como la ley de 1870 dejó en planta el cepo y el grillete, abolidos después en Cuba merced á una activa campaña de la Sociedad Abolicionista en 27 de Noviembre de 1883. Luego en 7 Octubre de 1886 se abolió el patronato. No sucedió nada de lo que

anunciaron los esclavistas. Sobre este particular pueden leerse las publicaciones de la Sociedad Abolicionista, desde 1881 á 1888, y el folleto que con el título *La Raza de color en Cuba* publiqué en 1894, con motivo del delicado obsequio que el Directorio Central de las Sociedades de la Raza de color de la Isla de Cuba me hizo en aquel año.

Ahora dos palabras sobre la reforma política y administrativa de la pequeña Antilla.

Todo cuanto se diga respecto del éxito de ésta sería pálido ante la realidad. Puerto Rico desempeña en la historia de la colonización moderna un papel brillantísimo y casi asombra la ignorancia que existe sobre el particular, entre nuestros políticos, como abruma la consideración de la injusticia con que ha sido recompensada la pequeña Antilla.

Recuérdese lo que allí ocurrió á los comienzos de este siglo, es decir, cuando se inició la reforma antillana bajo las inspiraciones del marqués de la Sonora y de las Cortes de Cádiz, por la mediación del famoso intendente D. Alejandro Ramírez de Villaurrutia. Las Reales cédulas de 1811, 1815 y 1818 reformadoras de todo el orden económico de la pequeña Antilla, con evidente alcance social y transcendencia política, produjeron todos sus resultados en aquel país y su éxito fué poderoso estímulo para que, desde 1816 á 1818, se plantearan en Cuba, consiguiendo los tales decretos, en este vasto escenario, un efecto todavía más admirable.

Considerándolo se robustece la creencia de que si las grandes reformas del apenas recordado marqués de la Sonora se hubieran mantenido y desenvuelto á fines del siglo XVIII, habría sido fácil evitar la desmembración del imperio colonial español, cuarteado y puesto en ruina por los

mil abusos y anacronismos que describieron Humboldt en su libro sobre Nueva España, D. Jorge Juan y D. Antonio de Ulloa, en sus *Noticias secretas*, los Virreyes Duque de Linares y Revillagigedo en sus Informes y el mismo Marqués de la Sonora en sus Memoriales precursores de la Ordenanza de Intendentes de Nueva España, la cédula de población de la Trinidad y los decretos de libertad de comercio de 1778 á 1797.

Sirvió, pues, en 1814, Puerto Rico de experiencia para la gran reforma que se hizo en Cuba, y que indudablemente impidió que nuestras Antillas siguieran la suerte de la América Continental.

A los cincuenta y dos años se repite el fenómeno. En el intervalo se había producido el hecho de la venida á Madrid de los Comisionados de los Ayuntamientos y los mayores contribuyentes de Puerto Rico, para informar al Gobierno de la Metrópoli sobre las reformas urgentes en el orden político y económico de aquella Isla. Aquellos Comisionados, unidos á los de Cuba (y apartándose por completo de los informantes nombrados por el Gobierno), protestaron contra el supuesto de que fuera dable, y menos digno, intentar reforma alguna de las anunciadas en el decreto de convocatoria de 1865, sin que le precediera la reforma social, es decir, la abolición de la esclavitud.—Y los Comisionados portorriqueños se adelantaron, al extremo de proponer, con el carácter de urgente, la abolición inmediata, simultánea, con ó sin indemnización. Constituye esto un excepcional honor para la pequeña Antilla, y no menos prestigio recabaron de esta proposición los mismos Comisionados, pertenecientes todos á las clases más cultas, acomodadas y distinguidas de la sociedad portorriqueña.

cribir ó que pagase 40 pesetas de contribución directa al Estado.

Pero al lado de todo esto hay que poner la acción de los partidos organizados en aquella isla desde los comienzos del año 69; señaladamente la acción del partido liberal ó reformista que valientemente precisó sus aspiraciones en la fórmula de «identidad de derechos políticos y civiles de españoles portorriqueños y de la Península». Y digo *valientemente* porque no se puede prescindir de que este partido se movía dentro de la pequeña Antilla bajo la Real orden de las *Omnímodas*, el bando de gobierno de Pezuela de 1849, los decretos de organización municipal de 1846 y 47 y el régimen penal de la Novísima. Como si esto fuera poco, pronto el Gobierno de la Metrópoli (el partido llamado constitucional) llevó á Puerto Rico la corrupción de los comicios y la lista de los diputados *cuneros*. A todo esto hizo frente el país liberal portorriqueño, cuyo aliento y cuyas esperanzas no quebrantaron la triste circunstancia de que después de votado el art. 108 de la Constitución de 1869, subsistiera el viejo régimen en aquella culta y laboriosa Antilla.

El art. 108 decía que «las Cortes Constituyentes reformarían el sistema actual de gobierno de las provincias de Ultramar, cuando hubieran tomado asiento los diputados de Cuba ó Puerto Rico, para hacer extensivas á las mismas, con las modificaciones que se creyeran necesarias, los derechos consignados en la Constitución».—Los diputados de Puerto Rico entraron en las Cortes á mediados del 69. Pero el art. 108 quedó sin cumplir.

Sólo á mediados de 1870, el ministro de Ultramar consiguió que se votaran las leyes municipal y provincial para

do, sería bastante para imponer respeto y aun reservas al estadista más confiado y resuelto.

Tampoco quiero decir lo que quizá convendría con otro propósito sobre los obstáculos que en la Península se pusieron al planteamiento y desarrollo de las nuevas instituciones coloniales. La famosa Liga antireformista de 1872 prodigó todas las alarmas y las amenazas. Los reaccionarios ultramarinos impusieron no sé cuántas conspiraciones y motines en Puerto Rico, para demostrar al público la tesis maravillosa de que el país portorriqueño, ansioso de reformas, se levantaba precisamente cuando las reformas se iban á hacer y realizaba todo lo que los adversarios de éstas deseaban, para que no se saliese del *statu quo* ultramarino.

Cierta parte de la prensa madrileña se agotó, haciendo referencias é historias (rectificadas á los pocos días) sobre cosas y personas de las Antillas, que ponían el cabello de punta. Y con todo esto trabajaba en daño de Puerto Rico, la creciente crisis de la política peninsular.

Allá en la isla los reaccionarios y los esclavistas despechados, soñando todavía con la reglamentación del trabajo, por medio de la libreta del obrero y de la persecución del supuesto vago (fórmulas del esclavismo vergonzante), lejos de aquietarse ante la nueva situación y de prepararse á título de conservadores y patriotas, para la evolución dentro del nuevo orden de cosas, tomaron una actitud de semirebeldía frente al nuevo Gobernador general.

Apesar de todo, en Puerto Rico no pasó nada. No se perturbó un momento el orden público, no se paralizó el trabajo, no se perjudicó la vida económica del país. Antes he aducido algunos datos.

Con esto podía esperarse que el ejemplo de Puerto Rico

LA CUESTION DE CUBA EN 1896

DISCURSO PARLAMENTARIO

ADVERTENCIA

El discurso que sigue fué la última protesta de la propaganda autonomista en la oposición. ¡Secretos de la suerte! ¡Sorpresas de la historia!

¡Quién me dijera en Julio de 1871, que, dieciséis años después, había de plantearse en el Parlamento español, casi el mismo problema que entonces discutí, demostrándose una vez más, mi repetida afirmación de que no existe error cometido por España que no haya sido igualado y aun superado por las demás grandes naciones y que la única diferencia entre éstas y aquélla consiste en que mientras las unas se enmiendan, la otra persevera en sus equivocaciones y no se resuelve á sacar provecho de sus quebrantos y desastres!

¡Pero quién me dijera, también, en 4 de Julio de 1880, cuando, en nombre de la Minoría parlamentaria autonomista, pronuncié en el Congreso mi discurso sobre el *primer*

(que va á continuación) con los decretos de 23 de Noviembre de 1897, que han llevado la Autonomía colonial á Cuba y Puerto Rico. Porque en la primera de estas fechas volví á encontrarme solo, como en 1871, en el Parlamento español (pues que mi digno colega D. Elíseo Giber-ga, electo senador por las Sociedades Económicas de las Antillas, no tomó posesión de su cargo, y el partido republicano peninsular estaba entonces en el retraimiento) y luego, en 1897, se ha proclamado la Autonomía de idéntico modo á como yo la recomendé dos años antes: esto es, la Autonomía de gobierno responsable, como una solución política de fondo y como un medio de conseguir la paz en Cuba.

La mayor parte de la gente que ha aceptado ahora la solución autonomista lo ha hecho en el segundo concepto. Espero que al fin todos reconocerán la plenitud de sus excelencias, y que dentro de algunos años suceda con la Autonomía colonial vigente en las Antillas lo que ahora sucede con la abolición de la esclavitud, realizada en las mismas á despecho de los que en estos momentos nos disputan el honor de haberla defendido.

Cuéntese, empero, que al decir todo esto, ni yo me atribuyo una importancia excepcional en aquella empresa, ni cometo la tontería (perdóneseme la palabra, por lo gráfica) de afirmar que el triunfo de la Autonomía se debe exclusivamente á los autonomistas.

Lo he dicho no sé cuántas veces. En la vida política, el individuo vale poco. Lo que vale y lo que produce es la re-

nomistas, y que el mérito de los de la Península—como capacidad y como moralidad y como eficacia—es de primera fuerza. ¿Cómo sin ellos se habría podido hacer aquí la propaganda autonomista? ¿Y cómo sin hacer la propaganda en la Península habría podido ser hoy la Autonomía una solución de gobierno?

Pero después de reconocido esto, hay que convenir también en que en el primer supuesto, la primera razón y la mayor fuerza de la campaña autonomista han estado y están en nuestras Antillas. Sin los partidos autonomistas de Cuba y Puerto Rico—modelos de entusiasmo y de disciplina—la Autonomía colonial aquí habría sido, quizá, sólo una tesis puramente académica.

Allá en las Constituyentes de 1869 ya algunos diputados hablaron de Autonomía; pero como de una mera aspiración. Y se dió después el caso de que algunos de los autonomistas teóricos de entonces, cuando llegó la hora—á partir de 1879—de hacer de la Autonomía una solución práctica é inmediata, no sólo se abstuvieran de apoyarla, sino que llegaron á combatirla, combatiendo á los autonomistas.

De esto ya he hablado en mi trabajo sobre *La República y las libertades de Ultramar*. Repito la indicación porque me repugnan mucho las jactancias y no me allano á autorizar argumentos con mi silencio.

¡Y cómo se me había de ocurrir que los autonomistas hemos sido los únicos factores de la Autonomía que ahora triunfa!

portancia personal en la empresa presente (me parece que lo he demostrado con algo más que con palabras), limito también el valor y la eficacia de la acción puramente autonomista en la obra de estos días. Reconozco y proclamo, con gusto, la cooperación extraña. Afirmo que sería una de las mayores torpezas de mis correligionarios de las Antillas pensar que ahora mismo el éxito de la Autonomía depende solo de lo que en Ultramar pase... Pero insisto en decir que sin esos autonomistas antillanos no habría hoy Autonomía, y que sin ella la Patria española correría una deshecha tempestad, con inmenso peligro de los más caros intereses de esta tierra y de la civilización en general.

Porque los hechos han demostrado—y parece que esto ya se ha reconocido por casi todos los españoles, como lo han proclamado todos los políticos de Europa—que la Autonomía colonial no es un mero interés particular de Puerto Rico y de Cuba, sino que afecta á la tranquilidad, al prestigio, á la fuerza y al progreso de España entera. Así lo comprendí yo siempre, aun cuando lo recomendaba en una situación de paz y relativamente próspera.

El discurso que sigue tuvo su complemento en otro de extensas rectificaciones y explicaciones que pronuncié al día siguiente (1.º de Junio) en el Senado, contestando á los Sres. Cánovas del Castillo y General Martínez Campos, así como en las breves palabras con que, á poco (el 4 de Junio), procuré resumir el debate en lo que se relacionaba con mi particular punto de vista. Pero lo fundamental y doc-

políticas y parlamentarias opté por la Diputación de Santa Clara, pero ya entonces advertí no solo que yo era partidario del régimen bicameral, sino que creía (y continuo creyendo) que los partidos políticos propagandistas (como los autonomistas de las Antillas y los republicanos de la Península), debían preocuparse preferentemente de llevar su representación al Senado y de hacer allí una campaña insistente, de mucho tacto y de mucho alcance, prescindiendo del tono agrio de la protesta y del efectismo oratorio casi imprescindible en reuniones de mil ó más personas, como las que ordinariamente asisten á los debates del Congreso. En el Senado se podía y puede, mejor que en ninguna otra parte, detallar los negocios y explicar razonadamente con aplicaciones prácticas á las cuestiones del momento, los programas políticos, económicos y administrativos. Y esto es de monta en los partidos tachados de teóricos y aun de ilusos.

Esta opinión se ha fortificado con mi experiencia personal de 1896. Porque, sin vana modestia, puedo asegurar que mis palabras tuvieron eco en el Senado, apesar de lo excepcional de las circunstancias y de las prevenciones provocadas por la guerra de Cuba y la forzada dispersión del partido autonomista cubano á consecuencia de la política que representaba el señor general Weyler.

Mas aún. Créome en la inexcusable obligación de consignar aquí mi gratitud á la por todo extremo benévola acogida que me dispensó el Senado cuantas veces intervine en

Cuba, durante los últimos tiempos, hubieran visto y conocido directamente los sucesos que allí habían tenido efecto.

De tal suerte, éstos podrían ser explicados en la Península por sus principales testigos y actores, realizando una información punto menos que imposible para los que los sabíamos tan sólo por referencia.

Es ocioso que yo razone esta opinión, fundada principalmente en la atención que presto á cuanto pasa en las Antillas, á pesar de lo cual no me tengo por competente respecto de muchos particulares de carácter puramente local. Por aquel entonces corrían por Madrid las más extrañas y falsas noticias, aun entre las personas que se daban por enteradas de las cosas antillanas, y esto fortalecía mi añeja creencia de que es indispensable que respecto de la política puramente insular (que era lo culminante de la situación de 1896) lleven la palabra en nuestras Cortes los hombres que viven ordinariamente en las Antillas.

Tal opinión se harmoniza con mi constante recomendación á los antillanos de que, para las cosas que se han de hacer en la Península, cedan el primer puesto á los autonomistas que residan en ésta y que por tanto deben conocer mejor que los que aquí pasan solo algunos meses, ó los que ven de lejos las cosas, el terreno sobre el cual se ha de operar, el verdadero valor de las personas, la oportunidad de las gestiones, la manera de mover los peones y los medios de que se puede disponer para lograr el éxito, en un escenario, no

precisar sus honradas disposiciones y advertir francamente lo que creía necesario para que la buena voluntad y los esfuerzos de este partido surtieran el efecto apetecible en la obra difícil de la *pronta y definitiva* pacificación de Cuba.

El supuesto de mi oración no era solo el derecho de España á conservar á Cuba, cual parte tan integrante de la Nación como lo son las montañas de Asturias, los llanos de Castilla y las playas de Andalucía y Cataluña. Así lo dijeron las Cortes de 1812. Yo además creía y creo que España tiene el deber de dominar *pronto y bien* la insurrección separatista, por ley del honor, en beneficio de la complicada sociedad antillana, por interés del derecho internacional contemporáneo y en cumplimiento de los transcendentales y prestigiosos compromisos de los grandes pueblos colonizadores. Y esta era otra de las razones de mi discurso.

Correspondiendo al primero de mis propósitos antes señalados, otra vez sostuve, como en 1871, que la cuestión de Cuba no era una mera cuestión de fuerza, y que la fuerza tampoco ahora la concluiría, como no la concluyó hace diecinueve años. Porque así no ha concluido ninguna guerra civil, ni guerra alguna colonial, ni cualquiera otra guerra de carácter eminentemente político.

Aquí en España nos sobran los ejemplos; las dos últimas guerras civiles provocadas por el carlismo, la de Portugal, la de los Países Bajos, la del Sur de América, la de Santo Domingo. Para Inglaterra fué decisiva la guerra contra las tre-

importancia las frases que aparecían en el Mensaje de la Corona á las Cortes, cuyas sesiones se inauguraron en 11 de Mayo de 1896. Helas aquí:

«La mayor asimilación á la Península que echan algunos de menos en la legislación antillana, nunca ha encontrado en el Gobierno español dificultades grandes, y el aplazarla, mucho más que de él ha dependido del despegue injusto de no pocos elementos del país á la asimilación, y su marcada indiferencia hacía las leyes especiales. Fácilmente será, pues, admitida la asimilación, en cuanto sea posible, aunque nada resolvería esto de por sí en el estado en que por necesidad dejará la isla la insurrección después que tenga fin. Cuando tal caso llegue, preciso ha de ser, para que la paz se consolide en ellas, el dotar á entrambas Antillas de una personalidad administrativa y económica de carácter exclusivamente local, pero que haga expedita la intervención total del país en sus negocios peculiares, bien que manteniendo intactos los derechos de la soberanía, é intactas las condiciones indispensables para su subsistencia. A todo esto encaminará el Gobierno sus pasos, si tal política merece la aprobación de las Cortes.

En estos párrafos resalta la indicación del *self government* colonial, pero en términos sumamente vagos. La indicación no era extraña presidiendo el Gobierno el Sr. Cánovas del Castillo, que ya en la sesión del Congreso de 24 de Junio de 1884, discutiendo conmigo, había reconocido la bondad teórica de la doctrina autonomista (1). Pero era preciso que el Gobierno concretase su propósito, y lo procuré, aun dándole cuenta de que la aludida vaguedad era estudiada.

(1) Véase *La República y las libertades de Ultramar*.—Pár. XIII.

Yo lo puedo decir con tanto mayor motivo cuanto que, á pesar de no haber sido nunca un verdadero entusiasta de esta reforma (que sostuve, salvando mi voto en el seno de la Minoría parlamentaria autonomista de aquella fecha), reconozco que si hubiera sido aplicada enseguida con lealtad, y sobre todo, si se hubiera aplicado á poco de presentarse el proyecto primitivo en el Congreso, ó sea á mediados de 1893, no habría sobrevenido la actual guerra de Cuba, ó ésta habría tenido poquísima importancia. A mediados de 1896, la ley de 1895 carecía de valor y mucho más de eficacia.

Pero desde el punto y hora en que el partido conservador tomaba la orientación autonomista, la lógica de la política llevaba al partido liberal á afirmaciones resueltas ya fuera del antiguo compromiso monárquico que había rechazado siempre las soluciones radicales, patrocinadas exclusivamente y mediante una labor incesante, por los elementos republicanos de un carácter eminentemente crítico y propagandista. Parecíame imposible que obligado á contestar en estos momentos, el partido liberal quedase detrás del conservador. Y no se me ocultó que el problema consistía en hacer hablar á aquel partido: es decir, en no consentirle la posición espectante ni las fórmulas del crítico.

Esta convicción mía se fortificó después de oír al Sr. don Pío Gullón, que en el Senado llevó la voz del partido liberal, en los debates del Mensaje; y sobre todo, luego que adquirí valiosos informes respecto de las diferencias intestinas

surar la obra y á esperar la caída de sus adversarios, como si al país no le interesara saber, con tiempo, la fórmula política de las oposiciones, destinada racionalmente á ser una realidad en la práctica del gobierno, tan pronto como dejara el poder el Sr. Cánovas del Castillo.

Llevé mi escrupulosidad hasta el punto de prescindir en absoluto de la fórmula de los republicanos, los cuales, como es bien sabido, eran hasta entonces los únicos defensores de la Autonomía colonial; como que la habían votado en las Cortes de 1886, y la habían propuesto categóricamente en las Cortes de 1891 (1). Ya cuidé de advertir en mi discurso que yo no hablaba más que como representante de los autonomistas cubanos; pues que la Unión republicana de la Península, de cuyo Directorio formaba yo parte, y con cuya autorización entré en el Senado, mantenía el retraimiento, de suerte que nadie podía tomar su nombre en un debate parlamentario.

Me atuve, pues, á las soluciones de los gubernamentales del momento, pero reclamé que se precisase la solución.

No fui afortunado. El exministro liberal Sr. Gullón, que después de conferenciar con el Sr. Sagasta, pidió la palabra para contestarme, al cabo no usó de ella. Y luego al discutirse la contestación al Mensaje en el Congreso, ninguno de los oradores que tomaron parte en el debate se refirió

(1) Véase *La Autonomía colonial en España, y La República y las libertades de Ultramar*, pár. XII.

Repito que no fui afortunado en el efecto de mis requerimientos. Terminaron los debates parlamentarios de 1895, y como yo carecía de un periódico propio para hacer la campaña activa y precisa que era indispensable, la solución autonomista quedó relegada al círculo de las críticas y de las aspiraciones. Una vez más deploré la constante falta de medios de la campaña autonomista en la Península. Es difícil comprender cómo los partidos autonomistas antillanos han podido moverse en la Metrópoli sin un círculo de devotos muy acentuados, siquiera por su procedencia colonial, y sin un periódico órgano oficial de sus doctrinas y de sus determinaciones. Por esto se demostró excepcionalmente la virtualidad de las ideas autonomistas: y casi asombra el éxito que en la opinión pública peninsular obtuvieron teorías al parecer tan nuevas, servidas por una propaganda tan falta de recursos en este escenario político. Pueden discutirlo solo los que de estos asuntos hablan *de oídas*, y sobre todo, *después de la victoria*.

Pero las Cortes suspendieron sus sesiones. La vida parlamentaria y aun la vida política de todo el país desmayaron al punto de poderse sospechar que en España no quedaba más fuerza que la del Gobierno. La arbitrariedad y el abatimiento se generalizaron hasta lo inverosímil. Triunfó en absoluto, allá en Cuba, la teoría de «á la guerra con la guerra». Se produjo la insurrección de Filipinas; hablóse de una invasión filibustera en Puerto Rico; sobrevinieron los atentados anarquistas de Barcelona y la monstruosa

res de la famosa guerra de Haití, de comienzos de este siglo.—El hambre, la viruela y la fiebre palúdica hacia espantosos estragos entre los leales y los insurrectos. Los campos de la Península se quedaban sin brazos jóvenes: los campos y las pequeñas poblaciones de Cuba eran arrasados. Comenzó entonces allí el terrible exodo de los *recozcentrados*. Tomaron desarrollo las deportaciones, por medida precautoria y mera disposición gubernativa, á los presidios de Africa y á Fernando Póo. Todavía no se puede estimar la baja sufrida por la población de Cuba, en estos años de guerra, pero hay quien la cifra en cerca de 250 000 almas. Según datos del Ministerio de la Guerra, el número de jefes, oficiales y soldados de toda clase, muertos ó desaparecidos en Cuba desde el principio de la campaña, hasta fines de 1896, subía á 16.063. El de los insurrectos á 12.076 con 3.468 heridos, y 869 prisioneros y 2.198 presentados, también espanta. Y á última hora surgió un conflicto internacional con los Estados Unidos, agravado por la actitud reservada de los gobiernos de Europa.

Los hechos impusieron al fin lo que debieran haber determinado las palabras y la reflexión un año antes. Tal fué la causa del decreto refrendado por el Sr. Cánovas del Castillo en 29 de Abril de 1897, y de las declaraciones hechas sobre este decreto, en Junio, primero por el Sr. Sagasta, y después por todos los notables del partido liberal.

No es del momento exponer mi criterio respecto de estos

di discurso acentuando la actitud de los liberales en la cuestión de Ultramar; viril discurso que le valió no pocas críticas de buena parte de sus correligionarios y que casi le dejó solo con sus íntimos. Mas, al fin, esta tendencia expansiva triunfó. El Sr. Sagasta ratificó las declaraciones autonomistas del Sr. Moret y estas fueron el programa del Gobierno cuando en el otoño de 1897 ocupó el poder el partido liberal. A ellas responden los decretos autonomistas de 25 de Noviembre de 1897, los cuales hay que explicar teniendo á la vista las instrucciones que el ministro de Ultramar (Sr. Moret), dió luego á los gobernadores generales de Cuba y Puerto Rico, para la aplicación de los tales decretos (1).

Tampoco viene á cuento consignar aquí mi opinión sobre los decretos de Noviembre último. Ya lo haré en la debida oportunidad, porque eso se ha de discutir bastante en las próximas Cortes y en otros sitios públicos, dentro de no lejano plazo; aunque yo creo que por este lado no está el mayor peligro de la situación.—Siempre costará mucho trabajo reducir á muchas gentes de la Península á que no vean en las Colonias meras *dependencias*, y por tanto, á que todo cuanto en ellas se proclame ó haga, pase del carácter de meras *concesiones*. Tampoco será fácil hacer comprender á otras gentes de Cuba que la cuestión colonial no es una mera *cuestión cubana*, y que, por tanto, para su reso-

(1) Véase el Apéndice.

plena eficacia de su proclamación, por el mero hecho de aparecer los decretos autonomistas en la *Gaceta de Madrid* y aun de ocupar autonomistas los ministerios coloniales, y 5.º, que á mí personalmente, por mis compromisos republicanos, por mi manera de entender la cuestión colonial como un problema general político, por mi residencia habitual en la Metrópoli y aun por mi posición fuera de las intransigencias locales, no me correspondía puesto alguno oficial en la nueva situación política, lo cual no obstaba á mi resolución de prestar todo mi apoyo á la actual empresa reformista al Gobierno liberal de la Metrópoli y á los Gobiernos coloniales de Cuba y Puerto Rico.

Después de esto, me puse á disposición del Gobierno de Madrid y trabajé activamente para que mis amigos de las Colonias secundaran con toda resolución los decretos autonomistas.

No era esta floja empresa. Anuncio que tendrá bastante interés lo que en su día yo publique sobre lo que ha pasado en Madrid, en las Antillas y en el extranjero, desde Octubre hasta el momento de instaurarse el nuevo régimen en Puerto Rico ¡Cuántas lecciones para un hombre político! ¡Y qué ignorancia de la realidad de las cosas y de lo que positivamente ha sucedido en todo ese laboriosísimo periodo, la de casi todos, si no todos, cuantos en papeles y reuniones públicas han hablado sobre este asunto!

De mí sé decir que no he descansado un momento, y que mis principales esfuerzos se han dedicado: 1.º, á que la base

Es difícil señalar en los últimos tiempos mayor intransigencia que la demostrada por la casi totalidad de nuestros gubernamentales ante la recomendación autonomista. El propio Sr. Cánovas del Castillo, que más de una vez entrevió la bondad de ésta en el terreno puramente doctrinal, bien por lamentable contradicción de su espíritu ó por sus prejuicios conservadores, ó por la necesidad de obtemperar á las exigencias y los compromisos de sus correligionarios, nunca se resolvió á apartarse de exclusivismos prácticos, que llevó en ocasiones á una exageración apenas concebible.

De ningún modo digo esto para formular censuras. Con repetición he manifestado que no creo que es la hora de concretar y depurar responsabilidades. Pero me interesa mucho consignar el hecho, porque la lección es de lo más vigoroso que yo conozco en la historia, pues que el cambio radical de política colonial operado por mis adversarios de muchos años, ha sido cosa de muy pocos meses; y para salir adelante con su empeño, los nuevos gobernantes han tenido que proclamar la absoluta necesidad de confiarse á los autonomistas de antaño: esto es, á los sospechosos de toda la vida, á los señalados constantemente como incompatibles con el orden, el prestigio y el porvenir de la Patria.

Esa intransigencia no ha debido tenerse nunca. El mundo entero marchaba por distinto camino. Solo la ignorancia podía propalar la especie de que la reforma autonomista británica se había hecho concretamente para procurar la emancipación de las colonias inglesas. Y solo para los ignorantes

en este particular, un modelo de sinceridad. Mas para desconocer lo que antes he indicado sería preciso no leer un periódico extranjero é ignorar lo que pasa en el interior de Cuba, en el campo de los insurrectos y en el círculo de sus simpatizadores del Continente americano y aun de Europa.

Se triunfará al cabo: mucho lo deseo y hago todo lo posible para que esto suceda. Pero la dificultad es evidente, y ahora hablo de ella con dos motivos, que vienen á ser dos fines. El primero, para que no se exagere la responsabilidad de la Autonomía y de los autonomistas en el caso presente. El segundo, para que los gubernamentales no repitan sus intransigencias (cuando menos doctrinales), ya cuando se trate de complementar el nuevo régimen proclamado para las Antillas en 5 de Noviembre último, ya cuando llegue la hora (muy próxima á mi juicio) de poner mano en el disparatado, anaacrónico é injusto régimen vigente en Filipinas, al cual dediqué severas críticas en mi discurso de 1871, y cuyo examen he tenido que aplazar después por la necesidad de contraer todas mis facultades al urgentísimo problema antillano.

Por lo mismo que creo muy necesarias y hasta urgentes, serias y profundas reformas del orden moral y político de nuestra Patria, y que considero como la más poderosa palanca para esta obra, la opinión pública, bastante más fuerte que toda clase de intereses, de cautelas y de imposiciones, por lo mismo soy de los más opuestos á los cambios repenti-

Y una de las condiciones de esta campaña es la tolerancia. Tengo por un verdadero crimen, en el estado de la opinión pública de España, impedir de cualquier modo la expresión de todas las ideas, y sobre todo, de la fórmula práctica de todas las tendencias. Y esto se impide, no sólo por medio de leyes y de actitudes hostiles de las autoridades, sino con el clamoreo de los prejuicios y de las pasiones, que toman por pretexto unas veces la religión, otras la patria; cuándo la causa del pueblo, cuándo el interés del orden ó del progreso.

Lo que ahora ha sucedido en la cuestión de las Antillas debiera abrir los ojos á todos los hombres discretos y verdaderamente patriotas. Si no se nos hubiera querido aplastar con tantas calumnias y tantas infamias..., ¿no habría triunfado hace dos años la Autonomía colonial y no se habría evitado España los dolores y las pérdidas que conocemos y los que todavía tendremos que registrar?

Pero Dios quiera que la lección aproveche para las empresas próximas. Hay que oír, y *oír bien* á todo el mundo. Y es preciso que las reformas que se hagan en nuestro país sean con la garantía ó por la fuerza de la opinión pública, suficiente informada y dignamente requerida.

Esto lo digo por todo, pero muy especialmente por la reforma autonomista, que ahora nos preocupa.

Ya en otra parte he explicado cómo y por qué los decretos de Noviembre son insuficientes, y he iniciado que es una verdadera injusticia y un positivo absurdo desconocer

llas por la negación de las bases primeras de este régimen; cosa que hubiera podido realizarse muy bien ya haciéndose aquí en Madrid, los ministerios coloniales, como antes se nombraban los directores de la administración ultramarina, ya fabricándose en la Plaza de Santa Cruz partidos insulares que hubieran de plantear en Cuba y Puerto Rico, con muy discutible prestigio, lo que sólo los viejos autonomistas habían predicado, por espacio de veinte años; ya imponiéndose á los nuevos (y en su día necesarios) partidos coloniales el carácter de mera prolongación de los gubernamentales de la Península, con lo que se rectificaría la tradición regional de los partidos avanzados de ambas Antillas, se excluiría del gobierno local á los republicanos y se volvería á las viciosas prácticas del viejo régimen de la *dominación colonial* bajo la aparatosa é hipócrita fórmula de la *Asimilación racional y posible*.

No pararon aquí las maquinaciones de nuestros adversarios, ni pararán en eso seguramente. Luego vino la discusión, por rumores, referencias y obra de segunda y tercera mano, de los hombres más salientes de los antiguos partidos autonomistas; no solo de los que formaron parte de los Gobiernos insulares, si que de aquellos otros que pudieran sustituir en plazo más ó menos breve á los actuales ministros de Cuba y Puerto Rico. Y en seguida, la propaganda del equívoco y de la sospecha sobre los motivos ó los pretextos más fútiles y la recomendación de que se interpretasen algunos artículos de los decretos de Noviembre en el

Pero no es esto lo peor. Porque detrás de esa insistente campaña, se ha podido ver, de una parte, la confianza de nuestros adversarios en hallar algún apoyo (aunque por otros motivos), en liberales y autonomistas, muy dignos y sinceros, pero candorosos é impacientes y poco ó nada atentos á la gran experiencia europea de las transformaciones del orden político; y de otra parte, la predisposición de no pocos hombres muy comprometidos en el éxito del actual ensayo autonomista, á creer que éste, en lo sucesivo, apenas si tropezará con más dificultades que las que ocurran en Cuba y Puerto Rico, por lo cual no deben merecer extraordinaria atención ni los próximos debates parlamentarios en nuestras Cortes, ni la disposición de los partidos políticos peninsulares, ni la acción política que aquí se desenvuelve, ni la orientación de la opinión pública metropolitana.

¡Qué equivocación! Si no estamos más que en el tercer acto del drama, cuyo desarrollo pide mucho más espacio y bastantes más actores que los conocidos ó presentados hasta el día!

No trato de razonar ahora mi opinión perfectamente contraria á los supuestos antes referidos. A su tiempo dije, donde procedía, para que surtiera efecto, que me interesaban, para el éxito de la nueva política, casi tanto como el texto de los decretos de Noviembre, los nombres y los antecedentes de las personas que allá en las Antillas los habían de plantear. Y por eso, después de escuchar y registrar las francas declaraciones de los Sres. Sagasta y Moret,

Mas por cima de todo esto y para los que como yo siguen considerando el problema colonial—y ahora especialmente el problema de Cuba—como una cuestión *total y nacional*, es de toda necesidad y como un deber de conciencia, formular su opinión para que el empeño no fracase en este momento crítico, bien por exceso de confianza, bien por distracción más ó menos inexcusable, bien por falta de datos precisos sobre la situación de las cosas y las exigencias de la política, por parte de los más comprometidos ó más interesados en el éxito del iniciado ensayo autonomista.

Apercibámonos, pues, todos á discutir y á operar con buena fe y acendrado patriotismo, sin intransigencias ni prejuicios, dándonos perfecta cuenta de que el problema afecta á intereses de la más alta importancia (á la causa de la Humanidad y de la civilización, tanto como al honor de España y al porvenir de nuestras Antillas), y de que es indispensable poner por cima de todo (no me cansaré de decirlo) la soberanía de la opinión pública, seria, honrada y eficazmente solicitada.

Después de esto no ocultaré que la publicación de mi discurso de 1895 en estos instantes obedece también, aunque en muy último término, á un pequeño interés personal: al de fijar bien mis personales responsabilidades.

De ninguna suerte consentiré que las gentes distraídas, maliciosas ó mal intencionadas, pretendan de mí lo que yo no he ofrecido ó aquello para lo cual carezco evidentemente de medios. No retiro una línea de cuanto he dicho ó escrito

de las influencias más directas de la cultura política de mi patria.

Además, al venir á este sitio con la devoción del que ha sido y es gran partidario del régimen bicameral, experimento un verdadero placer, porque vuelvo á encontrar en estos bancos á tantos ilustres varones en cuya compañía, bajo cuyo consejo, y por cuyo ejemplo, pude yo hacer mis primeros pasos en la carrera parlamentaria, en la que llevo ya largos años, y en la cual no he encontrado motivo sino para justificar mi fe en la propaganda de las ideas, y para agradecer la disposición hasta benévola de todos mis compañeros, á escuchar y respetar todas las convicciones honradas, dando así á nuestra vida pública el tono de una admirable tolerancia.

Abrigo el íntimo convencimiento de que si algún servicio pequeño he podido prestar á mis ideales, y sobre todo á esta tierra española, habrá pocos, quizás ninguno, que puedan compararse al servicio que creo hacer en estos momentos, porque aquí vengo en situación verdaderamente extraordinaria y con una representación particular bien concreta y definida, á declarar, en medio de todos los conflictos que nos rodean, y en nombre del partido autonomista de Cuba, que, pocos ó muchos, queridos, odiados, acariados, ó perseguidos, los hombres de aquel partido mantienen en esta suprema crisis, con férvido entusiasmo, dos ideas.

La primera es, que la salvación de todos los conflictos presentes está en aquella solución proclamada por el autonomismo colonial, en cuya virtud se conseguirá la fortificación de los derechos de la localidad, de la integridad de la Pa-

Responde este compromiso á un deber de disciplina. Los republicanos han proclamado el retraimiento y cualesquiera que sean mis opiniones respecto de este particular, á todos se nos impone el acatar el acuerdo de un modo escrupuloso; con tanto mayor motivo, cuanto que la Junta creadora de Unión republicana ahora, como la Minoría parlamentaria hace dos años, resolvieron, por unanimidad de votos y de un modo expreso y singular, que en vista de la gravedad extrema del problema colonial, de las circunstancias particulares del régimen electoral de Cuba y Puerto Rico, de la organización de los partidos antillanos y de mis compromisos de toda la vida, pudiera yo asistir al Congreso y al Senado para discutir la cuestión de Ultramar. Todo obliga á observar y cumplir el deber de disciplina que he señalado. El ejemplo debe interesar á toda la sociedad española, hoy como nunca necesitada de tales ejemplos de respeto y sumisión.

Por manera que aquí traigo una representación particular (la de los autonomistas cubanos) y me preocupa un empeño relativamente concreto, un fin especialísimo fuera de los intereses relativamente secundarios de la política palpitante, y con tal explicación ya puedo añadir que principio en los actuales debates llevo un triple propósito. Primero, señalar la gravedad interior é internacional de la guerra de Cuba. Segundo, recabar de los partidos gobernantes de la Península declaraciones explícitas tanto respecto de la situación de la grande Antilla, como sobre la manera de resolver el doble problema allí planteado, de la inmediata pacificación de la Isla y de su porvenir político y social más ó menos próximo. Y tercero, ratificar los compromisos del Partido

de momento necesarias, en el doble concepto de satisfacción á los problemas ultramarinos y de remedio á los conflictos presentes, he de poner gran solicitud en que se sepa bien que tanto como eso interesa que aquí discutamos, precise-mos y comprendamos todo el fondo y toda la transcendencia del problema cubano. Yo rechazo en absoluto todos los temores, todas las protestas, todas las reservas que por ahí corren respecto á que no sea conveniente discutir en el Parlamento español tales asuntos. ¿Dónde, sino aquí, deben ser objeto de severo examen y amplia discusión? ¿Dónde?

¡Ah, señores! En primer lugar, como antes he insinuado, comprometido el régimen representativo y parlamentario, no comprendo cómo podríamos declarar incompetente al Parlamento y peligroso el uso que hagan los Diputados y Senadores de su derecho para desentrañar los problemas más arduos, solicitar todos los intereses de la Patria y evidenciar las energías positivas que en esta tierra existen, para terminar la guerra y resolver todos los conflictos que nos rodean.

traimiento de carácter político, sino una mera abstención, fundada en las circunstancias antes consignadas, y que de ninguna suerte ha de influir en la actitud y procedimientos del Partido, debe naturalmente limitarse á las elecciones de carácter popular en que concurren aquellas, y no pueden extenderse á las de las Corporaciones, en las cuales no existen:

La Junta Central acuerda abstenerse de presentar candidatos para las próximas elecciones de Diputados á Cortes y de Senadores por las provincias; reservándose presentarlos para las elecciones de Senadores por las Reales Sociedades Económicas y por la Universidad de la Habana.

Habana 28 de Marzo de 1893.—V.° B.°—El Presidente, *José María Gálvez*.—El Secretario, *Antonio Gavín*.

taria que á los pocos días dictaminó sobre la vega proposición del Gobierno, excusándose de entrar en detalles, y propuso que aquel nombrase varias personas que fuesen á América para recibir las proposiciones que los gobiernos allí establecidos hiciesen, á fin de transmitir las á las Cortes para que éstas resolvieran en definitiva. Tan peregrina propuesta fué combatida, entre otros, por el diputado extremeño Golfín, que presentó un plan de organización autonómica, mientras circulaba entre los diputados una Memoria de análogo sentido, inspirada en el antiguo proyecto del Conde de Aranda y escrita por encargo del Ministerio de Ultramar, por don Miguel Cabrera de Nevarés. Ninguna de estas soluciones fué sancionada por el voto de las Cortes. Este consagró el fondo del dictamen de la Comisión, con adiciones del Conde de Toscano, Moscoso y Espiga, que condenaron todo concierto

1

2

3

4

ITA DE AMERICA, LA CIUDAD DE WESTMINSTER SE CONVIERTE EN

...en la guerra de la
grande Antilla. Agrego lo relativo á la naturalización
americana de muchos hijos de Cuba; naturalización sospe-
chosa y que entraña grandes complicaciones que es neces-
rio prevenir ó disipar en interés de España y de los Estados
Unidos. El mismo presidente Cleveland, en más de una oca-
sión, solicitó la mirada del Congreso norteamericano sobre
este particular, siendo de toda evidencia la irregularidad
de todo lo que se practica en los Estados Unidos, exageran-
do el alcance de la protección de éstos sobre personas que
en realidad invocan aquel apoyo por motivos y fines abso-
lutamente incompatibles con los principios generales del
Derecho internacional.

A última hora han surgido debates periodísticos sobre el
supuesto propósito del Gobierno americano de reconocer la

tidarios en la gran República, donde por muchos se pretende, no sólo sustraer á América de la relación política, económica é internacional con Europa, sino someterla á una especie de protectorado que habría de ejercer el pueblo de Washington y de Lincoln. Esta tendencia ha tomado mucho relieve con motivo de la cuestión de Venezuela; lo toma ó lo tomará á pretexto de la cuestión cubana, si bien los aspectos que ha de presentar con este último motivo, no serán absolutamente los mismos, por grande que sea la insistencia y franca la orientación de la República norteamericana. ¿Para qué he de decir ahora que esa tendencia de exclusivismo y predominio, disfrazada con varios nombres, es opuesta al sentido del movimiento internacional iniciado por el tratado de Westfalia de 1688, y continuado sucesivamente por los tratados de Utrecht de 1703, de Hubersburgo de 1763, de Viena de 1815, de París de 1856 y de Berlín de 1878 y 85, que acusan el constante sacrificio de las diferencias de raza, de secta, de representación histórica, de religión, de familia, para levantar sobre todas ellas el interés humano? Exagerando la doctrina de Monroe, al día siguiente de haberse quebrantado á cañonazos el aislamiento de China, del Japón, del Paraguay y de Marruecos (quebranto logrado precisamente con el concurso de los Estados Unidos), se crearía una nueva diferencia: la diferencia continental antipática al movimiento expansivo y al espíritu de solidaridad de los pueblos contemporáneos. Pues contra esto hay que protestar, contra esto protestará la América meridional, protestará Europa y tiene derecho á protestar, como pocos, la patria del Padre Victoria y de Baltasar de Ayala.

Pero no nos hagamos ilusiones; este no es un empeño individual. Por mi parte entiendo que tampoco ninguna de las cuestiones que antes señalé (las de naturalización, indemnización, beligerancia, protección de rebeldes, etcétera, etc.), ninguna se resolverá pronta y satisfactoriamente por el solo trato de España con los Estados Unidos. De aquí la necesidad de contar con la cooperación extranjera, con la cooperación de los Gabinetes de otras naciones y de la opinión pública del mundo culto que debe y puede considerar todos estos problemas como algo más que un interés particular y exclusivo de España.

Pensar de otra manera, equivaldría á no leer un solo periódico del extranjero; equivaldría á no poner un solo minuto la atención en los debates de los Parlamentos de otras naciones.

Pero después de esto he de reconocer que, hoy por hoy, estamos en malas condiciones para recibir esa cooperación internacional que recomiendo. Esto es efecto primeramente del aislamiento en que vive España.

Ese aislamiento es, á su vez, resultado de varias causas. En primer término del concepto que de la circunspección española tienen ó patrocinan, entre otros, el señor Presidente del Consejo, en la cual he creído yo ver, con cierto dolor, tanto una reacción exagerada de las exageraciones á que nos había llevado antes nuestro espíritu romántico y batallador, como una falta de confianza en los medios con que cuenta España, que ahora mismo parece vivir y levantarse con energías para muchos inverosímiles. Después á ese aislamiento ha contribuido una reciente y profunda equivocación de nuestro partido conservador.

parase de bien conocidas prácticas parlamentarias para hacer ciertas preguntas. Por tanto insinuaré una con todo género de salvedades y dejando al Gobierno en plena libertad para responderla. ¿No tiene el Gobierno algún dato de carácter oficial respecto á la manera cómo algún Gabinete extranjero, y más concretamente, algunos Gabinetes europeos entienden nuestro problema de Ultramar?

¿Por acaso, en el curso de las relaciones oficiales ú oficiales de nuestro Gobierno con algunos gobiernos extranjeros, no ha oído el primero la expresión de las simpatías que inspira España más allá de las fronteras, no ha percibido ciertas veladas censuras á la actitud y la conducta de los Estados Unidos, pero con el aditamento de cariñosas excitaciones para que el Gobierno español varíe de procedimiento en nuestras colonias y se ponga en armonía con el sentido dominante en la colonización contemporánea mediante la proclamación de la autonomía colonial? ¿Es inverosímil la especie de que una de las mayores dificultades con que nuestro Gobierno tropieza para concluir la guerra de Cuba, sostenida muy particularmente por las simpatías y los auxilios directos de Norte América, es la propaganda que se hace en el mundo contra nuestro régimen colonial, atribuyendo á nuestro Gobierno propósitos reaccionarios por la suspensión de las reformas del 95, lo mismo en Cuba agitada que en Puerto Rico pacífica y por la significación que se atribuye públicamente á la sustitución del señor general Martínez Campos por el señor general Weyler en el gobierno de la grande Antilla y en la dirección de la guerra cubana?

Por lo pronto puedo asegurar que de esto hablan todos los días los principales periódicos de Europa y que recomen-

daciones ó insinuaciones análogas de los gobiernos europeos no son nuevas en la historia de las relaciones exteriores de España. Buena prueba de ello es lo que hicieron Francia é Inglaterra, cuando allá, por los años de 1850, se trató de garantizar por la acción internacional la soberanía española en las Antillas. Aquel laudable propósito que fracasó, no sólo por la célebre nota de Mr. Everets, si que (entre otras causas) por el disgusto que á los Gabinetes de París y Londres producía nuestro *statu quo* colonial. A lo menos esto consta en documentos oficiales, ya públicos, de aquellas cancillerías.

Llego á la tercera nota, á lo más íntimo del problema: al problema de Cuba, de la guerra de Cuba, en relación con el Gobierno conservador, con el partido conservador y con las soluciones que se presentan ahora para concluir la.

III

A mi juicio, la guerra de Cuba, durante el actual período de mando del partido conservador, demuestra, para el efecto que voy discutiendo, la profunda desconfianza que este partido tiene en los medios morales y políticos para resolver las grandes cuestiones que se ventilan en estos momentos. Al principio fué indecisión; después repudiación absoluta de todo procedimiento moral y político.

Lo vemos bien demostrado: el partido conservador contrajo un compromiso absoluto respecto de las reformas del 24 de Marzo de 1895. El jefe de ese partido se comprometió explícitamente, y aun hizo francas declaraciones, que

reprodujo después el señor Ministro de Ultramar, cuando ya había estallado la insurrección. Entonces su creencia era que aquellas reformas evitarían toda perturbación, y en último caso que aquellas reformas refrenarían ciertas impaciencias y allanarían ciertas dificultades provenientes del mismo retraso con que se llevaban á las Antillas las reformas, después de haber sido presentadas como inmediatas dos años antes. Conviene precisar bien esto.

Tenían SS. SS. un compromiso terminante: el compromiso de llevar á la práctica aquella ley, por medio de reglamentos que debían publicarse en la *Gaceta* inmediatamente, y sin los cuales ni era dable formar juicio definitivo sobre el alcance de la reforma.

El Sr. Cánovas del Castillo de una parte, y yo de otra, al tiempo de votar, nos reservamos el decir de qué manera interpretábamos aquella ley; y nos reservamos el juicio definitivo de la obra reformista hasta que se publicaran los reglamentos. Pero después de ocupar el Gobierno el partido conservador vino la indecisión, retardándose extraordinariamente la publicación de estos decretos y, por tanto, las reformas quedaron en suspenso. Luego, el ministro de Ultramar tomó algunas medidas por todo extremo sospechosas, respecto al poder de los partidos políticos cubanos. A poco se acentuó la vacilación, ya esperada del Gobierno, y se inició un cambio político separando al general Calleja para enviar á Cuba al general Martínez de Campos.

No era el general Martínez de Campos persona que pudiera ir de gobernador á Cuba para representar pura y exclusivamente la violencia; mejor dicho, el procedimiento de

la guerra. Eso no lo podía representar el general Martínez de Campos. Méritos tiene S. S. muy grandes; bazarria reconocida; es hombre de suerte y de competencia. Eso le da una gran representación aquí, pero en América no tendrá S. S. ese carácter; S. S. será siempre el hombre del Zanjón, el hombre de la política de transigencia y de reconocimiento de las libertades y de los derechos.

Si en lugar de ir el general Martínez Campos acompañado de grandes fuerzas, como fué, hubiese ido otro general, esto habría sido la rectificación plena de la política primera de la política del partido liberal; pero yendo el general Martínez Campos acompañado de esas fuerzas, anunciaba un cambio de política, pero solo en una de sus determinaciones. El Gobierno no confiaba ya en la eficacia superior de las reformas, y el general Martínez Campos llevó el encargo de utilizar las armas y, hasta cierto punto, la política.

Su señoría debió conocerlo, porque de otra suerte no podía ir sin renegar de todo lo que es, de lo que vale y de parte de su gloriosa historia. Pero el compromiso del nuevo gobernador, dados sus antecedentes, era difícilísimo. El señor general Martínez Campos, no podía ser más que el hombre de los procedimientos políticos: allí estaba su poder, su eficacia. Sin embargo, aceptó la política media del partido conservador.

Hasta Noviembre, S. S. quiso mantener allí esta política. No hizo bien en todo lo que realizó hasta el mes de Noviembre; pero la verdad es que mantuvo en todo ese tiempo la aspiración de las reformas aplazadas. Llegó un momento en que abandonó por completo la política de reformas el señor general Martínez Campos... (*El Sr. Martí.*

nez Campos: Yo, no: el Gobierno.—Rumores.) ¡Ah, S. S. no: el Gobierno! (*El Sr. Martínez Campos: Pido la palabra.*)

Pero me lo explico; cuando la representación que se tiene es muy alta; cuando la dificultad de una empresa no consiste solo en dar un disgusto á tal ó cual amigo, sino que está en comprometer toda una política, en comprometer á una situación que ha puesto su representación en la lealtad del actor, no se puede al día siguiente de aceptar un puesto variar de rumbo.—Así es que yo, que soy un leal adversario, siempre he rectificado dos opiniones bastante generalizadas en la Península; una, respecto del Sr. Presidente del Consejo de Ministros, y otra respecto al Sr. Martínez Campos. En cuanto al Sr. Presidente del Consejo de Ministros. no le he de ocultar, puesto que aquí no se debe ocultar nada, que hay muchos que han creído que en el instante de subir al poder el Sr. Cánovas del Castillo, renegaba de sus compromisos y tomaba el poder para mixtificarlos. No; yo creo firmemente que no ha sido eso, y he dado la completa seguridad de que S. S. perseveraba en cumplir sus compromisos, y que éstos eran tan terminantes como el día que honradamente declaró otra cosa; lo que hay es que S. S. no tenía toda la fe necesaria en la virtualidad de estas ideas y soluciones, y por eso titubeó y luego cayó del lado de sus antiguas prevenciones. De la misma manera, en cuanto al general Martínez de Campos, también dentro y fuera de España se ha dicho que cortó su historia en el punto y hora en que abandonó la dirección del ejército para deplo-
rar, solo, su fracaso.

Yo he creído siempre que á S. S. le produjo extraordinario efecto el no saber qué determinación debía tomar, lu-

chando con los deberes de lealtad respecto al Gobierno que le había fiado una delicada misión, y de otra parte con la idea de que sin las reformas, sin la política liberal, no era viable la misión de que se había encargado. Pero en medio de las dudas, de las fluctuaciones del gobernador general de Cuba, se precipita la política conservadora de Madrid, política encaminada á prescindir del sentido de la reforma votada en Marzo de 1895 y que se anuncia por una serie de medidas, más que alarmantes, desalentadoras. Una de ellas fué la suspensión de las elecciones municipales y provinciales de las dos Antillas, y en seguida el nombramiento de diputados y concejales de Real orden. ¿Pero cómo, por qué, con qué derecho se hacía esto?

Siento no ver sentado en su sitio al Sr. Ministro de Ultramar, porque acerca de esto tengo gravísimas quejas que dirigir á S. S. Yo discutí esta cuestión en el Congreso, y ni el digno Presidente de la Comisión, que allí dictaminó sobre esto, ni yo, que puse muchos reparos á esta solución, enterdimos jamás que fuera posible realizar dos cosas: suspender las elecciones municipales en el mes de Junio y nombrar de Real orden concejales para sustituir á los concejales que sólo podrían haber dejado de serlo en el caso de que se acudiera á los comicios para que eligiesen otras personas. ¿Por qué? Porque esto lo dispone categóricamente el art. 92 de la ley electoral de Cuba, el cual dice que cuando por cualquier concepto los concejales nuevos no puedan tomar posesión de sus cargos, los concejales antiguos deben conservarse los mismos puestos cargos que desempeñaban hasta ese momento.

Después se realizó otra obra extraordinaria y dañosa

y fué nombrar concejales á los conservadores en lugar de los autonomistas y reformistas. (*El Sr. Martínez Campos: No es exacto.*) No tendrá S. S. parte en ello; se haría contra sus órdenes; pero lo cierto es que ha sucedido, y no me podrá negar la veracidad de este dato. En Baracoa no hay un solo concejal autonomista, y allí los autonomistas lo eran todo. Respecto del Príncipe, tengo aquí los datos y sucede una cosa por el estilo. Repito que S. S. daría otras órdenes; pero si así es, no se han cumplido. Estos son hechos, y por lo tanto sobre ellos no cabe discusión.

Al mismo tiempo realizaba el partido conservador otra obra parecida, que fué nombrar gobernadores de las provincias cubanas, no ya á personas de ideas conservadoras, sino á los presidentes de los comités conservadores, como sucedió en Matanzas y en Pinar del Río. ¿Cómo podréis negar esto? ¿Cómo podréis negar que al poco tiempo, en vez de preparar la creación del nuevo Consejo de Administración, se crearan nuevos puestos en el antiguo para dárselos á los hombres del partido conservador? Y cuidado que no me fijo en las personas, pues estoy acostumbrado á tratar estas cuestiones desde cierta altura; me limito á presentar el hecho como un dato. Los nombramientos serían magníficos, sorprendentes, admirables; pero lo cierto es, que se faltaba á la ley electoral por un lado, luego á las declaraciones del Gobierno por otro y, por último, al sentido general de la reforma de Marzo, en que todos habíamos converido. Y esto produjo—necesariamente tenía que producir—un quebranto inmenso en el prestigio del partido conservador y una decepción profunda en el ánimo de todo el país antillano.

Señores, ha llegado el Sr. Ministro de Ultramar á una

cosa verdaderamente peregrina. Aquí se votó hace años una ley para crear el Consejo de Instrucción pública. Era una novedad, y una novedad de transcendencia. Se quiso llevar á él la representación de todos los diferentes institutos y elementos de la enseñanza. Aquella ley debía aplicarse á Ultramar, y se aplicó. En la Península, este Consejo quedó bastante mal arreglado, ¿no es verdad, Sr. Ministro de Fomento? Pero, en fin, á este Consejo vinieron representaciones de todos los elementos de la enseñanza peninsular, de la privada en todas sus formas y de la pública ú oficial en todos sus grados. ¿Pues sabéis cómo se ha aplicado en Cuba y Puerto Rico? Quitando el voto á los maestros de primera enseñanza para dárselo á las Juntas de instrucción pública y á los inspectores; es decir, á los funcionarios nombrados por el Gobierno. Este es un detalle que demuestra la desconfianza extraordinaria que allí se tiene, cuando lo que debía hacerse era abrir el corazón y dar entrada en el nuevo Consejo á todos los elementos de los diversos partidos, pues bastante era la fuerza de resistencia que tenía el partido conservador.

No quiero hablar de lo que sucedió en el orden de las reformas económicas, porque de ello me he de ocupar especialmente en otra sesión.

Por el momento básteme traer á la memoria del Senado algunos hechos. La ley de 14 de Junio de 1895 autorizó al Gobierno para que arbitrarse recursos mediante la pignorción ó venta de los billetes hipotecarios creados en 1886 para atender á los gastos que originara el restablecimiento del orden público en Cuba y nada menos que *hasta la completa pacificación de aquella isla*. Yo no conozco autorización

que igualara en atrevimiento á la que acabo de citar, hasta que hace pocos días se ha presentado á este Parlamento otra que quizá se haya aprobado y que declara que el Gobierno puede arbitrar, mientras no estén reunidas las Cortes (y ya sabemos que estarán reunidas lo menos posible) con cargo á las secciones de Guerra y Marina del presupuesto de Cuba de 1896-97, los recursos necesarios para atender á las obligaciones de carácter extraordinario y que se originen con motivo de la actual alteración del orden público, comprendiendo en estos gastos los servicios consulares y diplomáticos. Este proyecto ha llegado al extremo de autorizar al Gobierno para usar del crédito público y de la garantía especial de alguna renta ó contribución de la nación, que no se halle particularmente obligada, siendo el Consejo de ministros absolutamente dueño de fijar la cantidad de los préstamos, sus condiciones, el tipo de interés, los plazos de amortización y la garantía que haya de darse al prestamista.

Muy poco antes el Gobierno había obtenido otras dos extrañas autorizaciones: las referentes á los presupuestos de Cuba y Puerto Rico para 1895-96. Por esas leyes el Gobierno quedó facultado para plantear en Cuba y Puerto Rico, los presupuestos generales de gastos é ingresos de dichas islas para 1895-96, con sujeción á la ley de reforma de 15 de Marzo sobre Gobierno y Administración de las mismas y además para hacer las modificaciones necesarias en los servicios ó establecerlos nuevos, procediendo en igual forma respecto de los ingresos indispensables para cubrirlos.—Y como si esto no fuera bastante, el Gobierno fué autorizado: primero, para negociar billetes.

hipotecarios de Cuba, emisión de 1890, á fin de obtener los miles de pesos que exigiese la atención de la deuda flotante contraída y el déficit que ofreciera el ejercicio corriente de 1894-95, y segundo, para modificar el artículo 8.º de la ley de 30 de Julio de 1892, que estableció un derecho transitorio de 10 por 100 á la entrada en la isla de efectos de toda procedencia (la nacional inclusive) que no fuesen de comer, beber y arder, exigido en las Aduanas, sobre las cuotas señaladas á la importación en la segunda columna arancelaria y los recargos que se impusieran.

Me parece que no aventuro paradoja alguna afirmando que jamás en España se han concedido autorizaciones semejantes, que constituyen una verdadera dictadura administrativa y económica.

Por último, hay que recordar lo que en Cuba sucedió con el llamado tratado de comercio con los Estados Unidos y con la reforma arancelaria,

El arancel vigente en Cuba lleva la fecha de 29 de Abril de 1892, y se hizo en vista del convenio comercial celebrado con los Estados Unidos en 28 de Julio de 1894. Aquel arancel sancionó tipos bastante altos, á los cuales se había de referir la rebaja del 25 y el 50 por 100 concedidos á Norte América, y en él se cometieron no pocos errores respecto de la importación de algunos efectos —como la maquinaria— absolutamente precisos para la industria de Cuba, donde hay que preocuparse mucho, no tanto de que se produzca en abundancia sino de que se produzca barato. El arancel de 1892 se llamó interino y se autorizó á las corporaciones y los intereses insulares para que hicieran las observacio-

nes para su resultado, y en tanto vino la denuncia y terminación del convenio con los Estados Unidos en 24 de Agosto de 1894, con lo que el arancel de 1892 resultó gravosísimo, si bien aseguró el monopolio del mercado antillano por parte de la industria peninsular.

No sólo se hicieron calurosas protestas por parte de las Antillas y ofrecimientos de urgente reforma del lado de la Metrópoli, sino que aquí se constituyó en Enero del 95 una Junta especialmente encargada de proponer en breve plazo la reforma del arancel provisional, para hacer posible la vida económica, sobre todo de Cuba, excitada, alarmada y casi arruinada por el superior motivo de las dificultades del mercado americano, por la creciente baja del precio de los azúcares y por el monopolio de la producción peninsular. La Junta verificó numerosas y bien aprovechadas reuniones é hizo sus propuestas. Pero el Gobierno no ha dado un solo paso respecto de esta cuestión, ni aventura una frase, ni se acuerda siquiera de que respecto de la urgencia de una solución expansiva, son casi idénticos los compromisos del partido conservador y los del liberal y unos mismos los reclamos de todos los partidos de Cuba.

Esto sería suficiente para que Cuba estuviera al borde de la ruina. ¡Imaginaos lo que habrá aumentado aquella crisis con las enormes dificultades y los tremendos compromisos de la guerra!

Frente á todo esto las angustias del señor gobernador general de Cuba llegaron á ser inmensas. Ya respiraba á veces, un poco fuerte, y eso llegaba aquí por medio de los *reporters* de los periódicos. Pronto se vió la absoluta imposibilidad de continuar allí el señor general Martínez de

Campos. Los incidentes de la guerra, el crecimiento de la insurrección, la pericia de los contrarios ó la cuestión política local fueron la determinante de su regreso á España. Pero sobre todo esto se hallaba la lógica de la situación.

Su señoría entonces salió de Cuba, y fué nombrado para sustituirle el general Weyler, un militar aguerrido, inteligente; pero como para ese cargo (ya lo he dicho), á causa de la complejidad del problema cubano, no bastan representaciones militares, había que ver qué representaba políticamente el señor general Weyler.

El señor general Weyler tenía una representación perfectamente definida: representaba la última evolución del partido conservador, es decir, la franca suspensión de todas las reformas y el procedimiento de las armas como único medio de vencer la insurrección. Ya no se habló más de reformas; ya no se habló más de las leyes de 1895; ya no se habló más de procedimientos pacíficos de ningún género. No había otro procedimiento que hombres, dinero, todo género de sacrificios y toda clase de energías para sofocar el movimiento separatista que, en vez de encontrarse hoy sofocado, continuó desde entonces más potente cada día.

¿Cuál había de ser el efecto que produjese en Cuba tan sencillo y radical cambio de política, por más que ya se pudiera prever á partir del día de la destitución del señor general Calleja? En primer lugar (y esto es el mayor peligro de la cuestión cubana), el desencanto, la sorpresa, la separación del país, la reserva del sentimiento y la confianza del público respecto del Gobierno; después, necesariamente, por la retirada de los partidos liberales de aquella isla, no del lado de la Patria, sino de las proximidades del Gobierno,

quedaron con éste sólo los representantes de la extrema derecha de los partidos cubanos.

Repítese mucho en nuestras conversaciones particulares, que en la guerra de Cuba luchamos con un inconveniente grandísimo, superior, y es, que el país todo está en contra de España. Yo lo niego en redondo.—No; lo que sucede es, que aquel país en gran parte está suspenso y temeroso de la actitud del Gobierno; no ve en ella la parte buena, ve lo que tiene de mala; y al recelo y desconfianza del Poder responde la mayoría de los cubanos con indiferencia, sin que por esto simpatice con la insurrección. Podrán decirlo por la calle muchos, pero ¿cómo ha de estar el país con la insurrección, cuando la insurrección es la ruina y la miseria, cuando nadie sabe lo que va á suceder en aquella tierra al cabo de un año, cuando las fortunas más considerables corren ya peligro de muerte, cuando la fiebre y el fuego y las balas están concluyendo con aquella poco numerosa población, cuando dentro de poco no habrá allí más que tristezas que deplorar con la misma pena con que deploramos la desgraciada suerte de Santo Domingo que hace un siglo era quizá más espléndida y arrogante que Cuba. ¡Ah! Los que ven desde lejos esa lucha, podrán mirarla con cierta tranquilidad; pero los que tenemos allí el alma, la vida, el corazón, las fuerzas, los amigos, la familia, los que conocemos á fondo y al detalle lo que aquello es y lo que allí pasa y allí se prepara, no podemos esperar tranquilamente horrenda catástrofe que por todas partes se anuncia.

Por eso quizá el mayor peligro de la cuestión cubana es la reserva de aquel país, el aislamiento en que allí vive el Gobierno. Cierto que es titánico y nobilísimo el esfuerzo de

los soldados de nuestro ejército; pero es muy grave la actitud del país, que si bien, lejos de estar con allí vive la insurrección, protesta contra ella, no acompaña al Gobierno; y en esto, que es el grave problema y la dificultad tremenda de la guerra de Cuba, está el secreto de la solución aquella crisis. Ahí está la manera de acabar con la guerra.

Fijémonos un poco en lo que puede llamarse la política de la guerra cubana. Veamos lo que en ella interesa á sus principales factores y aun lo que sobre ella dicen los elementos combatientes. Esto nos dará datos para la política general.

Por un lado tenemos la política de la insurrección; por otra parte está la política de España. ¿Cuál es el interés de la insurrección? Primero, que la guerra dure mucho; segundo, concluir con la riqueza del país; tercero, evitar choques sangrientos entre los soldados de España y los soldados de Cuba.

Este es el programa. Está bien pensado, está bien meditado, porque no en balde ha pasado cerca de un siglo de guerras en América. «¡Que dure, que dure, dicen los insurrectos, porque de esta suerte vendrán los conflictos internacionales! ¡Que dure, porque de esta suerte vendrá la necesidad de hacer en la Península esfuerzos extraordinarios de hombres y de dinero! ¡Que dure, porque así vendrá el cansancio del adversario obligado á agitarse en el vacío.

«¡Que dure, que dure! (como decía uno de sus mayores caudillos, uno de los más aguerridos, quizás el primero de la insurrección); que dure, que dure, porque á España no la vencemos en lucha, con las armas, con el fuego. No; España es un pueblo de valientes, es un pueblo que peleará

hasta el último instante; lo que hace falta es que no tenga fusiles, que tenga pólvora que se agoten sus recursos, y para llegar á ese extremo, es preciso que la insurrección dure, ¡que dure!

De otro lado, ¿creéis que los insurrectos concluyen con la riqueza cubana porque odian á Cuba? No; no la odian; no; la quieren, pero tristemente se equivocan en el modo de quererla. La quieren, pero dicen: concluyendo con la riqueza de Cuba, de aquí no saldrán recursos para España y la guerra concluirá por falta de medios materiales.

Y á propósito de esto, ¡qué error tan grande y tan profundo el cometido con uno de nuestros insignes generales, cuando se dijo que al defender, por ejemplo, los ingenios y las fábricas de azúcar, servía solo los intereses de los particulares! No, no; lo que se defendía de aquella suerte era la riqueza, era el nervio indispensable para hacer la guerra.

De esta suerte (dicen los insurrectos), el día que haya concluido todo en Cuba y se haya destruido cuanto existe, quedará yerma la tierra, sí, pero la tierra es potente: y ellos locamente creen que después vendrán nuevos hombres, con capitales y medios para levantar aquella tierra que ellos han contribuido á perder y aniquilar con sus excesos y locuras.

Después, su sistema consiste en excusar la lucha, evitar el derramamiento de sangre, el choque; porque al fin y al cabo, ellos dicen, lo dicen sus periódicos, que yo leo bien y con gran cuidado, porque tengo obligación de conocerlos. «No; nosotros no podemos odiar á esos soldados; debemos amarlos, porque cumplen heroicamente un deber y respon-

pronto afirmo que la inmensa mayoría, la casi totalidad del país cubano, no guerrea.

Al lado de esto tenemos las soluciones de los dos partidos gobernantes. La solución del partido conservador es la del Mensaje. Lícito me ha de ser lamentarme con casi todos los señores Senadores que han usado antes de la palabra del modo y manera como ha venido el Mensaje. —Bien están esas fórmulas que voy á discutir; pero ¿no cree el Gobierno que, dada la situación tremenda porque atravesamos, dada la expectación general, dado lo que aquí se ha discutido, con ese Mensaje, y al lado de ese Mensaje, con los proyectos que han presentado el señor ministro de la Guerra y el señor ministro de Ultramar (máxime si son tan enormes como el último del señor ministro de Ultramar), debía venir alguna explicación categórica respecto del estado y situación de la isla de Cuba, de la guerra, de la Hacienda y de todas las otras cuestiones, en cuya virtud pudiéramos formar un juicio aproximado de la verdadera disposición y los medios positivos del Gobierno y de la crisis antillana presente?

Más aún: por grandes que sean el tacto y la circunspección del señor Ministro de Estado, que mantiene una tesis en términos generales plausible (aunque no llevada al extremo que la lleva S. S.) respecto á la reserva de los documentos diplomáticos, ¿no hubiera sido de cierta conveniencia aportar para debates como el presente y en general para el juicio público algunos datos, algunos de esos pliegos que forman los libros *rojo*, *amarillo* ó *azul*, por los cuales se pudiera formar un concepto bastante fundado del modo y manera que los pueblos extraños tienen de estimar las cau-

sas, las condiciones, el desenvolvimiento y el porvenir que de nuestra guerra de Cuba?

Y cuenta, señores, que es tanto más grave el proyecto del señor Ministro de Ultramar, á que acabo de aludir, cuanto que S. S., que ahora se presenta solicitando una autorización inconcebible, de que no hay ejemplo en país alguno y contra la cual el argumento más poderoso que yo pudiera utilizar serían las mismas palabras que S. S., como diputado, empleó contra el Sr. Abarzuza, cuando éste presentó hace pocos meses un proyecto de autorización más pequeño... (*El Sr. Abarzuza:*) Entonces estaba solo.) Eso lo explicará él, porque yo no llevo aquí su voz; pero no comprendo cómo el señor Ministro, al pedir la autorización económica de ahora, se ha olvidado de que tenía delante otras dos del año pasado, cuyos últimos artículos dicen: «Del uso que se haga de esta autorización se dará cuenta á las Cortes.» ¿No era este el momento de dar cuenta al Parlamento?

Pero voy á las fórmulas de solución del actual conflicto cubano. La fórmula del Gobierno conservador es esta: en la situación presente, que es una situación de guerra, nada más que la guerra. Notadlo bien, nada más que la guerra. Por tanto, repudiación absoluta de las reformas de 1895; pero repudiación en Cuba, donde hay guerra; repudiación en Puerto Rico, donde no la hay. Algo parecido á lo que por aquí se decía en 1870 y 1875, opuesto á lo que la República hizo en 1873 y á lo que al fin la Restauración tuvo que hacer en 1878, al patrocinar la Paz del Zanjón. Quiero prescindir por el momento de que siendo lógicos nuestros conservadores, tendrán que pedir también la dictadura en la

Península; aunque sospecho que por otro medio y con otros pretextos y otras apariencias ya se llegará á ello. Pero el Gobierno ahora ha adelantado una novedad, pues que en el Mensaje afirma para cuando concluya la guerra, y como fórmula definitiva y solución de los problemas ultramarinos, más que como medio de resolver, por el momento, las dificultades que se presentan en Cuba, la creación de una personalidad administrativa y económica que, sin menoscabar la soberanía de la nación, dé capacidad y medios al país cubano, á las Antillas, para atender á sus propias necesidades y obligaciones.

Esta fórmula, no lo niego, me sedujo; pero esto pide explicaciones categóricas, porque aquí no podemos patrocinar equívocos, ni debemos ni podemos tenerlos, tanto respecto del extranjero, como respecto de Cuba. ¿Qué quiere decir, como fórmula definitiva, esa personalidad administrativa y económica? Porque en el orden colonial hay fórmulas consagradas; ya lo sabemos; ya las conocéis.

La de la asimilación se ha proclamado y ensalzado mil veces con la protesta de todos nuestros partidos y nuestros Gobiernos monárquicos, de que era, no solo la única compatible con el régimen monárquico, sino la única verdaderamente nacional.

Con trabajo renuncio á la crítica de esta fórmula, explicada contradictoriamente por sus ciegos partidarios en el curso de los últimos cuarenta años y á la cual atribuyo mucha parte de los conflictos presentes. Pero reconociendo que no es la hora de esta crítica, aquella en la que—como sucede hoy—parece que casi todo el mundo da la espalda á la vieja teoría asimilista, sí creo que no está demás repetir mi

constante protesta de que esa celebrada asimilación de nuestros monárquicos y gobernantes de este último período, no es la fórmula tradicional de la colonización española. Nunca se ocurrió ni á los legisladores de Indias ni á nuestros tratadistas de derecho colonial afirmar la asimilación de los españoles de Ultramar: para éstos proclamaron siempre la identidad de derechos políticos y civiles. Para los indios sí, la asimilación. Esto es, la educación y elevación gradual de los mismos hasta llegar á la plenitud del derecho español. Y para indios y para españoles el régimen de las franquicias locales, de los reglamentos y leyes especiales dentro de la localidad, los Concilios y las Cortes regionales, los Fueros coloniales: en una palabra, la Autonomía condicionada por las circunstancias de aquellos tiempos y dentro del orden político de los siglos XVI y XVII. Olvidando todo esto, se ha podido establecer en estos últimos cincuenta años allende el Atlántico el régimen de la desigualdad, de la centralización y de la desconfianza, haciendo de los españoles ultramarinos, españoles de segunda y de tercera clase y trayendo sobre el Gobierno de la Metrópoli atenciones, compromisos y responsabilidades verdaderamente irracionales é imposibles. En tal sentido nada más triste que lo que respecto de este particular ha sucedido últimamente. Porque, en la época en que aquí en la Península se ha avanzado en el disfrute de los derechos políticos, consagrándose el sufragio universal, el jurado democrático y una relativa descentralización municipal y provincial, se ha querido conservar allá en las Antillas (tan cultas, tan ricas y tan españolas como el resto de las regiones de la Península) el censo electoral, los alcaldes de Real orden, la

centralización más exagerada y presuntuosa y aun el régimen de los consejos de guerra que indirectamente sanciona el artículo 29 del novísimo y no discutido Código de Justicia militar. Este contraste no lo ofreció el período antiguo de nuestra colonización ni aun se dió en el período del absolutismo peninsular.

Pero dejemos esto á un lado para afirmar enseguida que hasta ahora en el escenario de la política española y más particularmente en el círculo de los que en estos cincuenta últimos años se han ocupado de las cosas trasatlánticas, solo un determinado grupo de hombres, en sus libros, sus discursos, sus manifiestos y sus campañas propagandistas y de gobierno, ha hablado de la personalidad de las Antillas, en el sentido de dar á éstos las facultades y los medios necesarios para atender suficiente y prontamente á las necesidades primeras de la localidad, de la colonia, sin menoscabo de la soberanía de España. Ese grupo, ¿cuál ha sido? ¿Cuál es? El autonomista. Y yo tengo ahora el derecho de preguntar á ese Gobierno: ¿es que al utilizar la fórmula de los autonomistas acepta su contenido? ¿No lo acepta? En este último caso, ¿qué quiere decir eso de la personalidad administrativa y económica de las Antillas, sobre todo cuando se dirige á Cuba y más ó menos directamente á los gobiernos del mundo culto, harto conocedores de la política colonial del siglo xix y de los errores y fracasos de la actual política colonial española?

Ya me doy cuenta de que en la fórmula del Mensaje á que me refiero no se habla de la personalidad política, pero esta frase ya en las escuelas se ha dejado bastante de lado, y así nos podemos reir de todas las gentes que afirman,

por ejemplo, que los Ayuntamientos carecen de carácter político, siendo así que éstos tienen una facultad política tan esencial, como lo es la de nombrar Senadores en ciertas y determinadas circunstancias.

Pero entrando un poco en el asunto, me permitiré advertir que cuando en otro tiempo se hablaba del carácter no político de ciertas instituciones y corporaciones, se quería dar á entender que éstas carecían de la facultad suprema de constituirse y regirse absolutamente por sí propias, estableciendo poderes y determinando su vida conforme al régimen federal en su grado menos harmónico con la unidad del Estado. Siendo esto así, es probable que la reducción de la personalidad cubana ó portorriqueña, á lo económico y administrativo, responda al propósito de negar á nuestras dos Antillas el derecho de hacer su constitución y por tanto de establecer los poderes coloniales al lado ó por cima del Poder de la Metrópoli. En tal caso deberé recordar que esto no lo han pedido jamás los autonomistas antillanos. La autonomía colonial, que por espacio de muchos años hemos defendido en la Península, en las Antillas y en todo el mundo, ha supuesto constantemente la soberanía de la nación, la cual es la única capacitada para decretar y reformar la Constitución política, económica y administrativa de Cuba y Puerto Rico. Por la voluntad nacional, y manteniéndose siempre en potencia y en acto esa voluntad, sin delegación esencial de ningún género y por procedimientos aún más racionales y eficaces que los consagrados por otros países (la misma Inglaterra, por ejemplo) vivirán las instituciones coloniales al par que la competencia de las corporaciones jurídicas y especialmente

políticas de nuestras Antillas, se reducirá pura y exclusivamente á lo insular, y esto solo en cuanto no afecte al interés ó al derecho del resto de la Nación. Por eso ni en Cuba ni en Puerto Rico podrá reformarse la Constitución general de España, ni siquiera en aquello que más directamente afecte á los españoles que allí vivan; ni allí por el voto exclusivo de los antillanos se podrá modificar la Constitución colonial, ni el Gobierno de la Metrópoli renunciará á la intervención que en la vida política de aquellos países supone el veto de los gobernadores coloniales. Por lo mismo, nosotros hemos sostenido que tanto las leyes generales de España—las civiles y las penales—como las que regulan intereses públicos de superior transcendencia social, como la superior organización de la Justicia imperen á Ultramar por el voto y acción de las Cortes nacionales soberanas, en cuyo seno tendrán las Antillas idéntica representación á la de todas y cada una de las regiones peninsulares. Por manera que la *personalidad* de Cuba, de que aquí se ha hablado por espacio de tantos años frente á la doctrina y los abusos de la asimilación, no tiene el carácter de la personalidad federal á que generalmente se aludía en otra época, cuando se habla de Autonomía política.

Pero de todas suertes, ante la escueta fórmula que aparece en el Mensaje de la Corona, y no pudiendo prescindir de los antecedentes que acabo de recordar, yo tengo el derecho de preguntar una y mil veces, á ese Gobierno: ¿Lo que se recomienda para Cuba como definitiva solución es una institución, llámese como se quiera, con facultades plenas para resolver todo lo insular, bajo la soberanía de la Nación,

y con intervención del poder soberano de la madre Patria?

¿Es esto? Pues esto es la Autonomía. Y entonces hay que decirlo. ¿No lo es? Pues explíquese esa solución.

Pero llega después otra sombra. ¿Se aplaza la solución recomendada en el Mensaje? Aquí surge otra gran dificultad. ¿Queda aplazada esa solución *ad calendas grecas*; queda ahora en la indeterminación, quizá como una nueva promesa en nuestra historia colonial contemporánea y tal vez como un punto á discutir en el momento de su aplicación allá cuando la guerra termine en Cuba? ¿Es esto? Pero entonces, ¿cómo se va á producir efecto en el país y se va á lograr lo mismo que el Mensaje reconoce como conveniente, lo que yo creo indispensable, es decir, el mover ahora á las gentes y llevarlas á la contrarrevolución para que con este poderoso recurso concluya pronto y bien la guerra? Y en tanto que se señala esa solución que debía ser urgente como un término indefinido del programa total del partido conservador, mientras no concluya la guerra, ¿ha de continuar el viejo sistema en Puerto Rico?

Señores, lo que se hace con Puerto Rico ya no tiene nombre. Yo os pido en interés de todos los partidos que abandonéis vuestras añejas preocupaciones. Mirad que aquel es un país tranquilo, siempre dispuesto á recibir las leyes en condiciones de dar realidad y eficacia á todas las ideas. Todas las instituciones que se han llevado allí han producido sus naturales y deseables frutos. Y esto no es de ahora.

Recordad el período en que concluyó el imperio de España en el Sur de América. Entonces, por recomendación de Pover y por la inteligencia del intendente Ramírez, se aplicaron y ampliaron las reformas del marqués de

preocupa? ¿Cómo ponerla en tela de juicio? Pero ¿dejará de ser cierto que este partido conservador, después de comprometerse á llevar inmediatamente á Cuba y Puerto Rico las reformas votadas el 14 de Marzo de 1895, no las ha llevado? ¿Con qué derecho puede pedir el partido conservador que Cuba ni Puerto Rico crean que cuando concluya la guerra ese mismo partido llevará las reformas de que ahora habla, por grandes, amplias y generosas que ellas sean y por calurosas que parezcan las actuales protestas? ¿Fueron flojas las de 1895? No hay, pues, que fiar en el éxito de las meras palabras.

Vengamos ahora á las soluciones del partido liberal. Yo tengo que concretarme en este punto á las declaraciones que aquí ha hecho, en nombre de este mismo partido, el Sr. Gullón. S. S. me ha de permitir que le exprese mi duda de que los partidos gobernantes, los partidos que tienen la aspiración de sucederse en el Gobierno puedan dar su fórmula determinada de la misma manera que S. S., en el nombre de su partido, la expuso en una de las últimas sesiones de esta Cámara.

No; el régimen parlamentario no es eso; no basta que después de oír las opiniones del Gobierno, se levante el partido que se le opone, para limitar sus protestas y observaciones á estas sencillísimas frases: «Mi fórmula no es esa y no digo más.»

No; hay que discutir la fórmula del Gobierno; hay que desentrañarla; hay que poner frente á frente de la solución adversa la solución propia. Porque en el caso actual, es evidente que el señor Presidente del Consejo de Ministros nos da su nota; su resolución es definitiva, en el doble sentido

de responder á las necesidades de Cuba y Puerto Rico, y de procurar la terminación de la guerra. ¿Por qué el partido liberal no discute esta solución? ¿Por qué no ataca por ella al partido conservador? Y sobre todo, si no está con este partido, si no cree que esa solución es la justa, ¿por qué no explica las razones que tiene para no aceptarla? ¿Es que únicamente cuenta con la fórmula de las reformas del 95? Pero ¿de qué suerte? Acaso con la salvedad también de no plantearlas inmediatamente en Cuba y ni siquiera en Puerto Rico hasta que concluya la guerra? (*El Sr. Gullón pronuncia algunas palabras que no se perciben.*) Ni una sola palabra ha dicho S. S. sobre ese particular. He leído con toda atención el discurso pronunciado por S. S.; pero yo me alegraría de que S. S. dijera algo en cualquier sentido, porque grandemente me interesa, como he manifestado anteriormente, fijar bien las posiciones de todos.

Yo no tengo relación alguna con el partido conservador, ni puedo tener con el partido liberal más que las simpatías que me inspiran todo movimiento expansivo, y la mayor proximidad á mis particulares soluciones políticas. Pero tan lejano é indiferente soy á lo que constituye intereses de Gobierno de los unos como á las conveniencias particulares de los otros.

Hablo, pues, puedo hablar con una completa imparcialidad y sin otra preocupación que la de la suerte de Cuba y la de la positiva eficacia de los medios que ahora se propongan para dominar la crisis presente. En tal supuesto, me opongo á toda reserva, á todo equívoco, á toda vacilación. Y concretamente afirmo que á estas horas no es ni puede ser una solución la reforma antillana de 1895.

Pero ¿es que el partido liberal cree que no hay más solución que la reforma del 95? ¿Cree que toda la evolución colonial está ahí? ¿Cree que en los momentos actuales, dada la situación de las islas de Cuba y Puerto Rico, únicamente aplicando esas reformas es como se puede levantar allí el espíritu público? No me cansaré de hacer estas preguntas. Y adelantándome digo que si la respuesta fuera afirmativa, en tal caso el partido liberal retrógrada, y en ese sentido está detrás del partido conservador.

La ley del 95 tenía razón de ser. Cooperamos á ella todos. El partido autonomista lo hizo con sinceridad, con un manifiesto buen deseo. Puedo hablar en esto con tanta mayor independencia, cuanto que quien puso quizá más reparos á aquella reforma, fué el que en este momento tiene el honor de dirigiros la palabra. Pero es lo cierto que la aceptamos, la sostuvimos, la amparamos. ¿Por qué? Primero, porque como el partido autonomista no ha sido nunca un partido pesimista, como no ha querido jamás hacer violencia á las soluciones, como ha aceptado todas las reformas de buena fe y ha creído que del planteamiento de unas se vendría á la exigencia inmediata de otras; pensaba que esto por un lado, y por otro la poca eficacia de algunas instituciones, á cuyo arraigo no había de contribuir, traerían necesariamente el triunfo definitivo de sus ideales, con la fuerza, con el convencimiento y por la voluntad de todos, calmada por el momento la gran excitación producida en Cuba por los sucesos de los últimos cinco años y por el mismo político aplazamiento de la llamada reforma Maura.

Por otra parte sería imposible negar la importancia que tuvieron las reformas de 1895, lo mismo en el período de su

iniciación y su presentación á las Cortes españolas que en el momento de su votación por éstas. Lo he dicho repetidas veces. Los proyectos del Sr. Maura proporcionaron la ventaja de dar forma y precisión y regularidad al llamado movimiento económico de Cuba, convirtiéndolo en un movimiento político de positiva orientación y resultados perfectamente compatibles con el orden público. Luego contribuyeron á deshacer la resistencia de la Unión Constitucional cubana, muchos de cuyos elementos formaron el partido reformista y se apartaron de la vieja intransigencia fecunda en todo género de desastres y que tenía dividida á la sociedad política cubana en criollos y peninsulares. En último término consagraron algunos principios y algunas soluciones de valor sustantivo, cuya importancia superaba á la deficiencia, á las contradicciones y hasta á la injusticia de algunas otras afirmaciones de la misma obra reformista.

Lo propio podría decir de la ley llamada de Abarzuza, que es la de 1895, y en la cual se vació con no escasas modificaciones la reforma del Sr. Maura de 1893. Aun con ser considerables las modificaciones de 1895, y con sancionar buena parte de los errores del proyecto anterior, al par que rectificaba, aunque poco, otros, la aplicación resuelta de la ley de 1895 hubiera producido buenos efectos en Cuba: yo creo que habría impedido la actual insurrección. Y cuenta, señores, que ya tenía muy mal preparadas á las Antillas el hecho por todo extremo deplorable de no haber seguido inmediatamente á la presentación del proyecto Maura en 1893, su debate en las Cortes y su planteamiento en Cuba y Puerto Rico. Esos aplazamientos y esas distracciones y esos desdenes ó esos olvidos no se pueden hacer impune-

mente tratándose de pueblos excitados y realmente dispuestos á no dejarse desdeñar. Es este uno de los mayores pecados de la política colonial española: y en este particular no son pequeños los cargos que se pueden hacer á nuestro partido liberal en relación con la campaña reformista de estos últimos cinco años. Es decir, cargos perfectamente contrarios á los que por análogo motivo, le hacen los ultraconservadores cubanos y muchos conservadores de Madrid.

Pues bien, así y todo, y á pesar del error capitalísimo de la ley Abarzuza y del proyecto Maura, de prescindir de la reforma electoral (olvido imperdonable tratándose de pueblos latinos y de colonias de los antecedentes de Cuba y Puerto y Rico) yo tengo que repetir que la obra de 1895 habría producido saludables efectos si la ley se hubiera aplicado con el sentido y del modo que afirmaron todos los hombres políticos que tomaron parte en los debates parlamentarios de los meses de Febrero y Marzo de 1895.

Pensando en esto los diputados autonomistas prestamos entonces nuestro humilde pero franco apoyo. Y lo digimos con toda franqueza.

¿Cuáles fueron las declaraciones que hicimos cuando se votó en el Congreso el Proyecto Abarzuza? Primero el Sr. Montoro, en los comienzos del debate, y yo á lo último, llevando el nombre y la representación, no ya sólo de la minoría autonomista, sino también de la minoría republicana de las Cortes, dijimos: «aceptamos esa fórmula (aunque con inconvenientes graves que entonces señalamos, y que no tengo para qué repetir ahora), porque representa un progreso; pero fijamos, como condiciones, dos: primera, su planteamiento inmediato; segunda, su plantea-

miento sincero; porque sólo de esa suerte habrá de producir resultados relativamente satisfactorios.

Pero todo esto pasaba en 1895. Luego... ahora... ¿cómo prescindir de lo que ha sucedido y del nuevo estado de las cosas? ¿Cómo reducir el empeño á la mera instauración de las reformas de 1875 y esto solo cuando *termine la guerra*?

Porque no en balde van ya pasados dieciseis meses de ésta y se ha promovido en Cuba una situación política radicalmente opuesta á la de Junio de 1893 y Febrero de 1895 y los partidos locales cubanos han tomado otra actitud. El autonomista ha formulado sus Memorandum de Mayo y Septiembre últimos, y hoy patrióticamente rectifica parte de las declaraciones que entonces hizo en vista de circunstancias contrarias á las que determinaron su anterior compromiso.

Es evidente que el principal propósito que presidió á la votación de aquella ley—la evitación de hondas perturbaciones políticas y de orden público en Cuba—no se ha logrado, sea de quien fuere la culpa del suceso. Resulta, pues, inconcebible que con la misma bandera de Marzo de 1895, se pretenda ahora animar al país y concluir la guerra, dejando para un porvenir incierto la enmienda de defectos tan transcendentales, ya señalados detalladamente hace año y medio, como, por ejemplo, el mantenimiento del censo electoral que sostiene el carácter oligárgico de la representación ultramarina, contrastando con el sufragio universal que existe en el resto de la nación española, cuyas provincias no tienen más razón ni título que los que pueden ostentar las Antillas; ó como la nota esencialmente burocrática del Consejo de administración, nombrado en su ma-

yor parte de Real orden; ó como la negación del derecho de las corporaciones insulares de votar los impuestos para cubrir gastos cuya designación libremente se las permite, para que se acuse con mayor energía la impotencia de aquellos centros, ó, en fin, como la excusa de la competencia insular para establecer el Arancel cubano, cuando cada vez aparece con mayor evidencia la imposibilidad de que el Ministerio de Ultramar pueda emanciparse de la presión que aquí hacen algunos elementos industriales de la Península, para mantener con mayor ó menor desenvoltura el principio de la explotación mercantil de las colonias, fuera de toda compensación y toda equidad.

El mismo partido liberal, al votarse en Marzo de 1895, ofreció la reforma electoral para plazo muy próximo. Ahora no puede esperar que las gentes se entusiasmen con las deficiencias de hace año y medio, y prescindan de todo lo que ha pasado en este tiempo, y que sólo debe ser estimado como nuevo motivo para recabar una solución pronta, justa y definitiva.

Pero todavía es más inconcebible que el partido liberal se crea dispensado de explicar franca y detenidamente las razones de su actitud del momento, el rumbo de su política y sus opiniones sobre el problema del *self-government* planteado en todas partes, al terminar las guerras coloniales contemporáneas, como un medio de fortificar los quebrantados vínculos de las colonias y sus Metrópolis.

Esto último constituye un gran pecado, tanto porque mediante esta reserva se reduce el espacio y se excusan los datos necesarios para el libre juego de los elementos gobernantes, cuanto porque esa actitud es incompatible con

La representación progresiva é iniciadora del partido liberal y contradice las tradiciones de éste en la historia colonial española de los últimos quince años. Se trata, pues, de una verdadera subversión de ideas, tendencias y actitudes.

Permitidme que sea tan severo en la expresión de mis juicios, por lo mismo que es notoria cierta simpatía de mi parte á favor del partido liberal y porque de la disposición de este espero yo un gran avance en la solución del problema que á todos gravemente nos preocupa.

Fijaos en que el problema actual ultramarino no está puesto ante los partidos gobernantes españoles en estos términos de escuela: ¿qué conviene á Puerto Rico? ¿qué conviene á Cuba más ó menos tranquila? ¿qué conviene á una colonia? La cuestión está planteada en estos otros términos: ¿qué conviene en este momento para concluir la guerra en Cuba, para levantar los ánimos y para asegurar después las condiciones todas de prosperidad y riqueza de aquella isla? Pues para eso, lo he de decir con toda franqueza, la fórmula del partido liberal es de una deficiencia verdaderamente desesperante.

El problema es claro: ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué queréis hacer ahora? Decidlo con entera franqueza. Dad vuestras propias soluciones ó discutid la del adversario, para que los demás saquemos las consecuencias. Con vuestra estudiada reserva, os ponéis los liberales detrás de los conservadores. Creedme, de vosotros precisamente depende la solución en estos momentos.

Como no ha de ser la única vez que moleste la atención de la Cámara, tengo que prescindir de otras muchas indicaciones que prolongarían innecesariamente mi discurso de

hoy. Ya se habrá advertido que he dejado completamente aparte toda la gravísima cuestión económica de Cuba, lo mismo lo referente á la reforma arancelaria, aplazada, no sé por qué ni para qué, hace un año, que lo tocante á las autorizaciones recabadas en Junio del año último ó pedidas en estos momentos al Congreso y al Senado por el señor ministro de Ultramar para atender de un modo inverosímil al restablecimiento de la paz en la grande Antilla. Aplazo esta cuestión para cuando aquí se discuta el presupuesto de Cuba. Quiero evitar confusiones, y ahora me acucia el deseo de poner término á esta oración parlamentaria, que denuncia en todas sus partes mi preocupación y el anhelo de mis amigos de contribuir del modo que nos sea dable á la pacificación de Cuba y á la normalidad de la vida de España.

III

Por mi posición especialísima en esta Cámara, no pudiendo reclamar el poder para un partido nacional por las razones que he explicado al principio de mi discurso, yo me creería dispensado de presentar soluciones concretas al problema que estamos aquí discutiendo, si yo no viese con gran prevención toda gestión política de carácter meramente crítico y alcance puramente negativo. No es inverosímil que alguien estime como una verdadera impertinencia que yo salga de la insistente reclamación de soluciones

precisas á los dos partidos monárquicos que exclusivamente llevan la nota y la pretensión de gobernantes de la actual política española. Pero no debo olvidarme que realizo ahora una obra de buena fe y de puro patriotismo, y que tengo la opinión de que todavía hay remedio para los males de Cuba. Por tanto alguien también puede exigirme ó esperas mi humilde juicio respecto del modo y manera de conseguir este efecto.

Además, ni por un solo minuto debo olvidarme de que yo hablo aquí en nombre de un partido local antillano, en representación de los autonomistas de Cuba, que saben bien que no pueden aspirar, por la particularidad de su representación, al poder en la Metrópoli, donde sólo tienen derecho á gobernar los partidos nacionales ó generales; pero tampoco mis amigos y correligionarios ultramarinos ignoran que su concurso es absolutamente necesario para la pacificación de Cuba, y entienden que deben decir con toda franqueza las condiciones en cuya virtud ese concurso puede ser eficaz.

Con estas salvedades, yo me atrevo á decir que es absolutamente indispensable proclamar ahora mismo, por modo solemne, la autonomía colonial en nuestras Antillas. Es decir, una autonomía acomodada al espíritu y á las tradiciones coloniales de España, sobre la base de la identidad perfecta de derechos civiles y políticos de los españoles de allende y aquende el Atlántico, del sufragio universal y del gobierno responsable en el sentido de que sean reponsables ante las corporaciones populares insulares, capacitada para atender y resolver todo lo puramente colonial, los funcionarios públicos encargados exclusivamente de la adminis-

tración insular. Y todo ello bajo la soberanía indiscutible de la Nación española representada por los Poderes públicos de la misma, y garantizada del modo y manera que la misma Nación en Cortes estime oportuna.

Después de esto, yo sostengo que esa Autonomía colonial se debe aplicar inmediatamente, mañana mismo, á la isla de Puerto Rico, pero con toda sinceridad y resolución y sin que nadie pueda temer que el predominio de cualquiera de los grupos políticos insulares en las corporaciones de aquella isla sea el resultado de ninguna otra fuerza ó influencia que la voluntad explícita de la mayoría de aquel país.

Asimismo creo que es indispensable llevar urgentemente á las columnas de la *Gaceta* las fórmulas concretas y positivas de esa solución autonomista para Cuba, con el explícito compromiso de proceder á su aplicación en el modo y manera que lo permitan ahora las circunstancias, para que el régimen quede implantado en toda su plenitud en el punto y hora en que cese materialmente la guerra en aquella comarca.

Del mismo modo pienso que es inexcusable levantar la vida económica de Cuba por medio de una grande, resuelta é inmediata reforma arancelaria de carácter eminentemente librecambista, que abarate ó realmente haga posible la existencia particular y la industria en Cuba, que asegure á los productos de aquella tierra grandes mercados en todo el mundo, que comprometa al extranjero á la defensa del orden y de la paz en la antilla, y que respete la producción metropolitana del modo y manera que las respetan los aranceles coloniales ingleses. Es decir, no consintiendo que en

ningún caso el producto extranjero resulte favorecido contra el producto nacional.

Por último, entiendo que corresponde al Gobierno, por sus medios propios y característicos, que yo no puedo ni debo detallar ahora, levantar la opinión cubana, excitar el concurso caluroso y activo de aquel país, determinar el desarm y la reducción de los insurrectos en vista de la libertad consagrada definitivamente en aquella tierra, que ahora agoniza por efecto de la guerra, y en último extremo procurar, provocar y dirigir la contrarrevolución en nombre del derecho de España y de la Autonomía colonial.

No es imposible que todavía haya quien desee que yo precise esos medios de gobierno. Pero sería en mí gravísima indiscreción detallarlos, porque para ello necesitaría, en primer término, estar en el banco azul y contar con los recursos generales y los prestigios de todo género del poder constituido. Yo, desde aquí, solo puedo y debo decir que me doy perfecta cuenta de todos esos medios.

Tales son nuestras soluciones, que presento con relativa timidez y con toda clase de salvedades para que consten como modestas recomendaciones, para que se interpreten como la expresión de nuestros compromisos en la obra de pacificación que deseamos, como contraste con las soluciones que aquí se han escuchado, y, en último término, como la aspiración de un partido local antillano bien distinto por su naturaleza, sus medios y sus responsabilidades, de los grandes partidos gobernantes de la Península. (*El señor Gullón pronuncia algunas palabras que no se oyen.*) Ya he dicho al principio que no hablo absolutamente más que en nombre de un partido local.

¡Oh, Sr. Gullón! Si yo pudiera hablar en nombre del partido republicano ¡de qué otra suerte podría contestar á S. S.! (*El Sr. Gullón*: Harto lo lamento; por mí no se tenga S. S. ni un minuto.) Ya he dicho todas las razones que tengo para no hacerlo. (*El Sr. Gullón*: Las respeto, pero lo lamento.)

Hora es ya de terminar, señores Senadores. En esta campaña debemos tener en cuenta la situación difícil de las cosas tanto como las responsabilidades que nos corresponden; pero debemos también buscar ejemplos fortificantes en la tradición española y aprovechar la experiencia de todos los grandes pueblos colonizadores.

Grave, muy grave es la situación por que hoy atravesamos en Cuba; pero, ¿ha sido la única en la historia colonial? Cuestiones tan graves, tan difíciles, ¿no se han presentado en casi todas las colonias del mundo, aun en aquellas que hoy mismo se caracterizan por su adhesión completa y absoluta al Gobierno de su Metrópoli? ¿Cómo olvidar que á fines del siglo pasado, á poco de haberse producido la gran agitación de los Estados Unidos, la rebelión de las trece colonias que firmaron la protesta de 1776 y á las cuales no se pudo dominar por los procedimientos que ahora se ponderan en España, surgió un movimiento insurreccional análogo, en el extremo septentrional de América, hoy conocido con el nombre del dominio del Canadá? ¿Y cómo aprovechó la lección Inglaterra y puso remate á la nueva agitación de las riberas de los grandes lagos? Pues con la reforma de 1791, que instauró en aquella comarca el régimen representativo, destruyendo las prevenciones y las estrecheces de las antiguas Ordenanzas y del

Gobierno militar. El efecto de la reforma de Pit fué tan profundo, tan satisfactorio y tan inmediato, que allí donde la propaganda de Norte América había determinado una cierta tendencia separatista, allí encontró Inglaterra los elementos más resueltos y de mejor resultado para combatir á los Estados Unidos, ya independientes, en la guerra que sostuvo con esta Nación de 1812 á 1815. Otra vez volvieron las agitaciones del Canadá por efecto de las preferencias que el Gobierno de Londres demostraba en favor de los elementos genuinamente ingleses contra los de procedencia francesa, y allí se produjo una insurrección que costó mucha sangre. Esto sucedió en 1837 y 38. Inglaterra sofocó aquella insurrección por el consejo de Lord Durham, que fué gobernador del Canadá y redactó el famosísimo Informe que saben de memoria todos los que tienen alguna afición al Derecho colonial, después de lo cual se estableció, allí, en 1840 y desarrolló en 1854, el régimen autonomista, poniéndose á la cabeza de aquel Gobierno el célebre Lord Elgin, cuya devoción y cuyos compromisos en favor del nuevo sistema dieron un valor y una eficacia extraordinarios á las nuevas instituciones. El resultado lo hemos palpado ahora mismo en las demostraciones fervorosas del Canadá (vigorizado por las diferentes reformas que han ensanchado su autonomía desde 1867 á 1880,) con motivo de los disgustos y choques de Inglaterra con Venezuela y los Estados Unidos.

Pero lo mismo, sobre poco más ó menos, ha sucedido en otras colonias inglesas. Ahí está, por ejemplo, la colonia del Cabo, agitada extraordinariamente desde 1840 á 1850. ¿Cómo terminaron aquellas dificultades? Pues con la reforma expansiva de 1850, con el establecimiento del régimen

representativo en 1853 y con el planteamiento de la autonomía colonial en su forma más acusada en 1872. La misma Jamaica ofrece dos pruebas de suma importancia. En 1838 el gobierno inglés le impuso la abolición de la esclavitud. Jamaica intentó revolverse, y el gabinete liberal británico pretendió suspender la Constitución local. Sin embargo, el Parlamento se opuso. Jamaica se tranquilizó y en 1854 fué modificada aquella Constitución en sentido expansivo, reduciéndose las facultades del gobierno metropolitano. Once años después se produjo una gran revuelta interior en la colonia: los oligarcas realizan una gran matanza de negros, y luego vuelven los ojos á Inglaterra pretendiendo que ésta asuma el gobierno directo de la colonia. La Metrópoli británica no puede excusarse, y para asegurar el orden público acepta la dejación que los colonos hacen en manos del Gobierno de Londres, de algunas de sus franquicias locales, reconociendo su insuficiencia; pero ese mismo Gobierno se apresuró en 1884 y 1894 á desprenderse de todas las facultades excepcionales para restablecer el régimen liberal y expansivo en Jamaica, asegurando la paz entre negros y blancos y un gran prestigio para la madre Patria, que allí representa sobre todo la libertad y el progreso. Los efectos de toda esta campaña son evidentes.

El gran discurso de John Rusell de 1854 ha tenido su respuesta ahora en los grandes banquetes con que los colonos del Canadá y la Australia han festejado pocos meses hace á Mr. Chamberlain, proclamando la perfecta intimidad de todos los ingleses residentes en todas las partes del mundo. Por estas demostraciones, Chamberlain, á pesar de las últimas torpezas de la política extranjera bri-

tánica, ha podido orgullosamente decir frente al conflicto de Venezuela, que Inglaterra no está sola. Efectivamente, la acompañan con amor entrañable todas sus colonias, cuya identificación le está asegurada por el régimen autonomista.

En cambio, señores, nosotros tenemos el recuerdo de los años 20 al 23; nosotros, ante el movimiento revolucionario de América, abandonamos los negocios y le opusimos los discursos del Conde de Toreno y el Arancel unificador y prohibicionista del año 22. El resultado fué que mientras Inglaterra, con su autonomía colonial, aseguraba todas sus colonias y engrandecía la Patria, nosotros perdimos todo el imperio que teníamos en la América continental, como hubiéramos perdido á Cuba y Puerto Rico, de no contradecir ó rectificar nuestro error, llevando á estas islas desde 1812 á 1820 las reformas del Marqués de la Sonora.

Voy á terminar, señores Senadores, con dos recuerdos de importancia y alcance muy diversos, pero íntimamente relacionados con la gestión que en este momento realizo. El uno es de carácter puramente personal. Permitidme que lo someta á vuestra bondad por el honrado propósito que me anima y por la positiva transcendencia de la lección que entraña.

Por estos mismos días, hace veinticinco años, que yo pronuncié mi primer discurso parlamentario. El tema era bastante análogo al presente. Mi posición muy parecida á la actual. Ardía la guerra en Cuba, y yo, representante de Asturias en el Congreso español, estaba, por mis opiniones coloniales, casi solo, aparentemente solo, extraordinariamente más solo que me encuentro ahora en el Senado. Entonces, en el fragor de la lucha, yo grité como

el poeta inmortal, *¡paz, paz!* Afirmé que el conflicto de Cuba no terminaría por el medio exclusivo de las armas, y sostuve que era absolutamente indispensable y de suprema urgencia realizar, por razón del derecho y como medio político de gobierno en las dos Antillas, la abolición de la esclavitud y una amplia reforma democrática en el orden político, económico y administrativo de Puerto Rico. Renunció á describiros el terrible efecto que produjeron mis palabras aun en aquella Asamblea constituida en su mayoría por mis amigos de la infancia, por mis maestros de la Universidad, por mis compañeros de escuela y academia.

Yo muchas veces he tenido que calmar la indignación de mis íntimos, que no comprendían la fiereza con que, tanto en la Península como en las Antillas, fui atacado. No me extrañaba nada de eso, porque yo conozco bien de qué suerte han sido atacados, en los momentos de pasión, cuantos en España han defendido la libertad de las colonias.

Tampoco se me ocultaba la sinceridad de muchos de mis implacables adversarios, cuyos excesos ví siempre desde una gran altura, y de cuyos agravios ya no tengo memoria, porque yo sabía, y sé muy bien, que cuando se procede rectamente y se tiene razón, sólo se necesita perseverar, dejando al tiempo que acredite las verdades y haga justicia.

Pues bien; el tiempo ha proclamado por completo la exactitud de mis predicciones y la razón de mis defensas. Cuanto yo prediqué se ha realizado. En Puerto Rico se instauraron con éxito maravilloso todas las libertades, y el ejemplo y la influencia de Puerto Rico fueron uno de los fundamentos de la paz del Zanjón.

Es muy posible que buena parte de los que me escucháis estéis en situación análoga á la de mis oyentes y contradictores de hace veinte años. Vuelvo á predicar una cosa análoga. Tengo el derecho de esperar que los mayores adversarios de mis predicaciones de ahora repitáis más tarde los discursos que recientemente he oído de labios de mis contradictores de antaño, ponderando en estos últimos días las reformas ultramarinas de 1872 al 74, como positivas glorias de España. Tengo la perfecta seguridad de que se repetiría el caso.

Pero ¡ay, señores, que yo no tengo ahora, como tenía entonces, mucho tiempo por delante! Porque el conflicto de Cuba ya no tiene superior. No admite tregua. Es de suprema urgencia. De aquí mis ansias vivísimas de que la rectificación de ideas y la transformación de sentimientos se verifique ahora, inmediatamente.

El otro recuerdo se refiere á mi adolescencia y á escenas inolvidables que constituyen grandes éxitos y merecimientos excepcionales de este Senado. Era allá por los años de 1863, cuando se traía ante el Parlamento español el problema transcendental de una rectificación de nuestra política en la América española, ya independiente. En aquellas circunstancias se oyeron en esta gran Asamblea dos voces elocuentísimas: la del ilustre D. Juan Francisco Pacheco y la del prestigioso D. Juan Prim.

Entrambos eran objeto de las acusaciones más violentas, por su actitud benévola hacia los pueblos americanos. No es maravilla. Siempre la calumnia se ha cebado con todos cuantos representaron nuestra política expansiva allende el Atlántico, desde Colón hasta el conde de Revillagigedo y el marqués de la Sonora.

Pero fueron tantas la elocuencia, la sinceridad y la razón de aquellos insignes repúblicos: llegó á tanto la discreción y el sentimiento político de este Senado, que la política entonces proclamada en medio de la estupefacción general, se impuso al Gobierno español, y desde entonces nuestras relaciones con la América latina se inspiraron en un gran espíritu de concordia, en el olvido de nuestras recientes y sangrientas colisiones, en la desconsideración de la amenaza y de las jactancias como medios de influencia política é internacional, en el recuerdo de nuestra historia común, y de nuestro común empeño de colaboradores de una obra trascendental para la civilización del mundo; y en la seguridad de que el trato efusivo de los pueblos y en último término, la política de la generosidad y la confianza son la mejor garantía del prestigio y de los derechos de los gobiernos y las naciones.

Esa es, señores, una nota característica, bien que poco estudiada, de nuestra historia internacional contemporánea. Desde entonces renunciamos á todo prejuicio y á toda pretensión exclusiva, fundados en la procedencia de los que en América viven y á América sirven con su laboriosidad incomparable y sus virtudes ejemplares.

¡Ojalá que nuestros gobiernos de ahora se cuidasen de sacar las debidas consecuencias de aquel suceso; cosa tanto más recomendable, cuanto que después, las circunstancias han cooperado á esa empresa, como lo demuestran el fracaso del Congreso panamericano de 1890 y las fiestas del Cuarto centenario del descubrimiento de América!

Permitidme acariciar la esperanza de que los debates que ahora se desarrollan en el Senado español produzcan

aparecen en el referido número de *La Revue*. Creo de algún interés reproducir aquí, traducido, algo de aquellas explicaciones, con alguna leve rectificación de forma más que de concepto. De esta suerte se comprenderá lo que yo *veía*, á los pocos meses de haberse votado las reformas coloniales de 1895, que el Ministerio conservador no quiso aplicar inmediatamente como era su compromiso político y su deber como Gobierno.

He aquí mis opiniones:

«Tres graves cuestiones deben fijar la atención y excitar el celo de los hombres políticos de mi país; la cuestión de los partidos, la de Cuba y la de Portugal.....

.....
»Respecto de Cuba, debo establecer que creo que la situación de la grande Antilla es más que grave, peligrosa.

»Todos los habitantes de Cuba están justamente alarmados. La guerra devasta las provincias de Santiago de Cuba, Puerto Príncipe, Santa Clara y Matanzas. Existen no sólo bandas de insurrectos, sino algunos bandidos (come cuatrerros, salteadores y secuestradores), más ó menos independientes de la masa formal de la insurrección y como ha sucedido en todas las colonias del mundo.

»Sin mercado para los azúcares, el tabaco y los aguardientes, Cuba no podrá recibir cantidad suficiente para cubrir sus gastos de producción, y yo veo muy comprometidas sus fuerzas agrícolas por la inquietud que reina en los campos y la falta de recursos de los propietarios y colonos. Hay que advertir que Cuba solo produce esos artículos coloniales, cuyo monopolio constituye la principal razón de su enorme riqueza. En él estriba la mayor parte de sus dificultades y sus peligros presentes, aun cuando no existiese la insurrección. Esto no lo ven ni el Gobierno, ni los comerciantes catalanes. No comprenden que es preciso facilitar la transformación de la producción cubana. Ahora los obreros sin trabajo, no teniendo siquiera para comer en muchas localidades, hacen oír alarmantes clamores; el crédito se pierde en el exterior y en el interior; el comercio suspenso; los negocios, paralizados; en una palabra, es imposible que pueda continuar esta situación sin que pronto sobrevenga la más

suerte en riqueza, ni cultura, ni lealtad á las Antillas.

»En España el grupo de partidarios de la explotación colonial es muy reducido. Está formado por los interesados en los empleos públicos de Ultramar y los comerciantes de ciertas regiones del litoral, que se aprovechan de la insignificancia de las tarifas aduaneras para introducir en Cuba, bajo bandera española, productos extranjeros nacionalizados al pasar por cualquier puerto de la metrópoli.

»La mayoría en la Península desea la paz, pero mantendrá la guerra como cuestión de honor.

»Los asturianos, los gallegos y los catalanes que constituyen la base de la emigración peninsular á Cuba, necesitan del orden y prosperidad de la isla, que es para ellos una fuente de ingresos de la que sacan grandes recursos para sus familias de la metrópoli enriquecidas con este comercio.

»Hoy es indispensable hacer propaganda vigorosa en favor de la paz y de la Autonomía colonial, única que podrá restablecer el orden. Solamente una campaña política muy enérgica podrá, por sus resultados, terminar la guerra. Está probado que la insurrección ha aumentado extraordinariamente desde la subida del partido conservador; los cubanos están persuadidos de que este Gobierno no planteará las reformas.

»A pesar de haber sido votadas el mes de Marzo de este año, todavía el Gobierno conservador que preside el señor Cánovas desde mediados de 1895, no ha hecho absolutamente nada, ni en Cuba, ni en Puerto Rico, donde no ha habido ni hay guerra. Y donde en la pasada, ó sea desde 1869 á 1878, se hicieron reformas muy graves con éxito satisfactorio y cuyo ejemplo fué invocado por el general Martínez Campos y por nuestro Gobierno, para conseguir de los insurrectos cubanos que depusieran las armas, firmando en 1878 la paz del Zanjón.

»En cambio, con motivo del voto de los los maestros de Cuba para el Consejo de Instrucción pública, se acaban de promulgar unos decretos de carácter marcadamente reaccionario, completando estas disposiciones con recompensas á los servidores del poder, caracterizados por sus opiniones ultra-conservadoras, todo con gran disgusto del país cubano.

»En nombre del partido autonomista he presentado estos días al Sr. Cánovas una serie de observaciones acerca de la manera política de encauzar la guerra. Desgraciadamente en estos momentos, la opinión pública y el Gobierno están

completamente preocupados por la cuestión municipal de la Península. Los ataques de los separatistas, de un lado, y la prevención de los conservadores de otro, hacen que el partido autonomista se encuentre en la imposibilidad de obrar.

» Los elementos más arraigados del antiguo partido conservador se mantienen en cierta reserva, porque juzgan que la época no está para intransigencias y que Cuba no toleraría la idea de una nueva reconquista. De consiguiente no sería imposible hacerles comprender el interés de un acuerdo, dejando á un lado á los exaltados y gritadores que no tienen ningún prestigio en la isla.

» El partido reformista está más indeciso y su actitud sorprende cuando se recuerda la energía con que combatió hace poco tiempo á los conservadores, precisamente en el momento en que éstos se quejaban de la falta de protección por parte del Gobierno, puesto completamente del lado del reformismo. Esto sucedió durante el último período del partido liberal que dirige el Sr. Sagasta, y singularmente cuando era ministro de Ultramar el Sr. Maura.

» De lo dicho resulta que el único partido que tiene en Cuba fuerza verdadera é innegable vitalidad, es el partido autonomista, que ha vivido siempre sin el apoyo del gobierno y cuya sinceridad y patriotismo ahora más que nunca deben ser apreciados, por la gravedad de la presente crisis. Pero es preciso reconocer que esta agrupación se halla muy quebrantada por la propaganda revolucionaria y la actitud desdenosa del Gobierno conservador.

» ... Creo que la guerra tomará aún grandes proporciones y estoy seguro de que sólo por las armas no se resolverá el conflicto. Aunque la guerra terminase por la fuerza, volvería á empezar dentro de 4 ó 5 años. Durante este tiempo, Cuba quedaría arruinada y la Metrópoli no podría mantener allí un ejército de ocupación, ni hacer frente á las necesidades de aquel territorio devastado. Esta última hipótesis no es admisible para España después de la prueba colosal de energía y dignidad que acaba de dar enviando á Cuba, en menos de tres meses, un ejército de 125.000 hombres.

» Además preveo un llamamiento de los insurrectos á los Estados americanos, y sé que Europa entera se muestra favorable al restablecimiento de la Autonomía colonial en nuestras Antillas.

» ... No me atrevo á decir como terminará la guerra; mis temores son grandes. No me decido á aconsejar otra cosa que el inmediato establecimiento de las reformas de Puer-

II

LAS REFORMAS DE CÁNOVAS

El Sr. Cánovas del Castillo tuvo la bondad de hacerme conocer su decreto de 29 de Abril de 1897, antes de su publicación, dejándome en absoluta libertad para emitir mi juicio sobre ellos, luego que vieran la luz en la *Gaceta*. Fué mi conferencia con el Sr. Cánovas de mucho interés, pero no he creído nunca que tenía el derecho de hacerla pública. Pero luego de promulgados los decretos aludidos, *La Correspondencia de España* me requirió (lo mismo que á otros hombres políticos) para que comunicara á este periódico mis impresiones. Así lo hice, y *La Correspondencia* del 6 de Febrero de 1897 pone en mis labios las declaraciones siguientes:

«Sólo debo y puedo hablar de una impresión. La obra del Sr. Cánovas, en cualquier momento, sería de mucha importancia; hoy la tiene transcendental. Sobre todo para los que en medio de muy críticas circunstancias, y con notorias responsabilidades, tenemos que considerar los novísimos decretos de reforma ultramarina de un modo muy distinto al que corresponde á una mera tesis de polémica. Además, yo sé muy bien que en casos análogos al presente le parecer *individual* de los políticos, significa poco. Se vale lo que se representa.

»Tengo ahora más motivos que en 1895 para asegurar que ya no prosperará reforma alguna en nuestras Antillas si no la acompaña una amplia reforma electoral. Yo pido el sufragio universal, lo mismo que en la Península. Porque conozco perfectamente la historia de las oligarquías americanas, y no puedo olvidar que las Antillas son pueblos latinos, y que además vi en el seno de la América contemporánea, libre y democrática. Creo que no hay provincia alguna de la Península que las supere en inteligencia, aptitud política y valor económico. Pero sobre todos estos datos, tengo hoy el decisivo de los elementos y el carácter de la actual guerra de Cuba, perfectamente distintos de los de la guerra anterior. Debemos llamar resuelta y francamente á *todo el pueblo cubano* á la inteligencia y dirección de sus pecuniarias y singularísimos negocios. Las vaguedades, las reservas y las cautelas serían, hoy como nunca, contraproducentes.

»Luego, pongo á la altura del texto de las reformas mas radicales posibles, la *sinceridad* en su aplicación. Esto ha sido decisivo en todas las reformas coloniales del mundo. Ahora entre nosotros lo es más por muchos y muy próximos antecedentes que no quiero recordar. Y porque de veras creo que las actuales reformas se dan pensando seriamente en su eficacia, y tanto para que concluya pronto la guerra cubana, como para evitar que la próxima paz sea tan solo una tregua.

»Por lo mismo pienso que sería el colmo del candor esperar que la promulgación de las reformas en la *Gaceta* produzca rápida é inmediatamente lo que todos deseamos. No se puede pensar, por el momento, en la debilitación de los medios militares; pero es absolutamente indispensable, *desde luego*, cambiar completamente la política que se está haciendo en Cuba.

»Estimo de suma importancia, en relación con lo antes dicho, que el Gobierno (que ha asumido la responsabilidad de hacer una ley sin el concurso de las Cortes), se decida á plantear cuanto antes en Puerto Rico las nuevas reformas, rectificando, con hechos prácticos, el deplorable efecto que han causado en las Antillas, en el extranjero y aun en la misma Península los últimos decretos de aplicación de las reformas del 95. No hay el menor pretexto para aplazar el ensayo de estas nuevas reformas en Puerto Rico, máxime teniendo en cuenta el efecto que las anteriores hechas por la revolución de Septiembre y la República, en aquella Anti-

lla, tuvieron para la pacificación de Cuba en 1878, así como la admirable y feliz experiencia que hizo, en la primera de estas islas, el famoso intendente Ramirez, de las grandes reformas económicas que salvaron á Cuba á los comienzos del siglo. Nunca agradeceremos bastante á Puerto Rico lo que ha servido para el honor y la gloria de España.

»En cuanto á las reformas ahora publicadas, insisto en creerlas de positiva transcendencia. Desde luego necesitan aclaraciones y determinaciones para evitar rozamientos y conflictos mas que probables, entre las nuevas autoridades y los nuevos organismos. Por ejemplo: no se comprende la eficacia de las resoluciones del Consejo de Administración si absolutamente todos los altos funcionarios y en particular el director de Administración local no dependen de modo alguno del Consejo.

»Tampoco se explica que los empleados en servicios locales puedan ser de nombramiento más ó menos limitado, de los gobernadores, dado que los haya. No hay para qué subrayar la delicadeza del punto relativo á los delegados municipales; que no habiendo mucho tacto y mucha sinceridad, podrían hacer ilusoria la descentralización proclamada. En cambio no cabe discutir el positivo valor de lo acordado respecto del impuesto arancelario, así como la excelencia de la idea de que el Consejo vote los ingresos del mismo modo que vota los gastos. Tal vez hubiera sido mejor la fórmula del vigente concierto de las Vascongadas, que yo me he permitido recomendar varias veces, como la más sencilla y comprensiva.

»Pero es imposible prescindir de que se trata de un decreto de bases como la ley de reformas del 95, para cuya estimación definitiva es necesario conocer los reglamentos. Así como que hay que contar con que en el mismo decreto se dejan, para leyes especiales, cuestiones tan graves como las referentes á los gastos de soberanía, al ejército, á la deuda y al orden público.

»De todos modos, las reformas del señor Cánovas significan un plausible cambio en nuestra orientación política colonial. Hay que operar sobre él. Por lo pronto procede esperar del partido liberal de la Península una nueva determinación y acentuación de su actitud y sus rumbos, pues que el avance del partido conservador ha sido verdaderamente excepcional. Esto se entiende, dentro de la situación monárquica y en la esfera de los partidos gobernantes. No es ese el aspecto menos importante de la obra del actual

III

LAS DECLARACIONES DEL SR. SAGASTA

En Mayo de 1897 se reunieron los notables del partido liberal de la Península y el Sr. Sagasta pronunció un discurso exponiendo sus opiniones sobre el problema actual de Cuba. Después se acordó que una comisión de notables del mismo partido, teniendo en cuenta aquellas opiniones y el sentido dominante en la ejecución formalizase una especie de manifiesto. Así se hizo en 24 de Junio. Entonces el señor director de *La Correspondencia de España* creyó oportuno consultarme sobre estos particulares, y yo le contesté del modo siguiente, en 29 de Junio del 97:

«Mi distinguido amigo:

A su deseo, que estimo y agradezco, se une mi cada vez más firme convicción respecto á la necesidad de solicitar enérgicamente la opinión pública de España sobre los tremendos problemas que nos rodean y amenazan. A esa opinión lo fío casi todo y difícilmente me explico el error de nuestros partidos de prescindir de ella gastando las fuerzas en conversaciones de familia. Solo los que no han movido con calor y sistema esa gran palanca de la vida moderna, pueden dudar de lo que vale y puede aún en España. Pero los temas que usted tiene la bondad de señalarme son tan delicados y complejos que yo no puedo tratarlos en pocas palabras. Porque á usted le interesarán algo

pública y reiteradamente los servicios que á las libertades coloniales ha prestado el partido liberal. Y he dicho y ahora repito que en estos días, la solución del problema colonial está en manos de ese partido. Pero, francamente, el Manifiesto es una horrible decepción. A esta hora no son posibles vaguedades, ni equívocos, ni reservas. Ya no basta hablar de la *acción política* que ha de acompañar á la *militar*: es preciso decir en qué consiste la una y la otra, porque también ya los conservadores hablan de las dos. Ni es suficiente indicar que se *va á la Autonomía*: hay que decir que se proclamará ó no se proclamará la Autonomía. Y en el primer caso, de qué Autonomía se trata.

Porque ya toca en lo intolerable lo que está sucediendo en nuestros círculos políticos, donde á cada instante se habla en términos vagos de *autonomía política* y de *autonomía administrativa* y de *Self government* británico y de *personalidad insular*, etc., etc. Y todo esto para que se confundan las gentes sencillas y pierdan la paciencia los hombres juiciosos que han debido creer que cuando se trata de autonomía colonial se hace referencia ó á lo que por tal se entiende en todo el mundo contemporáneo ó más concretamente á lo que han propuesto los autonomistas de Cuba y Puerto Rico, que son los *únicos* que han planteado este problema en España.

»Relaciono con esto otro particular que me tiene muy disgustado, y es que pase por autonomía *cualquier cosa*, ó que intentándose la solución autonomista fuera de las condiciones de éxito, que (con razón ó sin ella, pero con perfecto derecho) venimos recomendando hace más de veinte años los autonomistas españoles, al cabo fracase el empeño, con el peligro de que luego se atribuya el fracaso al error fundamental de la doctrina. Sería el colmo de la longanimidad de nuestra parte enmudecer sobre este punto después de haber callado tanto respecto de la responsabilidad de los conflictos y desgracias presentes que no hemos cesado de anunciar por espacio de muchos años.

Después de esto y de insistir en la obligación ineludible de todos nuestros partidos (así los gubernamentales como los propagandistas) de presentar soluciones detalladas al problema antillano, debería yo indicar algo sobre esto. Pero no es el empeño para una carta. Básteme repetir que yo mantengo la solución autonomista como un medio de favorecer á las Antillas, de fortificar el vínculo colonial, de descargar á la Metrópoli de atenciones imposibles y de in-

IV

DECLARACIONES HECHAS EN CÁDIZ

Poco antes de verificarse las elecciones de diputados y senadores para las Cortes de 1896 tuve que presidir la hermosa fiesta literaria que con el nombre de *Juegos Florales* se celebró en Sevilla en la primavera de aquel año. Con tal motivo mis correligionarios republicanos de Sevilla me obsequiaron con un banquete en el gran hotel de Madrid, en el cual hice declaraciones precisas sobre la urgencia de la reforma autonomista. Los mismos conceptos que emití en Sevilla expuse á los pocos días en un gran *meeting* que presidí en Cádiz.

Tal vez tenga algún interés de trasladar aquí lo que sobre este particular publicó el importante *Diario de Cádiz* en 8 de Mayo de 1896.

Dice así:

«He aquí un breve extracto de la peroración del señor Labra.

Señores—dice—debo á la bondad de los directores de esta meritísima casa el honor de ocupar este sitio con el propósito de discurrir sobre algunas cuestiones públicas, de modo que pueda interesar al partido republicano, y sobre todo á los amantes de la patria.

Celebra la ocasión de saludar á todos los republicanos de Cádiz, sin distinción de clases ni matices: saluda á todos los habitantes de esta ciudad, que se impone por todos conceptos á cuantos la admiran y contemplan; que recuerda

por su belleza las ciudades de la antigua Grecia y que resplandece con sus prestigios históricos, identificados con la España toda; porque en dos ocasiones supremas ha representado el honor y el principal interés de la Patria.

No ha habido para el orador, pueblo alguno que en su vida le haya producido emoción más positiva. Puede haber entrado en ello los recuerdos de su infancia. Aquí empezó sus primeros estudios literarios, hace muchos años, porque ya ha doblado el cabo de Buena Esperanza; pero cuando recorre las calles y plazas de este pueblo, que parece una ciudad de nácar, recuerda su niñez y los afectos de sus padres.

El que ha estudiado la política de España en este siglo, puede afirmar que los dos grandes movimientos de nuestra moderna están sintetizados en las Cortes del 12 y la Revolución de Septiembre, que afirmó después del triunfo de la soberanía de la nación los derechos naturales del individuo, dando las armas para que cada era la tradición e imperasen las tendencias modernas. (*Tempestad de aplausos en este período que el orador pronuncia con palabras y conceptos bellísimos, imposibles de tomar al oído*)

Recuerda los reinados de Carlos III y Carlos IV, los tiempos de Godoy, el dominio de la sopa boba, las traiciones de Fernando VII y las debilidades de los tradicionalistas que se pusieron al lado del usurpador; se condensaron entonces todas las fuerzas nobles y santas del país para producir el renacimiento de la patria con el ímpetu de las ideas modernas.

Habla también del reinado de D.^a Isabel de Borbón, en que parece que la podredumbre había entrado en la sociedad española a cuyo efecto enumera varios hechos históricos. Entonces es cuando viene la Revolución de Septiembre, que rechazó aquel estado de cosas y realizó la voluntad del pueblo libre.

Esta es la tierra sagrada de la libertad; y lo mismo que en Zaragoza y Gerona se recuerdan páginas sublimes de la Independencia Nacional, y en Covadonga la Reconquista, y en Sevilla las opulencias de la naturaleza y el arte; todo palidece ante la grandeza moral de este pueblo, que proclamó en dos ocasiones la libertad y la moralidad como la base de la política del porvenir en España.

Este pueblo en su representación histórica es un ejemplo y una razón. Y lo dice así, porque la situación del país es cada día más apremiante y exige por momentos mayor número de sacrificios. A fuer de hombre político, cuando se

ocupa de hechos históricos busca una lección aplicable. Entiende que sería miserable recogerse solo en el lamento, y sería abominable entretenerse en una crítica estéril, cuando no se ponen voluntad y alientos para remediar el daño.

La historia de Cádiz demuestra que no se debe desconfiar nunca de los pueblos ni de la virilidad de la sociedad, aunque parezcan moribundos. Hace una poética y fiel pintura del invierno, donde parece que todo ha muerto; pero bajo ese manto de nieve está la fuerza latente que revivirá al primer rayo del sol.

Las ideas son las que levantan el mundo y renuevan las sociedades; y aquellas que parecen perdidas van abriendo en el pensamiento de todos, disponiendo los espíritus y las voluntades, y en la hora tremenda del desastre, cuando es preciso concitar las revoluciones estas son las que constituyen la bandera y la salvación de los pueblos.

¿Necesito deciros —añade— que atravesamos uno de esos momentos terribles? ¿No tenéis las manifestaciones de los periódicos? ¿No veis esas elecciones corrompidas que son la antítesis de la lealtad de los hombres? ¿No veis esos Ayuntamientos, escenarios de concupiscencias é inmoralidades?

Ahora mismo, no lo niego, la Restauración ha representado un periodo de relativa paz y de un cierto progreso de los intereses. ¿Pero es que la Restauración ha creado esos intereses? Lo que ha producido resultados es la Revolución de 1868. Es aquella semilla que germinó en días de tempestad. Si la Revolución mató la intransigencia religiosa y estableció la abolición de la esclavitud, y destruyó la tasa y creó otras magnas reformas, hay que preguntar á la Restauración qué ha hecho en definitiva de aquellos progresos cuál es la situación en que hoy los tiene y cuál el porvenir que les prepara.

Asistimos al periodo tremendo en que, triunfante el partido conservador, ha abolido al partido liberal; de tal suerte que podemos decir que valen tanto los unos como los otros, pues han renegado estos de aquellos principios transcendentales.

El partido conservador vive de la complacencia del liberal, que se ha negado á las peticiones de los republicanos en cuestiones importantes, y ha dado autorizaciones distintas al gobierno, y hoy mismo, en la cuestión de Caballina ese partido liberal dice que si al fin las Cortes resuelvan, él bajará la cabeza.

Pregunta cuál es la característica del partido conserva-

dor. Notadlo bien. El orador tiene amigos en todas partes, y les hace justicia; de modo que la batalla menuda no le preocupa. Pero ese mismo modo de ver suyo le hace ser intransigente en cosas de orden moral. Dice que el partido conservador ha falsificado todas las libertades. Dándosela de práctico, ha dicho que aun oponiéndose á la democracia, la acepta cuando los avances políticos se han hecho por el partido á quien corresponde, acatándolos después, para armonizarlos con las costumbres y con los intereses históricos. ¡Qué cuadro tan maravilloso!

Pero no es eso lo que hace. Acepta esas conquistas para corromperlas. Así en el momento en que el extranjero nos provoca se prescinde del concurso de las Cortes, para contrarrestar la libertad y la intervención del Parlamento. Respecto del sufragio, si ha de ser como hoy es, más vale renegar de él. Ya no es restringir ni vicio el voto: eso sería una verdadera inocencia. Ahora por anticipación, y agotados uno y otro medio, se aplican millares de votos á los designados en el famoso *encasillado de cuneros*. Y con esto priva la infamia del voto comprado, con que se hace renegar de su honor á unos infelices.

Debe requerir, no solo al partido republicano, á todos los españoles honrados; porque es preciso suprimir el voto de todos esos ciudadanos que claudican; porque el sufragio no es un derecho renunciabile. Es un medio de conseguir el mejoramiento social, un modo de gobierno, y merece ser suspendido en el ejercicio de aquel derecho, cuyo mal uso trasciende á los demás ciudadanos, quien reniega de tan sagrados deberes y vende su intervención en la vida pública.

Se va dando la idea en toda España de que se puede aspirar á tomar puesto en el Congreso para conseguir encumbrarse y hasta hacer algunos negocios. Y así, que se puede rehacer la fortuna perdida, por una popularidad fácil que lleve á las altas representaciones, donde todos, unos hoy y otros mañana, sigan los mismos procedimientos.

Después está la figura del cacique, que pinta con colores sombríos, acomodado á todas las situaciones, encontrando siempre su falange para venganzas y satisfacciones de todas clases.

Habla del problema de Cuba. Bien sabidos son sus compromisos. Hoy se lee en todos los periódicos que la autonomía no puede practicarse, porque la recomiendan los extranjeros. No es esto nunca óbice, porque lo que debe tener...

se en cuenta es lo que está abonado por la justicia y la razón. Si los enemigos aplauden, tanto mejor.

Pero lo que tenemos el derecho de decir quienes venimos defendiendo esas ideas hace veinticinco años, es que hemos hecho una gran obra patriótica, porque si la autonomía se implanta ahora, no es porque lo quieran Inglaterra ó los Estados Unidos, sino porque hay un partido que ama á su patria y ha sostenido mucho antes, por razón de doctrina, con grandes argumentos y ejemplos, esa solución salvadora. (*Grandes salvas de aplausos.*)

Recuerda el ejemplo de grandes naciones coloniales, como Inglaterra, que, aleccionada por la experiencia por grandes desastres, para conservar su soberanía, ha sabido elevar al mismo grado de libertad que la Metrópoli, á una administración solícita, y á una perfecta conciencia y satisfacción de sí mismos, á territorios lejanos, no explotados, sino protegidos y amparados por el Poder nacional ó metropolitico.

Niega haber dicho en Sevilla (como afirman algunos periódicos) que de la cuestión de Cuba no se debe hablar. Por el contrario; cree que debe romperse el llamado silencio patriótico. Si calló, no ha sido por voluntad suya; él tiene fe en la discusión. Aconseja que todos los partidos presenten sus fórmulas de solución, para que el país elija, y por su parte va al Senado para sostener las ideas de toda su vida pública, que en los asuntos de Cuba son hoy el programa de la Unión Republicana. Cree que la cuestión de Cuba determina en primer término un hecho positivo: la vitalidad de nuestra patria, que ha asombrado al mundo, organizando, en medio de sus desgracias y angustias, 130.000 hombres, que van á emular los tiempos más gloriosos de las armas españolas, defendiendo nuestros derechos y las conquistas logradas con todas las energías de un país inagotable cuando de su honor se trata.

También se evidencia el error del régimen vigente, que exime á clases enteras del deber de entregar su sangre por la nación. Por esto, la guerra de Cuba ha impuesto, con carácter de urgencia, la organización definitiva del servicio militar obligatorio, sin redención pecuniaria.

Se ha visto igualmente que estamos solos en Europa. Tenemos enfrente á los Estados Unidos, pero los agenos á esta cuestión, y contrarios á la doctrina de Monroe, sin embargo nos han dejado solos; y es porque hemos seguido una política internacional equivocada, manteniéndonos aislados, sin pactar con esa Francia tan atractiva y tan simpática,

que es la única que nos ha enviado palabras de consuelo.

Pero es asimismo que nuestra antigua administración colonial está reñida con todas las ideas y sentimientos generales de Europa. Todos reconocen nuestro derecho, pero nos aconsejan que llevemos allí la autonomía, como fórmula del derecho y de la patente realidad.

Ninguna colonia ha triunfado jamás por sí sola. No se ha de contradecir ahora la historia. ¿Pero hemos de triunfar otra vez para establecer el régimen militar de la ocupación? ¿Hemos de sostener un ejército agotando las fuerzas de la patria, y sin otro fin ulterior?

No, señores, no debemos escatimar el esfuerzo militar, pero para realizar después la libertad, la moralidad y la equidad, por medio de la autonomía.

Acompáñese la acción militar con la política, para que se diga que vive allí el imperio español, no por la fuerza de las armas, sino por la voluntad de todos y por una aspiración general de justicia.

Considerando los grupos de que está formada la insurrección, es imposible prescindir de que entre ellos están en gran parte los despechados y desengañados de falaces promesas, que ni siquiera se han realizado en esa hermosa y tranquila isla de Puerto Rico, que por pago de su abnegación sufre el yugo del caciquismo y la falta de libertades.

Recuerda de nuevo lo que hizo en el orden colonial la Revolución de Septiembre, permitiendo que bajo la bandera de la libertad ó invocando sus soluciones se pudiera hacer por Martínez Campos la paz del Zanjón.

No hay ahora ni un recuerdo para aquellos hombres del 72 y 73 que prepararon y realizaron tan magnas obras!

Y debemos nosotros recordar lo que tiene en su cuenta la monarquía: la venta de la Florida, la pérdida de la Luisiana, la separación de los Estados sud americanos, el abandono de Santo Domingo.

De donde puede deducirse que la monarquía tiene á su cargo todas las mermas de la integridad nacional, como la República tiene en sus timbres todos los adelantos conseguidos para mantener íntegro el territorio español.

En este momento crítico, repite, afirma sus convicciones de 25 años, las que sostuvo en medio de un mar de calumnias y á las que cada vez da mayor evidencia el fracaso de los contrarios. En el problema más grave de cuantos hoy preocupan á la nación, en el problema colonial, no hay más solución que la Autonomía, porque ella avivará

las fuerzas locales, reduciendo las responsabilidades de la Metrópoli, y trayendo la nota harmónica á las relaciones, ya punto menos que imposibles, de las colonias y los elementos directores de la nación. Sólo de esa suerte se anulará la burocracia y perderá su prestigio la política de la fuerza; es decir, los dos factores de mayor perturbación de la terrible crisis presente.

¿Puede suceder algo más grave de lo que sucede, en punto á corruptelas, apcatasías y componendas? ¿Puede haber algo peor que ese indiferentismo y ese pesimismo que se va apoderando de todo el mundo? ¡Quién sabe! Todavía puede venir el desastre. Y nosotros los republicanos debemos estar apercibidos, como lo estuvieron los de Francia en la triste noche de Sedán.

Para esto, permitidme que os haga algunas recomendaciones á título de amigo. Los esfuerzos individuales, por potentes que sean, no son eficaces para las grandes empresas. Hay la política de la agitación, que consiste en presentar problemas, excitar las pasiones, agigantar los deseos. Todo esto, difundido sin trabazón ni sistema, produce efecto, pero como de enfermo, que determina solo sacudidas. Pero hay la política de la organización, que produce las grandes masas, ante las cuales son insignificantes todos los obstáculos.

Republicanos aislados valéis poco. Aun en estos ó en más graves momentos, seréis ineficaces. Porque tened en cuenta que la gran fuerza no es el impulso incoherente, sino la robusta y sólida acción, como la de ese grandioso mar, cuyo impulso siempre es incontrastable.

Organizáos, pues, y no olvidéis jamás que la República no es solo para los republicanos, sino que su reino es el de la igualdad y el derecho. (*Grandes aplausos.*)

Cuando se le habla de las divisiones de los republicanos, contesta que ellos, después de veinticinco años de alejamiento del poder, mantienen lo cardinal de sus principios, y los contrarios, á los dos años de privación, reniegan de sus ideas y convicciones.

¿Qué fuerza no deben tener nuestros principios, que hacen se pierdan todos esos inconvenientes en la marcha majestuosa con que van tranquilos y serenos por la adversidad los hombres consecuentes y honrados?

Se discute sobre hombres antiguos y nuevos. Permitidme esta recomendación, con todo calor y energía. Tened fe en los hombres que conocéis; en los que lo han dado todo por sus

ideas, los que han sacrificado carrera é intereses. Vosotros los tenéis en esta tierra de Cádiz. Amadlos: ellos se sacrificarán una y cien veces, por la causa que abrazaron.

Nada más os puedo decir. No vengo á predicar nada en favor de ninguna agrupación particular. Yo soy partidario sincero de la unión republicana. No sé cómo se ha de realizar en las diferentes comarcas. Ha de ser por la fusión de los intereses comunes, pero por la voluntad de los republicanos de las provincias, en justo respeto del principio de la autonomía.

Realicemos esa obra en consideración á los grandes compromisos que hemos contraído. Se nos recuerda el fracaso de 1873. Y la República, hoy incontrastable en otros países, ¿no ha pasado por otros ensayos análogos? Este mismo régimen constitucional, que es nuestro estado de derecho ¿ha nacido ahora? ¿No hubo repetidos fracasos? ¡Los del año 14, y del 23, y las revoluciones y los motines del 34 al 68! ¿Por qué no hemos de creer que el ensayo de 1873 no es más que la experiencia natural antes del definitivo resultado?

Se nos dice que tenemos en frente los intereses permanentes del país. Hablan de la religión. ¿Nosotros enemigos de la religión? ¿Por dónde? Lo que queremos es el respeto de la conciencia individual: todos los ciudadanos con perfecto derecho de mantener sus ideas y de lo que no hemos de consentir es el cura trabucarse que se levantaba por esos campos, sustituyendo con el alma al Crucifijo.

Lo que no consentiremos es que la propiedad sea un efecto de la explotación, ni las depredaciones del caciquismo y el fisco. Queremos la propiedad entera, respetable, pero en sus condiciones naturales.

Se habla de que somos enemigos de ejército, ¡cuando creemos que donde está un soldado peleando está con él toda el alma de la patria!

Afirmemos esas reivindicaciones, mas para todo ello necesitamos voluntad. Quédense atrás los miedos y las estériles lamentaciones. Pero debemos ir siempre con la idea de la patria, y necesitamos ser algo más que partidarios de la movilidad de los poderes; necesitamos ser hombres morales. Necesitamos decir que por encima de nuestras convicciones y compromisos, hemos de ser hombres honrados, eternamente honrados, poniendo esta nota de moralidad por cima de todo.

(Los aplausos duran más de un minuto.)

El Sr. Labra estuvo hablando algo más de una hora. Su

palabra es enérgica y vibrante. Voz robusta de tribuno, para cuya propagación no son obstáculos las configuraciones del local. Acción elegante y sobria. Hay pasión en sus juicios, pero pasión generosa de hombre convencido y de propagandista de ideas. El Sr. Labra es una figura respetable y austera; su vida política ha sido la lucha porfiada y constante, pero por concesiones elevadísimas y trascendentales. Se ve en él siempre la propensión á alzarse de las tristes realidades pequeñas, para cernirse en regiones más puras, pero donde la responsabilidad y el riesgo son acaso mayores, como que radican en la oposición de las ideas nuevas con la fe y las preocupaciones más arraigadas. La dicción de este orador es más bien rápida que pausada. Redondea con arte los períodos, y es una contrariedad para quien le escucha tanto por gusto como por obligación, que la fogosidad de su expresión, armónica con la intención del concepto, arrebate á veces al auditorio hasta interrumpirle á mitad de la frase, como si, demostrando adivinarla y comprenderla, quisiera hacer al orador un nuevo halago.

En suma, los republicanos y los pocos que sin serlo oyeron al Sr. Labra están de enhorabuena. Pero es lástima que Cádiz entero (que le inspiró pensamientos bellísimos), en un tema más general, no haya podido escucharle.

legramas de adhesiones de Madrid y provincias. Refiere los trabajos de organización de la fusión republicana leonesa, en párrafos elocuentísimos, que arrancan calurosos aplausos.

Levántase el Sr. Labra, que es objeto de una grandísima ovación.

Comienza recordando que esta es en dieciseis años la segunda vez en que dirige su voz á un pueblo de Castilla. La primera fué en un gran *meeting* celebrado en el teatro de Calderón, de Valladolid, á raíz de terminarse la guerra anterior de Cuba.

Consagra un sentido elogio á la firmeza castellana. Con Castilla sola acaso no se habría hecho España; sin Castilla es seguro que no se habría hecho.

Señala la semejanza entre aquella época y la actual, y entra de lleno en el estudio de la cuestión palpitante.

El estado gravísimo del país pide que todos los partidos y grupos políticos concreten los esfuerzos y precisen las soluciones inmediatas y prácticas con claridad meridiana.

A este fin responde la Fusión republicana, que implica el aplazamiento de parte de todos los republicanos, de todo aquello que no sea urgente, esencial, y ahora en los principios democráticos de la Constitución del 69 la República con la reforma provincial y municipal en sentido autonomista y la autonomía colonial.

Además, la Fusión es la exaltación política de ideas y principios, cuyo olvido nos ha traído á una situación inferior á 1868. Es también acto de previsión patriótica, porque atiende á la constitución de una gran fuerza política y de un partido verdaderamente nacional, que recoja el poder después de la próxima catástrofe de los partidos monárquicos desgraciados. Por último, es una determinación de política positiva, gubernamental, armonizada con urgencias nacionales y la opinión de Europa y de América. En este sentido, la fusión no se agotará en promesas irrealizables ni se compromete á variarlo todo de golpe.

Como triunfo de la política de principios y de la virtud de las ideas, puede señalarse lo que pasó en la cuestión de Cuba, que es la absorbente en el momento actual; detrás está la aparente anemia y desorientación del país, de que deben responder primeramente la arbitrariedad de los conservadores y la flaqueza de los liberales. La única solución del problema cubano es la autonomía en Cuba y Puerto Rico; allí por exigencias de la guerra, aquí por

decoro nacional. y en todas partes por la virtud intrínseca del principio autonomista, cuya aplicación ha evitado en todas las colonias que fructificase la idea separatista y en otras que fracasase la rebelión contra la Metrópoli. (*Aplausos*)

Todo lo contrario á lo hecho por la asimilación en todas partes, pero no basta aclamar la autonomía, necesítase definirla, precisarla: después hay que encomendar su planteamiento y desarrollo, sobre todo, á los autonomistas de la víspera; estos no consentirán que pase por autonomía cualquier cosa, sino lo que ellos han predicado en España ó lo que se llama autonomía colonial en el extranjero.

De otra suerte, sin oponerse á nada, porque su patriotismo se lo prohíbe, declinarán la responsabilidad en lo que sería una mixtificación que dañaría al honor é interés de España, merece caluroso aplauso la última declaración de los liberales que rectifica las reservas del Manifiesto de Sagasta y pone el problema en los propios términos que yo recomendé en reciente discurso en el Senado discutiendo con el Sr. Cánovas.

Conservadores y liberales viven ya en una atmósfera de autonomía; pero es necesario que precisen las fórmulas y la aplicación y digan claramente lo que harán con los partidos autonomistas antillanos, si cuyo concurso activo y entusiasta no será un éxito la autonomía. Tampoco ésta podrá plantearse, subsistiendo las deportaciones gubernativas y entregadas todas las Corporaciones populares y empleos políticos y administrativos por decretos del Gobierno á los antiguos enemigos de la autonomía. (*Aplausos.*)

Si es cierto que hoy son autonomistas, conservadores y liberales, hay que advertir que lo son por efecto de una súbita y patriótica conversión, y que los republicanos, después de autonomistas antillanos, son los únicos que en España, cuando menos desde 1880, vienen predicando la autonomía colonial, combatida terminantemente por todos los partidos monárquicos.

En prueba de esta tesis habré de señalar el apoyo constante que los diputados republicanos dieron siempre á los autonomistas en el Parlamento, presentando enmiendas y proposiciones suscriptas por republicanos entre ellas por el Sr. Pedregal en 1890; la votación nominal que recayó en 1886 en una enmienda del autonomista Sr. Montoro; las declaraciones hechas por mí, llevando yo la voz de autonomistas y republicanos en 1895 sobre las reformas de Abar-

zuza; los Manifiestos de los partidos centralista, federal y progresista; la declaración adicional de la Junta Unión Republicana en 1896 y la base última de las declaraciones doctrinales de la Fusión Republicana en 1897. No por esto niego—añade—los positivos méritos del partido liberal en política expansiva ultramarina, desde la promulgación de la Constitución del 76, á las libertades de imprenta, reunión y asociación y las reformas de Abarzuza.

Lo he proclamado siempre, y reconozco asimismo el servicio prestado por el Sr. Cánovas, cuando discutiendo conmigo en 1883 rompió teóricamente la tradición de nuestros monárquicos sobre el valor doctrinal de la solución autonomista y sin duda es también mérito considerable el del discurso de 1896 y reformas de Abril del 97 que dieron un golpe mortal á la política asimilista. (*Aplausos.*)

Pero reconociendo todo esto, hay ya que decir que el problema es muy otro, y que todos estos monárquicos retrasaron la solución positiva, con grave daño de nuestro país, y que resulta comparando conductas, que los republicanos lo vieron mejor y antes que todos los demás, acreditando su gran sentido gubernamental.

Luego los republicanos son los más competentes para realizar la empresa autonomista, y por lo menos, para dar su voto é influir en el planteamiento y desarrollo de esas reformas, cuya aplicación será siempre sospechosa ó discutida, si corre exclusivamente á cuenta de sus antiguos adversarios ó de aquellos que con sus vacilaciones, retrasos y contradicciones, han contribuido inocentemente al fracaso de muy buenas ideas.

Además, los autonomistas españoles, con su antigua propaganda y actitud de ahora prestan gran servicio á la patria, por cuanto niegan la calumniosa especie de que la solución autonomista viene impuesta por el extranjero. Lo que sucede ahora es lo mismo que pasó con la esclavitud en 1877.

Constará, pues, siempre, y debe constaros, que mucho antes de las recomendaciones de los Estados Unidos y de los gobiernos europeos, había muchos españoles, y sobre todo un gran partido nacional, que proclamaba la autonomía, sin preocuparse de lo que pareciera á los extraños; si éstos ahora aplauden, será estimado el aplauso, pero sin que influya en la resolución. En cambio, constará también el propósito de esos autonomistas españoles de rectificar los tratados con los Estados Unidos, derogando el de 1877 y de dis-

entir las condiciones de naturalización y protección de los súbditos americanos, en honor del derecho internacional contemporáneo y de la soberanía y prestigio de España. La victoria de la solución autonomista tiene otra importancia moral y política, porque acreditando la virtualidad de las ideas, demuestra lo irracional de su persecución por la ley ó por preocupaciones y pasiones de políticos.

Todavía no hace un año se motejaba de antipatriotas y aun filibusteros, á los autonomistas. Hoy, los mismos perseguidores gritan que no puede continuar la situación de Cuba bajo la dictadura, y todos los gubernamentales afirman que la autonomía es la solución de la patria. (*Grandes aplausos.*)

De los dictérios personales no hay que hablar; siempre fueron así tratados los partidarios de las reformas coloniales. Colón, Las Casas, Lagasca, Revillagigedo, Gálvez, Mejía, Flórez Estrada, Espartero, Prim y ahora mismo Sagasta.

Pero si importan las prevenciones contra las doctrinas, entre otros motivos porque en la hora del triunfo estos im-pónense por sorpresa y con violencia perturbadora, de todos modos ha de constar que ahora el partido republicano anticipóse en la propaganda autonomista, como en 1873 lo hizo para la abolición de la esclavitud en Puerto Rico.

Lo mismo pasará con la unión ibérica, que solo los republicanos hacen entrar en sus programas y mantienen en sus tratos con portugueses. La Unión Ibérica vendrá en plazo breve, y con la autonomía de las Antillas contribuirá á la grandeza de nuestra España.

Después el orador hizo ligeras consideraciones sobre la tesis del discurso, referentes á la libertad religiosa, á la propiedad, á la vigorización del ejército, á la organización municipal y provincial, é insistió en que el partido republicano es absolutamente compatible con todas las opiniones religiosas y con todas las reformas que se han de hacer gradual y sucesivamente.

No prescindiendo de lo existente sino cuando se tenga medio seguro de sustituirlo con ventaja. Terminó compartiendo la opinión de Sagasta, Silvela y Morat, de que estamos abocados á grandes sucesos en plazo corto, en vista de lo cual urge una vigorosa organización de la fusión republicana en toda la Península.

Al sentarse el orador reproducese mayor, si cabe, la ovación con que fué saludado al principio.

VI

SOBRE LA INSTAURACIÓN DEL NUEVO RÉGIMEN DE PUERTO RICO

Sr. D. Manuel Fernández Juncos,

*Presidente de la Directiva del partido autonomista histórico
de Puerto Rico.*

Mi distinguido amigo: De acuerdo con los Sres. Moret y García Molinas puse á usted un telegrama concebido en los siguientes términos: «Convendrá suspender toda lucha de género hasta conocer el plan que indicamos próximo correo ó instrucciones nuevo Gobernador. Choques amigos comprometen nuevo régimen y causan aquí daño prestigio Puerto Rico.»

El Sr. García Molinas tuvo la bondad de firmar también este telegrama y además dirigió otro idéntico, que yo suscribí al Sr. Muñoz Rivera, quedando en escribir por este correo á este señor y sus amigos ampliando las indicaciones del telegrama y dándoles detallada cuenta de las varias conferencias que aquí hemos celebrado por iniciativa del mencionado Sr. García Molinas, cuyo patriotismo, cortesía y buen deseo nunca aplaudiré bastante.

Yo no he ocultado á nadie que no estoy convencido de la necesidad de que en estos momentos se forme, así en Cuba como en Puerto Rico, un partido único para el planteamiento y desarrollo del nuevo régimen. Me inclino á pensar que esto es una anticipación muy discutible, por cuanto yo creo que, dentro de plazo no largo, ahí se han de formar los nuevos partidos locales, en vista de nuevos problemas que se plantearán dentro de la situación autonomista y por efecto de la desaparición, que creo inevitable, de los antiguos par-

una política autonomista solo á gusto de nuestros correligionarios de Ultramar.

Con estos antecedentes usted comprenderá que así que supe lo sucedido en Cuba con autonomistas y reformistas (aun cuando todavía no estoy perfectamente enterado por no haber recibido carta del Sr. Gálvez, Presidente de la Directiva autonomista cubana), declaré terminantemente que aceptaba por completo lo hecho en la Habana por creer que sus autores tenían la mayor competencia y deploré lo que aquí publican algunos periódicos y hacen ó dicen algunas personas fuera del escenario y sin medios positivos para dar eficacia á sus siempre respetabilísimas opiniones. Así mismo entendí que, por muchas razones de larga y ahora ociosa explicación, lo sucedido en Cuba era un dato de excepcional valor para Puerto Rico, y que naturalmente ustedes propenderían á una situación análoga que quitase todo argumento á los que de cualquier manera buscan pretexto en la diferencia de las dos Antillas para imponer á la más pequeña un estado de positiva inferioridad política ó social.

Con esto se combinó la impresión desagradable que me produjeron algunos sueltos y aun artículos de la prensa portorriqueña. Realmente no había en ellos cosa de mucha gravedad. Pero me alarmó su tono vivo, y considerando lo peligroso que son todas las contiendas de vecindad y de familia, me alarmé bastante más que por lo presente, por lo que pudiera ser en plazo no remoto, una discusión en crescendo entre antiguos amigos, ante un público de adversarios interesados en ahondar las diferencias. Esto me hubiera preocupado siempre: ahora me preocupa vivamente por muchos especialísimos motivos.

Me permito recordar á usted la carta que hace algunos meses dirigí al Directorio autonomista con motivo de la probable división del partido, por efecto del concierto de los Sres. Sagasta y Moret por una parte, y Brioso, Muñoz Rivera y Cintron por otra. Repetí oficialmente al Directorio lo que aquí dije á estos señores y al Sr. Degetau, respecto á la altísima conveniencia de que, después de fraccionado el antiguo partido autonomista, los dos grupos mantuvieran relaciones muy afectuosas, casi íntimas. No discutí entonces, por que me faltaba competencia para ello, la disposición de los Sres. Matienzo, Muñoz y Brioso, pero afirmé que si esta respondía á la voluntad y á las necesidades de muchos antiguos autonomistas de esa Isla, debía realizarse

guno de los dos grupos que van á fraternizar. Yo llegaría á excluir de la presidencia á cualquiera de las personas que formen parte de cualquiera de los dos Directorios. Pero no formulo un juicio definitivo porque desconozco el personal.

Creo que deben ustedes buscar el Presidente señalando condiciones más que fijándose en la persona. La edad, los prestigios históricos, las representaciones oficiales, el don de gentes, la respetabilidad indiscutibles... todas son condiciones que aquí utilizamos mucho para excusar la concurrencia de las pasiones y los compromisos personales. Esto debe ser obra de un acuerdo patriótico.

Luego las Vicepresidencias corresponden naturalmente al Sr. Muñoz Rivera y á usted en su calidad de presidentes de las antiguas Directivas autonomista histórica y liberal ú fusionista. En defecto de cualquiera de ellos las personas que designen los antiguos Directorios. Y el resto del Comité directivo, por mitad, considerando que si bien en el partido fusionista hay bastantes respetables personas que nunca fueron autonomistas, la base sí lo es, y todos se encuentran perfectamente indentificados con los decretos de Noviembre. En Cuba no ha privado esto. Pero en Puerto-Rico no veo la dificultad, supuesto que se haya de realizar *la Unión*.

Claro se está que en todo lo que llevo dicho hay que distinguir aquello en que hemos convenido los Sres. Moret, García Molinas y yo, de lo que es mi propio y exclusivo razonamiento. Es posible que aquellos señores no fundamenten su parecer y su consejo absolutamente como yo. Las posiciones, los antecedentes y los compromisos son distintos. Tampoco sería imposible que coincidiésemos en todo. Mas para el efecto político, práctico y del momento, basta con que todos coincidamos, como realmente coincidimos, en dos cosas.

Ante todo, en la solución positiva, que consiste, 1.º en la Unión de los dos grupos para el fin arriba señalado; 2.º en el carácter local de la *Unión autonomista* y 3.º en la necesidad de organizar esa *Unión*, Liga ó Partido de una manera eficaz, con una Directiva, un Presidente grato á todos y poco ó nada comprometido en las vivas luchas de estos últimos días, dos vicepresidencias repartidas en los dos grupos y el resto de los individuos del comité repartidos por mitad entre los mismos grupos.

En segundo término, todos creemos que nada puede haber ahora en Puerto Rico superior á la conveniencia de que

inmediatamente se planteen los decretos de Noviembre en condiciones de éxito y de suerte que, tanto ahí como en la Península, como en todas partes, pueda ser defendida la experiencia que se realice en la pequeña Antilla y contra la cual se han de emplear algunos argumentos que proporcionarían la intriga y la pasión política si no los ofreciesen la desunión, los antagonismos y los errores de los antillanos. Frente á esta última hipótesis tenemos una extraordinaria confianza en el tacto, la abnegación y el patriotismo de todos ustedes.

En este sentido he tenido el gusto de hablar con el señor general González Muñoz, persona muy simpática, cubano de nacimiento, militar de méritos muy probados y autoridad saturada de nobilísimos deseos y que ve con toda claridad la gloria que reportará del éxito del difícil empeño que ha tomado á su cargo al ir á esa Isla en estos momentos. El Sr. González Muñoz conoce á todos ustedes y además tiene en esa isla muchos amigos y algunos parientes. Yo he salido satisfecho de la conversación que tuvimos y la que intervinieron muy discretamente los Sres. Moret y García Molinas.

Hablé poco con el Sr. Francia, que es el nuevo secretario de ese Gobierno. Me pareció persona de mucha inteligencia y de exquisita cortesía: dos condiciones fundamentales para gobernar colonias cultas. Me han dado informes detenidos de dicho señor, todos satisfactorios.

Por tanto, acaricio la esperanza de un éxito.

Debo concluir señalando bien el carácter de todas mis gestiones y mis recomendaciones. Por mucha que sea la bondad de ustedes y por amplias que parezcan los poderes con que la Directiva de ahora ha ratificado los que me tenía otorgados la antigua Delegación autonomista, yo no me he creído capacitado para establecer aquí un *compromiso* que á ustedes obligue. Se trata de cosa que se ha de realizar exclusivamente en Puerto Rico, y antes he dicho cómo yo entiendo la autonomía y de qué suerte proclamo y acato la competencia de los que han de realizar las cosas y están en el escenario donde éstas se han de verificar.

No se me oculta la transcendencia que la resolución de ustedes ha de tener en la Metrópoli, donde yo espero que en la próxima primavera ha de producirse una gran agitación política, con motivo ó á pretexto de la cuestión colonial. Por esta consideración y por el mucho cariño que yo debo á Puerto Rico, me he atrevido á hacer los razonamientos anteriores

la Metrópoli debe dejar libérrima la acción de las Antillas, sin intervenir en la disposición y el movimiento de los partidos, si bien señalando las responsabilidades locales y confiando principalmente en la competencia y el celo de los que por espacio de muchos años han representado en aquellas islas el doble interés de la Autonomía colonial y de la Soberanía de España. Así lo impone la lógica de la doctrina oficialmente proclamada, y es natural que el Gobierno se preocupe de evitar un fracaso en la primera prueba.

Además hay que insistir hasta pecar en lo importuno, en el señalamiento del papel que ha correspondido á Puerto Rico en todas las novedades de la reforma colonial dentro del siglo que vivimos. En aquella dulce y privilegiada tierra se han ensayado todas las reformas más peligrosas. El éxito no sólo ha demostrado la excelencia de los principios, sino que ha servido de argumento y estímulo para intentar enseguida su realización en otras colonias.

Lo he explicado cien veces recordando lo que pasó con la reforma del Intendente Ramírez en 1816, con las reformas políticas y sociales de 1821, con la representación en Cortes de 1869, con la ley municipal de 1872, con el sufragio universal y las leyes democráticas de 1873, con la abolición de la esclavitud de esta última fecha. Por eso, cuando decía (y no á mala parte) un ministro de Ultramar que en Puerto Rico se puede hacer todo impunemente.

Por lo mismo, y porque historia y nobleza obligan, los autonomistas portorriqueños, prescindiendo de los agravios de estos últimos años, deben hacer los imposibles para que los decretos autonomistas de Noviembre se planteen y arraiguen en aquella isla de un modo insuperable.

Correspondo, pues, fervorosamente al saludo de ustedes que me asocio á la fiesta de la colonia portorriqueña de Barcelona en honor de la Madre España y de las grandes virtudes y los indiscutibles éxitos de la pequeña Antilla, á la cual tanta devoción y tantos favores debo desde los primeros días de mi carrera política.

Quégoles se hagan eco de mis sentimientos de profunda simpatía cerca de todos los compañeros.

Muy suyo afmo. y a. q. b. s. m.,—Rafael M. de Labra.
Madrid—7—Diciembre, 97.

as vivo de mis trabajos parlamentarios
do de las Cortes abiertas en 20 de Abril
en mi campaña sobre la cuestión colonial.
ursos que pronuncié sobre este particular,
de 10 de Mayo, con motivo de varias
se hicieron en el debate de contestación
Corona. El otro discurso fué el de 11 de
o de la aprobación del bill de indemniza-
el Gobierno liberal por haber reformado
y económico de las Antillas, mediante las
tas de Noviembre de 1897, sin la inter-
ortes. El tercer discurso versó sobre la
ñola en Africa y más especialmente sobre
niales de Fernando Póo. Lo pronuncié
Van los tres á continuación de esta

imamente relacionados, porque demue-
transcendencia verdaderamente incom-
na y de las preocupaciones imperantes en
añola, aun en la agoría del siglo XIX.
en estos momentos hay quien, después de
defendido las deplorables empresas colo-
imos diez años, habla pomposamente de
las responsabilidades entrañadas en la
e todo el mundo (es decir, el mundo que
uestras fronteras ó alienta fuera de nues-

pecto del cual, así dentro como fuera del Parlamento (en el Congreso, solo yo hablé; en el Senado, nadie) se han mantenido las mismas añejas prevenciones y el mismo arrogante desdén con que hace pocos años se discutían los presupuestos de las Antillas ó se negaba el derecho de discutirlos en detalle y de votarlos por partidas, á las Cortes de la Nación?

¡Y tenemos el agua al cuello!

Cualquiera, al ver lo que sucede y al oír lo que se dice, y á no tener otros datos, cualquiera afirmaría que aquí no *ha pasado ni pasa nada*.

Nueva demostración de mi ya vieja tesis de que lo más grave y deplorable de nuestra política colonial—quizá de toda la política española—es la persistencia en el error y el total desprecio del escarmiento propio y de la experiencia ajena.

¿Quién se ha cuidado aquí, en el círculo de nuestros gubernamentales y de los inspiradores de la opinión pública, de estudiar, con aplicaciones prácticas á los actuales problemas de España, las causas y los pormenores de las sucesivas y muy parecidas pérdidas de los Países Bajos, Portugal, Italia, la América Continental y Santo Domingo, desde el siglo xvi á esta parte?—Porque ya debía preocupar la repetición del hecho.

Mis discursos sobre la cuestión colonial, y señaladamente el primero, necesitaban un complemento. Por eso anuncié en el Congreso una interpelación de carácter internacional. Ya me referí á ella en mi discurso del 10 de Mayo, advirtiendo que para explanarla necesitaba conocer el *Libro Rojo*, ó sea la colección de documentos diplomáticos, cuya publicación preparaba por aquel entonces el señor ministro de Estado.

Después ratifiqué mi propósito al discutirse el presupuesto del Ministerio de Estado, en cuya fecha todavía no se había repartido el *Libro Rojo*. Por último, á fines de Junio formulé de un modo oficial mi deseo de ser contestado inmediatamente por el Gobierno (1).—Se excusó de acceder á mi deseo el Sr. Sagasta, presidente del Consejo de Ministros, alegando motivos de escasa fuerza, por lo que me ví en el caso de presentar una proposición incidental pidiendo al Congreso que declarase que el Gobierno debía dar explicaciones: primero, sobre ciertos particulares del *Libro rojo* recientemente publicado, con deficiencias palpables —y segundo, sobre el estado de nuestras relaciones

(1) Véase el Apéndice.

ones á cuya defensa y desarrollo he dedicado yo mucho tiempo, en el curso de los últimos treinta años: 1.^a que son cosas muy distintas una *colonia* y una *provincia*, siendo por tanto un absurdo pretender gobernarlas del propio modo que un dilate tomar por privilegio el reconocimiento de facultades superiores para la propia administración, á las Corporaciones coloniales, á cambio de mayores responsabilidades y cargas, que atribuí las, contra natura, á las *Metrópolis*, comprometen, agobian, desprestigian y hacen fracasar á éstas, cualesquiera que sean los provechos que de ello reporten, por el momento, la burocracia y el monopolio industrial y mercantil.—2.^a que en toda cuestión colonial hay rebibita una cuestión internacional, de donde resulta, de una parte, un nuevo obstáculo para tratar á las colonias como meras provincias metropolitanas y de otro lado, la absoluta necesidad de que el régimen colonial esté en armonía con el derecho público universal.—3.^a que la doctrina del primer período de la Edad Moderna respecto de la soberanía y la independencia de las naciones se ha rectificado en el siglo actual, y que por tanto no es exacto que una nación pueda hacer en su propio territorio todo cuanto bien le parezca, sin contar con el asentimiento de los demás pueblos cultos y prescindiendo en absoluto, si así se le antojare, de las condiciones elementales de la civilización contemporánea, de los procedimientos usuales en todo el mundo y de las bases fundamentales y los supuestos corrientes del Dere-

cho internacional novísimo.—4.^a que no es dable vivir fuera del concierto del mundo y que España urgentemente debe ponerse dentro de él, tan lejos de la política de los Pactos de familia como del aislamiento consagrado por la Restauración borbónica de estos últimos años, porque aquel cambio se lo imponen su representación histórica, su posición geográfica, sus compromisos respecto de Portugal y de Marruecos, la seguridad de sus lejanas y codiciadas colonias y los complicados problemas que en ellas se han planteado á partir de la primera guerra separatista cubana y de la perúltima insurrección filipina.

Paréceme, sin embargo, que lo que recientemente ha sucedido y lo que por desgracia ahora pasa en España, ya ha hecho rectificar muy buena parte de los errores que sobre todos los particulares antes enunciados privaban de modo tal, que los que sosteníamos opiniones opuestas casi vivíamos de la compasión de los demás, cuya petulancia y cuyos desplantes rayaban en lo intolerable. Nuestros aprietos de última hora son de tal evidencia y tal fuerza, que cuesta trabajo suponer que haya entre nosotros un hombre de mediano juicio que no se dé por avisado respecto de la urgencia de cambiar de procedimientos, así en la política colonial como en punto á relaciones internacionales.

Por esto me preocuparon, bastante más de lo que hace tres ó cuatro años me habrían preocupado, la oposición que el Gobierno hizo á que se hablase en las Cortes sobre nuestra

política internacional y la perfecta indiferencia, cuando no el olímpico desvío con que todo esto fué tratado por casi toda la prensa madrileña, la cual, á decir verdad, no ha escaseado en estos últimos días sus equivocaciones sobre lo que en la actualidad priva en el orden del Derecho de gentes y respecto de las exigencias que, al amparo de éste, podría España formular ante el concierto de las naciones civilizadas.

Pretendía yo, mediante la interpelación anunciada, fijar bien los términos del arduo y complicadísimo problema colonial que hoy justamente á todos nos embarga, y mis deseos llegaban al punto de que, mediante un debate reposado y concienzudo, se hiciese en España una opinión razonada y de fuerza respecto de nuestra verdadera posición y de los medios de que podíamos disponer para dar término á la guerra que sostenemos con la América del Norte.

Yo no he creído nunca que para concluir esta bastasen nuestras armas. Siempre he creído que para dar cima al problema colonial planteado últimamente en nuestras Antillas, debíamos liquidar con la República de los Estados Unidos, y yo no podía ignorar que esto, que fué ya una empresa difícil desde 1848 á 1854 y de 1869 á 1878, abonaba ahora, como nunca, la participación de la acción internacional, ya recomendada, en el primero de esos periodos históricos, por Inglaterra, Francia y la misma España; en el segundo por los Estados Unidos y las Repúblicas sudamericanas y en los actuales días por los hechos y negociaciones

diplomáticas de Marzo y Abril últimos, registrados en el último *Libro Rojo* del Gobierno español.

Raya en la insensatez el comprometerse en una larga y costosa lucha sin que los combatientes se den mediana cuenta de su posición y sus recursos. El *jingoismo*, el *cretinismo* y la *patriotería* no pueden influir en el ánimo y la conciencia de los hombres serios y honrados á quienes está encomendada la dirección y la suerte de países enteros. La vida de millares de soldados, la fortuna pública comprometida en barcos costosos y armamentos y fortificaciones imponentes, los ahorros del atribulado contribuyente y el honor de todo un pueblo, no pueden estar á merced de la Retórica y del Noticierismo. Ya excita los nervios la privanza que entre nosotros han logrado los tácticos de café y los estrategas del Salón de Conferencias, así como impone la evidencia de las imprevisiones y los despilfarros de nuestra Administración en todo lo referente á la defensa militar del país, por tierra y por mar.

Nuestra tradicional fe en lo inverosímil, lo fantástico y lo milagroso ahora se ha demostrado, por modo extraordinario, inventando escuadras, combates, artificios, sorpresas, victorias homéricas y babilónicos desastres. A cada momento se habla del auxilio de tales ó cuales potencias extranjeras, y con la misma facilidad se protesta contra todas ellas, acusándolas, unas veces, de brutal egoismo y exigiéndolas otras que, espontáneamente y de balde, se sacrifiquen

en nuestro obsequio, á pesar del retraimiento en que hemos vivido por espacio de muchos años respecto del concierto y los intereses del resto del mundo.

Y todo esto se dice, se hace, se propala, y se difunde sin meditación, sin estudio, sin mediano conocimiento de las cosas, de sus antecedentes, de sus causas, bajo la presión del *reporterismo* y de la prensa *sensacional*—únicos medios de información y casi únicos directores de nuestras relaciones internacionales y á poco más de la actual guerra y de toda nuestra vida política.

Yo creía que esto debía terminar. Como creía que el Gobierno había publicado para algo eficaz el *Libro Rojo*; registro de indicaciones cuya ampliación procedía en el seno de las Cortes; base positiva de toda clase de observaciones que de ninguna suerte podíamos referir á datos publicados sin autoridad ni responsabilidad, por el extranjero.

Sin agravio de nadie, me permito dudar que existan en España más de cien personas que hayan recorrido las páginas de ese libro. En nuestros periódicos y revistas no he leído un sólo artículo sobre ese interesante *índice de parte* de las recientes negociaciones diplomáticas de nuestro Gobierno. desde 10 de Abril de 1896 á 23 de Abril de 1898. En algunos diarios de Madrid he visto un mero extracto de los títulos de los diferentes artículos de aquel índice. A poco que se hojee el libro, se advierte su gran deficiencia. Muchos despachos y notas están truncados y lle-

nos de puntos suspensivos. En él no se habla palabra, ni por alusión, de los Gobiernos del Sur de América. Y las notas y *Memorandums* contenidos en él terminan con el *Memorandum* del Gobierno español á las Potencias europeas, fecha 23 de Abril último, sobre la ruptura de las relaciones de España y los Estados Unidos.

Desde entonces á hoy no sabemos que haya ocurrido nada. Ni siquiera sabemos si el Sr. Duque de Almodóvar, (que á mediados de Junio sustituyó al Sr. D. Pío Gullón, en el desempeño de nuestro Ministerio de Estado) ha dirigido á las Potencias Europeas y Americanas un nuevo *Memorandum* sobre la extraña manera que tienen los norteamericanos de hacer la guerra y sobre ciertos particulares de que tratan los periódicos profesionales y políticos de Europa, referentes al bloqueo, el corso, los buques auxiliares de la escuadra regular, los bombardeos sin previo aviso, los de poblaciones abiertas, el empleo de explosivos, las presas marítimas antes de la declaración de guerra, etc., etc. Este *Memorandum* lo anunciaron los diarios de Madrid, pero nadie, oficialmente, lo ha señalado.

Y no es verosímil que en estos últimos días, de mucha y justificada preocupación y de crecientes dificultades para España, nuestro Gobierno se haya estado mano sobre mano, esperando que al fin luzca la *buena estrella* ó aparezca el general *No importa* en el famoso caballo de Santiago.

En una palabra, no sabemos nada respecto de nuestra

situación internacional. Con lo que dicho se está que desconocemos absolutamente uno de nuestros mas poderosos medios de pelea y todo lo relativo á una de las posibles salidas del conflicto presente.

Por otra parte, creía yo, y aun creo, que nos convenía mucho que en el resto del mundo civilizado fuese un tanto conocida la verdadera opinión que España tiene de su derecho y su posición.

No sé dónde ni cómo podría determinarse esta opinión fuera de las Cortes. Porque, por motivos cuya explicación no es de este sitio, se da el caso de que en estos últimos años sean en España muy pocos y de escasa resonancia y eficacia los *meetings* y banquetes políticos. Los casinos ó clubs de este carácter tampoco representan mucho. Los hombres políticos excusan hasta lo indecible realizar lo que es corriente en Inglaterra, Francia y otros países y evitan la conferencia pública y directa con sus electores y sus correligionarios, prestándose solo, cuando mucho, á *interviews* periodísticas pasajeras, que son rectificadas, la generalidad de las veces y tan pronto como han producido cierto efecto. La prensa de partido casi no existe en España. La ha sustituido la independiente, predispuesta solo á la noticia y falta, como es natural, por su propia independencia y por la naturaleza de los medios informantes y la especie de los medios de comunicación oficiosa, de la autoridad necesaria para comprometer á los partidos, que son, hoy por hoy, las únicas

formas regulares de la acción política. En España no hay grandes asociaciones libres ó ligas políticas de carácter más ó menos transitorio, ni aquí se publican semanarios ó revistas de índole independiente pero dedicados con preferencia á la crítica y á la formación de la opinión pública por la propaganda insistente y razonada. Bajo este punto de vista bien puede asegurarse que pasamos por una grave crisis: la producida por la prensa libre y noticiara, muy preocupada de lo sensacional, señora del campo y con ciertas pretensiones, no ya sólo de *hacer la opinión*, sino de dirigir la acción política sustituyendo á los partidos que califica de *moldes viejos*.

Por esto y por otras razones ereo que la opinión á que ahora me refiero hay que buscarla en el Parlamento, donde tienen su lugar la representación de todos los partidos españoles y su sitio las personalidades más salientes de nuestro país. Allí es donde pueden y deben fijarse las posiciones, precisarse los compromisos y determinarse la resultante de los diversos pareceres. Para ello, sin duda, el Gobierno ha remitido á las Cortes el *Libro Rojo*, que no es, no puede ser más que una base de información, tanto más autorizada cuanto más disparatados son los telegramas y las correspondencias que los periódicos nacionales y extranjeros fabrican sobre particulares de cierta reserva.

Hasta ahora en nuestras Cortes apenas si se ha hablado

de la cuestión internacional. Casi nunca se había (1). En la legislatura actual han hecho varias preguntas los señores Osma, Sánchez Toca, Corvera, Comas... y algún otro más que ahora escapa á mi memoria. Yo pronuncié, sin efecto inmediato, mi discurso del 10 de Mayo señalando esta dirección. Y últimamente se han hecho en el Congreso dos indicaciones de monta, pero muy vagas: una del señor Silvela, propicia á adelantar la hora de la paz con los Estados Unidos, y sobre la necesidad de salir del retraimiento internacional, á cuyo fin era preciso entrar en el mundo *apercibidos* y sin *las manos vacías*, y otra del señor Romero Robledo, partidario de la prolongación de la guerra y de que la paz se haga, en su caso, entendiéndose España directamente con los Estados Unidos.

Ya me parece que estas indicaciones bastaban para que se hubiese discutido la materia, fuera de la vieja preocupación del absoluto secreto de Estado que todavía priva entre muchos de aquellos diplomáticos, de quienes tanto se burlaba Bismark al hablar del «régimen de las cortesías, los rigodones y las trufas», y que no tiene más fuerza que

(1) Véanse mis discursos sobre la *Política exterior de los conservadores españoles* (16 de Enero de 1885) y sobre *Las relaciones de España y las repúblicas sudamericanas* (19 de Marzo de 1895). También me permito citar mi discurso sobre *La intimidad Ibero-americana* (6 de Noviembre de 1892) y mi discurso *Introducción al curso de historia de las relaciones exteriores de España*, pronunciado en la Escuela de Estudios superiores del Ateneo de 16 de Febrero de 1897.

las preocupaciones análogas y ya deshechas sobre la indis-
ontibilidad de la cosa juzgada, el secreto del sumario y la
reserva é intangibilidad del expediente administrativo.

No quiere decir esto que un Ministro de Negocios ex-
tranjeros está obligado á decir á todo el mundo y á cada
paso lo que sucede en las Cancillerías; pero ese Ministro
tiene el deber de afirmar su reserva cuando llega el caso,
afirmando de este modo su responsabilidad y dando la no-
ta de prevención que la tal reserva implica; sin que esta
reserva pueda ser general y constante, ni el discreto silencio
de un Ministro pueda obstar á que los diputados y senado-
res, con una gran libertad de palabra y una posición muy
desahogada, fijen sus posiciones, aconsejen al país y hablen
al mundo todo, ignorante de otra suerte de lo que se piensa,
siente ó desea en los países más interesados en los graves
conflictos internacionales.

Aumentan la importancia de estas observaciones, de una
parte, la circunstancia de que las sesiones de nuestras Cor-
tes se habían de suspender, como se suspendieron y por
plazo indeterminado, á fines de Junio: y de otro lado, el
texto del art. 54 de la Constitución española, que atribuye
exclusivamente al Rey las negociaciones diplomáticas, el
declarar la guerra y el hacer y ratificar la paz, dando
después cuenta documentada á las Cortes. La cooperación
directa de las Cortes sólo es precisa, según el art. 55, para
ceder ó agrandar el territorio nacional. En estas condicio-

¿es oíera ocioso oír la opinión de las Cortes sobre el conflicto actual y esas posibles ó probables soluciones? ¡O será mejor dejar que éstas surjan de improviso y se impongan, sin base ni conciencia, como tantas otras de tres años á esta parte!

Insisto, por tanto, en que habría convenido á todos (y particularmente al Gobierno) que hubiésemos discutido una interpelación sobre política internacional, en la que me proponía tratar, entre otros, los siguientes puntos.

Ante todo, deseaba conocer así la actitud de las Repúblicas sudamericanas, como lo que cerca de ellas ha hecho nuestro Gobierno en estos dos últimos años. La deficiencia del *Libro Rojo* en este particular es casi asombrosa. El punto debe preocupar, entre otros motivos, por dos muy señalados.

Primero, porque es imposible que haya un político en Sur América que no vea claro que la suerte de aquellas repúblicas está comprometida en el resultado de la empresa acometida, andazmente y contra todo derecho, por los Estados Unidos en Cuba, sin que basten para tranquilizar á nadie las protestas de Washington, referentes á la futura independencia cubana y al desinterés yankee. La historia y la anexión de Tejas son muy recientes y elocuentísimas las protestas con que la casi totalidad de los representantes de Sud-América se despidieron en 1890 del fracasado Congreso Panamericano reunido en Washington en 1889, por

iniciativa de Mr. Blaine, para consagrar la hegemonía de Norte América.

Luego, porque es público que ahora, al revés de lo que sucedió desde 1869 á 78, los Gobiernos sudamericanos no han hecho demostración alguna en favor de la insurrección separatista cubana, y porque no es menos significativo que las demostraciones de simpatía sudamericana que acompañaron á los Estados Unidos en su campaña de 1895 contra Inglaterra, con motivo del conflicto anglo-venezolano, no se han producido ahora en relación con el conflicto de Norte América con España.

En segundo término, interesaba mucho que se pusiese en claro el procedimiento usado por el comodoro Dewey y el Gobierno norteamericano para conseguir el alzamiento de los indios filipinos contra España, después del cual la escuadra yankee no ya permaneció indiferente espectadora del sitio de Manila por las gentes de Aguinaldo, sino que cooperó, más ó menos directamente, á la efectividad de ese sitio, cuyos efectos probables en lo relativo á la seguridad personal de los sitiados, han movido á los Gobiernos europeos á enviar muchos barcos de guerra á la bahía de Luzón.

Porque si las cosas fueran ó hubieran pasado como la prensa noticiara asegura, pareceríame la conducta de los norteamericanos por completo fuera del Derecho de gentes contemporáneo que consiente, todavía menos que el uso de ciertos explosivos y de materias infectantes en la guerra, el

azusamiento y amparo de tribus y muchedumbre desorganizada y de cultura incipiente, sobre sociedades y gobiernos civilizados. Tan no lo tolera, que precisamente la victoria de la anarquía en el seno de un pueblo culto, se entiende por causa bastante para la intervención activa internacional en la sociedad víctima de tal desastre.

Sobre esto sí que era indispensable una protesta enérgica y eficaz ante las grandes naciones contemporáneas. Pero esto era preciso detallarlo así como explicar los elementos (su cultura positiva y sus medios eficaces) de la actual insurrección filipina.

En tercer lugar, yo hubiera pedido amplias explicaciones sobre muchos vacíos de las negociaciones registradas en el *Libro Rojo* ó con motivo de la voladura del *Maine* y de la suspensión de las hostilidades en Cuba.

Casi maravilla que nadie en España se haya cuidado de hacer público y de comentar el hecho importantísimo de que el Gobierno español, en 22 de Marzo de 1898, comunicó á todos los Gabinetes europeos, el deseo de someterse al arbitraje de éstos «para dirimir las diferencias pendientes con los Estados Unidos y las que en un porvenir próximo pudieran perturbar una paz que la nación española deseaba conservar, no sólo por lo que á sí misma convenía, sino por lo que la guerra después de encendida pudiera afectar á los demás países de Europa y América.»

Del *Libro Rojo* resulta que los Gabinetes extranjeros

no respondieron, por lo pronto, como era de esperar. Sólo Francia contestó calurosamente, contrastando con este calor la frialdad de Inglaterra. Todavía el Gobierno español, en 21 de Marzo, vuelve á requerir á los Gabinetes extranjeros, y al fin, en 9 de Abril, los representantes de seis grandes Potencias europeas en Madrid excitán á nuestro Gobierno á acordar (como acordó) «la suspensión de las hostilidades en Cuba, para preparar y facilitar la paz.»

Es bien sabido que esta gestión diplomática fué precedida inmediatamente de otra análoga hecha por el Sumo Pontífice cerca del Gobierno de Madrid, al propio tiempo que solicitaba lo propio del Presidente Mac Kinley y que este último era excitado por los representantes de Europa en Washington, á que «hiciese valer sus sentimientos de humanidad y de moderación para llegar á un acuerdo con España que, al propio tiempo que asegurase la paz, diera las necesarias garantías para el restablecimiento del orden en Cuba.»

Todo lo que respecto de este particular y de lo sucedido inmediatamente después, dice nuestro *Libro Rojo*, es de una vaguedad y una confusión excepcionales. De ninguna suerte se explica cómo se produjo la iniciativa del Papa, cuya gestión hay que aplaudir con tanto calor como procede condenar, lo mismo las implas excitaciones de los obispos y sacerdotes católicos de los Estados Unidos que ahora claman por la guerra y piden la bendición del Pon-

tífico romano para las tropas invasoras de Cuba, que la actitud poco evangélica de los sacerdotes que en España agitan las pasiones é invocan en estos momentos al Dios de los ejércitos y de las victorias, olvidándose de que la divinidad es, ante todo, la más alta representación de la Justicia, la Paz y la Misericordia.

Tovavía no sabemos el positivo alcance de las respuestas de Mr. Mac-Kinley á las recomendaciones del Sumo Pontífice y de las Potencias europeas, aun después de haber accedido España á la suspensión de las hostilidades, y á parte muy considerable de lo que el Gobierno de los Estados Unidos pretendía, con una arrogancia de muy mal gusto, en 29 de Marzo, cambiando de repente la actitud afectuosa mantenida pocos días antes.—Ignórase también lo que las Potencias europeas hicieron y dijeron después del positivo desaire con que el Gobierno americano respondió á sus gestiones basadas en la suspensión de las hostilidades en Cuba. No se sabe tampoco qué contestaron él Papa y los Gabinetes europeos á la recomendación que el de Madrid les hizo, al propio tiempo que accedía á sus indicaciones, para que la deferencia española fuera correspondida en Washington, con la retirada de las escuadras y el abandono de otros medios de presión que constitulan un positivo aliento para los insurrectos de Cuba.

En este orden de consideraciones, la merece muy principal la contestación que el Papa da en 16 de Abril á nues-

tro embajador, que deseaba conocer la *última palabra* del *Santo Padre en esta cuestión*. Según el Cardenal Rampolla, Su Santidad «deja á la sabiduría y libre acción del Gobierno de España el adoptar las medidas que juzgue necesarias para la tutela de su derecho y dignidad... y recomienda que no se precipiten los sucesos y que se guarden la calma y dignidad que tantas simpatías han granjeado en el mundo civilizado á su buena causa».

El auxilio no es mucho ni quizá corresponde al éxito que obtuvieron en España las anteriores gestiones del Papa. La culpa no será de éste; pero conviene á todos que esto se precise y se divulgue.

Al Mensaje del Presidente Mac-Kinley de 11 de Abril, sucedió la votación en Washington del bill que nos expulsa de Cuba, fecha 18 del citado mes, y en 21 de Abril el Gobierno español rompe sus relaciones con el americano. Estos hechos fueron explicados por nuestro Ministro de Estado á las Potencias extranjeras, en el *Memorandum* del 23 de Abril, con cuyo documento termina el *Libro Rojo*.

Desde entonces hasta la fecha no sabemos que el Gobierno español haya realizado gestión alguna, así en Europa como en América y en Asia. Y eso que, en estos dos últimos meses, han tenido efecto hechos gravísimos en Filipinas, cuya vecindad esmaltan China, el Japón y las Indias francesa é inglesa. Ni siquiera tenemos una ligerísima no-

ticia del efecto producido en las Cancillerías europeas por el *Memorandum* español de 23 de Abril del 98.

Con tales antecedentes no me parece que estaba fuera de lugar mi pretensión de que el Gobierno nos dijera algo respecto de lo sucedido después del 23 de Abril y de la disposición actual de las Potencias extranjeras, sobre cuyo particular conviene desvanecer algunos celos, algunas ilusiones y bastantes vulgaridades. Pongo en el número de estas últimas casi todo cuanto se dice respecto de la necesidad de mantener el secreto diplomático, porque sobre que nadie pide á nuestro Gobierno la revelación de intimidades, es evidente que en punto á la actitud general de los Gobiernos de Europa y América, el de los Estados Unidos tiene que estar perfectamente enterado.

Luego, á cada momento por ahí se habla de la disposición de tal ó cual Potencia europea para regalarnos barcos y cañones y esgrimir su espada, desinteresadamente, en nuestro provecho. Enseguida se anuncia que esa misma Potencia acecha la hora de quedarse con parte de las Filipinas. Un día cree por aquí todo el mundo que el Papa ha resuelto el conflicto á nuestro favor; á la semana siguiente se da por indiscutible que el Pontífice romano se ha decidido por el Gobierno de Washington y sanciona sus conquistas. ¿Es dable continuar en estas alternativas, cuyo último resultado se reduce á privarnos de toda orientación internacional y á comprometernos en empeños imposibles?

Pero además yo creo que la posición tomada por nuestro Gobierno en el *Memorandum* del 23 de Abril no es suficiente. Lo digo con tanta mayor franqueza cuanto que soy de los que creen injustificados los ataques que se han dirigido, con una vaguedad extraordinaria, á la gestión diplomática española desde Enero á Abril últimos. Me refiero á lo que resulta del *Libro Rojo* y con la salvedad ya apuntada respecto de la América del Sur. Reservo mi juicio definitiva para cuando, dentro de poco, lea los demás libros diplomáticos del extranjero.

Ya en mi discurso del 10 de Mayo, hice una alusión al papel que correspondía á España en el conflicto internacional de estos momentos. Sin duda alguna los derechos y los intereses particulares de España, atropellados escandalosamente por los Estados Unidos, ocupan el primer lugar, pero no lo son todo, como al parecer supone el *Memorandum*. Y aun, á las veces, incurriendo en una grande contradicción y rectificando dos terminantes declaraciones del Presidente Mac-Kinley en sus últimos Mensajes, parece como que nuestro Gobierno entiende que la guerra actual es un negocio solo de los Estados Unidos y España.

Yo positivamente creo que lo que sucede ahora en Cuba, es de una inmensa transcendencia en el orden internacional. Se trata por el Gobierno norteamericano del desarrollo sin contemplaciones de la política Monroe en su tercera manera, en daño de la independencia de la América latina, me-

nosprecio de Europa y agravio, de sumo alcance, del Derecho internacional que ya no consiente la obra de la conquista ni los imperios universales ni los exclusivismos de religión, raza y continente.

Prescindo de detallar y razonar todo esto. Pienso hacerlo próximamente de un modo adecuado.

Básteme ahora mi protesta absoluta contra los términos del bill americano de 18 de Abril, aun más arrogantes que los intolerables de la Santa Alianza de 1823 y las proclamas de Rusia contra la integridad de Turquía.—Añade que ese bill es perfectamente contrario á la tradición gloriosa de la República de los Estados Unidos en punto á Derecho internacional: tradición mantenida brillantemente por Washington, Jeffeson, Monroe, Lincoln y no pocos publicistas y profesores ilustres de las actuales Universidades y Academias de repúblicas norteamericanas como Hart y Phelps. Y afirmo que sobre esta base y con el extraño dato referente á la conducta del Gobierno americano en Filipinas, debiera el Gobierno español requerir vigorosamente á las grandes Potencias europeas, á los Gobiernos sudamericanos, y en general al concierto político del mundo contemporáneo, para que resolviesen el conflicto presente, poniendo coto á las ambiciones de los Estados Unidos que en estos momentos olvidan lo que para su vida política y social representaron la incipiente prepotencia del militarismo encarnado en Jakson, después de las empresas de la Flo-

rida y de Tejas, y el anorme crimen consagrado por el mantenimiento de la esclavitud frente á la lógica de la Constitución de 1789.

No desconozco que la actitud de Europa en estos momentos es por todo extremo deplorable. Me parece mucho peor que la observada por las grandes Potencias hace dos años, con motivo del conflicto heleno turco, pues que, al fin y al cabo, entonces la iniciativa del conflicto y de la agresión fué de Grecia y ahora todas las provocaciones y los desmanes están de parte de los Estados Unidos, que no solo han consentido que en su territorio actuase la Junta separatista cubana y en él se hiciese un empréstito y se preparasen expediciones de insurrectos contra un Gobierno amigo, como era el español, sino que cuando por la proclamación del régimen autonomista decaía visiblemente la insurrección cubana, la han alentado con el envío de barcos de guerra yankees á los puertos de la grande Antilla, con la simulada protección á los reconcentrados y con la Agencia del cónsul Lee, para concluir, primero, con un intento de humillar al Gobierno español, bien manifiesto en la exigencia del Gobierno norteamericano de 29 de Marzo, y luego, con una verdadera provocación de guerra, implícita en el bill del Congreso de 18 de Abril.

Llego al punto de creer que lo que ahora pasa se parece bastante á lo que sucedió, hace ya cerca de un siglo, con la repartición de Polonia.

Después de las gestiones de Europa cerca del Presidente Mac-Kinley en 7 de Abril último, lo que ahora sucede y lo que Europa hace es una gran vergüenza. Tal es mi profunda convicción; mas para que el mundo la comparta es absolutamente indispensable que se demuestre que el Gobierno español ha sido activo y enérgico y que, con perfecta conciencia de su derecho, de su posición y de sus medios, ha hecho las reclamaciones que corresponden al caso. Y esto nadie lo sabe.

Como nadie sabe lo que ha impedido al Gobierno español resolver en definitiva sobre el corso, en vista de la reserva mantenida por los Estados Unidos y España frente al acuerdo de París de 1856 y en vista así de la reciente destrucción de las escuadras españolas como de las resoluciones norteamericanas sobre presas marítimas y barcos de guerra auxiliares. No discuto la resolución: señalo la deficiencia.

¿Es esto comprensible?

Aun dado que al Gobierno español le parezca perfecto cuanto hace, ¿la gravedad de la crisis presente no impone la consulta á la opinión pública?

Es bien que ahora se discute el punto de la intervención europea, sosteniéndose por algunos que cuando se haya de hacer la paz, España debe entenderse exclusivamente con los Estados Unidos, porque cualquiera otra potencia extranjera, después del abandono en que todos los extraños nos han dejado, se preocupará solo de cobrar el corretaje. No tengo

para qué discutir aquí esa tesis que pide mucha discusión. Porque no es dable olvidar lo que entrañaba nuestro aislamiento internacional ni la clase de apoyo que, tanto ahora como desde 1848 á 54, España ha deseado de Europa respecto de Cuba, ni las condiciones en que generalmente se han ofrecido ó solicitado los auxilios internacionales, ni en fin, las tremendas exigencias que respecto de Turquía tuvo Rusia en San Estefano, y recientemente Turquía respecto de Grecia, exigencias que no prosperaron merced á la acción internacional europea, consagrada respectivamente, por los tratados de Berlín y Constantinopla.

Pero repito que esa no es la cuestión de ahora, y que de todas suertes pide especial debate. En lo que importa al fin de estas líneas y á la publicación de mis recientes discursos del Congreso, diré que los argumentos antes mencionados corresponden á otro punto de vista enteramente distinto del que yo he tomado para estimar la posición de España en el conflicto presente.

Yo no creo que hoy se ventila tan solo un puro interés español. Creo que nuestra causa es superior; que España representa un gran interés internacional.

Mas, como antes he dicho, de nada de esto pudimos tratar en el Congreso, cuyas sesiones se suspendieron en [Junio de 1898, de repente, pero no sin la calurosa protesta de los republicanos, que ahora, como en Junio de 1895, fueron los

énicos que defendieron las prerrogativas y el prestigio de las Cortes.

Por todo esto, cuanto más lo medito menos me puedo explicar la resistencia del Gobierno y aun de buena parte de la prensa, á que ahora se discutiese el problema internacional y se tratara en las Cortes, con toda la amplitud necesaria, la cuestión política de las Antillas y de Filipinas.

Esa resistencia es una reproducción de la que desde 1820 á 1822 se opuso por nuestros políticos á que se tratase en el Congreso el punto de la insurrección de América y de las medidas políticas que eran indispensables para detener ó resolver aquélla, con toda urgencia.

Ya lo recordé en el discurso que pronuncié en el Senado en 30 de Mayo de 1897, cuando combatí resueltamente el llamado *silencio patriótico* que se quería imponer á la sociedad española, respecto de la guerra y en general del problema de Cuba.

Desde 1820 á 1822 hubo un empeño manifiesto de parte de los diputados en cometer exclusivamente al Gobierno la inteligencia y resolución del problema americano. El Gobierno por su lado tenía idéntico interés en cargar la atención y la responsabilidad á las Cortes. Por tanto, ni éstas ni aquél hicieron nada.

Fué desatendida la patriótica proposición del diputado peninsular Golfín y la Exposición de los cuarenta y cinco diputados americanos, ambas de sentido autonomista. Para

detener el crecimiento del separatismo se ideó una nueva, aparatosa é inútil comisión que había de ir á América á *ver, estudiar é informar*. Y en los mismos días en que Torreno y Moscoso hacían grandes y sonoras protestas de intransigencia y fiereza, recomendando á España una política de rigor, allá en Méjico se firmaba por el Virrey español O'donojú (que sustituyó al conde de Venadito, *después* por la rebeldía española) el tratado de Córdoba con el reconocimiento del plan de Iguala proclamado por Iturbide. Es decir, se reconocía muchísimo más de lo *propuesto* por los cuarenta y cinco diputados americanos: se reconocía la independencia de Méjico.

La lección no se aprovechó tampoco en 1897. El *silencio patriótico* se nos impuso. Vino luego el gran pánico del verano de aquel año... y ya sabemos desgraciadamente que la guerra no concluyó. Como no habría concluido en 1878, sin el pacto del Zanjón.

Ahora el Gobierno y la prensa de Madrid no han querido que se discuta más en el Congreso... Está bien. Haciendo lo contrario, las Cortes de 1812 y las de 1836 á 1840 sostuvieron el espíritu del país é hicieron posible, primero, el arraigo del régimen constitucional en España, frente al carlismo que solo por el entusiasmo liberal y por los intereses económicos creados por las Cortes fué vencido: luego, el tratado de Elliot y la Unádruple Alianza; es decir el apoyo europeo ó mejor, del mundo culto, para la ins-

tauración y defensa del nuevo régimen en España, así como para la rápida terminación de la primera guerra carlista, que, como todas las guerras civiles, concluyó por un convenio.

Nadie hablará desde la gran tribuna de las Cortes... Se hablará demasiado en las calles, los cafés y los casinos. No se hará la opinión pública. Los sucesos se precipitarán. Se nos impondrán soluciones improvisadas sabe Dios por quién y de qué manera; y quedará probado, á gusto de los adversarios del régimen parlamentario, que las Cortes son meros aparatos para los días de fiesta.

Declino en absoluto la responsabilidad de tantos dilates. No entra esto por poco en mi decisión de publicar este libro, con el cual ratifico mi profunda fe en la eficacia de la propaganda y mi profundo respeto á la opinión pública consultada y suficientemente requerida, ilustrada y emancipada de las *frases hechas*, de la presión del reporterismo sensacional y de las sugerencias de un mal entendido patriotismo que cimentan nuestra deplorable instrucción primaria y nuestra desastrosa educación histórica, combinadas con el predominio de la jactancia, la fantasía y la leyenda en el desarrollo general de nuestra vida.

¿Seriamente preocupado de esto, procuré, en todo lo que va de año y en buena parte del pasado, contribuir fuera de las Cortes, á rectificar enormes prejuicios y colosales errores respecto de lo que sucedía y pasaba en el extranjero;

con cuya franca notificación me proponía evitar á mi país tremendas decepciones y sorpresas abrumadoras como las que ahora todos sufrimos.

Porque es indispensable que se corrija la manera de enseñar la Historia en nuestras Escuelas. Hay que decidirse á combatir enérgicamente la campaña que por ahí se hace de nuestra incomparable superioridad en punto á valor, energía, suerte, recursos, derechos, etc., etc, frente á frente del mundo entero.

Eso, que es deplorable en tiempo ordinario, es desastroso en período de guerra, porque raras veces las cosas pasan á medida del deseo. Y la jactancia cuesta cara.

En todos los tristísimos sucesos del día encuentro yo dos causas poderosas: una administración casi tan deplorable como la francesa la víspera de Sedán y una propaganda verdaderamente insensata sobre nuestros medios y las condiciones de nuestros adversarios, propaganda que, cayendo sobre una educación histórica lamentable, ha perturbado gravemente á nuestro país, cuya bravura y cuya abnegación indudables necesitaban mejores directores.

A este patriótico propósito respondió la publicación de mi libro titulado *La República de los Estados Unidos de América*: libro que repartí profusa y gratuitamente (según mi costumbre) entre nuestros hombres políticos y las personas que de cualquier modo podrían influir en la opinión pública española.

Ese libro no tiene más que un mérito: sus numerosos datos tomados de las publicaciones más recientes de los Estados Unidos, al punto de que creo que no hay otro trabajo más palpitante.

De esos datos resulta que los Estados Unidos tenían, en 1890, unos 63 millones de habitantes (hoy pasan de 70), de los cuales más de nueve millones eran extranjeros, y de éstos, tres millones alemanes, dos millones irlandeses y uno y pico ingleses y escoceses. La población viril pasaba de 32 millones de individuos. En 1800 la población era de cinco y pico millones: en 1830, de trece millones: 1870 de treinta y ocho y medio: en 1880 de algo más de cincuenta. Solo el 13 por 100 no sabía leer ni escribir. El ejército de paz disponía, hace cinco años, de 2118 oficiales y 25.000 soldados: pero la milicia, que se podía movilizar, en 1890 subía á trece y medio millones de hombres hechos. Los barcos, en 1896, eran seis acorazados, cuarenta y cuatro cruceros y muchos buques servidos por 15.500 marinos de todas clases. Por aquel entonces estaban cinco acorazados en construcción y nueve cruceros y diecinueve torpederos.

Era y es la extensión territorial de los Estados Unidos (9.212 kilómetros) algo superior á la del Canadá, cerca de la mitad de la América del Norte, y casi igual á la de toda Europa. Solo el Estado de Nueva York es tan grande como Inglaterra. Las dos Virginias y las dos Carolinas juntas

son tan extensas como España. El Estado de Texas es más que Austria Hungría. Reunidos los diecisiete Estados del Este, ó sea de la costa del Atlántico, son más que Alemania y Francia juntas.

El presupuesto de la Federación (es decir, dejando aparte los presupuestos de los Estados), sube á 2.299 millones de pesetas: el de España á 833 millones, el de Italia á 1.768, el de Inglaterra á 2.300 y el de Francia á 3.350. En Guerra, ordinariamente gastaban los Estados Unidos 260 millones de pesetas, y en Marina 162.

La producción del hierro en los Estados Unidos llegó en 1855 al 5.º de la producción total del mundo; la del acero al 4.º La maquinaria de vapor estaba representada, en Norte América, en 1892, por cinco y medio millones de caballos, en Inglaterra por cerca de siete millones, en Alemania por cinco y medio, en Francia por tres. La producción agrícola se calculaba en 3.200 millones de francos al año; la industria en cuarenta y cinco mil millones.

La fortuna total de la república americana, según mister Carnegie, en su *Democracia triunfante*, era en 1850 de millones 42.169 de francos; la de Inglaterra, de 112.500 millones. Pero en 1892, Inglaterra llega á 218 millones, y en 1885, los Estados Unidos alcanzan la cifra de 250 millones; el año 95, la cifra es 64.000 millones de duros!! Así Mr. Mulhal, en su *Diccionario de la Estadística de 1894*, asegura

que la riqueza total de los Estados Unidos era de 237.375 millones de francos, y su renta nacional de 35.500, siendo el capital de toda Europa un *billón* de francos. Y otro escritor calcula que, siguiendo la prosperidad de estos últimos años, los Estados Unidos de América en 1945 tendrán 180 millones de habitantes y 250.000 millones de duros de capital.

A todo esto hay que añadir: 1.º, que en la guerra separatista de 1860 65, cuando el Gobierno del Norte, después del fracaso del fuerte Sumter, (porque, al principio de la guerra, la suerte fué casi siempre adversa al Norte), en 1861, llamó á las armas á 75.000 voluntarios, respondieron 300.000.—2.º, que en la batalla de Malvern Hill (1.º de Julio de 1862) cada uno de los dos ejércitos del Norte y del Sur se componía de 100 000 hombres, y que la víspera de esta batalla, el Presidente Lincoln puso sobre las armas, solo en el Norte, 300.000 hombres, y á los pocos días, por efecto de la retirada del general Pope, otros 300.000.—3.º que el ejército del Potomac mandado por Grant, en Mayo de 1863, subía á 140.000 soldados y las bajas de los dos ejércitos, desde Mayo á Junio, sobre el Rapidán, pasó de 86.000 hombres.—4.º, que el ejército mandado por Sherman á fines de 1864, en Georgia, era 100.000 soldados, y el de Grant, dos meses antes de terminar la guerra, frente á Lee, subía á 600.000.—5.º, que la guerra de aquellos cuatro años costó á los Estados del Norte tres millones de duros por día y

una deuda de cerca de tres mil millones de pesos, aparte la deuda de los Estados del Sur, que subió á dos mil millones y las pérdidas de hombres, que excedieron de un millón,—y 6.º, que en la guerra que los Estados Unidos sostuvieron con Méjico desde 1846 á 48 (cuando la República norteamericana tenía 23 millones de habitantes), el Gobierno de Washington puso á disposición del general Taylor 50.000 hombres, y á las órdenes del general Scott otros 10.000 soldados, siendo los gastos de estos dos años de lucha, terminada en daño de Méjico, por el tratado de Guadalupe Hidalgo, de 25.000 soldados americanos y 160 millones de dollars que indemnizaron los Estados Unidos con la anexión de Nuevo Méjico y California.

No son estas cifras para que nadie se aterre; pero sí para rectificar los disparates que han corrido respecto de la falta de medios militares de los Estados Unidos, así como para pensar mucho en el grave peligro de ir España *sola* á una guerra que ha excusado la Gran Bretaña en 1895.—Bien es que tampoco eran más discretos los que en Washington pensaban en Marzo que España *cedería á todo* por flaqueza, y que la conquista de Cuba y Puerto Rico, con el apoyo decisivo de los insurrectos, era cosa de quince días y algo así como un *paseo militar*.

Con el propio fin de *hacer la opinión*, me esforcé en dar cierto carácter de actualidad á mis lecciones del Ateneo, donde, desde la creación de la *Escuela de Estudios superio-*

res (en 1896) me halló encargado de la cátedra de Historia de las relaciones exteriores de España (1).

Allí, ante un público muy selecto, he discutido este año el problema de la intervención y analizado la cuestión de Oriente, la cuestión de Italia y la cuestión americana. Esta última ha sido el principal, casi el único tema de mis lecciones de 1898. Con tal motivo expuse el origen y el desenvolvimiento de la política Monroe, en sus tres maneras; el alcance del Congreso pan americano de 1890; el conflicto anglo-venezolano y el Tratado de Washington de 1895 y la *Cuestión de Cuba*, á partir de 1820, y señaladamente en los graves períodos de 1850 á 1856—1870 á 1878—y 1895 á 1898, fijándome de modo especial en la célebre Nota de Mr. Everett de 1852, en las tentativas para garantizar por Europa la soberanía de España en las Antillas, y en los incidentes de la guerra separatista cubana de 1890. Con igual propósito traté la actitud y conducta del Presidente Grant, así como de las tres gestiones pacíficas del Gobierno de los Estados Unidos para adquirir por compra la isla de Cuba, de la campaña parlamentaria norteamericana de los dos últimos años, de los Mensajes presidenciales de Cleveland y Mac-Kinley de 1895 á esta parte, y de lo poco que se conocía públicamente respecto de la campaña di-

(1) Véase mi lección inaugural del 16 de Febrero de 1897.

Pronto se publicará un Extracto de las lecciones del curso de 1898.

plomática del Gobierno español antes de publicarme el *Libro Rojo*.

Es claro que en la cátedra del Ateneo yo no podía actuar como un hombre político. Mis observaciones tenían un carácter científico; pero así y todo pude perfectamente afirmar y creo que demostrar lo que he sostenido con demasiada extensión ahora, y es que el problema actual de Cuba no es una mera cuestión de los Estados Unidos y de España, y que respecto de ella era obligada, en beneficio de todos, en obsequio del Derecho y del progreso general contemporáneo, la acción internacional del mundo civilizado.

Volvamos ahora á mis trabajos parlamentarios del primer trimestre de 1898.

Con mis discursos del 10 de Mayo pretendí tomar posiciones para los debates parlamentarios que yo esperaba y que no vinieron por el vuelo que rápidamente logró la guerra con los Estados Unidos.

Las elecciones antillanas de senadores y diputados á Cortes contradijeron mis recomendaciones y mis deseos. No debo ni puedo ocultarlo. Dejo á un lado las personas, que para mí son siempre respetables: me fijó sólo en el carácter dominante y en las condiciones generales políticas de la actual representación parlamentaria antillana que han hecho, primero, absolutamente imposible la formación del grupo autonomista, y luego, la acción de éste en una campaña en la cual, muchas circunstancias y todos los antecedentes le tenían señalados un papel brillantísimo, la intervención más autorizada y prestigiosa y la responsabilidad más acentuada y positiva.

La proclamación de la Autonomía colonial por el Gobierno liberal, mediante los dos decretos de 27 de Noviembre de 1897, se hizo en vista de una conveniencia política del momento y con el doble objeto de terminar la guerra de Cuba y de consolidar la paz en las Antillas. El partido liberal había sido, casi hasta aquel mismo momento, partidario de la política de *Asimilación*, y además, en ocasiones recientes, había combatido, hasta con ardimiento, la Autonomía, que nunca comprendió siquiera como una solución lejana.

Proclamada la Autonomía de este modo, es claro que los debates parlamentarios que se produjeran con motivo de los decretos de Noviembre comprenderían dos extremos: el de la oportunidad de esos decretos y el de la bondad intrín-

seca y la eficacia potencial del régimen autonomista.

Respecto de lo primero, el más autorizado para discutir, tendría que ser el Gobierno; pero respecto de lo segundo nadie podría excusar la mayor competencia y la responsabilidad más definida á los autonomistas que por espacio de muchos años habían sido los únicos que defendieron, en la Península y en las Antillas, la solución ahora triunfante en las columnas de la *Gaceta*, y á cuyo éxito debían contribuir de todas suertes, ya procurando en las Antillas la instauración del nuevo régimen en condiciones de eficacia, ya dando, en la Metrópoli, todo género de garantías y de alientos, para que aquí nadie vacilara en el período crítico de los primeros tanteos y ensayos.

Por esto yo, que secundé ardorosamente al Gobierno liberal (sin aceptar por esto todas sus responsabilidades) dentro y fuera de España, en cuantas gestiones me fueron recomendadas desde el mes de Octubre á principios de Enero ó sea hasta que se establecieron los Gobiernos autonomistas insulares, no perdoné ocasión ni pretexto para dar relieve, ante los ojos de mis correligionarios de las Antillas, al papel y la misión que habían de corresponder á los representantes todos, pero señaladamente á los representantes autonomistas de aquellas islas, en las Cortes de 1898.

Creía yo que mis amigos debían preocuparse mucho de lo que en la *Metrópoli* se hiciera, sobre todo dentro de la primera legislatura de estas Cortes, llamadas á aprobar, des-

arrollar y complementar los decretos de Noviembre, resolviendo cuestiones de tanta gravedad doctrinal y tanta transcendencia práctica, como el punto de los gastos de soberanía, y el particular de la primera reforma expansiva de los Aranceles. ¡Quién sabe lo que después se discutiría!

Porque por muy cierto siempre tuve que los decretos aludidos imponían la reforma de la Constitución del Reino y que no podía continuar la representación parlamentaria de la Nación, del modo que ahora. Porque ahora resulta un verdadero privilegio en favor de los antillanos, tanto ó más irritante que el que disfrutaban, mediante el régimen anterior, los peninsulares respecto de los contribuyentes y la vida interior de las Antillas.

El nuevo régimen entraña problemas de superior importancia: algunos apenas esbozados fuera de nuestro país y cuya solución constituye la preocupación dominante de la novísima tendencia colonizadora de la Gran Bretaña. Me refiero á la Federación imperial británica, de que se muestran entusiastas partidarios así lord Rosbery, el ex-jefe del partido liberal inglés y sucesor del insigne Gladstone, como el activo y popular Mr. Chamberlain, actual ministro de las Colonias del Gobierno semiconservador ó unionista de la Reina Victoria.

Tentadora bien que difícil era la empresa de demostrar cómo esa solución se armoniza con la tradición colonizadora española mejor que con ninguna otra, y de qué suerte,

por tal medio, insistentemente recomendado por nuestros autonomistas, desafiando las apreciaciones de la vulgaridad, de la patriotería y del torpe interés de los monopolizadores, España recobraría el prestigio que perdió con la corrupción de las famosas Leyes de Indias. Tal es mi profundo convencimiento.

Pero de todas suertes, hay que repetir ahora más que nunca, que la Autonomía, que nosotros hemos predicado, no consiente el apartamiento de los antillanos de la política nacional. Como que semejante disposición corresponde á una teoría de derecho político radicalmente opuesta, en sus fundamentos científicos, á los de nuestra doctrina autonomista, la cual, además, en sus fórmulas prácticas y en los programas gubernamentales de los partidos antillanos y de sus representantes en el Parlamento desde 1879 á esta fecha (extremo del que con frecuencia prescinden en las Antillas, algunos desconocedores de lo que es y vale un partido político que envía sus apoderados á las Cortes), se ha recomendado al juicio público, en el sentido de que existía una perfecta armonía entre sus teorizantes y sus prácticos.

En tal supuesto yo he dicho y afirmo que la Autonomía colonial se la combate igualmente tomando el punto de vista del particularismo, que utilizando los argumentos del antiguo Imperio colonial, mal disfrazados con las protestas del Asimilismo, á cada paso descubiertos por los desafue-

ros de los viejos partidos Incondicional y de Unión constitucional de Cuba y Puerto Rico.

Por todo esto era, á mi juicio, necesario que á las Cortes de 1898 vinieran buena parte de la antigua representación parlamentaria autonomista de las Antillas y hombres muy caracterizados y de mucho arraigo y suma influencia en la política y en la sociedad de aquellos países. De ningún modo me opuse á que vinieran también hombres nuevos y aun personas reciente y sinceramente convertidas al autonomismo, en el supuesto de que su nuevo compromiso fuera público ó bien garantizado por sus patrocinadores y recomendantes: cosa tanto más delicada cuanto que la Directiva cubana había publicado últimamente un Manifiesto no muy preciso y poco ó nada conocido en la Península, donde, al parecer, se buscaban algunos candidatos para la representación antillana. Pero siempre insistí en que la base de la representación parlamentaria debía ser la gente antigua, bien conocida, bien probada y comprometida como ninguna otra al éxito de la nueva empresa; porque esa gente era la de notoria competencia, la de mayor prestigio, la de mayores medios y la de más acentuadas responsabilidades en la escena política peninsular.

Por desgracia esto no se vió con claridad en nuestras Antillas. Por algún tiempo tuve que combatir calurosamente las opiniones que me comunicaban muy respetables é inteligentes personas, favorables al supuesto de que el éxi-

to de la nueva reforma colonial dependía exclusivamente de lo que sucediera en Ultramar, por lo que era indispensable que los más prestigiosos hombres, los de más arraigo de allá, quedaran en las Antillas para constituir las Cámaras y los Gobiernos insulares. ¡Qué error! Pero ese error triunfó.

Repito que dejo á salvo todo lo personal. Me lo imponen mis gustos, mi educación y mi conocidísima práctica: pero además, la profunda convicción de que los debates personales, como las disputas y los desplantes, solo sirven al que no tiene razón y para enbrollar y distraer al público. No niego el mérito individual de todos y cada uno de los diputados y senadores autonomistas electos con el criterio que antes he combatido. Pero el hecho es que la nueva representación antillana no ha podido constituir en ninguna de las dos Cámaras españolas un *grupo autonomista* unido, disciplinado, identificado absoluta y notoriamente con la tradición parlamentaria del partido, en relación constante y directa con los organismos directores del mismo en Ultramar, estimado y considerado, como en otras ocasiones, por los demás grupos del Congreso, fuera de las Cámaras, por el Gobierno y por la opinión pública, con personalidad y vida propias. Otro hecho evidente es que los diputados y senadores autonomistas, como grupo, como entidad, no han hecho cosa alguna en las actuales Cortes ni han pesado en ellas, hasta ahora, lo más mínime. Muchos, ni han realizado acto al-

guno que los acredite como identificados con el partido insular que los ha enviado al Parlamento. Y cuenta que algunos, hasta poco antes de la elección, tenían, por sus antecedentes personales ó por el círculo dentro del que se movían, una representación nada autonomista y hasta adversa á los que aquí hemos llevado, por espacio de un cuarto de siglo, la bandera de la Autonomía. *Suum cuique.*

Todo esto no lo discute aquí nadie. No es inverosímil que lo resistan algunos que á dos mil leguas de distancia crean que, respecto de las cosas que aquí pasan, puedan tener, por su talento ó su habilidad, más competencia que la de los que se mueven en este escenario peninsular, donde, después de todo, se han de desarrollar los sucesos parlamentarios y mover los diputados y senadores ultramarinos. Pero mi humildad no llega al punto de no protestar contra tal supuesto y de no decir que mi opinión sobre este punto se hallaba fortificada por la de muchos hombres de primer orden de la política española, los cuales creían que, ahora el grupo autonomista debía ser el de *mayor importancia* de nuestras Cortes.

Por de contado que no se me ocultaron, ni por un minuto, las grandes dificultades de la empresa.

Acepté el compromiso con perfecta conciencia de los obstáculos y mayormente después de advertir y deplorar la reserva ó la pasividad de la Colonia Cubana de la Península, cuya actitud en estos momentos críticos aumentaba las de-

ficiencias y aun los obstáculos con que hemos luchado los representantes parlamentarios de las Antillas en Madrid y de que he hablado con bastante franqueza otras veces. Porque es cierto que ni los antillanos residentes en la Península, por regla general, se prestaban á hacer lo que hacían los autonomistas irlandeses en Londres, poniéndose al lado de sus representantes, constituyendo un grupo y contribuyendo con sus personas y sus bolsillos, á la campaña que aquí se hacía con grandes apuros, ni se decidían á prestar su apoyo á los elementos políticos peninsulares que, con su devoción y sus esfuerzos, suplían en la Metrópoli la deficiencia de los más interesados en el éxito de la empresa reformista.

Por poca práctica que yo tenga de estas cosas y por mediano conocedor que yo sea de la situación política actual, era imposible que á mí, dedicado especialmente á estos asuntos, se me ocultara, que la actual representación parlamentaria autonomista antillana había de luchar con el supuesto de que fuese aquí la representación de los gobiernos insulares. Esto razonablemente no se podía admitir; porque, de otro modo, esos representantes parlamentarios vendrían á ser una especie de embajadores de aquellos Gobiernos, sin intimidad con ellos, pero obligados al imposible de contestar en las Cortes á todas las preguntas y reclamaciones que á diputados y senadores les viniera en voluntad de hacer, invadiendo la jurisdicción de las Cámaras colonia-

les. Pero todos sabemos lo que autoriza ó excusa la pasión política y no está fuera del terreno de las probabilidades la hipótesis de que los diputados y senadores ultramarinos, por ahora al menos, fueran requeridos y hasta obligados á comprometerse en ciertos debates de positivo carácter local. Ni tampoco era verosímil ni delicado que aquel grupo parlamentario se desentendiese en absoluto de lo que hacían sus amigos en los Gobiernos de Cuba y de Puerto Rico.

La posición pues era difícil. Mas para vencer las dificultades yo fiaba en la discreción, el prestigio y la disciplina del grupo autonomista parlamentario y en que los Gobiernos insulares considerarían, como de capital importancia, el estar en relaciones frecuentes y directas con ese grupo.

Luego, no hay para qué ocultar que la situación aparentemente privilegiada de los representantes de Ultramar en las Cortes de la Nación, imponía á éstos una exquisita, una excepcional circunspección, porque con cualquier pretexto surgiría una protesta de los adversarios más ó menos resignados de la Autonomía.

Yo recuerdo bien la comprometida situación de los antiguos diputados vascongados. Este peligro se salvaría mediante una gran prudencia, una gran disciplina y una buena dirección de los representantes ultramarinos, los cuales, á mi juicio, no debían excusar, de ninguna suerte, en estos críticos momentos, la afirmación de su representación par-

particular. Por tal motivo yo no aplaudiría nunca que un diputado ó un senador de las Antillas hablase en este trance y en negocio político, con otra representación que la antillana.

Por último, los representantes á que me refiero, tenían que preocuparse mucho de que nadie los confundiera con los diputados y senadores ministeriales: confusión bastante probable, tanto por la circunstancia de ser el Ministerio Sagasta el autor de los decretos de Noviembre último y el supremo director de la política relacionada con aquellos decretos, cuanto porque no era absolutamente imposible que tal ó cual ministro ó tal ó cual contradictor de éste, pretendiesen que la diputación antillana sirviera los intereses secundarios que caracterizan al ministerialismo en las campañas parlamentarias.

Todo esto me preocupó mucho desde el primer momento. Debo reconocer que buena parte de mis temores se realizaron. A poco de recibir noticia de las elecciones de Cuba, comprendí que la próxima campaña parlamentaria sería poco lucida. Por ahora no apuro las responsabilidades. Pero si tengo el derecho de decir que en todo cuanto ahora lamento no me corresponde la menor parte.

He hecho cuanto en mi mano ha estado por evitarlo. Excuso por muchos motivos el detallar (por ahora) lo que respecto de este particular ha sucedido. Me basta con la protesta que acabo de hacer y con decir que, dándome perfecta cuenta de lo que pasaba, me preocupé en mis discursos de

Mayo último, de fijar bien mi posición personal y política advirtiéndole que no existía *grupo autonomista* parlamentario, y que yo hablaba solo en nombre de *varios diputados* que cerca de mí estaban y que me habían dado este encargo. Además, hice constar que estos diputados pertenecían á distintos partidos de la política española y que ratificaban solemnemente la tradición autonomista de los últimos veinte años de incesante labor y responsabilidades bien definidas, así en las Antillas como en la Península.

Desde aquel momento afirmé mi absoluta libertad de acción dentro del Parlamento, relacionándola con una explícita reserva que en favor de esa misma libertad hice en el seno de la Minoría parlamentaria republicana el primer día de la constitución de ésta. En aquella reunión advertí que, identificado con la política general de la Fusión republicana, y con los diputados que la representaban en el Congreso, sin embargo, de ninguna suerte podía comprometerme á seguir á éstos en las campañas que estimaran oportunas sobre la cuestión colonial, siempre que tales empresas no convinieran ó parecieran mal á los partidos autonomistas antillanos; porque éstos me habían elegido, así en Cuba como en Puerto Rico (1) sólo á título de autonomista, y porque mis

(1) En las Cortes actuales llevo la doble representación de la circunscripción electoral de San Juan de Puerto Rico y del distrito de Guanabacoa de Cuba.

electores insulares, que no pertenecen á partido alguno de la Península, me reconocían, como siempre, el perfecto derecho á afiliarme al partido peninsular democrático que yo estimara conveniente, pero dejando á salvo mis compromisos en pró de la política autonomista tal como la entendían los partidos antillanos que me honraban con sus poderes.

Esta reserva fué comprendida y aceptada por todos los diputados de la Fusión republicana.

Todavía me preocupé de otras dos cosas en los primeros días de la legislatura actual. De ningún modo podía yo consentir que se confundieran la acción y las responsabilidades del Gobierno que suscribió los decretos de Noviembre de 1897, con las de los autonomistas que, por razones de fondo y de carácter permanente, habíamos hecho antes la propaganda de la doctrina autonomista y contribuíamos ahora á facilitar el éxito de aquellos decretos. Hubiera sido el colmo del candor pasar con que se redujese el valor de nuestra doctrina á la importancia de un expediente ó de un remedio para la actual guerra de Cuba; remedio ensayado á última hora y en condiciones verdaderamente extraordinarias y desfavorables.

Y no digo nada del supuesto de que yo pasara con la hipótesis de responder personalmente, con el Ministerio presidido por el Sr. Sagasta, de la política realizada por éste, sobre todo, después de promulgados los decretos de No-

viembre de 1897. Porque yo, que he hecho en honor de los Btes. Sagasta y Moret todas las declaraciones favorables que procedían en justicia, no tengo para qué ocultar: primero, que no me han parecido bien algunos de sus actos; segundo, que yo no he sido consultado respecto de ciertas disposiciones; tercero, que los autonomistas de la Península no han tenido parte activa en la obra del actual Gobierno, y cuarto, que, modestia aparte, yo creo sinceramente que nosotros, los que aquí estamos, con ciertos antecedentes, ciertas responsabilidades y ciertos medios de que carecían los que se convirtieron á la buena doctrina en el otoño de 1897 (sin compartir por esto, en la Metrópoli, con los viejos autonomistas, la dirección de la nueva empresa), nosotros lo hubiéramos hecho un poco mejor y hubiéramos sorteado con mayor éxito algunas dificultades con que ha tropezado el Gobierno liberal (1).

(1) Por esto la Junta Central de Fusión republicana, votó á fines de Noviembre de 1897 el siguiente acuerdo:

«La Junta Central de la Fusión republicana declara: Que respondiendo con entera lealtad al espíritu de la Fusión republicana y en perfecta consonancia con la primera de sus bases adicionales, considera necesario ratificar de nuevo públicamente y con entusiasmo, sus convicciones en favor de la autonomía colonial, reconociéndola, desde luego, como la única y eficaz solución del problema de Cuba y Puerto Rico.»

«Habrá de rechazar al propio tiempo, con verdadera energía, por impulsos nobles del patriotismo, toda ingerencia extranjera que pueda ser

Todo, pues, justificaba mi resolución de fijar ahora perfectamente mi posición personal en el Congreso, en tanto llegaba la hora de despedirme definitivamente de mis electores y correligionarios de Cuba y Puerto Rico, con quienes estoy en descubierta, por motivos patrióticos que ex-

lesiva al honor nacional y es su deber también protestar contra todo acto ó resolución de los Poderes públicos, que tienda á quebrantar la integridad de nuestra soberanía en las Antillas ó que lastime de algún modo el decoro del ejército, digno por tantos títulos del aplauso y de la consideración de los españoles.»

«De acuerdo, pues, con todo lo expuesto, urge hacer constar:

«Primero. Que el partido de Fusión republicana se felicita de que el partido liberal haya utilizado para poner término á la guerra de Cuba, la solución autonomista, que hemos defendido siempre en frente de todas las agrupaciones monárquicas.

«Segundo. Que lamenta no se haya puesto en práctica antes de ahora, en condiciones menos angustiosas para la Metrópoli y cuando era de indudable y seguro éxito.

«Tercero. Que declina en absoluto toda responsabilidad respecto de los errores deficiencias y otras dificultades que puedan producirse en el planteamiento y desarrollo del nuevo régimen antillano, por efecto también de la desconfianza que habrán de inspirar los que jamás han reconocido antes del momento presente, las excelencias de las instituciones autonomistas.

«Cuarto. Que protesta, asimismo, contra la conducta y el proceder de los partidos monárquicos, que no tan solo rectifican á cada instante sus conocidas soluciones en la política colonial, sino que llegan á prescindir arbitrariamente del poder legislativo para realizarlas.»

plicaré oportunamente, desde la campaña parlamentaria de 1895.

Que no me había yo equivocado al afirmar esta posición desde el primer momento, lo vinieron pronto á demostrar las alusiones y críticas que, dentro y fuera de las Cortes, se han hecho al nuevo régimen, prescindiéndose, casi en absoluto, de la doctrina, para discutir, sobre todo, su oportunidad, hasta el punto de que se haya aventurado la peregrina especie de que los decretos de Noviembre contribuyeron, con la pasividad ó la distracción de nuestros Gobiernos de Madrid, á la guerra con los Estados Unidos.

Pero no me reduje á las protestas antes indicadas, sino que ratificando mi propósito de ayudar al Gobierno liberal en su empeño y demostrando con hechos, dentro y fuera del Congreso, la efectividad de los ofrecimientos, me reservé íntegramente el derecho, la hora y el modo de exigir las responsabilidades entrañadas en toda la política antiautonómica, sostenida hasta hace muy pocos meses, así como en la gestión misma del actual Gobierno, del cual, de ninguna suerte, podemos ni queremos pasar por solidarios los autonomistas históricos.

A esta reserva bien explícita ha dado mayor valor la escrupulosidad con que me he abstenido en todos los discursos que he pronunciado en el Congreso y fuera de él, desde Octubre á esta parte, de formular censuras severas contra cualquiera de los partidos ó de las individualidades verda-

deramente causantes de los graves males que todos soportamos y que los autonomistas denunciábamos con repetición rayana en la impertinencia; siendo de advertir que, como ya dije en el Congreso, yo creo que las responsabilidades aludidas no se reducen á los Gobiernos y á los partidos mencionados, si que también á muchos otros elementos que han fomentado y extraviado las pasiones del país, haciéndole incurrir en graves errores sobre sus positivas fuerzas, sus medios de acción, y la política oportuna, tanto como sobre el poder y las condiciones de nuestros enemigos en las Antillas y en Filipinas. Para declinar la responsabilidad, en el momento del desastre palpable, no vale gritar mucho ni colgar á los demás toda la culpa de lo que pasa.

Por último, también insistentemente, cuantas veces he hablado en la Cámara popular y desde el primer día, he sostenido: primero, que la cuestión internacional era sólo un aspecto del problema cubano, y segundo, que en la acción internacional estaba la solución más decorosa y de superior transcendencia del conflicto de España con los Estados Unidos. De ello traté antes. Así y todo, no sería imposible que por ahí se me tachase de *imprevisto*... porque los Gobiernos y algunas otras gentes no establecieron la Autonomía *cuando y como yo la recomendaba*, y no convinieron conmigo en que hoy es un dilate prescindir del *medio* internacional para gobernar colonias.

Todo esto quedó bien determinado en los discursos que

pronunció en los días 10, 11 y 13 de Mayo. Tengo la pretensión de creer que á ninguno de mis oyentes le quedó la menor duda respecto de mi actitud, mi posición y mis propósitos. Añadó que no hice gestión de ninguna especie para realizar el imposible de la constitución de un grupo parlamentario autonomista que nadie me recomendó desde las Antillas y al cual en todo caso no hubiera podido comunicar instrucciones de ningún género, porque no las recibí.

Después me preocupé de tratar el problema colonial desde otro punto de vista y con otro motivo. A este propósito responde el discurso que pronuncié en el Congreso el 3 de Junio sobre el presupuesto de Fernando Póo. Vino á ser esta oración parlamentaria como una comprobación de indicaciones que hice antes respecto á la absoluta necesidad de prescindir completamente de las corruptelas, suspicacias é intransigencias que habían comprometido, en estos últimos años, la nueva dirección colonial señalada por el famoso pacto del Zanjón.

Excuso adelantar aquí las observaciones que el lector verá en mi discurso, pero lícito me ha de ser repetir, una vez más, la expresión de mi profunda extrañeza de que en medio de la terrible crisis presente, el Ministerio de Ultramar incidiese en presentar á las Cortes el imaginario presupuesto de nuestras colonias del Golfo de Guinea, del mismo modo que en 1895, cuando yo lo combatí extensamente. De la misma manera y por razones análogas me ex-

trafió que á nadie se le ocurriera que era llegado el caso de decir algo sobre la presentación de los presupuestos de Filipinas al Parlamento nacional.

No creo que esto arguya decisivamente contra la sinceridad de la nueva política que el partido liberal y el Gobierno del Sr. Sagasta iniciaron respecto de las Antillas, en Noviembre último; pero seguramente tampoco dice en favor de la robustez y del alcance de los propósitos y los procedimientos de este Gobierno en materia colonial. Porque ya no es posible aquella irritante contradicción que por espacio de muchos años privó en España entre la política peninsular y la ultramarina, de suerte que demócratas intransigentes aquende el Atlántico y que veían en la separación de un alcalde de la Península motivo bastante para una insurrección popular, estimaban como cosa corriente que los concejales de las Antillas fueran de nombramiento real y los presupuestos municipales antillanos estuviesen á merced de los secretarios de los gobiernos insulares. Ni es dable que prospere la no muy lejana oposición del régimen de Puerto Rico con el de Cuba, por cuya virtud, mientras en la grande Antilla, que desde 1836 no había disfrutado del derecho electoral y donde la esclavitud había existido con innegable importancia hasta 1881, por lo menos, gozaba del derecho electoral el mayor de edad que pagaba cinco pesos de contribución al Estado, en la isla hermana, donde la esclavitud casi no había existido, y fué abolida en 1873, y

donde, desde 1873 á 1876, se había disfrutado con éxito admirable del sufragio universal, el elector necesitaba pagar una contribución de 10 pesos.

Todo eso, que no quiero explicar ahora y que realmente era intolerable, concluyó en 1897 con los decretos del 27 de Noviembre, cuyos preámbulos son una obra meritísima de buena fe y de sentido político. Por lo mismo, ¿cómo justificar que, después de esa fecha, se reprodujese el burocrático presupuesto de Fernando Póo de la época de los conservadores?

El hecho sólo tiene una explicación que favorece poco á la energía, cuando no á la formalidad, del Ministerio de Ultramar. Y dice bastante contra la decisión de la mayoría de nuestros hombres políticos influyentes para llevar á sus naturales consecuencias y en todos los órdenes las imposiciones de la novísima reforma colonial. Porque á ésta hay que ir con un criterio. De otra suerte, no hay más que expedientes, y en todo caso no nos haría gran honor haber redactado los decretos de Noviembre de 1897 sobre Cyba, pura y solamente porque las circunstancias nos imponían allí un cambio de procedimiento excusado donde los mismos elementos causantes de los desastres antillanos tenían aún fuerza para dominar.

Debo advertir también que el actual señor ministro de Ultramar, D. Vicente Romero Girón, se prestó, en el debate por mí provocado el 3 de Junio último, á lo que de todas

suertes resistieron los ministros de la época conservadora; esto es, á traer á las Cortes en la legislatura próxima, así el presupuesto de Fernando Pío con todo detalle como el presupuesto de Filipinas, traído ya á nuestro Parlamento, aunque sin efecto positivo, en 1870 y 1873. Por tanto, mi campaña ahora no fué del todo ineficaz.

Yo hubiera querido dar mayor extensión á mis gestiones parlamentarias de este año, abordando de frente el problema total filipino. Pero me faltaron datos y no ví clara la oportunidad de provocar un debate de ciertos resultados. Mi afición al asunto es ya antigua. En 1869 publiqué un trabajo bastante extenso con el título de *La Cuestión Colonial*, y entonces traté este problema con relación á las Antillas y el Archipiélago filipino. Buena parte de mi discurso del 10 de Julio de 1871 está dedicada á lo que sucedía y debía hacerse en nuestras colonias de Asia. Después, repetidas veces, en el Congreso, he indicado mi propósito de tratar la materia y he patrocinado la aspiración de muchos filipinos de enviar representantes á nuestras Cortes. Tengo muchos motivos para conocer los sucesos de Cavite de 1872, porque como letrado entendí en aquel terrible proceso, cuyo recuerdo me hace temblar, del mismo modo que temblaba por la suerte de su país, Jefferson, cuando traía á las mientes la transacción del Congreso americano con la esclavitud.

Cierto que en estos últimos años dejé un poco al lado la cuestión filipina. No ha faltado quien me lo advirtiera.

Pero también este aparente desvío tenía su fundamento. De ningún modo pensé jamás en abandonar el problema, ni yo soy de los hombres que tienen dos criterios para las cuestiones políticas ó creen que, como decía Lincoln, con referencia á los Estados Unidos, para condenarlo, «un pueblo puede vivir mitad libre, mitad esclavo».

La razón de mi reserva consistía en el conocimiento práctico que adquirí, de que carecía de elementos para acometer de frente la campaña. Los filipinos, después de los procesos de Cavite en 1872, no ofrecían el apoyo necesario para la ruda empresa; aquí, el creciente malestar de nuestras Antillas había empujado á los explotadores de nuestras Colonias, á poner sus intereses, sus medros y quizá la mejor base de sus medios de influencia y de defensa en el Archipiélago asiático: nadie se atrevía en la Península con las órdenes monásticas, de grandes apoyos, más ó menos descubiertos, no sólo en los centros oficiales y en todos los círculos monárquicos, sino aun en los círculos políticos más avanzados; tampoco nadie se cuidaba de organizar un cuerpo de Administración colonial, para que, aún con más motivo que en Java y en las Indias francesa y británica, sustituyese en el orden civil al anacrónico régimen teocrático, harto desacreditado en el Brasil y en el Paraguay, y cuya instantánea supresión sólo había de producir una revolución ó la imposición del no menos inaceptable régimen militar...

Por todo esto creí lo más práctico buscar los medios de combate en la formación y extensión de un criterio sólido, ilustrado y expansivo sobre la totalidad del problema colonial, aprovechando para ello las circunstancias excepcionalmente propicias del problema antillano. Con los positivos elementos de Cuba y Puerto Rico era dable dar aquí una batalla, que interesaría á muchas gentes, cuyo concurso se podría solicitar enseguida, para concluir con el disparatado régimen filipino. Por eso ya cuidé de advertir, dentro y fuera del Parlamento, que la Minoría parlamentaria autonomista no reducía su campo de acción al problema antillano y recomendé á todos mis compañeros de diputación, que se ocuparan, con la posible frecuencia, de los asuntos de Filipinas.

No sucedió esto, porque al fin no pudo realizarse en la Península la campaña general que yo patrociné por mucho tiempo y á la cual me he referido en otros libros.

De todos modos, cuando se constituyó en 1893 el partido republicano centralista, pude lograr que figurara, como uno de los artículos del credo de aquel partido, el siguiente: «Respecto de la cuestión colonial hay que afirmar, 1.º la identidad de los derechos políticos y civiles de Cuba y Puerto Rico respecto de la Península; 2.º la representación en Cortes de las comarcas del Archipiélago filipino, cuya cultura y cuyas condiciones lo permitan, y 3.º *en todas las colonias*, la consagración de los *derechos naturales del hom-*

bre, el mando superior civil y una organización interior autonomista que afirme, en el grado y del modo que las circunstancias de los diferentes países lo consientan, la competencia local para los negocios propiamente coloniales, hasta llegar á *toda la descentralización compatible* con la integridad nacional y la unidad del Estado.

En el propio sentido firmé la Declaración de la Minoría parlamentaria republicana de 26 de Febrero de 1890 y el Manifiesto de la misma de 29 de Mayo de 1891: así como la enmienda que los diputados republicanos de diferentes matices presentamos al proyecto de contestación del Congreso al Discurso de la Corona en 27 de Abril de 1891. En esta enmienda se dice:

«La situación de nuestras Antillas es cada vez más alarmante debido, no solo á causas económicas de distinta índole, si que muy particularmente á la política de desconfianza y desigualdades allí dominante y que urge rectificar, así por reformas que abaraten la vida y aseguren la producción colonial, como por otras de distinto carácter, entre las cuales figura la plena identidad de los derechos políticos con la Metrópoli, el sufragio universal, el mando superior civil y la organización insular autonomista.—El mismo espíritu debe inspirar á la progresiva reforma del estado de nuestras Colonias de Oceanía y de Africa, donde debe asegurarse, desde luego, el goce de todas las libertades públicas y organizarse el Gobierno con arreglo á las particulares y dis-

tintas condiciones de cultura y de riqueza de aquellas comarcas. »

Por manera que ni yo desarmé en estos últimos años ni siquiera me distraje. Esperaba la oportunidad y me preocupaba de asegurar medios para el combate, que siempre creí más difícil por lo que hace á Filipinas que respecto de las Antillas.

No eran pocos obstáculos el absoluto desconocimiento que, en la Metrópoli, existía y existe hasta de la geografía del Archipiélago, la *frase hecha* de que en Filipinas «no había más españoles que los frailes» y el supuesto punto menos que general (fortificado por desmoralizadores espectáculos, como la exhibición de las tribus de igorotes y de negritos en la última exposición filipina de Madrid de 1890) de que todos los indios del Archipiélago eran tribus de cultura incipiente, raza niña, gente blanda y hasta cobarde y en los comienzos de la *reducción*. ¡Después de cerca de cuatro siglos de conquista y dominio!

Ahora, tampoco quiero ocultar, siendo opuesto á los debates muy comprensivos y bastante antipático á los discursos muy extensos porque el público no los sigue, que hubiera celebrado intervenir en el último debate parlamentario sobre el problema filipino, no sólo por la ocasión que se me deparaba de decir algo y preguntar otro poco (no lo que yo tenía ideado) sobre la cuestión internacional que tanto me preocupaba y preocupa, sino porque me animaba el deseo de reque-

rir á las personas competentes para que nos explicasen la última insurrección tagala y se planteara de cualquier modo y en cualquiera de sus aspectos el problema de la reforma colonial filipina.

Es indiscutible que hasta la fecha no hemos podido conocer, de un modo oficial, el carácter de la insurrección del Archipiélago asiático ni siquiera su programa. A última hora, y por acaso, pocas personas hemos conocido el Manifiesto de Aguinaldo publicado, en Agosto de 1867, en el *Diario de Avisos* del Japón y en el cual no se dice cosa alguna contraria á la soberanía de España.

Que el desgraciado Rizal no era un enemigo de ésta parece positivo: en sus libros no se encuentra motivo para afirmar lo contrario.

La recientísima absolucíon del capitalista filipino don Francisco de Rojas es de una abrumadora elocuencia respecto de la injusticia de ciertas acusaciones que corrieron aquí como palabras del Evangelio, en el verano de 1896, en cuya época se verificó el procesamiento del relator del Tribunal Supremo de Justicia y Redactor en Jefe del *Diario Oficial* de sesiones del Senado, D. José María Pantoja, como reo de conspiración contra la integridad de la patria en Filipinas!

De nada de esto habla nadie. Nadie tampoco recuerda que en 1812,—1820 y 1836, las Filipinas estuvieron representadas en las Cortes de la Nación y que cuando, en 1868 y 1875, se rectificó el agravio que se hizo á las Antillas en 1836, al

expulsar del Congreso á los representantes parlamentarios de éstas, se olvidó á la gran colonia Asiática, que continuó sometida al absolutismo apostólico, hasta el punto de que ni siquiera los presupuestos filipinos se traen á las Cortes.

Nadie habla de que antes del movimiento insurreccional de 1896, tuvieron efecto las conspiraciones y los procesos de 1840, y de 1872 (respecto de las cuales han corrido los dislates y las falsedades más extraordinarios) y no es para dejar en la sombra, el silencio que se ha hecho en estos últimos días alrededor de la Exposición de los representantes de las órdenes monásticas de Filipinas, que, reclamando del Gobierno de la Metrópoli, que se decida entre ellos y los masones, señala como condiciones de su continuación en el Archipiélago exigencias verdaderamente inconsideradas.

No exagero nada. Las órdenes monásticas dicen lo siguiente:

«Tal acontecería si en ley se tradujeran la secularización de los ministerios regulares; la secularización de la enseñanza; la desamortización de los bienes de las Corporaciones, ó la supresión de la libertad que les compete para disfrutar y disponer de ellos; la declaración de la tolerancia de cultos; el establecimiento del matrimonio civil; la permisión de toda clase de asociaciones y la libertad de la prensa. Tal acontecería, por lo que más directamente nos atañe, si continuando aquí y allá, la, á todas luces injustificada, campaña contra nosotros, el Gobierno en sus actos demostrara que realmente conceptúa que nosotros hemos sido causa de la insurrección y que nos oponemos al

progreso de estas Islas y al desenvolvimiento de sus legítimas aspiraciones. Tal acontecería, si no persiguiendo con tesón las asociaciones secretas y no poniendo eficaz correctivo á los sediciosos que soliviantan las masas inconscientes del pueblo contra las Regulares y contra todo lo más santo y más español de las islas, se quisiera que los Religiosos continuaran en sus ministerios, expuestos en todo momento á ser sacrificados, cual es terrible consigna de la secta y cual por desgracia ya ocurrido, sin tener, acaso, ni aun el consuelo de que sean apreciados esos sacrificios.

Si los religiosos hemos de continuar en las Islas siendo útiles á la Religión y á España, á nadie puede caber duda que ha de ser garantizando sólidamente nuestras personas, nuestro prestigio, nuestro ministerio.

Reproduzco estas líneas porque me parecen decisivas, para la futura reforma colonial de Filipinas, pues que ellas dicen bien claro lo que las órdenes monásticas entienden como indispensable para su existencia en aquella comarca.

Es decir, todo lo contrario á lo que supone el mundo contemporáneo. Y además, lo reproduzco porque no ha habido medio de que en el actual Congreso se oyera su lectura, cuando un diputado autonomista (el Sr. D. Genaro Alas), con admirable sentido y rara energía, pretendió que lo conociera la Cámara (1). ¡Terrible prueba del miedo y de las prevenciones dominantes en ella, aun entre los elementos

(1) Merece ser leído lo que el Sr. Alas dijo en este debate de Junio último. Quedará en los anales de nuestras Cortes. Así se habla.

liberales y más comprometidos en la solución del problema de Cuba!

Pero hay más que esto. He seguido con particular atención el lánguido debate con que terminaron las sesiones del Congreso en Junio último y que, como he dicho, versó sobre la insurrección filipina. En él se prescindió en absoluto de las soluciones: ni siquiera se hicieron públicas las reformas que el nuevo Gobernador general Augustí ha decretado con autorización del Gobierno de la Metrópoli, ya hace cerca de dos meses y que se suponen saturadas de cierto espíritu autonomista. Nadie se preocupó de recabar del Gobierno que precisara su pensamiento respecto de esas reformas ó por lo menos de las que se anunciaron vagamente en el Discurso de la Corona con que se abrieron en 20 de Abril de 1898 las actuales Cortes (1).

Porque la última insurrección filipina y su reciente resurrección, bajo la influencia ó por los manejos norteamericanos, no son más que incidentes, distintos todos y todos

(1) Dice así el Discurso. — «A los graves asuntos que de esta suerte solicitan nuestra atención hacia los mares de Occidente, vienen á unirse el estado de nuestras posesiones en el lejano Oriente. Las islas Filipinas, cuya lealtad ha puesto á prueba una grave insurrección felizmente dominada, sienten todavía las consecuencias de aquella agitación profunda. Para calmarla y para prevenir en lo futuro el descontento, remediando las causas del anterior malestar, mi Gobierno os someterá importantes resoluciones »

gravísimos, del problema, y con ser importante el saber si efectivamente el Gobierno español, por medio de su primer representante en Manila, prometió ó no reformas políticas y sociales para terminar el primer movimiento acaudillado por Aguinaldo, muy por cima de esto se halla el considerar que la reforma filipina (como la decretada en las Antillas en Noviembre de 1898), tiene un valor propio y sustantivo, dependiente del que se dé á la cuestión colonial planteada en el gran Archipiélago asiático. De todas suertes y sobre otras clases de problemas hay que poner y resolver el de si España puede y debe mantener en Filipinas el régimen vigente y, caso negativo, cuál ha de ser el régimen que sustituya al actual.

De esto nadie se ha olvidado en nuestras Cortes. Sin embargo, esto ya es absolutamente imposible excusarlo. Pero hay que principiar por plantear el problema fuera de preocupaciones y prevenciones, y atentos, el oído y la vista, á las experiencias extrañas y persuadidos, los que estudien el caso, de que España ha sido grande cuando en ella ha encarnado el espíritu total de la época de sus empeños y sus éxitos. Desde que se aparta de la corriente universal su decadencia es positiva, en el interior, en las Colonias y en todas partes.

Ultimamente he oído decir que el problema filipino es diferente del antillano. Es cierto: pero de aquí no se infiere que el criterio para las soluciones tiene que ser distinto y

menos opuesto. El derecho colonial descansa en principios y la política colonial consiste en aplicarlos según los tiempos y las circunstancias; no en contradecirlos ni mistificarlos. En Filipinas existe dentro del complejo problema colonial, el de la libertad religiosa y la secularización de la vida; el agrario y de la desamortización; el de la igualdad y la elevación progresiva de las razas; el de la autonomía local y el de las libertades políticas. Esos problemas no están intactos, porque, á pesar de que nadie habla de ello, es la verdad que ya en 1870, la Revolución de Septiembre los abordó; luego en 23 de Junio de 1881 se decretó la libertad del trabajo y del cultivo y desde 1884 á 1890 se llevaron al Archipiélago: el Código penal, el Código de Comercio, la Ley procesal civil y el Código civil y en 5 de Enero y 19 de Mayo de 1893 se hizo la reforma municipal de Luzón y las Visayas; reforma derogada públicamente, en el año último por el partido conservador de la Península y algo antes, por todo género de corruptelas y atrevimientos burocráticos. Los decretos de reforma filipina de 12 de Septiembre de 1897 (felizmente dejados en suspenso por el actual Gobierno liberal) tratan, no sólo del régimen municipal, sino de la Justicia de paz, del Código penal, de las atribuciones del Gobernador, de la vigilancia y policía, de los idiomas filipinos, de la enseñanza y del clero. Todo eso tratado con un deplorable sentido y de manera propia para producir escándalo, todavía más que por lo reaccionario, porque la

obra de los conservadores choca contra todo lo que se practica y florece en comarcas análogas y porque se realiza cuando agoniza la insurrección tagala y casi en los mismos días en que el Sr. Cánovas del Castillo publica, frente á la insurrección pujante de Cuba, los decretos de Abril de 1897 de reforma antillana. Esto no se puede hacer simplemente. Ya lo hemos visto. De todos modos esto no se debe hacer.

Pero aquí aduzco el recuerdo de las reformas, promulgadas de 1870 á 1894, para advertir que el filipino ha gustado ya del *fruto prohibido* de la libertad y de la reforma y que de hoy más es moralmente imposible el *statu quo* colonial, máxime en comarcas que, como la de Luzón, de ninguna suerte son inferiores á algunas provincias de la Metrópoli y que evidentemente ya no quieren (y *pueden* no querer) vivir en el régimen de la mano muerta, la burocracia, la centralización administrativa, la desigualdad de razas y la negación de las libertades necesarias de los pueblos modernos.

Demás de esto hay que contar con que en el comercio exterior de Filipinas, que en 1896 casi llegó á 264 millones de pesos (1), la Península española representa escasamente el

(1) He aquí el promedio:

	Expor- taciones — Dollars.	Impor- taciones — Dollars.
Alemania	223700	744928
Bélgica	45000	272240

seis por 100, y el 8 el grupo de Francia, Inglaterra y los Estados Unidos: que á muy poca distancia del Archipiélago está el Japón, transformado y en asombroso progreso por su identificación con las ideas modernas y sus victorias sobre la China (representación de la inmovilidad y el anacronismo) y en creciente y directo trato con las grandes potencias europeas, desde 1870 á esta parte: y que el desarrollo de la rebelión de última hora, favorecida por los norteamericanos, es un dato absolutamente irreductible en la vida de nuestra gran colonia asiática, donde, para restablecer la soberanía española, no sería suficiente la mera retirada de la escua-

	Expor- taciones — Dollars.	Impor- taciones — Dollars.
China	18000	98782
España	4500000	7700000
Estados Unidos	4982837	162446
Francia	1987900	1795000
Gran Bretaña	7467500	2467090
Japón	1887909	
Diversos	4065704	4907184
Total	24550640	18147670

La Gran Bretaña es, como se ve, la que compra más á las islas Filipinas, ocupando los Estados Unidos el segundo lugar con 4.982.000 dollars, y el tercero España.

En las importaciones del Archipiélago, en cambio, ocupa España el primer lugar, distanciándose mucho los demás países.

dra yankee, que ocupa la bahía de Manila, toda vez que, hoy por hoy, lo que tiene comprometida la suerte de nuestra bandera y el poder de nuestro Gobierno en aquellas lejanas comarcas es realmente la población tagala, protestante, en armas y dueña de la parte más importante de Luzón. ¿Por qué no meditan ahora (después de estudiar el punto) en la gran obra del gobernador Anda y Salazar?

¿Bastará para prescindir de esta enseñanza, la consideración de que esto no se reduce á *una noticia*, y que pide estudio y reflexión?

Paréceme que todo lo dicho es ya de evidencia y que no bastará para deshacerlo el remedar al avestruz que pone la cabeza debajo del ala esperando que de tal suerte ni las cosas pasen ni los demás las vean. Pero cuánto ha costado á esta inagotable y maltrecha España, creer á pies juntillas, á los que, por espacio de no sé cuántos años, nos han estado atornando los oídos, con la autoridad de prácticos, maestros y especialistas, para afirmar campanudamente, que era imposible que el tagalo luchara con el europeo y que el filipino acertara á idear concierto ni organización de ningún género. Cuánta sangre, cuánta ruina y cuánto quebranto moral nos ha traído el desconocer ya que, más privilegios y más derechos y más fuerza que las órdenes monásticas filipinas tenía la Compañía de las Indias en el Indosíán y sin embargo, Inglaterra la abolió, por interés general, en 1858, después de haberlo tocado y reformado continuamente en 1775 y 88

y 1833 y 53, como en 1833 pasó por cima de los derechos de los propietarios de esclavos de las Antillas británicas, ya, que entre los modernos Gobernadores y Administradores de nuestro hermoso Archipiélago no han existido prestigios como los de Daendels y Van den Bosch en Java, ni en el orden de los productos materiales, los de Filipinas pueden ser remotamente comparados con los de la gran colonia holandesa mediante el criterio de 1830 y sin embargo, el Gobierno holandés, atento al desastre de 1849 y á las protestas locales y la campaña de los reformistas de la Metrópoli de 1865 y á las bajas de la producción y el comercio de Java, en años posteriores, se decidió á prescindir de las resistencias de una burocracia, sin duda, mucho más competente que la nuestra (como que se nutría en las escuelas especiales de Leyden y de Left) y de los prejuicios de los gobernadores coloniales, para adoptar la nueva política iniciada por la ley agraria de 1870 y la abolición de la corbea, en el sentido de la vida libre contemporánea.

De todo esto yo hubiera querido tratar en el Congreso, porque los últimos sucesos ya dan cierta base para hablar, con alguna eficacia, de las reformas fundamentales que pide el estado presente de Filipinas. Por lo menos, hubiera planteado, en sus verdaderos términos, el problema, desarrollando algunas de las indicaciones que hice al discutir poco antes el apenas imaginable presupuesto de Fernando Poo y en el supuesto de que no hay español medianamente discreto

especialísimamente al problema colonial, considerándolo en toda su amplitud, tanto porque este era mi particular y absorbente compromiso, en las circunstancias presentes, cuanto porque la cuestión ultramarina llegó á ser, y todavía es hoy, la cuestión capital, cuando no la total de la nación española. Nunca como ahora se evidenció el concepto que yo he tenido desde los primeros días de mi campaña política—es decir, desde hace ya treinta años—del problema colonial.

No he hecho más, porque no he podido. Pero bueno es que conste que ni he desaprovechado ocasión alguna ni he titubeado un minuto respecto á mi ya vieja convicción sobre la eficacia de la opinión pública, bien ilustrada y requerida. Buena parte de lo mucho malo que ahora sucede en España se debe á que, á pesar de muchas y resonantes protestas, la mayoría de nuestros hombres políticos no comparte aquella convicción y á que, de hecho y por muy diversas causas, en estos últimos años, han decaído mucho, en nuestra Patria, la propaganda de los principios y la ilustración regular y sistemática de las gentes respecto de los problemas generales y de derecho político. La simple noticia, las puras fórmulas y la mera acción, más ó menos ruidosa y efectista, no bastan para orientar y vigorizar á un pueblo.

De todo lo que en este papel digo se infiere:

Primero: que no he creído nunca que la cuestión colonial es un problema particular y exclusivo; mucho menos un interés local de nuestras Antillas y de Filipinas. Por

tanto jamás he tratado los negocios ultramarinos como un *especialista* ni como un procurador particular de los antillanos que por espacio de veinte años me han enviado á las Cortes, conociendo bien mi absoluta identificación con la política general española, y mi reflexivo y público propósito de ser *un diputado de la Nación*.

Para pensar y obrar de otro modo, habría sido preciso que yo desconociera la existencia ó el valor del Derecho colonial y que no hubiera estudiado con cierto detenimiento, como he hecho, la historia de las relaciones políticas, económicas y sociales de la Metrópoli y las colonias españolas, de cuyo estudio he sacado la idea de que es muy discutible, bajo cierto punto de vista y para ciertos efectos, cuál ha sido mayor y de mayor transcendencia, si el influjo de la Península en Ultramar ó el de nuestras colonias (señaladamente las de América) en la vida moral y política de la Península.

Por eso y algo más he dicho siempre, y ahora repito, que creo muy difícil que en España arraigue la Democracia y que nuestra Patria pueda intentar sostener cierta personalidad y realizar ciertas empresas en el orden internacional, si no consagra explícita y definitivamente en sus colonias la autonomía colonial y el régimen de la confianza y la libertad.

Después de esto, lo antes razonado demuestra que persevero en mi firme creencia de que es imposible que España continúe aislada en el concierto de las Naciones contemporáneas.

Ahora se ha palpado, se palpa, una de las consecuencias de este aislamiento. Pero adviértase que lo que sucede sólo es *una* de las diversas consecuencias del error imperante.

Apenas comprendo cómo los partidarios de ese aislamiento, ó los que lo han consentido, hacen en estos instantes ciertos argumentos contra la actitud de las Potencias europeas.

Cierto, indiscutible es que la conducta de éstas es deplorable. Aun sin llegar al criterio de la Santa Alianza, ó al del Presidente Monroe, ó al de los redactores de los Tratados de París y de Berlín de 1856 y 1878, puede bien afirmarse que la pasiva expectación de Europa y América en el conflicto hispano-americano será una gran vergüenza de la Historia política contemporánea. Pero ¿cómo pueden solicitar la acción europea los que han estado proclamando, en estos últimos tiempos, que España, de ninguna suerte, debía comprometerse más allá de sus fronteras?

Tan evidente y desastrosa me parece esta contradicción, como absurda la tesis de que ahora España no tiene medios positivos y materiales de interesar á otras Naciones en su defensa ó que la solución de la crisis presente se debe fiar tan sólo á la generosidad de los norteamericanos vencedores.

De todos modos la lección presente, aunque muy dura, deba ser aprovechada por los más distraídos, más confiados ó más arrogantes.

En tercer lugar, de lo dicho resulta que yo tengo una fe

viva, profunda, excepcional en el genio y la vitalidad de la raza española. En esto no hay petulancia, ni flaqueza, ni patriotería de ninguna especie. Ahí están todos mis libros, todos mis discursos. Yo no he gastado nunca mis pulmones dando vivas, ni mis fuerzas haciendo desplantes. ¿Quién más que yo ha señalado los defectos de mi familia? Solo que los he creído generalmente remediabiles y á su remedio se han dedicado mis pobrísimos esfuerzos, poniendo, en primer término, como un empeño capital, urgente, una vigorosa reforma de la educación española.

Porque gran parte, quizá la mayor de lo equivocado y deplorable de nuestra vida depende, principalmente, de una gran deficiencia de la cultura media de España y del decaimiento de nuestras clases directoras;—precisamente cuando los problemas sociales é internacionales revisten mayor importancia y piden nuevos procedimientos y soluciones más potentes y eficaces.

Así se explicará la verdadera pasión con que yo he tomado el problema pedagógico de España. No me cansaré de repetirlo: ese problema es para mí, ante todo y sobre todo, de un carácter eminentemente político. Y para resolverlo pido el concurso activo y vigoroso del Estado, en vista preferente, cuando no exclusiva, de la ilustración del mayor número (la enseñanza elemental y primaria en su doble concepto de instrucción y educación) y el apoyo resuelto de los ciudadanos, de la acción particular, de la acción libre de la

sociedad española, para sacar á salvo sus intereses de honor, de paz y de civilización.

Por último, paréceme bien evidenciado que yo he insistido en estos últimos tiempos, no sólo en lo que el Sr. Cánovas del Castillo, discutiendo conmigo en 1896, llamaba mi política optimista ó sea mi confianza en la eficacia de la política reformista expansiva y democrática, sino en mi afieja resolución de apoyar toda tendencia favorable á la reforma colonial, aun cuando ésta no respondiera completamente á mis recomendaciones, ni fuera realizada por los hombres de mi partido y de mi preferencia.

En estos últimos meses he hecho algo que no tiene positivo mérito por cuanto me lo ha impuesto el deber y yo doy un valor muy relativo á lo que se llama la conveniencia. Me atrevo á asegurar que cuantas veces me he inspirado en los principios no he sufrido percance. No me atrevería á decir lo propio respecto de las pocas veces en que he tenido que someterme á la política de las habilidades.

En esta última temporada he podido ratificar, de un modo no común, mi fe y mi propaganda sobre este particular. Me he prestado calurosamente á secundar los esfuerzos del Gobierno liberal para la instauración del régimen autonomista en las Antillas y he trabajado, como el que más, para combatir resuelta y eficazmente las reservas y aun las contradicciones de algunos correligionarios míos de Ultramar, de la Península y del extranjero. Añado que yo no he pe-

dido ni logrado absolutamente nada del Gobierno, respecto de los autonomistas de la Península y me he limitado á reclamar, con éxito (por regla general) que en la constitución de los Gobiernos insulares, el Gobierno de la Metrópoli se atuviera á los acuerdos de los antillanos, residentes en Cuba y Puerto Rico. Y me he opuesto en absoluto, con éxito decisivo, á los trabajos que aquí torpemente se iniciaron para arreglar, en Madrid, las cosas cuya inteligencia y resolución correspondía á las gentes de allende el Atlántico. Temo que esto no se ha comprendido bien por todos en nuestras Antillas. Pero yo estoy perfectamente satisfecho de lo que he realizado, sin preocuparme lo mas mínimo de las personas ni esperar la gratitud individual de nadie.

He hecho más. Mis discursos lo evidencian. Me he abstenido rigurosamente de la menor censura contra el Gobierno liberal; y eso que alguna vez creo haber tenido razón para censurarlo. Por otros motivos he excusado, en términos inverosímiles, toda discusión y todo recuerdo respecto de hombres y partidos peninsulares á quienes, á mi juicio y en conciencia, corresponde muy particularmente la mayor responsabilidad de las actuales desgracias. He querido facilitar de todos modos la doble empresa de la instauración y arraigo de la Autonomía en las Antillas y de la victoria, siquiera moral, de España sobre los Estados Unidos, objeto en otro tiempo de mi devoción y representante hoy de tendencias verdaderamente deplorables é incompatibles con mis con-

-dos conservador y liberal. Todo lo que anuncié ha sucedido al pie de la letra. Por discreción, más que por modestia, no dije entonces que yo estaba muy bien enterado de la disposición de los Gobiernos extranjeros respecto del problema de Cuba. Y por motivos de delicadeza, me limité á meras alusiones á las reservas y los consejos que los Gobiernos de Francia é Inglaterra habían dado al de España desde 1848 á 54 para que variase nuestro régimen colonial, de modo que fuera posible al extranjero garantizar la soberanía de España en las Antillas.

Luego me hubiera sido muy fácil recordar alguno de mis discursos del Congreso, oídos con una esquisita deferencia por los diputados y aun por los Gobiernos liberal y conservador, pero estimados punto menos que como una elucubración teórica, cuando los que estaban perfectamente fuera de la realidad y de la práctica eran mis oyentes reacios y mis jactanciosos contradictores.

Por otra parte, yo no podía ignorar lo que la República y los diputados republicanos han hecho desde 1873 á esta parte, en obsequio de la reforma colonial y del prestigio y la integridad de la patria española. Sobre esto he publicado un libro (1), lleno de datos y de documentos irrecusables. Sin embargo, después de su publicación, he oído y leído afirmaciones contrarias, perfectamente gratuitas y cuyos autores,

(1) *La República y las Libertades de Ultramar*. 1 vol. Madrid. 1898.

ni en el Parlamento ni fuera de él, se han tomado el trabajo de aducir la menor prueba en favor de sus desahogos.

No tengo para qué repetir ahora lo que significó el éxito asombroso de la experiencia de Puerto Rico en 1873: cómo esta experiencia influyó decisivamente en el pacto del Zanjón y de qué manera este pacto fué mistificado al propio tiempo que se mistificaban las libertades reconocidas á Puerto-Rico y or la República española.

Y que la solución autonomista no ha tenido desde 1879 á 1897, dentro y fuera de las Cortes, más apoyo que el de los republicanos, se demuestra por el hecho evidente de que solo los periódicos republicanos han patrocinado esta solución; porque solo en los programas republicanos aparece consagrada la Autonomía colonial y porque solo los diputados republicanos, contra *todos* los monárquicos, votaron, en 1886, la proposición de los diputados autonomistas, sostenida por el Sr. D. Rafael Montoro, en favor de la Autonomía.

Aparte de esto hay que considerar la relación internacional. Es indiscutible que, cuando á fines de 1873, las Repúblicas sudamericanas se concertaron para proponer, en nombre de América, al Gobierno de España, que accediese á la independencia de Cuba, esta gestión fracasó porque se opuso el Gobierno de los Estados Unidos, asegurando que habiendo triunfado la República en España, la República rectificaría completamente la política colonial monárquica. Respecto del conflicto del *Virginus*, no se puede discutir que nuestro

Gobierno republicano logró un éxito completo, por que el de Washington reconoció explícitamente el derecho de España á la persecución del *Virginus*, de tal suerte que la indemnización pagada en 1876 por nuestro Gobierno monárquico no precedía, en vista de las anteriores negociaciones del Gobierno de Madrid y el de Washington.

No menos evidente es que distan abismos, como energía y alcance político, las notas cambiadas por aquel entonces, entre los Ministros norteamericano y francés con nuestro Ministro de Estado, celoso del prestigio de España en términos incomparables con los de las notas que en estos dos últimos años han salido de nuestro Ministerio de Estado contestando á las del Gobierno norteamericano. No hay que hablar de la famosa indemnización á Mora, negada constantemente por nuestros republicanos. Del mismo modo es indiscutible: 1.º que los diputados republicanos se opusieron tenazmente á que en 1895 se suspendieran las sesiones de las Cortes en vísperas de discutir el problema internacional de Cuba, y 2.º, que en aquella misma fecha fueron los únicos que, por medio de un documento solemne, reclamaron del Gobierno conservador, que se abrieran las Cortes para discutir la cuestión Mora y fijar la actitud de España frente á los atrevimientos y las violencias del Congreso de Washington.

Como aquí todo esto se olvida y son muchos los que hablan de memoria, aun en negocios graves y de superior

transcendencia, se explica que nadie recuerde esto ni en la prensa ni en el Congreso. Yo podía haber hablado de ello, pero me abstuve de la menor alusión.

Y cuenta, que en algún momento pude considerarme como verdaderamente provocado, ya en mi persona, ya en la de mis antiguos, sinceros y desinteresados correligionarios. Porque á provocación me sonaba el oír hablar á algunos de nuestros viejos y desacreditados adversarios, de la torpeza del Gobierno al comprometerse en la obra autonomista, cuando el verdadero argumento que, en este orden de ideas, podía hacerse al Gobierno liberal era el haber dejado para última hora la proclamación del nuevo régimen: esto es, la hora en que buena parte de los enemigos del sistema anterior habían contraído compromisos y creado intereses en las filas separatistas, formadas á pretexto ó en vista del fracaso de las reformas anunciadas en 1893 y de la subida al poder de nuestro partido conservador.

¿Y qué decir de la arrogancia con que no pocos anti-autonomistas de hace unos cuantos meses, algunos autonomistas que á última hora y por cansancio habían plegado la vieja bandera, y hasta algunos *incondicionales* y *constitucionales* de entrambas Antillas pretendían, no solo la dirección del nuevo orden de cosas creado á fines de Noviembre, sino disentirnos á los de abolengo, nuestros títulos y nuestra ciudadanía, y hasta cerrarnos las puertas del Parlamento Nacional ó dificultarnos el acceso á las Asambleas insulares que

habrían de dominar los conversos, y los arrepentidos del momento?

Porque ya lo puedo declarar: en un punto ha estado que al día siguiente de proclamada la autonomía en Puerto Rico, yo no hubiera sido electo diputado á Cortes por aquella isla, merced á intrigas y violencias extraordinarias y notorias, propias del viejo régimen, que sin embargo, respetó constantemente mi candidatura. Pero de ellas, ni aun aludido en el Congreso, he creído que debía pronunciar una palabra.

¡Y cuánto podría yo haber comentado la campaña que contra mi se hizo, en la prensa y en los círculos políticos, durante los últimos meses de 1897; unas veces, para hacer creer al público y al Gobierno, que yo carecía de la representación y poderes especiales (que positivamente tenía) de las Directivas autonomistas de nuestras dos Antillas; otras veces, para que dentro y sobre todo fuera de España, corriese la falsedad de que primero el Directorio, y luego la Directiva de la Fusión Republicana española. me había desautorizado, reprendido y condenado por el incondicional (?) é indiscreto apoyo que yo prestaba á un Gobierno monárquico, en la tarea de la implantación de la Autonomía colonial, llevando mi imprevisión y mis preocupaciones locales y particularistas hasta el punto de comprometer el prestigio y libertad de acción de nuestros republicanos más ardientes é implacables!

Y sin embargo no quise rectificar en periódicos ni en la

tribuna ninguno de estos dilatas, al cabo destruidos por la evidencia de los hechos, las declaraciones solemnes de la Directiva republicana, los cablegramas de los Directorios autonomistas de las Antillas y las comunicaciones y los acuerdos oficiales del Gobierno. Yo no desplegué los labios ni hice la menor gestión para que todo esto fuera público.

Paréceme que no habrían sido muchos los que demostrarán, en caso análogo, tanta paciencia. Pero esto no era mansedumbre de mi parte. Era la fuerza del deber, que creo haber visto con toda claridad y servido como cumple á un político serio, á un patriota sincero y á un hombre honrado.

Afirmo solemnemente que no pesa en mi conciencia, no digo ya el sentimiento de haber dificultado, de modo alguno, la empresa de Noviembre, si que el temor de no haber contribuido (dentro de mis medios y en la posición que el Gobierno monárquico me señaló) al éxito de aquel patriótico cuanto difícil empeño.

Ignoro la suerte que está reservada en estos críticos momentos á nuestro imperio colonial; quién sabe si á España entera. El horizonte está muy cerrado; la tormenta sigue, y nuevas negruras aparecen por todas partes. En estos tremendos instantes estimo como una de las mayores satisfacciones de mi vida y uno de los mayores desagravios de que he disfrutado en ella, los calurosos y prolongados aplausos con que desde todos los sitios del Congreso fué acogida la

solemne declaración que en nombre propio y de mis compañeros de representación parlamentaria antillana, hice el 10 de Mayo último «de que, fuera el que fuese el porvenir que nos aguardara, nosotros afirmábamos nuestra absoluta identificación con la suerte de España».

Ahora añadiré que yo nunca he creído que esta suerte era incompatible con la felicidad de nuestras Antillas y menos con el Derecho, la Paz y el Progreso del Mundo.

Madrid

30—Junio—98.

LA CUESTIÓN DE CUBA

EN 1898



DISCURSO

ADVERTENCIA

La publicación de mi discurso parlamentario del 10 de Mayo último responde al mismo fin con que lo pronuncié en el Congreso.

No trato de convencer á nadie. Cumplo con mi deber y defendiendo mi doble representación de diputado republicano y apoderado político de nuestras dos Antillas (pues que en las Cortes actuales lo soy del distrito de Guanabacoa de Cuba y de la circunscripción de San Juan de Puerto Rico), fijando bien mi posición en la tremenda crisis por que atravesamos y haciendo todo lo que en mi mano está para que dentro y fuera de España se vea cómo, en los comienzos de las sesiones parlamentarias de este año, entendí y expliqué el problema ultramarino.

Antes de concluirse el primer período de la actual legislatura quise desarrollar una interpelación al Gobierno sobre su política internacional. Respondía esto á mi arraigada convicción (ya declarada en mi discurso en el Senado de Junio de 1896 y otra vez expuesta en mi discurso del Congreso de 10 de Mayo último, de que el actual pro-

blema de Cuba era quizá más una cuestión internacional que un problema colonial y de derecho interior. En la acción internacional ponía yo mis mejores esperanzas para el término de la guerra de España con los Estados Unidos.

El Sr. Presidente del Consejo de Ministros, á vuelta de excusas bastante originales, declinó la interpelación, y pronto hube de convencerme de que tampoco había gran interés, respecto de este particular, en el Congreso, donde se discutía lenta y distraidamente nada menos que el problema de Filipinas. En seguida se cometió el error de suspender las sesiones de Cortes: luego, se estableció la previa censura para la imprenta: luego se suspendieron las garantías constitucionales en toda España y el Gobierno español, prescindiendo del concurso internacional y sin dar antes ni después, la menor explicación sobre esto, invitó directamente al Gobierno norteamericano á que formulase las condiciones de la paz.

Recibidas las exigencias norteamericanas (entre las cuales figura, como imprescindible, la expulsión total de España del mundo que ésta descubrió y civilizó) nuestro Gobierno creyó oportuno conferenciar con varias representaciones de la política y la administración españolas; entre ellas, los exgobernadores generales de las Antillas, prescindiendo en absoluto de los representantes parlamentarios de éstas, destinadas á un vergonzoso sacrificio. Y á poco, é insistiéndose en el empeño de escluir de la resolución del conflicto hispano americano, á todas las potencias neutrales de América y Europa, se firmó el protocolo de la paz que suprime el imperio colonial de España.

Después se ha hablado de reunir las Cortes, cuya misión es ya al parecer sencillísima, pero también á última hora se asegura que las Cortes se reunirán tarde.

En tanto no faltará quien dentro y fuera de esta, se pregunte qué son, qué representan y qué hacen en esta crisis los diputados y senadores de las Antillas sacrificadas.

Para contestar á esta pregunta se necesita algo más que este folleto: pero en tanto llega la oportunidad de hablar oficialmente y como procede, estimo de necesidad recordar lo que en nombre de un grupo de diputados antillanos por mi propia cuenta, dije la vez primera que pude hablar en el actual Congreso.

Repito que no persigo fin propagandista alguno.

Quiero probar una vez más, con hechos, que ahora, como siempre, no he abandonado la brecha un solo momento.

15—Agosto—98.

Oviedo.

Quinta de Abuli.



LA CUESTIÓN DE CUBA

EN 1898 ⁽¹⁾

SEÑORES DIPUTADOS:

Solicito la atención de la Cámara por poco tiempo. Hablo, más que en mi propio nombre y por mi personal deseo, en representación de un grupo de Diputados autonomistas, formado por los históricos de Puerto Rico y los autonomistas de la grande Antilla, republicanos unos, monárquicos otros y varios sin compromiso determinado con nuestros partidos peninsulares y nuestros grupos parlamentarios, pero todos atentos á los intereses políticos generales de la Nación, como representantes de la totalidad de la misma; obligados particularmente por el carácter local de los partidos antillanos, aún más que por lo extraordinario de las

(1) Este discurso se pronunció en el Congreso de los Diputados el 11 de Mayo de 1898.—Según mi costumbre (por efecto de mis muchas ocupaciones) no corregí este discurso y sin correcciones salió en el *Diario de Sesiones* del Congreso. Al reproducirlo hoy, me he permitido aclarar y ampliar dos ó tres indicaciones, pero sin variar lo más mínimo lo fundamental del primitivo texto.

actuales circunstancias, á gestiones y actitudes muy especiales y dispuestos á mantener en este Congreso la tradición, los compromisos y las responsabilidades de veinticinco años de constante propaganda en favor del sistema que afirma como bases indestructibles, de un lado, no sólo la soberanía de España, si que la unidad de la Patria, y de otro, todos los fueros locales y todas las libertades de nuestras Antillas, compatibles con aquellos grandes principios y aquellos sagrados intereses.

La actitud que veníamos manteniendo en todo este debate, se hallaba perfectamente justificada por muchas consideraciones debidas al buen orden parlamentario. Yo cada vez soy más fervoroso amante de este sistema; mas por lo mismo, soy poco aficionado, cada vez menos, á los debates muy extensos, y sobre todo á los debates muy complicados, porque creo que estos perjudican, no sólo á la eficacia de cuanto aquí hagamos, sino á la utilidad general de nuestro empeño; ya se considere el Parlamento como la primera tribuna de nuestra Patria, ya como un medio positivo y directo de coadyuvar á la gobernación del Estado. Así es que nosotros entendíamos que podían y debían discutirse todas las cuestiones aquí planteadas, y que requerían una atención singular por parte de todos y cada uno de los Sres. Diputados, pero con cierto plan, en horas distintas, de modo gradual y sucesivo, para que el país, necesitado, hoy como nunca, de datos, explicaciones y orientación, pudiese formar juicio y arreglar á éste, sus disposiciones, sus sacrificios, sus deseos y sus esperanzas.

En este sentido, á mí me había parecido muy bien el debate político, cuyo fin principal consistía, más que en dis-

discutir grandes cuestiones, en fijar posiciones, prescindiendo de las opiniones particulares, que en el orden de la política práctica significan poco. Creía también que era oportuno el actual debate con motivo del accidente de Cavite; pero creía que estaba detrás esperando turno, con carácter de urgencia y requiriendo una atención especialísima, el gravísimo problema del *bill* de indemnidad (1), con cuya ocasión habría de discutirse largamente todo lo que se relaciona con el cambio total de nuestro sistema ultramarino y con la implantación del nuevo régimen autonómico.

Por este motivo hemos permanecido aquí tranquilos y silenciosos, y yo he resistido, á pie firme y sin pestañear, el ataque incesante, el fuego graneado de críticas y censuras que se han dirigido, no ya á la política del Gobierno (en la que claro es que yo no tengo responsabilidad alguna), sino al alcance y significación de la política de la autonomía colonial, y sobre todo contra la virtud y eficacia de este sistema.—Y hubiera seguido silencioso, creyendo que aún no era llegado el momento de discutir, sin la cruel insistencia con que varios señores Diputados han formulado aquellas críticas, á tal punto, que pudiera alguien sospechar que nuestro silencio significaba encogimiento, temor, olvido, desdén ó cualquier otro sentimiento que no podemos tener los que nos reconocemos obligados aquí á mantener la integridad de nuestro carácter y á afirmar la eficacia de nuestras doctrinas, ahora demostrada en términos y condiciones excepcionales.

(1) El Gobierno lo solicitó, apenas reunidas las Cortes, con relación á los decretos de Noviembre de 1897, que establecieron, sin el concurso de aquéllas, el régimen autonomista en Cuba y Puerto Rico.

Porque sépase bien y de una vez para todas, que aquí estamos para discutir todos y cada uno de esos extremos, en cumplimiento de nuestros elementales deberes y satisfacción de nuestros constantes deseos.

Por todo ello, señores, tengo ahora que hacer una rectificación, que ha de revestir el carácter de una solemne protesta.—Yo afirmo ante todo, que la materia á que me refiero es de primera importancia y merecerá, en todo caso, la intervención activa de este grupo autonomista, pero que también pensamos que es preciso discutirla seria y detenidamente, así como que el momento propio es aquel en que se discuta el *bill* de indemnidad. —Porque es necesario ver, en primer término, lo que la doctrina de la autonomía es en sí; de qué suerte los decretos de Noviembre último responden á la propaganda y á las ofertas hechas antes por el partido liberal, y cómo y por qué ese Gobierno y ese partido, y con él todos los Gobiernos y todos los partidos monárquicos, han hecho una rectificación completa de su antiguo procedimiento y de su antigua doctrina en el orden de la política colonial. Y porque es necesario ver también cómo estos procedimientos nuevos y estas últimas reformas se han elaborado dentro de condiciones especialísimas, y cómo no han surgido tan de repente como algunos creen, pues que tienen antecedentes precisos y concretos en el orden del tiempo, tales como los decretos del señor Cánovas del Castillo en 1896, y la misma ley del señor Abarzuza.

Todo esto hay que tenerlo en cuenta, como hay que examinar al mismo tiempo las críticas formuladas por las oposiciones, y los diversos criterios mantenidos por los diferentes grupos de la Cámara en el largo transcurso de la discusión

del problema colonial; las dificultades puestas y las facilidades dadas para que la obra de hoy produzca efecto; la relación de esta con el extranjero y señaladamente con los Estados Unidos de América; las disposiciones del Gobierno (á quien únicamente compete, tanto por ser esta su misión como por el hecho de no figurar en ese Ministerio, ni en sus dependencias peninsulares, ningún viejo autonomista) respecto de estos negocios y por lo que hace al planteamiento y desarrollo de los decretos en las Antillas; y en fin, otros muchos importantísimos detalles en que se evidencian, de modo peregrino, el valor y la fuerza y el alcance de la difícil empresa.

Cuando todo eso se discuta, cuando esto se examine, entonces veremos la posición que cada cual tiene; veremos de qué suerte hemos marchado nosotros los autonomistas, posponiendo intereses personales y de escuela á la realización de este empeño; cuáles son las responsabilidades de este Gobierno; cuáles las que corresponden á los Gobiernos anteriores; cuáles las que realmente nos incumben á los autonomistas de abolengo. Y podremos distinguir por completo los compromisos de cada cual, los ofrecimientos de todos y cada uno y los deberes y las posiciones que respectivamente corresponden ahora á los hombres públicos que han planteado esta cuestión ó intervenido en ella.

Pero aún hay más, y es que este debate no puede anticiparse porque faltan dos elementos, á mi juicio, insustituibles. Yo esperaba que el Sr. Ministro de Ultramar hubiera traído aquí, y quizás lo traiga, algún resumen, algún conjunto de datos oficiales indiscutibles, respecto al estado presente de la isla de Cuba. Porque todo lo que aquí se diga

por impresiones particulares, sin duda muy respetables, no basta; es necesario buscar una síntesis en la cual se pueda fundar un juicio comparativo.

Y al mismo tiempo yo entiendo que este problema colonial, desde el primer momento, desde el primer día, es un problema donde entran como elementos, no sólo el dato colonial, sino también el dato internacional; á tal punto, que así como yo he creído siempre que hace dos años era imposible resolver la difícil cuestión que se nos ofrecía, sólo por el procedimiento de las armas, siendo necesario que le acompañase el procedimiento que se llamaba político, así también entiendo que, hoy por hoy, este es un problema que no tiene solución sólo por el heroico empeño material en que estamos comprometidos, sino que hay que acudir también al procedimiento diplomático, al cual doy una importancia decisiva, justificada por la que ha tenido en problemas análogos en estos últimos tiempos de la historia contemporánea.

Mientras no vengan estos datos que yo deseo, y cuya ausencia lamento; mientras no se presente el *Libro Rojo*, retrasado por las circunstancias que ha expuesto el señor ministro de Estado en pasadas sesiones, entiendo yo que el debate siempre ha de tropezar con grandes dificultades. Tan cierto es esto, que yo no he escuchado á ninguno de los señores que han terciado hasta ahora en la discusión de estos asuntos, aquellas observaciones y crítica que, á mi juicio, tienen que estar basadas en el modo y manera de haber llevado el Gobierno la gestión diplomática, tanto como garantía de su entrada en la guerra, de todo punto imponente (digan lo que quieran la vulgaridad, la ignorancia y la pandería) en que ya estamos comprometidos, cuanto como

medio y recurso definitivo para salir bien y decorosamente de este conflicto, que al parecer arrostramos *solos* (contra lo que es práctica en el mundo internacional y aconsejaban nuestras particulares circunstancias), y que en definitiva ha de resolverse como se han resuelto todas las crisis análogas, para que una *paz* no se reduzca á una *tregua*, incompatible con la tranquilidad y el progreso del mundo.

Frente á las afirmaciones rotundas que aquí se han hecho, sin acompañar pruebas y demostraciones de ningún género, quizá sea conveniente precisar algo más, adelantando por mi parte alguna otra afirmación no menos rotunda que podrá ser motivo de debate en el momento y del modo que estimen adecuados nuestros adversarios.

Quiero y debo insistir, señores, en ciertos particulares, invocando toda vuestra benevolencia, porque los errores que á cada paso escucho, y la arrogancia con que (aun cuando parezca imposible) todavía se presentan algunos de nuestros adversarios, me hacen creer que el público aún no se da cuenta de los términos propios del problema colonial y mucho menos del gravísimo y trascendental compromiso presente, cuyo desarrollo puede ser de una importancia excepcional para España y para el mundo.

Pero además no puedo menos de preocuparme de fijar bien mi posición, mi actitud, mis compromisos, tanto porque la hora es crítica, cuanto porque, en vista de lo que ahora se dice ó se supone, á pesar de la propaganda que en estos últimos tiempos hemos hecho los autonomistas, y cuando se trata de hechos próximos, verdaderamente de ayer, que, dentro de poco, se nos atribuyan aspiraciones, ofrecimientos, recomendaciones, actitudes, tesis,

compromisos, ideas y conducta perfectamente opuestos á todo lo que pensamos, queremos y hacemos en estos difíciles momentos. Por lo menos considero como punto de honor y cargo de conciencia, que las gentes sepan, que nuestros correligionarios y nuestros compatriotas de la Península y de Ultramar no ignoren, que la Historia, en fin, consigne, que á los diputados autonomistas de 1898 no se han ocultado un minuto los términos del problema colonial del momento y que no han convenido en confusión ni excusa de ninguna especie. Por tanto, no trato ahora de convencer á nadie. Pretendo sólo que se sepa bien lo que creemos y lo que estamos dispuestos á realizar. No hay en ello inmodestia de ningún género. Sólo conciencia de nuestros deberes y sentimiento de nuestra responsabilidad.

En primer término, tengo que oponer la negativa más absoluta á la afirmación que aquí se ha hecho, respecto de que la doctrina autonómica es incompatible con el principio de la soberanía nacional. Con esto último se niega lo que el concepto de la soberanía es y se desconoce que el fundamento del poder soberano es el no existir por cima de este ningún otro poder que resuelva, ni en apelación ni por propia iniciativa, las cuestiones diversas que se planteen. En el sistema de la autonomía colonial, el supuesto siempre absolutamente indispensable es afirmar que, aparte de toda franquicia particular y por cima de todos los poderes locales, está la soberanía de la Nación, con el doble derecho, en primer lugar, de la iniciativa, y en segundo, de la represión; máxime en un sistema como es el que aquí ahora se ha aceptado y que constituye un adelanto positivo en el derecho colonial contemporáneo iniciado por Inglaterra. Por su

virtud las colonias tienen una representación en el Parlamento nacional, representación que es necesario garantizar de un modo que sea eficaz y que no perturbe la marcha de la Metrópoli. De esta suerte se fortifica excepcionalmente todo lo que constituye la unidad de la Patria, muy superior al concepto de la *integridad* del territorio.

Yo me he asombrado del modo y manera de plantear el problema de la autonomía en el Parlamento y en alguna de nuestras academias.—Prescindiendo del lugar donde aquel régimen más espléndidamente vive y recordando sólo la célebre teoría de la emancipación colonial, que tanta popularidad alcanzó á fines del siglo pasado y principios de éste, se ha olvidado de qué manera se planteó la reforma autonomista y con qué sentido y alcance fué recomendada, por los publicistas y los gobernantes británicos, el cambio del sistema dominante en las colonias inglesas hasta la insurrección y la independencia en las trece colonias que constituyeron, en 1776, el núcleo de la República de los Estados Unidos de América. Porque el viejo sistema era el de las corruptelas oficinescas y el monopolio de los fabricantes y los comerciantes de la Metrópoli; el de la petulancia y las estrecheces de la burocracia; el de la sospecha, las trabas y las prevenciones contra los colonos; el de la arrogancia de los funcionarios metropolíticos y del supuesto de la inferioridad virtual y eterna de los colonos: todo lo que se sostiene, nunca sin dificultades, hasta que las colonias, ya crecidas, se dan cuenta de que no existe su inferioridad y de que tienen medios para resistir moral ó materialmente los efectos prácticos de ese supuesto. Entonces aparecen sucesivamente los dos períodos de la protesta pacífica y de la pro-

nios negocios: que crezcan en número y
da lo que sucediere, nosotros, ciudada-
nperio, tendremos el consuelo de decir
uido á la felicidad del mundo. »

que es bien sabido: que el resultado de
ha sido matar el separatismo en las colo-
sta última y actual experiencia política
ión de lo que en esta Cámara hemos
recos los autonomistas, desafiando la me-
e nuestros adversarios; y es que allí don-
olonial se ha proclamado, allí, sin excep-
ido la bandera de la Metrópoli y que to-
iones coloniales conocidas hasta el día,
amente, se han producido en las colonias
imilación ó cualquiera de los sistemas
de la Autonomía.

á la otra afirmación que he hecho relativa
a acentuación del movimiento de apro-
y aun económica de las colonias inglesas
erno responsable, en el grado superior au-
ora conocido) á la Metrópoli británica,
las conferencias celebradas en Junio y
Mr. Chamberlain, ministro de las Colo-
, con los Presidentes de los Consejos de
olonias de Gobierno responsable, vanidos
tivo del centenario de la Reina Victoria y
Chamberlain dirigió, á modo de resumen,
le 31 de Julio llamado á figurar en el
cial británico, al lado del famoso Informe
De otra parte están, respondiendo á análo-

go fin, los programas y la campaña de la gran Asociación de reforma colonial que lleva por título la Liga de la Federación imperial, á cuyo frente, á partir de 1884, han figurado políticos de la altura de Mr. Forster, lord Stanhope y lord Rossebery, que ha publicado muchos é importantes libros, como los de Mr. Parkin y Mr. Klinn, en cuyo sentido están los renombrados trabajos del parlamentario Mr. Dilkes y del gran profesor de Cambridge, Mr. Seeley, y que ahora, en fórmulas precisas, mantiene la necesidad de que la Metrópoli inglesa renuncie una parte de los derechos conocidos con el nombre de derechos imperiales, y las colonias prescindan de ciertas franquicias locales, para constituir un gran Parlamento de todo el Imperio británico, en el cual se hallen representados, en forma debida, todas las comarcas y todos los pueblos de ambos mundos, donde ondee la bandera inglesa.

Para nadie es un misterio que con esta tendencia simpatiza el actual Ministro Mr. Chamberlain. Sin discutir por el momento las facilidades ó las dificultades con que tal pensamiento lucha y ha de luchar para traducirse en resoluciones prácticas, séame lícito decir aquí, otra vez, que para esa solución pocos países estaban preparados como España, y que esa idea ha entrado por no poco en los programas y en las campañas parlamentarias y propagandistas de los autonomistas españoles de 1890 á esta parte.

Otro punto sobre el cual se ha dicho aquí bastante, es el relativo al supuesto fracaso del régimen autonómico, y yo también tengo que llamar la atención de los Sres. Diputados sobre este particular. No hay que confundir dos extremos: de un lado, el modo y manera con que los partidos gobernantes actuales, y el partido liberal particularmente,

ban aceptado y sostenido la Autonomía colonial; y de otro, el concepto, el modo, la manera con que los autonomistas de abolengo, los que representamos aquí la doctrina autonomista, hemos defendido durante veinticinco años el régimen autonómico.

Por las evoluciones de los partidos, que yo no censuro, y porque los problemas de cada momento imponen soluciones súbitas é inesperadas, yo me explico bien que el Gobierno liberal haya reconocido y proclamado, y lo hayan reconocido y proclamado muchos que antes eran enemigos de la Autonomía, su necesidad inmediata, ante todo y sobre todo, como medio de pacificación. Pero aun cuando la Autonomía colonial hubiera fracasado como medio de pacificación, cosa que yo niego; aun cuando esto fuera, y fuese igualmente indiscutible que el nuevo régimen se hubiera establecido en ambas Antillas y proclamado en la Península bajo nuestra dirección y con la plenitud de nuestros medios y nuestra responsabilidad, para nosotros, los viejos autonomistas, los que representamos la bandera autonomista, ¿por dónde y cuándo podía ser este argumento contra la doctrina que nosotros hemos sostenido?

Nosotros hemos afirmado la doctrina autonomista de tres modos. Primero, por su valor sustantivo, como solución de gobierno, como medio de resolver todos y cada uno de los problemas coloniales en relación con los peninsulares, en condiciones regulares, ordinarias y bien definidas. Luego, hemos afirmado que la reforma de la Autonomía colonial, implicaba una gran política internacional, que creíamos inexcusable, tanto para que esta pobre España se levantara y pudiese adquirir personalidad en el concierto

¿Es posible creer en estos momentos, en que el consorcio de todos los intereses del mundo hace imposible vivir por su propia y exclusiva cuenta, lo mismo al individuo que á las naciones, es razonable que un país, siquiera esté en el extremo Occidente, tenga derecho y medios de afirmar que él solo es basta para su progreso y su defensa, y que su soberanía llega al extremo de hacer dentro de sus fronteras todo cuanto esté en su deseo ó imponga su capricho? ¿Es posible que esta tierra, fecundada y sostenida por el concurso del capital extranjero, y singularmente, de la cultura de franceses y de ingleses, que tanto nos han enseñado; es posible que quede fuera del trato de los hombres políticos, rectificando aquella tradición brillante de 1830 y 1840, en que nuestros hombres públicos trataban con los más eminentes del extranjero, conocían sus costumbres y sus libros; es decir, todo lo contrario de lo que sucede en estos momentos en que creemos que solo con nuestra leyenda y con nuestros deseos tenemos suficiente para salir de todos los conflictos?

¡Señores! ¿Por dónde, cuando tenemos al lado el problema de Portugal, absolutamente inexcusable, si España ha de ser algo dentro de la tendencia novísima, consagrada por la Unidad de Italia, la Unidad de Alemania, la resurrección de Grecia, la reconstrucción de los Estados Danubianos (es decir, conforme á la corriente moderna que produce y sostiene las grandes nacionalidades y hace imposibles las naciones pequeñas); cuando más allá nos provoca el problema de Marruecos, donde se viene recogiendo y determinando la influencia de casi todos los grandes directores de la civilización contemporánea, para completar la obra quizá más atrevida y transcendental de este siglo (la

guerras á dos mil ó cuatro mil leguas de distancia, en tan vastas comarcas como son nuestras Filipinas y nuestras Antillas... ¿Qué pueblo ha hecho esto nunca? ¿Cuál?

Porque para pelear en Méjico en 1863, ni Francia ni Inglaterra, apesar de sus enormes medios, se decidieron á emprender la campaña cada una por su cuenta, y la empresa de Francia, ya retirados los españoles y los franceses que se resistieron á levantar el trono de Maximiliano, apenas puede estimarse más que como un expediente para salir, en brevísimo tiempo, con relativo decoro, del compromiso contraído por Napoleón III, en un momento de imprevisión, cuyas fatales consecuencias han sido ya reconocidas por amigos y adversarios. Y así y todo, no puede prescindirse del doble hecho de que el enemigo del Imperio francés era, en 1863, la débil República mejicana, sin hacienda, ni medios de combatir y desgarrada por incesante guerra civil, y que la retirada de los franceses se produjo á poco de la protesta del Presidente norte-americano Johnson, que ya libre de las dificultades de la guerra separatista, pudo invocar enérgicamente contra los invasores de Méjico, la doctrina de Monroe.

Pero ahora, señores, en este instante, hace un año apenas, ¿no hemos visto el resonante conflicto de Inglaterra con los Estados Unidos, el conflicto anglo-venezolano? ¿Se puede dar provocación más osada que la del Gabinete de Washington? Este llegó á afirmar la doctrina Monroe en su tercero ó cuarto desarrollo, en su manera más provocadora y brutal, con una energía y una desenvoltura que no se ha afirmado ciertamente en las notas de Mr. Olney, y después en las del Ministro actual de Negocios extranjeros, Mr. Day, con

relación á España. Y sin embargo, como Inglaterra se encontraba en aquella que llamaba Salisbury grande y espléndida soledad, estimó lo más práctico firmar el tratado de Washington de 1897, en el cual ha sacrificado su amor propio y ha reconocido que no podía ni debía luchar. — ¿Por qué? Porque comprendió que no podía luchar sola, á tan grande distancia, en la vecindad misma de los Estados Unidos, y que en todo caso, los posibles resultados favorables para ella de esa guerra serían muy inferiores á los perjuicios de su comercio, de su industria, de su misma vida política, muy interesados en la prosperidad norteamericana.

Oito esas dos grandes naciones con relación á América, por lo parecido de los casos con el nuestro, si bien con la salvedad de que, tanto Inglaterra como Francia, carecían totalmente de derecho en Venezuela y en Méjico. Pero yo podía muy bien aumentar los ejemplos, aun con relación á las guerras europeas; porque es bien sabido, que una de las más serias y constantes preocupaciones de la Gran Bretaña, ante la posibilidad de una lucha internacional, ha sido y es contar con un aliado en el viejo continente. Ese aliado ha sido unas veces Portugal y otras Prusia. Y no menos público es que en las grandes guerras provocadas por la cuestión de Oriente, fuera de una excepción, y esto por muy poco tiempo, ninguna Potencia Occidental se ha determinado á entrar sola en campaña.

Pues con todo eso, España aparece hoy comprometida en tal empresa, incomparablemente superior á todas las conocidas de doscientos años á esta fecha, tanto por la calidad y el poder del adversario (que vive en un territorio tan grande

como toda Europa), como por la lejanía del teatro de la guerra, como, en fin, por el quebranto que necesariamente ha de haber producido en nuestro país la duración y crudeza de la insurrección cubana, á la cual han venido á dar fuerza el Gobierno y los soldados de los Estados Unidos.—No pago tributo á sentimiento alguno exclusivo ni comparto jactancia de ningún género (no pequé nunca por este lado), al repetir que lo que España, pobre y desangrada, hace ahora, es punto menos que homérico.

Mas por lo mismo necesito, mejor dicho *necesitamos* saber todos, bien, pronto y cumplidamente cómo esto ha pasado. Por eso, yo espero con viva ansiedad los documentos que ha de presentar el señor ministro de Estado; porque yo deseo saber de qué suerte, modo y manera se ha ido á la guerra, y en qué condiciones. Yo creo que si la guerra pudo evitarse, no debimos ir á ella. Asi como, si nos fué absolutamente impuesta, aunque esta no fuera la tierra de los patriotas de Gercna y de Cádiz, de los Almogabares del siglo XIV y de los conquistadores de América, siempre el honor nos forzaría á pelear como buenos por nuestro derecho y por el interés moral del mundo.

A mí no se me oculta un solo instante que esta guerra viene preparada por modo y por artes que no puedo exponer en estos momentos, porque molestaría demasiado vuestra atención; pero por lo mismo que á la guerra se ha ido, es necesario saber concretamente cómo se ha procurado sortearla. y, en todo caso, ya que la guerra existe, en qué condiciones estamos y qué porvenir se nos ofrece.

Pero después de todo esto, señores diputados, hay todavía un punto importantísimo, á saber: que aun cuando la

doctrina por nosotros sustentada se hubiera practicado íntegramente en las condiciones en que la hemos predicado y sostenido, todo lo que ha pasado, no niega en poco ni en mucho la virtualidad de nuestra doctrina. Pues qué, el fracaso de 1823 con la entrada de los 100.000 hijos de San Luis en España y la destrucción del régimen constitucional, hecha por el extranjero, ¿negó virtud al régimen constitucional?

Yo esperé y aún espero oír una contestación explícita, concreta, razonada, con pruebas, no vaga, de meras frases, á una afirmación importantísima que ha hecho aquí el Sr. Moret; afirmación cuya exactitud me parece absolutamente indiscutible.—El Sr. Moret ha asegurado que el supuesto fracaso de la Autonomía colonial (fracaso que yo niego en redondo), habría que atribuirlo, en último extremo, á un hecho accidental: á que se ha precipitado á última hora la intervención armada de los Estados Unidos. Yo aseguro que esto es verdad, y espero la discusión razonada, porque frente á hechos y documentos que robustecen mi tesis no basta la simple ó mera afirmación que se haga en contra. El señor Moret ha traído sus datos, y yo, que tengo el deber, y le he cumplido, de estudiar con atención estas cuestiones y de seguir su desarrollo, no sólo en la Península y en Europa, sino en Washington y en los Gobiernos extranjeros; yo, que puedo afirmar que en esta materia estoy tan enterado como el que más, afirmo que la acción coercitiva de los Estados Unidos y su política de intervención, se precipitó y determinó en el punto y hora en que tuvieron el Gobierno y los políticos norteamericanos la conciencia de que con la autonomía venía la paz.

jader de los Estados Unidos en Madrid, afirma que el presidente de la Junta separatista cubana había publicado una declaración negando que la Autonomía ofrecida por el Gobierno español fuese la verdadera. La protesta de la Junta Central del partido autonomista de Cuba, única competente para hablar sobre aquella materia, deshizo aquella declaración. Luego vinieron otros manejos, para comprometer el éxito de la empresa autonomista en sus primeros tanteos. Esos manejos, cuyos autores yo no conozco, pero á los cuales puedo y debo aplicar el criterio del *qui prodest*, produjeron inmediatamente el motín de la Habana en los primeros días de Enero; motín que según me han escrito personas de mucha representación y aun autoridades de aquella ciudad, fué preparado para los últimos días del mes de Diciembre.

No es llegada la hora de explicar todos los terribles secretos de aquel deplorable suceso, en el cual la malicia de unos cuantos sirvió de estímulo á la irritación y la protesta peligrosa de muchos hombres sorprendidos en un momento por todo extremo difícil. Noticias tengo de que aquel suceso desconcertó inmediatamente una gran operación financiera que se ideaba en Europa y que, á desarrollarse en la paz, hubiera facilitado excepcionalmente el éxito de la reforma autonomista colonial. No tengo que decir nada respecto de la profunda inquietud que los sucesos del 11 de Enero causaron en la Habana y en Madrid, pero sí afirmaré que por una parte contuvieron el regreso de muchos cubanos á la grande Antilla y sirvieron de tema á todo género de declamaciones y terribles anuncios de la prensa noticiara de los Estados Unidos, la cual llegó al extremo de propalar, para que lo recogiese

como le recogió la prensa europea, que había corrido peligro de expulsión el gobernador general de Cuba, que no estaba segura la vida de los norteamericanos y de los cónsules extranjeros en la Habana y que el gobierno de Washington pensaba en la conveniencia de que algunos barcos de guerra fuesen á los puertos cubanos á las órdenes del cónsul Lee.

Ya costó trabajo disipar esta profunda alarma. El orden se restableció en la Habana; desaparecieron de la misma los promotores de aquella agitación. Pero sin ser cierto, como en algunos periódicos norteamericanos se dijo, que el gobierno de Washington se había ocupado de la eventualidad de que la repetición de aquellos sucesos hiciera posible el desembarco en Cuba de alguna tropa de los Estados Unidos para la guarda de las vidas de sus compatriotas, yo he oído asegurar que nuestro Gobierno tiene alguna noticia oficial de que por aquel entonces, y coincidiendo con la salida de algunos buques de guerra americanos para el golfo de Méjico, el cónsul Lee, cuya actitud de última hora le coloca entre nuestros más resueltos adversarios, informó por aquel entonces que la Autonomía había fracasado en Cuba.

Tan no sucedió esto, como que en seguida se dispusieron las cosas para que el nuevo régimen obtuviera una nueva y más brillante consagración. A poco de esto el Gobierno insular de Cuba dió su elocuente Manifiesto al país de 22 de Enero último, y Cuba entera se dispuso para la elección de sus representantes parlamentarios en las Cortes nacionales y para la reunión en la Habana de las primeras Cámaras autonomistas. Y este fué el segundo momento en que la

bas Cámaras, dió lugar á que fracasaran las dos mociones conjuntas de 1896 y 1897. Y de otro lado, estaba la corriente popular exaltada, impaciente, apremiando y excitando al Presidente de la República, porque veía que el término de la guerra civil y la imposibilidad de intervenir en Cuba, estaban en la consagración y en el funcionamiento de la autonomía colonial.

Así se precipitaron los sucesos en veinticinco días, señores diputados (1). ¡Qué digo veinticinco! Por lo que he oído á personas autorizadas, por lo que he leído en un periódico de Londres cuya exacta información me consta, por lo que se me ha escrito de los Estados Unidos, deduzco no solo que el cambio de actitud, de disposiciones y aun de expresión del Gobierno norte-americano fué á fines de Marzo tan acentuado como rápido, sino que una vez verificado ese cambio, aquel Gobierno se sintió acometido de una especie de fiebre para precipitar los sucesos, estrechar al Gobierno español, importunarle con sus exigencias y su destemplanza y obligarle á una positiva humillación, negándole, no ya las simpatías y la cooperación moral que para la implantación de la Autonomía en Cuba habían ofrecido los Presidentes Cleveland y Mac-Kinley en sus Mensajes de 1896 y 97, y el Ministro Olney en su ya conocida Nota de 4 de Abril de 1896, sino el plazo prudencial que requieren empeños mucho menos excepcionales y que no podían menos de dar aquellos mismos americanos que, si bien con protestas, esperaron

(1) Estas y otras afirmaciones han resultado totalmente demostradas después por el *Libro Rojo*.

Además, véase mi estudio sobre *El aspecto internacional de la cuestión colonial española*, publicado á mediados de Julio.

desde la Nota de Mr. Olney, á que se cambiara el sistema imperante en Cuba y se realizaran las reformas anunciadas por el Sr. Cánovas. Ahora se prescindía de todo eso, se prescindía de que los decretos autonomistas habían comenzado á cumplirse al mes de promulgados; se prescindía de que los Gobiernos insulares de las dos Antillas se habían establecido en Enero, ¡y se exigía que á los tres meses de hecho esto estuviera enteramente pacificada Cuba! ¿Por qué tal festinación? ¿Por qué todo esto siempre extraño y confuso?

Aquí parece que se ignoran ciertas cosas, porque nadie se ha tomado el trabajo de estudiar de cerca el asunto; pero yo creo que se puede pensar que la acción de los Estados Unidos se aceleró porque allí se sabía que dentro de muy poco iban á reunirse en Madrid los diputados de la Nación y en la Habana las Cámaras antillanas, y las Antillas iban á dar el más solemne testimonio de adhesión á la Patria. Sobre todo, es evidente que cuando se trata de reunir las Cámaras insulares, viene la guerra, y así como dos años antes Máximo Gómez, hablando de la guerra separatista, prescindiendo de incidentes y excusando choques militares, decía: «Que dure, que dure, porque de esa suerte se consumirán los recursos de España,» así ahora los separatistas recalcitrantes instan al Gobierno americano, gritando: «¡Pronto, pronto, pronto, porque si no el triunfo para España es indudable!»

Después de esto, debo hacer mi tercera afirmación.

Yo he escuchado aquí, como uno de los más fuertes ataques dirigidos al Gobierno, la afirmación de que estábamos en un instante tan decisivo y tan digno de excepcional meditación, como que habíamos renunciado en

nuestras Antillas á todos nuestros intereses, derechos y esperanzas. Y se afirmaba más: que no teníamos hoy en las Antillas más que un punto de honor. Quizá se pensaba: salvemos el honor, que, una vez salvado, de lo cual sólo nosotros somos jueces, podemos abandonarlas.

Pues yo protesto resueltamente, primero en nombre de este mismo honor; protesto por la manera, por las circunstancias, por las condiciones de correspondencia, por las desconsideraciones que ha tenido con nosotros esa República de los Estados Unidos, que en este sombrío trance pone á un lado de un modo que á mí (como amante del progreso y de la dignificación de los pueblos, como republicano y como frecuente divulgador de los adelantos políticos y sociales de Norte América) me llega al alma, hechos, datos, respetos, obligaciones de carácter moral que hacían punto menos que inverosímil lo que ahora contra España proyecta, dice y hace el Gobierno de Washington. Porque no, no es lícito olvidar que España descubrió el Nuevo Mundo y que nuestro Soto descubrió el Missisipi: no es lícito olvidar que España cooperó relativamente, más que Francia, exponiéndose á más con menos motivo y comprometiendo, como ya vió nuestro Conde de Aranda, el porvenir de sus Virreynatos americanos, á la independencia de los Estados Unidos en 1783; no es lícito prescindir de que España amistosamente contribuyó en 1819, por la cesión de la Florida, al engrandecimiento de la República naciente, y en fin, no se puede ahogar el recuerdo de que cuando en 1861, en la época más crítica de la vida norte americana, toda Europa reconoció á los Estados rebeldes del Sur, el Norte y la causa de la integridad de los Estados Unidos, encontraron

entre nosotros las más calurosas simpatías, y si bien nuestro Gobierno, forzado por el melio europeo en que vivía, tuvo que hacer ciertas declaraciones en favor de la beligerancia de los sudistas, lo hizo en términos tales é interpretó en la práctica de tal suerte su declaración de Junio de 1861, que el mismo representante en Madrid del Gobierno de Washington, por encargo especial de éste, se reconoció públicamente como obligado á la cariñosa deferencia española. No en balde el ilustre ministro del gran Lincoln, Mr. Seward, declaraba oficialmente y á cada paso que España, por sus antecedentes y por su porvenir, era una verdadera nación americana. ¡Hoy el Presidente Mac Kinley, el autor del Mensaje de la Paz de 1897, contradiciéndose, rendido y maltrecho, rompiendo la tradición de Lincoln, Grant y Cleveland, secunda la desatentada resolución del Congreso de Washington para expulsar á España de América!

Pero es que tenemos allí mucho más, representamos ya más que este interés de honor, que quizá pudiera salvarse con un duelo á primera sangre. Tenemos allí nuestro derecho, que es tan claro y tan vivo sobre aquel suelo americano, como el que ostentamos sobre esta tierra heroica de Zaragoza ó sobre la sagrada de Cádiz.

Tenemos, además, intereses. Ya sé yo que muchos de los intereses del pasado desaparecen con la autonomía colonial, porque deben desaparecer, y no hemos de comprometer nuestra suerte y nuestra vida por un reducido grupo de personas; pero otros quedan, otros saldrán, y se contarán, como han salido y se han contado en todos los pueblos donde se ha establecido el nuevo régimen.

Hay también otra cosa que á mí me preocupa grandemente, fuera aún del doble punto del honor y del derecho de España, más ó menos comprometidos en una cuestión particular. Porque sobre todo, hay que estimar que tal como se presenta hoy la cuestión hispano-americana, España lleva en ella una representación singularísima y extraordinariamente simpática al mundo.

Hasta cierto punto, se reproduce lo que sucedió en los principios del siglo, cuando fuimos atropellados, pisoteados, destruidos, vencidos, sí; pero representando un interés de primer orden en el concierto universal y en la esfera del derecho, tanto por la consagración de los principios que proclamaron las Cortes de 1812 (de una transcendencia evidente en la vida moral y política de nuestra Patria, que desde entonces, como dijeron los inmortales decañistas, fué una «nación libre é independiente, sin que pudiera ser patrimonio de ninguna familia ni persona»), como, porque la heroica protesta española contra el poderoso del tiempo, contra el que entonces representaba en Europa lo que ahora va á representar la República de Washington (¡parece mentira!), en el Nuevo Mundo ó sea el supuesto derecho de conquista, determinó inmediatamente el movimiento de resurrección de las naciones europeas y la afirmación de los principios más celebrados y efectivos del novísimo Derecho internacional.

Al decir esto, pretendo, no sólo dar realce á la cuestión que ahora nos ocupa y afirmar que ésta, por su propia naturaleza y por su obligado alcance, se halla dentro de la jurisdicción de los pueblos cultos y (cuando menos de los pueblos directores del mundo) y de la política gene-

ral de nuestros tiempos, sino que quiero señalar este punto como uno de los objetivos de la acción de nuestro Gobierno. Y lo señalo, lo mismo para contribuir al éxito de la patriótica empresa de este, que para anunciar mi propósito de exigir las responsabilidades que procedieran si el Gobierno, por error, distracción ó debilidad, prescindiese en todo ó en parte de las gestiones suficientes, relacionadas con aquella consideración y cometiera la falta de referir principalmente la solución del problema hispano-americano á la sola acción de las armas.

Siempre abonarían el llamamiento especial de la atención de los Gobiernos extranjeros algunos de los hechos que en el curso de estos dos últimos meses se han realizado en Cuba ó en sus cercanías por el Gobierno ó las escuadras de Norte América: hechos que contrarían las prácticas más corrientes del Derecho Internacional contemporáneo, consagrado particularmente (para los efectos á que aludo), por el Tratado y los Congresos de París de 1856, el Tribunal de Ginebra y el Tratado de Washington de 1871, y las conferencias de Berlín, Bruselas y Berna de fechas muy recientes. De todo esto y de algo más me propongo hablar aquí en ocasión oportuna: es decir, cuando conozca con exactitud los hechos á que me refiero y algunos otros con ellos relacionados, y entre los cuales pongo el extraño modo de haberse entablado y practicarse el bloqueo de la grande Antilla; el empleo de ciertos explosivos por los barcos americanos dispuestos al bombardeo de poblaciones abiertas y que no son plazas de armas, sin que al bombardeo preceda aviso de especie alguna: las gestiones que se hacen cerca de potencias neutrales y aun la disposición de alguna de estas

respecto de la extensión del concepto del contrabando de guerra, dentro del cual parece que se trata de poner el carbón de piedra, en daño evidente de la marina española; el apresamiento de barcos mercantes españoles antes de la solemne declaración de guerra; la amenaza de interrupción y aún destrucción de los cables telegráficos submarinos, etcétera.

Pero todavía hay más motivos para afirmar la competencia de la jurisdicción internacional en el conflicto de que tratamos. Porque público y notorio es que seis representantes de Europa pidieron al Gobierno de España una tregua en la campaña de Cuba, que nuestro Gobierno accedió á ello y que otro acto análogo, realizado al parecer por las mismas potencias europeas cerca del Gobierno de los Estados Unidos, no sé ahora con qué alcance, no ha producido el menor efecto, apareciendo de esta suerte en situación poco airosa ó los interventores ó España: desconsideración de que no se libra el Pontífice romano, que precedió á las Potencias europeas en la gestión a'udida y que al esforzarse por evitar la guerra, sin duda alguna hizo honor á su representación y á su espíritu realmente evangélico, y merece el respeto de los hombres que, cualquiera que sea su opinión religiosa, tengan en algo el interés moral del mundo.

Al menos conocedor de los asuntos y las prácticas internacionales le ocurre que no es verosímil, dentro de las leyes del derecho y del decoro, que estos hechos no sean explicados pública y satisfactoriamente, que el Gobierno de Washington permanezca indiferente y hasta jactancioso de un desdén y unas pretensiones mal cubiertas

en los párrafos finales del último Mensaje de Mr. Mac-Kinley y, en fin, que no es racional que los Gobiernos europeos, que positivamente han comprometido á España en este trance y que han sido agraviados por la soberbia indiferencia norteamericana, suspendan ahora toda acción y se dispongan á ser meros espectadores de uno de los mayores atropellos de la Edad contemporánea y de una lucha escandalosamente desigual, para que los técnicos del mundo puedan apreciar, de balde, los efectos mortíferos de los grandes inventos de guerra, cuyo empleo excusan los poderosos. No quiero decir lo que esto significaría á mi juicio.

Pero hay más. No se puede desconocer que el problema de Cuba ha sido siempre y lo es hoy singularmente, así por el modo y manera de haberlo planteado Mr. Mac-Kinley, como por los términos del *bill* votado por el Congreso norteamericano, un problema que afecta á toda la política internacional.

Porque, notadlo bien, señores diputados, no es un capricho nuestro la posesión de Cuba y de Puerto Rico.—En todo este siglo, es decir, desde que en este siglo adquieren relieve esas dos grandes representaciones de Europa en el golfo de Méjico, Cuba y Puerto Rico tienen un interés internacional.—Por eso, de 1848 á 1854, hubo negociaciones entre Inglaterra, Francia y los Estados Unidos, para garantizar la soberanía de España en las Antillas, gestiones rechazadas por los últimos en la célebre declaración firmada por el ministro norteamericano Mr. Everett, en 1852, que ha venido á ser como la nota característica de toda la política de los Estados Unidos en sus relaciones con Europa.—Luego, en 1873, cuando se produjo la primera

9

insurrección separatista de carácter grave, hubo un conato de imposición á España por las Repúblicas americanas y por iniciativa de la de Colombia, para reconocer la independencia de Cuba, que no llegó á dar resultado por la oposición de los Estados Unidos, que entonces, simpatizando con la naciente República española, pedía plazo para que ésta desarrollara su política colonial.—Y después, en 1875, cuando se trató del reconocimiento de la hegemonía, el mismo presidente Grant, reconoció que la cuestión de Cuba era una cuestión internacional, para la que no bastaba la acción de los Estados Unidos, y se dirigió á Inglaterra, á Alemania y á todas las grandes potencias de Europa, para que se ejerciera una acción colectiva, á la que éstas se opusieron.

De suerte que, por el reconocimiento explícito de todos cuantos han tomado parte en esto, la cuestión de Cuba es una cuestión internacional: internacional por la posición de Cuba, internacional por la política que se ha seguido, internacional por las relaciones de la América del Norte con la América del Sur, internacional por los principios que se han venido á consignar desde entonces por todos los tratadistas del nuevo derecho público universal.

Pero aun cuando todo esto no fuera cierto, mi opinión quedaría afirmada y demostrada por las declaraciones de los dos últimos Mensajes de Mr. Mac-Kinley y, sobre todo, por los originalísimos é intolerables términos del *bill* de 18 de Abril, que expulsa á los españoles de América. Fijarse bien en esto, señores diputados. Yo oía comentar el otro día á un estimado amigo mío, las declaraciones de Mr. Mac-Kinley para justificar la intervención, y me fijaba en que

esto se ha hecho con cierto talento, porque poniéndose aparentemente, como se pone Mac-Kinley, fuera de la doctrina de Monroe en su última fórmula, y después de la campaña realizada por la República de América del Norte contra Inglaterra y de la solución del conflicto venezolano, si los Estados Unidos hubieran afirmado que tenían derecho á intervenir en Cuba y en Puerto Rico por un interés particular, renacería otra vez la protesta de Europa, y aun esa Inglaterra, que ha tenido buen cuidado de que se olvidara el tratado de 1897, no podría menos de intervenir en la cuestión, dada la gravedad del conflicto.

La política discreta, la política hábil, era prescindir un poco de estos motivos y en cambio tomar aquellos en cuya virtud se afirma el derecho de intervención en los tiempos modernos.

Hablar de derecho, de intereses generales del mundo y darse tono como de protector y mediador desinteresado en la obra de la emancipación del mundo americano, da cierta apariencia moral é imponente. Pero hay que ir al fondo de la empresa. Es necesario negar todo eso, porque no hay pueblo alguno que, aun dentro de las últimas teorías sobre intervención, tenga derecho á determinar por sí y ante sí, cuándo está en peligro la suerte de la Humanidad. Tampoco existe el derecho de atribuirse una nación, por la conciencia de su fuerza positiva ó circunstancial, el papel de exclusivo desfacedor de agravios y de reconstructor del mundo moral fuera de su propio territorio. Ni un solo miembro de la gran ciudad universal, del concierto general de los pueblos civilizados, tiene competencia para aumentar ó disminuir el número de factores de este concierto. Ni, en

fin, es dable realizar esa obra de redención de pueblos oprimidos y la compleja empresa de traer á la vida internacional un nuevo pueblo independiente sin contar con la voluntad del protegido. Pues bien, de todo esto ha prescindido el Gobierno norteamericano: primero, en el Mensaje del presidente Mac-Kinley: después y más señaladamente, más arrogante y escandalosamente, en el *bill* de 18 de Abril del Congreso norteamericano.

La fórmula más atrevida conocida hasta el día en la Historia del Derecho internacional contemporáneo, en materia análoga á la que ahora trato, es la empleada por Rusia para invadir á Turquía en 1876, y llegar á Plewna y Chipka. Sin embargo, no fué tan brutal como la empleada en esta ocasión por el Gobierno americano.—Y no se olvide que todas las salvedades hechas entonces por Rusia respecto de su desinterés, lo mismo que salvedades análogas de los mismos rusos en 1833 y 1853, no impidieron que las demás potencias europeas intervinieran en la cuestión de Oriente, para contener al Gobierno moscovita en sus ambiciosas pretensiones de patrono y para garantizar, contando expresamente con la voluntad de los protegidos, y la simpatía del mundo, las libertades de las comarcas griegas y danubianas. A esto responden los tratados de París, de Londres y de Berlin.

Además, el Gobierno de Washington ahora ha prescindido de que para intervenir en un país por causa de la guerra civil que en este arde, con probabilidades de producir la anarquía y en condiciones parecidas á las que comenta Mr Mac-Kinley en su último Mensaje, es necesario justificar que la nación interventora no ha tenido hasta entonces participación alguna en aquella guerra; cosa que no pueden sostener

lo que es mucho más fácil hablar que estudiar. Y es muy en las cuestiones políticas más delicadas, poco enterados y los ecos del sensacionismo que tanto daño han causado ahora á cada de esto modifica mi convencimiento, que tampoco soy de los que creen que las por sí solas y que entiendo que es difícilísimo internacional se determine sin el activo é inminente del Gobierno español, requerimiento irse directamente cerca de los Gobiernos directamente sobre la opinión pública del vuelvo á llamar vuestra atención sobre el año de 18 de Abril último.

Mac-Kinley en el Mensaje de 11 de Abril o que «autorice al Presidente para adoptar aseguren el completo y definitivo términos entre el Gobierno de España y el pueblo aseguren en la Isla de Cuba la instalación de un gobierno estable, capaz de mantener el orden y cumplir con sus obligaciones internacionales, garantizar la seguridad de sus ciudadanos así como América.» También pide autorización «para las fuerzas militares y navales de los Estados Unidos necesario para dichos fines y el interés de —Y recomienda «para contribuir á conservar los habitantes hambrientos de la Isla que contribución de alimentos y socorros y se vote el Tesoro público para completar la caridad de los americanos».

número que sea necesario, para llevar á efecto estos acuerdos; y 4.º, que los Estados Unidos, por la presente, niegan que tengan ningún deseo ni intención de ejercer jurisdicción ni soberanía, ni de intervenir en el gobierno de Cuba, sino es para su pacificación y afirman su propósito de dejar el

meses de Noviembre y Diciembre últimos, á saber: que yo ha colaborado en esta obra legislativa.

Ni el Sr. Ministro de Ultramar pensó, al parecer, consultarnos respecto de la forma y la determinación precisa de sus decretos, ni á mí se me ocurrió un instante pedirle que me enseñara ni me hiciera saber las fórmulas concretas de su pensamiento. Me bastó conocer perfectamente las afirmaciones que me hizo el Sr. Presidente del Consejo de Ministros cuando tuve el honor de conferenciar con él en nombre de las juntas directivas de los partidos autonomistas de Cuba y Puerto Rico.

El Sr. Sagasta me declaró que estaba resuelto á realizar la política autonomista, con el credo del partido autonomista, con las afirmaciones fundamentales del autonomismo, y allá en las Antillas, con los hombres históricos del autonomismo.—Me pareció bien, y debo declarar, para que conste en la historia, que el Sr. Sagasta—que no es un autonomista histórico, ni ha sido partidario de esa solución hasta estos momentos, estimándola ahora sólo como un medio de gobierno,—desde aquel instante ha demostrado en la práctica de sus compromisos una lealtad y una sinceridad que merecen, sin duda alguna, nuestro aplauso y reconocimiento.

Pero de todo esto se deduce también que no podemos confundir nuestra posición ni nuestra responsabilidad con las de ese Gobierno.

Las cuatro únicas recomendaciones concretas que yo me he permitido hacer al Gobierno liberal desde el mes de Octubre último hasta el mes de Enero del año actual, han sido, en primer término, que era de todo punto inexcusable

1

2

ción de guerra en los términos acostumbrados por todas las potencias del globo. Existe también la cuestión de los corsarios, que, al parecer, y á pesar de todas las declaraciones hechas por los Estados Unidos, están corriendo los mares sin que sepamos cuál es la tendencia positiva de nuestro Gobierno, libre por la reserva que hicimos sobre las declaraciones contra el corso en 1856, ni en fin tengamos noticia de la disposición de los demás Gobiernos europeos y de las concesiones que estos pudieran hacernos á cambio de la renuncia del corso, en obsequio del comercio universal. Otra cuestión muy grave, verdaderamente internacional, es la del bloqueo de nuestra isla de Cuba, donde parece cierto que los barcos americanos no son suficientes para hacer efectivo el bloqueo, por lo cual resulta ilícita la presa de los buques neutrales que aquellos barcos están haciendo en aguas españolas. Y por último, tenemos la escandalosa conducta (indigna de los precedentes y de la historia del pueblo norteamericano) del Gobierno yankee, que hoy lanza sus escuadras á hacer bombardeos de plazas abiertas sin dar siquiera aviso.

Todas estas son cuestiones que conviene discutamos para marcar bien, no el sentido de tal ó cual fracción política, sino el de la Cámara entera, á fin de facilitar la acción del Gobierno para hacer las gestiones decorosas que en pro de nuestros derechos pueden y deben hacerse. Porque para batirnos nos bastaremos nosotros. No tenemos que acudir á nadie para cumplir el deber. Mas para robustecer nuestros derechos, como miembros del gran concierto internacional, necesitamos fijar nuestro sentido y nuestra posición, precisando hechos y determinando claramente las situacio-

Entiéndase bien que yo no creo que esas partidas deban desaparecer del presupuesto; los que aquí nos sentamos sostenemos, por el contrario, que muchas debieran estar dotadas con mayores recursos.

Tampoco tengo el propósito de combatir el capítulo sobre el que he pedido la palabra; únicamente, á propósito de este capítulo y de los servicios de los misioneros que comprenden cuatro artículos, me permito recomendar al Gobierno que venga, que rectifique un tanto el modo y la manera de presentar estas cuestiones á la Cámara. Acompaña siempre al Presupuesto general una Memoria también de carácter general, y más especialmente financiera que administrativa. En cambio los datos para demostrar de qué suerte ciertos servicios están organizados, qué resultados han producido, cuáles son las consecuencias de estos trabajos, no aparecen en parte alguna. Ahora mismo tenemos delante

Culto y servicio de la iglesia de San Francisco....	16.500	•
Servicio á cargo de los misioneros.....	408.000	•
Material de la Obrapia.....	6.000	•
Gastos diversos del Patronato.....	132.950	•
Ejercicios cerrados.....	21.407,20	•

El Capítulo con cuyo motivo se pronunció este discurso es el décimo y trata de los servicios de los Misioneros.

Comprende cuatro artículos, que son:

Colegio de Santiago y Crispiana.. ..	180.000 pesetas
Misiones de Tierra Santa.	80.000 •
Idem de Marruecos.. . . .	120.000 •
Iglesia de Argel.....	14.000 •

El Ministerio de Estado proporciona 3.000.000 de pesetas de ingreso, por obvenaciones de los Consulados que figuran en la Sección segunda, cap. 3.º, art. 3.º del Presupuesto de Ingresos.

unas partidas del presupuesto del Ministerio de Estado que se refieren á misioneros, á exploraciones geográficas y científicas, á empresas artísticas, etc. etc. ¿Diré una inconveniencia si afirmo que de todos estos particulares no hay en la Cámara cincuenta personas que tengan la menor noticia? Aun los aficionados á estas materias ¿por dónde ni cómo han de saber el resultado de los sacrificios hechos el año pasado y el alcance de los que ahora se decretan, si á las Cortes no viene más dato que la vaga indicación de las partidas del presupuesto? ¿Con qué calor, con qué eficacia, con qué conciencia se han de votar esas partidas?

Con tal motivo me permito recordar una buena práctica de los dos primeros períodos del régimen constitucional en España: de 1812 á 1814 y de 1820 á 1823. Entonces cada ministro enviaba, al principio de las legislaturas, un resumen especial de los trabajos y los compromisos de su departamento: de modo que siempre había base de estudio y de discusión para los diputados, cuya iniciativa frecuentemente no basta para plantear bien los problemas parlamentarios.

De mayor alcance es la práctica que existe en los Estados Unidos. Allí, al lado del Mensaje general presidencial ó de las observaciones especiales que hace el Presidente, unas veces al principio de la legislatura, otras veces en el curso de ella, determinadas por circunstancias particulares, vienen siempre las Memorias concretas de los Departamentos, y estas Memorias no sólo se imprimen y reparten á todos los Diputados y Senadores americanos, sino también á todos los hombres que en Europa y América tienen un poco de afición á las cuestiones de interés

general. Yo debo la cortesía de aquellos hombres políticos y de aquellos administradores, el recibir todos los años estas Memorias, y mediante los datos que me ofrecen creo tener un conocimiento bastante exacto de la manera como está organizada y desarrollada la vida interior de los Estados Unidos. Hay algunos trabajos de mérito excepcional, como, por ejemplo, los de la Comisaría de la Educación, que forman dos ó tres volúmenes al año, y que se reparten á los hombres políticos de toda Europa, mientras no advierten al Comisario americano, que no los quieren recibir. En estos libros se estudia el desarrollo de la instrucción pública, no sólo de los Estados Unidos, sino también de casi todos los pueblos del mundo; de tal suerte, que bien pudiera decirse que, después del trabajo brillantísimo de un español distinguido, el señor Cossío, director de nuestro Museo Pedagógico (que ha hecho un estudio muy detenido sobre la primera enseñanza en España), el más completo que se conoce sobre la instrucción pública elemental de nuestro país, es precisamente el detallado en uno de los últimos volúmenes de la Comisaría de los Estados Unidos. Y lo mismo digo de la Comisaría del Trabajo y del Departamento de los Indios. Pues en Inglaterra sucede, poco más ó menos, lo mismo, aunque con alguna mayor limitación y cortapisa.

Puesto que es necesario levantar aquí el espíritu y consagrarnos á obras de verdadera sustancia moral y prescindir un tanto de las pequeñas preocupaciones de la política palpitante, sería conveniente que en lo sucesivo los Ministerios, sobre todo el de Estado, acompañasen sus presupuestos con Memorias, en las cuales expusieran concreta y especialmente los trabajos que esos Ministerios hubieran he-

algunas cuestiones y empresas y Portugal, son por todo este país. Y en este camino no sería del Tesoro y de los particulares exploraciones y trabajos de diversa, que hoy por hoy apenas si nadie sabe que se intenten, y el resultado que dan, viniendo á ser los medios, como ha sucedido en el tenimiento punto menos que en

Y no admito que esto no intente tal argumento yo tengo el brillo de las Sociedades geográficas de Mauritania de Granada. No digamos las últimas sesiones del Congreso de 1892 se acogió la idea ibérica de trato intelectual y vocación popular. Pero ya tengo estas obras no basta la idea; se la perseverancia.

El Ministerio de Estado y el mucho para esta tarea. Desde medios de propaganda que constituir un instituto: luego, patrocinando lo pretender sustituir la acción of

Para esto quizá serviría de creación de los estudios de la carrera de la carrera de empleados de en 1870: la reacción lo deshizo. constituir en Madrid un Institu

se ve y palpa, que la falta de una política internacional en España cuesta mucho dinero, mucha sangre y muchas angustias. He dicho (1).

(1) Las últimas publicaciones del Ministerio de Estado, con sus sellos, prueban que España tiene gravísimos problemas internacionales que atender.

Estas publicaciones son las siguientes:

- 1881. Sucesos de Saída y de Sfax. —Desórdenes en Roma.
 - 1882. Cuestión de Saída. —Indemnizaciones. —Canal de Panamá, de Suez. —Negociaciones para el Tratado de Comercio con la Gran Bretaña. —Jurisdicción marítima y terrestre de Gibraltar. —Reclamaciones y ratificaciones del Tratado de Paz con el Uruguay de 1878. —Negociaciones para el restablecimiento de la Paz con Chile. —Marruecos. —Cesión de Santa Cruz de Mar pequeña.
 - 1883. Establecimiento de un *modus vivendi* con Inglaterra.
 - 1885. Joló y Borneo.
 - 1886. Interpretación del Convenio con los Estados Unidos de 10 de Febrero de 1884.
 - 1887. Carolinas y Palaos. —Mediación de España entre Italia y Colombia. —Cámaras de Comercio. —Prórroga del Convenio de los Estados Unidos de 1886 hasta 1887.
 - 1888. Istmo de Suez. —Adquisición de un terreno en el Mar Rojo. —Marruecos.
 - 1889. Marruecos. —Barcas apresadas. —Asesinato de un español.
 - 1891. Ataques á la plaza de Melilla. —Derecho de visita. —Arbitraje de Colombia y Venezuela. —Denuncia de Tratados de Comercio. —Circulación del oro español en Francia. —Vinos envejecidos. —Guerras en las Repúblicas de Centro América. —Mediación del Cuerpo diplomático. —Sucesos de Buenos Aires en 1890.
 - 1892. Negociaciones seguidas por el Gobierno español para la prórroga del Tratado de comercio con Francia que espiró en 31 de Enero.
 - 1893. Negociaciones comerciales con Francia.
 - 1894. Sucesos de Melilla.
 - 1895. Negociaciones generales con los Estados Unidos desde 10 de Abril de 1894, hasta la declaración de guerra.
-

LA POLÍTICA EXTERIOR

DEL GOBIERNO LIBERAL DE ESPAÑA (1)

SEÑORES DIPUTADOS:

Tengo el propósito de hacer dos preguntas, una al señor Ministro de Gracia y Justicia, y otra al Sr. Presidente del Consejo de Ministros. Suplico al Sr. Presidente del Consejo se fije un poco en lo que voy á decir y lo transmita con especial recomendación al Sr. Ministro de Gracia y Justicia, á quien tengo hace tiempo anunciada una pregunta que reviste cierta gravedad. Hablo de la actitud y disposiciones que yo creo debe tener el Gobierno, y señaladamente el

(1) Este discurso fué pronunciado en el Congreso de los diputados el 21 de Junio de 1898. Le contestó el Sr. Sagasta (Presidente del Consejo) ofreciendo que el Gobierno se ocuparía de los graves hechos que denunció respecto de la prisión preventiva, sobre cuyo particular he hablado diferentes veces en el Congreso y fuera de él, desde 1890 á esta parte. Puede verse sobre el particular mi libro *Cuestiones palpitantes*.

Pero respecto de la interpelación sobre política internacional, el Sr. Sagasta se excusó alegando, primero, que era urgente discutir las actas de varios diputados, y urgente también la suspensión de Sesiones del Congreso por causa de lo caluroso de la estación. Luego el Sr. Pre-

res medios, no trae ese proyecto en la próxima legislatura, yo me reconoceré en la obligación de plantear aquí el problema por medio de una proposición de ley.

Y voy ahora á la cuestión que se relaciona más especialmente con el señor Presidente del Consejo de Ministros.

Cuando se disintió el Mensaje de la Corona, hice una alusión á la necesidad de discutir el problema internacional; á poco vino la discusión del presupuesto del Ministerio de Estado, ratifiqué mi propósito, y el Ministro de Estado, señor Gullón, tuvo la bondad de aceptar en principio la interpelación que yo le anuncié, no queriendo entonces discutir el problema internacional por no involucrar las cuestiones. Después he mantenido mi circunspección y mi calma por dos motivos. En primer término, porque esperaba la publicación del *Libro Rojo*, y en segundo lugar, porque no quería entorpecer la discusión del presupuesto, ya por la urgencia de éste, ya porque la naturaleza del problema que yo quería plantear era de tal alcance, que exigía un debate un tanto especial. El presupuesto se ha discutido y aprobado; pronto se van á suspender las sesiones, y en este concepto me creo capacitado para rogar al Sr. Presidente del Consejo de Ministros que me admita inmediatamente, para mañana ó pasado, según S. S. quiera, una interpelación sobre este particular.

Me dirijo al Sr. Presidente del Consejo, teniendo en cuenta que en estos dos ó tres meses ha habido dos Ministros de Estado; pero desde luego yo me daré por perfectamente honrado con que el Sr. Presidente del Consejo ó el Sr. Duque de Almodóvar, cualquiera de los dos, me distingan contestando á las observaciones que yo voy á tener el honor de exponer.

ción, y el fervor que acreditan nuestros hermanos de Ultramar que se juntan á nuestro ejército para pelear por nuestra bandera; pero no se me oculta, después de todo, que hoy el secreto del compromiso que estamos manteniendo allende los mares, está, ante todo y sobre todo, en las relaciones internacionales. Ahí, á mi juicio, está la resolución definitiva del problema que hoy nos preocupa y que nos preocupará extraordinariamente dentro de dos meses.

De otro lado, yo sé bien que al Gobierno, por la Constitución, le corresponde la dirección de los negocios diplomáticos; al Gobierno, al Poder ejecutivo, le corresponde, por modo exclusivo, el hacer la paz y el examinar y resolver estas cuestiones que pueden afectar de una manera profunda al honor y á la integridad de la Patria.

Dentro de pocos días se cerrarán las Cortes; el Gobierno queda investido por la Constitución y por el hecho de suspenderse las sesiones, con plenitud de facultades; y me parece de todo punto necesario, en primer término, que aquí se fijen bien las posiciones y se determinen bien las responsabilidades de cada cual, y, en segundo lugar, que el Gobierno tenga en cuenta, para hacer después lo que guste, afirmando la responsabilidad de su conducta, las observaciones, los requerimientos, las excitaciones y hasta las notas que con todos los respetos y salvedades podamos presentar los Diputados y grupos políticos que tenemos aquí una representación de cierto alcance.

En tal sentido, yo suplico al Sr. Presidente del Consejo de Ministros acepte mi ruego, y se digne manifestar desde luego, si mañana ó pasado podré yo tener el honor de explicar la interpelación que acabo de anunciar.

hablan con frecuencia. Yo soy enemigo resuelto de los debates resonantes y sensacionales; mas, por lo mismo, esta actitud mía tranquila me da un derecho indiscutible, cuando creo que el asunto es de suma importancia, á plantearlo resueltamente. Y yo creo que sería una verdadera debilidad el que se suspendiesen las sesiones de esta Cámara en medio de este conflicto extraordinario, que es la preocupación de Europa y que atrae la mirada de todo el mundo sobre nosotros, sin que se supiese absolutamente nada de lo que piensan los partidos y los hombres políticos sobre los problemas internacionales de España. Sería una verdadera vergüenza, repito, y no se ha dado un solo caso, fuera de nuestro país, de que los diputados, en circunstancias análogas, se retiren á sus hogares permaneciendo luego en una absoluta indiferencia y dejando por completo al Gobierno la absoluta responsabilidad de sus actos, sin que este cuente, ni por sospecha, y por adelantado, con los votos ó los consejos del Parlamento reducido á algo menos que figura decorativa. Yo, por mi parte, al menos en este punto, repito que lo tendría por una verdadera debilidad, á que no estoy dispuesto á prestarme.

En su consecuencia, yo siento mucho mantener este punto de vista, pero lo tengo que afirmar en vista de que se nos tacha, aquí dentro y fuera de aquí, de estar devorados por la anemia; de que no sabemos lo que pasa, de que nos distraemos todos los días formulando opiniones en corrillos y esperando no sé qué del acaso. Pues frente á esta sospecha de que nos corroe la anemia, debemos poner la resolución clara y positiva de afrontar las responsabilidades, defen-

NUESTRAS COLONIAS DE AFRICA ⁽¹⁾

SEÑORES DIPUTADOS:

El grupo autonomista que se sienta en estos bancos, y la Minoría republicana que está en esos otros, no creen que puede terminar el debate sobre el Presupuesto general de gastos del Estado, y menos pasar la Sección décima, que ahora se va á discutir, sin una respetuosa protesta de nuestra parte, y sin que se haga una excitación calurosa al Ministerio de Ultramar para que, en lo sucesivo, rectifique el modo y manera de presentar á la consideración de las Cortes los gastos relativos á la Colonia de Fernando Póo, y las demás que constituyen nuestro grupo colonial del golfo de Guinea. No es esta la vez primera que hacemos igual protesta; ya el Sr. Villalba Hervás, hace seis años, como individuo de la Minoría republicana, y luego yo, en nombre del grupo autonomista, en los últimos debates parla-

(1) Discurso pronunciado en el Congreso en 3 de Junio de 1898, con motivo de la Sección décima del presupuesto general de Estado para 1898-99. Le contestó el Sr. Ministro de Ultramar (Romero Girón) ofreciendo traer á las Cortes el presupuesto de Fernando Póo de 1899-1900.

los

de tal suerte, que creo que hace dos
ente en hacer un Código en que se com-
rocesal, el orden penal y el orden civil
le constituir la vida completa de la co-
do.

El grupo de las Colonias Españolas de
el golfo de Guinea la isla de Fernando
era parte de la de Puerto Rico (2.000
ón); más cerca de la costa, entre Fer-
de Africa y también en el golfo de
n Corisco y los dos Elobey, donde tam-
española. Corisco tiene solo 14 kiló-
donde viven 20.000 negros de la bali-
bey mayor tiene 2 kilómetros y Elo-
as. Ambas islas ó ambos islotes es-
continente africano: frente á la desem-
si. En los Elobey reside el subgober-
nial y allí radican las cuatro ó seis fac-
an el comercio de la región. En rigor es
República. Los negros que allí habitan
propio tiempo ostenta el título de re-
español de Corisco, de las adyacen-
continentales que son una legua sobre
ta de los conciertos ó tratados que los
Lerena y Chacón hicieron en 1843 y
Elobey dependían de Corisco, y en
ogrado establecer un verdadero de-

la poses en aquella parte del Africa Oc-

resuelto por nosotros de la manera que nos acomode. Eso no puede ser de ninguna suerte. Ni por el propio concepto del Derecho colonial en principio, ni por las condiciones fundamentales de la población de toda colonia (donde el elemento extraño, exótico, suele ser un elemento potísimo), por ningún modo puede gobernarse nunca una colonia sin contar con los pueblos extranjeros. No he cesado de decirlo desde hace 25 años. No me cansaré de repetirlo.

Por eso ahora mismo, en el problema que está planteado respecto de Cuba, no es una novedad que la cuestión internacional sea para mí la cuestión fundamental. Lo mismo en Cuba que en Filipinas. Las circunstancias han venido á dar al presente una excepcional importancia, un relieve extraordinario á este aspecto internacional del problema; pero es evidente que el problema internacional en Cuba ha sido siempre tan grave como el problema colonial propiamente dicho. Y hemos pecado ó han pecado grandemente aquellos que no han fijado su atención en este aspecto del asunto, queriendo discutirle siempre sin importarles un bledo lo que pensarán Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. Porque, señores, es indispensable tener muy en cuenta la voz y el sentido de todos los pueblos extraños respecto de estas cuestiones transcendentales que quizás son las que (fuera de la compleja de Oriente), han preocupado y preocupan más á los pueblos modernos, determinando el mayor número de sus complicaciones, á partir del siglo XVIII.

Pues bien: ¿de qué suerte hemos resuelto el problema de la colonización, propiamente dicho, en nuestras islas del golfo de Guinea? Mal, muy mal, por la sencilla razón de

que en este largo período de nuestra dominación, lo que debió hacerse fué haber determinado una gran corriente de inmigración y haber procurado desarrollar una gran fuerza de iniciativa en la localidad.

Inmigración, no, no la hay. Existen para ello dificultades muy graves. Mientras no se garantice la libertad en aquellos países; mientras no se garanticen especialmente las libertades de religión, de industria, de comercio, y con ellas la seguridad individual de modo radicalmente opuesto al régimen burocrático militar ó al teocrático de que con tanta dificultad prescinde la España contemporánea en sus colonias; mientras tanto no se dé una gran fuerza á los elementos locales que permita el desenvolvimiento de una vida normal en esos países, cualquiera que sea el grado de civilización en que se encuentren, siempre aquellas colonias estarán en una condición inferior, muy deficiente.

Así es que, estudiando el presupuesto del año anterior, yo me he asombrado al observar que allí no hay ninguna partida para la construcción de caminos; y que sea muy pequeña la partida destinada á una escuela que está en situación deplorable. Lo principal se gasta en organización militar. Después vienen las partidas dedicadas al sostenimiento y predominio de los misioneros, que allí, como en Filipinas (aunque en menor grado) cambian su papel religioso por otro eminentemente político.

No discuto ahora la importancia que tenga la intervención monacal ó de los misioneros en la colonización. No soy partidario de ella, sobre todo porque no creo que es éste su tiempo. Podrá ser discutible si sirvieron para algo en otra época; pero ahora no lo discuto, como no discuto tampoco el proble-

ma de la dictadura militar. La creo, por lo menos, infecunda y extemporánea. Además ha probado la experiencia que esos procedimientos son algo más, son contraproducentes. Pero aun haciendo todo género de concesiones, y dejando, por espíritu de transacción, alguna parte á las misiones y otra á la representación militar, hay que buscar un elemento más; hay que buscar la fuerza civil de nuestras colonias, y para esto es necesario (tratándose de Fernando Póo), sostener y ensanchar aquella junta de vecinos que se creó en 1880 sólo en la ciudad de Santa Isabel para la administración de la misma, y cuyas funciones se han ido extendiendo al punto de que ahora pueden establecer algunos impuestos locales, y sobre todo perciben todos los de la ciudad y con ellos los de Aduanas, para entregar luego una parte de lo recaudado al Gobierno central. En 1888 se llevó esa institución casi municipal del Consejo de Vecinos á San Carlos y la Concepción, que son las otras dos poblaciones de la costa de Fernando Póo.

Esta tiene que ser la base del desarrollo de aquella colonia, debiéndose estimar que para su prestigio y su eficacia hay que procurar cuatro cosas: la primera, el ensanche de las facultades del Consejo en sentido autonomista; la segunda, el ensanche del círculo de los consejeros, haciendo que en él entre la raza negra y en general toda clase de hombres; la tercera, la sustitución gradual de los consejeros de nombramiento del Gobierno por consejeros electivos y de carácter popular, y la cuarta, la plena y sincera consagración de las libertades públicas, de los derechos naturales del hombre y de las franquicias constitucionales del ciudadano español en Fernando Póo y en todas nuestras colonias de Guinea.

Sobre este mismo punto quiero excusar razones de carácter teórico. Tampoco aduciré el ejemplo de las grandes naciones colonizadoras de estos tiempos; el ejemplo de Inglaterra, que lleva á todas partes el jurado, el *habeas corpus*, las libertades de imprenta y de reunión y la nota más ó menos viva del *self government*. Todo ello puede verse y estudiarse en las colonias británicas de la costa africana próximas á Fernando Póo: en Sierra Leona y Gambia y Lagos, de donde, á la continua, salen trabajadores para las colonias españolas.

Básteme el dato de Portugal; el ejemplo de las colonias vecinas á Fernando Póo; de las islas del Príncipe, de Santo Tomás y aun de Cabo Verde. Todo eso que la vulgaridad y la rutina petulante dicen en España que es imposible en nuestras islas africanas; todo eso es un hecho en colonias análogas á las nuestras; iba á decir idénticas, si no fuera notoria la extraordinaria inferioridad de estas últimas en cultura, riqueza y seguridad. Esto es, en todo aquello que depende de los hombres.

II

He hablado de sentido autonomista para la reforma y el ensanche del Consejo de Vecinos de Fernando Póo como representación del fuero local. Conviene que sobre esto dé alguna ligera explicación.

Se comete un verdadero disparate al atribuirnos á los defensores de la doctrina autonomista la afirmación de que la autonomía consiste en una solución radical por cuya virtud se establecen Cámaras, Ministerios, Presidencias y Gobierno propio en todos los pueblos, cualesquiera que sean la historia, la cultura y los recursos de éstos. Así algunas veces se nos pregunta si se nos ocurriría establecer la autonomía en Fernando Póo ó en Mindanao.

Eso no se nos ha ocurrido nunca, porque es un solemne disparate. La autonomía lo que afirma es la gradación en el modo y manera de administrar y gobernar los pueblos. A aquellos pueblos que han llegado á la plenitud de la riqueza, del esplendor y de la conciencia de sus propias fuerzas, hay que darles grandes garantías de expansión; primero, porque les es debido, y luego, porque si no se hace así, se establece la incompatibilidad entre ellas y la Metrópoli y la Metrópoli se atribuyen todas las torpezas, aunque real-

mente no tenga la culpa de la mayor parte. Del mismo modo, aquellos pueblos que están en segundo, en tercero ó cuarto grado de progreso, deben recibir de una manera proporcionada esa expansión colonial hasta llegar á la plenitud de las franquicias y la competencia locales. De este modo aquellos que están en el grado más inferior deben ser realmente administrados por la Metrópoli, y los que están en el grado superior, deben administrarse por sí mismos.

Con tal criterio, es evidente que ni Fernando Póo ni buena parte de nuestras Filipinas podrían disfrutar desde ahora de grandes y aparatosos Consejos ó Asambleas coloniales, pero en todos esos países sería indispensable: primero, facilitar el acceso de su población y de sus elementos sociales al gobierno local, creando desde luego instituciones más ó menos populares; y segundo, disponerse á reducir gradual y sucesivamente la acción tutelar del Gobierno central, para que en plazo, lo más pronto posible, toda la Administración local quedara entregada á las corporaciones locales y luego se llegara en condiciones de éxito á la instauración de aquellos Consejos y aquellas Asambleas coloniales que no puedan ser ni constituir privilegio de ninguna raza, familia ni comarca.

A esto hay que añadir que para conseguir esto y para lograr que en tanto llegue la hora de las grandes franquicias locales (que el Gobierno debe desear y procurar con toda sinceridad), es indispensable organizar seriamente la administración colonial, para lo que es de absoluta necesidad prescindir del régimen vigente.

Lo llame régimen, por darle un nombre; porque lo que ahora sucede es, más que deplorable, bochornoso. Allá, en

1870, se pensó, con motivo de Filipinas, en crear un cuerpo especial de empleados ultramarinos. Se proyectaron tres cátedras y se trazó un plan, en vista de los ejemplos de Inglaterra, de Holanda y de Francia. Porque en ninguna nación colonizadora de mediana importancia se cree hoy que cualquiera persona puede ser empleado en las colonias y menos aún en aquéllas, pobladas por razas distintas de la europea, y que hablan un idioma propio y tienen historia, costumbres y tendencias características. Pero el propósito revolucionario se lo llevó el aire. Del mismo modo, el aire se llevó todas las leyes que garantizaban la pericia y la inamovilidad de nuestros empleados en Cuba y Puerto Rico. La arbitrariedad y el favoritismo se impusieron. Ahora palpamos muchos de sus efectos. ¡Tenemos perdidas casi todas nuestras colonias!

Pero si esta pérdida no es total ó si conseguimos evitarla, hay que variar radicalmente de procedimiento. Allí, en las Antillas, la Autonomía es un hecho definitivo. No hay que hablar más de ello. Pero respecto de Filipinas y Fernando Póo, hay que pensar en crear una Administración colonial seria y capaz, y para ello hay que formar un cuerpo de empleados coloniales como los que existen en el resto del mundo. Y con tanto mayor motivo, cuanto que si puede decirse que la Autonomía es un hecho definitivo en las Antillas, no es menos seguro el afirmar que el gobierno de los frailes en Filipinas también ya ha terminado. Hay, pues, que sustituirlos y no creo que nadie imagine que esa institución pueda hacerse poniendo el Gobierno general y el local del Archipiélago en manos del elemento militar. Esto tampoco ya se discute en el mundo.

Mi opinión sobre este particular quedaría muy oscura si yo no añadiese: 1.º, que creo que en Filipinas hay cosas á las cuales se pued: aplicar el régimen autonomista en un grado considerable de desarrollo; y 2.º, que entiendo que lo mismo en Filipinas que en todas las demás colonias españolas, y por tanto en Fernando Póo, es indispensable poner desde luego la garantía de los derechos del hombre y del ciudadano, ni más ni menos que en el resto de España, al lado de una Administración seria y honrada, saturada del deseo de facilitar la educación política y administrativa de la colonia, de suerte que en el menor plazo posible ésta pueda por sí atender á sus propios y exclusivos intereses. Sobre este punto conviene mucho estudiar el *régimen de los territorios* de los Estados Unidos.

Todavía queda un grave problema relacionado con estos puntos: el de la representación de las colonias en el Parlamento nacional. Portugal y Francia la tienen sancionada. España la afirmó en 1812, la suprimió en 1837 y ha vuelto á consagrarla, pero con reservas (Filipinas no ha recobrado la representación que disfrutó en 1812, 1820 y 1836), en 1868 y 1879. Inglaterra la ha negado hasta ahora, pero de pocos años á esta parte allí se ha pronunciado una vigorosa tendencia en favor de la representación de las colonias, con un cambio transcendental en el orden y los fines de la colonización británica. Se trata, pues, de un problema importantísimo, á que da hoy particular interés el profundo cambio operado en el régimen de nuestras Antillas, por efecto de los decretos autonomistas de Noviembre de 1897.

Es notorio que hay bastantes políticos que creen que con

decretos imponen la supresión de los diputados y senadores de Cuba y Puerto Rico. Otros creemos que eso no está bastante fundado, si bien pensamos que hay que modificar la Constitución para hacer posible en condiciones de igualdad, de prestigio y de eficacia, la concurrencia de los representantes parlamentarios coloniales y peninsulares en el gran Parlamento español.

Pero la importancia del problema hace imposible que yo lo trate ahora. Tanto más cuanto que yo no creo que todas las colonias españolas se hallen en condiciones de ser representadas directamente en Cortes. No lo han estado en el Congreso de los Estados Unidos los territorios de Washington, Idaho, Dakota, Montana, Wyoming y Utah hasta 1889—1890 y 1896. Lo cual no quiere decir que hasta estas fechas esos territorios estuvieran sometidos á la arbitrariedad burocrática ó á la dictadura militar. En ellos rigió la democrática Ordenanza de territorios de 1787.

Recordando esto, pensando principalmente, en la mayor parte de nuestras colonias de Asia, pero añadiendo que creo que algunas comarcas de Luzón y de las Visayas tienen, á mi juicio, derecho á ser representadas directamente en las Cortes españolas.

Relaciónase bastante con todo esto lo que antes he indicado respecto de la educación de las razas llamadas inferiores y del problema de la *reducción* de indígenas.

Sobre tal particular conocemos hoy varios sistemas. Los principales: el de Holanda en Java, el de los Estados Unidos respecto de los indios del Missisipi y el Misouri, y el español antiguo ó sea el de nuestro celebrado Código de Indias.

La legislación holandesa (sobre todo después de las reformas de 1848 y 70), consagrando la autoridad soberana, la competencia superior y la intervención frecuente del Parlamento de la Metrópoli en los negocios coloniales (es decir, todo lo contrario de lo que pasa en España respecto de Filipinas y Fernando Póo), se preocupa principalmente de mantener las históricas formas políticas y aun sociales de la parte principal de su imperio de las Indias orientales, ó sea de Java, estimada generalmente como colonia de explotación y fuente de ingresos del tesoro metropolitico. Así es que si bien la armadura de la Administración holandesa en Java la forman el gobernador general con sus dos Consejos consultivo y ejecutivo, los residentes de las provincias, los asistentes de los departamentos y los inspectores hechos en la Escuela de Delft ó en la Universidad de Leyden y que constituyen un cuerpo de funcionarios verdaderamente excepcional, pero no imposible de emular, la dirección inmediata de los indígenas (es decir, de los 25 millones de hombres que pueblan aquella isla, de extensión análoga á la de Cuba y algo mayor que la de Luzón), corre á cargo de estos mismos y de sus tradicionales autoridades, como son los wedonos, los asistentes wedonos y los mantuas, con todo el acompañamiento y todo el aparato de las viejas instituciones respetadas y casi enaltecidas, en apariencia, por el Gobierno europeo. Por esto en Java hay dos príncipes de raza que figuran á la cabeza de dos vastas provincias de la Isla: el emperador de Socrakarta y el sultán de Djokjarta. Y el idioma oficial de la isla es el malayo: el indígena. Y la religión, escrupulosamente respetada, es la del país.

Pero esto no quita para que la Administración holandesa

representa allí mismo la iniciativa progresiva y el poder civilizador. En tal concepto ha vivido y vive bajo la influencia de la corriente de ideas que se desenvuelve en la Metrópoli, en armonía con los adelantos del Derecho público y singularmente del Derecho colonial.

Por tal motivo, á pesar de lo que los rutinarios y enamorados del *statu quo* afirman, á las instituciones opresivas del duro *Dacende* de 1808, sucedió la reforma de Vanden Bosch en 1833 y últimamente, después de la vigorosa propaganda de Van Hoevell, de Multatuli y de Van der Lith y de las tentativas legislativas de Thorbecke, de Fransen y de Van de Pate, de 1861 á 1868, se llegó á la ley de 1870 que consagraron la libertad de cultivo y la enfiteusis europea y á los decretos de 1882 que sancionaron la redención de la *Cervea* mediante el pago de un impuesto para llegar á la completa abolición de aquel oprobioso y agotador tributo personal. Por lo mismo, ha transcendido á Java la diferencia de los partidos metropolitanos de Holanda, donde ya ha es mucho tiempo que se rectificó completamente el desastroso prejuicio, arraigadísimo en España, en estos últimos cuarenta años, de que solo había un sistema colonizador y una política colonial *nacional*, que de igual modo habían de sostener y desarrollar los liberales, los conservadores, los demócratas y los absolutistas. Por lo mismo, en fin, se ha podido llegar, en el escenario predilecto de la *colonia de explotación*, á la aspiración cada vez más fortalecida de que el Estado prescindiera de este modo de colonizar, sustituyéndole con el régimen expansivo que implica la generalización de los principios democráticos y la consagración de las liber-

tades necesarias como base primera del derecho público universal de la época contemporánea.

He aludido al sistema de gobierno de los indios que priva en los Estados Unidos y bien que de pasada quiero dar la voz de alarma contra la vulgaridad de que en la República Americana sólo privan la violencia y el espíritu de exterminio contra las razas indígenas. Páreceme esto tan disparatado, como la especie muy generalizada en Norte América y en Inglaterra, de que los españoles concluyeron con los indios del Centro y Sud Americano; especie que descansa en el hecho, por desgracia cierto, de que los indios de las Antillas desaparecieron dentro de los veinte primeros años del descubrimiento y de la conquista, y del modo y manera que virilmente denunció el inmortal Padre las Casas. A este cargo España puede oponer el texto de las Leyes nuevas de Carlos V; la campaña de sus gobernadores coloniales contra los desafueros de los encomenderos del Perú y de Méjico; el espíritu y la letra de las leyes 1.^a, tít. 1.^o, libro 49 primera, tít. 3, libro 3.^o, del Código de Indias del siglo XVII; todo el libro 6.^o de este Código, y, en fin, la famosa Ordenanza de Intendentes de Nueva España y la Real Cédula de la Trinidad de la época del apenas conocida, pero admirable Marqués de la Sotomayor.

Pues algo por el estilo puede decirse de los Estados Unidos. Ciertamente que allí, y señaladamente en los Estados de Georgia y Alabama, se acentuaron y desarrollaron tendencias y violencias verdaderamente abominables contra los indios de las orillas del Mississippi; no menos exacto es que las campañas y la política del general Jackson respecto de este

particular y de la expansión de la República por la Florida y la comarca que hoy se reparten los Estados de Atlanta y la Carolina del Sud, merecen la más absoluta condenación; no menos positivo, que hace muy poco, y aún ahora mismo, se señalan muchas agresiones y no pocos atropellos de parte de los inmigrantes europeos del Far West, que prefieren las correrías sobre la línea de demarcación de los territorios indios, al establecimiento formal y definitivo en la comarca occidental de la República, al amparo del *homestead*, del derecho de *preemption* y de otras instituciones americanas de tanta originalidad como excepcional valor, que secundan el empeño de la repartición de tierras por ventas, más ó menos condicionales, entre los nuevos pobladores de aquella próspera nación. Pero al lado de esto hay que poner la serie de extraordinarios esfuerzos que aquella República ha hecho, desde los días de Washington, no sólo para evitar ó contener esas demasías, sino para traer á los indios al pleno goce del derecho y de la civilización contemporáneos.

En este sentido, la obra iniciada por el Presidente Monroe de comprar terrenos á los indios y trasladar á éstos al espacio hoy conocido con el nombre de *territorio indio*, entre Tejas, Kansas y el Missouri; el Acta de 1834 que creó la Comisaría de los negocios indios, cuya importancia no ha cesado de crecer hasta el momento presente y que rivaliza con la famosa Comisaría de la Educación; la consagración de las llamadas «cinco naciones civilizadas de indios», establecidas al Oeste del Missisipi y cerca de Kansas y Arkansas; la organización de los boarding schools, los days schools y los trainings schools para la instrucción y la educación de

la raza indígena; y la enmienda 14 de la Constitución votada en 1887, y el Acta de Mr. Dawes de 1887 tendientes á favorecer la ampliación de la ciudadanía americana á los indios y la conversión de la propiedad colectiva de éstos en individual y libre son datos de que no puede prescindir ninguna persona que quiera formar un mediano juicio sobre las instituciones de Norte América y el progreso del Mundo en el siglo que vivimos.

Otros defectos tiene la República de los Estados Unidos mucho mayores que los que la vulgaridad le atribuye respecto del particular á que me refiero. Lo propio sucede con la anarquía más ó menos resonante de que tanto hemos oído hablar en estos días y que ha hecho creer á tantas gentes el colosal, el apenas imaginable disparate de que aquella República, de 75 millones de habitantes y de una riqueza igual á la quinta parte de la total de Europa, carecía de medios para sostener una guerra con España...

Hay que repetirlo una y otra vez: el llamado *Servicio de los indios* es uno de los méritos de la Administración americana, servicio que hay que relacionar con los Reglamentos de 1787 á que antes he aludido sobre la organización de territorios y las disposiciones posteriores sobre la transformación de éstos en Estados, así como respecto del modo y manera de naturalizarse el extranjero y convertirse en ciudadano de la República. Y no es lícito olvidar que el Gobierno de los Estados Unidos, por bastante tiempo, reconoció á los indios (que hoy ya no pasan de doscientos mil individuos) el derecho de enviar delegados al Congreso americano para exponer sus quejas, manifestar sus deseos y defender sus derechos: así como que la política de protección á los indios ha

puesto más de una vez en peligro la unidad de la República, por cuanto Georgia y Alabama ya intentaron, con este motivo, levantarse contra el Congreso y el Gobierno de la Federación.

Al lado del procedimiento norteamericano y del holandés, hay que poner el español. Es decir, el clásico: el que hoy resultaría si se practicasen rigurosamente las viejas Leyes de Indias como fueron redactadas desde el siglo XVI al XVII, pero teniéndose en cuenta, para el empeño de una eficaz aplicación, los progresos posteriores del mundo y las exigencias del medio contemporáneo.

Con estas últimas palabras quiero combatir la peregrina pretensión de los que, tal vez, sin haber comprendido bien la razón histórica y las condiciones de medio y de alcance de la célebre Recopilación de 1660, ó por un indiscreto celo patriótico ó una preocupación tradicionalista de tristes cuanto excepcionales consecuencias, sostienen que lo procedente en la actual crisis colonial española y en la agoría del siglo XIX, aun después de las grandes y afortunadas experiencias británicas del Cabo, el Canadá, las Bermudas y las Islas de Sotavento y Barlovento, es restaurar totalmente el imperio de nuestro Código indiano, formado por Reales cédulas, provisiones y ordenanzas que en su mayor parte datan de la segunda mitad del siglo XVI y de la primera del XVII, ó sea del período de los Felipes.

Dejo á un lado á los que hablan de aquel Código por pura referencia; y esos no son pocos. Pero es imposible prescindir de la consideración de que para el éxito de aquella legislación fueron precisos los problemas y las condiciones políticas y sociales á que se aplicaron ó que las determina-

ren. Aun con todo esto, tengo la seguridad de que si se trata-se de precisar la reforma de lo actual con el criterio de las Leyes de Indias, sus más entusiastas partidarios tendrían que prescindir de un modo considerable de preceptos é instituciones hoy perfectamente inexplicables ó de todo en todo incompatibles con las exigencias económicas é internacionales de nuestra época. Pero tampoco es para dejada en olvido la observación de que el Código de 1660 fué en mucha parte modificado en el curso del siglo XVIII, contribuyendo estas modificaciones á los movimientos revolucionarios de la América Continental y determinando la más vigorosa protesta de todos cuantos, con otro interés que el burocrático ó el del monopolio mercantil, se ocuparon de nuestra colonización la víspera de la emancipación de nuestros reinos americanos.

Hago estas salvedades, en vista de la frecuencia con que ahora son citadas las Leyes de Indias, oponiéndolas al régimen autonomista y callando que la mayoría de los partidarios del viejo sistema patrocinan el régimen militar que se implantó en las Antillas con el absolutismo de 1825.

Por lo demás, yo creo que el sentido general de la antigua legislación sobre indios es plausible, siendo grandemente aprovechables las instituciones que respecto de los elementos indígenas allí fueron consagradas. Así no debiera prescindirse, por una parte, de que en aquel Código se establece, por ejemplo, la autorización expresa al virrey del Perú, Don Luis de Toledo, para que compilase y coordinase las antiguas prácticas y leyes de los indios, y por otro lado, de que los legisladores de aquella época, al proclamar la doctrina de la

asimilación, no la hicieron con referencia á los españoles de raza ó sus descendientes (porque éstos siempre fueron considerados al igual de los de la Metrópoli), sino á los indígenas, á los indios, cuya *reducción y educación* se perseguía para elevarlos, gradual y sucesivamente, á la altura del resto de los habitantes de España.

No es del caso desarrollar estas ideas: pero conste mi parecer de que sobre la base y con los elementos de las Leyes de Indias, depuradas y coordinadas con los decretos del Marqués de la Sonora y de las Cortes de Cádiz, podrían muy bien organizarse satisfactoriamente casi todas las colonias españolas de Asia y Africa.

Y conste también que yo doy un valor muy relativo á los obstáculos que para esta obra se señalan, teniendo en cuenta los privilegios de las órdenes monásticas, así como los intereses creados y los prejuicios establecidos en esas colonias. Porque sé muy bien que mucho mayores eran los intereses y la fuerza de la Compañía británica de las Indias, y sin embargo, por cima de ellos pasó el Parlamento inglés en 1857. Y no puedo ignorar ni ignoro que los grandes prestigios de Van den Bosch y la poderosa influencia del nutrido y respetado cuerpo de Administración colonial de Java no fueron bastantes para detener las grandes y trascendentales reformas que respecto de sus colonias hizo Holanda desde 1870 hasta 1894. Para estos profundos cambios bastaron la gran insurrección india de 1855 y los desastres financieros y económicos de Java de 1861 á 65.

Ante crisis semejantes á nadie se le ocurrió mantener el *statu quo* y menos mixtificar la reforma recomendada

por los grandes propagandistas, con notas y corruptelas reaccionarias. Allí á nadie se le ocurrió hacer lo que entre nosotros se hizo en 1896 al aplicar á Puerto Rico las reformas de 1895.

Y vuelvo al tema preferente de mi discurso.

III

Después de los dos problemas de la *reducción* y la *colonización* que tienen que ventilarse en Fernando Póo, en Corisco y en el picacho de Annobón, queda el problema *internacional*, que reviste, en la costa africana, un carácter distinto del que antes he señalado.

Porque se trata de colonias nacientes, de establecimientos constituidos con elementos incultos ó al lado de razas atrasadas y de sociedades organizadas más ó menos definitivamente en aquel continente que llama hoy la atención especial de todo el mundo culto y excita los deseos y los esfuerzos de los principales Gobiernos europeos para realizar á toda costa la imponente obra de su civilización y su repartición. Se trata, en una palabra, de colonias nuevas fundadas en Africa, y cuyo desarrollo se ha de hacer conforme á las exigencias del tiempo que ha producido el Estado del Congo.

A poco que se medite se comprenderá que siendo hoy literalmente imposible mantener en Fernando Póo, Corisco y Annobón, el anacrónico régimen del aislamiento y la intolerancia colonial, y habiendo de contar necesariamente para el desenvolvimiento de esas colonias con el elemento extran-

jero, allí están puestas casi todas las cuestiones que hoy preocupan á los colonistas de cierta altura. Es decir, la cuestión de la libertad religiosa, la de la seguridad personal, la de la propiedad individual del extranjero y, en fin, las del tráfico mercantil y la libertad del trabajo. Con esas cuestiones se relacionan directamente el poder y los privilegios de los misioneros, la jurisdicción militar, el régimen político, el sistema de aduanas, etc.

Es un verdadero dislate, señores, que todo eso se puede resolver en nuestras colonias sin contar más que con la voluntad del Gobierno español. Esa pretensión no prosperaría en ninguna parte. No puede prosperar en nuestras islas de Africa y harto lo demuestran los rozamientos que hemos tenido con Inglaterra por causa de los negros metodistas establecidos en Santa Isabel de Fernando Póo y el retroceso que el comercio de esta isla ha experimentado por la aplicación del Arancel proteccionista de hace pocos años. A mí no me sorprendería que surgiesen cualquier día gestiones de los Gobiernos extranjeros que dieran, en la Guinea española, un resultado algo parecido al famoso protocolo de 1877, firmado por los Estados Unidos y por España, en detrimento de la soberanía de ésta.

Y pienso que este es punto muy de cuidado, porque la debilidad ó la arrogancia sobre la materia facilitan lo indecible el establecimiento de las jurisdicciones mixtas con que los pueblos cultos y poderosos humillan á los Gobiernos que no se prestan á garantizar con leyes generales, la vida y la libertad de sus súbditos y de los extranjeros.

Pero como he indicado, hay algo nuevo, singular en nuestras colonias africanas, que depende en gran parte de su

situación geográfica: algo que se refiere principalmente á la costa africana, donde tenemos las factorías de Muni y si se quiere, los dos islotes de Elebey.

¿Cuál es el problema internacional especial que palpita en esas comarcas? Pues el problema es tan grave, que si hoy no constituye un peligro, tengo por cierto que lo constituirá en plazo no remoto. Porque el problema de Africa es un problema que se va afirmando en el concierto de los pueblos, quizá con más viveza que otro alguno.

Toda Europa se ha ido repartiendo el continente africano, y después de la Conferencia de Berlín de 1885, ya se estima de derecho público europeo que aquel territorio (sobre todo el Centro y Oeste de Africa), no es susceptible de ocupación y menos del modo y manera que la realizaron los franceses y los ingleses en el período que va de 1825 á nuestros días.

Por la vieja ocupación y el derecho establecido en Berlín, y las crecientes exigencias de mercados para la industria y el comercio de Europa, en Africa están planteados cuatro problemas.

Primero, el problema del Congo, del interior del Africa; segundo, el del Niger, que comprende esas cuestiones que ahora llaman tanto la atención, y por las cuales se supone que Francia é Inglaterra pueden llegar á las manos; tercero, el de Marruecos; cuarto, el del Transvaal, Zanzibar y Mozambique, en relación con las pretensiones y los derechos de Inglaterra, Alemania y Portugal.

¿Qué cuestiones hay aquí para España? A primera vista no parecen. ¿Pero puede ser España indiferente á todo esto? De ninguna manera. Tenemos relacionadas con el pro-

blema del Congo la cuestión del río Muni, la cuestión de los dos Elobey y aun la de Fernando Póo; el problema del Níger entraña el de las zonas de dilatación é influencia que interesa grandemente á nuestra colonia del Río de Oro; el problema de Marruecos es el de la seguridad de Ceuta y de las aspiraciones de Inglaterra en Tanger y el Mediterráneo.

Por el momento, tampoco parece que interesan á España las cuestiones del extremo meridional de Africa, últimamente extendidas á Zanzibar y la costa de Mozambique. El problema que allí preocupa á Inglaterra y á Alemania nos resultaría completamente extraño si uno de los factores no fuera nuestro hermano Portugal, destinado á un nuevo sacrificio por parte de su poderosa protectora. Pero de todos modos, los otros tres problemas son de tal naturaleza, que ningún pueblo de cierta importancia puede creerse ajeno á ellos, aunque con ellos no se relacione directamente. Porque el desarrollo de la industria en Europa, donde ya no hay medio posible de colocar los productos, sobre todo después del colosal desenvolvimiento que ha tenido la industria en Alemania en estos últimos catorce ó diez y seis años y la creciente tendencia de Norte América á cerrar sus puertas á la producción europea y á apoderarse de las plazas sudamericanas, ha determinado una viva preocupación y animadas é insistentes gestiones de parte de los Gobiernos del viejo mundo para asegurar vastas comarcas de abundante y fácil clientela que hagan posible el funcionamiento regular de las fábricas y la vida de los millares de obreros de aquende el Atlántico para quienes el paro ó huelga impuestos por el agolpamiento y superabundancia de los productos sería la señal de perturbaciones, quizá más

graves que las provocadas por el socialismo, y que en último término, combinadas con éstas, determinarían una situación crítica en lo tocante al orden público y á la vida política interior é internacional. Sólo así se comprende que, á pesar de poseer tan grandes territorios, todavía las grandes potencias europeas se agiten discutiendo un pedazo de terreno allá en las soledades del Africa, y consideren como punto de capital interés político, el precisar si es ó no conveniente hacer la línea férrea que ha de partir de Túnez para recorrer la línea del Niger, ó si, por el contrario, se debe preferir el desarrollo de la línea del Congo, en busca de la bajada del Nilo.

Ahora bien; bajo este punto de vista y sin discutir las cosas que he recordado para dar orden á mis pensamientos, la verdad es que nuestra posición en la desembocadura del Muni tiene un superior interés, y está llamada á ser muy discutida. ¡Qué hablo del porvenir! Esa posición ya nos está discutida por el Gobierno francés.

Ha habido un momento en que se creyó que nuestros barcos tenían que romper el fuego sobre un barco francés; luego se produjeron discusiones muy violentas entre las autoridades españolas y francesas, y al fin, hace ya más de cinco años, que fué preciso constituir en París una Comisión que ventilase este asunto para llegar después á un *statu quo* tan original que, á pesar de que no se ha disuelto todavía la Comisión, ni se ha dado por definitivo el mantenimiento de aquel *statu quo*, ahora mismo lo niegan y atacan, por modo exclusivo, y con alarmante éxito, algunos comerciantes franceses. Porque Francia, que está en el Gabón y que pretende la conquista del río Muni para aplicar en seguida

la teoría de la Conferencia de Berlín, de las zonas de influencia y llegar al centro del Congo y á los grandes lagos, ha mantenido el derecho sobre el territorio donde radican las factorías extranjeras, amparadas por la bandera de España y ha perseguido á barcos alemanes y españoles, hasta el punto de provocar más de un conflicto.

En los últimos años hice alguna pregunta sobre estos particulares al señor Ministro de Estado. Su contestación no fué satisfactoria. Se me pidió que aplazara mis observaciones: las aplacé, y el resultado hasta ahora ha sido poco halagüeño para nuestra causa, porque ni el Gobierno se ocupa de este asunto, ni la Comisión de París termina sus trabajos, ni—lo que es peor—nadie en nuestros círculos políticos da á este negocio la menor importancia.

La tiene muy seria, señores, tanto por lo que he dicho, considerando la cuestión desde un punto de vista general y que se relaciona con la posesión, repartición y civilización del Africa (que es uno de los grandes y primeros compromisos del Mundo contemporáneo), cuanto por otra razón política que nos debe interesar excepcionalmente en estos instantes. Me refiero á la solicitud que el Gobierno español debe poner en el mantenimiento de las relaciones más afectuosas posibles con la vecina República francesa. No digo ya para evitar todo rozamiento y suavizar todas las dificultades! Porque no es dable olvidar el papel que Francia ha desempeñado y quizá desempeñe, en el conflicto internacional que ahora justamente nos preocupa. El *Libro Rojo* demuestra que esa nación ha sido la más propicia á nuestra causa, la más noble y generosa en sus manifestaciones de simpatía con motivo del conflicto hispano-americano. Por tal moti-

vo, la cuestión del Muni, y con ella la de Andorra, piden terminación pronta, inmediata.

Con estos antecedentes, ¿creéis que seriamente no nos debe preocupar y no debemos llevar el aliento de la nueva vida á nuestra colonia de Fernando Póo?

No quiero discutir el detalle del presupuesto del año anterior, es decir, de ese presupuesto burocrático que lanza el Ministerio después de haber sido aprobada la partida que en conjunto y vagamente se nos recomienda ahora. Si lo discutiera, quedaríais asombrados los que aquí os encontráis reunidos y oísteis mis reclamaciones de hace tres ó cuatro años.

No hay medio de examinarlo. Nuestras relaciones postales son un verdadero escándalo, puesto que necesitamos utilizar la línea del Príncipe ó de la costa. Porque tiene aquella colonia relaciones bastante frecuentes con dos ó tres colonias inglesas del litoral africano y con la colonia portuguesa del Príncipe en el Atlántico. Yo he hablado mucho respecto de este particular con dos ó tres gobernadores, marinos, personas muy ilustradas que han regido aquella comarca y que pasaron después á las portuguesas del Príncipe y de Santo Tomás. Según su voto no hay posibilidad de comparación entre aquella pobre ciudad de Santa Isabel (la capital de Fernando Póo), con menguados edificios y casi sin muelle, poblada principalmente por deportados cubanos (allí llevados violando nuestra Constitución y nuestro Código penal), y esa otra colonia del Príncipe que tiene grandes casas, inmensos palacios, contruidos y sostenidos por el modestísimo y decaído reino de Portugal. Y esta diferencia que advierte fácilmente el viaje-

ro, todavía aumenta cuando la comparación se hace con otros pueblos de las colonias británicas del litoral redonda en desprestigio nuestro.—Para el trabajo rudo de la costa de Fernando Póo se traen anualmente del litoral vecino, negros krumanes que permanecen en la colonia española poco tiempo. Esos trabajadores sirven también para divulgar la pobreza de nuestro establecimiento. Luego la reforma arancelaria de 1892 ha fustigado al comercio extranjero y los comerciantes son lenguas divulgadoras de nuestra deplorable situación. No quiero hablar de otras propagandas indirectas que nos dañan lo indecible. Antes recordé lo que Stanley escribía de Fernando Póo. Ahora he de añadir que no es para leído con calma lo que los periódicos, sobre todo las revistas de geografía y de colonización, publican sobre nuestros empeños en el Africa Occidental.

Y esto sin entrar en los pormenores del presupuesto ni analizar las condiciones de la Administración de Fernando Póo, para la cual no se exigen requisitos especiales de ningún género á los que, empleados en aquel remoto y excepcional país, representan el doble interés del prestigio metropolitico y de las atenciones comunes y extraordinarias de una sociedad atrasadísima. Los empleados en nuestras colonias de Guinea ni necesitan conocer el idioma de aquellos países, ni su geografía, ni sus leyes, ni su historia, ni nada. Allá van con la misma preparación que podrían ir al interior de Galicia ó á la montaña de Cataluña.

Bien es que la Administración civil en aquellos países ocupa un lugar secundario. Por cima de ella está el elemento militar, constituido por la marina de guerra, cuyos

jefes son el gobernador y el subgobernador de la colonia. Con efecto: los gastos de marina pasan de 141.600 pesos, á los que hay que agregar los sueldos y gastos de representación del gobernador y el subgobernador, que suben á 6.500. Por tanto, la atención militar se lleva más del 50 por 100 del presupuesto (doy números redondos) y á la Administración civil (allí representada por unos 20 empleados de todas categorías) se aplica á duras penas el 23.

En el llamado *ramo de Gracia y Justicia y Fomento* se invierte cerca del 25 por ciento, pero es preciso no dejarse engañar ó confundir por los nombres. Porque tal *ramo* comprende, en Fernando Póo, el servicio de los Misioneros, el de la escuela primaria, la construcción y entretenimientos de caminos y la inmigración y colonización. Los Misioneros de ambos sexos (establecidos corporativamente en La Concepción, Santa Isabel y San Carlos de Fernando Póo, Corisco, Annobón y Elobey y cabo de San Juan) se llevan lo mejor de la partida; esto es, los dos tercios. La instrucción primaria secularizada, corre á cargo de un maestro y de una maestra que consumen la enormidad de unos mil y pico de pesos! Al entretenimiento y construcción de caminos se dedican 10.000 y al fomento de de la inmigración 7.000.

Conviene no olvidar que el presupuesto total de la Colonia es de unos 260 mil pesos: que sólo en las inmediaciones de Santa Isabel de Fernando Póo hay unos cuantos kilómetros de carretera mal entretenida, y que el interior de aquella isla carece de todo otro medio de acceso que los demás caminos contruidos por búbies y una siempre deplorable vía central que hicieron con gran trabajo hace bas-

tantes años algunos gobernadores y que ahora está casi destruida, por efecto de las aguas y del exceso de la vegetación tropical.

Tampoco se puede dejar á un lado la consideración de que los Misioneros constituyen un cuerpo de carácter monacal y privilegiado del Estado, que tiene á su cargo la propaganda religiosa, el servicio del culto y la enseñanza pública que monopolizan en todas las regiones de Guinea, fuera de la capital de Fernando Póo. No me interesa por el momento, discutir lo que esos Misioneros han conseguido allí: pero si me conviene notar, primero, que en ellos se gasta tanto ó muy poco menos que en toda la Administración civil (esto es, el 23 por 100 del presupuesto total de la colonia); y segundo, que hasta la fecha, que yo sepa, y apesar de llevar ese instituto bastantes años de vida en Fernando Póo, ni él, ni el Ministerio de Ultramar han creído oportuno publicar memoria ni dato de ninguna especie, por donde pudiera formarse idea de los servicios prestados, y de si estos merecen ó no el sacrificio que imponen al tesoro colonial.

Pero repito que de esto no se ocupan los críticos extranjeros, que forman su opinión en vista del conjunto, por la apariencia de Fernando Póo y por su contraste con las demás colonias europeas de Africa.

Pero ¿quién les va á la mano? ¿Quién trata de estas cosas fuera del secreto del Ministerio de Ultramar? Sobre todo, ¿qué hacemos, qué hacemos para rectificar ese descrédito, esas censuras, esas denuncias que después de todo tienen grandísimo fundamento en Fernando Póo, y cuyos deplorables resultados con relación á las Antillas y Filipi-

que España, han sostenido y realizado otras naciones colonizadoras, y que la rectificación de esta conducta ha sido posible y ha producido excelentes efectos? ¡Qué mayor ejemplo que el de esa Inglaterra que acabo de citar!

Por otra parte, ¿puede discutirse seriamente la disparatada tesis de otros tiempos sobre la incapacidad nativa de ciertos pueblos para el régimen de la libertad y del progreso?—Porque el ejemplo de algunas colonias inglesas es concluyente. Las libertades británicas, hoy florecen de idílico modo en el Canadá francés, en el Canadá inglés, en la colonia holandesa del Cabo, entre los boers y los ingleses, los africanos, los zulús y los cafres del Africa austral, en la española isla de la Trinidad y en las ciudades negras de las Bahamas y las Bermudas. Tratándose de instituciones humanas ¿cómo y por qué Fernando Póo no ha de poder prosperar por procedimientos análogos á los que priven en Sierra-Leona?

Además yo persevero en mi ya vieja opinión de que debemos considerar el empuño de la colonización como un interés capital de España: sobre todo, de la España contemporánea.

Abundan las razones. Pero me limitaré á exponer dos.

IV

La raza española, por su genio nativo y original, aún más que por su historia, es una raza expansiva y de una vocación colonizadora que después de haberla conducido, en el pasado, á empeños verdaderamente fantásticos, le imprime ahora mismo una actividad, un entusiasmo, una energía y una fe en el éxito de las más atrevidas empresas, que contrastan extraordinariamente con el mediano vigor y la escasa perseverancia puestos en los demás modestos empeños, y sobre todo en los otros intermitentes y desorientados de relación y vida exterior de la España contemporánea. Para estimar bien esto hay que conocer un poco las comarcas españolas donde principalmente se forma y nutre la corriente emigrante. De esto he hablado yo aquí mismo otras veces, refiriéndome de un modo muy especial á Asturias, en cuyo país paso una buena parte del año descansando de mis fatigas profesionales y políticas y estudiando } de cerca y sobre el terreno propio, uno de los factores de nuestra presente vida social.

Sí, señores, hay que saber por qué y cómo sale la gente del Principado para salvar el Atlántico. Le interesa, sí, hacer fortuna, hacer dinero, y por eso á primera vista, va á

América y luego vive en Cuba, en Méjico, en Buenos Aires consagrado á una labor y desplegando aptitudes y méritos superiores á los demostrados en el propio hogar: pero en el asturiano, por cima y por bajo de esta preocupación interesada, existen, como primera causa determinante de su tendencia, de su propensión, de su enérgica resolución de emigrar, el ansia de la vida nueva, el afán de la comunicación, el deseo de *correr tierras*, el propósito de crear algo fuera del estrecho círculo trazado por las altas montañas y el mar tempestuoso del Norte de España. Eso es lo que piensa y desea el asturiano en el fondo de sus estrechos valles, en lo alto de sus atrevidos picachos, en la playa de aquel negruzco y revuelto mar que para cualquiera otro sería un obstáculo, pero que sobre el asturiano obra como un incentivo, para lanzarse á surcarlo fiado en su buena estrella.

Así es que cuando yo oigo hablar de que se trata de poner límite á la emigración en España, replico que esto no puede ser. Cada pueblo tiene su carácter. Francia no es emigrante. Sus empeños de difusión y de expansión los realiza por medio de su literatura y de su palabra, y por eso París es el centro de todo el mundo y nadie piensa en salir de él. Italia se difunde por medio de sus artes. Inglaterra por medio de su comercio. España por su pasión colonizadora; porque no cabe ni ha cabido nunca en la Península, desde que se constituyó la nación española y porque el temple, los gustos y hasta los éxitos de sus hijos, la han empujado siempre á buscar grandes escenarios fuera de sus fronteras, en todas las latitudes y en trato con todas las razas y las civilizaciones. Por esto, y bajo ese punto de vista, tengo por cierto que mien-

tras España exista, el poder de la emigración será un elemento potísimo de nuestra vida social, y pecará de indiscreto el legislador que trate de ponerla coto.

De otro lado, señores, no se puede menos de reconocer que la historia entra por mucho en nuestra actual vida. Pues qué ¿no hemos esparcido nuestro idioma, nuestra sangre, nuestras costumbres, nuestras aspiraciones por todo el mundo? Al fin y al cabo los dos idiomas que más se hablan en él son el inglés y el español; y los españoles tenemos una situación de primera importancia allende el Atlántico (allá donde se elabora el porvenir), sobre todo, después de haber renunciado en estos últimos años á intervenir en las cosas políticas interiores de los pueblos sudamericanos con el carácter de tales españoles. Así hoy, cuando allí el español entra en pelea, lo hace á su costa, y cae ó se levanta, pero sin pedir la protección del pabellón nacional, como sucedía antes del célebre discurso de don Joaquín Francisco Pacheco, y del no menos célebre de D. Juan Prim, con motivo de la cuestión de Méjico.

Hoy tenemos motivos especiales para tratar con gran cariño á esos emigrantes, porque en estos momentos, luchando con dificultades tan extraordinarias, como las que nos agobian, cuando los recursos son tan contados y necesitamos buscar el apoyo en todas partes, sin duda se produce una verdadera satisfacción, el alma se ensancha y el corazón palpita más fuerte, al considerar de qué suerte al grito de la Patria herida responden los españoles del Río de la Plata y de Méjico aportando su concurso sin regateos ni retraso, á la defensa de los intereses nacionales.

He hablado de otra razón en pro de mis recomendaciones

y es la que se desprende de la influencia directa y poderosa que las instituciones y los intereses coloniales tienen en la vida peninsular. Es este un punto apenas conocido y de que muy pocos, poquísimos políticos se han ocupado. Como casi nadie ha puesto la atención en la influencia que en los destinos de España, en su representación internacional, en su carácter y en la marcha general política del mundo ejerció el apartamiento de nuestra patria de los negocios europeos para llevar toda nuestra atención á América.

Atribuyo á estos problemas un interés excepcional; no ya sólo por las convicciones y los sentimientos que en mí ha podido producir un constante estudio de estos particulares, si que por haber podido palpar, en mí ya no corta vida pública, los resultados económicos, políticos y sociales del influjo de las Indias occidentales y á última hora, especialmente de nuestras Antillas, sobre la política, el orden y el progreso de la Metrópoli española.

Aun sin salir de la esfera puramente política, yo declaro que apenas puedo comprender cómo la gente liberal de nuestros días no ha visto hace ya mucho tiempo la perfecta incompatibilidad que existía y existe entre el desarrollo y esplendor de las instituciones expansivas que tanto esfuerzo, tanta sangre y tantas vidas ha costado á la Península en todo lo que va de siglo y el mantenimiento allende el mar de un régimen oprobioso donde destacan la intolerancia religiosa y mercantil, la esclavitud, la burocracia, la dictadura militar, la centralización y la privanza monacal. Para conservar todo eso en las colonias hay que preparar y robustecer gentes, institutos, centros, intereses y prestigios en el corazón mismo de la Metrópoli; y luego es evi-

dente que todo eso, que es la negación absoluta del régimen constitucional de que tanto nos ufanamos, ha de prosperar, y ensancharse y agigantarse en Ultramar, que á la postre nos devuelve exuberantes y poderosos todos aquellos elementos de perturbación y ruina.

Sería muy fácil demostrar con hechos esta reacción de la deplorable vida que hemos creado en Ultramar, principalmente después de 1825, sobre la vida política y moral de la Península. Los elementos reaccionarios de aquí, allá han encontrado su mejor medio y su mayor fuerza y no es para olvidado un minuto, el elocuentísimo dato histórico de que los principales capitanes de la campaña absolutista de la Península en 1814 y 1823 y 1848, fueron los más señalados en América luchando, no sólo con la insurrección de los colonos, sino con toda tentativa seria para instaurar allí, conforme á los decretos de nuestras Cortes, la Constitución y las libertades de 1812.

Por tanto, no es dable creer que las instituciones coloniales tienen un puro carácter local. Para pensar tal cosa es indispensable prescindir de la íntima relación que la vida de nuestras colonias, tiene actualmente con la peninsular. Id á Asturias, á Santander, á las provincias vascas, á la costa catalana: todo aquello está poblado de gentes que han vivido y hecho su fortuna en nuestras Antillas, y que mantienen trato frecuente con éstas. Ya no se da el caso de los grandes y definitivos exodos: el *indiano* ó el *americano*, como se llama en nuestras costas peninsulares al peninsular que ha vivido en América ó Filipinas, cruza con suma frecuencia el Atlántico y con dificultad prefiere la comarca de su origen á la de su adop-

ción. Todas le poseen por igual. ¡Hay que verlo, señores!

Y esto sin contar con lo que representa para el prestigio y la representación y el carácter de España el mantenimiento, cuanto más la prosperidad de nuestras actuales colonias. El día que las perdamos daremos un bajón, ahora apenas imaginable, en la línea que nos trazaron los tratados de 1765 y que consagran el principio de la decadencia española.

Por eso hay que pensar muy en serio y muy despacio sobre estas materias. Por eso yo deploro tanto que en plena guerra con los Estados Unidos, por causa ó á pretexto de nuestro régimen colonial, se reproduzca aquí el viejo presupuesto de nuestras colonias del golfo de Guinea. Por eso me afano tanto en dar la voz de alarma frente á un doble peligro que hoy ofrece nuestra política ultramarina: el de las soluciones súbitas, improvisadas bajo la presión de las circunstancias y el de volver, una vez pasada esta crisis, á la vieja manera de entender los problemas coloniales como una especialidad subalterna.

Sí, cada vez tengo más miedo á la imprevisión de los políticos y de los Gobiernos. Por tal motivo me ocupo tanto de la propaganda y de la opinión pública: de esa opinión que se dice que no existe ó no vale en España.

¡Qué profundo error, señores!

Lo que aquí falta es el propagandista, el propagandista perseverante, oportuno y práctico. Porque aquí es muy frecuente pronunciar un discurso, callar luego uno ó dos años, hacer un artículo, quizás escribir un libro, y al cabo de cierto tiempo durante el cual nada se ha trabajado, quejarse de que el público no haya hecho caso al desahogo más ó menos

elocuente, más ó menos caluroso, pero pasajero, quizá momentáneo, del que esperaba que la opinión se formase como por encanto.

Del mismo modo aquí es muy común hacer campañas prescindiendo del tiempo, del medio y de las circunstancias, para pedir lo mismo y del mismo modo, á todos los públicos y frente á todos los adversarios. Son muy pocos los propagandistas españoles que han sabido atemperarse al teatro de sus empeños, tomar el tono adecuado y fiar en la virtualidad de las ideas y la lógica de los principios, considerando que, á veces, el logro de una reforma modesta supone para el éxito completo de la campaña, mucha más fuerza que la conquista repentina pero inestable de la totalidad de lo deseado. El *quid* está en saber distinguir las reformas que tienen transcendencia y obligan á otra, de las que sólo tienen un valor efectista y sirven para desorientar á los débiles y los ilusos. Y quizá la mayor dificultad del propagandista consiste en conocer la disposición y el flaco del público indiferente ó adverso á quien se dirige, y el cual, raras, rarísimas veces, rectifica de un golpe y totalmente, en un momento, sus antiguas ideas y preven- ciones,

Por último, es casi corriente en España hacer campañas de una gran generalidad á pesar de la escasa preparación doctrinal—digámoslo con lisura,—de la escasa cultura de nuestro país, donde más de las dos terceras partes de los habitantes no saben leer y escribir; donde no hay medio de lograr que los Ayuntamientos paguen más allá de los tres cuartos del miserable sueldo anual de los maestros de primeras letras; donde pasan de dos millones (es decir, la novena parte de la población total) los hombres que no tienen

ocupación conocida y exceden de 300 mil las personas que se dedican oficial y públicamente á la mendicidad.

Aun en otras condiciones, el público difícilmente se presta á escuchar atentamente generalidades, y de ninguna suerte por éstas se decidirá á realizar ó imponer cosa alguna. Por tanto, es preciso concretar el esfuerzo y precisar la pretensión.

Pues bien, lo que respecto de estos particulares aquí sucede, es todo lo contrario á lo que pasa en el resto del mundo, donde la propaganda es un elemento positivo de la vida pública y uno de los primeros factores del progreso social y político. Y la verdad es que los hombres que aquí se han dedicado á propagandas enérgicas y oportunas, por regla general, pueden estar satisfechos y seguros de que, cuando han tenido razón, casi todo lo que han predicado se ha hecho, y hasta han tenido la satisfacción de ver proclamadas las soluciones que ellos predicaban aun por aquellos que antes, con buena voluntad, pero ciertamente engañados, con gran energía las combatían.

Por eso yo doy tanta importancia á esta gran tribuna parlamentaria, la primera de España: por eso yo estimo tanto el valor y el alcance de reuniones de personas que, como las que ahora me escuchan, atienden sosegadamente y con buen propósito, á las diferentes opiniones que se emiten con un puro interés patriótico. Este es un público que debe ser solicitado constantemente.

Por eso, aparte de la cuestión constitucional, que he señalado al principio de este discurso, conviene excepcionalmente provocar aquí estos debates á fin de que de ninguna suerte nos sorprendan los acontecimientos.

Ya lo he dicho. ¡Quiera el cielo que no peque de profeta! Pero temo que la cuestión de Africa nos ha de traer algunos disgustos, y si nosotros no nos preparamos con tiempo ó para resolverla ó para afrontar sus dificultades ó para abandonarla, éste será un conflicto serio para España. Aquí de la famosa frase de Thiers: hay que tomar las cosas en serio y no trágicamente.

No basta, no, querer vivir; es necesario relacionar nuestros propósitos con nuestros medios y nuestros medios con nuestra propia voluntad. Más aún; todas las campañas que se van haciendo aquí en materia de colonización deben hoy preocuparnos más que nunca, rectificando grandes errores y grandes injusticias.

Yo puedo hablar de esto con gran desahogo por cuanto los hechos de estos últimos días han comprobado de un modo insuperable todas mis denuncias y mis recomendaciones; como el éxito incomparable de la abolición de la esclavitud en Puerto Rico y en Cuba en 1873 y 1881 y de la reforma expansiva y democrática en Puerto Rico en 1878, abona por distinto camino, la justicia y la oportunidad de aquella misma campaña. No me jacto ahora de nada. He perdonado muchas de las cosas que contra mí se han dicho, y ahora me preocupo pura y exclusivamente de ver de qué suerte la experiencia puede ser aprovechada por todos. Bien notorio es que ni la calumnia, ni la amenaza, ni el peligro personal me han detenido en mi campaña colonial de más de 25 años, durante los cuales me he visto muy poco acompañado y en bastantes ocasiones y por no corto tiempo, casi completamente solo. Eso no se comprenderá ahora. Tampoco se advirtió ni cuando en 1881 se decretó

la abolición de la esclavitud en Cuba, ni cuando en 1895 se votaron las incompletas reformas de la administración y el gobierno de las Antillas. Lo recuerdo, no como un mérito: me parece que ahora he demostrado que no me preocupaba eso. Pero interesa mucho señalarlo para que no se repita el caso.

De todos modos, yo no puedo ni debo olvidar lo que ha pasado á mi alrededor. ¿Lo habéis olvidado? Esta cuestión colonial ha sido considerada aquí por espacio de muchos años como una especialidad desagradable: el que caía en la debilidad de entrar en ella, ese era un hombre político perdido; aquel que se comprometía en determinadas soluciones, corría grandísimo peligro.

Yo recuerdo haber oído á D. Antonio Alcalá Galiano, cuyos últimos años alcancé; yo recuerdo haberle oído explicar de qué suerte, habiendo sido él, en 1820 y 1840, partidario de la autonomía colonial y de cierta política expansiva en América, abandonó por completo estas cuestiones cuyo estudio hizo en Inglaterra, porque vió lo que le había sucedido á Florez Estrada y á otros ilustres patricios, que siendo reformistas, magistrados españoles y hombres de mucho entendimiento, se encontraron acosados constantemente por la sospecha, cuando no por la denuncia, de dudosos patriotas.

De aquí resulta una gran dificultad para la política colonial. Porque el primer efecto de la sospecha de que he hablado es la reserva de las gentes de juicio: el segundo efecto, la prepotencia de las medianías y de los interesados en la rutina y en los monopolios: el tercer resultado, la entrega de la dirección de los negocios ultramarinos á los políticos debutantes, á los ministros sin preparación, á los distraídos y

De aquí resulta el final práctico de las palabras que yo he tenido el honor de pronunciar; palabras que, repito, he dicho en nombre de este grupo autonomista y en nombre de la Minoría republicana.

Corrijamos pronto y bien lo que acabo de señalar como un grave error de nuestra política y un positivo pecado de nuestra Administración, cuyos deplorables efectos ahora tristemente palpamos y pagamos. Porque ya sus consecuencias y responsabilidades no quedan en las columnas de los periódicos ó en las páginas de los libros. Y esforcémonos para que ese fin y cualquier otro empeño análogo, contrariado por la malicia, la vulgaridad ó la ignorancia, sean aquí servidos con más medios y más autoridad y eficacia que en ninguna otra parte. Sí, tenemos el deber de procurar seriamente que las Cortes sean el gran centro donde se discutan todas las ideas y donde se formen y determinen libre y poderosamente las soluciones. Por lo mismo que el Parlamento corre tan grande peligro, los que somos realmente partidarios de la libertad parlamentaria, debemos, no sólo evitar todos los males que ese régimen pueda tener, sino hacer todo lo necesario para sostenerla con el brillo y la eficacia indispensables.

Sí, señores: es necesario que realmente las Cortes funcionen de un modo serio y sean y representen algo, con transcendencia positiva para el país; que las Cortes no se reúnan poco, y que cuando se reúnan sus sesiones no lleguen á revestir un mero carácter de fiesta, de solemnidad ó de aparato. Es imprescindible combatir enérgicamente el supuesto de que para defender el honor nacional y la integridad de la Patria, proceda reclamar el silencio de todo el mundo. Hay

Pero esto no quita para que ahora recuerde lo que á fines de la primavera de 1896 sostuve en el Senado, sin que por aquel entonces la generalidad de los políticos españoles viese en mis afirmaciones otra cosa que mi afición á los estudios de política internacional.

Hago mención de esto sin la menor jactancia. Me inspira el buen deseo de demostrar á las gentes imparciales que, por regla general, no me he equivocado respecto de los asuntos que ahora preocupan á todo el mundo y cuyo tratamiento y discusión me han valido, en el curso de estos últimos 25 años, acerbos censuras, groserías y calumnias de parte de la ignorancia ó de la patriotería enseñoreadas de la sociedad española. Mi impopularidad fué tan positiva y de tanta duración como ha sido y es concluyente la prueba material que los hechos han dado, en estos últimos días, á casi todas mis afirmaciones, mis anuncios y mis temores.

Además, con el recuerdo aludido pretendo otras dos cosas. La primera, que la gente discreta y verdaderamente patriota crea que, del mismo modo que he acertado en mi campaña sobre la cuestión colonial, puedo acertar en las recomendaciones que ahora hago á mi país sobre otros problemas tan graves ó más que los coloniales, en cuya pronta y acertada solución creo interesado el porvenir moral y político de España. De aquí deduzco solo que *tengo algún derecho á ser oído*.

La otra cosa que pretendo es que mis conciudadanos no den á mis anuncios y mis críticas más valor que el suficiente para recomendar á los hombres formales y á los directores de la política española, que dediquen alguna atención al estudio de lo que pasa más allá de nuestras fronteras; á lo que se piensa, se dice, se proyecta y se hace en el resto del mundo contemporáneo. Porque humildemente reconozco que casi todo cuanto yo he dicho y he recomendado sobre nuestra cuestión colonial ha sido producto del trato con mucha gente que vive fuera de nuestro país, así como del estudio constante y bien intencionado, de las grandes experiencias políticas y las serias empresas de gobierno de pueblos extraños.

Nada ó casi nada de lo que ha sucedido y ahora sucede en nuestra España, es único y original en la historia: sobre todo, en la historia del siglo que ahora concluye.

Cuando en Junio de 1890 traté en el Senado la cuestión cubana, me esforcé en demostrar:

1.º Que era indispensable que España saliese del aislamiento internacional en que estaba viviendo.

2.º Que para hacer eso era necesario, de una parte, que procuráramos acercarnos política y económicamente á los grandes pueblos europeos y americanos, cuyo concurso nos sería absolutamente indispensable en una crisis próxima, y sobre todo por causa de nuestras colonias; y por otra parte, que pusiéramos el régimen de gobierno de nuestras Antillas y de Filipinas, en armonía con la nota general dominante hoy en el mundo, en punto á colonización.

3.º Que nuestras difíciles relaciones con los Estados Unidos de América crecerían pronto en gravedad y que era necesario normalizarlas cuanto antes, abordando desde luego los problemas internacionales entrañados en la cuestión de la naturalización americana de los cubanos, en la inteligencia y práctica del Protocolo de 1877, directamente relacionado con el tratado de España y los Estados Unidos de 1797, y en los expedientes de indemnización á ciudadanos de la América del Norte, ya por efecto de la aplicación del arancel aduanero de Cuba, ya por causa de los accidentes de la actual guerra, y

4.º Que todos estos particulares no podrían ser bien tratados ni resueltos pronta y satisfactoriamente sino mediante la intervención de varias naciones; intervención abonada por la circunstancia de que también ellas, como los Estados Unidos, tenían formuladas muchas otras reclamaciones por causas análogas á las de las protestas americanas, siendo de esperar que, una vez constituida una Conferencia internacional para tratar de estos asuntos que no afectan directamente á la intangible soberanía de España en las Antillas, los conferenciantes habrían de procurar una solución satisfactoria de todas las cuestiones políticas según lo exigían el mantenimiento de la paz y el progreso del Derecho internacional bastante perturbado por los recientes incidentes del conflicto anglo venezolano.

El Sr. Cánovas del Castillo (que era á la sazón Presidente del Consejo de Ministros y con quien yo discutí este punto en el Senado), por las exigencias de la polémica ó por cualquier otro motivo, se excusó de darme la respuesta que yo pretendía; pero á los pocos días de este debate, discutiendo el propio señor con otros oradores que no habían tomado mi punto de vista, expuso, en el Congreso, la necesidad de desvanecer las prevenciones que en Europa existían

respecto de nuestro régimen colonial y de lo que pasaba en Cuba (1).

Luego, en el notable preámbulo del Decreto de 24 de Abril de 1897, el mismo Sr. Cánovas del Castillo razonó y fundamentó las reformas de sentido autonomista sancionadas por aquel decreto, en consideraciones de carácter internacional bastante próximas á las que yo había hecho en el Senado. ¡Lástima grande que el jefe del partido conservador no hubiese llevado más allá su acción y que entonces no se hubiera determinado á evitar el conflicto presente con los Estados Unidos, provocando en términos decorosos y de positiva eficacia, la acción internacional con motivo ó á pretexto de las reclamaciones pecuniarias que pesaban por causa de Cuba sobre el Gobierno español!

De todos modos es imposible negar hoy que el decreto de Abril de 1897 produjo un buen efecto fuera de España.

Bastarían para demostrarlo algunos de los documentos recientemente publicados por el Gobierno español en su *Libro Rojo*. Por ejemplo; la extensa nota que Mr. Olney (Ministro de Negocios extranjeros de los Estados Unidos de América), pasó en 10 de Abril de 1896 á nuestro Gobierno, y que el señor duque de Tetuán, Ministro de Estado en España, contestó en 22 del mismo mes y año; el Mensaje del Presidente Cleveland al Congreso americano en 8 de Diciembre de 1896 y las comunicaciones hechas por el mencionado Mr. Olney, al Ministro de España en Washington, Sr. Dupuy de Lome y de que éste da cuenta en su despacho de 13 de Cebreiro de 1890.

Mr. Olney decía en Abril del 96 al Gobierno español:

«Todo parece indicar que si España ofreciese á Cuba una verdadera autonomía (esto es, una manera de gobierno propio, que dejando á sal-

(1) Véase el folleto titulado *La Autonomía colonial ante las Cortes españolas y la opinión pública en la Península con motivo de la guerra de Cuba* y mi libro sobre *La Cuestión de Cuba en 1896*.—Madrid 1896.

El sumario de de la primera de estas publicaciones es el siguiente: I Los discursos del senador autonomista D. Rafael M. de Labra —II Los del señor Presidente del Consejo de Ministros, D. Antonio Cánovas del Castillo.—III. Los debates del Senado y el Congreso.—IV Las opiniones de los conservadores y liberales en el Parlamento.—V. El juicio de la prensa.

También debe recordarse sobre este particular la Advertencia ó Prólogo de la parte tercera de este libro titulada *Los problemas de Ultramar en 1898*.

vo la soberanía de la Metrópoli, satisficiera todas las exigencias raciales de sus súbditos españoles), habría motivo justificado para creer que la pacificación de la Isla pudiera realizarse sobre esta base y su resultado sería satisfactorio para cuantos se hallan verdaderamente interesados en el asunto; porque, desde luego, pondría término al conflicto que consume y acaba con los recursos de la Isla (privándola de su riqueza, cualquiera que sea el definitivo vencedor, conservaría perfecta la posesión de España) sin mengua de su decoro, que sería consultado y no combatido, merced á la discreta reforma de los reconocidos agravios; la prosperidad de la Isla y los bienes de sus habitantes quedarían bajo la protección tutelar de España sin romper los vínculos tradicionales y propios que unen á la Colonia á la Madre patria y pondría á aquella en el caso de manifestar su aptitud para gobernarse por sí misma bajo las condiciones más ventajosas.

Después, el Sr. Dupuy de Lôme decía, en 13 de Febrero de 1897, á nuestro Ministro de Estado:

«La opinión del señor Secretario de Estado, que es también la del Presidente de la República, sobre las reformas, es que son cuanto se puede pedir y más de lo que ellos esperaban. Esa es también la opinión de los principales hombres políticos que no nos han sido abiertamente hostiles, incluso muchos que tendrán gran influencia en la nueva administración y el propio Mac Kinley. La prensa, que empezó á atacarlas sin conocerlas, ha hecho el silencio á su alrededor.»

Todo eso dice bien claro que era urgente que el Gobierno español hubiese continuado con más energía y con propósito de mayor alcance por el camino emprendido en Abril del 97.

Nueva demostración de la conveniencia de provocar la acción internacional en nuestros negocios coloniales, la trajeron la subida del partido liberal en el Poder en Septiembre de aquel mismo año 97, y el efecto que en todo el mundo produjeron, primero, el anuncio oficial de que el Gobierno presidido por el Sr. Sagasta pensaba instaurar en Cuba y Puerto Rico el régimen autonomista hasta entonces combatido por todos los partidos monárquicos españoles y hacer en Filipinas grandes y profundas reformas políticas y sociales: y después, los decretos sinceramente autonomistas de 25 de Noviembre del año 97, decretos cuyo gran alcance comprendió perfectamente, y desde el primer momento, la Junta directora de la Revolución cubana.

Así se explica la festinación con que el Presidente de la Junta de Nueva York, Sr. Estrada, se decidió á protestar, afirmando que la Autonomía proclamada por el Gobierno ni

era tal cosa ni sería estab'ecida y desarrollada en las Antillas con la sinceridad absolutamente necesaria. Sobre esto hay dato oficial en el *Libro Rojo*. Allí consta la comunicación del Sr. Ministro de España en Washington á nuestro Ministro de Estado, referente á la actitud y la propaganda de la directiva separatista.

Pero tampoco entonces, ni aun después, nuestro Gobierno se ocupó de la acción internacional por mí recomendada mucho tiempo antes, en evitación de rozamientos presumibles y para la solución de los conflictos existentes.

En esta situación terminó el año 97. cerrándolo (para el efecto que ahora me ocupa) el Mensaje del Presidente McKinley al Congreso de los Estados Unidos, de fecha 6 de Diciembre de 1897.

Este documento tiene que ser el punto de partida de las observaciones que me propongo hacer sobre la política internacional española.

2

Tomo este punto de partida por dos motivos. Ante todo, porque en el Mensaje Mac Kinley queda reconocida, consagrada y aplaudida la nueva política colonial española en satisfactoria relación con los deseos del Gobierno norteamericano y con las recomendaciones, más ó menos explícitas, pero siempre positivas, que los Gobiernos de Europa habían hecho al de España, en estos últimos años.

Mr. Mac-Kinley consigna en aquel Mensaje frases de suma importancia y transcendencia, tanto respecto de las reformas coloniales españolas, como sobre la necesidad de dar tiempo á que los decretos de Noviembre produjesen su efecto; como, en fin, en punto á las reservas que ciertos antecedentes y algunos intereses de momento de la política americana imponían, á juicio del Presidente, al Gobierno de Washington.

Conviene reproducir aquí con brevedad la parte más importante y sustancial de aquella declaración presidencial, que implica el reconocimiento explícito de que España y la cuestión de Cuba están dentro de la corriente internacional contemporánea.

Decía así Mr. Mac-Kinley:

•Ha ocupado el poder un nuevo Gobierno en la Madre Patria, y de antemano se ha comprometido á declarar que todos los esfuerzos del mundo no bastarían para mantener la paz en Cuba por medio de las bayonetas: que las vagas promesas de reformas, después de la sumisión no aportan solución alguna al problema insular; que con la sustitución, de los jefes, por el contrario, sobrevendrá un cambio en el antiguo sistema de hacer la guerra, sustituido por otro en armonía con la nueva política, que ya no pretenderá colocar á los cubanos en la terrible alternativa de huir á la manigua ó sucumbir de miseria; que se establecerán las reformas, de acuerdo con las necesidades y circunstancias de los tiempos, y que estas reformas, encaminadas á conceder plena au-

tonomía á la colonia y á crear un eficaz derecho electoral y una administración del país por el país, habrán de confirmar y afirmar la soberanía de España mediante una justa distribución de los poderes y cargas sobre una base de interés mutuo y que no se halle minada por un sistema de proceder egoístas.»

«Que el Gobierno del Sr. Sagasta ha entrado en un camino en el cual es imposible retroceder con honra, es cosa indiscutible; que en las pocas semanas que su Gobierno lleva de existencia ha dado prueba de la sinceridad de sus declaraciones, es innegable. No impugnaré yo su sinceridad, ni debe tampoco permitirse que la impaciencia embarace la empresa que ha acometido. Honradamente debemos á España y á nuestras amistosas relaciones con esa Nación el darle una oportunidad razonable para realizar sus esperanzas y probar la pretendida eficacia del nuevo orden de cosas, al cual se ha comprometido de una manera irrevocable.»

«El porvenir próximo demostrará si hay probabilidades de conseguir la indispensable condición de una paz honrosa, justa, para los cubanos y para España, al par que equitativa para nuestros intereses, tan íntimamente ligados con el bienestar de Cuba. Si esa paz no se consigue, no quedará más remedio que afrontar la necesidad de que los Estados Unidos emprendan otra suerte de acción. Cuando tal caso llegue, la acción que haya de tomarse será determinada, inspirándose en el deber y derechos indiscutibles, *será afrontada sin temor y sin vacilación á la luz de las obligaciones que este Gobierno debe á sí mismo, al pueblo que le ha confiado la protección de sus intereses y de su honra, y á la humanidad. Y al obrar procederá seguro de su derecho y no atentando contra los ajenos, impulsado sólo por consideraciones rectas y patrióticas, no movido por la pasión ni por el egoísmo.* El Gobierno continuará cuidando vigilantemente de los derechos y de las propiedades de los ciudadanos americanos y no perdonará ni uno solo de sus esfuerzos para procurar, por medios pacíficos, una paz que sea honrosa y duradera. Si en lo sucesivo pareciese ser un deber impuesto por nuestras obligaciones á nosotros mismos, á la civilización y á la humanidad, el intervenir con la fuerza, lo haremos, pero no por culpa nuestra, sino *solo porque la necesidad para emprender tal acción sea tan clara que asegure el apoyo y la aprobación del mundo civilizado.*»

Corrobora estas declaraciones la Nota del nuevo ministro norteamericano Mr. Woodford al Gobierno español, de 20 de Diciembre de 1897. Nuestro Gobierno recogió y agradeció estas declaraciones en su Nota de 1.º de Febrero de 1898.

Pero he dicho que tengo otra razón para considerar el Mensaje de 6 de Diciembre de 1897, del Presidente McKinley, como punto de partida de mi actual estudio. Esta

razón consiste en que á partir de aquella fecha comienzan y se desarrollan, con creciente interés y extraordinaria frecuencia, las negociaciones diplomáticas de España con las demás potencias.

Lo demuestra de un modo decisivo el *Libro Rojo* que acaba de publicar el Gobierno español. De esas negociaciones las más vivas son las sostenidas con el Gabinete de Washington.

Recorriendo sus páginas, se advierte que desde fines del año 97 hasta fines de Abril de 1898, sólo ha habido tres rozamientos de verdadera importancia entre los Gobiernos de Washington y de Madrid.

Los rozamientos á que me refiero son los siguientes. En primer término, el producido por el motín de la Habana de 5 de Enero de 1898.

Tanto en América como en Europa se dió una extraordinaria importancia á este suceso, llegándose á anunciar en la prensa y en los círculos políticos extranjeros, que los enemigos del nuevo régimen autonomista estaban dispuestos á expulsar al Gobernador general de Cuba D. Ramón Blanco y á cometer todo género de violencias contra los extranjeros y señaladamente contra los ciudadanos norteamericanos residentes en la capital de la Isla. Parece cierto que el Gobierno de Washington se preocupó mucho del particular y aun pensó en la eventualidad de un desembarco de tropas americanas en evitación de una catástrofe.

No discuto ahora ni la gravedad del suceso (que no niego) ni el punto referente á los probables promotores del motín, que solo podía aprovechar á los enemigos de la Autonomía y á los adversarios de España.

En otro lugar (1) he hecho alusión al efecto que aquel alboroto produjo en el grupo de banqueros y hombres de negocios que en Europa trataban, por aquel entonces, de concertar con el Gobierno de Madrid, algo trascendental para la vida de España y decisivo para el afianzamiento del régimen autonomista en Cuba.

O yo estoy muy equivocado ó si las circunstancias hubieran ayudado un poco, no solo el Gobierno español habría podido hacer un empréstito que le emancipase de la presión de los actuales acreedores hipotecarios de Almadén y de las exigencias de los accionistas de los ferrocarriles del

(1) Mi discurso parlamentario de 30 de Mayo de 1898.

Norte y Mediodía de España, sino que quizá habría sido fácil unificar las deudas de Cuba, restañar las heridas causadas por la guerra separatista iniciada en Baire, y dotar á la grande Antilla de medios suficientes para realizar un plan de reformas económicas y de obras públicas que habrían transformado, en brevísimo tiempo, aquel hermoso cuanto desgraciado país.

El pensamiento de los gestores de aquella empresa, llegaba á bastante más; porque, quizá, una de sus primeras consecuencias sería facilitar á España la fortificación y ensanche de su poderío naval é interesar activamente á algunos Gobiernos extranjeros en la conservación y prosperidad del Imperio colonial español.

Para todo esto eran supuestos indispensables el establecimiento de la Autonomía colonial en las Antillas y el mantenimiento del orden público en las mismas.

Creo que las cosas pasaron más que de un buen deseo; mucho más que cuando, hace cinco ó seis años, corrió por Europa la especie de que el Gobierno español pensaba seriamente en iniciar en Cuba una serie de reformas de acentradísimo sentido autonomista. En aquella época también se habló de un concierto de varios negociantes belgas, franceses é ingleses que llegaron á visitar algunas poblaciones importantes de la grande Antilla y aun á conferenciar con algunos personajes de la Isla, con el ánimo de intentar una gran operación financiera sobre la base del régimen autonomista.

Ahora, á fines de 1897, las cosas se pusieron de otro modo. Parece cierto que se trazaron planes y se hicieron ofrecimientos, de los cuales debieron tener muy detenida noticia, por lo menos, los Gobiernos de Madrid y de Londres.

Pero los deplorables sucesos de la Habana (que debieron haberse verificado, según los planes de sus provocadores y directores, quince días antes) dieron al traste con una de las bases de la aludida negociación: precisamente cuando el cónsul de los Estados Unidos, Mr. Lee, se esforzaba en convencer á su Gobierno y á sus compatriotas de que la Autonomía había fracasado en Cuba... Es decir, á los dos meses escasos de las declaraciones autonomistas de la *Gaceta de Madrid*; cuando acababa de instaurarse el Gobierno insular y cuando se preparaban las elecciones de diputados á Cortes y de representantes cubanos en la Asamblea colonial!

Después de los sucesos de la Habana (reprobables en

todos sentidos) ha corrido por todos los periódicos americanos y europeos, la declaración (auténtica ó falsa) del periodista que en el diario *Los Reconcentrados*, de la capital de Cuba, dió pretexto para el motín de 5 de Enero de 1898, de que su actitud y sus provocaciones respondieron al propósito de turbar el orden público y de dificultar el planteamiento del nuevo régimen. Ahora falta averiguar si esa disposición era espontánea ó respondía también á un plan trazado en algún otro país de América. Lo que ha sucedido después, abona el interés de esta averiguación.

Pero lo que por el momento interesa precisar, para el fin concreto del trabajo que hago, se reduce á que no menos cierto que todo lo dicho es que las dificultades y los rozamientos producidos por los sucesos de la Habana (relacionados, por nuestros detractores, con el recuerdo de las expulsiones del general Dulce, Gobernador general de Cuba en 1869 y de los vireyes españoles de Buenos Aires y de México dentro del primer cuarto del siglo corriente), habían terminado satisfactoriamente á fines de Enero.

En 28 de este mes, nuestro Ministro en Norte América comunicó á nuestro Gobierno, *la satisfacción* del Presidente americano, hecha pública en la comida anual dada en aquellos días al cuerpo diplomático extranjero en Washington.

Poco antes (20 y 24 de Enero), el ministro de Negocios extranjeros, Mr. Day, había comunicado á nuestro representante, la simpatía que le inspiraba la conducta de España y el propósito del Gobierno de los Estados Unidos de dejar plena libertad al Gobierno español para el desarrollo de su política.

A este espíritu de simpatía, fortificado por el buen aspecto que ofrecían las negociaciones iniciadas entonces para un tratado mercantil de España con los Estados Unidos, corresponde oficialmente el anuncio de la visita del acorazado *Maine* á los puertos de Cuba: visita que habían de devolver inmediatamente (como en efecto devolvieron) algunos barcos españoles, que saludarían la bandera americana en los puertos de la Unión.

Produjo el segundo rozamiento la voladura del *Maine*, verificada el 17 de Febrero, en el puerto de la Habana. Tampoco importa ahora discutir las causas de este lamentable suceso, á cuya estimación podría aplicarse muy bien el criterio del *cui prodest*.

No se necesita discutir los extraños procedimientos y la actitud originalísima del Gobierno de los Estados Unidos, para dificultar la estimación imparcial de la catástrofe por medio del concurso de los ingenieros americanos y españoles.

Sobre las causas del hecho resultaron opuestos los dictámenes de los españoles y los americanos. El Gobierno español se prestó, desde luego, á someter el hecho y sus consecuencias, al juicio de peritos de notoria imparcialidad. El Gobierno americano se desentendió desde el principio de esta disposición, al propio tiempo que rechazaba el concurso de los marinos é ingenieros españoles, para que por medio de investigaciones concertadas con los de los Estados Unidos, en el puerto de la Habana, se llegara á una exacta determinación de todo lo referente á la catástrofe, que no solo había sido tremenda para el barco americano, sino que había constituido un enorme peligro para los barcos españoles, situados á cortísima distancia del *Maine*, y que en el momento crítico de la explosión habían enviado sus tripulantes, con una abnegación admirable, á prestar auxilio á las víctimas de la voladura.

Pero todavía sucedió algo más extraño, y fué que después de esas extrañas negativas del Gobierno de Washington, el capitán del *Maine* solicitó de las autoridades de la Habana el permiso para aplicar la dinamita á los restos del barco destruido. Negáronse, como era de presumir, nuestras autoridades, tanto por consideración á los demás barcos españoles y extranjeros anclados en la bahía de la Habana, cuanto porque estando en debate el doble punto de la naturaleza y la responsabilidad de la catástrofe, no podía prescindirse de la conservación del *Maine*, en el estado en que la voladura lo había dejado, para que en todo caso, personas extrañas, y absolutamente imparciales, pudieran examinarlo y formar un juicio razonado y definitivo sobre aquel deplorable incidente.

Después (en 28 de Marzo de 1898) el Gobierno norteamericano, en vista de la general sorpresa que la pretensión del capitán del *Maine* produjo, quiso rebajar el alcance de ésta, y así el ministro de los Estados Unidos en Madrid expuso que el propósito de aquel marino había sido sencillamente emplear pequeñas cargas explotadoras en la parte superior del buque, con objeto de hacer en ella la limpieza necesaria para llegar á donde estaban todavía los ca-

dáveres y los cañones. La explicación ha debido satisfacer á muy pocas personas.

Pero la voladura del *Maine* fué extraordinariamente explotada por la prensa sensacional y los jingoes de los Estados Unidos, mientras en Madrid se procuraba explicar, del modo menos alarmante, las pretensiones y las intransigencias del Gobierno americano. Tal vez por esto, y porque, en realidad, el rozamiento producido por los lamentables sucesos antes aludidos, era de aquellos conflictos, que por su propia naturaleza, deben ser resueltos por un arbitraje, perdió importancia hasta el punto de ocupar un lugar muy secundario, como lo demuestra el hecho de que el Presidente de la República norteamericana recibiera de un modo afectuosísimo al nuevo Ministro español, Sr. Polo de Bernabé, el 12 de Marzo.

El mismo Sr. Polo comunica en 11 de Marzo al Ministro de Estado de España, que tanto el secretario de Estado como el subsecretario de Washington, le habían recibido de la manera más cordial y afectuosa, declarando «que la situación habla mejorado, y que el Presidente de la República lo quería la guerra.»

El ministro norteamericano en Madrid, Mr. Woodford, que, según declaración oficial del ministro de Washington (16 de Septiembre de 1897) vino á Madrid con *una misión altamente pacífica*, en su Apunte de 29 de Marzo, pone á un lado la cuestión del *Maine* y todas las demás secundarias, para formular sus graves exigencias sobre la *inmediata pacificación* de Cuba. Por tanto, el punto del *Maine* no puede ser estimado como causa de la ruptura de España con los Estados Unidos.

El tercer rozamiento lo produjo la extraviada carta del ministro español, Sr. Dupuy de Lome, en la cual aquel diplomático censuraba duramente al Presidente Mac-Kinley. Este incidente (de carácter particular, como se demostró enseguida) se desarrolló desde el 9 al 16 de Febrero y terminó por completo, y de un modo satisfactorio, mediante la sustitución del Sr. Dupuy por el Sr. Polo de Bernabé y una amistosa declaración del Gobierno español. Así se desprende de la Nota del ministro de los Estados Unidos en Madrid, al Ministro de Estado de España, fecha 16 de Febrero del 98.

Por bajo de estas tres cuestiones aparecieron otras dos de mucha menor importancia, en la apariencia. Una motivada

por el deseo del Gobierno norteamericano de socorrer con dinero y aun con viveres á las víctimas de la guerra de Cuba.

Primero fueron socorridos los americanos residentes en la grande Antilla. El Gobierno español no se opuso á esto, aun cuando el modo y manera de verificarlo los agentes americanos produjeron más de una irregularidad, reconocida ya por todo el mundo. Porque es bien sabido que con pretexto de los socorros, alguna vez se hizo contrabando. Respecto del auxilio á los cubanos *reconcentrados*, el Gobierno norteamericano pretendió al principio que aquellos socorros fueran llevados en barcos extranjeros convoyados por barcos de guerra de los Estados Unidos. Luego, ante la resistencia del Gobierno español, el de Washington redujo su pretensión á que los barcos portadores de víveres fueran barcos de guerra. Pero dentro de la primera quincena de Marzo ya se desistió de la empresa.

Las dificultades puestas por el Gobierno español descansaban, tanto en lo irregular del procedimiento como en lo anómalo de las circunstancias y en los abusos á que se habían prestado los envíos anteriormente hechos.

Por lo que ha pasado después, se puede calcular toda la razón del Gobierno español. Porque ha resultado que los tales envíos eran una manera de proteger la insurrección y que el cónsul americano en la Habana, Mr. Lee, apareció pronto como uno de los simpatizadores más calurosos de la rebelión separatista. Evidentemente, en él pusieron gran confianza los insurrectos y los laborantes. Como ya he dicho, sus informes fueron en el sentido de que la Autonomía había fracasado, precisamente cuando las reformas comenzaban á arraigar, y en vísperas de la constitución de las Cámaras insulares de las dos Antillas. Y al fin, la opinión pública en la Habana y á la postre, el Gobierno de Madrid señalaron, con toda franqueza, á aquel funcionario extranjero, como un activo agente del separatismo cubano.

La otra causa de dudas y celos fueron los aprestos militares, así de España como de los Estados Unidos.

Parece que la primera vez que de esto se trata por los Gobiernos de entrambos países, es á principios de Febrero del 98. Pero ya en 16 de Diciembre del 97, nuestro Ministro de Estado pregunta al ministro plenipotenciario español en Washington qué hay sobre la salida de la escuadra americana

para el Golfo de México. El Sr. Dupuy contesta que esta salida carece de gravedad, responde al plan ordinario de los ejercicios navales norteamericanos, y aun puede servir para distraer á los jingoes.—Mas en 5 de Febrero, nuestro Ministro de Estado comienza á preocuparse del asunto y comunica sus temores á los representantes de España cerca de los Gobiernos europeos. Requerido Mr. Day, en 16 de Marzo, contesta que aquellos preparativos de guerra, así los navales como los de defensa de las costas, que habían llegado á adquirir cierta importancia en las últimas semanas, eran motivados por la actitud de España, que hacía grandes armamentos y se preocupaba mucho del aumento de su escuadra.

La cosa por el momento no tuvo consecuencias.—Pero importa precisar el alcance y la forma de la conversación que por aquel entonces tuvieron los representantes de España y de los Estados Unidos. Nuestro ministro, el Sr. Polo de Bernabé, la explica en el siguiente telegrama fechado en Washington el 16 de Marzo de 1898:

«Mr. Day me citó hoy para pedirme que se admitan libres de derechos de puerto y tonelaje los buques que transitoriamente lleven socorros á los reconcentrados. He recomendado la petición al gobernador general de Cuba.

Después de celebrada la conferencia me ha declarado solemnemente que los Estados Unidos *no quieren la guerra*, y que no desean á Cuba ni regalada. Me ha dicho que sus preparativos de guerra eran motivados por nuestra actitud al adquirir grandes armamentos y aumentos en la escuadra. Le objeté que teniendo una rebelión en Cuba, necesitábamos aumentarlos, á lo que me dijo que ciertos buques no podían emplearse contra los insurrectos y que muchos creían aquí que España, para concluir con honra la rebelión, viendo que se prolongaba indefinidamente la lucha, quería la guerra con los Estados Unidos. Le dije que era un disparate y que solemnemente le declaraba que nosotros queríamos la paz, y para conservarla haríamos todo lo compatible con la honra y la dignidad nacional, que la Nota de 1.º de Febrero sintetizaba nuestra política. La intervención, le añadí, traería consigo la guerra, porque en toda nación que aprecia su honra, intervención y guerra son términos semejantes. Me dijo que celebraba mucho esta declaración, y la repetí, añadiéndole que una guerra en las circunstancias actuales sería un crimen contra la humanidad y la civilización, y que de ese crimen nunca resultaría responsable España. Díjele que nosotros estábamos haciendo todo lo posible para acabar en breve la

insurrección, y que si los Estados Unidos hubieran hecho una mínima parte, principalmente disolviendo la Junta de Nueva York, todo habría concluído. Contestóme que esto no era posible dadas las leyes americanas y el estado actual de la opinión.»

El Gobierno español se limitó á llamar la atención del Gobierno norteamericano sobre el contraste de nuestra conducta con la de los Estados Unidos, donde los armamentos continuaban. En aquel país se habían dedicado á este fin 50 millones de dollars, formándose la escuadra permanente de Cayo-Hueso y concentrándose otra en Lisboa, al propio tiempo que continuaban gozando de una extraña libertad los comités separatistas de New-York. Todo ello constituía una especie de presión, favorable en último término á los separatistas cubanos; precisamente cuando se iban á verificar en la grande Antilla las elecciones de diputados á Cortes y de la Asamblea insular, resultado, quizá el más considerable é inmediato de los decretos autonomistas de Noviembre de 1897.

Así se comunicó al Sr. Polo de Bernabé en 12 y 17 de Marzo, y de ello se habló enseguida en Madrid á mister Woodford. Este se presentó siempre vivamente interesado en dar á sus gestiones el tono de una gran simpatía por España, demostrada, cuando menos, por la forma afectuosa, más que circunspecta, de sus observaciones, en medio de la sorpresa que, á propios y extraños habían producido los artículos de franca hostilidad á nuestra causa y nuestra representación, publicados en un periódico de Nueva York, por el anterior ministro Mr. Taylor, á las pocas semanas de haber cesado éste en su cargo diplomático cerca del Gobierno de Madrid.

Como se ve, el Gobierno español, no dejó de mano un momento, en todas estas negociaciones, la protesta de la absoluta necesidad de que desapareciese toda presión ó amenaza de parte de los Estados Unidos para que diera resultado la autonomía proclamada en Cuba.

Pero hasta aquí, repito, las relaciones de los Estados Unidos y de España, parecían bastante cordiales. Luego surge, con una precipitación inverosímil y un relieve extraordinario, un radical cambio de conducta, por parte del Gobierno de Washington. Once días bastaron para este cambio. El hecho merece una detenida consideración.

3

El cambio que acabo de señalar no se reduce á la materia y los argumentos de las negociaciones hispano-americanas; llega hasta á la forma de los documentos que se cruzan entre los gobiernos aludidos y á los términos de las reclamaciones que presenta el americano, cuya conducta contrasta visiblemente con la del español, tal vez algo extremoso en su circunspección y sus deferencias.

Esto último ha sido motivo de no escasas censuras por parte de la prensa ardiente y de muchos políticos de España. A mi juicio, en estas críticas se ha ido demasiado lejos. Lo uno, porque es para mí evidente que nuestro Gobierno debía evitar á toda costa la guerra con los Estados Unidos; máxime si se demostraba el interés de éstos en que la guerra tuviera efecto, apareciendo como provocadores los españoles, ya muy tachados en el resto del mundo, por la política que se había hecho en nuestras colonias y las operaciones militares que se realizaban en Cuba en el curso de los dos ó tres años últimos. Pero, después, debía considerarse el gran interés que para la causa, el prestigio y la fuerza de España entrañaba la demostración palpable de un buen deseo de solucionar todos los conflictos producidos por la cuestión de Cuba, de un modo, no solo reflexivo, si que amistoso y hasta benévolo.

Digan lo que quieran los intemperantes siempre habla mucho, en favor de España, el estudiado silencio con que nuestras Cortes acogieron las provocaciones, las groserías y los tremendos insultos que se profirieron, casi sin interrupción, en las Cámaras americanas, desde 1895 á 1897, así contra el Gobierno y las autoridades de nuestro país, como contra toda la sociedad española. La conducta de los diputados y senadores americanos no tiene parecido en la Historia parlamentaria y en los Anales políticos contemporáneos. Aun después de declarada la guerra (en cuyo trance

también, la conducta del Gobierno de Washington ha ofrecido una deplorable originalidad) no se han oído, ni en nuestro Congreso ni en nuestro Senado, frases incompatibles con la severidad de la función gubernamental. Ni antes de que esto pasase, se han visto en nuestras calles y plazas atentados al Derecho público y al respeto internacional, como la quema y arrastre de la bandera y el escudo de España, que con frecuencia, tuvieron efecto en la segunda mitad del año 97, en algunas ciudades de Norte América.

El hecho de la gestión pública del Comité separatista en Ginebra en los principales centros políticos de la República, apenas se comprende dentro de los principios corrientes del Derecho internacional. Nunca bastaría á justificarlo la mera protesta, por parte del Gobierno americano (que en ello ha insistido mucho) de que las leyes de los Estados Unidos no consienten la prohibición de esos comités; porque no es imaginable la vida internacional en el supuesto de que cada nación sea absolutamente libre para consentir ó no en su propio territorio los ataques directos y materiales á la seguridad, la tranquilidad y la soberanía de la nación vecina.

Pero, además, esa tesis es literalmente inverosímil en los labios del Gobierno americano que provocó en 1872 la cuestión del Alabama y el arbitraje de Ginebra y que ahora mismo ha recabado del Gobierno inglés la expulsión del Canadá de un diplomático español acusado de trabajar en aquel país contra los Estados Unidos. Aparte de que tampoco es rigurosamente cierto que las leyes de neutralidad de este país (á partir de las promulgadas desde fines del siglo pasado hasta 1820, por Washington, Jefferson y Monroe) autorizan lo que estos últimos años públicamente se ha hecho, en los Estados Unidos, en favor de la insurrección de Cuba, hasta el punto de que todo el mundo entendiera que la principal fuerza de ésta se hallaba en la República de Norte América.

Frente á eso hay que poner las satisfacciones oficiales, pero efectivas, que el Gobierno español dió en 1897, al ministro de los Estados Unidos en Madrid por las expresiones supuestamente ofensivas de un oficial de nuestra Marina en una conferencia de la Sociedad Geográfica, de carácter particular; así como todo cuanto se hizo para desagraviar á Mr. Mac Kinley, con motivo de la extraviada carta particular del señor Dupuy de Lome.

No obsta lo que digo para reconocer que hasta bien en-

trado Marzo, el trato diplomático de España y los Estados Unidos fué correcto. Los dos Gobiernos y sus respectivos representantes se esforzaban en hacer protestas contra la mera posibilidad de una guerra y se repetían las frases más corteses y aun benévolas.

Pero el 22 de Marzo de 1898, Mr. Woodford solicita de nuestro Ministro de Estado una conferencia urgente, y añade la conveniencia de que asista á ella el Sr. Ministro de Ultramar, porque dicho Mr. Woodford, conocía poco el español y deseaba «que su conversación fuera interpretada por el Sr. Moret cuidadosamente.»

La conferencia tiene efecto el día 22, y en ella el ministro norteamericano deja á los dos ministros españoles una *manifestación escrita*, que da un corte alarmante al curso de las anteriores conversaciones y los benévoloos tratos. La *Manifestación* dice así:

«Al empezar nuestra entrevista, debo decir á ustedes que el informe sobre el *Maine* se halla en poder del Presidente. No estoy autorizado para dar á conocer la tendencia ni las conclusiones del mismo, pero sí lo estoy para declararles que si dentro de muy pocos días no se llega á un acuerdo satisfactorio, que asegure una paz inmediata y honrosa en Cuba, el Presidente no podrá por menos de someter, en su totalidad, al Congreso, para su decisión, la cuestión de las relaciones entre España y los Estados Unidos, comprendiendo en ella el asunto del *Maine*. —Comunicaré inmediatamente por la vía telegráfica al Presidente, cualquiera indicación que al efecto pueda formular España y espero recibir dentro de muy pocos días alguna proposición concreta que equivalga al establecimiento inmediato de la paz en Cuba.»

No hay que decir que esto era una verdadera *commination*, del género de las amenazas que los pueblos poderosos emplean para aterrar á los incultos y los desahuciados del Mundo ó de las protestas que las naciones ofendidas y que disponen de grandes medios, utilizan contra los agresores inconsiderados.

En vano nuestro Ministro de Estado replicó: 1.º que para la estimación del asunto del *Maine* era indispensable comparar los dos dictámenes de las comisiones americana y española, examinados con calma y fuera de las pasiones propias de toda Cámara popular y que en caso de disidencia irreductible procedía someter el litigio á otros jueces desapasionados, y 2.º, que respecto á la paz de Cuba era indispensable conocer las aspiraciones y los sentimientos de la Cámara

insular que habría de reunirse en la Habana pocos días después: el 4 Mayo.

A muy poco de celebrada la conferencia de Mr. Woodford con nuestros ministros de Estado y de Ultramar (el 28 de Marzo) aquél comunica al Gobierno español un extracto del informe de la Comisión americana sobre la voladura del *Maine*. El dictamen atribuye ésta á la explosión de una mina submarina debajo del fondo del buque, sin que pudiera probarse responsabilidad de persona ó personas determinadas. Pero el Gobierno norteamericano, por su parte, añade que, supuesto el deber de España de proteger las personas y los bienes que se hallaban en el puerto de la Habana, y más particularmente una nave pública y los marineros de una Potencia amiga, á España le «correspondía una grave responsabilidad en el suceso».

Al día siguiente (29 de Marzo) Mr. Woodford da un nuevo paso, acentuando el apremio. El ministro americano deja en manos del señor Presidente del Consejo de Ministros de España un *Apunte*, cuya claridad compite con su rudeza. Es indispensable reproducirlo textualmente, porque en la historia de las relaciones de dos potencias amigas, no perturbadas por la intrusión de la una en los negocios de la otra, no se dan ejemplos análogos. Dice así el *Apunte*:

«1. El Presidente me encarga explicarme directa y francamente con V. E. acerca de la condición actual de los asuntos en Cuba y del estado de las relaciones entre España y los Estados Unidos.

2. El Presidente piensa que no hay ventaja alguna en discutir los puntos de vista respectivos que sobre estos asuntos tiene cada una de las dos naciones; esto sería ocasionarlo á discusiones y á controversias que podrían detener y quizás impedir una resolución inmediata.

3. El Presidente me encarga diga á V. E. que nosotros no deseamos ni queremos la posesión de Cuba.

4. También me encarga decirle con igual claridad, que deseamos la completa pacificación de Cuba.

5. Para este fin me sugiere la idea de un armisticio inmediato, que dure hasta el primer día de Octubre, durante el cual se negocie para obtener la paz entre España y los insurrectos, contando para ello con los amistosos oficios del Presidente de los Estados Unidos.

Y 6. Desea también la revocación inmediata de la orden relativa á los reconcentrados, de modo que las gentes puedan volver á sus propiedades, al par que los necesitados sean socorridos con alimentos y recursos enviados por los Estados Unidos. Los Estados Unidos cooperarán á este

fin con las autoridades españolas para que el remedio sea completo y efectivo.»

Al *Apunte* del ministro americano contestó el español, en 31 de Marzo, trasmitiéndole el acuerdo del Consejo de ministros de España que comprendía los siguientes extremos:

Catástrofe del «Maine». — España está pronta á someter á un arbitraje las diferencias que pudiesen surgir en este asunto.

Reconcentrados. — El general Blanco, siguiendo las instrucciones del Gobierno, acaba de revocar en las provincias occidentales el bando relativo á los reconcentrados, y aunque esta medida no podrá alcanzar todos sus complementos hasta que las operaciones militares terminen, el Gobierno pone á disposición del Gobernador general de Cuba un crédito de tres millones de pesetas á fin de que los campesinos vuelvan desde luego y con éxito á sus trabajos.

El mismo Gobierno aceptará, sin embargo, cualquier auxilio que para alimentar y socorrer á los necesitados le sea enviado de los Estados Unidos, en la forma y condiciones antes convenidas entre aquel subsecretario de Estado y el ministro de España en Washington.

Pacificación de Cuba. — El Gobierno español, más interesado que el de los Estados Unidos en dar á la grande Antilla una paz honrosa y estable, se propone confiar su preparación al Parlamento insular, sin cuya intervención no podría llevarla á cabo, entendiéndose que no por eso se amanguen y disminuyen las facultades reservadas por la Constitución al Gobierno Central.

Suspensión de hostilidades. — Como las Cámaras cubanas no se reunirán hasta el 4 de Mayo, el Gobierno español no tendría, por su parte, inconveniente en aceptar, desde luego, una suspensión de hostilidades pedida por los insurrectos al General en Jefe, á quien corresponderá en este caso determinar el plazo y las condiciones de la suspensión.

Tan pronto como se hizo pública la tirantez de relaciones entre los Gabinetes de Madrid y Washington, por efecto natural de la actitud, las exigencias y el tono de este último, comenzaron las principales potencias europeas, espontáneamente ó por iniciativa del Sumo Pontífice, negociaciones conducentes á recabar del Gobierno español que accediese á lo principal de las pretensiones americanas, mientras, por otra parte, los representantes de las mismas seis grandes potencias europeas se presentaban á Mr. Mac Kinley y dejaban en su poder una Nota colectiva «haciendo calurosa apelación á los sentimientos de humanidad y de moderación del Presidente y del Pueblo americano en sus existentes diferencias con España, y esperando que ulteriores

negociaciones llevarían á un acuerdo que asegurase la paz y diera las necesarias garantías para el restablecimiento del orden en Cuba.»

Esto último sucedió el 6 de Abril. Mr. Mac Kinley contestó en términos generales y muy vagos. Cinco días después de esta gestión diplomática, y dos días después de comunicado por el Gobierno español á todos los demás Gobiernos, el americano inclusive, su resolución de conceder inmediatamente una suspensión de hostilidades en Cuba, el Presidente Mac Kinley enviaba al Congreso de Washington el anunciado Mensaje sobre la cuestión cubana.

En este Mensaje, fecha 11 de Abril, se trata en general la cuestión de Cuba del modo que después se verá. Aquí conviene señalar el párrafo en el cual el Presidente, refiriéndose á la propuesta de España, de someter la diversidad de informes sobre el asunto del *Maine* á peritos imparciales, cuya decisión *aceptaba de antemano el Gobierno español*, consigna como único comentario las siguientes palabras: *A esto no he dado respuesta alguna.*

Hay que advertir que el informe de la Comisión de marinos españoles, sobre la voladura del *Maine*, llegó á Washington el 3 de Abril, en cuya fecha el ministro español lo transmitió al Departamento de Estado americano. — De este informe no se cuidan, ni se han cuidado después, el Presidente ni el Gobierno de la República de los Estados Unidos.

No había el Gobierno español podido recobrase completamente de las protestas y exigencias americanas de 27 y 29 d. Marzo, cuando el ministro de los Estados Unidos se dirige á nuestro Ministro de Estado participándole que el Presidente de la República había sometido aquel mismo día (el 6 de Abril) al Congreso americano *toda la cuestión cubana*. Añade Mr. Woodford que *había esperado recibir antes de las doce del mismo día la notificación oficial de haber proclamado el Gobierno español la suspensión de hostilidades en Cuba* y le advierte que *si en todo aquel día llegara dicho Gobierno á una decisión final respecto al armisticio, podría conocerlo el Presidente de la República y transmitirlo enseguida al Congreso*.

El Gobierno español nada había prometido que autorizase el apremio de Mr. Woodford, y así lo hace constar nuestro Ministro de Estado en comunicación oficial. O por esto ó porque el Presidente variase de parecer, ó por cualquier

otro motivo hasta ahora ignorado, Mr. Woodford, en 7 de Abril, participa al Ministro de Estado español que Mr. McKinley había aplazado la remisión del Mensaje hasta el día 11, y que, por tanto, quedaba retirada la Nota del 6, lo que «le proporcionaba un verdadero placer, porque se apartaba mucho del ánimo de su Gobierno todo propósito de ejercer una presión sobre España.»

Al fin se presentó el Mensaje presidencial á las Cámaras americanas en 11 de Abril de 1898. De ese Mensaje se hablará luego. Enseguida se produjo un dictamen del Comité de Negocios extranjeros de la Cámara de representantes de Washington contra la soberanía de España, dando una gran importancia á la destrucción del *Maine*. Sin pérdida de momento lo votó la Cámara. El 18, el Senado aceptó en parte aquella resolución y el mismo día 18 las dos Cámaras americanas concertadas votan el *bill* que sancionado inmediatamente por el Presidente, obligó al ministro de España en Washington á salir el 20 de Abril de los Estados Unidos y al Gobierno español á comunicar (en 21 del propio mes) á Mr. Woodford, que quedaban interrumpidas las relaciones diplomáticas entre España y la República Americana. No es imaginable mayor precipitación en los sucesos.

El Gobierno de Washington había comunicado en 20 de Abril á su Ministro en Madrid, Mr. Woodford, la orden siguiente:

«Si á la hora del medio día del sábado próximo, 23 de Abril corriente, no ha sido comunicada á este Gobierno por el de España una completa y satisfactoria respuesta á esta demanda y Resolución en tales términos, que la paz de Cuba quede asegurada, el Presidente procederá, sin ulterior aviso, á usar del poder y autorización ordenados y conferidos á él por dicha Resolución, tan extensamente como sea necesario para obtenerla en efecto.»

Este despacho no pudo ser transmitido por Mr. Woodford al Gobierno español, porque este comunicó antes al Ministro norteamericano su resolución de cortar las relaciones diplomáticas con el de Washington.

Apoco, y también antes de que se declarase la guerra por éste, los buques de guerra norteamericanos apresaban cerca de las Antillas algunos españoles mercantes. La declaración de guerra lleva la fecha del 25 de Abril.

Para la exacta inteligencia de la disposición del Gobierno americano y de la actitud del español en el curso de estas

negociaciones, desde los primeros días de Mayo, á mediados de Abril, conviene señalar dos incidentes.

Como se ha visto, la severidad de la Cancillería americana, se trocó pronto en acrimonia para convertirse definitivamente en ofensiva presión é intolerable exigencia, hacia el 29 de Marzo. Pues bien; en 25 de Marzo, el ministro de Negocios extranjeros, Mr. Day, aseguraba al representante de España en Washington: 1.º. que en la atención de los reconcentrados cubanos, el Gobierno de los Estados Unidos deseaba marchar de *completo acuerdo con el español y evitar todo motivo de rozamiento*, y 2.º, que si bien el Presidente enviaría al Congreso el informe sobre la voladura del *Maine* (antes de recibir el dictamen de los comisionados españoles) y aquel documento habría de producir gran agitación, *tenía la seguridad de que todo se arreglaría amigablemente*.

El día 28, Mr. Woodford anunciaba á nuestro Ministro de Estado la opinión del Presidente americano de que el Congreso de Washington no tomaría por lo pronto otra resolución que la *usual de referir el informe sobre el Maine al Comité correspondiente*. Y el diplomático americano añade: «Según las mejores informaciones que he podido adquirir, creo que en las dos Cámaras del Congreso americano prevalecerá un sentimiento de deliberación y que no hay motivo para que el Gobierno español pueda temer que nada se haga *rápido é injustamente*». Pero á las 24 horas, Mr. Woodford, ponía en manos del Presidente del Consejo de Ministros de España el *Apunte* relativo al armisticio, la paz con los insurrectos y la situación de los reconcentrados.

Por otra parte, en 9 de Abril, el Gobierno español, por conducto de su representante diplomático, comunicó al Gobierno de Washington que había acordado la suspensión de hostilidades en Cuba: hecho que el mismo Gobierno americano supo el propio día por el Ministro de Estado del Sumo Pontífice y por Mr. Woodford. A pesar de esto y de las gestiones que los representantes diplomáticos de Francia, Inglaterra, Italia, Austria, Alemania y la Santa Sede hicieron en 7 de Abril cerca del Presidente Mac Kinley, éste se abstuvo rigurosamente de modificar su proyectado Mensaje al Congreso (Mensaje que presentó el 11 de Abril), limitándose á añadir las siguientes equívocas frases:

«Ayer, después de haber preparado el anterior Mensaje, he sabido que el último decreto de la Reina Regente de España ordena al general

Blanco proclame una suspensión de hostilidades, cuya duración y detalles no me han sido aún comunicados, con objeto de preparar y facilitar la paz.—Este hecho, con todas sus consecuencias, merecerá, seguramente, vuestra justa y solícita atención en los solemnes debates que estáis á punto de inaugurar. Si esta medida produce un resultado satisfactorio, se realizarán nuestras aspiraciones como pueblo cristiano y pacífico. En caso contrario, solo justificará nuevamente la acción por nosotros meditada.»

Pero más importante que todo esto, para otro fin más general, es la consideración de lo que estaba sucediendo en Cuba y lo que pasó en los Estados Unidos, fuera del palacio de la Presidencia de Washington, desde los primeros días de Marzo hasta bien entrado el mes de Abril.

En 1.º de Enero de 1898 se verificó en Cuba la instauración del régimen autonomista sancionado para Cuba y Puerto Rico, por los decretos de 25 de Noviembre de 1897.

Son estos tres. Por el primero, se extiende sin reserva ni limitación de género alguno, á las Antillas, el goce de los derechos políticos de que disfrutaba la Península. Por esto, en lo sucesivo regirían en Cuba y Puerto Rico las leyes complementarias de la Constitución vigente en la Metrópoli, y en especial la ley de Enjuiciamiento criminal, la de orden público, la de expropiación forzosa, la de instrucción pública, las de imprenta, reunión, y asociación y el Código de Justicia Militar. Dicho se está con esto que desaparecía la excepción sancionada por este último en su art. 29 y que en rigor echaba por tierra buena parte del decreto de 27 de Abril de 1881, que ordenó la promulgación de la Constitución española de 1876 en Cuba y Puerto Rico.

Otro de los decretos de Noviembre de 1897 se contrae al derecho electoral. Extiende á las Antillas la ley electoral peninsular de 26 de Junio de 1890; proclama el sufragio universal; niega en absoluto el voto á los institutos armados de cualquier clase que fueren; hace imposible el abuso escandaloso de los llamados socios de ocasión; declara que no se necesita autorización para procesar á ningún funcionario público; crea una Junta insular del censo electoral en la que todos los partidos políticos han de tener representación, al propio tiempo que el Gobierno general, el civil y las Salas de gobierno de la Audiencia de la capital; afirma que la jurisdicción ordinaria es la única competente para el conocimiento de los delitos electorales y somete la vigilancia de las elecciones á la Junta Central nacional del censo.

En este decreto se establece, por excepción: 1.º que para ser diputado provincial se necesita ser natural de la provincia ó llevar cuatro años consecutivos de residencia en la misma, y 2.º que para ser concejal de Ayuntamiento de más

de 1000 vecinos es precisa la residencia de cuatro años, y el pago de una cuota de contribución. También serían elegibles como concejales los que siendo vecinos y pagando alguna cuota, acreditaran con título oficial su capacidad profesional ó académica. Podrían ser Consejeros de Administración los que con arreglo al art. 25 de la ley electoral peninsular tienen capacidad para ser senadores.

El tercer decreto de los aludidos se refiere al *Gobierno y Administración de las islas de Cuba y Puerto Rico*.

Excusa muchos comentarios sobre sus antecedentes, espíritu y alcance, la reproducción de algunos de los párrafos de la Exposición que precede á este Decreto, dado sin anuencia de las Cortes, pero que éstas luego (en Mayo de 1898) sancionaron.

Muy al principio, el Gobierno explica su propósito de esta suerte:

«Propúsose, ante todo, sentar claramente el principio, desenvolverle en toda su integridad y rodearlo de todas las garantías de éxito. Porque cuando se trata de confiar la dirección de sus negocios á pueblos que han llegado á la edad viril, ó no debe hablárseles de autonomía, ó es preciso dársela completa, con la convicción de que se les coloca en el camino del bien, sin limitaciones ó trabas hijas de la desconfianza y del recelo. Ó se fía de la defensa de la nacionalidad á la represión y á la fuerza, ó se entrega al consorcio de los afectos y de las tradiciones con los intereses fortificado á medida que se desarrolla por las ventajas de un sistema de gobierno que enseñe y evidencie á las colonias que bajo ningún otro les sería dado alcanzar mayor grado de bienestar, de seguridad y de importancia.

Esto sentado, era condición esencial para lograr el propósito, buscar á ese principio una forma práctica é inteligible para el pueblo que por él había de gobernarse, y la encontró el Gobierno en el programa de aquel partido insular, considerable por el número, pero más importante aún por la inteligencia y la constancia, cuyas predicaciones, desde hace veinte años, han familiarizado al país cubano con el espíritu, los procedimientos y la transcendencia de la profunda innovación que están llamados á introducir en su vida política y social.

Con lo cual ya se afirma que el proyecto no tiene nada de teórico, ni es imitación ó copia de otras Constituciones coloniales, miradas con razón como modelo en la materia; pues aun cuando el Gobierno ha tenido muy presentes sus enseñanzas, entiende que las instituciones de pueblos que por su historia y por su raza difieren tanto del de Cuba, no pueden arraigar donde no tienen ni precedente, ni atmósfera, ni aquella preparación que nace de la educación y de las creencias.

Plantado así el problema, tratándose de dar una Constitución autonómica á un territorio español poblado por raza española y por España civilizada, la resolución no era dudosa: la autonomía debía desenvolverse dentro de las ideas y con arreglo al programa que lleva ese nombre en las Antillas, sin eliminar nada de su contenido, sin alterar sobre todo su espíritu; antes bien, completándolo, armonizándolo, dándole mayores garantías de estabilidad, cual corresponde al Gobierno de una Metrópoli que se siente atraída á implantarlo por la convicción de sus ventajas, por el anhelo de llevar la paz y el sosiego á tan preciados territorios, y por la conciencia de sus responsabilidades, no sólo ante la colonia, sino también ante sus propios vastísimos intereses que el tiempo ha enlazado y tejido en la tupida red de los años.

Luego el Gobierno dice:

De esta manera, la Constitución autonómica que el Gobierno propone para las islas de Cuba y Puerto Rico, no es exótica, ni copiada, ni imitada; es una organización propia, por los españoles antillanos concebida y predicada, por el partido liberal gustosamente inscrita en su programa para que la Nación supiera lo que de él podía esperar al recibir el Poder, y que se caracteriza por un rasgo que ningún régimen colonial ha ofrecido hasta ahora; el de que las Antillas puedan ser completamente autónomas, en el sentido más amplio de la palabra, y al propio tiempo tener representación y formar parte del Parlamento nacional. De suerte que, mientras los representantes del pueblo insular gobiernan desde sus Cámaras locales los intereses propios y especiales de su país, otros, elegidos por el mismo pueblo asisten y cooperan en las Cortes á la formación de las leyes, en cuyo molde se forman y se van compenetrando y unificando los diferentes elementos de la nacionalidad española. Y no es esta pequeña ni escasa ventaja, menos aún motivo para extrañeza, como quizás alguno pudiera sentirla, porque esta presencia de los diputados antillanos en las Cortes es un lazo estrechísimo de la nacionalidad que se levanta sobre todas las unidades que en su seno viven, solicitado hoy, como uno de los mayores progresos políticos de nuestros días, por las colonias autónomas inglesas ansiosas de participar, dentro de un Parlamento imperial, de la suprema función de legisladores y directores del gran imperio británico.

En otro lado se añade:

Seguramente algo quedará por hacer y algo necesitará reformarse. Ya lo irán mostrando á un tiempo la defensa y la censura que de sus disposiciones se hagan, y ya se irá aquilatando lo que la una y la otra tengan de fundado, permitiendo incorporar lo bueno en el proyecto y descartar lo que no responda á sus ideas fundamentales cuando llegue el momento de recibir la sanción de las Cortes.

Entiéndase, sin embargo, que el Gobierno no retirará de él, ni consentirá se retire nada de lo que son libertades, garantías y privilegios coloniales, porque pronto á completar la obra ó á esclarecer las dudas, no entiende que al presentarla á la sanción parlamentaria, puedan sufrir disminución las concesiones hechas, ni podría consentirlo si cuenta con la mayoría de las Cámaras.

Luego la Exposición se ocupa concretamente de dos de los más importantes problemas de la vida antillana: del Arancel de aduanas y de la Deuda.

Y se explica de este modo:

El comercio de exportación de la Península á Cuba, que se cifra por unos treinta millones de pesos anuales, y que además da lugar á combinaciones de importancia para la navegación de altura, ha estado sometido hasta ahora á un régimen de excepción incompatible en absoluto con el principio de la autonomía colonial.

Implica éste la facultad de regular las condiciones de su comercio de importación y exportación y la libre administración de sus aduanas. Negárselas á Cuba ó Puerto Rico equivaldría á destruir el valor de los principios sentados; tratar de falsearlas, sería incompatible con la dignidad de la Nación. Lo que al Gobierno toca, después de reconocer el principio en toda su integridad, es procurar que la transición se haga sin sacudimientos ni perjuicio de los intereses á la sombra del antiguo sistema desarrollados, y para ello preparar una inteligencia con los Gobiernos antillanos.

Porque nunca han negado los defensores más acérrimos de la autonomía la disposición de aquellos países á reconocer en favor de la industria y del comercio, genuinamente nacionales, un margen que les asegurase aquel mercado.

Así lo aseguraron siempre sus representantes en Cortes, y así continuaban asegurándolo todos los partidos de la isla de Cuba, según manifestaciones que el Gobierno tiene por irrecusables. Las quejas provengan, no de la existencia de derechos diferenciales, sino de su exageración, que impedía á las Antillas asegurarse los mercados que necesitan para sus ricos y abundantes productos, y de la falta de reciprocidad. No existiendo, pues, dificultades invencibles, hay derecho á decir que la inteligencia, más que posible, es segura; sobre todo, si se tiene en cuenta que la importación peninsular en Cuba se hace en unos 50 artículos entre los 400 que tiene el Arancel, y que de aquéllos, muchos, por su carácter especial y por las costumbres y gustos de aquellos naturales, no pueden jamás temer la concurrencia de sus similares extranjeros.

No deben, pues, alarmarse los industriales de la Península y con ellos los navieros, ante la afirmación de una autonomía que, al modifi.

car las condiciones en que se funda el Arancel, no altera los fundamentos esenciales de las relaciones económicas entre España y las Antillas. Habrá sin duda, algunas dificultades para armonizar ó compensar las inevitables diferencias de todo cambio de régimen mercantil; será preciso combinar de alguna manera ambos Aranceles, pero ni los intereses cubanos son opuestos á los peninsulares, ni está en el interés de nadie disminuir las relaciones mercantiles entre los dos países.

Sobre la Deuda de Cuba, dice la Exposición:

En cuanto á la deuda que pesa sobre el Tesoro cubano, ya directamente, ya por la garantía que ha dado al de la Península, y que éste soporta en forma análoga, es á fuera de duda la justicia de repartirla equitativamente cuando la terminación de la guerra permita fijar su importe definitivo.

Ni ha de ser éste tan enorme, así debemos esperarlo, que represente un gravamen insostenible para las energías nacionales, ni la Nación está tan falta de medios que pueda asustarle el porvenir. Un país que ha dado en los últimos meses muestras tan gallardas de virilidad y de disciplina social; un territorio como el de Cuba que, aun en medio de sus convulsiones políticas y del apenas interrumpido guerrear de treinta años, ha producido tan considerable riqueza, aun cultivando tan solo una pequeña parte de su feracísimo suelo, y que lo ha hecho por sus solas fuerzas, con escasas instituciones de crédito; luchando con los azúcares privilegiados, cerrado el mercado americano á sus tabacos elaborados, y transformando al propio tiempo en libre el trabajo esclavo, bien puede afrontar sereno el pago de sus obligaciones é inspirar confianza á sus acreedores.

Por eso, á juicio del Gobierno, importa pensar desde ahora, más que en el reparto de la Deuda, en el modo de satisfacerla, y si fuera posible, de extinguirla, aplicando los procedimientos económicos de nuestra época á las grandes riquezas que el suelo cubano asegura á los agricultores y el subsuelo á los mineros, aprovechando las extraordinarias facilidades que al comercio universal ofrece la forma insular y la situación geográfica de la que no sin razón se ha llamado la Perla de las Antillas.

Con estas ideas creáronse en Cuba dos Cámaras insulares, llamadas Cámara de los representantes y Consejo de Administración; un Gobernador general y cinco secretarios de Despacho de los asuntos puramente insulares. Las Cámaras serían, de libre y total elección de la Isla, la de Representantes y la de Consejeros de nombramiento mixto: es decir, nombrados ocho por los electores cubanos y siete por el Gobernador general entre las personas que reunieran de-

terminadas condiciones. Ambas Cámaras constituirían el Parlamento insular. El Gobernador general era de nombramiento real. Los secretarios del Despacho de nombramiento del Gobernador, pero responsables ante las Cámaras y por ende dependientes de éstas.

Las facultades de las Cámaras insulares se extendían á «acordar sobre todos aquellos puntos que no hubiesen sido *especial y taxativamente* reservados á las Cortes del Reino ó al Gobierno central» por el decreto de 25 de Noviembre de 1897 ó por las Cortes en lo futuro: siendo de advertir que «una vez aprobado por las Cortes el Decreto de Noviembre, éste no podía modificarse sino en virtud de una ley y á *petición del Parlamento insular*».

El decreto referido atribuía especialmente á este Parlamento los negocios de Gracia y Justicia, Gobernación, Obras públicas, Instrucción y Agricultura. Por consecuencia, las Cámaras insulares se ocuparían de la organización administrativa del país, de la división territorial, provincial, municipal y judicial de sanidad marítima y terrestre, de crédito público, banco y sistema monetario. También aquellas Cámaras formarían los reglamentos de las leyes votadas por las Cortes del Reino, y sobre todo entenderían en materia de procedimiento electoral, formación de censo, ratificación de los electores, manera de ejercitar el sufragio, aplicación de las leyes generales de Administración de Justicia y organización de tribunales.

El Parlamento insular haría libremente el presupuesto de gastos y de ingresos de la isla, los tratados de comercio y el arancel de aduanas. Y también las Cámaras podrían dirigirse al Gobierno Central, por medio del Gobernador general, proponiendo la derogación ó modificación de las vigentes leyes del Reino, así como la presentación de nuevos proyectos de ley ó la adopción de resoluciones de carácter ejecutivo que interesaran á la colonia.

El voto de las Cámaras debía ser sancionado y publicado por el Gobernador general, dentro del período de dos meses, en el cual el Gobernador podría suspender el acuerdo, remitiéndolo al Gobierno de la Metrópoli, para que ésta lo sancionara ó lo devolviese al Parlamento insular. Transcurridos los dos meses sin resolución del Gobierno Central, se entendería que privaba el acuerdo recurrido ó consultado.

En aquellos casos en que á juicio del Gobernador gene-

ral, los intereses nacionales pudieran ser afectados por los Estatutos coloniales, precedería á la presentación de los proyectos de iniciativa ministerial su comunicación al Gobierno Central. Y si el proyecto era de la iniciativa parlamentaria, el Gobierno reclamaría el aplazamiento de la discusión hasta que el Gobierno Central hubiese manifestado su juicio.

El Gobernador general, por medio de sus Secretarios del Despacho, nombraría todos los empleados insulares. Los demás decretos del Gobernador deberían ir refrendados por los Secretarios, únicos responsables ante las Cámaras y los Tribunales de Justicia. El Gobernador respondería ante el Tribunal Supremo de la Metrópoli. Además el Gobernador era el jefe del Ejército y de la Marina; llevaba la representación del Estado en las relaciones con el exterior y respondía del orden y la tranquilidad de la Colonia; todo lo cual estaba sustraído á la competencia de los Secretarios del Despacho del Gobierno insular.

La organización municipal sería obligatoria en todo grupo de población superior á mil habitantes. Todo Municipio estaría facultado para estatuir sobre instrucción, vías de comunicación, sanidad local y presupuestos municipales. Nombraría y separaría libremente á los empleados y elegiría á los alcaldes y tenientes de alcalde, entre los concejales.

Al frente de cada provincia habría una Diputación provincial, elegida, lo mismo que los Ayuntamientos, en la forma que determinaran los Estatutos coloniales. Esas Diputaciones serían autónomas en todo lo referente á la creación y dotación de establecimientos de instrucción pública, servicios de beneficencia, vías provinciales (fluviales ó marítimas), presupuestos y nombramiento y separación de sus empleados.

Las elecciones de concejales y diputados provinciales se harían de modo que las minorías tuviesen representación. — Todo acuerdo municipal que tuviera por objeto la contratación de empréstitos ó deudas municipales carecería de fuerza ejecutiva, si no fuese aprobado por la mayoría de los vecinos, cuando así lo hubiera pedido la tercera parte de los concejales. Es decir, el *referendum*.

Todo ciudadano podría acudir á los tribunales de justicia, cuando entendiéndose que sus derechos ó intereses fueron violados por los acuerdos de un Municipio ó de una Diputa-

ción provincial. También el Ministerio fiscal podría recurrir ante los tribunales por las infracciones de ley ó las extralimitaciones de facultades cometidas por los Ayuntamientos y Diputaciones.

De los acuerdos de los Ayuntamientos entendería la Audiencia del territorio y de los acuerdos de las Diputaciones la Audiencia Platorial de la Habana. En apelación del fallo de ésta, el Tribunal Supremo.

El Decreto que aquí ahora se examina contiene en su último título, otra gran originalidad aparte del *referendum* antes citado

El Gobernador general podrá acudir, á título de Jefe del Poder ejecutivo colonial, cuando lo estime oportuno, ante la Audiencia Platorial de la Habana para que ésta dirima los conflictos de jurisdicción entre el Poder ejecutivo y las Cámaras insulares. Si surgiera alguna cuestión de jurisdicción, entre el Parlamento insular y el Gobernador general en su calidad de representante del Poder central, que á petición del primero no fuera sometida al Consejo de ministros del Reino, cada una de las dos partes podrá someterla á la resolución del Tribunal Supremo del Reino, que resolverá en pleno y en una sola instancia.

No procede ahora examinar y discutir detenidamente estas reformas, de no escasos defectos. Para el fin con que aquí se citan basta reconocer, primero, que tienen una grandísima importancia y rompen con la tradición burocrática mantenida, mas ó menos resueltamente, por todos los partidos monárquicos y de gobierno de España, dentro del siglo corriente: 2.º que corresponden, en lo esencial, á la propaganda hecha por los autonomistas antillanos desde 1879 á esta fecha, y 3.º que en ciertos extremos exceden, bajo el punto de vista expansivo, á lo que rige en materia colonial en Inglaterra y las colonias inglesas.

Las dos primeras afirmaciones por nadie podrán ser puestas en duda; aun ahora que nadie se acuerda ó quiere acordarse de que la única vez que se planteó en el Parlamento español la cuestión de la autonomía colonial, para ser resuelta inmediatamente, por medio de una votación parlamentaria—ó sea en 15 de Junio de 1886—sólo los diputados autonomistas de las Antillas y los republicanos peninsulares votaron en pro, oponiéndose á ellos todos los monárquicos de la Cámara. La proposición suscrita por la

minoría autonomista de Ultramar sumó solo 17 votos en pro frente á 217 en contra (1).

En cuanto á la íntima relación de las reformas de Noviembre con el programa de los autonomistas cubanos, ya dice lo suficiente la comparación de los decretos de Noviembre con los Manifiestos de las Directivas autonomistas de Cuba y Puerto Rico y con los discursos y las proposiciones de ley de los diputados y senadores antillanos en las Cortes españolas, desde 1875 á 1896 (2). Pero á todo eso hay que añadir la declaración explícita que los órganos directivos locales de esos autonomistas hicieron en Diciembre

(1) Véase mi libro *La República y las libertades de Ultramar*.

(2) Véase mi libro *La República y las libertades de Ultramar*. Un vol. Madrid 1881.

El índice de los tres capítulos referentes á esta materia es el siguiente:

I. El partido autonomista cubano.—La Patria chica.—Sentido conservador de aquel partido.—La exuberancia tropical.—La personalidad insular.—Comparación de lo que sucede en las Vascongadas, en Cataluña y en Galicia.—Las fórmulas autonomistas de 1878, 1881 y 1883.—Las declaraciones parlamentarias de los autonomistas antillanos en las Cortes de 79, del 82 y del 95

II. La obra de los representantes parlamentarios de las Antillas en la Península.—El debate de Junio de 1894.—Declaraciones transcendentales del Sr. Cánovas, Presidente del Consejo de Ministros.—La enmienda Montoro de 1886.—Las siete proposiciones de ley de los autonomistas de 1886.—Los programas de 1887 y 1891 de los autonomistas de Puerto Rico.

III Posición difícil de la representación antillana autonomista en la Península.—Su falta de medios.—Reserva de la colonia antillana en la Metrópoli.—Los periódicos antillanos en esta.—*La Revista* de las Antillas del Sr. Cepeda.—*La Tribuna* de 1882-83.—Programa de este periódico.—Preocupaciones peninsulares.—El supuesto separatismo necesario.—El fondo de desconfianza.—La burocracia.—La novedad de la doctrina autonomista.—El espíritu castellano.—El supuesto exclusivo de las colonias.—Lejanía de la masa política autonomista.—El particularismo antillano.—Aislamiento de los diputados y senadores autonomistas.—La Unión parlamentaria republicana pudo rectificar algo aquel aislamiento.—La constitución defectuosa de la representación autonomista.—Los méritos de los diputados y senadores.—Sus gloriosas campañas.—Necesidad de elementos auxiliares.

de 1897, afirmando que en los decretos aludidos estaba contenida la doctrina de los partidos autonomistas de las Antillas. De esta suerte se rectificó, por quien podía, la tesis mantenida por los directores de la Junta separatista de Nueva York de que la Autonomía consagrada por aquellos decretos no era una verdadera Autonomía (1).

Más discutible parecerá la tercera tesis. Sin embargo, es positivo que la Gran Bretaña no admite en el Parlamento nacional ni en la dirección general de la política británica á los representantes de sus colonias.—Del propio modo, tampoco acepta responsabilidad alguna en la deuda y las obligaciones de éstas.—De ninguna suerte admite límite á lo que allí se llama el *derecho imperial* ó sea á la facultad del Parlamento de resolver por sí y de imponer á las colonias lo que estime conveniente al interés de toda la nación, aun cuando se trate de materias más ó menos sometidas á la jurisdicción colonial.—Y en fin, en punto al veto de los gobernadores, aun en las colonias de gobierno responsable, ni la legislación ni la práctica inglesas reconocen cortapisas.

En tal supuesto, yo, que seguramente no he pasado nunca por conservador ni pacato en mis campañas autonomistas, tengo que oponer bastante á los arts. 30 y 43 del decreto de 25 de Noviembre de 1897 que expresan, con deplorable vaguedad, la doctrina referente á la suspensión de los

(1) A los pocos días de anunciado el propósito del Gobierno presidido por el Sr. Sagasta de hacer reformas autonomistas en las Antillas, visité al Sr. Presidente del Consejo de Ministros, como Senador de la Universidad de la Habana, para comunicarle en nombre de la Junta directiva autonomista de Cuba el siguiente cablegrama:

«Sírvasse transmitir Presidente Consejo y Ministro de Ultramar saludo partido autonomista que mantiene inquebrantable fe su programa basado soberanía madre Patria y principio autonomista colonial según en sus manifiestos y declaraciones se han desenvuelto y que dichos señores se han servido aceptar. Cumple partido grato deber felicitando Gobierno ofreciendo cordial apoyo restauración paz pública y completa realización dicho programa.—Galvez».

A poco (Diciembre del 97) y tan pronto como la directiva autonomista cubana tuvo conocimiento detenido de los decretos de 25 de Noviembre de 1897, recibí otro telegrama oficial para que declarase al Gobierno de la Metrópoli que aquellos decretos contenían el programa del partido autonomista de la grande Antilla.

acuerdos insulares cuando estos son contrarios á la Constitución del reino ó al derecho nacional. Más grave aún me parece el art. 2.º adicional que sustrae á la absoluta competencia de las Cortes la modificación de los Estatutos coloniales, una vez aprobado el de 25 de Noviembre del 97.

Esta salvedad, cuyo valor doctrinal me parece evidente, abona mi afirmación de que en el orden de las ideas, lo hecho por el Gobierno español á fines de 1897 reviste un carácter por todo extremo excepcional, en relación con las experiencias colonizadoras de nuestros tiempos. Sin que esto obste—como antes he indicado—al reconocimiento de otras equivocaciones y contradicciones de aquel decreto, sobre cuya confección corren errores que algún día deberé rectificar extensamente (1).

Del mismo modo convengo en que el Ministerio liberal no hizo por aquel entonces todo lo necesario para que las reformas de Noviembre produjeran el apetecible efecto, teniendo en cuenta que de esas reformas se esperaba, no sólo un mejor régimen de nuestras Antillas, si que también la terminación de la guerra cubana, en la cual eran parte los cubanos insurrectos y los simpatizadores de los Estados Unidos. No tengo por qué ni para qué demostrar que no todo lo que yo recomendé por aquel entonces fué atendido y que lo hecho al fin en Puerto Rico me intranquilizó y apenó extraordinariamente.

Pero con la misma sinceridad debo sostener que la nueva conducta del Gobierno español abonaba, á principios de 1898, así la confianza que en él puso la mayor parte de la sociedad cubana, ansiosa de libertades y de paz, como las esperanzas generales de próximos y satisfactorios resultados.

Por lo pronto se constituyó el Gobierno insular con elementos prestigiosos, tomados de los antiguos partidos autonomista y reformista, fundidos ahora al efecto de dar realidad y eficacia á los decretos de Noviembre. El antiguo partido conservador aceptó la situación creada por éstos y se dispuso á cooperar á la normalización del orden político y social de la grande Antilla, sin menoscabo del carácter de aquel grupo político. Renació la fe en el país. Terminaron las deportaciones gubernativas, los fusilamientos y las

(1) Por lo pronto véase mi discurso pronunciado en el Congreso de los diputados de España en 11 de Mayo de 1898, al discutirse el bill de indemnidad pedido por el Gobierno, con motivo de los Decretos de 25 de Noviembre de 1897.

redadas políticas. Y comenzaron á volver los emigrados voluntarios, las gentes temerosas que desde 1896 á mediados de 1897, se habían refugiado principalmente en Méjico y los Estados Unidos de América. Hasta en la guerra se notaron los efectos del cambio de dirección política y militar. Todas las acciones militares de aquellos días fueron favorables á las tropas del Gobierno, las cuales salieron de la inacción en que aparecían durante el segundo semestre de 1897, en el cual los insurrectos llegaron á dominar completamente todo el campo del departamento oriental. Luego los insurrectos del resto de la Isla evitaron todo choque con las tropas del Gobierno; varios cabecillas acataron la nueva legalidad y algunos y caracterizados simpatizadores publicaron en Nueva York su opinión favorable á la paz garantizada por el nuevo régimen. Y mientras que los jefes de la insurrección iniciaron una serie de tremendas medidas contra la tendencia cada vez más acentuada entre los revolucionarios á transigir con el Gobierno insular, la directiva separatista de Nueva York comenzó una vigorosa propaganda sobre el tema de la insubsistencia probable de las nuevas reformas, ya que era imposible insistir en la negación de que éstas fueran verdaderamente autonomistas.

El Gobierno insular cubano dió en 22 de Enero de 1898, un Manifiesto al país. En él se leen las siguientes frases:

El nuevo régimen es el pleno reconocimiento de la personalidad política de la colonia. Dueña será en adelante de sus destinos, y como en los pueblos libres al poder acompaña la responsabilidad, los desaciertos que tuvieron su origen en el ejercicio del primero imputables serán tan sólo á la colonia autónoma. Para deliberar y resolver en punto á todos los asuntos propios de la vida local existirá el poder legislativo, asiento de la voluntad popular.

Solicito guardador de los derechos y libertades de la colonia y genuino representante de las tendencias y aspiraciones dominantes en el Parlamento insular, el poder ejecutivo, en su carácter de Gobierno responsable, cuidará estrechamente de llevar á la práctica con entera fidelidad las determinaciones que el legislativo adoptare, haciendo que la fuerza obligatoria que les corresponde conserve intacta toda su eficacia. Así la fórmula de *el gobierno del país por el país y para el país* encarnará en la vida real, imperando en definitiva las corrientes de opinión que hayan alcanzado el concurso del sentimiento público. Es un régimen que descansa exclusivamente en la confianza que á los

ciudadanos inspiren los depositarios del poder público, y dentro del cual el voto decisivo pertenece, por lo mismo, al país... ..

En la clara conciencia de su responsabilidad el Gobierno provisional llenará todos sus deberes con inquebrantable energía al par que con mesurada prudencia, sin dar entrada jamás á móviles apasionados. Fuerte con la nobilísima cooperación del Gobierno de S. M. y con el leal concurso de su digno representante; fuerte también con el apoyo de la opinión honrada y sensata aquí y en la Metrópoli; poseído de robusta fe en la restauración de la paz merced á la salvadora influencia de la nueva política colonial, que será perdurable, y con la entereza de ánimo que la situación exige para conducir á buen puerto la combatida nave, pondrá (ya viene haciéndolo), todo su empeño en asegurar al nuevo régimen la confianza de todos. El establecimiento de la autonomía no es únicamente la victoria de un partido; es el triunfo del buen sentido, de la experiencia y de la previsión, del patriotismo sano é inteligente que acalla las pasiones para que domine la razón y se midan los funestos resultados de la intransigencia contra el remedio que la humanidad, la justicia y la cordura prescriben de consuno para poner pronto término á los males públicos, los cuales á todo alcanzan y nada perdonan.....

Por la alteza de miras á que obedece; por el ancho campo que abre á todas las manifestaciones de la vida política y social; por las garantías que brinda á todos los intereses legítimos bajo el amparo de la ley, el nuevo régimen está llamado á ser el patrimonio común de cuantos aman á Cuba con amor noble y vivificante, hayan nacido en su suelo ó con ella estén unidos por los lazos de la afición ó de la fortuna. La autonomía á nadie excluye; es un régimen abierto á todos, y á todos ofrece los medios de cooperar honradamente á la consecución del bien general. Sin desdoro para nadie y con honor para todos llama la nueva legalidad á su seno, á los que se precien de buenos ciudadanos y que si lo fueren en realidad, no habrán de permanecer impassibles ante las desventuras de todo un pueblo é indiferentes ante la consagración de sus derechos.

Sea el pasado enseñanza provechosa, pero no semillero de odios ni fuente impura de recriminaciones. Ha muerto para siempre la política de la suspicacia y de la proscripción. Todos somos cubanos y todos somos peninsulares.

Tiempo es ya que la reflexión se sobreponga á los extravíos de la voluntad y el civismo al amor propio. Nadie tiene derecho á inmovilizar un pueblo en aras de ideales no compartidos por la comunidad, al paso que todos vienen obligados á secundar generosamente el alto empeño de mejorar la suerte de la Patria amada, asegurándole los dos bienes por excelencia para toda sociedad culta: el orden y la libertad.....

En estas circunstancias era lo natural esperar que con relativa calma, la nueva política colonial produjera su efecto. Así lo reconocieron y proclamaron todos los periódicos europeos y buena parte de los americanos. En idéntico sentido se expresaron los representantes de los Gobiernos de Europa cerca del de Madrid.

Buena prueba de la firmeza y el alcance de esta benévola disposición de todo el mundo contemporáneo fué la resolución de los banqueros europeos de que antes he hablado, de hacer al Gobierno español un empréstito considerable para la unificación y el pago de la deuda de Cuba.

Para este empréstito se buscaría un capital de 100 millones de libras esterlinas, dedicándose ochenta á la compra de toda la Deuda cubana, consolidada al 3 por 100 y garantizada exclusivamente con las rentas de la grande Antilla y con los beneficios que reportarían algunas concesiones mineras y de ferrocarriles y varias explotaciones agrícolas. Los 20 millones restantes se dedicarían á la explotación de las riquezas naturales de Cuba por una empresa particular, pero con la protección del Gobierno español. Los patrocinadores de este negocio no creían inverosímil que el Gobierno inglés tomara, en firme, pero en secreto, 50 millones de libras, como hizo, en su día, con las acciones del canal de Suez.

Todo esto aparte de los dos empréstitos de ocho millones de libras sobre las minas de Almadén y la garantía del impuesto de tráfico y navegación; así como de la creación en Madrid de un Banco anglo español, con capital de cuatro millones de libras, cuyo principal objeto sería colocar en el mercado inglés los pagarés y Deuda flotante del Gobierno español.

Claro se está que los sostenedores y simpatizadores de la insurrección cubana habían de hacer todos los esfuerzos imaginables para destruir las nacientes esperanzas y para que fracasaran tanto los decretos autonomistas de Noviembre del 97, como los esfuerzos del Gobierno insular cubano.

Con tal propósito se iniciaron y desarrollaron algunos trabajos para provocar graves perturbaciones del orden público en las principales ciudades de Cuba. Las autoridades de la Habana tuvieron noticias de un alboroto proyectado para los últimos días de Diciembre del 97; alboroto que debía verificarse en la capital de la Isla antes de que se nombrara y comenzara á funcionar el nuevo Gobierno autonomista

Abortado el plan, se reprodujo, dando por efecto el motín de la Habana del 5 de Enero.

No hay por qué ni para qué negar que éste tuvo una positiva gravedad. Ni sería discreto rebajar lo más mínimo la severa censura que merecen todos cuantos por diferentes motivos, en distinto estilo y con diversa responsabilidad, figuraron en aquel triste suceso, como principales actores y cooperadores, manifiestos ó reservados. Varios periódicos, aparte del provocador del conflicto, fueron atropellados ó amenazados; la alarma producida en la Habana llegó á ser extraordinaria; la repercusión del suceso fuera de Cuba, inmensa y suma la transcendencia del mismo, en los críticos momentos de la instauración del nuevo régimen. Pero también hay que advertir que ni los cónsules ni los particulares extranjeros residentes en la Habana corrieron el menor peligro, ni las autoridades españolas—insulares ó peninsulares—economizaron energías para conseguir un rápido y completo éxito, que en efecto consiguieron, restableciendo el orden con la cooperación de todos los elementos sociales, y de tal suerte, que, desde entonces hasta ahora, no se ha advertido el menor síntoma de la reproducción de aquellos deplorables sucesos.

Cierto que uno de los sensibles efectos de aquel incidente fué el fracaso de las gestiones que en Europa se hacían para dar á la nueva situación cubana poderosos medios económicos que asegurasen su desarrollo. Aun sin que hubiese por alguna parte (y lo hubo) interés en asustar á los negociantes europeos, el motín de Enero tenía por sí bastante fuerza para aconsejar á estos la espera. Luego vinieron otros motivos para determinar el abandono completo de todo proyecto financiero: porque pronto se puso en evidencia que la insurrección separatista continuaba disfrutando del apoyo de los Estados Unidos y que en este país había muchos elementos propicios á la guerra de la República con España (1).

(1) Este particular, absolutamente desconocido por la prensa española y por la casi totalidad de nuestros hombres políticos, ya ha comenzado á tratarse públicamente en algunos círculos de Londres, con motivo de la reciente quiebra del famoso negociante Mr. Kooley, que era el principal agente de la operación financiera arriba señalada. Mr. Kooley no oculta (según se me asegura), que el fracaso de la ne-

Pero también es exacto que, aun después del 5 de Enero, funcionó regularmente el Gobierno insular y comenzó la transformación del régimen administrativo de Cuba. De igual modo puede asegurarse que después del 5 de Enero, la insurrección no hizo el menor avance y que todo se dispuso, con relativa regularidad, para conseguir la realización de dos actos complementarios de la creación del Gobierno insular y absolutamente necesarios para afirmar la nueva situación política. Me refiero á la elección de representantes en las Cortes españolas para contribuir, en el seno de estas, á la disensión, ratificación y votación definitiva de los decretos de 25 de Noviembre de 1897, según preceptuaban los artículos adicionales de estos y á la elección y constitución de las Cámaras insulares, cuya misión excepcional, por muchos conceptos, era de completa evidencia. Las elecciones de representantes en Cortes, por sufragio universal, habían de verificarse el 27 de Marzo y la apertura de las Cortes en Madrid el 25 de Abril, fecha que se anticipó siete días por decreto de 14 de Abril de aquel año. La elección de las Cámaras insulares tendría efecto á mediados de Abril y la apertura del Parlamento colonial el 4 de Mayo.

En tanto el Gobierno insular publicó sus Manifiestos de 22 de Enero y 30 de Abril. El día 2 de Abril, el mismo Gobierno dirigió al Presidente Mac Kinley el siguiente cablegrama:

Ante el empeño que forma ese Gobierno en restablecer la paz y la prosperidad de este país, cúmplenos decirle que los insurrectos forman una minoría, mientras los autonomistas representamos la mayoría del pueblo cubano, decidida á salvar los intereses de la civilización por los medios de la libertad y la justicia.

Y á mediados de Abril, cuando se evidencia la política violenta del Gabinete norteamericano, el Gobierno de Madrid recibió de la Habana el siguiente despacho, firmado por el Gobernador general D. Ramón Blanco:

«El Consejo de Secretarios, con plena conciencia de su representación como primer Gobierno autonomista de Cuba, ruega á V. E. se sirva elevar á S. M. la Reina y al Gobierno, la oferta incondicional de su con-

gociación española ha sido, quizá, el primer motivo ó por lo menos la causa ocasional de su ruina.

curso para la defensa de los derechos de España y de las libertades y la regeneración de esta isla, y la seguridad de que la inmensa mayoría de este pueblo, alentada por el generoso espíritu de nuestra raza y agradecida á la noble confianza y rectitud de la Madre patria al otorgarle en críticas circunstancias un sistema de Gobierno propio, que brinda á toda sana aspiración, eficaces garantías, y admite razonables ampliaciones, está y estará resueltamente á su lado, para mantener á todo trance y á costa de todos los sacrificios, el honor y la soberanía de la nación y las libres instituciones de la colonia

Aparte de esto, el Gobierno insular decretó en 1.º de Abril del 98, que en vista de estar adelantada la pacificación de las provincias occidentales de Cuba, «cesara la concentración de los campesinos, autorizándoles para regresar con sus familias á los campos para dedicarse en ellos á sus labores habituales, protegidos por las autoridades y juntas de auxilios.» Al efecto, y á fin de que aquellos no carecieran de medios para dedicarse al cultivo, se abrirían obras públicas y se establecerían cocinas económicas que normalizasen y facilitaran el servicio.

Por este mismo tiempo, el Gobierno insular cubano enviaba á Washington dos representantes para preparar un tratado de comercio, del modo y manera que autorizaban los artículos 37 al 40 del Decreto de 25 de Noviembre de 1897. En Washington permanecieron, poco tiempo, aquellos funcionarios en relación constante con los ministros del Presidente Mac Kinley y alentados, al principio, por el Gobierno y los funcionarios americanos para llegar á una verdadera intimidad comercial de los Estados Unidos con Cuba y quién sabe si con la misma Península española.

Por cierto, que, (según se me asegura) si bien los delegados de Cuba terminaron todos sus proyectos, no sucedió lo propio con el representante de los Estados Unidos, de suerte que la ruptura de relaciones de estos con España se pudo producir antes de que las oficinas americanas hubiesen proporcionado los datos y las proposiciones que les correspondían y que se consideraron como urgentes, al principiar las amistosas negociaciones á que he aludido antes.

Se comprende que el prospecto feliz de las cosas cubanas á fines de Enero de 1898 había de disgustar profundamente á los partidarios de la insurrección separatista. De aquí un desesperado esfuerzo de éstos, que entonces pusieron todo su celo en la agitación popular de al-

gunas ciudades de Norte América y en resabar determinadas actitudes del Gobierno de Washington, prescindiendo casi por completo de la débil campaña militar en los campos de la grande Antilla.

La agitación norteamericana fué considerable. Los periódicos de mayor circulación, como el *World*, el *Sun*, y el *Herald*, se cubrieron de grabados y anuncios sensacionales. El grupo de senadores, de muy atrás comprometidos en favor del movimiento separatista cubano, redobló sus esfuerzos dentro y fuera de las Cámaras. Verificáronse meetings, no solo en aquellas localidades donde, como en las principales poblaciones de la Florida, el elemento cubano era considerable, sino en otras hasta entonces extrañas á las simpatías separatistas. Discutióse acaloradamente si procedía tan solo el reconocimiento de la beligerancia de los cubanos insurrectos ó la proclamación de la República de Cuba, aun cuando fuera evidente que, por aquel entonces, los insurrectos difícilmente habían podido constituir un Comité directivo en la isla, sin lograr nunca establecerlo en población alguna, ni aun en el departamento Oriental, donde disfrutaría de mayor devoción y ayuda por parte de los campesinos, guajiros ó negros. No menos palpable era que el campo de la insurrección se había reducido considerablemente, estando aseguradas las comunicaciones y los cultivos en todo el Occidente y que las fuerzas insurrectas habían disminuído sin atreverse á salir de sus naturales defensas, en el fondo de la manigua. La propaganda antiespañola crecía al compás de los difíciles éxitos del Gobierno autonomista. Pronto aparecieron dominando todo este movimiento, el sentimiento de la expansión territorial norteamericana, la idea de la hegemonía y el protectorado de la gran República sobre todo el nuevo Continente y el propósito de extremar la famosa doctrina de Monroe (1), ya bastardada desde la época del presidente Polk, ó sea desde 1845.

Hay bastantes motivos para pensar que Mr. Mac Kinley, como Mr. Cleveland y sus respectivos ministros, Mr. Day

(1) Sobre esta doctrina pueden verse mis trabajos sobre *Monroe*, su obra y su tiempo, y mis lecciones del Ateneo en Madrid sobre *La intervención internacional*. (La cuestión de Oriente, de Italia y la de América). — *Estudios de Derecho internacional*.

y Mr. Olney, no veían con buenos ojos la intervención en Cuba. En igual sentido estaban los presidentes de las dos Cámaras. Todavía más opuestos á toda aventura se mostraban algunos publicistas, profesores y políticos norteamericanos. Buena prueba de ello son los folletos que, con un valor cívico y personal admirable, publicaron por aquel entonces hombres de la altura y del prestigio científicos de Mr. Phelps y Mr. Harts; el primero, una de las grandes autoridades jurídicas de la República, Embajador de la misma en Londres hasta hace poco tiempo y candidato hoy muy sostenido á la presidencia del Tribunal Supremo de aquel país; el segundo, docto catedrático de la Universidad de Harvard y autor de varios importantísimos libros sobre el derecho y representación de los Estados Unidos, como la celebrada *Introducción al estudio del Gobierno federal* y los *Ensayos prácticos sobre el Gobierno americano*, con motivo de la cuestión chilena en 1891. .

Pero la ola creció y las simpatías en favor de Cuba oprimida, se trocaron en pasión por la extensión y el poderío de Norte América. Por momentos subió la presión. En esto únicamente se apoyan los que pretenden excusar las contradicciones y el repentino cambio del Gobierno de Washington, respecto del que, su ministro en San Petersburgo aseguraba al Gobierno ruso, y éste trasmitía, en 30 de Marzo, al español, «que no contribuiría al conflicto de la República con España».

El incidente del *Maine* sirvió á maravilla para que esa presión aumentase. La malicia ha atribuido este deplorable hecho, á los intransigentes y patrioteros de Cuba, que soñaban con vencer en lucha franca, á los Estados Unidos, allí considerados como el alma de la insurrección separatista, y cuyo triunfo en último caso facilitaría á España una salida honrosa, que ellos creían imposible frente á frente de los cubanos insurrectos. Pero también la malicia atribuye á algunos separatistas cubanos, y sobre todo á los simpatizadores de los Estados Unidos, aquel deplorable suceso, cuyo perfecto esclarecimiento ha impedido el Gobierno norteamericano, con una torpeza y una insistencia apenas comprensibles. Lo verosímil es que aquella catástrofe fué debida á causas fortuitas.

Luego viene el incidente de la carta del ministro español Sr. Dupuy de Lome contra el presidente Mac Kinley. No hay que olvidar que esa carta era privada y que, sustraída

del correo, fué publicada por el *Journal* de Nueva York, ardoroso enemigo de España.

Bajo esta presión, el Gobierno de los Estados Unidos realiza y prepara actos por todo extremo sospechosos. Principia por resistir abiertamente las reclamaciones que el español le hace contra la permanencia y la propaganda de la junta separatista cubana en Nueva York. Luego resuelve que el acorazado *Maine* fondée en el puerto de la Habana, á riesgo de que las gentes de fuera crean que la presencia de ese buque es precisa como garantía de la vida y hacienda de los americanos en la capital de Cuba, mientras los cubanos y los peninsulares sospechan, por diverso concepto, que este es un medio de alentar la insurrección ó de provocar un conflicto, como el que buscaba el barco filibustero *Laurada* viniendo á Valencia, so pretexto de cargar frutas. Enseguida, y muy pronto, se organizan las escuadras americanas que se sitúan en las proximidades de Cuba y se inician los grandes armamentos en la República. Su efecto debió ser tal, que el Gobierno español lo denunció á las Potencias europeas, y el ministro de España en Washington no titubeó en afirmar, después de ciertas investigaciones, que aquel movimiento alarmante obedecía al deseo del Gobierno americano de entretener á los jingoes. Así aparece en los despachos del 7 y 8 de Febrero de 1898. Pero el 25 de este mes, ya el mismo ministro español en Washington se inquieta ante la importancia y la precipitación de esos aprestos militares. Viene luego la reclamación de Washington pidiendo el inmediato relevo del ministro español Dupuy de Lome, cuando éste ya había dimitido: relevo seguramente justificado, pero que abonaba, en último extremo, la petición de un traslado del cónsul Lée, muy sospechoso para las autoridades y los particulares españoles de la Habana. A poco, surge la pretensión americana (3 de Marzo) de favorecer con auxilios á los reconcentrados de Cuba, y luego la idea de que estos auxilios sean llevados por buques de guerra de los Estados Unidos: pretensión que exacerbaba á los patriotas de la isla y pareció ocasionada á muy serios conflictos, según el Gobierno español hizo saber al de Washington. Divúlgase el dictamen de los ingenieros y marinos norteamericanos sobre la voladura del *Maine*, y el Gobierno de los Estados Unidos se niega, primero, á que los ingenieros y marinos españoles concurren con los de Norte América para formar juicio,

y segundo, á que se comuniquen al Congreso americano el primer dictamen, acompañado del informe de los españoles.

Y á todo esto no cesan las reclamaciones del Gobierno de Madrid al de Washington y á los de las grandes Potencias de Europa: ya sobre la necesidad de tiempo y espacio para que las reformas autonomistas de Noviembre de 1897 produzcan sus inmediatos efectos, contándose entre ellos, en primer término, las elecciones de diputados á Cortes y de miembros en la Asamblea Colonial, ya sobre la interpretación que los insurrectos y sus simpatizadores dan á la actitud, y las determinaciones de los Estados Unidos, como modos de protección al movimiento separatista (cuya gran fuerza radicaba en las juntas de Nueva York) y como ocasión propicia de rozamientos, y choques de los Gobiernos americano y español, que concluirían por una guerra, postrera esperanza del agonizante separatismo cubano.

No hay que pecar de prevenidos y maliciosos en la estimación de estos hechos y de estas indicaciones; pero aun sin la confirmación que sucesos absolutamente indiscutibles han dado después á ciertas desfavorables presunciones de los alarmados observadores de Marzo y Abril de 1898, sería pecar de candorosos, hasta un grado apenas verosímil el negar la influencia directa que la actitud de los Estados Unidos (de su Gobierno y de sus ciudadanos) ha tenido en el mantenimiento de la insurrección cubana á partir de los primeros días del mes de Febrero de 1898.

Sobre todo es imposible cerrar los ojos ante la evidencia de que, á medida que se acercan las elecciones de diputados á Cortes y de la Asamblea insular, las dificultades y aun las amenazas de Norte América crecen. Cuando ya se está á punto de que se reúnan las Cortes en Madrid y la Asamblea insular en la Habana, el Gobierno de Washington se descompone, obliga al ministro Mr. Woodford á variar de actitud y de lenguaje y fórmula las acres exigencias y la conminación intolerable que aparecen en la *Manifestación escrita* de 23 de Marzo y en el *Apunte* de 29 del próximo mes. Desde entonces no hay en aquel Gobierno otra disposición que la exigencia y la esperanza de que el de Madrid se le someta, reconociendo la personalidad de los insurrectos y el patronato de Washington.

La mayor fuerza de esta consideración arranca de la imposibilidad de imaginar que otra cosa hubieran podido hacer los Estados Unidos para evitar la eficacia de los decretos autonomistas de 1897 y la pacificación de Cuba, si realmente se hubieran propuesto, de un modo público é indiscutible, semejante conducta.

5

Así como he negado fuerza al argumento de la debilidad del Gobierno español respecto á las exigencias del americano, antes de la seria intimación formulada por éste, á fines de Marzo de 1898, tengo que reconocer que no sería fácil refutar el cargo relativo á cierta excesiva confianza y hasta cierto candor, de parte de los políticos españoles, en sus gestiones y precauciones contra los procedimientos de Norte-América, á partir de mediados de Enero del mismo año. Los datos del *Libro Rojo* ya ofrecen serios motivos para una reserva poco satisfactoria: pero lo que después se ha evidenciado, por actos precisos del Gobierno de Washington, por la publicación de las instrucciones de éste á sus cónsules, sus marinos y sus soldados, y por las declaraciones, más ó menos officiosas, de carácter retrospectivo, de sus ministros, sus representantes y sus diplomáticos... eso ya impone una explicación en regla á los directores de la política española. Tal explicación no se ha hecho todavía é interesa mucho, por lo menos, al prestigio de nuestra diplomacia y á la claridad de nuestra desorientada política exterior.

A decir verdad, más duros son los cargos que resultan contra los políticos de Washington. Pero esas tachas y esos reparos son de carácter muy opuesto á los que se pueden formular contra los gobernantes de España.

De todas suertes, resulta que, hacia el 8 de Febrero de 1898, ya el Gobierno español debió comprender que sus relaciones con el americano tomaban un carácter alarmante y que en previsión de acontecimientos más graves era preciso llamar la atención de las demás Potencias. Así lo hizo, hasta cierto punto, determinando sus gestiones distintas actitudes en las Potencias requeridas, cuya disposición contribuye á acentuar el carácter internacional que desde su origen tuvo la cuestión de Cuba.

Esto se desprende del *Libro Rojo*. Pero hay que repetir que la publicación irregular y mutilada de la mayor parte

de los despachos y las comunicaciones que constituyen el referido *Libro* no consiente un juicio definitivo. Tal juicio se formulará cuando los otros Gobiernos extrranjeros, más des- preocupados que el español, comuniquen á sus respectivos Parlamentos, como es costumbre, un extracto de cierta ex- tensión, de sus tratos y gestiones diplomáticos, en el curso de los años 97 al 99

Asimismo hay que notar que en el *Libro* mencionado no consta una verdadera gestión cerca de otros Gobiernos que los europeos.

Cierto que en el mencionado *Libro* aparecen varios tele- gramas y algunas circulares dirigidos genéricamente á *los representantes de España en el extranjero*.— Estos des- pachos comienzan en 24 de Marzo de 1898, cuando el mi- nistro norteamericano Mr. Woodford advierte al Gobierno español que el Presidente Mac Kinley está dispuesto á lle- var al Congreso el asunto del *Maine* y la totalidad de las relaciones de España y los Estados Unidos, si en muy po- cos días no se llega á un acuerdo que asegure la paz inme- diata de Cuba.

También tiene igual carácter de generalidad el despacho de 25 de Marzo, proponiendo el arbitraje de las Potencias amigas: el de 31 de Marzo, dando cuenta del *Apunte* de Mr. Woodford: el de 18 de Abril con el primer Memoran- dum español: y las dos circulares de 21 y 23 de Abril, dando cuenta del rompimiento de relaciones con Norte América y del segundo Memorandum de nuestro Gobierno.

Pero hay que notar: 1.º que en todo el *Libro Rojo* no aparece la menor alusión á las contestaciones de los repre- sentantes españoles en América. 2.º que de ninguna suer- te se hacen á éstos, encargos especiales más ó menos re'a- cionados con la situación y la acción de la América latina. 3.º que antes del 24 de Marzo, ya el Gobierno español se había entendido por tres veces (16 y 22 del propio mes, y el 8 del anterior) de un modo particular, con los Gobiernos de Francia, Alemania, Austria, Inglaterra, Rusia é Italia, obteniendo de ellos contestaciones más ó menos satisfacto- rias. 4.º que al pedir consejo y proponer el arbitraje á los demás Gobiernos, el Gabinete de Madrid sólo se refiere á las *grandes Potencias*, según resulta del texto explícito de los telegramas circulares de 24 y 31 de Marzo; y 5.º que sólo con estas Potencias y luego con la Santa Sede, cuenta, después del 24 de Marzo; sobre todo, para llegar á la sus-

pensión de hostilidades en Cuba y á los actos que con esa suspensión se relacionan.

De todo esto se deduce que, realmente, para el Gobierno español tuvieron escasa importancia la actitud y las disposiciones de la América latina. Confirma esta creencia la reserva con que, respecto de este particular se explicó el señor ministro de Estado D. Pío Gullón al ser interrogado por mí en el Congreso; la tarde del 13 de Mayo de 1898.

De todas suertes, es innegable que en el *Libro Rojo* se prescinde de aquella América.

La omisión sorprende y no puede parecer bien á cuantos den al negocio de que aquí se trata una grave transcendencia; porque no se necesita gran esfuerzo ni son precisos muchos antecedentes técnicos para pensar que, en el conflicto que estudiamos, era indispensable la intervención de la América española.

Abonan este parecer, principalmente, dos razones. En primer término, después de la rectificación de la doctrina Monroe, en la época del presidente Polk; de las tendencias manifiestas en la convocataria y celebración del llamado Congreso panamericano de 1889, y sobre todo, del reciente conflicto anglovenezolano, terminado por el tratado de Washington de 1897, no es lícito á ningún estadista dudar de que todo cuanto en el Nuevo Mundo se intente por el Gobierno de los Estados Unidos, con el pretexto ó el motivo del prestigio ó de los intereses de la República (más ó menos comprometidos en el resto del Continente americano), tiene un alcance extraordinario para la vida propia, distinta é independiente de las Repúblicas del Centro y Sud de América, cuya soberanía queda en pleito desde el instante en que, con probabilidades de éxito, se plantea, franca ó embosadamente y con éste ó aquel nombre, la pretensión del protectorado de Washington.

El fracaso del Congreso que en 1889 presidió Mr. Blaine (relacionado con la resistencia de Méjico á vender la Baja California) es la demostración más cumplida de que las Repúblicas sud americanas se dan buena cuenta del peligro que para todas entraña la política anexionista del Norte, por reducidas que sean las pretensiones inmediatas de ésta y por concreto y tranquilizador que parezca el motivo de las gestiones de la exuberante República. Pero aquel suceso y lo que los norteamericanos han hecho después en Chile, Haití y San Salvador hacia 1891, en Guatemala en 1890 y en la

misma Venezuela en 1892, también demuestran que los políticos norteamericanos comprendieron bien la conveniencia de contar con la voluntad de los pueblos del Orinoco, los Andes, y el Plata, y en todo caso, la necesidad de entenderse separadamente con cada una de las vecinas Repúblicas latinas, para imponerse á ellas, de grado ó por fuerza, y antes de que se produzca una alianza de todos los elementos amenazados por la expansión anglo sajona.

No hay político en Sud América que desconozca la historia de la separación de Tejas, de Méjico y su anexión á la República de los Estados Unidos. Comenzó ésta, hacia 1885, por favorecer la conspiración de los separatistas, cuyo núcleo residía en Norteamérica y cuyos principales agentes eran yankees, de origen ó de adopción, establecidos en el Estado mejicano y á los cuales se agregaron, en 1836, mil voluntarios americanos, para pelear contra el general Santana. A mediados de este mismo año 36, el Congreso de los Estados Unidos se prestaba al reconocimiento de la independencia de Tejas, y el Gobierno de la gran República facilitó á los insurrectos, á pretexto de auxilios contra los indios, dos millones de pesos. Además envió á las costas mejicanas tres buques de guerra, que desde luego fueron estimados como una demostración contra Méjico, de tanta ó mayor fuerza que la libertad de que en aquel mismo tiempo gozaron para alistarse y municionarse en Nueva Orleans, otros ochocientos ó mil voluntarios que habían de invadir á Durango, Zacatecas y San Luis.

En Marzo de 1837, los Estados Unidos reconocieron oficialmente la nueva República de Tejas y se comenzó á preparar la anexión de que hablan con toda claridad los Mensajes presidenciales de aquel año, con referencia á declaraciones de mucha simpatía del Mensaje presidencial de 22 de Octubre de 1836; es decir, de fecha anterior al reconocimiento de la independencia de Tejas.

Por todo esto, el Gobierno de Méjico se quejó al de los Estados Unidos, en 1842 y 43: las Cámaras y el Gobierno norteamericanos contestaron con desabrimiento y á mediados de 1845 fué proclamada la anexión de Tejas á la gran República. De aquí la guerra de ésta con Méjico, que comenzó en la primavera de 1845 y terminó en Febrero y Mayo de 1848 por el tratado de Guadalupe-Hidalgo. Este permitió á Norte América el ensanche de su territorio con los Estados mejicanos de Nuevo Méjico y California. Con

Tejas, se aumentó el territorio norte-americano en unas 546720 millas cuadradas.

La analogía de lo sucedido, desde 1834 á 1848, en el Norte de Méjico, con lo que ahora ha pasado en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, es palpable. La diferencia principal consiste en la abreviación de tiempo, en la última inverosímil campaña de los Estados Unidos contra los españoles. En cuanto al sentido de la política que en uno y otro caso se ha desarrollado por parte del Gobierno de Washington, no hay para qué demostrar que es el mismo, en las dos demostraciones antes señaladas.

Y parece excusado razonar los temores de todas las Repúblicas sudamericanas ante el conflicto presente que supone 1.º un tremendo ataque á un pueblo latino que vivía, con títulos históricos excepcionales, en sitio privilegiado de América, 2.º una protexta vigorosa contra el prestigio y la fuerza de una Potencia europea que, con derecho indiscutible hasta ahora, sostenía su bandera en el nuevo Mundo, y 3.º una nueva afirmación de la hegemonía Norte-Americana en toda América, cuyo concurso para redimir á Cuba declinó resueltamente el Gobierno de Washington en 1873 y excusó por completo en 1897.

Por otra parte, es un hecho, por todo extremo significativo, el contraste que presenta la actitud actual de las Repúblicas latino-americanas en todo lo tocante á la insurrección de Cuba con la actitud y la conducta de esas mismas Repúblicas, respecto de la misma cuestión, desde 1869 á 1874.

Hace veinticinco años los revolucionarios y separatistas cubanos encontraron, casi desde los primeros momentos, eco simpático y apoyo caluroso, no sólo en el pueblo de Sud-América, si que en la casi totalidad de los Gobiernos de aquellas Repúblicas.

Buenas pruebas de ello son el acuerdo de la Cámara mexicana de 3 de Abril de 1869 para recibir la bandera de Cuba en los puertos de Méjico: el reconocimiento de la independencia de Cuba votado por la Cámara chilena en 4 de Mayo de aquel año: el acuerdo análogo de la Cámara del Perú del 13 de Mayo, etc., etc.

Contribuían á estas disposiciones, de todo en todo opuestas al interés España, varias causas. Entre ellas no es la menor la circunstancia de que por aquel entonces, y desde 1863 hasta 1879 (y á pesar del armisticio de 11 de Abril de 1871) estaban rotas las relaciones diplomáticas de España con

Chile, el Perú, Chile y el Ecuador. Tampoco hasta 1881 España reconoció la independencia de Colombia ó Nueva Granada. Hasta 1880 no se hizo el tratado de paz y amistad de España con el Paraguay. Y hasta Octubre de 1874 tampoco el Gobierno de Madrid aceptó oficialmente la personalidad y soberanía de la República de Santo Domingo, cuyos habitantes se reincorporaron á la nación española en 1861 y contra ella se sublevaron en 1863, consiguiendo, por la fuerza, que nuestros soldados evacuasen aquel país, en 1865.

La resuelta oposición al dominio español en Cuba llegó al extremo de que en 1873, los Gobiernos sudamericanos, que ya habían hecho declaraciones oficiales en favor de la insurrección cubana desde 3 de Abril de 1869, propusieran al Gabinete de Washington, una gestión colectiva cerca del de Madrid, para recabar de éste el reconocimiento de la independencia de la grande Antilla. Esta gestión había sido precedida de las propuestas hechas en la Cámara popular de Colombia en Mayo de 1870 y aceptadas por la del Perú en 1871, para establecer un pacto de todas las Repúblicas de América con el fin de favorecer la libertad cubana. Pero la proyectada gestión de 1873 fracasó por la oposición del Gobierno de Washington, el cual hizo observar que, habiéndose instaurado la República en España, por el voto de la Asamblea española del 11 de Febrero de aquel año, era de esperar que el nuevo Gobierno variase radicalmente de política en las Antillas.

Con efecto, la República española de 1873 introdujo grandes cambios en nuestro régimen colonial. A los comienzos de aquel año se plantearon en Puerto Rico las leyes municipal y provincial, de sentido autonomista, votadas por las Cortes Constituyentes en 1870, pero que, por recelos é influencias de los elementos conservadores, habían quedado incumplidas. En 22 de Marzo de 1873 fué votada la ley de abolición inmediata y simultánea de la esclavitud, indemnizando á los poseedores de esclavos. Y en 6 de Agosto de aquel mismo año se extendió á Puerto Rico el título I de la Constitución de 1869, y por tanto el sufragio universal, los derechos naturales del individuo, las libertades necesarias, la soberanía nacional y la reformabilidad de la Constitución.

También la República del 73 adoptó graves medidas respecto de Cuba. Por ejemplo: en 15 de Octubre de 1873, su-

primió las *facultades excepcionales de comandante de plaza sitiada* de que disponían los capitanes generales, por virtud de la Real orden de 18 de Mayo de 1825. En 15 de Julio de 1878 quedaron alzados los embargos gubernativos de bienes de los insurrectos é infidentes cubanos, por virtud del decreto de 29 de Abril de 1869. En 16 de Septiembre de 1878 se suspendió la venta de los bienes procedentes de causas incoadas á reos de infidencia declarada. En 24 de Marzo fueron puestos en libertad diez mil negros no inscritos como esclavos en el registro de la esclavitud. En 24 de Octubre se organizó la administración de justicia sobre la base de la oposición para el ingreso en la carrera judicial y de la inamovilidad de los jueces, puestos bajo la dependencia directa y exclusiva del Tribunal Supremo de la nación. Y en 10 de Julio, el ministro de Ultramar, Sr. Suñer y Capdevila, llevó á las Cortes un proyecto declarando vigente en Cuba, fuera del territorio que ocupaban los insurrectos, el título I de la Constitución de 1869. Este proyecto quedó sobre el tapete.

Esta era la legislación vigente en 1874, la víspera del golpe de estado del 3 de Enero de este año, que produjo la caída de la República. Y éste era el derecho positivo en 1878; porque si bien en Puerto Rico se había establecido, por efecto de los sucesos del 3 de Enero, la dictadura militar, tal hecho revestía sólo un carácter transitorio y excepcional. Por eso los diputados portorriqueños que en 1876 vinieron á las primeras Cortes de la Restauración, fueron electos por sufragio universal, para cuya abolición se hizo precisa la ley de 9 de Junio de 1878.

Estos datos son interesantes, por cuanto el art. 1.º del convenio llamado del Zarzón, que en 10 de Febrero de 1878, puso término á la guerra de Cuba, afirma «la concesión á la isla de Cuba de las mismas condiciones políticas, orgánicas y administrativas de que disfrutaba Puerto Rico. Es decir, el régimen de 1873.

Verdad es que este artículo comenzó á ser modificado por el Gobierno general de Cuba en 1.º de Marzo de 1878 y que luego el Gobierno de Madrid prescindió bastante del convenio.—Pero es imposible olvidar el texto del pacto de 10 de Febrero y la circunstancia de que la reforma centralizadora de la ley municipal y provincial de 1870, lleva la fecha de 14 de Mayo de 1878 y la sustitución del sufragio universal por el régimen censitario, desigual y receloso

en las dos Antillas y que allí duró hasta 1893, data de 9 de Junio del mismo año de 1878.

Por tanto, no estaba descaminado el Gobierno norteamericano al esperar de la República española un cambio profundo y de gran espontaneidad por parte de aquélla, en el régimen político de las Antillas.

Pero lo que importa en el orden de las observaciones que ahora hago, es que el hecho de la resistencia del Gobierno norteamericano en 1873 á las disposiciones de los Gobiernos de Sud-América para intervenir como en cosa propia en la cuestión de Cuba.

Frente á todo eso aparece la actitud de esas mismas repúblicas desde 1895 á 1897. No puede prescindirse de que en 1893 el representante diplomático de España en el Uruguay (el Sr. D. José de la Rica) se había asociado, en nombre de aquella nación á los acuerdos del Congreso americano de Montevideo de 1888 sobre puntos importantísimos de Derecho internacional privado. Aquellos acuerdos fueron adoptados por los representantes del Uruguay, la Argentina, Perú, Chile, Brasil, Venezuela, Méjico y Bolivia y suponen una gran cordialidad é intimidad de relaciones de los pueblos convenidos. En los años 1893 y 94 España celebró importantes tratados de propiedad intelectual con Guatemala y Costa Rica; de extradición con Colombia y con Venezuela.

En 1895 se hacen tratados de extradición de España con Uruguay y de España con Chile; uno nuevo de paz y amistad de España con Honduras y otro de propiedad literaria con Méjico. Con Chile y Guatemala vuelven los españoles á tratar en 1896, sobre extradición y propiedad intelectual. Y en 1897 se concluye importante tratado entre España, Costarica, Guatemala, Chile y las Repúblicas centrales reunidas, para el despacho de exhortos y partidas referentes al estado civil de los ciudadanos de aquellos países. También, en Julio de 1897, se modificó y cumplió el tratado de paz de España con el Perú, de fecha 1879. Y á mediados del año 98, se hizo otro tratado entre el Perú y España sobre el estado civil de los ciudadanos de entrambas naciones.

Además, en el último decenio, España ha aceptado, con éxito, el papel de árbitro en varias cuestiones hispano-americanas. Por ejemplo, en 1881 y 85, el Gobierno español entendió en delicadas cuestiones surgidas entre Colom-

bia y Venezuela, dictando fallo en 16 de Marzo de 1891. Del mismo modo España, desde 1882 á 1892, entendió en las diferencias de Colombia con Costa Rica, si bien el Gobierno español declinó su voto definitivo, por las alegaciones que hizo el de Colombia sobre si había ó no transcurrido el plazo para la emisión del laudo arbitral. Igualmente, España intervino en 1886 en las cuestiones de Bolivia con el Perú; en 1887 á 91, en las diferencias del Ecuador con el Perú.—En 1798 en las del Perú con Chile. También España resolvió, desde 1886 á 88, las diferencias de Colombia con Italia y desde 1896 á 97, las de Francia con Santo Domingo.—En 1898, las de Italia con Guatemala. Por otra parte, los Gobiernos, los representantes y muchos hombres ilustres de las Repúblicas latinas de América intervinieron activa y brillantemente en los Congresos internacionales científicos y las fiestas todas que se celebraron en Madrid, en 1892, con motivo del cuarto centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo.

Sin duda no habría bastado esto para determinar la actual conducta de Sud-América con relación á la antigua Metrópoli española y á la nueva insurrección cubana. En aquellas Repúblicas han debido influir también, por ejemplo, las reformas realizadas en Ultramar desde 1890, y sobre todo, los decretos autonomistas de 1897.

Pero de todas suertes esas disposiciones han tomado un relieve extraordinario en 1896 y 97, merced al apartamiento completo de los Gobiernos hispano-americanos de la línea de conducta que mantuvieron desde 1869 á 1875; apartamiento que es necesario estimar, no sólo considerando la acción oficial de los Gobiernos y la opinión general de los pueblos aludidos, sigue el hecho, por demás significativo, de las grandes aportaciones de dinero con que la colonia española de Méjico, la Plata y Chile han auxiliado á la Metrópoli para que ésta aumentase su escuadra y acudiese á las necesidades de sus soldados; cosa que no sucedió y que hasta hubiera sido absolutamente imposible en aquellos países, hace una veintena de años, durante la primera insurrección separatista de Cuba.

Además es notoria la resuelta oposición del Gobierno dominicano á los insurrectos de la grande Antilla, contra los cuales desplegó una vigilancia extremada y hasta un rigor muy señalado en todo el Nuevo Mundo; rigor que hizo literalmente imposible que en Santo Domingo, después de la

partida del general Gómez y del propagandista Martí, descansaran, como lograron descansar en otras islas vecinas, los agentes separatistas, cuanto más los devotos de la insurrección, apercebidos para salvar la corta distancia que separa á los dos países vecinos y para llevar al campo insurrecto sus personas y las armas proporcionadas por los simpatizadores de la revolución cubana.

Sin decir más (y hay materia para alargar mucho el discurso) ya puede adivinarse que no se comprende cómo el Gobierno de Madrid no contó, en su grado y medida, con los Gabinetes del Centro y de Sud América en el curso de las negociaciones con los Estados Unidos.

Del *Libro Rojo* resulta, como he dicho, que las del Gobierno español comenzaron realmente el 24 de Marzo de 1898, por un telegrama de nuestro ministro de Estado á los representantes de España en el extranjero. En ese despacho se informó á éstos de la conferencia celebrada el 23 de Marzo por mister Woodford y los ministros de Estado y Ultramar de España.—El documento termina con las siguientes palabras: «Importa que V. E. conozca, así la medida y calidad de las pretensiones y exigencias que se nos formulan, como la prudencia y moderación con que las contestamos, para que V. E. pueda dejar bien establecida ante ese Gobierno, la conducta de unos y otros Gabinetes y el carácter que revestirán cualesquiera sucesos que el porvenir nos reserve.»

Ya poco antes, en 8 de Febrero, el mismo ministro de Estado español había prevenido á un grupo de diplomáticos españoles (los representantes de España en Berlín, Londres, París, Roma, San Petersburgo y Viena) que «la ostentación y concentración de fuerzas navales de los Estados Unidos cerca de Cuba y en los mares próximos á la Península y la insistencia con que el *Maine* y el *Montgomery* permanecían en la gran Antilla originaban recelos crecientes y podían, quizá, producir por cualquier incidente un conflicto.» El Gobierno español—así decía el ministro—*trataba de evitarlo á toda costa, haciendo heróicos esfuerzos para mantenerse en la más severa corrección.*

Bastante después, en 16 de Marzo de 1898, el propio ministro habló á los embajadores españoles antes citados, del informe de los técnicos de España sobre la catástrofe del *Maine*, que estos técnicos atribuyen á un incidente ocurrido en el interior del buque, y el ministro concluye diciendo:

«Conviene que en conversaciones oficiosas y en la inspiración de publicaciones serias y amigas de ese país, se llame la atención sobre la extraña insistencia con que los diarios y otros elementos de los Estados Unidos persisten en atribuir la catástrofe á orígenes completamente falsos, manteniendo así una especie de ofensiva amenaza en las relaciones de aquella República con España.»

El 22 de Marzo nuestro ministro de Estado vuelve á dirigirse á nuestros representantes en Europa para participarles que «las noticias de los Estados Unidos no podían estimarse satisfactorias, porque Mac-Kinley y su Gobierno habían dejado que la ola subiera considerablemente y cabía ya dudar de que tuvieran voluntad y fuerza para resistirla »

Pero ni el 16 ni el 22 de Marzo, ni el 8 de Febrero, el Gobierno español hacía otra cosa que *informar* á sus representantes, sin extenderse á recomendarles cosa alguna, precisa cerca de los Gobiernos ante quienes estaban acreditados.

En todo caso esos tres despachos no revestían otro carácter que el de advertencias. Ya en 24 de Marzo se inician las gestiones de otro alcance, pero sin llegar al tono y el sentido de una verdadera reclamación diplomática, con fin inmediato y práctico.

Porque si bien nuestro ministro de Estado entera á todos los representantes de España en el extranjero (no ya sólo á los embajadores antedichos) de las declaraciones y avisos de Mr. Woodford, sobre los propósitos del Presidente Mac-Kinley de llevar al Congreso la cuestión del *Maine* y el problema de Cuba, no espera nada de los Gabinetes extranjeros ni recomienda á nuestros diplomáticos que hagan otra cosa «que dejar bien establecida ante los Gobiernos extraños la conducta del americano y del español, etcétera, etc.»

Cuando el requerimiento de España comienza, es en 25 del mismo mes de Marzo, fecha del telegrama circular, también dirigido á *todos* los representantes del Gobierno español en el extranjero para participarles que el Gobierno de los Estados Unidos leerá al Congreso de este país el dictamen americano sobre la catástrofe del *Maine*, «sin dar al Gobierno español previo conocimiento de aquel dictamen y sin adquirirlo tampoco del ya emitido por la comisión española.» Y en este telegrama se añade:

«Por las consideraciones contenidas en mi telegrama de ayer, y por el hecho de someter aquella cuestión á una Cámara popular, apartándola de la jurisdicción privativa del Poder Ejecutivo, hecho que, en nuestro sentir, puede provocar el conflicto entre las dos naciones y el Gobierno español, este considera de su deber y estima conforme á los principios que presiden las relaciones internacionales entre Potencias cristianas, poner estos antecedentes en conocimiento de ese Gobierno y *reclamar sus amistosos oficios* para que el Presidente de los Estados Unidos conserve en la jurisdicción del Ejecutivo cuanto se refiera á las cuestiones ó diferencias con España, á fin de llevarlas á términos honrosos. Y tan convencida está España de la razón que le asiste y de la prudencia con que obra, que si el propósito referido no se alcanza, *no vacila en solicitar desde luego el consejo de las grandes Potencias, y en último término su arbitraje para dirimir las diferencias pendientes y las que, en un porvenir próximo, puedan perturbar una paz que la Nación española desea conservar* hasta donde su honor y la integridad de su territorio lo consientan, no sólo por lo que á sí misma concierne, sino también por lo que la guerra, después de encendida, pudiera afectar á los demás países de Europa y América.

Sírvase V. E. dar lectura de este telegrama á ese señor ministro de Negocios Extranjeros.»

Lo más saliente de este despacho es, sin duda, la recomendación del arbitraje. Pero solo el de las *grandes Potencias*. En la contestación escrita que el ministro de Estado de España dió Mr. Woodford en 25 de Marzo, aquél había recomendado á éste y á su Gobierno la sumisión del asunto del *Maine* á terceros, desinteresados é irreprochables. —Después, el propósito de requerir la intervención de éstos se afirmó y generalizó de tal modo, que constituye una de las notas capitales de la laboriosa negociación de que tratamos. Luego, y en diversas ocasiones, el Gobierno español insiste en su solicitud del 25 de Marzo.

Los datos que contiene el *Libro Rojo* no son suficientes para formular una opinión precisa respecto de la acogida que la propuesta de España mereció á las Potencias europeas. Los despachos en que se consignan las respuestas del extranjero aparecen truncados de un modo verdaderamente deplorable. Y digo *deplorable*, porque á España interesaba excepcionalmente que se conociera bien la actitud y las disposiciones de todas y cada una de aquellas Potencias, tanto para el juicio de la Historia, como para que dentro de nuestro país se formara una verdadera opinión pública

sobre nuestra situación, nuestros medios, nuestros aliados y nuestros enemigos en el momento presente y en un porvenir no lejano.

Así y todo, parece, primero, que la acogida de las Potencias aludidas varió bastante según el carácter y los compromisos de cada una de éstas, y segundo, que ninguna se dedicó á aceptar francamente la parte más substancial de la propuesta española, contentándose con responder de mejor ó peor manera, á la excitación referente á gestionar cerca del Presidente de los Estados Unidos, para que «éste conservara en la jurisdicción del Ejecutivo cuanto se refería á las cuestiones ó diferencias con España, á fin de llevarlas á términos honrosos.»

El Gobierno más expresivo fué el de Italia, cuyo ministro de Negocios Extranjeros dice al representante español, en 27 de Marzo, que su Gobierno, «animado de los más amistosos sentimientos por la Reina Regente y por la Nación española, obraría inmediatamente en el sentido expresado por aquel representante, y que considerando que el Gobierno español se habría dirigido á las demás grandes Potencias, creía que Italia debía ponerse en inteligencia con éstas.»

Tales frases fueron dichas, según asegura el despacho del embajador español, con *visible convicción*.

Esta misma calurosa simpatía italiana se revela en otro despacho de 15 de Abril.

No aparece en el *Libro Rojo* la contestación explícita de Francia, que fué requerida especialmente por el embajador de España en París para que «invocando la tradición de la política internacional respecto de Cuba desde el comienzo de siglo, propusiera á Inglaterra una acción común en pro de la paz.» El ministro francés *aceptó en principio* la indicación y «pidió plazo para reflexionar y someter el asunto al Consejo de ministros.»—De esto no se vuelve á hablar en el *Libro Rojo*, donde no se cita otra vez á Francia más que con motivo de las nuevas gestiones del Gobierno español en 31 de Marzo.

Contrasta este silencio con la excepcional benevolencia de la acogida del ministro francés y con las calurosas muestras de simpatía de la prensa francesa, que se prodigó al punto de disgustar á los norteamericanos, hasta que tuvieron efecto los desastres de Cavite, y sobre todo los de Santiago de Cuba. También este cambio de actitud merece atención.

Porque resulta más que probable, de una parte, que Francia, concedora, mejor que España, de la situación internacional y de las disposiciones positivas de Inglaterra, no se atrevió á comprometerse en la empresa á que le invitó nuestro embajador, y por otro lado, que nuestros fracasos militares rebajaron el concepto que fuera de España se tenía de nuestros medios y nuestra resolución.

El ministro de la Santa Sede, cardenal Rampolla, aseguró que España «contaba con el afecto de la Santa Sede y con la amistad de Francia»—«aplaudió la calma y moderación de nuestro Gobierno»—y «recomendó que éste tratase de obtener que los Gabinetes europeos ejercitaran su influencia en Washington, á fin de evitar la guerra.»

El Gobierno austriaco considera «que una de las cuestiones más importantes en Europa es sostener la paz, y que en eso debe apoyarse principalmente la gestión diplomática.» Y recomienda que «se publique el informe español sobre el *Maine* como contraposición del americano y para facilitar el arbitraje.»

El Gobierno ruso en 27 de Marzo estaba lleno de simpatía por España y de entusiasmo por la Reina... pero no pasó de estas declaraciones.

El ministro de Negocios extranjeros de Berlín, en 28 de Marzo escuchó los documentos cambiados por el ministro de los Estados Unidos en Madrid y nuestro ministro de Estado... y *apreció como era debido la conducta tan opuesta de los Gobiernos español y americano.* Y nada más.

El ministro de Negocios Extranjeros de la Gran Bretaña ni habló con el representante español en Londres. El subsecretario inglés escribió á éste que el ministro Mr. Balfour «había tomado en sincera consideración el telegrama y las miras pacíficas del Gobierno español; que el Gabinete británico vela con sentimiento que cualquier incidente podría turbar innecesariamente las relaciones entre España y los Estados Unidos y que Mr. Balfour telegrafaba al embajador británico en Washington para que si *tenía oportunidad*, informase al Gobierno americano de la actitud conciliadora del español.»

Como se ve, las respuestas *conocidas* de los Gobiernos europeos—y de la Santa Sede—fueron poco ó nada alentadoras. Frialdad glacial en Inglaterra, reserva deprimente en Alemania, Austria y Rusia; tristes palabras en el Vati-

cano; circunspección, vecina del temor, en Francia; estériles simpatías en Italia.

Quizá esto que se supo perfectamente en América—quizá esto influyó bastante en la actitud resuelta y desconsiderada de los hombres de Washington, que el 28 de Marzo hacen saber al Gobierno español que «á éste alcanza grave responsabilidad en el caso del *Maine*» y el 29 del mismo mes exigen, por medio del *Apunte* presentado por Mr. Woodford, la inmediata pacificación de Cuba, la revocación de las órdenes dadas en la Habana respecto de los reconcentrados, el socorro de ellos por los filántropos americanos y el armisticio que ha de durar hasta 1.º de Octubre para que se negocie la paz entre España y los insurrectos, mediante los amistosos oficios del presidente de los Estados Unidos.

A los seis días de haber solicitado España la gestión pacífica europea, vuelve á reclamarla en vista del *Apunte* de Mr. Woodford. A este propósito responde el telegrama de nuestro ministro de Estado á los representantes de las grandes Potencias y de la Santa Sede, fecha 31 de Marzo. En este telegrama se resumen las contestaciones y las concesiones del Gobierno español, por efecto del *Apunte* de Mr. Woodford, y se dice lo siguiente:

«A que sean aceptadas en Washington estas bases de arreglo, que satisfacen en gran parte las pretensiones de Mac Kinley y son el último límite de nuestra moderación y de nuestros esfuerzos por conservar la paz, deban concretarse y dirigirse desde hoy mismo, ya que no hay tiempo para otra cosa, las valiosas gestiones de ese Soberano (ó Presidente) y de su Gobierno si como esperamos por noticias de V. E., quieren cooperar al mantenimiento de la misma paz y á tan templa la defensa de nuestros derechos. Sírvase, pues, dar inmediato conocimiento de este despacho á ese señor ministro de Negocios extranjeros.

Con esta gestión se abre el segundo período de las negociaciones diplomáticas de España y las Potencias europeas.

Todavía, respecto de las contestaciones dadas por los Gabinetes extranjeros á las anteriores excitaciones del Gobierno de Madrid, el *Libro Rojo* peca de mayor deficiencia que la señalada con motivo del despacho de 25 de Marzo.

Porque ahora solo aparecen un despacho, fecha 2 de Abril, relativo á la contestación del Gobierno inglés; otro telegrama de nuestro embajador en París, fecha 3 de Abril, y otro de nuestro embajador en Roma, 2 del propio mes.

Los dos últimos despachos, son, respecto del primero, de completa contradicción.

Con la misma ó mayor frialdad que antes, el Gobierno inglés, ó mejor dicho el ministro de Negocios extranjeros, se limita á decir á nuestro representante en Londres que «el Gobierno británico confía en que el Presidente de los Estados Unidos está deseoso como el Gobierno español de llegar á un arreglo satisfactorio para ambas partes.»

El Gobierno de Francia, por el contrario, en 3 de Abril, declara que «está gestionando activamente en Washington para el mantenimiento de la paz.»

El cardenal Rampolla, en 2 de Abril, después de afirmar que el conflicto toma extraordinaria gravedad y que el Presidente de los Estados Unidos, *deseoso de la paz, está arrojado por las Cámaras americanas*, propone la intervención de Su Santidad para lograr de España el armisticio en Cuba. Además, el cardenal, oficialmente afirma que «el Presidente de los Estados Unidos estaba dispuesto á aceptar el apoyo del Papa y que éste deseaba ayudar á España».

El Gobierno español contestó á la Santa Sede, aceptando y agradeciendo su mediación; prometiendo acceder á una *suspensión de hostilidades que formulara ó transmitiera el Santo Padre* y recomendando, como *conveniencia del honor de España*, «que á la tregua otorgada fuera unida la retirada de las aguas de las Antillas de la escuadra americana, con objeto de que la República de los Estados Unidos demostrara también su propósito de no alentar ni sostener voluntaria ni involuntariamente la insurrección de Cuba.»

Por aquel mismo tiempo, Monseñor Ireland, Arzobispo católico norteamericano, que de orden de Su Santidad fué desde San Pablo á Washington para hablar con el representante de España, Sr. Polo de Bernabé, dijo á este (en 4 de Abril) que «el Presidente de los Estados Unidos, con quién había conferenciado aquel mismo día, deseaba ardentemente la paz, pero que era indudable que el Congreso votaría la intervención ó la guerra, si el Gobierno español no ayudaba al Presidente y á los partidarios de la paz.» Por esto el Arzobispo insistió en que España «debía acceder sin condiciones al armisticio.»

Sobre lo mismo vuelve á hablar el Arzobispo, en 6 de Abril, y añade que «respecto á la retirada de la escuadra americana, era imposible obtenerlo por entonces» pero que «ofrecía personalmente continuar en Washington y es-

peraba conseguirlo después de hecha la concesión española.»

Además los diplomáticos extranjeros que visitaron *ad hoc* al español en la capital norteamericana le comunicaron que «se trabajaba activamente entre los Gabinetes de Europa para una acción inmediata, simultánea, idéntica y general.

De modo que las excitaciones del Gobierno español del 31 de Marzo dieron algún efecto. Este se señaló considerablemente por la visita, de carácter oficial, que los representantes diplomáticos europeos, por encargo de sus respectivos Gobiernos, y unidos con este fin, hicieron al Presidente de los Estados Unidos y al ministro de Estado de España, en 7 y 9 de Abril respectivamente.

Con este paso se inició el tercer período en las negociaciones diplomáticas, que ahora se complican con las gestiones que los representantes europeos hacen cerca del Gobierno de los Estados Unidos.

6

Por lo que se ha publicado hasta ahora, no parece que estas gestiones fueran absolutamente las mismas que se habían realizado cerca del Gobierno español. Nuestro representante en Washington dice, en fecha 7 de Abril, que la Nota colectiva de los representantes de las seis grandes Potencias contiene «una calurosa apelación á los sentimientos de humanidad y de moderación del Presidente y del pueblo americano en sus existentes diferencias con España, esperando que ulteriores negociaciones llevarían á un acuerdo que, al propio tiempo que asegurase la paz diese las necesarias garantías para el restablecimiento del orden en Cuba.»

La gestión realizada por los diplomáticos de las mismas grandes Potencias en Madrid tuvo por objeto, según comunica nuestro ministro de Estado al representante de Austria-Hungría (el decano de los diplomáticos aludidos), en 9 de Abril, «hacer observaciones y dar consejos para que España accediera á las elevadas instancias de Su Santidad León XIII, y concediera en Cuba una suspensión de hostilidades que los mencionados diplomáticos juzgaban compatible con el honor y el prestigio de las armas españolas en aquella provincia autónoma.»

Esto mismo vuelve á decir el referido ministro de Estado al comunicar en 9 de Abril al cardenal Rampolla, por medio del embajador español en Roma, que había sido acordada la suspensión de hostilidades. Y se repite otra vez en un telegrama-circular de la propia fecha, dirigido á los embajadores españoles en París, Berlín, Viena, Londres, Roma y San Petersburgo.

Para el fin con que se escriben estas líneas no es punto de escasa importancia la diferencia señalada.

Por lo que en otra parte se ha dicho, se sabe que el Gobierno español, en 31 de Marzo, se prestaba (según contestó al Apunte de Mr. Woodford) á buscar «por medio del Parlamento colonial ó insular de Cuba, una paz honrosa

para esta isla—á conceder desde luego una suspensión de hostilidades *pedida por los insurrectos al general en jefe español*—y á socorrer á los reconcentrados con fondos propios, después de haber revocado en las provincias occidentales el bando que dispuso la reconcentración.»

A lo que no se prestaba era, primero, á ofrecer la inmediata pacificación de Cuba; segundo, á brindar inmediatamente un armisticio incondicional á sus insurrectos; tercero, á negociar la paz con ellos y menos mediante los oficios del Presidente de los Estados Unidos—y cuarto, á que los necesitados de Cuba fueran socorridos con alimentos y recursos enviados de Norte América.

Luego, la gestión del Papa se encaminó á vencer la resistencia de España en lo relativo á la suspensión de hostilidades, la cual se quería que el Gobierno español concediese, *incontinenti*, por petición de la Santa Sede, sin esperar á que la hicieran los insurrectos al Capitán General de Cuba.

El Gobierno español accede al principio, poniendo la condición de que la escuadra americana se retire de la grande Antilla. Mas en seguida, el Gobierno de España prescinde de esta última condición, respondiendo á nuevas gestiones del Papa y á la de las seis grandes Potencias.

En cambio, estas no se sabe que requirieran al Presidente de los Estados Unidos, no ya para que correspondiese á la concesión española retirando la escuadra norteamericana, cuyo efecto moral era ya por aquel entonces evidente, pero ni siquiera para que transigiese sobre las concesiones, cada vez más amplias, del Gobierno español. Las seis Potencias se limitaron á una genérica recomendación de alcance muy vago.

Por lo que después ha sucedido y se ha publicado, tanto en América como en Europa, se ha podido comprender que la atenuación de las gestiones europeas en Washington se debía en mucha parte á la intervención activa del embajador inglés.—La disposición de éste—y aun de su Gobierno—se hizo bastante sospechosa muchos días antes, tanto que, en 10 de Marzo, nuestro embajador en Londres dice que «habiéndose comunicado á aquella ciudad, en un telegrama de Nueva York, que el embajador inglés en Washington había declarado al Presidente de los Estados Unidos que, si ocurría un conflicto con España, le secundaría Inglaterra» el subsecretario de Negocios Extranjeros de esta nación ofreció á nuestro representante diplomático, desmentirlo ca-

tegoricamente, cosa que hizo en la sesión celebrada por la Cámara de los Comunes el mismo día 10.»

Más tarde, la prensa noticiera ha atribuido á Mr. Woodford la declaración de que, necesitando evitar una completa ruptura con España antes Abril de 1898, por no hallarse dispuestos entonces los Estados Unidos para hacer la guerra, pudo lograr aquel aplazamiento, por la cooperación del embajador de Inglaterra en Madrid.

No creo cierto que Mr. Woodford se haya expresado como afirma la prensa noticiera americana y europea; pero es indudable que lo que ésta dice responde á la opinión generalizada de que en todas las gestiones que los Gobiernos europeos realizaron entonces, la intervención británica era por todo extremo favorable á los Estados Unidos y que, interviniendo en el concierto, ayudaba á éstos mucho más que si desde el primer momento el Gobierno de Londres hubiese declinado tal participación en el negocio.

Esto lo ha hecho el Gobierno inglés varias veces al tratarse la cuestión de Oriente, desde 1830 á 1878. Alemania lo ha hecho también en esa misma cuestión, posteriormente. Los resultados no siempre han respondido á la intención de esas habilidades: mas, para que éstas fracasaran fueron precisas condiciones y una resolución de que ahora, por muy diversos motivos, carecían las Potencias europeas más propicias á evitar el atropello de España. Lo que no se explica bien es cómo los políticos españoles no pusieron de relieve esta circunstancia ni qué hicieron para evitar la habilidad británica.

La doble-gestión diplomática antes aludida, se hizo, pues, en Madrid y en Washington. Una gestión distinta en cada una de las dos capitales y siempre muy por bajo de lo que el Gobierno español había solicitado en 24 de Marzo.

El resultado de la gestión en Madrid fué completo. El Gobierno español previno en 9 de Abril, por telegrama, al general en jefe del ejército de Cuba «que concediese *inmediatamente* una suspensión de hostilidades por el tiempo que estimase prudencial, para preparar y facilitar la paz anhelada.»

El general mencionado decretó la suspensión. Y de ello fueron informados los Gobiernos europeos, la Santa Sede y el Gobierno norteamericano. Este tuvo noticia oficial por su embajador en Madrid, por el secretario de Estado del Papa y por el representante de España en Was-

hington. según telegrama del Sr. Polo de Bernabé, fecha 10 de Abril.

La única contestación que todo ello tuvo, fué el Mensaje del Presidente de los Estados Unidos al Congreso, fecha 11 de Abril.

Al lado de lo referido toca poner lo que sucedió á los representantes de las seis grandes Potencias que vieron, en Washington, al Presidente, el 6 de Abril.

Según despacho, fecha 7 de Abril, de nuestro representante en Washington, el Presidente Mac Kinley contestó á los diplomáticos europeos «reconociendo el carácter humanitario y desinteresado de la gestión colectiva, compartiendo el deseo por ellos expuesto y expresando el de que terminase la situación crónica de los disturbios de Cuba, que perjudicaba los intereses americanos y lastimaba los sentimientos de la humanidad»

Y ni entonces ni después, nada más.

Hasta que llegó el Mensaje presidencial de 11 de Abril, el cual, como en otra parte se ha dicho, termina con la simple noticia de que «el día antes de presentarse el Mensaje y después de haberse preparado éste, el Presidente había sabido la orden dada al general en jefe de Cuba para que proclamara una suspensión de hostilidades, cuya duración y detalles no habían sido aún comunicados al Presidente».

Y concluye (hay que repetirlo, por la íntima relación que esto tiene con las afirmaciones del cardenal Rampolla y de monseñor Ireland respecto de las ideas y la posición de Mr. Mac Kinley) diciendo: «Este hecho, con todas sus consecuencias, merecerá seguramente vuestra justa y solícita atención en los solemnes debates que están á punto de inaugurarse. Si esta medida produce un resultado satisfactorio, se realizarán vuestras aspiraciones como pueblo cristiano y pacífico. En caso contrario, sólo justificará nuevamente la acción por nosotros meditada».

En el Mensaje no se hace la menor alusión á las gestiones de las seis grandes Potencias europeas.

El fondo del Mensaje es digno de estudio.

Principia describiendo con sombríos colores el estado de Cuba, la situación tristísima de los reconcentrados, la ineficacia de los esfuerzos hechos por España para dominar la insurrección separatista, el porvenir terrible de aquella isla y el término de la guerra que, á juicio del Presidente (de no variar los términos, los métodos y los factores de la lucha),

sólo podría concluir por la exterminación de los combatientes.

Reconoce Mr. Mac Kinley los *esfuerzos hechos últimamente* por España, pero los declara *estériles* al propio tiempo que cree demostrada, *por una larga prueba, que España es impotente para lograr el fin por el cual sostuvo la guerra.*

Y añade que *es ya intolerable la situación de Cuba, imponiéndose la pacificación de ésta en nombre de la humanidad, de la civilización y de los intereses americanos en peligro... Por tanto, es necesario que acabe aquella guerra.*

Por todo eso, y señaladamente por el peligro de los intereses americanos, los Estados Unidos tienen *el derecho y el deber de hablar y de obrar.* A esta consideración respondieron, en otro tiempo, las declaraciones del Presidente Grant y las gestiones recientísimas de los Presidentes Cleveland y Mac Kinley.

Desgraciadamente,—continúa diciendo Mr. Mac Kinley,—la desfavorable respuesta dada por el Gobierno español á la última proposición de Mr. Woodford para procurar la inmediata paz en Cuba, hace creer que el Poder ejecutivo de la República Norteamericana *ha llegado al término de sus esfuerzos amistosos.*

Llegado el momento de obrar, el Presidente discute los medios. En primer término está el reconocimiento de un gobierno en Cuba. Pero este medio proporcionaría muchos inconvenientes al Gobierno norteamericano, sujetándole á obligaciones internacionales y exponiéndole á que en el caso de ser obligada la intervención, ésta tuviera que hacerse con acuerdo del gobierno reconocido, bajo su dirección y apareciendo los interventores como meros *aliados amistosos.*

Más franca, más segura, más libre y más propia del caso es la intervención hecha por propia y exclusiva cuenta del Gobierno de los Estados Unidos.

Esta intervención podría hacerse de dos modos: *bajo la forma de una neutralidad imparcial que impusiera una transacción racional á los contendientes ó convirtiéndose la República en aliada activa de uno de éstos.*

Mr. Mac Kinley estima que las relaciones de los Estados Unidos con España y con Cuba, en estos últimos meses, suponen, realmente, una manera de *intervención amistosa que se ha manifestado de muchos modos, ninguno de ellos definitivo y que acusa una influencia potencial que tiende á un fin ulterior pacífico, justo y honroso para todos los interesados.*

El Presidente afirma que todos los actos de los Estados Unidos *se han inspirado en un deseo sincero y desinteresado por la paz y prosperidad de Cuba, no empañada por discrepancias entre los Estados Unidos y España, ni manchada por la sangre de ciudadanos americanos.*

El Presidente se decide por la intervención *ya forzosa de los Estados Unidos como potencia neutral.* Asegura que son numerosos los precedentes históricos de la intervención de naciones vecinas para contener el inútil sacrificio de vidas humanas ocasionado por conflictos interiores en el territorio situado más allá de sus fronteras.

Cree que semejante intervención implica el empleo de medidas hostiles contra ambas partes contendientes, tanto para obligarlas á una tregua, cuanto para preparar la solución final.

Y explica y detalla los motivos de esta intervención de la siguiente manera:

«Primero. La causa de la humanidad, y para poner término á las barbaridades de la lucha, á la efusión de sangre, al hambre y á la horrible miseria que en la actualidad desolan la Isla, y á las que no quieren ó no pueden poner término ó dar alivio los dos bandos opuestos. Inútil sería contestarnos que estos acontecimientos tienen lugar en otro país dependiente de una potencia extranjera, no pudiendo, por tanto, afectarnos en lo más mínimo. La intervención nos incumbe como un deber ineludible, porque los sucesos aludidos ocurren á nuestras puertas.

Segundo. Estamos obligados á garantizar á nuestros ciudadanos en Cuba la protección é inmunidad de sus vidas é intereses materiales que no les puede ni quiere asegurar ningún Gobierno existente en la Isla, acabando con un estado de cosas que les priva de protección legal.

Tercero. El derecho de intervención puede justificarse con los gravísimos perjuicios al comercio y negocios mercantiles de nuestros ciudadanos, la destrucción gratuita de la propiedad y la devastación de la Isla.

Cuarto. La situación actual de la Isla de Cuba es una amenaza constante para nuestra paz interior, é impone al Gobierno de los Estados Unidos gastos enormes, consecuencia de un conflicto que dura desde hace años en una Isla tan próxima á nuestro país, y tan unida con nosotros por importantes relaciones comerciales; y corren constante peligro la vida y la libertad de nuestros conciudadanos. Mientras se destruyen las haciendas y caudales de éstos y están expuestos á ser apresados y lo son, en efecto, nuestros buques mercantes por la marina de un Gobierno extranjero. Las expediciones filibusteras, que como

impotentes para impedir del todo, y las cuestiones y complicaciones irritantes, que no tengo por qué mencionar, con la resultante tensión en nuestras relaciones, constituyen una amenaza constante para la paz de los Estados Unidos y nos obligan á vivir casi en pie de guerra respecto de una Nación con la que estamos en paz.

Como última demostración de los peligros á que la situación de Cuba exponía constantemente á los Estados Unidos, Mr. Mac-Kinley, señala el informe de los ingenieros y marinos americanos sobre la catástrofe del *Maine*, estimada por aquellos informantes, como efecto de una explosión exterior producida por una mina submarina. El dictamen americano no define las responsabilidades, que por tanto quedan por determinar.

El Gobierno español estaba dispuesto á hacer sobre este asunto *cuanto exigiera el concepto más elevado del honor y la justicia*, y hasta había propuesto someter las diferencias de los dictámenes americano y español á peritos extraños é imparciales, cuya decisión aceptaba aquel Gobierno de antemano. Advierte el Presidente que á tal propuesta *no había contestado nada*.

Pero lo sucedido demostraba *que el Gobierno de España no podía garantizar la seguridad de un buque de la marina americana en el puerto de la Habana cuando ese buque va con una misión de paz y amparado en el derecho más completo*.

El resumen y el fin práctico de este Mensaje están contenidos en las siguientes líneas:

«En vista de estos hechos y consideraciones, pido al Congreso autorice y otorgue al Presidente poderes para adoptar medidas que aseguren el completo y definitivo término de hostilidades entre el Gobierno de España y el pueblo cubano y que aseguren en la Isla la instalación de un Gobierno estable, capaz de mantener el orden y de cumplir con sus obligaciones internacionales, garantizando la paz y la seguridad de sus ciudadanos como de los nuestros. También pido autorización para emplear las fuerzas militares y navales de los Estados Unidos, según sea necesario para dichos fines y en interés de la humanidad. Para contribuir á conservar la vida de los habitantes hambrientos de la Isla, recomiendo que continúe la distribución de alimentos y socorros y se vote un crédito del Tesoro público para completar la caridad de nuestros conciudadanos.

Hoy la solución depende del Congreso con todas sus terribles responsabilidades.

He agotado todos los esfuerzos para remediar el intolerable estado de cosas en un país que se halla á nuestras puertas y estoy dispuesto á cumplir las obligaciones que me imponen la Constitución y las leyes. —Aguardo vuestros acuerdos.—

Sin discutir por el momento las afirmaciones, las citas y las tesis de Mr. Mac Kinley, conviene, para la exacta inteligencia del Mensaje extractado, recordar dos cosas.

Primeramente, que ese Mensaje tiene el carácter de un Mensaje especial, sobre la totalidad de la cuestión cubana, incluyendo en ella el particular de la catástrofe del *Maine*, para cuya explicación se prescinde en absoluto del dictamen de los técnicos españoles y se desdeña el fallo de tercero.

La naturaleza de esta cuestión no consiente el someterla punto menos que exclusivamente á los debates de un Parlamento. Esto no se ha hecho nunca por Gobierno alguno, en circunstancias parecidas. A los Gobiernos compete proponer á las Cámaras la adopción de tales ó cuales medidas, cuando los hechos que las motivan implican un positivo é indiscutible agravio á la nación que, en su vista, debe tomar una actitud resuelta, en defensa de su honor ó de sus intereses, en relación concreta, con la ofensa ó el daño recibidos.

Llevar este negocio á las Cámaras americanas, (aun cuando no se hubiera producido en Norte América la agitación que allí produjo, por excitaciones sabidas de todo el mundo, la catástrofe del *Maine*) y poner esta cuestión en manos de diputados y senadores, después de la insistente recomendación de España de que todos estos negocios se trataran por el Poder Ejecutivo. (según previene la Constitución de los Estados Unidos y es práctica universal) con la reserva de hacer intervenir en el asunto á las Potencias extrañas á este conflicto, entrañaba, sin género de duda, el propósito de acelerar el término de la cuestión, entrando rasueltamente en el camino de las soluciones violentas.

Por otra parte, no puede prescindirse, con este motivo, de la actitud de Mr. Woodford en Madrid.

En 29 de Marzo, el representante norteamericano entregó al Gobierno español el famoso *Apunte* contestado categóricamente por este Gobierno en 31 de Marzo. En esta última fecha, nuestro ministro de Estado comunica á las Potencias europeas el *Apunte* y la contestación, y desde el 2 al 6 de

Abril se reciben en Madrid las declaraciones de los Gobiernos extranjeros.

La acción de estos cerca del Norte América y el español, se realiza desde el 6 al 9 de Abril. Dentro de este período (ó sea el 6 de Abril), Mr. Woodford presenta una extraña Nota del Ministerio de Estado español participándole que en aquel mismo día el Presidente Mac Kinley había remitido al Congreso americano un *Mensaje que abarcaba toda la cuestión cubana, acompañándolo con las recomendaciones que estimaba necesarias y oportunas..... sin aconsejar el reconocimiento de la independencia de los insurrectos, pero sí la adopción de medidas para la cesación de hostilidades y el restablecimiento de la paz y de un Gobierno estable en Cuba.*

Esto lo hacía en interés de la humanidad y en aras de la seguridad y tranquilidad de los Estados Unidos.

Pero el fin verdadero de la comunicación de Mr. Woodford era manifestar á nuestro Gobierno *que había esperado hasta las doce de la tarde del día 6, la notificación oficial de la suspensión definitiva de hostilidades en Cuba, sin duda por efecto del Apunte del 29 de Marzo.*

Y el representante americano añadía: «Si el Gobierno de S. M. llegara en el día de hoy á una decisión final, con respecto á un armisticio, telegrafiaré á mi Gobierno el texto de aquél, en caso de recibirlo antes de las doce de esta noche. De esta manera llegará á poder del Presidente, mañana jueves por la mañana á tiempo para que lo pueda comunicar al Congreso mañana jueves.»

Nuestro ministro de Estado replicó inmediatamente á esta Nota conminatoria, *que no había prometido manifestación alguna para el día 6 y que el Gobierno se atenía á la contestación dada en 31 de Marzo al Apunte del 29, presentado con la exigencia de una contestación en término muy perentorio.*

Al día siguiente (ó sea el 7 de Abril), Mr. Woodford retira su impertinente Nota del 6; participa que no se ha presentado al Congreso americano el proyectado Mensaje presidencial; dice que éste se presentará el día 11 y acompaña estas declaraciones con las siguientes significativas frases referentes á la retirada de la Nota:

Esto me proporciona un verdadero placer pues se aparta mucho del ánimo de mi Gobierno todo propósito de ejercer una presión sobre España.

Como se ha dicho antes, la suspensión de hostilidades en

Cuba, se decretó en 9 de Abril y en esta fecha fué conocido el acuerdo, en Europa y América. El día 11 se leyó el Mensaje de Mr. Mac Kinley.

Son excusados los comentarios.

Todo iba al vapor.

Claro se está que el Mensaje presidencial era un poderoso obstáculo para que la suspensión de la lucha produjese efecto en Cuba.

Los insurrectos cubanos debieron ver en aquel documento algo más que una promesa de inmediato apoyo. Porque en todo el Mensaje dominaba un espíritu desdeñoso para el Gobierno español, de cuyas concesiones se prescindía, lo mismo que se había prescindido de sus resistencias. En último caso, la referencia á éstas y aquéllas, debía ser estimada como un señalamiento de la debilidad de nuestro Gobierno.

De otra parte, la preterición absoluta de todo cuanto pudiera relacionarse con las gestiones de las grandes Potencias implicaba una nueva dificultad para la solución definitiva, racional y jurídica de la cuestión de Cuba.

Porque ya se veía claro de qué modo entendía el Gobierno norteamericano aquel propósito que expuso el Presidente Mac Kinley en su Mensaje de 6 de Diciembre de 1897, de *contar con el apoyo y la aprobación del mundo civilizado* para intervenir por la fuerza en la cuestión de Cuba, si así lo imponían la *civilización*, la *humanidad* y los *intereses* de los Estados Unidos.

Ahora, el Gobierno de éstos se desentendía en absoluto, hasta de las instancias de los Gabinetes europeos, y resultaba obvio que éstos habrían de mirarse mucho para continuar sus gestiones, así como que cuando en Washington se tomaba este camino, sería indudablemente porque aquel Gobierno tendría bastantes datos para pensar que nadie le iría á la mano.

No hay que preguntar cómo ni por qué los simpatizadores de la insurrección separatista cubana debieron tomar el Mensaje como un estímulo. Y con mayor motivo, si realmente era cierto que Mr. Mac Kinley profesaba opiniones desfavorables á la guerra. En tal caso, no solo el Presidente resultaba vencido, sino que el vencimiento de éste se verificaba de tal suerte y en forma tal, que constituía un excepcional apoyo para la causa contraria.

Una prueba de todo esto es lo que sucedió en el Congreso americano desde el 11 al 18 de Abril.

Por ocioso tengo detallar los debates, proposiciones y resoluciones parciales de las Cámaras americanas, en las que se estimó como principal excitante el particular del *Maine*. Los acuerdos de los dos cuerpos del Congreso fueron al principio distintos, por cuanto el Senado, acentuadísimo en su hostilidad á España, había proclamado el reconocimiento de la República cubana, rechazado por la Cámara de Representantes. Al cabo, las dos Cámaras se concentraron, votando una proposición de las llamadas *conjuntas* ó *ejecutivas*, concebida en los siguientes términos:

«Considerando que el aborrecible estado de cosas que ha existido en Cuba durante los tres últimos años, en Isla tan próxima á nuestro territorio ha herido el sentido moral del pueblo de los Estados Unidos, ha sido un desdore para la civilización cristiana y ha llegado á su período crítico con la destrucción de un barco de guerra norteamericano y con la muerte de 266 de entre sus oficiales y tripulantes, cuando el buque visitaba amistosamente el puerto de la Habana;»

«Considerando que tal estado de cosas no puede ser tolerado por más tiempo», según manifestó ya el Presidente de los Estados Unidos, en Mensaje que envió el 11 de Abril al Congreso, invitando á éste á que adopte resoluciones;»

«El Senado y la Cámara de Representantes, reunidos en Congreso, acuerdan:

Primero. Que el pueblo de Cuba es y debe ser libre é independiente.

Segundo. Que es deber de los Estados Unidos exigir, y por la presente su Gobierno exige, que el Gobierno español renuncie inmediatamente á su autoridad y gobierno en Cuba y retire sus fuerzas terrestres y navales, de las tierras y mares de la Isla.

Tercero. Que se autoriza al Presidente de los Estados Unidos y se le encarga y ordena que utilice todas las fuerzas militares y navales de los Estados Unidos y llame al servicio activo las milicias de los Estados de la Unión, en el número que sea necesario para llevar á efecto estos acuerdos.

Y cuarto. Que los Estados Unidos, por la presente, niegan que tengan ninguna intención de ejercer jurisdicción, ni soberanía, ni de intervenir en el Gobierno de Cuba, si no es para la pacificación, y afirma su propósito de dejar el dominio y gobierno de la Isla al pueblo de ésta una vez realizada dicha pacificación.»

Este acuerdo no fué tomado por unanimidad. En el Senado triunfó por 42 votos contra 35. En la Cámara, por 310 contra 6.

Quedaba por fijar la actitud del Presidente. La más ligera comparación del texto de los últimos párrafos del Mensaje presidencial de 11 de Abril con el texto del acuerdo votado por el Congreso norteamericano evidencia que este último había dejado muy atrás la propuesta de Mr. Mac Kinley.

El Congreso había resuelto la *inmediata expulsión* de España de la grande Antilla. Y se había atribuido el derecho de hacer entrar en el concierto del mundo contemporáneo á un *nuevo pueblo libre é independiente*. Y se había reservado la absoluta competencia para fijar la hora y el modo en que este pueblo podría entrar en el goce de sus derechos de soberanía.

Como después demostraré, quizá no se da otro caso de tamaña arrogancia en la historia contemporánea.

No había pensado en tanto el Presidente Mac Kinley, que sabía muy bien que las opiniones norteamericanas estaban divididas entre el reconocimiento del Gobierno insurrecto y la renuncia de España á retirar su bandera de Cuba. Pero Mr. Mac Kinley, enseguida, en 20 de Abril, hizo publicar oficial su adhesión al *bill* votado; es decir, procedió de un modo perfectamente opuesto al de Mr. Claveland, en casos parecidos, en 1896 y 97.

En su consecuencia, el representante español en Washington pidió el mismo día sus pasaportes, dejando confiada la protección de los intereses españoles en Norte América al embajador de Francia y al ministro de Austria Hungría.

Y nuestro ministro de Estado pasó el día 21, á Mr. Woodford, la siguiente comunicación:

«En cumplimiento de un penoso deber, tengo la honra de participar á V. E., que sancionado por el Presidente de la República, una resolución de ambas Cámaras de los Estados Unidos que, al negar la legítima soberanía de España y amenazar con una inmediata intervención armada en la Isla de Cuba, equivale á una evidente declaración de guerra, el Gobierno de S. M. ha ordenado á su ministro en Washington que se retire, sin pérdida de tiempo, del territorio norteamericano con todo el personal de la Legación.

Por este hecho quedan interrumpidas las relaciones diplomáticas que de antiguo existían entre los dos países, cesando toda comunicación oficial entre sus respectivos representantes, y me apresuro á ponerlo en conocimiento de V. E. á fin de que adopte por su parte las disposiciones que crea convenientes »

Con esta comunicación, el Gobierno español se adelantó á la petición de pasaportes por Mr. Woodford, el cual había recibido de su Gobierno la nota siguiente:

«Si á la hora del mediodía de: sábado próximo, 23 de Abril corriente, no ha sido comunicada á este Gobierno por el de España una con pleta y satisfactoria respuesta á esta demanda de paz y resolución, en tales términos que la paz de Cuba quede asegurada, el Presidente procederá sin ulterior aviso, á usar el poder y autorización ordenados y conferidos á él por dicha resolución, tan extensamente como sea necesario obtenerla en efecto.»

Los intereses americanos en España quedaron confiados al embajador de Inglaterra.

Mientras sucedió esto, el Gobierno español acudió otra vez á los Gabinetes extranjeros.

7

En 14 de Abril, nuestro ministro de Estado hizo saber á la Santa Sede que «las esperadas resoluciones de las Cámaras norteamericanas obligarían probablemente el Gobierno español á adoptar nuevos acuerdos cuyo carácter estaría en relación con las circunstancias: pero aceptada anteriormente por él la mediación de Su Santidad, estimaba como un deber el conocer á este propósito la última palabra del Santo Padre, no tanto porque abrigase esperanzas de un resultado pacífico de su elevada y bondadosa misión, compatible con nuestro honor y dignidad nacional, sino como muestra de respeto y gratitud á la Santa Sede, así como para que sirviese de sagrada sanción á la justicia de nuestra causa.»

Al propio tiempo el ministro español dirige á los representantes de España cerca de las seis grandes Potencias el siguiente despacho:

«La Cámara de Representantes de los Estados Unidos, después de inferir á España irritantes é injustificadas ofensas y de propagar con motivo del suceso del Maine, las más gratuitas é insoportables calumnias, ha votado por inmensa mayoría una resolución que autoriza al Presidente de la República para intervenir inmediatamente y hasta por medio de las armas, en el gobierno y en la vida interior de una provincia autónoma española. Votada que sea por el Senado y aceptada por el Presidente la proposición mencionada, constituirá en los Estados Unidos una situación de derecho y una amenaza de hecho, que nuestra dignidad no ha de estimar compatible con la continuación de las relaciones diplomáticas.

El Gobierno español, que aceptando la invitación del Padre Santo y defiriendo á los amistosos consejos de las grandes Potencias, acaba de extremar su moderación, y los dolorosos sacrificios para mantener

y facilitar a paz, ha de demostrar en una eventualidad que considera ya inevitables, la propia mayor resolución para defender el territorio y el honor nacional; y sin perjuicio de que todos los Gobiernos reciban próximamente, un resumen de los hechos y escritos más salientes en este periodo de nuestras relaciones con los Estados Unidos, acude ahora á la imparcialidad y á la conciencia de las grandes Potencias europeas para que por sí e las, á la luz del derecho universal y de la moral cristiana, consideren el atentado que sin justicia, razón, ni pretexto va á consumarse y determine después el juicio de la Europa en cuestión, de tan evidente y compleja importancia. —Sírvasse usted dar lectura de este telegrama á ese señor ministro de Negocios extranjeros.»

Y el 18 de Abril el mismo ministro de Estado de España remitió á todos los representantes de ésta en el extranjero, un extenso y razonado *Memorandum* sobre las relaciones de España con los Estados Unidos, desde el comienzo de la insurrección cubana hasta aquella fecha.

En este despacho se recomendaba que el *Memorandum* fuese comunicado, *sin pérdida de tiempo*, á los Gobiernos extranjeros, porque, «su objeto no era otro que exponer á la consideración de las Potencias amigas el derecho y la justicia que asistían á España y que ofrecía notable contraste con la conducta de los Estados Unidos.»

En el mismo telegrama se decía que «por la rapidez con que se sucedían los acontecimientos, era posible que en el momento de la entrega del *Memorandum* nuevos hechos hubieran venido á cambiar ó modificar los que se relataban.»

Luego, en 21 de Abril, el Gobierno español participa á los representantes del mismo, la ruptura de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, del siguiente modo:

«Sancionado por el Presidente de los Estados Unidos la resolución de ambas Cámaras que niega la soberanía española y amenaza con la intervención armada en Cuba, equivalente á una declaración de guerra, se retiró anoche nuestro ministro en Washington con el personal de la Legación, según instrucciones que tenía, y esta mañana se ha notificado á Mr. Woodford que quedaban interrumpidas las relaciones diplomáticas entre ambos países y cesaba toda comunicación oficial entre sus representantes. El Gobierno de S. U., al obrar de esta suerte se ha propuesto evitar la presentación del *ultimatum* americano que habría constituido nueva ofensa. Así lo ha comprendido el representante de los Estados Unidos, que se ha limitado á pedir sus pasaportes y saldrá esta tarde en el tren expreso para Francia.»

Por último, en 23 de Abril, el ministro español remite, por conducto de los representantes diplomáticos españoles, á los Gobiernos extranjeros un nuevo extenso *Memorandum* cuyo objeto es «completar el relato de lo sucedido y hacer resaltar, cual corresponde, las circunstancias en que va España á la lu ha provocada por los Estados Unidos.»

Este *Memorandum* concluye del siguiente modo:

«Con tranquila serenidad esperan el choque el pueblo y el Gobierno español, decididos todos y cada uno á ver der caras sus vidas y á defender, por cuantos esfuerzos alcancen, la legítima é histórica integridad del territorio. Sin ridículos alardes, pero con la fiera energía del que ha sabido conquistar en la Historia nombre y fama envidiables, defenderá con las armas el pueblo español su derecho á permanecer en América, sin que le arredre la magnitud de la empresa, ni la enorme superioridad de medios de que dispone su adversario.

El pueblo cubano, en su gran mayoría, se siente español y quiere continuar siéndolo. Así lo ha hecho saber por el órgano autorizado de su Gobierno autónomo responsable al Presidente de los Estados Unidos, expresándole que la independencia sería su ruina y que lo que anhela y lo que desea en virtud de su perfecto derecho á gobernarse como pueblo libre es vivir bajo la soberanía española, en la forma autonómica que le garantizara el goce de todas las libertades. Por esta razón, los peninsulares y los leales cubanos hijos de una misma madre y ciudadanos de una misma Patria, combatirán juntos contra la codicia norteamericana y se opondrán á que las Antillas españolas rompan el vínculo sagrado é inviolable que los une con su antigua y querida metrópoli.»

Las Potencias requeridas (es decir, las europeas) ó no contestaron ó lo hicieron de muy triste manera.

El *Libro Rojo* apenas da idea de las contestaciones de esas Potencias al telegrama que el ministro de Estado español dirigió á éstas en 14 de Abril.

En ese *Libro* consta solo que «el Gobierno italiano está dispuesto á cooperar con las grandes Potencias en favor de la paz»; y que el Gobierno alemán entendía «que habíamos hecho mucho por evitar la guerra, á la cual iríamos con serenidad para defender la dignidad y el derecho: que había esperanza de paz, porque las Potencias trabajaban para hacer *otra manifestación* en forma más adecuada, en fin, que Alemania se uniría desde luego á la proposición que se presentase y á las conclusiones aceptadas por todos...»

El Cardenal Rampolla, en 16 de Abril, asegura que «Su Santidad deplora que su intervención, secundada por las grandes Potencias, no haya dado el resultado que él esperaba; pero que no renunciaba á la esperanza, *aunque tenue* de que á la efervescencia de las pasiones sucediese la serenidad de juicio, que abriera camino á un honroso arreglo.» Por lo demás, «dejaba á la sabiduría y libre acción del Gobierno español, el adoptar las medidas que juzgara necesarias para la tutela de su derecho y dignidad, pero puesto que deseaba conocer la última palabra del Papa en cuanto fuera compatible con el honor y la razón de España, que no podía ser indiferente á Su Santidad, *recomendaba que no se precipitasen los sucesos* y que se guardara la calma y dignidad que tantas simpatías habían granjeado en el Mundo civilizado á su buena causa.»

También consta la respuesta de Inglaterra. La frialdad de siempre. El ministro de Negocios Extranjeros en aquel país, dijo, en 15 de Abril, á nuestro embajador, «que su parecer personal era que antes de que el Presidente de la República aceptase el acuerdo del Parlamento, no debía ser este objeto de negociación oficial...» Y en 18 de Abril el subsecretario de Negocios Extranjeros de la Gran Bretaña observa «que la demora que imponía la divergencia entre las Cámaras de los Estados Unidos, daría tiempo para conseguir que los insurrectos se sometieran al Gobierno español antes de que el Presidente de la República tomara un acuerdo». — Y añade «que el Gobierno inglés se ocupaba muy especialmente de la cuestión de Cuba...»

Sobre los *Memorandum* españoles de 18 y 25 de Abril, nadie dice cosa alguna.

De los demás Gobiernos, nada dice el *Libro Rojo*.

La comunicación del Gobierno español á Mr. Woodford, fecha 21 de Abril, podía haber sido algo más reservada en su referencia á la declaración de guerra, porque, en rigor de verdad, la ruptura de las relaciones diplomáticas no implica necesariamente la ruptura de las relaciones pacíficas. Pero de ninguna suerte sería lícito dar un alcance extraordinario é irracional á la estimación que el ministro de Estado de España había hecho del *bill* votado por el Congreso norteamericano, hasta el punto de suponer que aquella estimación equivalía á una declaración de guerra de parte del Gobierno español.

En tal supuesto hay que poner esta declaración á cuenta

del Gobierno de Washigton: primero, por el carácter notoriamente ofensivo del *bill* de 18 de Abril; después, por el *bill* que las dos Cámaras americanas votaron el 25 del propio mes, proclamando el estado de guerra.

Pero en daño de la corrección del Gobierno norteamericano aparece el hecho de que, antes del 25 de Abril aludido, los buques de guerra de los Estados Unidos apresaron en las aguas de las Antillas ó en sus proximidades, diez buques mercantes españoles. La evidencia de este atentado al Derecho Internacional la patentizaron los términos del *bill* citado, en el cual se da á la declaración de guerra efecto retroactivo, suponiendo que ésta comienza el 21 de Abril.

Nada puede justificar tal afirmación. Porque el Gobierno español, ni de palabra ni de obra, realizó cosa alguna contra la persona ni los bienes de los ciudadanos de Norte América. Hasta que los marinos y soldados de la República Americana hicieron armas contra España esta se limitó á prepararse para resistir la agresión anunciada en el *bill* de 18 de Abril.

El 22 de este mes fué capturado el buque español *Buena-ventura*, en el golfo de Méjico. En aquel mismo día se decretó el bloqueo de la costa septentrional de Cuba por los norteamericanos; bloqueo que no resultó efectivo, tanto por falta de buques como por la manera interminante de ejercerse la vigilancia, en una costa que pasa de 150 millas.

Inmediatamente son bombardeados, sin previo aviso, algunos puertos de aquella isla, sentándose precedentes para un hecho análogo realizado sobre Puerto Rico, el 11 de Mayo. Dos barcos norteamericanos, tomando la bandera española, entran en la bahía de Guantánamo y tratan de apoderarse de esta población. Son destruidos, por orden del Gobierno de los Estados Unidos, la mayoría de los cables telegráficos internacionales, que mantenían la comunicación de Cuba con el resto del mundo. Por aquel entonces, también, el referido Gobierno proclamó su resolución de renunciar al corso y de aceptar los principios del Tratado de París de 1856 sobre la guerra marítima. Y á poco (hacia el 24 de Junio) se verifica el desembarco del ejército norteamericano en las inmediaciones de Santiago de Cuba y comienza el sitio de esta plaza, con el auxilio de los insurrectos cubanos. El 4 de Julio es destruída totalmente la escuadra española á la vista de Santiago.

Lanzados en el camino de la guerra, los norteamericanos la llevan á Puerto Rico y á las islas Filipinas. Principian

por el bombardeo de la capital de la pequeña Antilla, cosa que como antes se ha dicho, sucede á principios de Mayo, dando ocasión á que los atacados demostraran gran decisión contra el extranjero agresor. Por otra parte, los enemigos, preparados desahogadamente en Hong-Kong, para caer sobre Manila, buscan el auxilio de los tagalos, aprovechando las quejas de éstos contra la Metrópoli española.

Es este un punto de subido interés, pero que, hasta el momento presente, aparece envuelto en grandes sombras, que hacen difícilísima su estimación. Contribuyen á ello, en gran manera, las arraigadas preocupaciones de los políticos españoles sobre Filipinas; la distancia á que se hallan éstas de la Metrópoli; la escasez de comunicaciones de Europa con aquellas islas; el régimen suspicaz, intolerante y anacrónico que allá existe y que consagra la omnipotencia del clericalismo y la dictadura militar—y en fin, los positivos esfuerzos que últimamente se han hecho en España, para que la opinión pública no fuera ilustrada respecto de las causas, el curso y los incidentes de las últimas insurrecciones de nuestra gran colonia asiática.

Estos esfuerzos han sido secundados por una asombrosa ignorancia del estado de aquel país, una gran pasión contra los insurrectos y un miedo, apenas concebible, de parte de los gobernantes y de los elementos liberales de la Metrópoli (1).

Por todo eso, á esta fecha, no sabemos bien si la insurrec-

(1) Abundan las pruebas: pero la última, y quizá más concluyente, la ofrecen los confusos é interminables debates que sobre la cuestión de Filipinas tuvieron efecto en el Congreso y el Senado, en los meses de Mayo y Junio de 1898. No hubo medio de averiguar lo que realmente había pasado en los años 96 á 98 en la gran colonia asiática, ni siquiera lo que pasaba á fines del segundo semestre de este último año. El Gobierno excusó enérgicamente la comunicación al Congreso de las instrucciones políticas dadas al capitán general. Sr. Agustí. No se pudo conseguir que alguien, con carácter oficial, precisase las condiciones reservadas del pacto de Banabiacté y rectificara lo que, en daño del Gobierno español, publicaba toda la prensa de Europa. Y un diputado liberal, el Sr. Alas, no pudo leer al Congreso, por los crecientes rumores de este, la extraña representación que por aquel entonces entregaron al señor Presidente del Consejo de ministros los procuradores de las Ordenes monásticas de Filipinas. El empeño era no hablar de ello.

ción que capitaneó Aguinaldo en 1896 y 97, estaba ó no sofocada, cuando comenzó la guerra de España con los Estados Unidos; ni cual fué el verdadero alcance del llamado pacto de Biñan, concertado, más ó menos explícitamente, en 1897, por el Gobernador general de Filipinas, Sr. Primo de Rivera, con Aguinaldo y sus compañeros; ni si este pacto se cumplió en todos sus extremos, ó por el contrario fué, como alega Aguinaldo, olvidado por las autoridades españolas, en parte muy considerable, por lo cual fué posible que la insurrección tagala se reprodujese en Mayo del 1898.

Por análogos motivos ignoramos hasta hoy los términos del pacto que, el comodoro norteamericano Devey, directamente ó por medio del Cónsul de los Estados Unidos en Hong-Kong, hizo con Aguinaldo, para que los tagalos apoyasen la agresión americana contra Manila. Y no sabemos más respecto de las excitaciones y los auxilios del Gobierno de Washington y del comodoro Devey, á las tribus, más ó menos civilizadas, de Filipinas, para que lucharan contra España, y favorecieran á los americanos de un modo tan decisivo, que, bien puede asegurarse que sin el apoyo de los filipinos, la empresa de los yankees no hubiera pasado de la fácil victoria de la bahía de Manila: victoria conseguida el 2 de Mayo de 1898, por barcos acorazados y de gran potencia, contra la débil escuadra española, de madera, y con cañones antiguos y casi inservibles. (1). Eso es tan cierto, como que sin el auxilio de los insurrectos cubanos, el ejército de Norte América no habría podido sostener el sitio de Santiago.

La falta de los datos aludidos es de suma importancia para apreciar bien, desde el punto de vista del Derecho Internacional, la acción de los Estados Unidos en Filipinas.

Siempre será un argumento desfavorable al Gobierno español la mera apariencia de que todos ó casi todos los elementos indígenas de Filipinas apoyaran al extranjero, en la guerra actual, rompiendo la hermosa tradición de aquél país, cuya historia ofrece páginas tan fortificantes como la referente á la expulsión de los ingleses de Manila, por el oidor D. Simón Anda y Salazar, casi con el solo concurso

(1) Sobre todo esto puede leerse lo que ha publicado el periódico *La Publicidad* de Barcelona en Junio y Diciembre de 1898 y primer trimestre de 1899. También puede consultarse la revista madrileña titulada *Correo de Ultramar* y que se publicó en 1898.

de los tagalos, en 1764. No se explica bien, que después de 300 años de dominación española, pudiera suceder eso, que no pasó en América, á pesar del movimiento insurreccional de Tupac-Amaru, en 1782. Y no digamos nada de la evidente impotencia de las órdenes monásticas que se daban punto menos que como la única garantía del imperio español en el Archipiélago hispano asiático y contra las cuales parece haberse hecho principalmente la última insurrección filipina. — Todo eso es muy triste y todo ello pide mucha explicación.

Pero de mayor gravedad y más alcance sería el cargo contra los americanos, de haber éstos utilizado en su favor el alzamiento de tribus (aparte las fuerzas y los elementos cultos, dirigidos por Aguinaldo), que, apasionadas por varios motivos y sobre todo, por el efecto natural de la lucha, pusieran en tremendo peligro la vida de las gentes pacíficas de los países insurreccionados y los intereses definitivos de la civilización. En este sentido, lo hecho por los norteamericanos (ó mejor dicho, lo que hasta ahora *parece* que *estos han hecho*) en Filipinas, sale del círculo de lo conocido en la Historia y de lo tolerable á pueblos de representación en el orden internacional.

Desde el comienzo de la guerra hasta principios de Julio, debió pasar algo entre los Gobiernos extranjeros y el español; pero la absoluta reserva de éste, hizo imposible que se supiera por aquel entonces nada relativo á este particular.

Nuestro Gobierno se negó á discutir en el Parlamento sobre el estado de nuestras relaciones exteriores, y en seguida suspendió las garantías constitucionales en toda España, sometiendo á la prensa á la previa censura, ejercida por oficiales del ejército, que, según órdenes superiores, no permitieron que se tratase de aquel negocio, é impidieron que el país se apercibiera para cualquier desastre.

Esto se debe relacionar con el pecado constante del Gobierno de Madrid de no interesar á la opinión culta del mundo, y sobre todo, á la de Europa, en la cuestión americana, durante la crisis de 1898.

Al contrario de lo que hizo el Gobierno norteamericano en 1865, cuando se planteó la cuestión del Alabama, los políticos españoles descuidaron totalmente la publicación de folletos, libros y hojas en el extranjero, precisamente cuando sobre Europa influían, con grandes exageraciones y errores

positivos, una conocida Agencia telegráfica puesta al servicio de los intereses de Washington, y un periódico yankee de gran información, como el *Herald*, que se publica en París hace algunos años.

Esta pasividad ó esta negligencia debe ser comprendida en el grupo de los cargos que, con bastante fundamento, hacen los adversarios del actual Gobierno español, el cual, sin duda alguna, fué á la guerra con los Estados Unidos y la sostuvo, en las condiciones más deplorables que pudiera imaginarse. Tal censura es incomparablemente superior á la que ahora se anuncia y que dentro de poco se acentuará, respecto á la aceptación de la guerra; porque no es discutible ya, que ésta era inevitable y que la querían é imponían, de todos modos, los Estados Unidos.

Por incidencia, y muy incompletamente, se supo por aquel entonces (y luego se ha comprobado) que, hacia el 20 de Abril, el Presidente de la República Suiza invitó al Gobierno español á adherirse á los artículos adicionales de la Convención de Ginebra de 20 de Octubre de 1868, sobre la suerte de los militares heridos en campaña. El Gobierno de Madrid convino en ello, el 25 de Abril, y supo, en 10 de Mayo, por conducto del Gobierno suizo, que también se había adherido el de Washington.

En 23 de Abril, España declaró caducados el Tratado de Paz y Amistad de 27 de Octubre de 1795 con los Estados Unidos y el Protocolo de 12 de Enero de 1877; concedió un plazo de cinco días á todos los buques norteamericanos para que salieran de los puertos españoles, y proclamó las reglas de la guerra marítima, sancionadas por el Congreso de París de Abril de 1856, á pesar de que, como era notorio, el Gobierno español no había aceptado hasta entonces los acuerdos de aquel Congreso.

Añadió que, «manteniendo su derecho á conceder patentes de corso, conforme á su reserva de 16 de Mayo de 1857», prescindía, por entonces, de este recurso extraordinario. limitándose «á organizar, con buques de la marina mercante española, un servicio de cruceros auxiliares de la marina militar, que cooperarían con ésta á las necesidades de la campaña, y estarían sujetas al fuero y jurisdicción de la marina de guerra». Afirmó el derecho de visita y de apresamiento de los barcos enemigos por los de la marina real; definió el contrabando de guerra y declaró piratas á los capitanes, patronos y oficiales de buques que, no siendo norteamerica-

nos, ó no siéndolo las dos terceras partes de su tripulación, fuesen apresados ejerciendo actos de guerra contra España.

Para llevar á efecto todo esto, y singularmente el derecho de visita, se publicaron unas instrucciones, fechadas en 24 de Abril de 1898, y comunicadas, junto con las declaraciones antes referidas, á los Gobiernos extranjeros, en 3 de Mayo del mismo año.

El 11 de este mes, los representantes de España en el extranjero son requeridos por el Gobierno español para que hagan saber á las Potencias amigas: 1.º que la ley americana de 25 de Abril da efecto retroactivo á sus disposiciones, suponiendo existente el estado de guerra desde el 21 de aquel mes; 2.º, que antes del 25 de Abril habían sido apresados, contra todo derecho, los barcos españoles *Buenaventura, Pedro, Catalina, Miguel Jover, Saturnina, Caudila, Antonia, Sofía, Matilde y Cándida*; y 3.º, que el bloqueo de la parte Norte de Cuba, comprendido entre Bahía Honda y Cárdenas y el del puerto de Cienfuegos, no eran efectivos, como lo demostraban la entrada y salida de muchos barcos españoles en aquellos puertos.

En 6 de Junio los diplomáticos españoles informan á los Gobiernos extranjeros de los bombardeos realizados por los americanos, del uso indebido de la bandera española y de la interrupción de los cables internacionales. Con tal motivo, el Gabinete español invoca la doctrina generalmente admitida en el mundo contemporáneo y principalmente la de los tratadistas americanos como Dudley Field.

Nada se sabe de la acogida dispensada por los Gobiernos europeos y americanos á estas recomendaciones y protestas.

Ignórase si la renuncia al corso fué discutida, siendo evidente la ventaja que de ella reportaban los Estados Unidos, ahora poderosos y superiores á España y que en 1856 y 60 se negaron á comprometerse á semejante renuncia, precisamente por la inferioridad de su marina y de sus medios de guerra. Es sabida la importancia que los corsarios dieron á los Estados Unidos del Sur en la guerra de separación de 1861 á 65. También es evidente que el comercio del mundo aprovechó la renuncia del corso por parte de España y que esto debía ser correspondido de alguna suerte.

En realidad, parece que, desde el mes de Abril, España quedó entregada completamente á sus propias y exclusivas fuerzas, y que el resto del mundo se dispuso á asistir como mero espectador, á la tremenda lucha de aquella Nación,

quebrantada y sorprendida por los sucesos, con la poderosa República norteamericana, amparada de las grandes insurrecciones de Cuba y de Filipinas, y fortificada tanto por el fracaso de las negociaciones pacíficas del mes de Abril, como por la actitud tímida, cuando no cobarde, de las mismas Potencias desairadas por el Mensaje Mac Kinley de 11 de Abril de 1898.

Esta era la situación de las cosas al comenzar el mes de Julio de este último año.

Ahora procede examinar esos hechos á la luz de los principios y en relación, no ya sólo con los intereses y la representación de España, si que con el Derecho Internacional, la representación de los grandes factores del mundo moderno, y el sentido de la civilización contemporánea.

Mejor dicho, ahora procede sacar la lección aprovechable que entraña el actual conflicto hispano-americano.

8

Es notorio que la actual guerra de los Estados Unidos con España tiene un carácter especialísimo.

En primer lugar, es evidente que España no ha dado á la República norteamericana motivo ni pretexto de aquellos que justificarían una declaración de guerra ó una agresión armada del género de las luchas ordinarias entre las naciones modernas. Antes por el contrario, España ha extremado sus deferencias á los Estados Unidos y ha excusado la toma de razón de algunos agravios de estos últimos.

También es evidente que el ataque moral y la agresión material, en el conflicto presente, han partido de Norte América.

Y, en fin, no hay medio de excusar las terminantes declaraciones del Mensaje presidencial de Mac Kinley de 11 de Abril de 1898 y de los considerandos del bill americano del 18 del propio mes y año.

En el curso de este trabajo se han señalado algunos actos del Gobierno español censurados por sus adversarios como muestras de debilidad. Antes del 6 de Diciembre de 1897, se había dado, entre otros casos, el del apresamiento del barco filibustero *Competitor*, con cuyo motivo se discutió mucho si procedía ó no juzgar militarmente á los tripulantes y pasarlos ó no por las armas, conforme á las leyes de Cuba y á las ordenanzas del ejército español. Aquella grave dificultad se resolvió en favor de los Estados Unidos; como en consideración á éstos fué luego indultado el cubano Sanguily, preso y aun sentenciado, en la Habana, como reo del delito de conspiración y rebelión.

Por esta causa, y mediante la invocación, más ó menos oportuna, del Tratado hispano-americano de 1795 y del Pro-

tocolo de 1877, fué en Cuba bastante frecuente la diferencia de suerte de los compañeros de una misma partida ó una misma expedición filibustera, según los prisioneros hechos por los españoles fueran norteamericanos ó naturales de Cuba. Y es de advertir que el beneficio reconocido á los primeros se extendió á cubanos de nacimiento, que para éste ó muy parecido efecto, se habían nacionalizado en los Estados Unidos, mediante un abuso que hace poco, ya denunció, con toda solemnidad, al Congreso de Washington, el Presidente Cleveland.

No menos gravedad tiene la relativa calma que el Gobierno español demostró ante la sentencia dada por el Tribunal Supremo de Justicia americano, con motivo del alistamiento del barco americano *Horsa*, destinado á favorecer la rebelión cubana. Mediante aquella sentencia se rectificó el Acta americana de 1818 que atribuye al Presidente de los Estados Unidos, el derecho de impedir que en el territorio de la Unión se preparen ataques contra naciones amigas.— Ahora las autoridades americanas declararon que, para impedir las expediciones filibusteras, era preciso que constara el fin hostil de las mismas.

Con esto habría bastado para facilitar las expediciones referidas; pero sobre toda otra consideración estaba el hecho verdaderamente escandaloso de que en Nueva York, en Filadelfia, en varias poblaciones de la Florida y hasta en el mismo Washington, actuaban con toda libertad, los comités directivos de la insurrección de Cuba.

La nota pasada por el Gobierno norteamericano al español, en 26 de Junio de 1897, protestando, en términos de una gran violencia, contra los bandos y procedimientos del general Weyler para reprimir la insurrección cubana y para hacer efectiva la reconcentración de la población rural, es un documento poco compatible con el respeto debido á la soberanía de España; sin embargo de lo cual, el Gobierno español se limitó, en 4 de Agosto del 97, á otra protesta bastante suave, contra la *viveza del estilo (sic)* de la Nota de Junio, á rectificar las *exageraciones* é inexactitudes de la misma, á recordar los abusos y violencias que se hicieron en los mismos Estados Unidos durante la guerra de separación y á afirmar que lo que á estos correspondía, dado el Tratado de 1795, era impedir que en el territorio americano encontrase ayuda y hasta dirección la insurrección cubana, la cual, sin este apoyo, ilegítimo á todas luces, habría

sido extinguida, mucho tiempo hacía, por las armas de la Metrópoli. El contraste de estas dos notas es palpable y noso para la susceptibilidad española.

Nada de lo antes expuesto, ni nada de lo que suceda desde el Mensaje de 1897, produjo la menor violencia por parte del Gobierno de Madrid.

No la produjo tampoco la amenaza de la intervención armada con que el Presidente Mac Kinley termina su Mensaje.

Ni provocaron protestas de difícil contestación, los cultos sin ejemplo, con que diputados y senadores americanos, en sesiones solemnes, atacaron á España en 1897 y 98; ni el atropello de la bandera española por un grupo de soldados de la milicia de Delaware; ni las declaraciones de abierta hostilidad y franca provocación de algunas legislaturas y algunos gobernadores de ciertos Estados de la Unión.

España se redujo, ante todo esto, á reclamar de los Estados Unidos que no protegieran la insurrección cubana.

Luego—ya se ha dicho—tuvo efecto la captura de un buque español por los de guerra norteamericanos, el 25 de Abril, antes de haberse hecho la declaración de guerra.

En el Mensaje del Presidente Mac Kinley, fecha 1 de Abril (es decir, el Mensaje en que se pide autorización y fondos para la intervención en Cuba) se reconoce terminantemente que «*la paz y prosperidad*» de Cuba no estaba en peligro por discrepancias entre los Estados Unidos y España, ni manchada por la sangre de ciudadanos americanos. Luego viene (con la afirmación resuelta de que se trata de una *intervención* para que terminen las hostilidades en Cuba y allí se instale «un gobierno estable, capaz de mantener el orden y de cumplir las obligaciones internacionales») la precisión de los cuatro motivos de esa intervención.

No hay para qué repetir lo que se ha dicho del acuerdo del Congreso americano.

Pero sí hay que insistir en la consideración de los motivos expuestos por el Presidente Mac Kinley, para establecerlos en cuanto éstos pudieran determinar una guerra más o menos ordinaria, siempre fuera de las condiciones particulares de lo que se llama verdaderamente una *intervención internacional*, en el supuesto de la *interdependencia* de las Naciones cultas.

El Presidente norteamericano señala como causas del

ficto (aparte la causa de humanidad), los perjuicios que la guerra de Cuba producía al comercio americano, — la impotencia del Gobierno español para proteger la vida y los intereses de los americanos en Cuba, — los gastos enormes que imponía á los Estados Unidos el imposible de evitar las expediciones filibusteras, á cuyo gravamen había que añadir las complicaciones y cuestiones irritantes que estos esfuerzos producían ó podían producir—y el peligro constante de que los barcos americanos fuesen apresados por una marina de guerra extranjera.

No hay por qué ni para qué negar lo más sustancial de los hechos antes aludidos, pero tan bién es inexcusable poner al lado de su reconocimiento otros datos que reducen tanto su alcance, para los efectos de que aquí se trata, que en ocasiones les quitan toda importancia.

Porque, primeramente, hay que tener en cuenta que los efectos de las guerras en el comercio de los neutrales son cosa corriente y que á nadie hasta ahora se le ha ocurrido alegar como una causa decisiva para que cualquiera de las naciones neutrales declare á su vez la guerra al país, ya afligido por la lucha que se verifica en su interior, ó que tiene que sostener contra otro pueblo. Ciertamente que el comercio de los Estados Unidos con Cuba ha bajado más de un 70 por 100, después de haber revestido una importancia excepcional, pues que más del 80 por 100 de la producción de Cuba se colocaba fácilmente en el mercado norteamericano. Pero de ninguna suerte, esta desgracia es exclusiva de los Estados Unidos.

Igual consideración tiene que oponerse al argumento relativo á las pérdidas que los norte-americanos experimentaron en Cuba por efecto de la guerra. Son las mismas que experimentarían los demás extranjeros y los españoles peninsulares y criollos, habitantes de la grande Antilla. Y además son las corrientes ordinarias en toda guerra civil, á cuyos rigores y peripecias se someten los extranjeros que se deciden, por motivos de pura conveniencia particular, y por su libérrima voluntad, á establecerse en un país extraño.

Menos exacto, todavía, aparece el Presidente Mac Kinley cuando habla de los esfuerzos que el Gobierno norteamericano tenía que hacer para lograr el imposible (según el Presidente) de evitar las expediciones filibusteras.

Que esto último no fué así, lo sabe todo el mundo.

Hace ociosa toda argumentación el hecho evidente de que en las ciudades norteamericanas se hallaba establecido el verdadero Gobierno de los insurrectos cubanos, el cual, como los mismos Presidentes de los Estados Unidos han declarado, no ha podido constituirse de un modo estable en ninguna población—ni aun sitio determinado—de la isla de Cuba. En todo caso, la sentencia antes aludida sobre el caso del *Horsa*, en relación con el Acta de neutralidad de 1818, suple todos los razonamientos; porque es indiscutible que mediante aquella doctrina no hay posibilidad de impedir expedición alguna filibustera de los puertos norteamericanos.

Esto sin contar ya con la probable negligencia de los funcionarios públicos de los Estados Unidos, calurosos simpatizadores de la insurrección cubana ya con las declaraciones oficiales de muchos Estados particulares de la República en favor de los cubanos insurrectos.

De modo que no se puede hablar en serio de la corrección norteamericana en el punto de que ahora se trata. No hay nadie en el mundo, fuera del Presidente Mac Kinley, que discuta siquiera este punto. De sobra se explican sobre él todos los periódicos políticos y todas las revistas de Derecho internacional de nuestros días.

Pero esto significa algo más que la vacuidad del argumento norteamericano: esto constituye un argumento en contra del Gobierno de los Estados Unidos y de su tesis respecto de los motivos particulares de la guerra. Pues claro es que para que tengan algún valor las protestas de los norteamericanos respecto de los perjuicios que les traía la guerra de Cuba, es absolutamente indispensable que los protestantes no tuvieran la menor culpa ni en la iniciación ni en el sostenimiento, ni en el desarrollo de esa guerra. Y resulta todo lo contrario.

Esto antes de 1897, porque después, como se ha explicado en otra parte y volverá á comentarse más tarde la influencia del Gobierno de los Estados Unidos en la continuación de la insurrección agonizante fué tal, que bien puede asegurarse que á ella se debió, sobre todo, que la guerra cubana no terminase en los primeros meses de 1898. No hay medio de rectificar lo que es de dominio público; lo que se sabe perfectamente en todo el mundo; lo que era materia de la conversación diaria de cuantas personas discurrían sobre estos particulares en el Capitolio de Washington y en las calles de Nueva York.

En resumen, para que los argumentos ahora discutidos tuviesen alguna fuerza era preciso que los males de que el Presidente Mac Kinley se queja, fueran privativos de los norteamericanos y luego, que en la producción y sostenimiento de esos males, no cupiera la menor parte á los Estados Unidos. Ni lo uno ni lo otro es cierto.

Verdad que el Gobierno norteamericano ha insistido mucho en la observación de que las leyes y las prácticas de la República no permitían la adopción de ciertas medidas para impedir la supuesta ó verdadera cooperación de los norteamericanos en la insurrección cubana. Pero, aun dando por cierto que el Acta de neutralidad de 1818 (interpretada ahora de muy distinta manera á como se entendió para decretarla, después de la segunda guerra con la Gran Bretaña, y de graves rozamientos con Francia) no consentía lo que el Gobierno español solicitaba en términos de una modestia incomparable, hay que estimar otros dos argumentos de positiva fuerza.

El primero, ya indicado en el curso de este trabajo, es la imposibilidad racional y jurídica de admitir el absoluto derecho de un pueblo que pretende figurar en la sociedad internacional, para establecer, por su exclusiva cuenta y en absoluta autoridad, las condiciones del respeto debido á la soberanía é independencia de las demás naciones. Si este último error prosperase no habría neutralidad ni paz posibles. Cada Nación se fijaría libremente los límites de la consideración debida al poder extranjero y todas las reclamaciones hechas por éste, en vista de una neutralidad dudosa ó falsa, serían rechazadas con el argumento de que las leyes de la Nación requerida consentían á los ciudadanos de ésta una gran libertad para perjudicar al extranjero. Es decir, el mismo argumento que palpita en el fondo de las replicas dadas ahora por el Gobierno norteamericano á las reclamaciones españolas.

Pero además hay otra razón que destruye totalmente esta pretensión norteamericana, que, por otra, parte se armoniza bastante con la reciente tendencia de muchos políticos de los Estados Unidos, no sólo á mantener cierta originalidad en lo que podía llamarse su Derecho Internacional, sino á imponerlo á los demás Gobiernos del Mundo.

Esa razón es la experiencia de 1861-73; lo que los propios Estados Unidos pretendieron y sostuvieron respecto de la neutralidad y de las consideraciones debidas á los insurrec-

tos confederados y al Gobierno de Washington con motivo de la famosa guerra separatista del Sur.

Es bien sabido que durante aquella guerra se construyeron en los puertos de la Gran Bretaña, por particulares desligados de todo vínculo con el Gobierno inglés, algunos barcos destinados á los sudistas y que ya en plena mar ó sobre las costas norteamericanas, destruyeron muchos barcos de la marina federal. El Gobierno de Washington protestó calurosamente y aun exageró sus pretensiones respecto á la neutralidad en términos no corrientes conforme á los preceptos de la neutralidad armada de fines del siglo pasado y á lo convenido en el Congreso de París de 1856, que era la legislación de la época. Inglaterra (que sobre estos particulares siempre se mostró muy reservada, hasta el punto de no suscribir buena parte de los conciertos vigentes en todo el mundo) opuso viva resistencia á las reclamaciones norteamericanas, aun cuando, á decir verdad, nunca los diplomáticos británicos llegaron á la franqueza con que los americanos de hoy tratan de emanciparse de los deberes ordinarios de la neutralidad entendida por el común de los mortales. Los debates de Inglaterra y los Estados Unidos continuaron por mucho tiempo y en ocasiones revistieron formas nada agradables.

El resultado fué, primeramente, el Tratado de Washington de 8 de Mayo de 1871, por el cual las Potencias contratantes sometieron sus dificultades á un tribunal de árbitros que se había de reunir en Ginebra, para resolver en vista de tres reglas que se consignaron en el Tratado y se conocen en la Historia contemporánea, con el nombre de las Reglas de Washington. Por ellas un estado neutro está obligado á impedir á los beligerantes que se sirvan de sus puertos ó de sus aguas, para aumentar ó renovar provisiones militares y armas, así como para reclutar soldados. También está obligado á emplear toda la vigilancia posible en sus propios puertos y en sus aguas y respecto á todas las personas que vivan dentro de su jurisdicción, para impedir toda violación de las obligaciones y los deberes señalados en el Tratado. Por efecto de este acuerdo se verificaron las sesiones del tribunal en Ginebra en 1872, saliendo de allí gruesas indemnizaciones que tuvo que pagar Inglaterra, por causa de la pérdida de barcos americanos como el *Alabama*, el *Florida*, el *Oreto* y otros, á bastantes particulares de los Estados Unidos, perjudicados por la desconsideración con que

Inglaterra había tratado la practica general de neutralidad de todo el mundo culto.

Sobre estos extremos es de obligada consulta el libro que Mr. Caleb-Cushing (uno de los arbitrios nombrados por los Estados Unidos) publicó en 1874 con el título de El Tratado de Washington. Ese libro es el resumen de todas las contestaciones que ahora puede dar España, y en general, por todos los defensores del Derecho internacional, á los argumentos del presidente Mac Kinley.

Pero todavía, en honor del pueblo de los Estados Unidos y de la causa de la Justicia universal, que está muy por cima de las pasiones del momento y los exclusivismos de raza y de fronteras, es dable invocar contra las exageraciones y los sofismas de que ahora se trata, el testimonio de otro ilustre norteamericano, de Mr. E. J. Phelps, antiguo representante de los Estados Unidos de América en Londres y una verdadera autoridad en materias de Derecho internacional.

Mr. Phelps, como algunos otros publicistas, senadores y catedráticos norteamericanos, han protestado ahora calurosamente contra la guerra de España y los Estados Unidos, del mismo con que el gran Lincoln protestó contra la conducta que en su tiempo observó el Gobierno norteamericano respecto á México y Texas, y como Jefferson y Monroe censuraron los atropellos preparados ó realizados sobre la Florida antes de ser adquirida esta por los americanos mediante el Tratado hispano-americano de 1819 y antes de iniciar Monroe los tratos pacíficos con los indios ribereños del Missisipe.

El respetable diplomático de quien ahora me ocupo publicó, en 28 de Marzo de 1898, una carta abierta dirigida á Mr. Levi P. Morton, ex vice-presidente de la República con el título de La Intervención en Cuba. De esta substancial carta, son los párrafos siguientes:

«El género humano, aleccionado por la experiencia, ha convenido—y el mundo no puede permitir que este acuerdo sea rechazado—que ningún motivo, como no sea la defensa de los intereses materiales de una nación ó de su honra, que es el más excelsa de los intereses, puede justificar la intervención violenta en los asuntos de otra nación con la cual se está en paz.

La medisción ó la ayuda amistosa puede siempre ofrecerse, y puede aceptarla ó declinarla el Gobierno á quien se ofrece; pero una vez re-

chazada, todo intento de intervención armada es un crimen, cuyas tristes y aciagas consecuencias están demostradas en muchas páginas de la historia. Y esto tiene aplicación especial, sobre todo si se trata de intervenir en apoyo de una rebelión armada contra otro Gobierno por sus ciudadanos.

La idea de que esta nación, ó otra alguna, esté justificada para arrogarse la supervisión moral ó política en los asuntos de sus vecinos y para enmendar ó corregir por la invasión armada los defectos ó faltas de sus instituciones ó los errores de su gobierno, ó bien para ejercer la caridad por la fuerza, es inadmisibile en absoluto é infinitamente perniciosa.

A la luz de estas consideraciones investiguemos qué motivos se alegan para pretender que debemos intervenir en los asuntos de España en la isla de Cuba y precisamente lo que vendría á significar la intervención.

España es y ha sido siempre una nación amiga. El agitador que más industriosamente busque la guerra no ha podido encontrar en ninguna historia, desde que América quedó abierta á nuestra actividad, gracias á Cristóbal Colón, ningún motivo de querella entre ambas. España ni nos ha atacado, ni se propone atacarnos, ni tiene los medios para ello. Ha manifestado, por el contrario, el más vivo deseo y ha hecho todos los esfuerzos para evitar hostilidades que serían para ella, y lo sabe bien, calamitosas. Combate España una rebelión contra su autoridad en Cuba, que hace tiempo hubiera terminado por agotamiento de no haber estado apoyada y alimentada por expediciones continuas desde este país, en violación de nuestras leyes de neutralidad y de los deberes que los tratados nos impone. Ciertó que este Gobierno no ha favorecido las expediciones; que ha hecho algunos esfuerzos para suprimirlas, sinceros sin duda, pero ineficaces siempre, empleando al efecto alguaciles federales que de ordinario han llegado á los muelles de donde salían los barcos, después de haber zarpado éstos. Con una vigésima parte de las fuerzas marítimas para reunir las cuales revolvemos hoy el mundo, y que destinamos «á fines de defensa nacional,» hubiéramos pedido cegar la única fuente de donde ha recibido la rebelión los recursos que la han permitido vivir.

Algunos de los que abogan por la guerra sostienen que debe hacerse á España responsable por la pérdida del *Maine*; tenga ó no la culpa de ella. Es difícil que puedan sustentar esta proposición, porque aun cuando el desastre se debiese á la negligencia de España, sería incuestionable su responsabilidad. ¿No se les ocurre á esos señores que la regla que invocan sería aplicable á ambos aspectos del caso? Si España ha de garantizar la seguridad de nuestros buques en sus puertos, tenga ó no tenga ella la culpa de lo que sobrevenga, entonces nosotros,

saldrán de nuestros puertos expediciones armadas que vayan á subvertir á su gobierno. Y si en un caso la negligencia implica responsabilidad, debe implicarla en el otro.

Nosotros cobramos á la Gran Bretaña quince millones de pesos por las depredaciones del *Alabama*, que sólo había sido construido, pero no equipado, armado ó tripulado en aquel país; y al exigir este cobro nos fundamos en que el gobierno inglés no había ejercido debida vigilancia para impedir que zarpara el buque. ¿Hay quién dude de que podría presentarse un alegato aún mas poderoso de negligencia contra nuestro gobierno, ante un tribunal de arbitraje, con motivo de estas expediciones?

En esta contienda entre España y sus súbditos rebeldes, sin considerar para nada los méritos de la misma y concediendo á los insurrectos todas las virtudes que se supone acompañan á una rebelión contra un Gobierno constituido... excepto cuando este Gobierno es el nuestro, ¿existe, en primer lugar, algún interés de nuestra parte que justifique la intervención por derecho de propia defensa?

La vocóse al principio, para cohonestar esta ingerencia, la interrupción que sufría el comercio americano; pero ya se ha abandonado pretensión semejante. Es cosa de sobra establecida para que pueda discutirse que los inconvenientes y pérdidas sufridas por el comercio de los Estados neutrales cuando existe guerra, aun siendo á menudo considerables, no constituyen motivo lícito para la intervención, y hay que sobrellevarlos. En este respecto la Gran Bretaña ha perdido mucho más que nosotros.

Cuando en la guerra civil los puertos del Sur fueron bloqueados por las escuadras federales, sufrió grandes pérdidas el comercio de otras naciones, especialmente tratándose de un artículo tan importante como el algodón. Y sin embargo, las naciones perjudicadas no hicieron por ello la menor indicación de ingerencia, ni se la hubiéramos tolerado. Debe, pues, reconocerse, y todo el mundo lo reconoce, excepto los periódicos interesados, que no estamos en la necesidad de propia defensa contra España, ni tenemos derecho alguno á vindicar agravios que nos den títulos á interponer nuestras armas en pro de la rebelión cubana.

El terreno en que finalmente se han colocado los que predicán la agresión, es que debemos ir á la guerra por humanidad. Pero siempre se supuso que la humanidad era precisamente una de las principales razones para evitar la guerra, y que de ningún modo puede servirse mejor los intereses de la humanidad.

Cierto que el derecho internacional reconoce como única y rara excepción de la regla que hemos mencionado respecto de la intervención idénticas razones, debemos garantizarla de que no se equiparará y ción, que una nación puede intervenir cuando se hace absolutamente

necesario impedir una matanza injustificada ó ultrajes monstruosos en otro país; pero esta excepción, que sólo rarísimas veces se ha invocado para proceder, sólo es aplicable en casos extremos y clarísimos y no tiene aplicación al caso presente.»

Hasta aquí Mr. Phelps. Ahora, pongamos á un lado los supuestos motivos directos y ordinarios de la guerra que discutimos, y volvamos la vista á la causa primera de las expuestas por Mr. Mac Kinley. Examinemos esto con calma y calculando todo el alcance del nuevo problema.

9

Al tomar este nuevo punto de vista, nos colocamos frente á *una intervención internacional*, en su forma más acentuada, más violenta.

De modo que no se trata de una *cuestión particular* y de conocido alcance de España y los Estados Unidos. Aunque no complicaran el negocio otros intereses y otras causas, con lo dicho basta para asegurar que tenemos delante un problema de Derecho internacional.

Pero en el caso concreto á que se refiere este trabajo, procede preguntar: 1.—¿Había motivos, en Cuba, para una intervención extranjera?—2. Caso afirmativo ¿podían realizarla los Estados Unidos?—3. En el supuesto favorable ¿era lícito realizar esa intervención del modo con que se ha hecho?

Para discutir cualquiera de estos puntos es preciso considerar antes y por breves momentos, la doctrina y las prácticas más generalizadas en nuestros días respecto del particular gravísimo de la *intervención*. Lo justifican, de una parte, la necesidad de estimar esta cuestión á la luz de los principios y prescindiendo de los intereses personales y de las simpatías que pueda inspirar cada uno de los pueblos interesados en el actual conflicto hispano americano —y de otro lado, el error que, con tanta arrogancia como insistencia, vienen propalando desde los comienzos de la actual guerra, la casi totalidad de nuestros oradores y nuestros periódicos, respecto del alcance de la soberanía de los pueblos y el concepto de la independencia de las naciones.

Importa precisar bien esto, porque como no se trata de pro-

blemas de política interior en cuya resolución solo influye la voluntad de los españoles, las equivocaciones en que éstos incurran de ninguna suerte han de ser compartidas por el resto del mundo. Por tanto, las fatales consecuencias del error *patriótico* las soportaremos solo los que vivimos y padecemos en España.

Veamos, pues, las cosas desde alto.

Es muy singular el cambio que en las opiniones se ha operado respecto del particular de la *intervención*, en todo el curso del siglo actual.

En su primera mitad, los partidarios de la *intervención internacional* son, por lo común, los defensores de las opiniones más conservadoras. Las cancillerías y los políticos de las Monarquías absolutas la patrocinaban de un modo resuelto contra la tendencia liberal representada en Europa por Inglaterra y en América por los Estados Unidos. Los publicistas italianos la prodigaban las más acres censuras y el Papa, en su Encíclica de 8 de Diciembre de 1864, —proposición 62 del *Syllabus errorum*— declara error lo siguiente: «*Proclamandum est et observandum principium quod vocat de non interventum.*»

En rigor, la política de la intervención la iniciaron, en la Edad contemporánea, los partidarios de la solución tradicionalista monárquica. Así lo demuestran la declaración hecha en 27 de Agosto de 1791 por los aliados de Pilnit contra la Revolución francesa, el *ultimatum* análogo de Austria de 1792, y la proclama prusiana firmada, á instancia de los emigrados franceses, por el duque de Brunsвик. en 7 de Junio de 1792. Hasta 19 de Noviembre de este año, no contestó la Convención declarando que Francia concedería fraternidad y socorro á todos los pueblos que quisieran recobrar su libertad.

La misma Inglaterra, por el Tratado de 20 de Noviembre del año quince, se comprometió con las demás Potencias europeas que habían dado al traste con Napoleón y restablecido el antiguo orden de cosas, á sostener éste y aun á celebrar, por medio de sus representantes, reuniones periódicas con los representantes de las demás naciones del centro de Europa «para la atención de los grandes intereses comunes.»

Pero, por el transcurso del tiempo, las situaciones variaron. Inglaterra, á partir de 1821 y del despacho de lord Castlereagh, tomó una actitud opuesta. Y más tarde, Ingla-

terra rectificó esta misma disposición interviniendo activamente en todos los negocios orientales, así como en los de España é Italia.

Es notorio que en estos últimos 40 años, los mayores partidarios de la intervención internacional han sido los liberales.

Esta contradicción se explica bien por el cambio general de la dirección política de Europa. A los comienzos del siglo, la fuerza estaba de parte de los elementos tradicionalistas y la intervención se recomendaba y se hacía, para impedir el advenimiento de las nuevas ideas ó para restaurar el antiguo régimen. Después, la intervención se ha recomendado por motivos y en sentido perfectamente opuestos.

Pero sobre todo esto se hallan los últimos progresos y el sentido total del Derecho público contemporáneo, acusado por las tres grandes y dominantes tendencias del Derecho internacional.

De ellas, la primera es la que tiene por fin determinar el concepto de la *Nación*, que no es un hecho arbitrario y pasajero, sino que exige condiciones de regularidad, permanencia, suficiencia, responsabilidad y, en una palabra, *personalidad*, dentro del cuadro general de los pueblos cultos que constituyen hoy la forma superior positiva de la sociedad humana. Las declaraciones de los Congresos de Berlín de 1878 y 1885 sobre el Congo y la cuestión de Oriente son de un valor decisivo en esta materia.

La segunda tendencia se determina en el sentido de favorecer y acelerar la constitución de la *Sociedad de las Naciones*; es decir, algo superior á la nacionalidad moderna, que ya es un progreso extraordinario sobre la Ciudad antigua y el exclusivismo local de la Edad Media, así como algo más preciso y práctico que la Cristiandad medieval. Por tal motivo se han forzado las puertas de la China y el Japón, y destruido el aislamiento del Paraguay, y asegurado la libertad de los mares y los ríos, y establecido los Congresos internacionales, cuyo acceso se va generalizando de día en día, de modo que ya no es una nota característica de los mismos ni el carácter religioso, ni la forma política, ni la condición étnica ni la razón geográfica.

La tercera tendencia tiene por fin consagrar los intereses esenciales y fundamentales de la civilización contemporánea

(y entre ellos, principalmente, los derechos naturales ó inalienables de la personalidad humana y la regularidad y permanencia de la entidad nacional) poniéndolos fuera de los compromisos y las estrecheces de las fronteras, las razas, las religiones y las familias, para darles por garantía la sanción colectiva de todas las naciones cultas. A esta tendencia responden los *protectorados* contemporáneos, las conferencias internacionales sobre la guerra, los tratados de extradición, la constitución del Centro de servicios internacionales de Suiza, la frecuente reunión de los grandes Congresos diplomáticos que han variado la organización de Europa á partir de los Tratados de 1815, los cada vez más felices ensayos de codificación del Derecho internacional privado y la aspiración—cada vez más acentuada—de dar carácter permanente al arbitraje internacional.

Y á esta última tendencia también responden las frecuentes intervenciones pacíficas ó armadas de los pueblos directores en los pueblos atrasados ó perturbados; intervenciones que no hay que confundir con la guerra provocada por motivos particulares ni con la conquista realizada con tales ó cuales pretextos, pero ya fuera del cuadro de las declaraciones solemnes del mundo civilizado.

La *intervención* se ha realizado, dentro de lo que va de siglo, de diversas maneras. En primer lugar se ha hecho mediante una gestión más ó menos decidida del Gobierno interventor sobre el Gobierno de la nación intervenida, pero gestión de carácter diplomático y á lo sumo fortalecida ó secundada por una demostración militar. Vervi gratia; por la preparación de un ejército invasor ó por la presencia de algunos barcos de guerra en determinados puertos de la nación requerida ó amenazada. En ocasiones esta demostración ha llegado al extremo de que el Gobierno interventor haya hecho desembarcar gente armada de sus buques para garantizar momentáneamente la vida de sus súbditos.

Otra manera de intervenir es por medio de la fuerza armada, ya de modo sistemático y amplio, pero siempre con carácter pasajero. La nota es de importancia, porque si la intervención y la ocupación consiguiente de las ciudades y las fortalezas del país intervenido son duraderas, la intervención se convierte en una especie de protectorado, el cual puede ser irregular como el de Egipto ó definitivo y permanente como el de Túnez.

La *intervención* de esta última clase (es decir, la intervención armada con carácter pasajero) puede verificarse por demanda y en apoyo del Gobierno del país intervenido: por solicitud y en apoyo de elementos contrarios á aquél Gobierno ó por iniciativa del Gobierno interventor en pura consideración á sus nacionales y sus protegidos y á despecho ó sin cuidarse de los elementos del país intervenido.

Ejemplos de lo primero son la intervención de Francia é Inglaterra, formando la cuádruple alianza, en los negocios de España y Portugal y á favor de la causa constitucional, en 1834; la intervención de España en Portugal en 1847 á favor de la reina María y contra los miguelistas, y la de Rusia en 1849, en favor de los austriacos contra la Revolución húngara. Ejemplos de lo segundo son la intervención de Francia, Inglaterra y Rusia en 1826 y 27 en favor de los griegos sublevados contra Turquía; la del Brasil, el Uruguay y el Paraguay en 1851, contra el tirano Rosas de Buenos Aires; la de Francia contra el Gobierno revolucionario de Roma en 1848 ó contra Inglaterra y en favor de los Estados Unidos en 1778. Ejemplos de la tercera clase de intervención son la de las Potencias europeas en Siria en 1860 y la de España, Francia é Inglaterra en México en 1861.

No pretendo dar la lista de todas las intervenciones, ni mucho menos. Hago unas citas por vía de ejemplo. Conviene establecer esta salvedad, tanto porque el número de las intervenciones realizadas dentro del siglo corriente es muy considerable, cuanto porque no sería fácil clasificarlas en tres ó cuatro grupos, como sería necesario para formar sobre todas ellas un juicio de golpe y primera intención.

También conviene mucho distinguir respecto de las diversas maneras de prestar apoyo á los partidos de la nación intervenida contra el Gobierno de ésta misma. Este punto ha revestido últimamente mucha importancia con motivo de las cuestiones americanas. Con referencia á este particular se ha discutido si el reconocimiento de la beligerancia de los insurrectos en la guerra separatista de los Estados Unidos era una intervención europea en la República norteamericana. La opinión de los tratadistas y las cancillerías es contraria á este supuesto, inclinándose en cambio á creer que es un modo de intervenir el reconocimiento terminante de la independencia de una región sublevada contra el Gobierno de todo el país del cual formaba parte aquella región. Este punto ha vuelto á ser tratado recientemente con motivo

de las proposiciones hechas por algunos senadores norteamericanos en favor de los insurrectos de Cuba.

Las meras indicaciones que acabo de hacer, demuestran y abonan, en primer término, mi salvedad, muy contraria al supuesto corriente entre los políticos españoles, respecto al derecho de los Poderes públicos de un Estado para hacer en éste lo que bien les parezca, sin consideración á las demás naciones; y luego, que en la base de la actual distribución política y organización del mundo entra muy principalmente esa intervención que casi todos nuestros periódicos dan por desacreditada y universalmente combatida.

Sobre este último punto no hay más que fijarse en lo que han sido y lo que son, en nuestra época, la *Cuestión de Oriente* y la *Cuestión de Italia*. Aquélla, en sus tres fases de cuestión de Grecia, cuestión de Egipto y cuestión del Danubio. Esta, en su doble aspecto del problema de la unidad de Italia y de la cuestión del poder temporal de los Papas.

Todo eso constituye el grupo de las mayores preocupaciones y los problemas fundamentales de la política internacional positiva del mundo europeo contemporáneo; problemas todos tratados, complicados ó resueltos por la *intervención*.

Luego, ha venido otra tercer cuestión general ó universal, que es la *Cuestión americana*, planteada alrededor del famoso Mensaje del Presidente Monroe en 1823 y desenvuelta en los Mensajes de Polk de 1854 y de Johnson de 1864, en las negociaciones de 1848, 52 y 70 sobre la adquisición de Cuba por los Estados Unidos, en el Congreso panamericano de Washington de 1890, en la campaña de Blaine y en los incidentes del conflicto anglo venezolano de 1895, para llegar á la actual guerra de España y los Estados Unidos.

Pero sobre que la *Cuestión americana* no es todavía un problema resuelto ni quizá á punto de resolverse, sus datos revisten, hasta ahora, solo el carácter de parciales y por la reserva que las Potencias europeas y la generalidad de los americanos, han opuesto á los empeños y la doctrina de los Estados Unidos de América, de ninguna suerte pueden ser esa doctrina y esos empeños invocados como supuesto definitivo del Derecho internacional contemporáneo.

Hay, pues, que fijarse en datos inexcusables de la vida internacional de nuestros días. Y entre esos datos figuran en primer término, los de la *Cuestión de Oriente*, tanto por el

alcance y la generalidad que esta *Cuestión* ha revestido y reviste, cuanto por la más ó menos positiva analogía que puedan ofrecer algunos de sus incidentes con la actual *Cuestión de Cuba*. Al menos, desde el punto de vista americano, y para fundamentar la intervención armada de los Estados Unidos en la grande Antilla, por causa de humanidad ó interés del Derecho público universal.

De lo que he dicho ó supuesto, resulta claro que no niego que son posibles y lícitas las *intervenciones*, aun en casos en que la conducta de las naciones intervenidas no perjudica directa y exclusivamente á los intereses y los derechos de los interventores.

Pero tanto de la teoría que abona esa intervención, como de las intervenciones realizadas en lo que va de siglo, se deduce algo más que el mero derecho de intervenir.

Porque no basta esto para que una intervención sea legítima y, por lo menos, merezca la consideración y el respeto de las gentes cultas.

Es también indispensable la justa apropiación de los medios empleados por el interventor al fin general que éste persigue—y que la intervención no se resuelva en provecho particular de éste—y que su determinación no sea el efecto del capricho, la pasión ó la preocupación del que interviene— y en último término, que la intervención y sus efectos resulten garantizados por el voto ó la acción de los demás pueblos directores del mundo civilizado; es decir de las grandes entidades y los factores responsables de la gran Sociedad de las Naciones.

De no darse estas condiciones, claro se está que la intervención es un modo, más ó menos disfrazado, de la antigua conquista y que á prosperar la doctrina contraria, las naciones pequeñas ó débiles estarían completamente á merced del humor, las conveniencias ó las ambiciones de los Estados poderosos.

Sin duda no han llegado los tiempos en que estas últimas causas desaparezcan del cuadro de la política internacional; pero, sobre ser evidentes las tendencias á suprimirlas y los éxitos que, en este sentido, se han logrado en los últimos cincuenta años, de todos modos, es indispensable no consentir que la violencia se explique por el derecho y que confundiendo los motivos de ciertos actos de fuerza, medren el espíritu de conquista y la satisfacción de las más brutales concupiscencias, al amparo de los prestigios de la ci-

vilización y mediante protestas de generosidad y cultura que, muchas veces, consiguen velar un tanto la grosería y maldad de los hechos.

Por esto no puede ser aplaudida la intervención que contribuye á aumentar las perturbaciones de la nación intervenida ó que utiliza, para su éxito, las violencias de tribus incultas, lanzadas sobre Gobiernos comprometidos por la rebelión de sus súbditos. Del propio modo, no es admisible la intervención violenta y armada, sin que antes se apuren todos los medios pacíficos. Y por lo mismo es una tendencia cada vez más pujante la de que las intervenciones no se realicen por un solo Gobierno, y por las propias y exclusivas declaraciones y gestiones de éste, así como que una vez realizada la intervención, sus resultados definitivos no queden á merced del interventor, por grandes que aparezcan su desinterés, su cultura y su poder.

Con todo lo expuesto se relacionan los progresos que en otros órdenes, más ó menos análogos al de la intervención internacional, se han verificado en el Derecho público contemporáneo. Por ejemplo: los progresos del Derecho de la guerra y de la solución de los conflictos internacionales.

Sobre tal punto, es imposible olvidar lo que es y lo que promete ser, en plazo no lejano, el arbitraje internacional. Y tampoco es excusable el recuerdo de lo que en este orden de ideas representan en la Historia contemporánea, la Conferencia de Berlín de 1885, y el Acta de Constitución del Congo.

Esto, hablando en términos generales; porque en determinados casos, las condiciones y reservas de la intervención y las exigencias á que ha de responder el interventor, son mayores.

Así sucede, por ejemplo, cuando la intervención tiene por fin público (mediante declaraciones más ó menos terminantes ó sinceras), hacer entrar en el círculo de pueblos independientes, y con el carácter de Nación Soberana, á un pueblo ó una comarca, que hasta entonces figuraban como parte de la Nación intervenida.

Lo mismo puede decirse con referencia al caso de que la integridad territorial de la Nación acometida estuviera más ó menos explícitamente garantizada por otras Naciones y singularmente por el interés general internacional de la época.

En tales casos, es imposible reconocer á un solo Pueblo,

por grandes que sean sus medios y sus jactancias, el derecho de modificar á su antojo, por sí, por sus conveniencias ó sus ideas, el mapa de las Naciones contemporáneas, dando carta de ciudadanía internacional á una región, poniéndola á la altura y con las responsabilidades de los demás pueblos independientes y ensanchando ó reduciendo, á su modo, el círculo de éstos.

Nada hay que decir de la exageración de las otras pretensiones de rectificar ó destruir las garantías dadas por otras Naciones al *statu quo* de la Nación intervenida. Porque esto puede hacerse, pero nunca por la fuerza, siquiera se utilicen pretextos y se aprovechen oportunidades para asegurar el éxito del atropello, luego explicado por las imposiciones de la legítima defensa ó las irregularidades y exigencias de lo inesperado.

X

Respecto de todos estos particulares, la *Cuestión de Oriente*, como he indicado, nos ofrece abundantísimos datos y lecciones. El ejemplo de Rusia, preocupada con la idea de intervenir constantemente, por su propia y exclusiva cuenta, en los negocios turcos, merece tanta atención, como la solitud de las demás Potencias europeas de contrariar la pretensión rusa, para poner la solución del problema al amparo del concierto de todas las Naciones directoras del Mundo moderno.

A Rusia cabe el honor de haber, la primera, recogido y amparado la protesta griega contemporánea contra la tiranía turca y en favor de la resurrección del pueblo helénico. Quizá hay que convenir en que el esfuerzo ruso se deba, en primer término, a la obra de descomposición del Imperio de Constantinopla y la constitución de las nuevas nacionalidades del Oriente europeo, dentro del siglo que corre. Pero al lado de esto hay que poner la consideración de que no siempre el empeño moscovita aparece desinteresado, y casi nunca en forma modesta; por lo cual, puede también pensarse que, si su acción hubiera sido única y en todo caso si se hubiera desenvuelto como se esperaba en San Petersburgo, aquella empresa, verdaderamente simpática para todos cuantos se interesan por el triunfo de la justicia y la libertad del mundo, habría dejado bastante que desear, no alejándose mucho del triste ejemplo de Polonia, con que terminó el siglo XVIII.

En los días del Congreso de Viena de 1815, el Empera-

dor Alejandro ponía ante los ojos de los aliados la cuestión heleno-turca como bastante parecida al problema de la esclavitud y la trata: y si bien por aquel entonces las influencias de Metternich lograron excusar la solución, pronto los rusos la abordan, con motivo de la insurrección griega de 1821. La acentuada disposición moscovita en favor de ésta determinó á las grandes Potencias de la época á hacer el Tratado de Londres de 6 de Julio de 1827, para ofrecer su mediación á Grecia y Turquía.

Por aquí, y por efecto de la resistencia turca, se vino á la batalla de Navarino y cuando los aliados vacilaron respecto á la conveniencia de insistir, de un modo directo y positivo, en apoyar la emancipación griega, Rusia se decidió á la guerra contra el Sultán. Sus soldados, en Mayo del año 28, pasaron el Pruth, y sus esfuerzos lograron el éxito extraordinario de la Paz de Andrinópolis, de Septiembre de 1829.

Pero en el momento mismo de esta victoria se inicia la intervención del resto de las grandes Potencias europeas, que producen la Conferencia de Londres de Octubre de 1829, y luego, en 1830, consagran la independencia de Grecia, garantizándola de un modo directo.

A poco surge la cuestión de Egipto por la rebelión de Mehemet Ali. Aprovechala Rusia para resabar del Sultán ventajas en el Danubio, y los Gobiernos de Constantinopla y de San Petersburgo hacen el Tratado de Unkiar Iskellesi de 1833, á los pocos días de haber cedido el Sultán el bajalato de Siria y algunos otros territorios al virey sublevado. Aquel Tratado sancionaba la prepotencia rusa.

Pero enseguida, las demás Potencias europeas intervienen para limarle y reducirle, y por esa intervención resultan las Convenciones de Londres de 1840 y 41, que ponen término, por aquel entonces, al problema oriental, sorteando las exigencias y rectificando las ambiciones de Rusia.

A los doce años renace el problema de Oriente. Tanta Rusia la disposición de las demás Potencias y señaladamente de Inglaterra, para intentar una nueva intervención en el Imperio turco, y en vista del fracaso de sus gestiones y aprovechando circunstancias internacionales que parecían favorables á su empeño, declíase en 1854 á imponerse á Turquía. De aquí la guerra, que terminó, mediante la campaña de Crimea, y en la cual lucharon juntas Francia, Inglaterra y Cerdeña de parte de Turquía contra el Imperio ruso.

La solución de este conflicto la dieron el famoso Congreso y el Tratado de París de 1856, tan importante y transcendental en la Historia del Derecho público europeo y aun universal, como los Tratados de Westfalia, Utrecht y Viena. Por el Tratado de París quedó una vez más consagrada la competencia del Concierto internacional para resolver en definitiva la *Cuestión de Oriente*, que Rusia pretendía, otra vez, resolver por su propio y exclusivo esfuerzo.

Pasan otros veinte años antes de que la cuestión oriental vuelva á ofrecer el aspecto y las condiciones de un problema capital de la política contemporánea.

Sin duda alguna que en el curso de esos veinte años esa cuestión fué objeto de la solicitud, los tanteos, y los programas de las grandes Potencias occidentales y cierto también que los pueblos ribereños del Danubio y la renaciente Grecia intentaron más de una vez provocar una revolución definitiva en obsequio de su libertad é independencia. En este período aparecen, con caracteres de imposible excusa, la aspiración panslavista y la tendencia favorable á la organización del pueblo rumano, al lado de los esfuerzos hechos por Rusia y Turquía, para atenuar los efectos del Tratado de París y del empeño de ensanchar los límites y la importancia del reino de Grecia.

Buenas pruebas de esto son la evacuación de los Principados danubianos por las tropas austriacas que la habían ocupado, por precaución, en 1854; la inminencia de una nueva guerra general en 1857; la Conferencia de París de 1858; la unión de Moldavia y Valaquia en 1859 bajo la dirección de Alejandro Couza; la consagración definitiva de esta unión por la Puerta Otomana en 1861; el enaltecimiento de la casa de Hohenzollern en Rumanía y la independencia definitiva de ésta á mediados de 1866; la semi-independencia de Servia en 1864, después de la evacuación de las tropas turcas realizada en 1862; la insurrección de Creta en 1868, la cesión de las islas Jónicas por Inglaterra á Grecia y la Conferencia de París sobre el conflicto heleno-turco en aquel mismo año, así como las reformas turcas de 1869.

Pero en 1876, las cosas se disponen de modo que, otra vez, entiende Rusia que debe y puede reanudar su antigua campaña contra Turquía, á título protectora de los cristianos de Oriente y de interesada en la suerte de los esclavos tiranizados por el Sultán. La tenacidad de éste para sustraerse á

las exigencias de la Europa culta solo puede compararse con la habilidad ó la perfidia con que sistemáticamente falsea ó elude todos los compromisos por Turquía contraídos para entrar en la corriente culta contemporánea.

Ya en 1870, Rusia, aprovechando la guerra franco-alemana, había anunciado su propósito de prescindir del Tratado de París de 1856, por lo cual y en vista de complicaciones inminentes, las demás Potencias europeas celebraron las Conferencias de Noviembre de 1871, que produjeron la Convención de Londres de 13 de Marzo de aquel año, modificando en muy pequeña parte el Tratado de París, y sosteniendo la buena teoría respecto de la subsistencia de los tratados y convenios internacionales á despecho de las pretensiones y jactancias rusas, muy análogas á las novísimas de los Estados Unidos en sus discusiones recientes con Inglaterra y España.

Luego agravan la situación el desvergonzado olvido por parte de Turquía de sus compromisos internacionales; las revueltas interiores de este país; la victoria de los elementos reaccionarios y fanáticos en Constantinopla, y el alzamiento de la Bosnia y la Herzegovina.

Menos que esto necesitaba Rusia para tomar la iniciativa de la agresión: pero antes de que pudieran realizarse los planes moscovitas, ya Francia, Alemania, Austria, Inglaterra ó Italia se decidieron á mediar, reclamando del Sultán, por la nota de 20 de Enero de 1876, graves y positivas reformas en la vida turca.

Lo mismo esta nota que otros trabajos análogos (como el memorandum de Berlín de 11 de Mayo del propio año 76, —la mediación de las Potencias para tranquilizar á Serbia, Bosnia, Herzegovina y Bulgaria en Agosto,—la propuesta de Rusia en Octubre para celebrar otra conferencia internacional,—la Conferencia de Constantinopla terminada en 20 de Enero del 77, y el protocolo de Londres de 21 de Marzo), resultaron inútiles cuando no contraproducentes.

La irritación de los antiguos Principados danubianos, la arrogancia de Turquía, las atrocidades cometidas por los funcionarios públicos y los soldados del Imperio otomano tomaron vuelo extraordinario y con él crecieron las indeseables de las grandes Potencias, hasta que Rusia, en Abril de 1877, se decidió á declarar la guerra al Sultán.

El resultado de esta guerra fué la victoria del moscovita

y el Tratado de San Stéfano de 3 de Marzo, que puso á Turquía al borde de la ruina. Esta se habría consumado irremisiblemente si en aquella hora suprema no hubieran intervenido las demás Potencias, obligando á los beligerantes y á todos los interesados en aquella tremenda lucha, á aceptar el Tratado de Berlín de 13 de Julio de 1878, por el cual quedaron consagrados el Principado completamente autónomo de la Bulgaria; la autonomía administrativa de la Rumelia oriental, con un gobernador cristiano nombrado por el Sultán, con el asentimiento de las demás Potencias; la reforma política de Creta, con arreglo al reglamento de 1868, liberalmente modificado; la administración de Bosnia y Herzegovina por Austria; la independendencia de Montenegro, Servia y Rumanía; la mediación de las grandes Potencias para la fijación de los límites de Grecia y Turquía; la reforma de las provincias turcas de la Armenia y el compromiso solemne de Turquía de mantener en todo el Imperio, el principio de la libertad religiosa en su más amplio sentido.

Después, dos veces ha resurgido la *Cuestión de Oriente*, pero sin que en ella apareciese Rusia desempeñando un principal papel.

Una de esas veces ha sido con motivo del Egipto, donde en 1878 se había establecido la intervención de Francia é Inglaterra para la cuestión financiera.

Desde 1879 á 1882, agítanse los intransigentes contra los europeos, deponen al Virey, é inician la guerra, dirigidos por Arabi pachá, á quien deshicieron los ingleses, en Septiembre de 1882. Desde esta fecha, Inglaterra ocupa militarmente, aunque con carácter provisional, el Egipto. Esta situación es explicada por el Gobierno británico por la agresión de los mahometanos y por el incumplimiento manifiesto de lo convenido en 1878: pero tiene la protesta de Francia, mientras las demás Potencias guardan una reserva abonada por las demás complicaciones europeas y que autoriza el supuesto de que Egipto es hoy una de las serias dificultades inglesas.

La otra resurrección del problema oriental es la nueva insurrección de Creta, protegida por el Gobierno griego y que produce la guerra de Grecia y Turquía en 1897.

El éxito de las armas fué favorable á los turcos, quienes, en vista de la abstención de las grandes Potencias por efecto de la circular rusa del 19 de Abril de aquel año, se dispu-

sieron á sacrificar despiadadamente á Grecia, arrebatándole parte de su territorio é imponiéndole una tremenda indemnización de guerra.

Todo se hubiera realizado, á no decidirse aquellas Potencias á mediar, abriéndose al efecto en el mismo año de 97, la Conferencia de Constantinopla, que produjo los preliminares de paz, firmados, después de grandes discusiones, en 18 de Noviembre, y al fin el Tratado definitivo de paz entre Turquía y Grecia, de 4 de Octubre. Ocioso es recordar que este Tratado tuvo un gran alcance en el orden político de Creta, y en la situación financiera de Grecia, que logró la especial garantía de Francia, Inglaterra y Rusia.

Dedúcese de todo lo expuesto que la acción colectiva de las grandes Potencias europeas (es decir, de las directoras del mundo internacional contemporáneo) no ha permitido nunca que el problema de más duración, más serio y de más transcendencia del siglo presente quedara á merced de la voluntad de un solo pueblo, por grandes que fueran los medios, los alientos y las pretensiones de éste y por justificados que parecieran los motivos de carácter público y de progreso, justicia y cultura universal invocados para la grave empresa de intervenir decididamente en la suerte de otro pueblo desconcertado, injusto ó puesto, por diferentes causas, fuera de la corriente civilizadora de nuestra época.

Y se deduce, además, que por los actos repetidos de que arriba se habla, Europa no solo ha afirmado la competencia internacional para resolver las graves cuestiones de la reducción de la soberanía de una nación, del ingreso de algunos pueblos en el círculo de las naciones independientes y con propia personalidad y de la garantía de ciertos derechos y libertades, por cima de fronteras, religiones y razas.

Ha hecho más: y es constituir una especie de vigilancia permanente sobre lo realizado y algo así como una garantía colectiva de la organización misma del mundo oriental europeo.

Todo esto ha logrado mayor desarrollo en la esfera de los principios, mediante la Conferencia á Berlín de 1884-85, y el Tratado sobre el Congo, por más que sus preceptos se refieran, de momento, tan solo al mundo africano.

Por ese Tratado no solo se consagran, de un modo solemne, la libertad de comercio, la prohibición de la trata de esclavos, la neutralidad de los territorios comprendidos en la cuenca del río Congo y la libre navegación de los ríos Con-

go y Niger, sino que se precisan las reglas para la ocupación de territorios nullius y la anexión de comarcas, así como la necesidad del arbitraje y la prioridad de los recursos pacíficos para resolver los conflictos entre las Potencias contratantes sobre el territorio de Africa.

El avance que todo esto significa en el Derecho internacional es verdaderamente extraordinario. En la Conferencia que inauguró sus trabajos en Berlín el 15 de Noviembre de 1884 y que los terminó el 29 de Septiembre de 1885, estuvieron representados, España, Alemania, Bélgica, Dinamarca, los *Estados Unidos de América*, Francia, Inglaterra, Italia, Países Bajos, Portugal, Rusia, Suecia, Noruega y Turquía. Luego se adhirieron el Sultán de Zanzibar y el Sultán de Persia. De suerte que ese Tratado es quizá el de mayor generalidad y alcance del mundo moderno.

Fácil me sería ilustrar los hechos, las declaraciones y los supuestos de que acabo de hacer mérito, así como fortificar la tesis á cuya discusión y cuyo sostenimiento he dedicado los anteriores párrafos, con referencias á sucesos de análogo sentido, aun fuera del círculo particular de la cuestión oriental. Para apoyarme están la acción de Francia y Cerdeña en el Centro y Sur de Italia desde 1854 á 1864; la intervención pacífica de Francia, Austria, Inglaterra, Prusia y Rusia, en los Países Bajos, que produjo desde 1830 á 1839, la independencia de Bélgica: la Cuádruple alianza en España y Portugal en 1836; la intervención anglo-francesa en el Rio de la Plata desde 1845 á 1850; la brasileña argentina en el Paraguay en 1874, y la de Francia é Inglaterra en China, de 1842 á 1860.

Dejo á un lado lo que Francia é Inglaterra hicieron hacia 1850 en la Plata. No revistió carácter sistemático ni tuvo el carácter preciso, necesario para que aquel empeño expresase algo determinado y definitivo en la empresa internacional.

Más importante es lo que España, Francia é Inglaterra proyectaron hacia 1861 en Méjico. y, sobre todo, lo que Francia hizo después del convenio de Orizaba y de la retirada de españoles y franceses en favor del imperio de Maximiliano. Pero el fracaso de esta última tentativa, justa y eficazmente protestada por los Estados Unidos, excusa de considerar la obra como un dato concluyente del desarrollo del Derecho público contemporáneo. En último extremo vendría á fortificar la tesis de la incompetencia de la ac-

ción exclusiva de una Nación para reformar el orden político de otra.

Tampoco reviste aparentemente carácter regular y definitivo algo realizado dentro del siglo que corre por Francia, Inglaterra, España y los Estados Unidos en el sentido de garantizar el mantenimiento de la bandera española en Cuba y Puerto Rico; pero es innegable el valor que el hecho tiene en sí, y, sobre todo, en relación con el nuevo y gravísimo problema de Derecho internacional que se ha planteado en nuestro tiempo con el nombre de la *Cuestión americana*.

Porque este punto tiene mucho que ver con la afirmación que poco hace consigné respecto á la imposibilidad racional y jurídica de que por la mera acción y por el exclusivo criterio de un Pueblo ó un Estado pudiera variarse la carta geográfica política de una época, atropellándose los derechos y rectificándose la integridad territorial de una Nación, garantizada, más ó menos explícita y positivamente, por los demás Estados directores del Mundo moderno.

La cuestión merece algún estudio, por lo mismo que de ello se ha hablado muy poco fuera y sobre todo dentro de España.

La falta de una política internacional de la España contemporánea y la exageración con que en nuestro país se ha considerado generalmente el imperio de la Metrópoli española en América, explican el profundo error padecido por casi todos nuestros políticos y la generalidad de nuestra prensa, al estimar las causas del sostenimiento de nuestra bandera en las Antillas.

Un mal entendido patriotismo y una gran ignorancia de la política exterior han hecho posible que entre nosotros se atribuyera aquel suceso tan sólo á nuestra decidida voluntad, á nuestra disposición activa y á la legendaria bravura de los españoles de aquende y allende el Atlántico.

Sin duda, todo eso ha entrado por mucho en el fenómeno aludido, como ha entrado la positiva voluntad de los cubanos y portorriqueños, entre los que, digan lo que quieran, nunca (hasta poco hace, y esto por motivos que no procede explicar ahora), los separatistas revistieron el carácter de una fuerza política y jamás el anexionismo pasó de aspiración de un círculo muy reducido de personas.

Pero al lado de eso hay que poner el dato importantísimo de la cooperación de otras naciones, para asegurar la integridad española en América, después de la emancipación de los reinos centro y sud americanos. El error sobre este particular se ha llevado entre nosotros al punto de que en España no se hablara más que de las tentativas y los esfuerzos hechos por los Estados Unidos para apoderarse de la codiciada Cuba.

Y aun esto se explicó de un modo deficiente y para un solo efecto: el de la exaltación del patriotismo, al cual debían nuestros políticos haber proporcionado verdaderos medios para que sus sacrificios resultaran eficaces.

Los hechos tienen una elocuencia insuperable. Apenas reconocida la independencia de la América latina continental, surgieron las intrigas y las desconfianzas internacionales respecto de la conservación del dominio español en Cuba y Puerto Rico. Las correspondencias diplomáticas del período que va de 1825 á 1840 están inspiradas constantemente en los supuestos—verdaderos ó falsos—de que unas veces Francia, otras Inglaterra, y otras los Estados Unidos pretenden adquirir, de grado ó por fuerza, la isla de Cuba. En este terreno, merecen particular mención las denuncias y las protestas de la Cancillería norte-americana, de 1822, 23 y 25.

Por aquel entonces, nadie más propicio á España, que el Gabinete de Washington, muy preocupado contra los manejos franceses y británicos. Pero, á partir de 1826, parece Inglaterra (que se había adelantado á reconocer la independencia de la América continental española) la más amiga, hasta el punto de declararse oficialmente dispuesta «á concertarse con las otras dos potencias marítimas, de quienes únicamente se podía temer la ocupación de Cuba, para garantizar la conservación de ésta para España.»

Las negociaciones que con este fin inició tímidamente el Gobierno inglés, fracasaron por la resistencia de los Estados Unidos á suscribir un tratado con aquel objeto.

Entonces el secretario de Estado americano Mr. Clay escribió (3 de Abril de 1826,) á Mr. Everett, representante de los Estados Unidos en Madrid, que el tratado era innecesario, pues que las declaraciones hechas por los Gobiernos de Washington, Londres, París y Madrid sobre la suerte de Cuba *equivalían á una garantía*.

A los siete años de esto, en 1843, vuélvese á hablar de propósitos de Inglaterra respecto de la grande Antilla, y los Estados Unidos, no sólo ratificaron sus declaraciones de simpatía, sino que ofrecieron sus medios militares y de todo género para rechazar la supuesta agresión británica. Entonces se suponía al partido liberal, y señaladamente á Espartero, predispuestos á ceder las Antillas á la Gran Bretaña.

El ministro americano Mr. Upshur llegó á proponer una inteligencia de los Estados Unidos, Francia y España.

Más á poco, en 1845, ya aparece la pretensión norteamericana respecto de Cuba. El senador Lewis presenta al Senado de Washington una proposición para la compra de la Grande Antilla.

Entonces toca á Inglaterra protestar recordando sus buenos deseos de 1826 y se ofrece á reanudar las antiguas gestiones. El Gobierno español, por boca del ministro Martínez de la Rosa, declina estos ofrecimientos, cuya aceptación se interpretaría (dice) por «desconfianza de parte de España, de sus propias fuerzas, para defender, en caso necesario, sus preciosas colonias», pudiéndose, por otra parte, temer que «dándose á la garantía ofrecida más valor del que en aquella actualidad podía tener, ó se regatease su concesión ó se exigiesen á España condiciones onerosas como una retribución justa».

Pero, según la Real orden de 24 de Noviembre de 1845, en que esto se dijo, el Gobierno español levantó acta de que en caso de un conflicto con los Estados Unidos ó cualquiera otra nación por causa de Cuba, España podía contar con el auxilio formal de la Gran Bretaña.

El año 48 se caracteriza por la viveza que tomaron las desconfianzas respecto de Inglaterra, por un lado y por otro, respecto de los Estados Unidos.

Con la primera había roto sus relaciones diplomáticas, España, bien que no fuera causa de esto la cuestión de Cuba. Al propio tiempo el representante norteamericano, Mr. Saunders, por encargo del ministro Buchanam, se decidió á ofrecer, al Gobierno de Madrid, 50 millones de pesos por la Grande Antilla, haciendo constar «que tan deseable como la posesión de esta isla, debía ser, para los Estados Unidos, que sólo se adquiriese por la libre voluntad de España, pues que cualquiera adquisición no sancionada por la justicia y el honor debía ser rechazada inmediatamente.»

El Gobierno español contestó, por boca del marqués de Pidal (y así aparece en un despacho de Mr. Saunders, fecha 14 de Diciembre de 1848), que «el sentimiento del país era que antes que ver la isla de Cuba en poder de otra Potencia, verla sumergida en las profundidades del Océano.»

Pero á poco comenzaron los preparativos filibusteros contra Cuba, en los Estados Unidos, á despecho de las condenaciones del Presidente Taylor. Luego se realizaron el desembarco del general López en Cárdenas y la aprehen-

sión de los buques americanos *Georgiana* y *Susana Sand* por el vapor español *Pizarro*, en la isla de Conto; surgieron agrias contestaciones entre los Gobiernos de Madrid y de Washington, y pareció inminente la guerra entre España y los Estados Unidos.

Entonces el Gobierno español expide una circular á sus representantes en el extranjero (15 de Junio de 1850) y plantea lo que en 1845 rehusó el mismo Gobierno de España; esto es, un concierto con Francia é Inglaterra para defender la bandera española en las Antillas.

La gestión no fué desatendida. Comenzó el debate para dar forma á la idea. Se hizo un proyecto de triple y recíproca garantía; pero el Gobierno inglés, á fines de Diciembre, expuso la creencia de que era preciso comunicarlo al Gobierno norteamericano para determinar á éste, por lo pronto, á impedir toda tentativa hostil.

Además mostró varias dudas respecto de la conveniencia de contraer un formal compromiso mientras subsistiese la *trata* en Cuba, y fuera evidente el incumplimiento por parte de las autoridades españolas de los tratados hispano británicos relativos á aquel infame tráfico. Por aquí se llegó pronto al abandono de todo concierto internacional.

El año 51 toman importancia excepcional las expediciones filibusteras y los rozamientos de España con los Estados Unidos por ésta causa. Desembarca, por segunda vez, en Cuba, López y es fusilado con muchos de sus partidarios. Es detenido un correo americano en Bahía Honda y se produce en los Estados Unidos una extraordinaria agitación contra España. Por tercera vez aparece la idea de un concierto internacional en beneficio de la dominación española en Cuba.

Sólo que ahora no se trata ya de organizar algo contra los Estados Unidos. Se toma nota de las reiteradas protestas de éstos contra todo atropello de la soberanía de España y en oposición á toda tentativa de hacer pasar á Cuba y Puerto Rico á poder de cualquier Potencia europea. Sobre esto, Francia é Inglaterra pretenden que se llegue á una declaración suscripta por ellas, y además por los Estados Unidos, con el compromiso de que ninguna de las tres naciones ensancharán sus dominios haciendo suyas las dos islas citadas.

¶ Porque tampoco Francia dejó de ser objeto de los recelos y las preocupaciones internacionales respecto de la pose-

sión de Cuba. Sobre todo en los Estados Unidos, los políticos y los diplomáticos consideraron mucho el punto en dos ocasiones, a tes de 1850. La más señalada, á poco de restaurado el absolutismo en España, por la mediación armada de los franceses, los cuales (se suponía) querían hacerse pagar el servicio con la cesión de la grande Antilla.

Otra vez se habló del asunto al terminar la guerra civil y teniendo en cuenta la resurrección del espíritu de expansión francesa, bajo la dominación de los Orleans, á cuya época hay que referir las anexiones de Argel y Túnez, el aliento dado por Francia á la rebelión de Mehmet Ali en Egipto, la famosa cuestión de los matrimonios españoles y las demostraciones de las escuadras francesas sobre los puertos de Méjico, la Plata y Haití en 1838 y 1839 para satisfacción de agravios—verdaderos ó supuestos—de súbditos de Francia, más ó menos comprometidos en las revueltas y la política de la América latina.

Las disposiciones anglo-francesas de 1852 fueron provocadas por el Gobierno español, lo mismo, que en 1850, y contra lo que sucedió en 1845 y aun en 1826. La acogida de las Potencias europeas fué simpática aunque no entusiasta. El Gobierno inglés recordaba siempre la cuestión de la trata, y no parecía hostil á la eventualidad de la independencia de Cuba, como término de la evolución colonial y remedio de la crisis cubana.

El Gobierno francés se atrevía, en 19 de Septiembre de 1851, á decir al español, cosas tan graves como las siguientes:

«En vano se pretendería disimular que aunque los invasores (esto es, los filibusteros) no han encontrado en su culpable tentativa ninguna simpatía, reina gran descontento en la población oriolla, que se queja del peso, cada vez creciente, de los impuestos y de la poca participación que se le concede en el reparto de los empleos. Al Gobierno de Madrid corresponde juzgar lo que puede hacer para destruir ó atenuar estas quejas...»

Por fin, Francia é Inglaterra acordaron, hacia Abril de 1852, un proyecto de convenio, que sus representantes en Washington comunicaron al Gobierno norteamericano, en 6 de Julio del propio mes y año, y al que contestó el ministro Everett en 1.º de Diciembre.

El proyecto decía textualmente:

«Las altas partes contratantes desautorizan por el pre-

proposiciones de 1870, en la Cámara de representantes de Washington. En el Senado trabajó en el mismo sentido, en 1872, Mr. Blair, de Missouri. Y así el Senado como la Cámara votaron algunas de estas propuestas, pero nunca con carácter definitivo é inmediatamente eficaz.

Tales demostraciones no produjeron efecto en la Presidencia ni en el Ejecutivo, á cuya cabeza, por aquel entonces, estaba el General Grant, de quien son los Mensajes de Diciembre de 1869, Junio de 1870, Diciembre del 71, Diciembre de 1874 y Diciembre de 1875, opuestos al reconocimiento de la beligerancia de los insurrectos cubanos, y mucho más, á la independencia de Cuba.

Respecto de esta actitud, hay que tener en cuenta, de una parte, los motivos (los públicos y los secretos); de otra, las declaraciones solemnes y oficiales respecto de la revolución cubana; por último, las gestiones positivas y de carácter diplomático con que el Gobierno de Washington las secundaba y desenvolvía.

Precisamente en 1869 comenzaron en Madrid las gestiones hechas por el representante norteamericano Mr. Sickles, por encargo del ministro Mr. Fisch, para ofrecer los *buenos oficios* del Gobierno de Washington, á fin de terminar la guerra de Cuba sobre las siguientes bases: reconocimiento de la independencia de esta isla, indemnización que Cuba pagaría á España, abolición de la esclavitud en la Grande Antilla y armisticio durante las negociaciones del arreglo.

Con gran error se han expuesto y comentado estas negociaciones, que duraron desde el 27 de Junio del 69 al 28 de Noviembre del propio año. Muchos han supuesto, y aun dicho, que en ellas se trató de la compra de las Antillas españolas por los Estados Unidos. Otros han sostenido que el Gobierno español se resistió á toda inteligencia.

La verdad es que nuestro Gobierno se ofreció á instaurar el régimen autonómico en las Antillas y á hacer la abolición de la esclavitud en Cuba, tan pronto como cesaran las hostilidades en esta isla. Aun se extendió á someter el punto de la independencia al plebiscito cubano. Pero España exigía como, paso previo, que los insurrectos depusieran las armas, hecho que coincidiría con una amplia y completa amnistía por parte de la Metrópoli.

Por último, nuestro Gobierno establecía que si el pueblo en un voto, votaba la independencia, Cuba pagaría á España

una indemnización garantizada por los Estados Unidos, cuyos *buenos oficios* se aceptaban, desde luego.

Después de esto hay que advertir que el Gobierno norteamericano excusó siempre su garantía á la indemnización (á menos que el Congreso lo resolviera) é insistió en que ante todo se estableciera el armisticio.

Por tanto, fracasó la gestión norteamericana: pero en 28 de Noviembre de 1869, Mr. Sickles, telegrafió á Mr. Fisch, diciéndole que nuestro ministro de Ultramar le había autorizado para detallar las medidas que se proyectaban para Puerto Rico y que eran profundamente democráticas y de sentido autonomista. Estas se harían extensivas á Cuba, tan pronto como cesaran allí las hostilidades y Cuba enviara á las Cortes españolas sus diputados.

Todavía, después, al comunicar Mr. Fisch, en Febrero de 1874, sus instrucciones al nuevo representante norteamericano en Madrid, Mr. Caleb Cushing, ratifica que su política se contrae á lograr la abolición inmediata de la esclavitud en Cuba y la autonomía en Cuba y Puerto Rico. Los Estados Unidos (dice), no desean la anexión á Cuba, aunque sí que esta isla al fin se eleve á República independiente de hombres libres. Por tanto, la política del momento, respecto de aquella isla, es «la expectante, con la convicción fija de que los Estados Unidos llenarán su deber cuando lo aconsejen el tiempo y las circunstancias.»

Por otro lado, procede tener muy en cuenta las manifestaciones presidenciales antes aludidas. Mr. Grant se esforzó en rechazar las pretensiones de los insurrectos cubanos, pero haciendo constar que España no había ganado ventaja alguna sobre los insurrectos en el curso de la guerra.

El Mensaje de 1875 va más allá: anuncia que al fin, *temprano ó tarde*, habrá que acudir á la *mediación* ó la *intervención* para que termine la contienda en Cuba y ratifica el ofrecimiento del Gobierno de los Estados Unidos, de mediar, en cualquier momento y tan pronto como se le haga la demanda.

En el mismo Mensaje se estampan estas palabras, con referencia al supuesto de que la lucha *no concluya* en breve y sigan los *daños* que *causa á todas las naciones y particularmente á los Estados Unidos*.

«Creo que las otras Naciones están obligadas á asumir la responsabilidad que les toca y á meditar seriamente en

las únicas medidas posibles que quedan: la mediación y la intervención.»

Con esto se relacionan: 1.º, la actitud que el Gobierno de los Estados Unidos adoptó, cuando en 1873, algunos Gobiernos sud-americanos propusieron una gestión colectiva de América cerca de España para conseguir la libertad de Cuba, y 2.º la gestión que el mismo Gabinete de Washington hizo en 1874, cerca de algunos Gobiernos europeos, para intentar algo en el sentido de una intervención, más ó menos definida, en la grande Antilla.

Respecto de lo primero, algo se ha dicho en otro lugar de este estudio. Los Estados Unidos impidieron la gestión sud-americana expresando su confianza de que la situación republicana, creada en España por efecto del voto de la Asamblea nacional del 11 de Febrero de 1873, trascendería al estado político y social de nuestras Colonias, como así sucedió.

Efectivamente, de aquella fecha datan la abolición inmediata y simultánea de la esclavitud en Puerto Rico, la instauración de un régimen democrático y autonomista en esta isla, y los datos que sirvieron á poco para determinar el convenio del Zanjón y la sumisión de los insurrectos cubanos, en vista de lo que había hecho la República en la pequeña Antilla (1).

En cuanto á la disposición europea tocante á una intervención, luego de caída la República en España, hay que señalar el fracaso de la tentativa norteamericana, pero también la circunstancia de que esta misma tentativa y la pasividad de los Estados Unidos después de aquel fracaso, demuestran que por estos se reconoció la competencia de las Potencias europeas, y en suma, del Concilio internacional, para resolver (con los Estados Unidos, sin duda) respecto del porvenir de las Antillas españolas y del imperio de España en América.

Desde mediados de 1878 ó sea desde la Paz del Zanjón, hasta la primavera de 1895, imperaron el orden, la confianza y la tranquilidad en Cuba. No quiere decir esto que en ese largo período de diez y siete años, no se produjeran disturbios ni asomase de vez en cuando la tormenta.

A los dos años del Convenio del Zanjón, se produjo la llamada *guerra chica*, promovida y sostenida por algu-

(1) Véase mi libro titulado *La República y las libertades de Ultramar*. —I vol. 4.º Madrid 1898.

nos de los insurrectos de la anterior guerra, los cuales protestaron contra la terminación de ésta, que atribuyeron á una sorpresa y se esforzaron, con algún éxito, en demostrar que las capitulaciones del Zanjón no se habían cumplido y que la situación de alguna comarca (como por ejemplo, el departamento Oriental de la Isla) era intolerable, por haberse extremado las suspicacias y la intolerancia de los partidarios del viejo régimen y de las autoridades españolas contra todos los cubanos señalados por sus opiniones liberales.

Hablando con sinceridad, es preciso reconocer que estas protestas no estaban totalmente destituidas de fundamento. Más por cima de tales censuras, se hallaban tres hechos. El primero, el ansia de paz de la sociedad cubana. El segundo, la tendencia cada vez más acentuada de la Metrópoli de reformar profundamente el viejo régimen colonial. El tercero, la aparición de un partido antillano decidido á aprovechar esta tendencia y á recabar, por el procedimiento evolutivo y pacífico, la instauración en Cuba de todos los adelantamientos políticos y sociales contemporáneos.

Este partido fué el Autonomista, constituido en 1879 y al cual se debió principalmente, según declaración solemne del señor general Blanco, entonces Gobernador general de la grande Antilla, el fracaso de la insurrección de 1881.

La *guerra chica* duró poco y apenas fijó la atención del extranjero. Desentendiéronse del problema antillano las Potencias europeas, por la creencia que en ellas arraigó de que las reformas liberales, muy esperadas de España y de realización casi inmediata, quitarían toda ocasión y todo pretexto á una acción perturbadora por parte de los Estados Unidos. En estos se refugiaron algunos insurrectos y en Nueva York y en Tampa constituyeron centros de propaganda separatista, de escasa importancia.

El Gobierno norteamericano no le dió ninguna á esos centros, cuya acción se redujo exclusivamente á la publicación de periódicos y folletos contra la dominación española. En cambio, el gabinete de Washington dedicó una particular atención á ensanchar las relaciones mercantiles de las colonias españolas y los Estados Unidos de América y á fortificar la posición de los norteamericanos residentes en las Antillas, sustrayéndolos á los rigores de los procedimientos españoles, en materia criminal.

A esto responde el Protocolo firmado por los Estados Unidos y España en 12 de Enero de 1877, interpretando y dando nuevas aplicaciones al Tratado que entrambas naciones hicieron en 27 de Octubre 1795. Pero todavía son de mayor importancia el *Modus vivendi* comercial que las dos Potencias aludidas suscribieron en 13 de Febrero de 1887 y el Tratado de comercio de 28 de Junio de 1891, ampliación extraordinaria de los Tratados de 13 de Febrero de 1884, 21 de Diciembre de 1887 y 26 de Mayo de 1888, sobre aranceles y derechos diferenciales.

Esto aparte de otros convenios de menor trascendencia política, como dos de extradición de criminales de 5 de Enero de 1877 y 7 de Agosto del 82; el de marcas de fábrica de 10 de Junio de 1882; el de 20 de Mayo del 75, sobre el sistema métrico; los de 1.º de Junio de 1878 y 4 de Julio de 1891, sobre Correos; y aún el de 3 Julio de 1880, sobre protección á Marruecos; el de 26 de Febrero de 1885, sobre el Congo y el Niger, y el de 2 de Julio de 1890, sobre el comercio y la civilización del Africa.

Estos Tratados son los especiales y transitorios de 11 de Agosto de 1802, sobre indemnizaciones por efecto del Tratado de 1795; el de 22 de Febrero de 1819, sobre la adquisición de la Florida por la República norteamericana, y el de 17 de Febrero de 1834, para el arreglo de diferencias entre los Gobiernos de Wasington y de Madrid, constituirían la base de las relaciones jurídicas de España y los Estados Unidos, antes de la guerra actual.

12

Por desgracia, pronto comenzaron á revestir excepcional gravedad las cuestiones de Cuba, por efecto de muy diversas causas, cuya explicación no corresponde á este lugar y que, en todo caso, exige espacio y desarrollo incompatibles con el fin preciso y particular de este trabajo (1).

La falsa interpretación y la aplicación por todo extremos deplorable é injusta de la ley de relaciones mercantiles de Cuba y la Península de 20 de Julio de 1882, junto con la equivocada disposición de los Presupuestos ultramarinos, hechos en la Metrópoli de modo que resultaban ineficaces las reclamaciones y el voto de los contribuyentes cubanos, se unieron á la crisis general de los azúcares en el mundo, y á la derogación del Tratado comercial de 1891, por efecto de la reforma del bill Mac Kinley, que se realizó en los Estados Unidos, hacia mediados de 1891.

Por otro lado, los incontestables avances que en el orden político se habían verificado en las Antillas, desde que en 1879 estuvieron representadas en las Cortes España y en 1881 se proclamó allende el Atlántico la Constitución española de 1876, excitaron y fortificaron grandemente las aspiraciones de los antillanos, que pronto exigieron, de una parte, la reforma profunda del régimen electoral ultramarino para sustituirlo con el peninsular, estableciéndose la

(1) Véase mi libro *La Reforma Colonial en España*, un vol. Madrid, 1895,—Y mi obra *Cuestiones palpitantes de Política, Derecho y Administración*, un vol. Madrid, 1897.

igualdad política de antillanos y peninsulares, y de otro lado, la reforma vigorosa del régimen municipal y de la organización administrativa insular, en el sentido de una amplia descentralización.

Por este camino vino el llamado *movimiento económico* de Cuba, en el cual intervinieron activamente hacendados, comerciantes, productores de todo género y hombres de todas procedencias y todos partidos.

Eran las pretensiones de los autores de este movimiento bastante menos que las del partido autonomista, pero su trascendencia y sus peligros mucho mayores.

Trató de evitarlos el partido liberal de la Península y con este fin el ministro de Ultramar Sr. Maura llevó al Congreso español, en 3 de Junio de 1893, un proyecto de reforma del régimen de Gobierno y de la Administración civil de las islas de Cuba y Puerto Rico.

A pesar de sus graves defectos, este proyecto fué acogido con viva satisfacción en Cuba, por su tendencia descentralizadora y como un medio de contener la agitación del país. Pero luego se produjeron varios sucesos que dieron á la obra, inspirada en excelente deseo y cuya inmediata aplicación habría sido de plausible efecto, el carácter de una nueva y mayor causa de agitación.

Porque el gabinete liberal, lejos de intentar que el proyecto fuese inmediatamente discutido, votado y aplicado, lo dejó dormir por espacio de cerca de dos años, provocando con esto las viejas desconfianzas y grandes protestas de parte de todos los elementos liberales de las Antillas y de la generalidad de los sostenedores del *movimiento económico*. Por otro lado, el proyecto produjo la división del antiguo partido conservador de Cuba y la lucha enconadísima de los elementos peninsulares de la Isla. Y en tanto, en la Península se acentuó el espíritu del partido conservador, dirigido por el Sr. Cánovas; cuyo partido, á despecho de las tendencias personales de éste hombre público, se mostró siempre hostil á todas las ideas expansivas en materia colonial.

No es dable olvidar (y menos en estos momentos, ante las críticas y las promesas de muchos de esos conservadores) la violencia conque aquel partido interpretó el Pacto del Zanjón, por la antipática ley electoral de 28 de Diciembre de 1878 (que suprimió el sufragio universal en Puerto Rico y creó en ambas Antillas un régimen de desigualdad y pri-

villegio favorable solo á los electores peninsulares y conservadores) así como por el decreto de 9 de Junio del propio año de 1878, sobre gobiernos superiores de Cuba y Puerto Rico y régimen municipal y provincial, dentro del sistema más rigurosamente centralizador imaginable y de la política de la prevención y la desconfianza.

Recusado decir lo que todo esto sirvió á los separatistas refugiados en los Estados Unidos. El pesimismo entró en Cuba, mientras que por otro lado, el antiguo partido peninsular se deshacía. Entonces comenzaron los trabajos revolucionarios, absolutamente imposibles cinco años antes.

A los dos de estériles agitaciones y violentas contiendas (sobre todo entre los antiguos devotos del antiguo régimen colonial) vinieron los partidos monárquicos de la Península á un acuerdo sobre la base de la Reforma Maura. Fué ese acuerdo la ley de reforma colonial de las Antillas de 15 de Marzo de 1895.

En rigor, tampoco era esto lo que el derecho y las circunstancias exigían. Apenas se comprende que entonces ya todos los políticos españoles no comprendieran la necesidad de una amplia reforma electoral que concluyese con el régimen del censo y las desigualdades por razón de procedencia y fe de bautismo. Merced á esta irritante injusticia, y cuando en la Península se hablaba á boca llena del arraigo de la democracia y de la armonía de ésta con la Restauración borbónica, se daban en el círculo de los elementos políticos de nuestra Patria, españoles de segunda y tercera clase.

Por aquel entonces, ya el Sufragio universal llevaba en la Península cinco años de práctica, merced á la ley de 26 de Junio de 1890. También Puerto Rico, como la Península, había disfrutado de esta franquicia y la perdió, como la Metrópoli, en 1878. No había razón ni motivo para establecer en este particular diferencia alguna entre las Antillas y la Península, porque es evidente que no hay provincia peninsular que en cultura ni en riqueza aventaje á Cuba y Puerto Rico. No había medio de disfrazar que el propósito del legislador peninsular era asegurar artificialmente el predominio de los peninsulares sobre los criollos en las Antillas.

Pero además, en la hora de la reforma total del régimen antillano ¿cómo podía prescindirse del carácter democrático de ésta! Ni lo uno ni lo otro lo vieron el ministro Maura en 1893 ni el ministro Abarzuza en 1895.

De todo ello se desentendió el partido liberal, volviendo al pecado de *ofrecer* otra vez y para tiempo indeterminado, una reforma electoral que rectificase el tono oligárquico del régimen imperante.

Sin embargo, el sentido de la ley de 5 de Marzo de 1895 se impuso. Porque lo que mas se veía y mas pronto irritaba en el viejo régimen, era la petulancia burocrática, la opresión centralizadora, el arraigado abuso administrativo, y la desigualdad con la Península en el orden administrativo y económico, apesar de lo que con dudosa buena fe propalaban, *urbi et urbi*, los que refiriéndose al hecho de que en las Antillas como en la Península existían Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, callaban cuidadosamente las sustanciales diferencias de esas mismas instituciones aquende y allende el Atlántico, así como excusaban el monstruoso dato de que el voto de los diputados peninsulares fuese decisivo para los impuestos coloriales que la Península no pagaba, mientras que el voto colonial respecto de los impuestos de la Península era, de todo en todo, insignificante.

Al fin todos aceptaron la nueva reforma con mayores ó menores reservas. Se votó en Cortes la que se llamó Ley Abarzuza. Y se promulgó en la *Gaceta de Madrid*.

Pero cayó del poder el partido liberal. Subieron los conservadores. Los separatistas de Nueva York desembarcaron en Cuba. Se suspendió la aplicación de la ley lo mismo en Cuba donde había agitación, que en Puerto Rico donde reinaba la mas completa tranquilidad... Y se hizo la revolución de Baire.

En lo sucesivo el Gobierno español no pensó más que en dominar la insurrección por la fuerza. A mediados de 1895, se proclamó la desacreditada fórmula de *la guerra con la guerra*. Hablose una vez más, enfáticamente, de sacrificar por el mantenimiento de la dominación española *nuestro último hombre y nuestra última peseta*. Y las cosas retrogradaron lo que todos los hombres de previsión y de estudios políticos debían esperar... y temer.

Con esto cambiaron también las disposiciones del extranjero.

En los Estados Unidos se produjo un movimiento, cada vez más vivo, en favor de la insurrección cubana. No tengo para qué discutir las causas. Simpatía republicana: exclusivismo americano: interés particular: repulsión hacia determinados procedimientos de guerra: aprovechamiento de

las circunstancias para plantear un problema de engrandecimiento que las circunstancias habían puesto á un lado hacia muchos años: excitación favorecida por el reciente conflicto de Inglaterra con los Estados Unidos por causa ó con motivo de la cuestión de límites de la Guyana inglesa y Venezuela... sea lo que fuera, el hecho es que á muy poco de iniciada la última insurrección cubana, ésta encontró caluroso apoyo en la República de Norte América.

En las principales ciudades se constituyeron juntas de cubanos y simpatizadores para a legar dinero y preparar expediciones sobre las costas de Cuba; de sus puertos salieron muchos barcos cuyo destino y cuya hostilidad al Gobierno español nunca fué ni podía ser un secreto para nadie: sus periódicos se desataron en todo género de violencias contra los gobernantes y los soldados españoles de Cuba y luego contra España, y la dominación colonial española; y sus Cámaras legislativas dieron un espectáculo quizá único en la Historia contemporánea, agotando el diccionario de los diatribos y de las provocaciones contra una nación amiga.

Ya de esto se ha tratado, aunque de pasada, en otra parte de este trabajo. Ocioso, á más de desagradable, sería insistir ahora en ello. Lo que importa, por el momento, es consignar que, apesar de las reiteradas y calurosas excitaciones de los diputados y senadores norte-americanos, y contra lo que algunos esperaban de los hombres que recientemente habían discutido, en términos de gran arrogancia, con Inglaterra, representada por lord Salisbury, en la cuestión de Venezuela, terminada por el tratado de Washington de Diciembre de 1897, el Presidente de la República norteamericana (que lo era Mr Cleveland) constantemente se mantuvo en cierta relación respetuosa con el Gobierno español, procurando reanudar la tradición del Presidente Grant.

La resistencia de Mr. Cleveland á reconocer ora la beligerancia de los insurrectos, ora la razón y el fin de éstos, llegó al punto de hacer muy probable un ruidoso choque entre el Presidente y el Congreso de los Estados Unidos.

Los simpatizadores de los separatistas cubanos, presentaron, en el curso de los años 96 y 97, varias proposiciones que las Cámaras vieron con buenos ojos. Alguna fué aprobada con el carácter de *concurrente*, por el Senado y la Cámara de representantes, que al efecto se concertaron en 7 de Abril de 1896. Esta resolución favorece al reconocimiento de la beligerancia de los insurrectos y tenía el carácter de

por el deseo de inspirar su voluntad á otra nación. Su proximidad geográfica, y todas las consideraciones arriba detalladas les obligan á interesarse en la solución del problema cubano quiera ó no quiera.

Su única preocupación es que la solución del problema se haga rápida y que por estar fundada en la verdad y en la justicia sea permanente. Para ayudar á esa solución ofrece las soluciones que en esta Nota se contienen. Serían por completo mal interpretadas á no ser que se atribuyeran á los Estados Unidos otros propósitos hacia España que los de ofrecer su auxilio para la terminación de la lucha fratricida de un modo que dejando su honor y dignidad incólumes aumente al mismo tiempo y conserve los verdaderos intereses de aquellos á quienes importa.

El Gobierno español (como antes he indicado) declinó en 22 de Mayo el ofrecimiento de los buenos oficios de los norteamericanos. El Sr. Duque de Tetuán (ministro de Estado en el Gabinete presidido por el Sr. Cánovas del Castillo) en una extensa comunicación dirigida al representante español Sr. Dupuy de Lome, después de discutir (en honor de la verdad, sin fortuna) las críticas de Mr. Olney, hace descansar su resistencia en estos dos puntos: «el Gobierno español se ha comprometido de *motu proprio* en el Discurso de la Corona, á ampliar y mejorar, *en su oportunidad* (sic), las reformas hechas, ó mejor dicho *decretadas*, en 1895 en la administración de nuestras Antillas: el Gobierno de España no se prestaría nunca á *alternar con sus súbditos rebeldes*, como de potencia á potencia, y por tanto, *faltarían términos hábiles para pacificar á Cuba mientras no se partiera del hecho de la sumisión de los rebeldes en armas á la madre Patria.*»

Después de esto el ministro español insistía en señalar como una de las principales causas de la existencia de la rebelión cubana, el apoyo que esta encontraba en la República de los Estados Unidos.

En silencio, y con tristeza, recibió Mr. Olney la comunicación del Sr. Duque de Tetuán, cuya negativa entró por mucho en la producción de las proposiciones antes citadas de los senadores y representantes del Congreso norteamericano; pero el Presidente Cleveland no debió creer definitiva esta contestación, cuando en su Mensaje de 8 de Diciembre del mismo año 96, insiste en mantener el ofrecimiento de sus buenos oficios, lo discute y lo razona, después de combatir toda otra manera de intervención en Cuba.

Aludiendo á las excitaciones que se le hicieron para poner término á la lucha destructora de la Grande Antilla,

una guerra entre España y los Estados Unidos, según afirmaban confidencialmente sus amigos, no sería de grandes proporciones ni de dureza; «sin negar ni afirmar la exactitud de decir que los Estados Unidos como Nación, forman sus actos en el derecho y no en la fuerza la norma de su conducta. Por lo demás, aun no constituye para los Estados Unidos una guerra el más pacífico de los pueblos, siendo más constante la de vivir en buena amistad con ellos. Y como sus dominios son tan dilatados y que satisfacen cuantas ambiciones y veleidades les en este orden de ideas, haciendo preferible la posesión de la más atractiva belleza que pueda tener ellos ni sueñan con las conquistas ni miran con envidia lo que otros poseen.»

Y, aunque sin precisarlo, á los argumentos de este Gobierno español, Mr. Cleveland dice que debía indicar que si España ofreciese á Cuba la autonomía, habría motivo justificado para la pacificación de la isla se pudiera realizar sobre su resultado satisfactorio para cuantos se legalmente interesados en el asunto.» Pero la España de que los rebeldes se sometieran, de incondicional, antes de que se les concediese la autonomía estaba plenamente justificado, «porque implicaba el reconocimiento de hechos tan graves como la coacción dada á la rebelión los dos años que ya conllevaba la posibilidad de que se prolongase de una manera por la índole misma de las cosas, y de mala experiencia; la inminente y completa ruina de la guerra no acababa sin pérdida de tiempo y principales abusos que todos los partidos políticos, todos los centros oficiales y sus hombres prominentes reconocían y confesaban, pidiendo su

terminación: «sabiendo esto, negarse á ofrecer las reformas mientras que aquéllos que las piden no se desistieron, deponiendo las armas, antes parece el error que darse cuenta de su gravedad y ofrecer la suspensión de la duda de la sinceridad de las intenciones manifestadas en favor de las re-

antes de salir de nuestras costas. Pero de este aspecto de la Nota española no es necesario hablar más por ahora. Firme en el convencimiento de haber cumplido por completo nuestras obligaciones, se dió la debida respuesta á este cargo por la vía diplomática....»

Ni más, ni menos. Hasta ahora no conocemos mayores detalles de esa respuesta, cuya publicidad interesaba de un modo excepcional al Gobierno de los Estados Unidos.

Las palabras del ministro de Estado español fueron luego corroboradas por la *Gaceta de Madrid*, que á fines de Noviembre publicó los decretos de reforma autonomista con las instrucciones necesarias para llevarlas inmediatamente á la práctica, después de sustituir al general Wejler por el general Planco, en el Gobierno general de Cuba.

A poco, como antes he dicho, ó sea el 6 de Diciembre, Mr. Mac Kinley leyó el Mensaje anual de la Presidencia al Congreso de los Estados Unidos.—De este documento se ha hablado ya en otra parte, por cuanto es el punto de partida de este trabajo. Ahora baste decir que en el Mensaje aludido fueron discutidas otra vez todas las soluciones posibles de la cuestión de Cuba.—En él se ratifica el juicio de que en la guerra cubana, así españoles como cubanos, han olvidado el Código de la guerra de los pueblos civilizados; se habla del inexcusable deber del gobierno norteamericano de amparar á sus nacionales atropellados en la Grande Antilla, y se registra, con frases de simpatía y esperanza, la nueva política autonomista iniciada por el Gobierno liberal.

En este documento se hacen declaraciones tan graves como las siguientes, con relación á lo que el Gobierno liberal español había realizado, iniciando la nueva política:

«Ha relevado al general cuyas órdenes brutales inflamaban la imaginación americana é indignaban al mundo. Ha modificado la horrible orden de concentración y se ha comprometido á cuidar de los abandonados y á permitir que los que quieran volver á cultivar sus campos puedan hacerlo, asegurándoles la protección del Gobierno español en sus legítimas ocupaciones. Acaba de poner en libertad á los prisioneros del *Comptitor*, antes condenados á muerte, y que habían servido de asunto á frecuente correspondencia diplomática durante éste y el anterior Gobierno. No hay ya ni un solo súbdito americano detenido ó cumpliendo condena en Cuba.»

Por todo esto, había que esperar los hechos. El pervenir

Mr. Cleveland acreditó siempre una cierta prevención contra la política de la fuerza, y grandes antipatías contra toda precipitación de soluciones. Cuando acentuó su disposición en favor de soluciones extremas, fué en el curso del conflicto con Inglaterra por causa de Venezuela: pero entonces aprovechó la circunstancia de que la actitud del poderoso gobierno inglés, frente á la débil República sudamericana, entrañaba un verdadero atropello y era un nuevo atentado en la serie de las injurias hechas por los gobiernos europeos á los jóvenes naciones de América, y había concitado contra los ingleses á los Gobiernos y la opinión pública del Nuevo Mundo, determinando, en la parte latina de éste, una positiva rectificación de las prevenciones que contra los Estados Unidos había producido, en último extremo, el fracasado Congreso Pan-americano de 1890.

Para Mr. Cleveland la anexión de Cuba era cuestión de tiempo, y para lograrla en condiciones de éxito tomaba altura y prestigio, dando relieve al papel amistoso y redentor de los Estados Unidos, y huyendo de toda apariencia de provocación y conquista, que podrían proporcionar á la gran República un carácter perfectamente opuesto á su representación en el mundo contemporáneo: el carácter de una nación agresora y á la postre militar, de todo en todo incompatible con las exigencias y las condiciones de una República democrática.

El tiempo explicará cómo y por qué Mr. Mac Kinley, que al principio pareció seguir el rumbo trazado por Mr. Cleveland, muy pronto lo rectificó completamente, precipitándose, por flaqueza ó por propia voluntad, en la política de lo que ya se llama en los Estados Unidos la expansión colonial y el imperialismo. Esto es todo lo contrario á lo que recomendaron Washington, Jefferson, Monroe y los grandes fundadores de la esplendorosa República norteamericana.

También el tiempo permitirá apreciar cumplidamente el valor y la eficacia respectivos de los dos procedimientos empleados por Mr. Cleveland y Mr. Mac Kinley.

Por lo pronto el de este último ha dado de sí la guerra en las condiciones deplorables que se han expuesto en el presente trabajo. En cambio, Mr. Cleveland puede poner de su lado la doble circunstancia del positivo efecto que sus recomendaciones produjeron en el Gobierno español para la promulgación de los decretos reformistas de 1897 y de la coincidencia de sus gestiones con otras análogas, aunque

no tan vivas, de parte de otros Gobiernos europeos, y que evidentemente contribuyeron á la publicación de los referidos decretos. De esta suerte se acreditó el concurso internacional para la pacificación de las Antillas españolas.

Es este un punto hasta ahora por nadie tratado y que pide un detenido estudio. Por desgracia, faltan los datos suficientes: es decir, los datos públicos é incontrovertibles. Ni el Gobierno español los ha incluido en ninguno de sus Libros rojos, ni han aparecido hasta ahora en los libros análogos del extranjero. Pero tampoco han aparecido en los libros oficiales los documentos á que antes me he referido respecto á las negociaciones de 1826—1850—1852 y 1870, sobre la suerte de Cuba. Y para tener exacta noticia de esos documentos verdaderamente indiscutibles, ha sido preciso que transcurrieran muchos años desde su redacción y tramitación entre los Gobiernos europeos y americanos.

La vez primera que se aludió, en los círculos políticos españoles, á la actitud de los Gobiernos extranjeros sobre la actual cuestión de Cuba, fué en la sesión celebrada por nuestro Senado en 30 de Junio de 1896.

Entonces yo, discutiendo con el Sr. Cánovas del Castillo, (á la sazón Presidente del Consejo de Ministros), me permití con todo género de salvedades y alardeando de una prudencia quizá exagerada, excitar al Gobierno español á que explicara algo sobre este punto, que á mí particularmente no me era desconocido.

Entonces pregunté:

«¿No tiene el Gobierno algún dato de carácter oficial respecto á la manera con que algún Gabinete extranjero, y más concretamente algunos Gabinetes europeos entienden nuestro problema de Ultramar?»

«Por acaso, en el curso de las relaciones oficiales ú oficiosas de nuestro Gobierno con algunos extranjeros, ¿no ha oído el primero la expresión de las simpatías que inspira España más allá de las fronteras; no ha percibido ciertas veladas censuras á la actitud y la conducta de los Estados Unidos, pero con el aditamento de cariñosas excitaciones para que el Gobierno español varíe de procedimiento en nuestras colonias y se ponga en armonía con el sentido dominante en la colonización contemporánea, mediante la proclamación de la autonomía colonial? ¿Es inverosímil la especie de que una de las mayores dificultades con que nuestro Gobierno tropieza para concluir la guerra de Cuba, sostenida muy particularmente por las simpatías y los auxilios directos de Norte América, es la propaganda que se hace en el Mundo contra nuestro

régimen colonial, atribuyendo á nuestro Gobierno propósitos reaccionarios por la suspensión de las reformas del 95, lo mismo en Cuba agitada que en Puerto Rico pacífico, y por la significación que se atribuye públicamente á la sustitución del señor general Martínez Campos por el señor general Weyler en el gobierno de la Grande Antilla y en la dirección de la guerra cubana?

El Sr. Cánovas del Castillo se desentendió de estas preguntas, como de otros problemas que planteó en aquella sesión; pero sobre casi todos estos puntos disertó á poco en el Congreso de los diputados. Es decir, allí donde yo no podía recoger y comentar las respuestas y donde nadie las discutía porque allí no había autonomistas ni republicanos. (1).

Pues bien; el Sr. Cánovas del Castillo, en la sesión celebrada por el Congreso en los primeros días de Julio de 1896, resumiendo los amplios debates que allí hubo sobre la cuestión colonial y la parte del Mensaje de la Corona, que hablaba de la urgencia de consagrar la personalidad administrativa y económica de Cuba, y de hacer en Ultramar nuevas y grandes reformas, dejando atrás las de 1895, decía:

«Existe hoy en Cuba la necesidad real de aplicar en gran parte lo que los ingleses llaman el *self government*, de llevar allí una descentralización que puede calificarse de extrema; de dar al país una grandísima parte en la administración de sus propios y peculiares intereses; de llevar asimismo la responsabilidad á esa Administración, quitando esa responsabilidad á la Madre Patria, de modo que no se pueda estar constantemente, con los ejemplos más ó menos exagerados de nuestra Administración, deshonrándonos á los ojos de América y de Europa y mitigando en parte, ya que no destruyendo del todo, en alguna nación, la simpatía que la notoriedad del derecho de España nos pudiera proporcionar.

«No es allí sólo; ya véis si soy franco y si empleo otras reservas en la discusión que las que son exclusivamente necesarias. No es solamente en América donde con grandísima prudencia por parte de las Repúblicas hispano americanas y con un afecto filial de sus Gobiernos, que nunca deberemos olvidar, se piensa, sin embargo, que debieramos mejorar la Administración de la isla de Cuba, sobre la base de dar intervención en ella á los habitantes, de esa Antilla; no es tampoco en algún otro país, que no teniendo esos motivos de filial cariño hacia nosotros, aunque tenga alguno, se piensa lo mismo. No es allí sólo. Acaso lo

(1) Sobre todo esto puede leerse el folleto publicado en 1898, con el título de *La autonomía colonial ante las Cortes y la opinión pública de España con motivo de la guerra de Cuba*.

sabéis; sin duda lo sospecháis. Es en Europa misma, donde
ción de que nosotros no llevamos á aquel gobierno todos los
que sea un gobierno á la altura de las ideas y necesidades ju-
dernas, nos está gravemente perjudicando.»

La declaración no pasó de ahí, pero basta. En Es-
paña, en ciertos círculos, se sabía de sobra lo que
biernos europeos y americanos pensaban y reco-
respecto de la urgencia de una reforma profunda
orden colonial. Recordábase cómo y por qué, en
habían fracasado las gestiones hechas para gar-
imperio de España en Cuba, y de qué suerte en es-
habían influido las cuestiones de la trata y la anti-
producían algunas de nuestras prácticas colon.
Gobiernos inglés y francés lo habían declarado
franqueza, en 1850 y 1852 respectivamente. La
todo el Mundo se ocupaba de este problema en
sentido; es decir, en favor de la reforma autonóm-
Antillas y en pro de la urgencia de una solución
ma cubano, complicado por la creciente impor-
las simpatías separatistas ó anexionistas de los
Unidos, á partir de 1896. Realmente existía una
ción moral de Europa y América en la situación
económica y social de las Antillas españolas.

A esta disposición europea é hispano americana
calurosa gestión Mr. Cleveland en términos apen-
tibles, si, como antes he dicho, la política del Pres-
los Estados Unidos no resultara comprometida, y
con rectificada, por lo que en aquel país sucedía en
respeto práctico y la consideración debida á los
públicos y la soberanía de una nación amiga.

Pero todo esto sirve, primero, para dar mayor
los equívocos, la intemperancia, la precipitación y
tivas violencias que caracterizan la dirección y la
Presidente Mac Kinley á los pocos meses de subir
y que dan á su política internacional un tono per-
te contrario al derecho y las prácticas contemporá-

Luego, eso sirve para evidenciar nuevamente que
ción de Cuba estaba, á fines del año 97, puesta bajo
dición del Concierto internacional moderno.

es hora de contestar á las preguntas hechas arriba
e la intervención armada realizada por el Gobierno de
Estados Unidos en Cuba, á partir de Abril de 1898.

detalle con que he expuesto la conducta del Gobierno
americano, el desarrollo de la política colonial espa-
á contar de fines de 1897, y las relaciones diplomáti-
el Gabinete de Madrid con el de Washington y los
ernos europeos en el curso del último año, facilita
damente la tarea. Apenas si ahora necesito otra cosa
hacer referencias á lo antes dicho y relacionar estas re-
cias para llegar á una síntesis cuya fórmula no exige
ho espacio.

or otra parte, me allanan grandemente el camino la ab-
a imparcialidad con que he apreciado las disposiciones
de Mr. Cleveland y los valiosos antecedentes de la Repúbl-
ca norteamericana, así como la severidad de mi juicio sobre
los errores del Gobierno español y las inconveniencias é in-
justicias de nuestra vieja política colonial.

En estas condiciones puedo desahogadamente afirmar que
no ha habido en Cuba, á mediados de 1898, motivos para
una intervención extranjera.

Y esto lo afirmo, no sólo con el criterio de las teorías
más radicales y novísimas del Derecho internacional, sino
también teniendo en cuenta las prácticas internacionales más
corrientes de nuestra época, los argumentos más especiosos en
favor de una actitud agresiva por parte de la República nor-
teamericana y las tradiciones más prestigiosas, los compro-

misos más notorios y el sentido más acusado de la gran Federación de los Estados Unidos.

Demos de barato que la insurrección cubana fuera invencible por parte de España, á mediados ó á fines de 1897. Convengamos en que esa insurrección producía á los Estados Unidos perjuicios extraordinarios, cuyo término era urgente, así para el buen orden político y económico de la República, cuanto para exonsar al Gobierno de ésta gastos considerables y conflictos diplomáticos.

Está bien. Aceptemos esas hipótesis, pero siempre con la protesta de que se ha probado en páginas anteriores que la guerra de Cuba no ha producido ni produce á los Estados Unidos más daños que los corrientes y propios de la vecindad; es decir, aquellos que jamás han sido motivo para la guerra entre dos naciones contiguas ó próximas.

Y también es cierto que la guerra de Cuba llevaba poco más de dos años de duración y aparecía visiblemente decaída á principios de 1898, así como que la guerra civil de los Estados Unidos de 1861, que tantos perjuicios ocasionó al comercio del Mundo, duró más de cuatro años, revistiendo siempre proporciones considerables.

Pero de todos modos, ¿será posible que persona alguna que haya vivido en el mundo de la política y de los negocios, ó que haya seguido de lejos la marcha general de las cosas en todo el curso de los últimos cuatro años; será posible que niegue el hecho de que en todo ese tiempo los Estados Unidos han sido el centro de acción, el lugar de abastecimiento, y la base de operaciones de la insurrección separatista cubana?

Y después de lo dicho y detallado en las páginas anteriores, ¿es dable discutir que la actitud del Gobierno de Washington—á poco de entrado el año 98,—el movimiento de sus barcos de guerra, la conducta de sus agentes consulares en la Habana, las notas y reclamaciones que dirigió al Gobierno de Madrid, sus exigencias respecto de la aplicación del depriamente protocolo de 1871 (que da un alcance extraordinario al convenio de 1795 y protege á los americanos comprometidos en la rebelión cubana) y las declaraciones solemnes del Congreso de la República fortificaron la insurrección separatista decadente, desprestigiaron al Gobierno de España y dificultaron el planteamiento, arraigo y desarrollo de las reformas autonomistas decretadas en Madrid á fines de Noviembre de 1892?

En tales supuestos, ¿en qué principio de Derecho, en

qué precedente de carácter internacional, en qué argumento de equidad y, en último caso, en qué consideración de moral pública puede apoyarse la pretensión de que el Gobierno de los Estados Unidos, cooperador más ó menos indirecto de la insurrección de Cuba, encuentre fundamento en ésta para formular exigencias contra España, imputándole la exclusiva, la absoluta responsabilidad de lo que en Cuba pasa, y resolviéndose, en vista de esta situación, á intervenir, sólo y por su exclusiva cuenta y con las condiciones por él libremente fijadas, en la insurrección de una colonia contra la Metrópoli, impedida por la acción del interventor para dominar, reducir ó aquietar al insurrecto?

Sería ocioso invocar, siquiera como atenuante, el dato de la Nota pasada por el Gobierno norteamericano al español (la llamada *Nota Olney*), en 10 de Abril de 1896, ofreciendo los servicios de Washington, en condiciones honorables, para dar feliz término á la agitación cubana, bajo el pabellón de España.

Aquella Nota, fué quizá, el acto realizado por el Gobierno de los Estados Unidos, dentro de los cinco últimos años, más estimable para cuantos, absolutamente desinteresados en el particular concreto de la cuestión colonial española, estudien las difíciles relaciones de España y los Estados Unidos en el último cuarto del siglo XIX, y consideren el problema sólo desde el punto de vista de la paz y el progreso general de los pueblos. No lo niego.

Tampoco tengo por qué ni para qué negar que aquel hecho tiene un positivo valor en la historia de la política interna de España.—Los partidos políticos de ésta no podrán prescindir de la mencionada Nota en la hora de exigir las responsabilidades que corresponden á los que, dirigiendo el Estado español, quizá entonces podrían haber evitado el deplorable curso que llevaron después los negocios ultramarinos.

Pero sin prescindir de nada de esto, es necesario no variar su carácter ni exagerar su trascendencia. Por lo menos, es indispensable precisar fechas y relacionar aquel importante documento con las distintas actitudes que el Gobierno anglo-americano tomó desde entonces y con el muy diferente estado que ofrecieron las cosas en Cuba, á partir de 1.º de Enero de 1898.

Porque, cuando Mr. Olney escribió su Nota de 1896, aparecía sin salida el problema cubano, suspensiones indefinida-

mente allí las reformas votadas por el Parlamento español de 1895, y enseñoreado del poder nuestro partido conservador, siempre opuesto á toda política expansiva en Ultramar y profundamente antipático en las Antillas. Y cuando se decretó en Washington la intervención en Cuba, fué muchos meses después de aquella Nota, y á los cuatro escasos de haberse comenzado á plantear en las Antillas el régimen autonomista, por el partido liberal español que ocupaba el poder con antecedentes, compromisos y voluntad estimados satisfactoria y públicamente por el Gobierno de los Estados Unidos, y que para la noble empresa de la transformación del orden político y *social* de nuestras colonias, contaba con las simpatías y el apoyo de todos los elementos democráticos de España, y hasta con una relativa benevolencia de los conservadores caídos.

El fondo de la Nota de Mr. Olney—lo fundamental de su recomendación—era un hecho á principios de 1898; quedaba por realizar sólo *la intervención ofensiva* de los Estados Unidos. Mucho menos necesitaba España en aquella hora para terminar la guerra cubana. Necesitaba tan sólo que los Estados Unidos se astuviesen, de veras, de fomentar ó calentar esa guerra. En una palabra, que el Gobierno de la República cumpliese severamente las reglas generales de la neutralidad internacional entendidas: 1.º, como ese mismo Gobierno había recomendado á Europa, y particularmente á Inglaterra, durante la guerra civil norteamericana de 1861 á 1865; 2.º, como España las estimó y practicó en aquella época en favor de aquel mismo Gobierno, que tan agradecido se mostró entonces á la Nación que ya obligaba su gratitud por el descubrimiento de América, por su activa cooperación en favor de la independencia de la Unión anglo-americana en 1782, y por la facilidad con que en 1803, 1815, 1819 y 1820 se había prestado al ensanche territorial de la nueva República por la Florida y la Luisiana, y 3.º, como, á instancias de los hombres de Washington, quedó determinado y proclamado por el famoso Tribunal de Arbitraje de Ginebra y el célebre Tratado de Washington de 1871.

De todos modos, aun apreciando la Nota de Mr. Olney como un acto bien intencionado y plausible para llevar la paz á Cuba, no es dable entender que por él adquirieran los Estados Unidos un derecho más ó menos positivo de que carecían la víspera de la publicación de la Nota, ni se puede

prescindir de lo que antes de ahora se ha dicho respecto de la deficiencia de aquella gestión, mientras no fuera acompañada de una rectificación absoluta del apoyo que la insurrección cubana venía recibiendo del pueblo y aun de las autoridades de los Estados Unidos.

Esto con referencia á la época en que se produjo la Nota. La segunda vez que el Gobierno de Washington repitió el ofrecimiento de sus buenos oficios, fué á fines de Septiembre de 1897, la víspera misma de la subida al poder del ministerio Sagasta, cuyo programa reformista y expansivo hacía ociosa la gestión extranjera. La vez tercera en que ésta se anuncia, es en Marzo del año 98. Parece imposible desconocer la inoportunidad de la solicitud, que implicaba entonces, cualesquiera que fuesen las protestas y las salvedades con que se la acompañara, una grave desconsideración para el Gobierno español, que seguramente habría logrado la paz en aquella hora, si con esta y otras verdaderas coacciones, no se hubieran dificultado sus medios morales y materiales de acción ante la vista del Mundo, ya alarmado y pronto escandalizado por tales procedimientos.

Sería cerrar los ojos á la evidencia el desconocer que la aceptación de los buenos oficios de los Estados Unidos en Febrero ó Marzo de 1898 (y los buenos oficios dirigidos en Cuba por el cónsul general Mr. Leel), habría equivalido á suscribir el protectorado del Gobierno de Washington en condiciones tan deprimentes, que la pérdida de Cuba para España sería cosa de muy poco tiempo, en condiciones verdaderamente incompatibles con el prestigio que corresponde á la nación descubridora de América y que aún hoy puebla la mayor parte del continente sudamericano.

Apurando algo las cosas, podría la malicia llegar á más. Sobre todo ahora y después de haberse producido otros deplorables actos del Gobierno norteamericano, que, como es notorio é indiscutible, en esta campaña no tiene á su favor el voto manifiesto de ningún pueblo del Mundo.

Y no digo en absoluto que tiene enfrente á todo el Mundo, porque el *Libro Rojo* recientemente publicado, da motivos para sospechar que el Gobierno inglés no comparte la aversión general de los demás Gobiernos aludidos en aquella recopilación diplomática.

Sin duda, la malicia puede muy bien pensar que la reiteración de los ofrecimientos de intervención oficiosa, hecha ya

dentro del año de 1898, no tenía otro carácter que el de un medio, más ó menos hábilidoso, de mostrar al Mundo que el Gobierno americano había apelado á todos los recursos, antes del material y violento, que ya estaba entonces en la mente de los políticos de Washington. Y aun esta hipótesis sería benévola al lado del supuesto de que aquel acto fuera una manera de distraer al Gobierno español, respecto de las verdaderas disposiciones y los serios preparativos de los directores de la Casa Blanca.

Tratándose de este particular, es imposible prescindir de los pretextos dados por el Gobierno de los Estados Unidos para concentrar sus buques de guerra y apostarlos luego cerca de la isla de Cuba. ¡Entonces los americanos alegaron el temor de que España acometiera ó declarara la guerra á la República!

Nada de esto pudiera pensarse si el Gobierno norteamericano, después de la Nota de Mr. Olney, y ratificando con hechos las declaraciones simpáticas que luego le arrancan los decretos autonomistas de Noviembre de 1897 y las nuevas disposiciones del Gobierno español, hubiera caloriado la acción de éste, para lo cual seguramente no eran medios adecuados la forma y el alcance de la campaña hecha para *socorrer* á los *reconcentrados* de Cuba, ni la presencia del *Maine* en la bahía de la Habana, ni, sobre todo, la actitud del cónsul general americano Mr. Lee en la capital de Cuba.—Sobre estos particulares ya creo que no caben equívocos. El tiempo ha hablado quizá más de lo necesario.

Pero aun apartando la vista de estos lamentables sucesos, y tomando la famosa Nota de Mr. Olney en su más generoso sentido, y aceptando como sinceras las manifestaciones solemnes de los Presidentes Cleveland y Mac Kinley al Congreso de los Estados Unidos de 1896 y 1897, parece que lo mejor, quizá lo único, que el Gobierno norteamericano podría haber hecho, para salvar sus responsabilidades y quedar dentro del Derecho Internacional contemporáneo, era procurar la inteligencia y la cooperación de los demás grandes directores del mundo político moderno: 1.º, para declarar que lo que sucedía en Cuba era absolutamente atentatorio á los derechos de la Humanidad y á los intereses de la Civilización; 2.º, para establecer que España era impotente para poner término á esta angustiosa situación, y 3.º para determinar lo que allí se debía hacer, del propio modo que se había hecho en

Europa, respecto de las cuestiones de Oriente y de Italia—y en Africa, Asia y América, respecto de los problemas de Marruecos, el Congo, China, Japón y el Paraguay.

Es de creer que algo de esto pasó por el espíritu de los hombres de la Casa Blanca, puesto que el Presidente Mac Kinley, en su Mensaje de 6 de Diciembre de 1897, manifestó el propósito de *que su acción fuese tan clara que le asegurase el apoyo y la aprobación del mundo civilizado.*

Ya en otra parte se ha recordado cómo el Presidente Grant entendió, en 1872-73, la competencia del Concilio internacional de los gobiernos americanos, para recabar de España la libertad de Cuba—y cómo, después, el mismo Presidente, consultó, sin éxito, á las Potencias europeas, la conveniencia de intervenir en la grande Antilla.

Pero la indicación de Mr. Mac Kinley, no sólo no pasó á mayores, ni se tradujo en acto alguno positivo, sino que pronto fué anulada escandalosamente y como no se ha dado otro ejemplo en la Historia contemporánea, por la peregrina resolución del Congreso americano de 18 de Abril de 1898 y por la intervención material de los soldados y marinos norteamericanos, después de haber sido desdeñada, más que desatendida la gestión diplomática de las grandes Naciones europeas para evitar la ruptura de los Estados Unidos con España.

Las cosas han pasado de tal suerte, que pocos serán ya los que no vean con toda claridad que las últimas determinaciones de la actitud definitiva de los Estados Unidos (perfectamente dispuesto á intervenir de cualquier modo y con tales ó cuales propósitos en la cuestión hispano-cubana), fueron: 1.º la casi evidencia de que el planteamiento del régimen autonomista en Cuba terminaría en breve plazo la guerra separatista, y con esta terminación se destruía la mejor coyuntura de influir é intervenir el Gobierno de Washington en las cosas de aquella isla, y 2.º la seguridad de que ninguna Potencia europea iría á la mano de los Estados Unidos, ni dificultaría por modo alguno que éstos realizasen en Cuba la obra violenta que tenían preparada.

Desde que estos dos puntos quedaron bien establecidos, la intervención norteamericana fué indiscutible.

Pero con esto, ¡qué retroceso en el Decreto Internacional!

Porque el Gobierno norteamericano no ha consentido en solo momento que prospere el arbitraje, propuesto repetidas veces por España, ni se ha cuidado para nada de las leyes

de neutralidad ni de los principios corrientes en punto á la soberanía de las naciones ni del Concierto internacional para los intereses y las soluciones que afectan á todo el Mundo.

Aun sin concretar las observaciones á detalles importantes y de imposible excusa, basta la consideración de la letra y el espíritu del famoso *bill* del Congreso norteamericano de 18 de Abril de 1898, para poder afirmar que los Estados Unidos han excedido ahora en arrogancia y violencias al primer Bonaparte en sus decretos respecto de Europa vencida y deshecha, y al Emperador ruso en sus declaraciones contra Turquía y á favor de los pueblos oprimidos por el Sultán, á los comienzos del siglo corriente.

Porque en el *bill* aludido (determinado, según se dice, en las consideraciones que preceden á la parte dispositiva, por el *sentido moral del pueblo norteamericano*), no sólo se decreta que *España renuncie inmediatamente á su autoridad y al gobierno de Cuba* sino que se proclama que *Cuba es y debe ser libre é independiente*.

Después vienen otras afirmaciones de positiva gravedad; pero las que afectan directamente al Derecho internacional son las primeras, que entrañan una pretensión más que abusiva é irritante, absurda, del carácter, los derechos y la representación del Estado norteamericano en el concierto del Mundo civilizado.

Porque de ellas resulta, desde luego, la capacidad del Estado norteamericano de negar eficazmente y por su absoluta y personal autoridad, la soberanía de una nación que, como la española, disfrutaba de la plenitud de su carácter internacional y de ninguna suerte había ofendido á la República de Norte América — Después, aparece el derecho de esta misma de ensanchar, por su exclusivo criterio y con sus medios propios, el círculo de las naciones independientes, dando ó reconociendo la personalidad de tal á la antigua colonia de Cuba, sin estimar siquiera conveniente para esta declaración transcendental en otro orden superior al de las meras relaciones particulares de Cuba con los Estados Unidos, la aprobación, y ni aún el conocimiento de los demás pueblos soberanos á cuyo trato, de igual á igual, era elevada la grande Antilla.

A todo esto hay que agregar la hipótesis fundamental de todas las resoluciones del *bill* mencionado; la hipótesis de que bastaba que el sentido moral del pueblo Norte Americano *se sintiera herido* por lo que pasaba en Cuba (ó mejor

dicho, por lo que el Gobierno de los Estados Unidos, por su propia cuenta y con sus datos exclusivos, decía que pasaba) para que este Gobierno hiciese, con éxito, las declaraciones antes expuestas y para que los soldados y los marinos de aquella República invadieran las aguas y la tierra de España, con el fin concreto de expulsar á ésta de sus dominios de América, sin el menor agravio del Derecho internacional contemporáneo.

Conviene fijarse mucho en que el *bill* de 18 de Abril de 1898 prescinde en absoluto de toda razón y aun de todo pretexto de carácter particular, para abonar la violencia que decreta.

En él no se habla palabra de los perjuicios que á los Estados Unidos causa la guerra de Cuba. No hay frase alguna referente á cualquiera de los rozamientos, cuando no choques, que exonsan ó producen la generalidad de las guerras particulares entre dos naciones. Cierta que se hace alusión á la pérdida del *Maine* en las aguas de la Habana, pero sin que esto se atribuya al Gobierno español ni á los españoles; bien que tal acusación hubiera sido el colmo del atrevimiento, precisamente cuando era notorio que el Gobierno norteamericano se había negado en redondo á que los oficiales y técnicos de España y los Estados Unidos estudiasen, juntos, de concierto y en el lugar del siniestro, la terrible catástrofe, que también pudo haber costado la vida á muchos españoles, y cuando el Gobierno de España acababa de proponer, de un modo incondicional, la entrega de este negocio á árbitros extraños, libremente elegidos por las partes interesadas en el conflicto.

Lo que para el *bill* de Abril de 1898 determina sus gravísimas resoluciones, es *la causa de la civilización cristiana*, en cuya *deshonra* se realizaban en Cuba, por aquel entonces, hechos que herían el sentido moral norteamericano. Por tanto, los Estados Unidos, por sí y ante sí, se declaran los vengadores y defensores únicos de la civilización en las Antillas, frente á otro pueblo culto y cristiano, respetado por todas las Potencias del Mundo moderno, y hasta acompañado de las simpatías de estas mismas Potencias en el instante crítico de transformar el antiguo régimen colonial de Cuba y Puerto Rico, de modo quizá superior al que pasaba por más expansivo y radical, consagrado en las colonias autonómicas y más prósperas de la libre y jactanciosa Inglaterra.

Antes de ahora, se había señalado por las cancillerías europeas, y por los más respetados juriconsultos contemporáneos, la ambiciosa pretensión del Gobierno norteamericano de invocar y practicar una especie de Derecho Internacional de su exclusiva producción y su especial marca.

Contra esta pretensión formularon muy vivas protestas, desde 1895 á 97, Inglaterra y Francia, con motivo de las cuestiones que estos dos países tuvieron con Venezuela, el Brasil y alguna otra nación sudamericana. También las últimas fórmulas de la bastardeada política de Monroe y la aspiración del Gobierno de la Casa Blanca de «parecer, ó ser realmente, el protector de todo el nuevo Mundo, no han pasado desapercibidas y sin contradicción por parte de casi todos los estadistas y tratadistas de nuestro tiempo.

Pero lo que últimamente ha sucedido en el Capitolio de Washington deja atrás todo lo presumido y patrocinado antes en los círculos políticos de Norte América, y todo lo ambicionado y osado en materia de tutela y de representación, después del justificado y muy aplaudido fracaso de las empresas de Napoleón I. Porque resulta, por el *bill* antes citado, que el Gobierno de los Estados Unidos es el campeón de la civilización moderna, con absoluto derecho para fijarse las condiciones, las causas y el alcance de su acción aislada, exclusiva y por todos conceptos soberana. Basta enunciar la tesis para que se den los motivos suficientes de su terminante condenación.

Es verdad que el cuarto y último acuerdo del *bill* en cuestión contiene la protesta de que los Estados Unidos carecen totalmente de intención de ejercer jurisdicción ni soberanía en la grande Antilla, ó de intervenir en el gobierno de Cuba, sino es para la pacificación. Además allí se afirma el propósito de *dejar el dominio de la Isla al pueblo de ésta, una vez realizada dicha pacificación.*

Pero cualquiera que sea el valor práctico de tales declaraciones, es evidente que no rectifican lo más mínimo el valor teórico y el alcance ambicioso del supuesto general del *bill*. Antes bien los confirma; porque resulta, en primer término, que quién *únicamente* pone límite á la acción norteamericana es el mismo Congreso de los Estados Unidos que la decreta; y en segundo lugar, que, prescindiendo los norteamericanos de la cooperación de los demás pueblos, priva á éstos de los medios prontos y eficaces para rectificar cual-

quier ex eso ó cualquiera mala interpretación y aplicación de propósitos originariamente desinteresados.

Bien seguro es que ninguna persona canta ni hombre medianamente conocedor de la Historia moderna, fiará mucho en el rigor de la declaración desinteresada antes referida. En estas empresas con dificultad se sabe bien como se principia, pero nunca se sabe como se acaba.

Aparte de que precisamente las últimas líneas de la declaración mencionada dejan ancho y cómodo espacio para toda suerte de interpretaciones, y sobre todo para que el libertador triunfante fije la hora y las condiciones de Cuba *pacificada* y en condiciones de que la gobierne el pueblo cubano... *libre é independiente*, por la mera declaración del Congreso de los Estados Unidos. Otra cosa sucedería si en esta obra intervinieran diversos Gobiernos y más pueblos.

El ejemplo de la ocupación *transitoria* de Egipto por Inglaterra, en circunstancias incomparablemente mejores que las que acompañan á la intervención de los Estados Unidos en Cuba, permite muy poca tranquilidad respecto de ciertas declaraciones generosas. Y la historia de las relaciones de los Estados Unidos con Tejas y Méjico no consiente grandes ilusiones respecto de los compromisos de aquéllos, trabajados á las veces—y hoy quizá como nunca—por la idea del imperialismo, que parece ser la tentación mayor de la raza sajona, en la plenitud de sus victorias. Pero éste no es el problema del momento.

15

No se detienen aquí las consideraciones que provoca la simple y general vista del problema internacional entrañado en la actual guerra de Cuba.

Al lado de todo lo discutido hay que poner: 1.º, lo que implica la reserva de las demás naciones contemporáneas y señaladamente de las Potencias europeas, en el desarrollo de la guerra; 2.º, lo que en consideración á este desarrollo hace España, y 3.º, lo que puede suponer, para el porvenir, la renuncia que ha hecho la República de los Estados Unidos de su positiva representación en el Derecho público y en la vida internacional de nuestro tiempo.

Sobre estas cuestiones no es fácil—quizá no es posible—formular ahora un juicio definitivo. De un lado, porque estamos en medio de la guerra y es dable que en el curso de ésta se determinen cambios y hechos nuevos que rectifiquen mucho—y hasta por completo—la disposición de los Gobiernos extranjeros, la situación de España y las condiciones verdaderamente deprimentes y deplorables para el desarrollo del Derecho Internacional que en este momento tenemos á la vista.

Por otro lado, quizá al estado actual de la guerra se debe la falta de documentos y datos precisos respecto de la actitud, las gestiones y los compromisos de los principales factores de la tremenda complicación que estudiamos; por lo que no es imposible que algunas de las críticas y sobre todo de las denuncias y acusaciones, fáciles de formular en este momento, en realidad sean poco fundadas, por

descansar en meras apariencias ó por dejar á un lado atenuaciones, excusas y aun eximentes, hoy por hoy desconocidas.

No obsta esto para que, desde luego, pueda afirmarse que la actitud de las grandes Potencias europeas resulta muy deslucida y que su actual pasiva expectación, si se prolonga un poco, puede degenerar en algo atentatorio á sus primeros deberes como primeros factores y elementos directores del Concierto internacional contemporáneo.

Es ocioso robustecer estas afirmaciones reproduciendo aquí lo que ya se dijo respecto de las gestiones que la representación diplomática de Francia, Inglaterra, Austria Hungría—Rusia, Italia y Alemania, hizo, por iniciativa y con el concurso del Pontífice romano, para evitar la ruptura de España y los Estados Unidos. Ahora cumple decir que en la Historia de nuestro tiempo no se da desconsideración parecida á la que el Gobierno de Washington tuvo para aquellas gestiones.

A esto se debe agregar otros dos hechos de primera importancia que son: primero, la antipatía, apenas velada, de la mayor parte—de la casi totalidad—de las Potencias europeas, respecto de la violencia norteamericana; y segundo, la resignación, más que la pasividad, con que las Potencias aludidas contemplaron, después, tanto la agresión material de que fué objeto España, como la indiferencia y el olvido en que fueron sepultadas por el Gobierno de Washington, las corteses y hasta tímidas exci'aciones de los Gobiernos europeos, fortificadas por la deferencia y las concesiones del Gobierno español.

Alguna vez, en la Historia, se ha dado el caso de que Gobiernos requeridos por los directores del Concierto internacional, hayan tratado de desentenderse de parecidos requerimientos. Ejemplos de esto nos presenta la historia de Turquía en relación con la cuestión de Oriente; sobre todo en los tiempos de la insurrección y emancipación de Grecia y en los recientes de la rebelión de Creta y de la guerra turco-helena.

Pero sobre que nunca la desconsideración del solicitado por las observaciones de las grandes Potencias europeas llegó al extremo que ahora se discute, es sabido que las distracciones y los apresuramientos y las habilidades diplomáticas de Turquía fueron contenidas y rectificadas por la acción combinada de los diplomáticos y los soldados de

Francia, Inglaterra, Rusia, Alemania, Italia y Austria-Hungría, en términos beneficiosos para la paz del Mundo y la libertad de los pueblos.

En el caso presente, el particular reviste mayor importancia, así por los antecedentes próximos de los debates de los Gabinetes ing'és y norteamericano sobre la cuestión de Venezuela y de la declinación de Inglaterra sancionada por el Tratado de Washington de 1896, como porque, al vigor que ha logrado en los Estados Unidos la última fórmula de la política de Monroe, tendente á excluir la acción europea del gran escenario del Nuevo Mundo, se une la pretensión aún mayor, que se desprende del texto del *bill* norteamericano de 18 de Abril de 1898, por el cual resultan los Estados Unidos como el campeón privilegiado de los intereses de la civilización moderna.

Aun concretando esto á América, la pretensión no sólo sería rechazable, sino que contradice abiertamente la actitud de Francia é Inglaterra, precisamente con relación á las Antillas españolas, según se demuestra por la historia de las negociaciones diplomáticas de 1826 á 1854, de que he hablado antes.

Equivaldría á consagrar un verdadero retroceso en el Derecho Internacional, el reconocimiento por todos los pueblos del Mundo del exclusivismo continental, que implica la fórmula bastardeada de Monroe, enaltecida por Blaine, en una época que se caracteriza por el ensanche de la solidaridad internacional y por la afirmación de que los principios fundamentales del Derecho están por cima de razas, religiones, escuelas, idiomas, latitudes y distancias, debiendo ser garantizados por la acción colectiva de todos los pueblos cultos.

Pero lo absurdo de la tesis toma mayores, extraordinarias proporciones y se acredita indiscutiblemente como un agravio á la paz del Mundo, á la dignidad de los pueblos y al prestigio y los deberes de las grandes naciones directoras de la sociedad contemporánea, cuando se formula del modo incondicional que se ve en el *bill* angloamericano.

El único fundamento (el verdadero pretexto) de ese *bill*, que, hasta cierto punto, responde á la tendencia de nuestra Edad á patrocinar las intervenciones internacionales por causa de la Humanidad, de la Civilización y del Derecho universal, á despecho del antiguo concepto de la soberanía nacional y de las facultades y jurisdicción de los poderes

particulares; el único fundamento, repito, del *bill* quita toda autoridad á lo que, por su cuenta y cancelizan hoy los Estados Unidos en Cuba y determinación de que la violencia hecha á la soberanía no intervenida sea estimada, patrocinada y resuelta concierto de los grandes pueblos, en tanto llega á la constitución del gran Consejo arfotónico ó Par-inter-nacional, que está en el deseo de todos los tray estadistas de cierta altura y que se señala como los probables éxitos del siglo XX.

a situación, apenas se comprende la presente acti-a Potencias europeas ante el conflicto hispano-ame-7 menos aún, después de haber iniciado una gestión uedado en el aire y que no faltará quien califique l protesta de una positiva impotencia.

bservación se complicaría si resultara cierto lo que mprenderse del incompleto *Libro Rojo* publicado bierno español, respecto á la acogida dispensada biernos europeos á sus denuncias y protestas con-rocedimientos de los Estados Unidos.—Porque de o resulta como muy probable una gran frialdad de Inglaterra, frialdad que pudiera llegar á im-postraciones más simpáticas del lado de los de-ernos europeos y á circunscribir el conflicto ó la into menos que imposible, de España con los Esta-los, allende el Atlántico ó en los remotos te-de Filipinas.

co el caso es nuevo. Bien conocidas son las dificult-ecientemente ha opuesto Alemania á una acción a de Francia, Inglaterra y Rusia en favor de la Grecia, en su última guerra con Turquía, por la de Creta.

. lo sospechado fuera un hecho positivo, habría que rlo con otros particulares que, á primera vista, pue- e desapercibidos: como, por ejemplo, el término del onflicto de Inglaterra con los Estados Unidos por Venezuela, ó la preocupación del Gobierno britá-rtender el Imperio de la Gran Bretaña, por medio na manera de su reforma colonial, patrocinada por ain y aun por Rosebery, y de asegurar su superio-nte á peligros como los entrañados en sus ahora fre-ramientos con Francia, Rusia y Alemania, por so activo de todas las fuerzas de la raza sajona.

Por tanto, se trata de algo más transcendental que el egoísmo de las Potencias europeas. El mantenimiento de la inacción de éstas durante la guerra, podría conducir á la renuncia de toda intervención para fijar el término del luctuoso conflicto y para la celebración de la paz, dejando que esto suceda de modo y manera perfectamente opuestos á todo lo que ha sido práctica en casos análogos y lo que pueda interesar á la libertad, el equilibrio y el progreso del Mundo.

Quizá no vean esto tan claro aquellos que en el curso de estos últimos años han dedicado todos sus esfuerzos á predicar el aislamiento internacional de España, de cuyas resultas son la soledad en que ahora nos encontramos en una empresa verdaderamente colosal y la reducción de la política española á menudencias que la dan el carácter de una política puramente doméstica y cortan el vuelo á los pensadores y estadistas de este pueblo caracterizado en la Historia por ser la patria de los precursores del Derecho internacional. Nadie al oír aquellas exageradas predicciones de la indiferencia ó la reserva á todo trance, frente al desenvolvimiento de la política general europea, nadie podría creer que España fué el escenario donde se dieron hechos tan trascendentales como la lucha del poder romano con el cartaginés, la detención de la ola árabe que venía sobre Europa, la iniciación del descubrimiento y la colonización de América, la contienda de los Borbones y los Austrias y la ruina del primer Imperio napoleónico (1).

Es muy fácil que con la propaganda del aislamiento se combinen furiosas protestas contra el egoísmo europeo y jactanciosas esperanzas de que nuestra incomparable bravura dé al traste con todo el poder anglo-americano. Yo he oído en alguna parte que, en el momento de la paz, convendría á España desconfiar de la acción europea, que nos perjudicó en Marruecos (?) y que serviría tan sólo para cobrar el corretaje...!

Todo eso me parece un puro dislate, cuyos detalles no tengo para qué discutir ahora, porque no veo inmediata la hora de la paz, aun cuando yo soy de los que creen que de-

(1) Véase mi conferencia *Introducción al estudio de las Relaciones exteriores de España* (Curso superior del Ateneo de Madrid). Un foll. Madrid, 1897.

demos desearla mucho y por modo positivo. Además no me presto á pensar que las Potencias europeas se resignen á una completa inacción durante y después de esta guerra.

De ello hablo para sacar la conveniente lección respecto del porvenir; para señalar lo sucedido y lo que quizá se prepara, como un nuevo y decisivo argumento en favor de mi tesis de muchos años de que «es indispensable para España, á pesar de su Pirineo y de sus costas y de su posición geográfica al extremo occidental de Europa, vivir la vida internacional, sacando de ella medios para la solución de muchos de sus graves problemas, nacidos quizá de la política contraria, ó cuando menos fortalecidos y agraudados por ésta y por un mal entendido patriotismo».

También importa mucho combatir aquí enérgicamente el supuesto (ya desarado en un cercano debate parlamentario, por hombres prominentes del partido conservador español, y tal vez compartido por algunos otros políticos de distinta significación), de que España no tiene en la guerra actual otro interés, que el de un punto de honor, y que, por tanto, tenemos delante una guerra de sólo dos naciones y de un carácter particular ordinario (1).

No creo eso, y por lo dicho ya se puede comprender la gran fuerza y el fundamento sólido de mi convicción contraria. La guerra actual hispano-americana es de un alto y genérico interés internacional, y en ella representa España mucho, muchísimo más que el reducido interés de poseer las Antillas y las Filipinas; mucho, muchísimo más que su aspiración legítima, pero apenas comprendida por la casi totalidad de nuestros actuales hombres políticos, á ser una *gran personalidad* en el mundo contemporáneo, mediante un cambio profundo en su manera de ser y en sus relaciones coloniales é internacionales.

Con ser todo esto importante, palidece ante los intereses generales del Derecho Internacional, seriamente comprometidos del modo que antes he indicado, en la actual guerra, en la que corresponde á España la representación del mayor derecho y el progreso mayor en el orden total

(1) Véase mi discurso parlamentario de 10 de Mayo de 1898, contestando al Sr. D. Francisco Silvela.—*La Cuestión de Ultramar*.—1 vol. 4.º Madrid. 1900.

opinión pública en todo el Mundo, á la manera con que los Estados Unidos lo hicieron contra Inglaterra, en la época del conflicto del Alabama, y como los pueblos helénicos y danubianos lo han realizado repetidas veces para recabar el apoyo de los Gobiernos europeos contra el poder avasallador del turco.

Porque no creo pecar de humilde ni de poco patriota, si reconozco, una vez más, que la actual lucha de España con los Estados Unidos, á más de mil quinientas leguas de las plazas españolas y utilizando aquéllos el apoyo de los insurrectos cubanos y filipinos, es una contienda por todo extremo desigual. No sé yo de otra que se pueda comparar con ella, dentro de la Historia moderna.

Tampoco estimo que peca al afirmar que el compromiso de España en esta contienda es luchar bravamente, para dar tiempo á que reflexionen las grandes Potencias, y se decidan á tomar la parte activa que les corresponde por razones de Humanidad y en vista del interés del Concierto internacional.

Pensando en esto, comprendo con dificultad la excesiva circunspección del Gobierno español.

Antes he aludido á la gravedad excepcional que adquiere esta cuestión, por aparecer ahora representando la violencia y el retroceso (cualesquiera que sean los pretextos invocados) un pueblo de los títulos y las condiciones de la gran República norteamericana.

Aun dejando á un lado el valor de las instituciones políticas y el sentido social de esta Nación, obra predilecta del siglo que ahora agoniza, basta, para abonar la indicación antes hecha, la más lijera consideración de las aportaciones del pueblo norteamericano, al desarrollo del Derecho Internacional (1).

El mero hecho de la independencia de ese pueblo, y su aparición, como nación soberana, en el concierto político del Mundo, afirmó la libertad de los mares contra la vieja teoría británica del *mare clausum*; destruyó el antiguo sistema colonial, determinando las primeras reformas expansivas del Canadá, y ensanchó el círculo de las personali-

(1) Véase mi Conferencia sobre la *Representación é Influencia de la República de los Estados Unidos en el Derecho Internacional*.—1 voll. Madrid 1890.

dades internacionales, reducido hasta entonces al círculo europeo y cristiano.

La consagración del mar libre trascendió luego á la navegación de los ríos Missisipi, San Lorenzo y Río Grande del Norte, mediante los tratados celebrados por los Estados Unidos con España en 1795, con Inglaterra en 1783, 1854 y 1861 y con Méjico en 1853. El mismo principio triunfa en el tratado de Washington, que los Estados Unidos conciertan con Inglaterra en 1842, contra el derecho de visita que se había abrogado esta última, con motivo del tráfico de esclavos africanos. Por razones análogas, y merced á la iniciativa del Gobierno norteamericano, en 1857 pudo firmarse—en Copenhague—el tratado por el cual quedó asegurada la libertad de la navegación de los estrechos del Sund y los Belts, con una indemnización á Dinamarca, de 30 y medio millones de rigedalers. Y rindiendo culto á los mismos principios y á otras consideraciones de política palpitante, los Estados Unidos lograron que con ellos conviviera Inglaterra, en 1850, el libre tránsito del proyectado istmo de Panamá y de cualquier otra comunicación interoceánica en la América Central; concierto ratificado por otros tratados hechos por el Gobierno de Washington con los de Honduras en 1864 y Nicaragua en 1869 y que en mucha parte sirvieron de modelo para la neutralización del canal de Suez en 1885.

La adhesión de la naciente República norteamericana en 1782, 83 y 85, por virtud de sus tratados con los Países Bajos, Suecia y Prusia respectivamente (y aun antes por su Ordenanza de 1781) á los principios de la Declaración armada de 1780, dió á ésta un gran alcance, luego fortalecido por la actitud circunspecta (bien que muy discutida) de los Estados Unidos, frente á la guerra anglo francesa de 1784 y por la famosa acta de *Non intercourse* de 1809, ahora vanamente invocada por el Gobierno español para evitar que en territorio norteamericano se preparasen las expediciones sobre Cuba.

El tratado celebrado por los Estados Unidos con Prusia en 1785,—con sus admirables y entonces peregrinas declaraciones en favor de las mujeres, los niños, los trabajadores, los mercaderes y en general los no combatientes en medio de la guerra, así como en obsequio de los prisioneros hechos en esta,—constituye un avance extraordinario en el sentido de la justicia y la humanidad; á cuyo mérito hay que

añadir el extraordinario del Reglamento para los ejércitos en campaña redactado por el ilustre jurisconsulto Lieber y promulgado por el ministro de la Guerra Mr. Stanton, durante la lucha de los confederados con los federales de la América del Norte; lo mismo que la protesta que el Gobierno norteamericano hizo en 1856, al negarse á suscribir los acuerdos del Congreso de París respecto del corso (ya exoracado por el generoso Franklin, que trató inútilmente de establecer su condenación en el tratado con Inglaterra de 1783), á no ser que las grandes Naciones que lo rechazaban convinieran en consagrar al propio tiempo la libertad absoluta de la mercancía enemiga que no fuera contrabando de guerra, y aun la de los barcos enemigos dedicados exclusivamente al comercio.

Pero todavía más importante que esto último, es lo que se refiere al famoso Mensaje del Presidente Monroe de 1823 y á la constitución del tribunal de arbitraje de Ginebra de 1871.

La interpretación abusiva que se ha dado á la política y á las fórmulas del Presidente Monroe, sobre todo á partir de 1850, no puede ser bastante para que se niegue el alto sentido y el valor jurídico de la transcendental protesta de 1823, en favor de la independencia y la libertad de los pueblos y contra las pretensiones arbitrarias y reaccionarias de la Santa Alianza europea, en cuya vista y por cuya razón alzó su voz el ilustre Monroe.

Si aquella valiente declaración no hubiera producido otro efecto que la oposición viril y afortunada del Presidente Johnson á la intervención europea y á la violencia napoleónica en Méjico, hacia 1865, ya merecería el aplauso de todos los hombres amantes de la justicia y de la dignidad y la libertad de los pueblos.

De otra parte, es sabido que las decisiones del arbitraje de Ginebra fueron la juiciosa y recta aplicación de las tres reglas de neutralidad consagradas por el art. 6.º del tratado de Washington de 1871, que representaba una de las últimas notas la serie de los progresos del Derecho Internacional contemporáneo.

Aun los Estados Unidos de Norte América pueden aportar otras alegaciones en favor de su alta representación en este orden jurídico. Ellos, como pocos, realizaron protestas eficaces contra el exclusivismo nacional y en favor de la solidaridad de los pueblos. Tal es el verdadero sentido de las

gestiones que, con éxito satisfactorio americano para conseguir que el Tratado de Kanagawa, en 1854, ampliase al camino, á todos los extranjeros) la cedida á Inglaterra en 1852.

Paréceme que lo que acabo de decir no solo de la imparcialidad con este estudio, sino de la positiva, y mirado siempre los actos justos y la República americana.

No ha obstado ni podía obstar el conocimiento de los grandes pecados de la República antes del atentado de esa fecha en su historia. La sanción de los agravios de que fueron víctimas los indios, la agresión del prohibicionismo mercantil, las manchas de la vida norteamericana.

Pero hay que convenir en que es terriblemente por aquel país, así como siempre espíritus generosos, almas sencillas, patriotas esclarecidos que no miran briosamente tales excesos y todo la impopularidad y á veces la mala postre, con eficacia al prestigio porvenir de este puebl'o, cuyas injurias eran estimadas por sus adversarios como decisivo contra la democracia.

Y hay que añadir que al fin ha triunfado la causa de Derecho, levantados errores y con violencias que llegan á los intereses, el espíritu de esa democracia no peligro por los eclipses que la justicia en algunos de los períodos de la historia norteamericana.

La desinteresada y justa consideración á mirar con particular atención hoy por el Gobierno de los Estados á todas las hermosas y fecundas tendencias y también fuera del sentido novísimo moderno. Es decir, primero, frente á la alta representación política y por cuya virtud éste ha podido

caídas y redimir enormes culpas; y, segundo, fuera del medio natural y adecuado de aquella sociedad, apenas comprensible, renegando de su pasado, para convertirse, desvanecida, en servidora entusiasta de la ambición, la soberbia y la tiranía.

Tampoco ha llegado la hora del juicio definitivo. Pero sí es el momento de señalar los peligros que arrostra la gran República al sostener una guerra que decora con el título de vengadora de la civilización cristiana y protectora de la libertad de Cuba.

El porvenir es incierto; mas bien se puede aventurar, que de no rectificarse los términos actuales del problema, esa República, vencedora ó vencida, apartada del concierto internacional y en la desigual lucha que ahora sostiene, ofrecerá grandes motivos para la alarma y el dolor de los que en su alta representación y sus deslumbrantes progresos han puesto mucha confianza, en bien de la Humanidad.

Aun en el caso más ventajoso para los Estados Unidos de América, sería difícil prescindir del recuerdo de los grandes peligros que aquella República corrió después de la guerra con Méjico y por el crecimiento de la influencia filibustera. El militarismo y la ambición territorial son dos amenazas constantes á la solidez de la República americana. Claro es que la expulsión de España de América sería el libre paso para la invasión de la América latina, y quién sabe si un excitante para prescindir de las recomendaciones del testamento de Washington, entrando el Gobierno de los Estados Unidos en las luchas de la Europa armada, por la puerta de una desatentada pero desvanecedora expansión colonial.

Pero vencidos ó simplemente desprestigiados los Estados Unidos en el empeño militar de ahora... ¡qué mayor daño para la causa de la democracia contemporánea!

Hay, pues, que buscar solución á este conflicto, que, por lo dicho, veo desde punto más alto de lo que me correspondería si aquí hablase sólo como un español.

Por fortuna, ahora los intereses del Derecho y de la civilización corresponden admirablemente con los de mi propio país.

Por tanto, insisto en creer que hay que buscar la solución de este drama en la acción decidida del Concierto internacional.

la tremenda que sostenemos con un coloso como los Estados Unidos de América, lo llevan nuestras clases pobres, sometidas á la división de la sociedad española en dos grupos; el uno, que tranquilo y disfrutando de las comodidades de un hogar bien dispuesto y acondicionado, *decreta* la guerra, y de otro que la sostiene á miles de leguas de su familia y en medio de toda suerte de privaciones.

Pero tampoco ahora y en este terreno, temo las preven- ciones del valgo, por enfatuado que se presente. Hay que decir la verdad, como la he dicho al negar las supuestas facilidades de la guerra con los Estados Unidos, y al expo- ner las condiciones y los recursos de este pueblo, cuando aquí era muy general la propensión á rebajarlo (1).

Y es necesario hablar de este modo, por lo mismo que yo no compartí, ni he compartido nunca, la opinión de los que, por lo bajo, dicen que de ninguna suerte debía España haber atendido las provocaciones norteamericanas, y que al bill de 18 de Abril de 1898, debiéramos haber contestado con algo así como el abandono de Cuba. Todo esto implica un desco- nocimiento profundo de la situación de las Antillas españolas, de los compromisos de nuestro Gobierno, de los medios positivos de defensa de este, y de los deberes que el honor y el porvenir de España nos impone en esta tremenda crisis.

Por lo mismo hay que recordar que muchas de las em- presas trascendentales realizadas por España dentro del siglo que corre, se han llevado á efecto por algo más que el sólo y esclusivo esfuerzo de los españoles. Prescindo de la restauración del absolutismo, con el auxilio de nuestros clericales y apostólicos, mediante la intervención de los famo- sos *cien mil* hijos de San Luis en 1823. Quiero fijarme en he- chos más simpáticos y verdaderamente gloriosos: en la gue- rra de la independencia y en la primera guerra civil de 1833 á 1840. En la primera, es notorio que con la ban- dera española figuraron en los campos, la inglesa y la por- tuguesa. En la guerra civil, es bien sabido, que nos favo- reció la *cuádruple alianza* de 1834 y que á nuestras tropas liberales unieron sus valiosos esfuerzos las tropas lusitanas y las legiones francesas y británicas, contando con el apoyo decidido del Gobierno de Londres.

(1) Puede consultarse, sobre todo esto, mi libro titulado *La Repú- blica de los Estados Unidos de América*. — 1 vol., 8.º. — Madrid 1897.

cordancia, una actitud resuelta respecto del Gobierno de los Estados Unidos de América: y en fin, la circunstancia de que por una gestión hábil, vigorosa y bien orientada se puede identificar la causa particular y la pretensión concreta de España con uno de los mayores adelantos del Derecho Internacional público.

Si esto se realizara, España podría ufanarse de terminar el siglo XIX de un modo análogo á como lo comenzó; llevando la representación de un interés jurídico universal y asociando á su gestión y á su causa, la acción de los directores del Mundo Moderno y el sentido y las conveniencias de la sociedad jurídica contemporánea.

II

EL TRATADO DE PARÍS DE 1898

Después de escrito el anterior trabajo terminó la guerra de Cuba y se hizo el Tratado de paz que firmaron en París los plenipotenciarios españoles y norteamericanos, el 10 de Diciembre de 1898.

Sobre este deplorable hecho he hablado y escrito bastante en 1899 y 1900, contrastando mis perseverantes y calurosas protestas con el absoluto silencio de la prensa española (singularmente la madrileña) y de casi todos—podría decir todos—nuestros políticos. El Gobierno se ha desentendido de la cuestión.

Es probable que, andando el tiempo, las gentes comprendan que *era preciso hacer ahora algo*. Igual reconocimiento se ha hecho cuando nuestros últimos desastres ya no tenían remedio. ¡Y gracias si no se nos ataca á los que, en tiempo, hicimce cuanto nos fué dable y arrojando toda clase de peligros, para evitar esos desastres!

Entre los trabajos que, con motivo del Tratado de París, he hecho en estos últimos tiempos—y para algo más que para lamentar lo sucedido—se cuenta la Conferencia que sobre ese tema di en el Círculo de la Unión Mercantil de Madrid el 8 de Junio de 1899—la Conferencia que sobre *los últimos datos del Derecho internacional contemporáneo*, (Tratado de París—Conferencia de la paz del Haya—Guerra del Transvaal) di en la *Universidad de Oviedo*, en Noviembre de 1899—el Curso de *Derecho público contempo-*

ranco sobre los Tratados internacionales desde el de Viena de 1875 al de París de 1898, que acabo de dar en el *Ateneo de Madrid*—y el extenso artículo que he publicado sobre *Las colonias españolas* en el libro publicado á fines de Abril en París con el título de *L'Espagne*.

Señalo estos trabajos por la imposibilidad de tratar aquí la materia sobre que ellos versan. Esos estudios completan los que forman este volumen.

A ellos me refiero.

Séame, sin embargo, lícito reproducir aquí lo más sustancial de mi particular opinión sobre el Tratado de París, tal como la expresé en algunas de mis lecciones del *Ateneo de Madrid*.

Reproduzco el breve extracto publicado por el popular diario madrileño *La Correspondencia de España* y en varios periódicos de provincia), entre ellos, especialmente, *El Noroeste* de Gijón y *El Republicano* de Alicante), en Abril y Mayo de 1900.

POLÍTICA INTERNACIONAL

El tema de la Conferencia quinta dada por el Sr. Labra en el Ateneo sobre los grandes hechos de la vida internacional contemporánea, es la demostración *positiva* de que la causa de la reciente guerra de los Estados Unidos con España fué lo que hoy ya se llama el **EXPANSIONISMO AMERICANO**. Este reviste una trascendencia excepcional en el derecho público de los tiempos novísimos.

Las pruebas *negativas* de aquella tesis son las aducidas en la Conferencia anterior: las que niegan la razón y la certeza de los motivos que así el presidente Mac Kinley en su Mensaje, como sus ministros y agentes en sus comunicaciones diplomáticas, como el Congreso de Washington en su *bill* de 18 de Abril de 1898, consignaron para abonar la violenta agresión de los norteamericanos, prescindiendo en absoluto de la invitación hecha por dos veces por el Gobierno de España de someter el conflicto al arbitraje internacional y de la tímida recomendación de las grandes Potencias europeas y del Sumo Pontífice romano de excusar el medio de las armas.

El profesor del Ateneo insistió al comienzo de su Conferencia, en el gran interés de dar relieve á la especie de que no existía motivo racional, ni jurídico, y menos amparado por las prácticas contemporáneas, para una intervención internacional en Cuba; sobre todo, después de los decretos autonomistas de 28 de Noviembre de 1898, y máxime realizada del modo y con las pretensiones exclusivas y arrogantes de los Estados Unidos, que obraron, desdeñando el concurso de los Gobiernos europeos anunciado, con deplorable meticulosidad, por las gestiones que éstos hicieron, en Madrid y en Washington, para evitar la intrusión americana en el mar de las Antillas.

É interesa precisar esto, tanto para explicar bien el estado deprimente en que Europa quedó, y que ha contribuido no poco á lo que sucede ahora respecto del conflicto de Inglaterra y el Transvaal y lo que quizá se prepara, en plazo no lejano, en otra parte, como para rectificar la especie muy corrida en España hacia 1898, y aun en estos días, de que son cosas corrientes en el orden internacional contemporáneo, la condenación absoluta del principio de la intervención, aun por motivos de interés general, y la afirmación de la soberanía nacional, en el sentido de que cada Gobierno, dentro de sus límites jurisdiccionales, es dueño de hacer lo que bien le parece.

Por este error es fácil que un país abocado á la guerra civil, á la anarquía, á la dictadura ó á la teocracia, (aun á fines del siglo XIX) despierte en presencia de un extranjero interventor por causa, positiva ó supuesta, del interés general de la civilización, sin que contra tal violencia sirvan de nada los lamentos y las protestas más ó menos retóricas.

Por el mismo error ha sido en gran parte, dable la solución verdaderamente inverosímil de la cuestión de Cuba, sustraída, con evidente torpeza (cuando menos en los últimos momentos del conflicto hispano americano), al conocimiento y fallo de Concierito internacional, cuyo voto constituyó, desde 1823 á 1878 una de la más positivas garantías del dominio de España en el mar antillano.

Las pruebas *positivas* de la tesis que el Sr. Labra sostiene sobre estos particulares están en el texto del Tratado de París de 10 de Diciembre de 1898 y en lo que desde entonces á esta fecha viene sucediendo en Filipinas, Puerto Rico y Cuba.

Para examinar el Tratado de París principia el Sr. Labra por recoadar los términos del Mensaje presidencial de Mac-Kinley de 11 de Abril del 98 y sobre todo del *bill* que en 18 del mismo mes votó el Congreso norteamericano, y que fué el principio de la guerra.

Luego analiza los 17 artículos del Tratado, relacionándolos con el Protocolo de 12 de Agosto, conforme al cual se debía temer todo del triunfador arrogante y seguro de que nadie le iría á la mano.

Lo fundamental del Tratado de París consiste en lo siguiente:

I. La renuncia por parte de España á todo derecho de

soberanía y propiedad sobre Cuba, tomando sobre sí los Estados Unidos, mientras ocupen á Cuba, el cumplir «todas las obligaciones que por el hecho de esta ocupación impone el Derecho internacional para la protección de vidas y haciendas.» También los Estados Unidos convienen en algo más respecto de Cuba, en lo tocante á los derechos de los españoles que allí quedan; pero su compromiso se limita al tiempo de la ocupación. Después no están obligados á otra cosa que á recomendar al Gobierno cubano que acepte las condiciones que el americano establece sólo por el tiempo de su dominación.

II. La cesión por España á los Estados Unidos de las de Puerto Rico y demás que estaban bajo la soberanía de la Península en las Indias Occidentales, todas las islas Filipinas y la de Guan en las Marianas. Los Estados Unidos reservan á su Congreso, el determinar sobre los derechos civiles y la condición política de los naturales de los territorios cedidos por España á la República americana. Sin embargo, queda establecido, desde luego, que esos habitantes tendrán asegurado el libre ejercicio de su religión.

III. Los Estados Unidos excusan á España y toman sobre sí la responsabilidad de todas las reclamaciones pecuniarias que se hubieran producido por norteamericanos contra el Gobierno español, y se reservan discutir con los reclamantes el supuesto ó falso derecho de éstos. España hace lo propio respecto de las reclamaciones de los españoles contra el Gobierno de los Estados Unidos.

IV. Estos dan á España 20 millones de dollars, sin decir por qué, y España renuncia á todos los edificios, muelles, cuarteles, etc., etc., de que disfrutaba en Filipinas. Además, el Gobierno de los Estados Unidos trasladará á su costa á Europa á los soldados prisioneros de los americanos en Filipinas, y se comprometen á *gestionar* cerca de los insurrectos filipinos, la libertad de los prisioneros españoles hechos por los tagalos. Es decir, la casi totalidad de los prisioneros. España, desde luego, pondrá en libertad y repatriará á Filipinas, los prisioneros tagalos.

V. Los españoles *naturales de la Península, residentes* en los territorios abandonados ó cedidos por el Gobierno español, podrán permanecer en éstos, circulando en ellos libremente, disfrutando del derecho de propiedad de sus bienes, con el de disponer de ella y de sus productore, así co-

mo del derecho de ejercer su industria, conforme lo hagan los demás extranjeros. Mas para conservar el carácter de español el residente en aquellos países, tendrá que consignar expresamente su voluntad en un registro *ad hoc*, dentro de un año después del cambio de las ratificaciones del Tratado.

Además, los citados españoles podrán acudir á los tribunales ordinarios, utilizando en su defensa los mismos procedimientos de que se valgan los ciudadanos del territorio á que pertenezca el tribunal requerido.

VI. Asimismo se respetarán en Cuba, Puerto Rico y Filipinas los derechos de propiedad literaria, artística é industrial adquiridos por los españoles. Se permitirá la entrada libre en aquellos países de las obras españolas científicas, literarias y artísticas que no sean peligrosas para el orden público, sin pagar derechos de Aduana, por espacio de diez años. Los barcos y mercancías de España, entrarán, por término de diez años, en los puertos de Filipinas, en las mismas condiciones que los buques y mercancías de los Estados Unidos, y en el mismo plazo, los buques mercantes españoles disfrutarán del propio trato que los americanos en todo lo referente á los derechos de puerto.

VII. Por último, se establecen reglas para la sustanciación de los pleitos y las causas criminales que se ventaban ante los tribunales peninsulares y coloniales en el momento de hacerse la paz.

Fuera del Tratado han quedado la cuestión de la responsabilidad de las deudas ultramarinas, la devolución á legítimos y particulares dueños de las cantidades que éstos hubieran depositado, por fianza ó de modo parecido, en las cajas públicas coloniales, y la cuestión del *Maine*.

Llama el Sr. Labra la atención sobre la manera de establecerse en el Tratado el abandono de Cuba por España y la cesión de Puerto Rico y Filipinas á los Estados Unidos.

Los términos son de gran violencia. El americano tiene interés en que España aparezca *expulsada* de toda América, y que conste que esto se hace *por la sola fuerza norteamericana*. Esto quizá interesa más á Europa y Sur de América que á España. No hay necesidad de precisar su alcance internacional.

Por eso los plenipotenciarios americanos se negaron á debatir; amenazaren por dos veces (cuando se trató de la

deuda cubana y de la suerte de Filipinas) con retirarse si no se aceptaban sus imposiciones; declinaron por tres veces la referencia de las cuestiones debatidas en París á un tercero, técnico ó árbitro; impusieron la forma escueta del abandono y hasta cuidaron de no explicar la adquisición de Puerto Rico como indemnización de guerra y en pago de los 20 millones de pesos á que se refiere el art. 3.º del Tratado.

Después, el profesor del Ateneo, hace notar como los Estados Unidos prescindieron por completo del *plebiscito* en las colonias españolas, negando, además, á los naturales de aquellos países, el derecho de optar por la nacionalidad española ó americana. Y tratándose de la suerte de esos antiguos españoles, se limitaron á establecer en el art. 9 «que los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios cedidos á los Estados Unidos, se determinarían por el Congreso.» Respecto de Cuba (como ya se ha dicho y conviene mucho subrayar), el artículo 1.º dispone «que será ocupada por los Estados Unidos, y mientras dura su ocupación, ellos tomarán sobre sí y cumplirán las obligaciones que por el hecho de ocuparlas les impone el Derecho internacional para la protección de vidas y haciendas.» Ni más ni menos. Los dos artículos, 1.º y 9.º, del Tratado, entrañan gravísimas cuestiones de Derecho internacional.

Por lo pronto resulta que Filipinas es víctima de la *conquista* y Puerto Rico se adquiere por las mismas teorías de los viejos *reinos patrimoniales*. La voluntad de los pueblos resulta desconocida por la gran República. Luego el estado de Cuba es de una monstruosa originalidad, porque ni forma parte de los Estados Unidos, ni es Estado soberano, ni vive bajo un protectorado. Todo allí es arbitrario. Todo á merced absoluta del interventor que en el bill de '18 de Abril de 1898 estableció que el Gobierno norteamericano entregará la dirección de la grande Antilla á los cubanos, cuando la isla esté pacificada, sin duda al modo que aquel Gobierno entienda.

La negativa del derecho de opción, que solo se reserva á los peninsulares residentes en Ultramar, hace injustificados los cargos que en la Península se dirigen á los cubanos y portorriqueños que viviendo en Cuba, no mantienen su carácter de españoles. El Tratado de París se lo prohíbe terminantemente. Y es de advertir que el Gobierno español se ex-

ausó absolutamente de consultar á aquellos españoles y á sus representantes en las Cortes nacionales, respecto de todas estas cuestiones, siendo así que consultó á todos los exgobernadores de nuestras colonias, á los capitanes generales y almirantes y á los jefes de partido y de todos los grupos parlamentarios, con excepción de los ultramarinos, autonomistas y conservadores. El hecho es de lo más isóbito que puede imaginarse, y hay que relacionarlo con el hecho análogo de haber prescindido totalmente el Gobierno de Madrid de la menor consulta sobre el particular, á los gobiernos locales y autonomistas de Puerto Rico y Cuba.

Además, la fórmula empleada en el Tratado dejó dudoso que fueran españoles los canarios y baleares residentes en Cuba, y si los cubanos de nacimiento residentes fuera de la isla continúan ó no siendo españoles. Este problema lo ha resuelto recientemente el Gobierno de Cuba diciendo que son cubanos todos los nacidos en la Isla, residan ó no en ella.

Por último, el Sr. Labra señaló la verdadera expoliación que constituye el hecho de haber excluido totalmente del Tratado de París el reconocimiento de las deudas coloniales por parte de los Estados Unidos. El caso es único en la Historia contemporánea. De esta suerte España cargó con 4.000 millones de pesetas, según cuenta de 31 de Diciembre de 1898. A esta pérdida hay que añadir la más sensible de 37.506 soldados y marinos muertos, y un total de bajas, entre muertos, heridos y prisioneros, de 84.220. Pero todavía es peor el estado de ánimo que todo esto ha producido, y que hay que rectificar por actos viriles, persuadidos de que es posible la reconstrucción nacional.

Como se ve, nada de lo que contiene el tratado de París tiene que ver con las razones atribuidas por los Estados Unidos á la guerra. Es decir, con el superior interés de la humanidad y la causa de la civilización. Hay en él un lujo de arrogancia y de propósito de humillar á España, seguramente por algo más que por mera antipatía á este país, con el que el presidente Mac-Kinley afirma que los americanos no tenían roce alguno sangriento. En ese Tratado no se establece la menor garantía del derecho y las libertades de las Antillas y las Filipinas, entregadas al arbitrio del Gobierno americano. Ni remotamente se pone límite á la ocupación de Cuba, más incondicional que la de Egipto por los ingleses.

Pero después hay que ver cómo en la práctica entienden y practican ese originalísimo Tratado los Estados Unidos, en menoscabo de su gran prestigio democrático, quizá de la solidez de su gran imperio y de seguro contra las recomendaciones de los *Padres* de la Revolución y la Constitución de Norte América.

2

Reanudando el Sr. Labra en el Ateneo sus conferencias semanales interrumpidas por las últimas fiestas, comenzó por recordar, primero, sus afirmaciones respecto del Tratado de París de Diciembre de 1898, que contradijo abiertamente principios tenidos hoy por incontestables en el Derecho público internacional, y segundo, alguno de los conceptos consignados, tanto por el presidente Mac Kinley, como por el Congreso de los Estados Unidos en sus declaraciones de mediados de Abril de 1898 para definir, razonar y justificar el atropello de la soberanía española y la intervención americana en Cuba.

Por el referido Tratado quedan sancionados la imposición de la fuerza sobre el arbitraje internacional; el derecho de conquista en Filipinas; la adquisición de Puerto Rico como indemnización de guerra y dentro de la teoría de los antiguos reinos patrimoniales; la creación en Cuba de una entidad política que ni es Estado independiente, ni colonia, ni Estado federal, ni país protegido: la excusa absoluta del plebiscito como medio de determinar la situación futura de las antiguas colonias españolas; la negativa absoluta al derecho de los españoles nacidos en Cuba, Puerto Rico y Filipinas á optar por la nacionalidad originaria ó por la impuesta por el hecho de la guerra, y la declinación por parte de los Estados Unidos de toda responsabilidad en punto á las deudas y compromisos contraídos por la nación vencida, con motivo ó por razón de los países anexados á la República americana ó arrancados al imperio español.

Esto en la relación del Tratado de París con el Derecho internacional público. Respecto de la eficacia de ese Tratado en lo relativo á los fines perseguidos por los norteamericanos, hay que considerar ante todo las declaraciones oficiales de su Gobierno al iniciar la guerra y que comprendían los siguientes extremos:

1. Cuba era y debía ser un pueblo libre é independiente.
- 2. Los Estados Unidos no querían el dominio de Cuba.—
3. El Gobierno norteamericano entregaría la dirección de Cuba á los cubanos tan pronto como estuviere pacificada la isla.

Sin embargo de esto, en el Tratado de París, el Gobierno de Washington no se obliga, respecto á la grande Antilla, á otra cosa que á la práctica de los principios generales del Derecho de gentes. Y respecto de Filipinas y Puerto Rico, el mismo Tratado dice que los derechos civiles y políticos de portorriqueños y filipinos serán los que *quiera concederles* el Congreso americano, donde, ni Puerto Rico ni Filipinas tienen representantes.

Aumenta la dureza de estas afirmaciones la manera con que el Gobierno norteamericano las interpreta prácticamente. En Filipinas subsiste la guerra de los indígenas contra los invasores, á los cuales aquéllos acusan de deslealtad en punto al cumplimiento del convenio en cuya virtud los tagalos prestaron su concurso á las armas norteamericanas. Estas, eran impotentes, por sí solas, para concluir con el poder de España en aquellos países. Con tal motivo se recuerda, que, para un efecto análogo, fueron impotentes las armas inglesas, cuando, en 1762, se apoderaron de la plaza de Manila, reconquistada á los dos años, por los filipinos y españoles que dirigió el insigne Anda y Salazar.

La situación de Puerto Rico apenas profundamente. La propaganda de los Estados Unidos ha deshonrado á aquel país, al mismo tiempo que heria el prestigio de España colonizadora, divulgando la especie de que todos los habitantes de Puerto Rico, sin distinción de procedencias, clases y posiciones y apesar de la conocida historia de la Isla, y de sus antiguas y recientes protestas de fervorosa adhesión á España, habían aclamado al invasor.

Ya dice bastante contra esta tesis el doble hecho de la resistencia norteamericana al plebiscito y de haberse restringido después el sufragio para las elecciones municipales. Aparte del adelanto de la legislación civil de los Estados de

la República que consienten la adquisición de la propiedad territorial sólo al ciudadano norteamericano.

En Puerto Rico hoy rige la dictadura militar que se impone á los organismos locales como en los tiempos más duros del viejo régimen colonial y mediante la derogación implícita ó explícita, pero completa, de los decretos españoles de Noviembre de 1897, en vano invocados ahora por los puertorriqueños.

Se ha establecido allí el fuero atractivo de la jurisdicción de guerra para los delitos en que sea parte un americano. Las mercancías puertorriqueñas pagan fuertes derechos en la Metrópoli norteamericana, que defiende sus propios azúcares de caña y remolacha, aun más que defendió los suyos España. Y como que el arancel de la Isla es alto para todos los productos no americanos, resultaría difícilísima la exportación colonial, por falta de correspondencia de mercados, si Puerto Rico no viera reducida cada vez más su producción.

En el orden político no hay medio de imaginar el porvenir de aquella isla. Lo más probable es que no sea Estado federal, ni territorio americano. Quizá sí una colonia militar completamente fuera de la Constitución y de las tradiciones norteamericanas, pero de importancia estratégica en el mar de las Antillas, dominando el golfo de Méjico en los canales de Panamá y Nicaragua. Los informes que recientemente ha dado una de las primeras autoridades militares de aquella isla al comité senatorial de Washington han sido opuestos á la aptitud política y al derecho de los puertorriqueños para gozar de las mismas franquicias que los ciudadanos de Norte América.

Es preciso leer esto en los periódicos de los Estados Unidos para comprender tamaño disparate y tan escandalosa injuria á Puerto Rico, de una historia brillante, que en vano intentarán borrar sus actuales conquistadores.—Díganlo el maravilloso éxito de las grandes reformas expansivas de las Cortes de Cádiz y del Intendente Ramírez desde 1811 á 1816; y la manera de haber disfrutado aquel país de las libertades públicas desde 1820 á 23; y la protesta y petición que los representantes de los Ayuntamientos puertorriqueños hicieron al Gobierno español en 1865 para que antes que las reformas políticas y económicas para los blancos, se hiciera allí la abolición inmediata y simultánea de la esclavitud de los negros; y el modo y manera verdadera-

mente excepcionales con que allí se hizo la abolición de la esclavitud en 1873; y la virilidad con que por espacio de más de veinticinco años luchó contra la corrupción electoral y el procedimiento de los candidatos cuneros y oficiales enviando al Parlamento español representantes independientes que, sin desmayar, un solo día, pidieron enérgicamente la identidad de derechos civiles y políticos de los españoles de uno y otro hemisferio y un régimen local expansivo y autonomista para la colonia; y la cordura y el éxito con que los puertorriqueños ejercitaron todos los derechos que le reconoció la República española por la libertad á la pequeña Antilla del título 1.º de la Constitución del 1869 y la ley municipal y provincial de 1870.—Además Puerto Rico tenía en 1898 una población de cerca de un millón de almas ó sea 106 por kilómetro cuadrado; un movimiento comercial de 20 millones de duros y un presupuesto general de cinco y medio millones de pesos, con los que se pagaban los gastos generales de la isla, dejando un superávit de cerca de un millón de duros.

Ya costaría probar que muchos de los Estados de la República norteamericana tienen estos títulos para gozar de los beneficios de la Constitución de 1789 y de sus quince enmiendas. Seguramente no los tenían Texas, ni Nueva Méjico ni California cuando en 1845 y 1850 entraron á formar parte de la Unión Americana. Mucho menos los tenían Montana y Dakota en 1889, Wyoming é Idaho en 1870. Y no habrá medio de probar que Puerto Rico es inferior hoy mismo á la Florida que es Estado desde 1845, y á Colorado que lo es desde 1876. La injusticia en este punto llega á lo incalificable!

Además un ciclón ha destrozado buena parte de las poblaciones y la mayor parte de las haciendas de aquel país. La miseria ha entrado de tal modo en la desventurada isla, que el gobierno de Washington ha acordado en estos días que las cantidades pagadas por los frutos puertorriqueños en las aduanas federales se dediquen á aliviar la miseria de Puerto Rico.

En Cuba la cuestión ofrece otras proporciones y entraña un grave problema de porvenir inmediato. También allí impera el gobierno militar. Para dentro de una semana, están anunciadas elecciones municipales, primera consulta que se hace al voto de Cuba; más para ello se ha abolido el sufragio universal. Junto al Gobernador general militar

existe un Consejo de Secretarios cubanos que debían ocuparse de todas las cuestiones de carácter civil. Estos Secretarios son emovibles y de libérrima elección de Gobernador, sin más facultades que las de la propuesta, que el Gobernador atiende ó no, sin razonar su resolución, investido como se halla de plenas facultades, que ya ha usado con todo desahogo bien para modificar la legislación política procesal, penal y aun civil, armonizándola con la norteamericana, bien para la designación de funcionarios públicos. Los Secretarios ni firman los decretos, que suscribe el General Jefe de Estado Mayor del Gobierno general de la Isla.

En estos últimos tiempos se ha acentuado la tendencia del Gobierno general de reducir la competencia de los Secretarios, excluidos en absoluto, desde el principio, del conocimiento de los negocios de guerra y aun de los financieros relacionados con la Aduana, cuyos productos totales ingresan en el Tesoro de Washington. Este, por ahora, paga los gastos generales de los municipios, que en cambio, no pueden arbitrar fondos.

La tendencia centralizadora antes señalada produce el doble efecto de ensanchar la acción personal del Gobernador y de referir buen golpe de negocios cubanos al conocimiento directo y la lejana resolución del Gobierno de Washington, donde se ha venido á crear una especie de ministerio ú oficina más ó menos irregular, de negocios coloniales que quizá, con el tiempo, tome el carácter de las famosas Comisarias de la agricultura, del trabajo, de la educación y de los indios, que complementan la acción regular de la administración norteamericana.

Por estos medios el Gobierno general de Cuba no solo ha introducido reformas trascendentales en la organización judicial cubana y en su derecho procesal, sino que ha constituido una especie de Corte correccional, cuyas atribuciones se condensan en la persona de su jefe, autoridad yankee que resuelve sin apelación, sin ley y por libérrimo juicio personal, las causas que se someten á su fallo.

Por lo mismo ha sido posible recientemente la intervención personal y pública del Gobernador general en un escandaloso proceso sobre abusos de aduanas, en cuya tramitación las autoridades judiciales quisieron proceder con la independencia funcional que garantizaban las leyes.

No hay que hablar de vida municipal ni provincial. Todo

está en manos de los presidentes ó jefes de las corporaciones, los cuales deben su nombramiento al Gobernador. Por decreto de éste se ha aplazado el pago de las deudas municipales. Realmente nada se hace hoy en Cuba, sino tolerado por el Gobierno militar. Las obras públicas se decretan y contratan en Washington.

Ahora se trata de una modificación profunda y sistemática de las leyes civil y procesal de la Gran Antilla, en vista de la legislación norteamericana. Para ello el Gobernador ha nombrado una reducida comisión de cubanos y norteamericanos encargados de proponer la reforma, que sin duda, aprobada por aquella autoridad, sin contar con ningún otro dato, formará pronto parte del nuevo orden jurídico de Cuba.

Se pecaría contra la verdad diciendo que todo cuanto ahora ocurre en la Gran Antilla es deplorable. Muchas de las disposiciones contenidas en los dos volúmenes publicados en 1889 con el título de *Civil Report of Major general J. R. Brook, military Governor of Cuba* son atendibles y hasta planeables.

Es falso que la inmoralidad administrativa haya aumentado: por el contrario, la renta de aduanas ha crecido á pesar de la variación poco satisfactoria del arancel. El orden público y la policía sanitaria de la Habana (objeto de especialísimo cuidado del Gobierno americano) se mantienen en condiciones de estima y progreso. El juego y la embriaguez se persiguen de modo eficaz. —Y hay que reconocer que las autoridades americanas se abstienen cuidadosamente de toda persecución personal por motivos políticos.

Esto ha influido mucho en el contenimiento de la protesta cubana contra la prolongación de la intervención del Gobierno de Norte América, por medio de una verdadera dictadura militar suavizada en los procedimientos.

Pero ya ahora la protesta toma gran viveza en la prensa y en la tribuna. El Gobierno de Washington acaba de enviar á Cuba á su ministro de la Guerra para que estudie la situación del país. También llegó después á la Habana el Comité senatorial que ha de proponer al Senado el término ó la continuación de lo existente en aquella Isla.

El Ministro y los Senadores tienen frases para todos, y su opinión personal definitiva resulta una verdadera incógnita.

Pero Mr. Mac-Kinley no dice palabra. En los Estados

Unidos existe una fuerte corriente política francamente favorable á la anexión de Cuba. Y el recuerdo de lo sucedido en Tejas hace cincuenta años, autoriza todos los temores de los patriotas cubanos. Sobre lo que no hay la menor divergencia en los Estados Unidos es en creer que solo á estos corresponde la facultad de fijar las condiciones y el término de la tutela en que vive Cuba.

Ocioso decir los peligros que esto entraña aun para la tranquilidad material y el porvenir moral y económico de la sociedad cubana, donde ya se van formando partidos que afirmando la independencia de la Isla, se diferencian solo respecto del modo de llegar á ella. Unos (el partido conservador) pretende el protectorado transitorio de los Estados Unidos: otros (entre ellos los más caracterizados soldados de la insurrección que determinó la intervención de Norte América) quieren la independencia. En tanto sólo vive la dictadura norte americana, á los dos años de evacuada la grande Antilla por las autoridades españolas.

Esto no habría sido posible si el problema de Cuba hubiera caído bajo la jurisdicción del Concierato internacional.

Yendo mal las cosas para España, lo probable es que se hubiera impuesto la solución dada al problema de Creta en 1869 y 1896. En último caso, eran precedentes para otra solución, desde luego, la neutralización de Bélgica en 1831, la de las islas Jónicas de 1863, la de Luxemburgo de 1862, y sobre todo la de Suiza, que data de los tratados de 1818. Es decir, todo aquello en que nadie pensó ni podía pensar en la Conferencia de París de 1898. Pero este es quizá el problema de mañana en América: de un mañana que ya casi amanece (1).

(1) Después de dicho esto, la prensa de Madrid ha dado ligera cuenta de la constitución del nuevo Gobierno de Puerto Rico. No es posible formar juicio por lo que dicen los cablegramas.

3

En la anterior conferencia del Ateneo, el Sr. Labra sostuvo que si la cuestión de Cuba hubiese sido sometida al Concierto internacional, aun en el caso de que la solución no correspondiera enteramente al derecho de España y á las conveniencias de la grande Antilla, lo probable es que el problema se hubiera resuelto de una de estas dos maneras.

Una, aquella con que se resolvió la cuestión de Creta (última fase del problema europeo oriental) en 1869 por la Conferencia de París; en 1878 y 1886 por los Congresos de Berlín y el pacto de Halepa; en 1896 por la carta votada por la Asamblea cretense patrocinada por las grandes Potencias cristianas, y en 1897 por el Tratado de Constantinopla.

La otra solución era la neutralización de la grande Antilla, bajo el patronato de las grandes naciones de Europa, de España, de los Estados Unidos de América y de las Repúblicas Sudamericanas, en vista de lo que se hizo respecto de Suiza en el Congreso de Viena de 1815. y de lo que después se ha hecho para la neutralización de Bélgica en 1831, de las islas Jónicas en 1863, del ducado de Luxemburgo de 1877 y del Estado libre del Congo en 1885.

Sobre este tema discurió el profesor del Ateneo en su conferencia del viernes último.

De las dos soluciones antes indicadas, la primera (*la autonomía cubana garantizada por el Concierto internacional*) era la que más correspondía al derecho de España—en el supuesto de que el éxito desgraciado de la guerra con los Estados Unidos no permitiera recabar el simple mantenimiento de la situación política creada por los decretos españoles de Noviembre de 1897.

Por aquella solución, todavía España habría podido mantener en el Nuevo Mundo, con el apoyo universal, la gloriosa bandera de los descubridores de América, arraigando en el mar de las Antillas las instituciones de 1897, con el sentido evolutivo de la gran colonización española, bajo la influencia internacional y dentro de las corrientes novisi-

mas colonizadoras. Porque en todo caso, pero principalmente en esta época de liquidación, conviene mucho advertir que no es justo estimar la colonización española por las desviaciones y corruptelas de los siglos xvii y xviii ó por la reacción y el anacronismo que se producen desde 1825 hasta época muy cercana, con el satisfactorio paréntesis del Gobierno de la República de 1873. Aquella colonización, que desafía el contraste con las demás empresas análogas de su época, tiene que estudiarse en los libros de nuestros colonistas Ustáriz, Alvarez Osorio, Martínez de la Masa y Campillo; en el sentido total de la famosa Recopilación de Indias de 1660, y señaladamente en la ley 2.^a, libro 1.^o del libro 1.^o —las 2, 8 y 13, tit. 2 del libro 2.^o—la 1.^a del tit. 17,—la 13, del tit. 1.^o y la 1.^a del tit. 26, la 30 del tit. 27 y la 22 del tit. 30 del libro 9.^o referentes al fin de la colonización, á la relación jurídica de los Reinos de América y Castilla, á la organización económica de América, á la reducción de los indios, á la vida local, municipal y regional de los nuevos Reinos y las garantías del español, originario ó reducido de los nuevos países, al tenor de lo que en la Metrópoli regía y lo que privaba en el Mundo culto en aquellos siglos. Después hay que tener en cuenta la admirable obra del Marqués de la Sonora, el primer Ministro Universal de Indias, de 1754 y los decretos de las Cortes de Cádiz, llevados á cumplido efecto, con éxito extraordinario é insuperable, así en Cuba como en Puerto Rico, por el Intendente Ramírez de Villaurrutia, desde 1812 á 1820.

España entonces puso, hasta donde era posible, por cima del interés material, el interés moral del empeño colonizador; consagró la acción directa del Estado para la civilización del Nuevo Mundo; afirmó por leyes la identidad de los derechos civiles y políticos de los españoles de uno y otro hemisferio, y proclamó la asimilación progresiva de los indios; y reconoció la nota local por medio de las Ordenanzas y compilación de las leyes originarias, por la extensión de los Ayuntamientos, y en fin, por la consagración de los Concilios provinciales y regionales á que se refieren las leyes que señalan el puesto preeminente que en las Cortes americanas correspondía á las ciudades de Méjico y el Cuzco, al modo que en la Península sucedía con Burgos y Toledo.

Sin duda sería un dislate pretender que á esta hora pudieran tener aplicación, ni siquiera en Filipinas, las viejas

leyes; pero su sentido comprensivo, educador y moral, depurado de las malezas y acarrees de los tiempos, merece hoy mismo todo género de respetos. El principal trabajo del colonista español habría de ser armonizar la obra de los tiempos pasados con las exigencias del presente y determinar la enérgica reforma de todo lo anticuado y anacrónico, con la convicción de que la mayor grandeza de España, en el curso de su brillante historia, ha correspondido á la identificación de este país con las ideas madres de la época, en la cual aquella grandeza se manifestó. Doble motivo para perseguir la intimidad de España con el progreso actual del mundo y la determinación de su nueva vida dentro del concierto internacional.

Para todo brindaban ocasiones, escenario y medios excepcionales, Cuba y Puerto Rico, en 1898. España podría haber realizado allí una admirable obra, no sólo en honor y provecho suyo, si que en beneficio de la paz de Europa y América, y del progreso general del Mundo.

Para ello tenía títulos sobrados, reconocidos de modo elocuente por el ministro de los Estados Unidos Mr. Seward, que hace cuarenta años la proclamaba como «una verdadera potencia americana»; precisamente en el período crítico de la intervención francesa en Méjico. De análogo modo se expresaban los secretarios del Gobierno de Washington, Mr. Everett y Mr. Olney, en sus famosas, características y transcendentales notas de 1852 y 1896 sobre el porvenir de Cuba y las relaciones de Europa y Norte América, con motivo de las colonias europeas del Nuevo Mundo.

Además, discretamente, era imposible prescindir de que pasan de 800.000 los españoles que hoy viven y trabajan en el continente americano, representando un factor esencial de los progresos de las Repúblicas latinas de América.

Por tanto, es casi inconcebible que de la última guerra haya salido España peor que Turquía de su lucha con la Europa contemporánea. Porque Turquía (á pesar de sus notorios y monstruosos pecados) en 1878 y en 1896 ha podido conservar á Creta, de ningún modo unida por vínculo étnico, político ó moral, á los dominadores de Constantinopla, meramente acampados en un extremo de la vieja Europa y tenidos universalmente por una positiva afrenta de la civilización moderna.

La otra solución (la de la *neutralización de Cuba* bajo un patronato europeo y americano) tenía un carácter interna-

cional de mayor gravedad y superior trascendencia. Como que por ella quedaba excluida toda pretensión exclusivista continental, en el mundo descubierto por Europa y cuya actual extraordinaria civilización hay que atribuir, tanto á ésta, como á los elementos propiamente americanos de diversa procedencia y distinto sentido, que constituyen la base presente de la sociedad trasatlántica. Y además, porque sobre el hecho de la *neutralización de Cuba* podría llegarse á la *neutralización de las Antillas todas*, gracias á razonadas concesiones de Francia, Inglaterra, Holanda y Dinamarca, que poseen en el Mar Caribe colonias más ó menos importantes, seriamente amenazadas por el expansionismo americano.

También podría pensarse que para esta solución eran antecedentes valiosos, de una parte, todo lo que Francia, Inglaterra y los mismos Estados Unidos han hecho desde 1825 á 1874, para garantizar la soberanía de España en Cuba y Puerto Rico frente á las pretensiones particulares, efectivas ó supuestas, de cada una de aquellas naciones, y por otro lado la actitud y disposición de las Repúblicas sudamericanas con relación á la actual guerra de Cuba y frente á las aspiraciones absorbentes de los Estados Unidos.

Aun en último término, podría haberse contado con la cooperación de cierta parte de la opinión pública de los mismos Estados Unidos; opinión rehecha contra la propaganda del jingoismo y los intereses de los expansionistas é imperialistas, mediante el influjo de muchos hombres rectos y prudentes de aquel país, y por efecto de una actitud resuelta de Europa y de Sud América contra las exageraciones de la política Monroe, bastardeada y locamente comprometida de cincuenta años á esta parte.

Abona esta creencia la importancia que en estos últimos días ha adquirido en aquella República la campaña de los antiexpansionistas que se inspiran, no sólo en razones de justicia, sino también en conveniencias de la política interior de la Federación, así como en las recomendaciones de Washington y de los fundadores ó Padres de la Unión americana.

La idea de la neutralidad perpetua de ciertos Estados, ha tomado mucha fuerza en estos últimos tiempos. En las Conferencias interparlamentarias del Haya, Bruselas y Budapesth de 1894, 95 y 96 respectivamente, logró los honores de una gran consideración. En la Conferencia de Bruselas

de 1897, volvió á plantearse esta solución con un carácter de gran generalidad que perjudicó á un acuerdo definitivo. Pero la insistencia de estos requerimientos al voto de los hombres doctos que constituyen esos Congresos (en los cuales están hoy representados más de 1.500 de los 8.000 miembros de los Parlamentos de todos los países europeos), bien demuestra que el empeño está saliendo de los límites de una generosa recomendación y de las nebulosas de un idealismo arrobador.

Claro es que cuando ahora se habla de la neutralización de Cuba, no se trata precisamente del problema discutido en las Conferencias interparlamentarias. El actual de Cuba (inquieta, susceptible, disgustada por la prolongación de la intervención norteamericana y quizá un tanto amenazadora con el ejemplo de la obstinada resistencia de los filipinos y las más ó menos veladas simpatías de algunos grupos políticos de los Estados Unidos) es más práctico, más próximo y corresponde inmediatamente á los Gobiernos, del modo y manera que sucedió en los casos de 1815, 1830, 1877 y otros antes citados.

El valor y la trascendencia de la *neutralización de Cuba* (y por ella, de la neutralización de todo el grupo antillano), puede calcularse teniendo en cuenta, no solo los datos anteriores sino la probabilidad de que por efecto de lo que ahora mismo está sucediendo en aquella isla, la incipiente protesta de Puerto Rico, la alarma de las Antillas próximas y la actitud equívoca de muchos gobiernos de Sud-América, ese problema se plantee al fin en el Nuevo Mundo, dentro de un período no muy largo. Pero seguramente se podría haber planteado y resuelto mejor, antes del Tratado de París de 1898.

Para que en aquella oportunidad se hubiese discutido bien y con efecto satisfactorio esta solución (ó la de equiparar Cuba á Creta, después de 1896) habría sido preciso, sin duda, que las grandes Potencias europeas se decidieran á afirmar su competencia en este negocio, ya por motivos generales jurídicos, ya en evitación de conflictos internacionales que quizá precipite y agrave el deplorable éxito del último Tratado de París, ya haciendo valer ante el Gobierno norteamericano el argumento de que á la acción colectiva de las naciones modernas, se ha debido, dentro del siglo que corre, la solución del problema oriental europeo, la anulación del exclusivismo japonés y chino y la distribu-

ción pacífica y la superior cultura del continente africano.

Y es notorio: 1.º que en la obra general europea respecto de Asia y Africa. han participado directa y eficazmente los americanos, y 2.º que si éstos no han hecho lo mismo en las cuestiones egipcia, griega y danubiana, débese, entre otros motivos, á que el Gobierno de la Casa Blanca no lo ha pretendido, manteniendo de tal modo el programa de Jorge Washington de abstenerse sistemáticamente y por propia conveniencia, de las complicaciones del viejo Continente. Así y todo, el Congreso de los Estados Unidos, á fines de 1896, acordó invitar á las Potencias europeas á tomar medidas contra Turquía, para el cumplimiento del Tratado de Berlín respecto de la Armenia, y si esta resolución no tuvo mayor alcance, fué porque no la secundó el presidente Cleveland.

Pero con ser todo esto exacto y merecer severa censura la conducta de Europa en 1898, hay que reconocer que el primer pecador en este orden de cosas fué el Gobierno español, por no determinar su gestión diplomática en este sentido, que era muy superior y de muchísima más trascendencia que el arbitraje internacional reducido á los términos en que el Gobierno de Madrid lo propuso por tres veces en las negociaciones de aquel año de triste memoria.

Sería injusto atribuir toda la responsabilidad de este error á los gobernantes españoles de 1898. Lo compartían todos los elementos políticos de España. La opinión pública lo hacía posible ó lo fomentaba. Nadie creía en la necesidad de que España tuviera una política internacional. Aun ahora mismo, después del tremendo desastre de 1898, apenas hay quien se ocupe de esta política. Son muchos los que aconsejan el antiguo aislamiento, aunque de otro modo y con otra forma. Nadie habla ya del Tratado de París, ni se cree que con su motivo el Gobierno español deba hacer algo y prepararse para el porvenir, en otra disposición que la de la mansedumbre.

La desdeñosa indiferencia del hidalgo arruinado, apartado de las gentes y envuelto en sus harapos y su arrogancia, seduce á muchos. Es popular la idea de la renuncia de las pocas colonias que nos quedan; y si á última hora se ha producido un pequeño movimiento de simpatía á los pueblos sudamericanos, con motivo de la presencia de los marinos argentinos en Barcelona y Cartagena, este movimiento no ha revestido más carácter que el de un desahogo afectuoso

y familiar, muy propio de los períodos tristes y de desgracia, pero sin aquellas condiciones reflexivas, de continuidad y eficacia que acusan la conciencia de un objetivo preciso, la estimación de una utilidad positiva y la determinación de un procedimiento bien relacionado con el fin que se persigue y con los medios de que se dispone.

Hay que insistir mucho en señalar y explicar las causas primeras de este fenómeno. Una de ellas es la positiva desconsideración que nuestros círculos políticos de toda especie tienen para los estudios de Política y Legislación comparadas y de Derecho Internacional. Luego está el apartamiento completo de nuestra opinión pública de todo cuanto ocurre ó se prepara más allá de nuestras fronteras; sin que contradiga este la pequeña debilidad de nuestros *extranjeros*, muy reducidos en número, y atentos solo á detalles del confort y de la moda. Por otra parte, influyen las vacilaciones y contradicciones de nuestros gobernantes, respecto de la representación, el papel, las necesidades y los medios de España, comprometida por esto á vivir bastante fuera del movimiento político y social contemporáneo y bajo la presión de una especie de política doméstica, cuya privanza llega á términos inverosímiles, coincidiendo con un gran quebranto de la fe en la virtualidad de las ideas y del amor á la propaganda que en otro tiempo caracterizaba á nuestros partidos avanzados y radicales.

Hace mucho tiempo que no hay en el Parlamento español ambiente para debates de carácter internacional. Privan allí todavía las viejas preocupaciones del *sigilo diplomático*, análogo al ponderado secreto del sumario, á la reserva del voto de los jueces y á la indiscutibilidad del expediente administrativo; cosas en que ya nadie cree.

La prensa tampoco se presta á dar relieve á las cuestiones exteriores. La meramente noticiera se atiene al incidente inesperado, que constituye un mero interés de curiosidad; la que se jacta de recoger y secundar el sentimiento público, no puede dar relieve á los asuntos que el público excusa ó entiende difícilmente; y la que aspirando erróneamente á sustituir al Parlamento y á los partidos políticos (á quienes con calor combate, careciendo de sus medios y sus responsabilidades) ha pretendido cambiar su carácter de discutidora é informadora, por el de directora, tampoco acierta á salir del círculo de los gustos tradicionales de nuestra política palpitante, y estima los problemas de Derecho inter-

nacional como materia exclusiva de las especialidades y tema solo de discusiones teóricas y especulativas.

De todo esto ofrece abundantísimas pruebas la triste y reciente historia de las guerras coloniales de España y del último conflicto de ésta con los Estados Unidos.

De aquí una situación grave, difícil, peligrosa, que han complicado recientemente la sorpresa producida por nuestros últimos desastres ultramarinos, la reacción determinada por la actitud entre displicente y compasiva de Europa respecto de la España vencida en Cavite y Santiago de Cuba, y en fin, y de modo muy especial, la limitación de nuestros horizontes por la pérdida de la casi totalidad de nuestro imperio colonial.

Pero ese mal tiene remedio, aunque éste no haya de ser la obra de un día ni el resultado de esfuerzos parciales y exclusivos. El secreto está en poner á la España de nuestro tiempo en la corriente de la política contemporánea y en el *medio intelectual y moral* europeo. Obra de reflexión, de mucho sentido y de vigorosa perseverancia, que pide el concurso de varios elementos de la sociedad española.

4

Al terminar el Sr. Labra sus conferencias del Ateneo ha hecho un resumen de éstas explicando por qué ha dado en el curso de este año tanta importancia al Tratado de París de Diciembre de 1898. Este Tratado, con las demostraciones prácticas de la manera de interpretarlo los Estados Unidos en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, constituye quizá el argumento más visible y concluyente contra los que en España creían ó creen que es posible vivir no sólo sin una política internacional, sino en un aislamiento excusado con pretextos de modestia y de prudencia, cuando no fundamentado en falsos y arrogantes supuestos respecto de los medios exclusivos de defensa, influencia y prestigio de nuestra Patria.

Pero todavía es más grave lo que aquel Tratado, conside-

rado en sus relaciones con la política general del Mundo, entraña para esta y particularmente para el porvenir de la nación española.

Porque no debe desconocerse que para evitar los grandes conflictos internacionales no basta la mera voluntad de un solo pueblo, y hay que recordar frecuentemente que las naciones, aun las de más esplendorosa historia, no concluyen sólo por su espíritu aventurero, sus acometimientos y sus agitaciones atáxicas, sino también por su pasividad y anemia que las reduce primero, á la insignificancia y luego, al papel de países protegidos y materia de compensaciones territoriales con que se satisfacen ó sortean las ambiciones de los poderosos y se procura artificialmente el llamado equilibrio internacional.

Ningún espíritu juicioso puede prescindir, en estos críticos instantes, de que el siglo XIX comenzó en España con los Tratados de San Ildefonso de 1800, de Amiens de 1802 y de Fontainebleau de 1807, que iniciaron el quebrantamiento del imperio colonial español con la pérdida de la Luisiana y la Trinidad y llegaron al reparto de la Península Ibérica entre el Rey de Etruria, el Príncipe de la Paz y el Rey de España, dejando una parte del territorio lusitano (las provincias de Beira, Tras los Montes y Extremadura portuguesa) para que España y Francia dispusieran de ella según las circunstancias.

De no menor peso es la consideración de la falta de rumbo y de las inverosímiles contradicciones que caracterizan la política internacional española de los últimos años del siglo XVIII y principios del XIX, en los cuales, bajo la influencia de los Pactos de familia y por preocupaciones personales de los Monarcas borbónicos, España apoyó y combatió indistinta y sucesivamente (y siempre con efectos deplorables) á Francia y á Inglaterra, terminando por necesitar del apoyo de ésta para rechazar la invasión napoleónica. Por análogos motivos, España, en aquella época, protegió tanto ó más que Francia, la independencia de las colonias norteamericanas, quebrantando el poderío europeo en América y dando un ejemplo eficazísimo y pronto aprovechado, á las colonias españolas del Nuevo mundo.

Todo esto demuestra, primero, que la resignación no puede ser la característica de un pueblo—y segundo, que una política sin rumbo internacional es la mejor garantía del desastre.

A estas notas hay que agregar otra que da tono á la Historia internacional de los últimos cincuenta años y es la referente á la formación de *las grandes unidades ó nacionalidades*, exigidas por necesidades mercantiles é industriales, por razones financieras relacionadas especialmente con los presupuestos militares modernos, y en fin, por motivos generales de influencia é imperio análogos á aquellos que determinaron las grandes transformaciones del Mundo antiguo y las luchas de los tres primeros siglos de la Edad moderna.

Por esta consideración, bien puede afirmarse que dentro de poco, las naciones pequeñas y aisladas serán repartidas, entre las grandes, y que aquellos pueblos que, por sus condiciones de raza, historia y situación geográfica tienen (como España) un papel en la economía general de la sociedad política moderna, de no resignarse á perder su personalidad, necesitan robustecerla y completarla conforme á la ley del tiempo.

En este sentido tienen un valor de actualidad evidente ideas como las de la Unión ibérica y de las autonomías locales y regionales sin las que, hoy por hoy, parecen imposibles esas grandes concentraciones de intereses y fuerzas que se llaman los Imperios contemporáneos, factores esenciales de la política general del Mundo.

Claro que empeños como el de la Unión ibérica y los anejos á esta idea madre son perfectamente inasequibles por el solo esfuerzo de España ó de Portugal (bases singulares ó concertadas, de aquella empresa) y más aún por la política suicida del aislamiento internacional.

No es del momento explicar lo que para obras semejantes son y lo que valen las autonomías locales y regionales; pero bueno será recomendar que no se confundan las soluciones con las protestas. Ahora, en España, por ejemplo, el catalanismo es solo una protesta que no puede prosperar en los términos de su actual ruidoso planteamiento. Pero ya puede asegurarse que España no se levantará sin una gran reforma autonomista, perfectamente compatible con la unidad del Estado y la gran personalidad española, exigida por la corriente general del Mundo.

La dirección contemporánea de las grandes nacionalidades se ha acentuado en estos últimos días por la actitud y los empeños de la raza sajona representada por sus dos grandes familias: la británica y la norte americana.

Señales de esta última vigorosa tendencia son, de una parte, el Imperialismo federal británico que satura al Gobierno y á la generalidad de los políticos de la Gran Bretaña (y del cual son incidentes la cuestión Fachoda de 1898, la transformación novísima del régimen colonial inglés iniciada en 1890 y la guerra del Transvaal); de otra parte, el expansionismo americano consagrado por el Tratado de París de 1898, por las recientes anexiones de las Islas de Sandwich, por los renacientes proyectos sobre el Canal de Nicaragua y por las amenazas anexionistas de Santo Domingo.

La armonía de estos empeños de raza está acreditada, primero, por el Tratado de Washington de 2 de Febrero de 1897 que puso término al conflicto anglo americano por causa de Venezuela, y segundo, por la conducta de Inglaterra durante la guerra de España con los Estados Unidos. La intimidad de ingleses y norteamericanos produjo el proyecto de arbitraje de 12 de Enero de 1897, que concertado entre Mr. Olney y Mr. Pauncesote, naufragó en el Senado de Washington en 5 de Mayo del propio año, aunque dejando cabos y motivos para nuevos tratos.

Pero de todas suertes, la inteligencia de los Gobiernos de Washington y de Londres, parece cierta, aun cuando no llegue á determinar, por el momento, las fórmulas positivas de que con alguna indiscreción ha hablado recientemente Mr. Chamberlain.

Que tal estado de cosas constituye una amenaza para la tranquilidad del Mundo, parece cosa evidente. No es aventurar mucho decir que si no fuese una incógnita la disposición del Gobierno alemán, la guerra del Transvaal habría determinado ya algo como una intervención más ó menos pacífica de Rusia y Francia, amparadas en los acuerdos de la recientísima Conferencia de la Paz del Haya, que autoriza á potencias extrañas á un conflicto internacional para «ofrecer, aun en el curso de las hostilidades, sus buenos oficios ó su mediación, sin que esto pueda jamás ser considerado como un acto poco amistoso para cualquiera de los contendientes.»

De esto á lo que Inglaterra hizo para que fracasara el convenio de San Stephano, de 1877, entre Turquía y Rusia y lo que realizaron las grandes Potencias europeas (fuera de Francia) en 1840, para desvirtuar el Tratado turco ruso de Unkiar Skeleski de 1833, va una inmensa distancia. Y eso que en 1833 y 1877, la victoria de Rusia sobre Turquía era indiscutible.

Porque es evidente el propósito de Inglaterra de apoderarse del Sur de Africa y de comunicar con el Norte y Noroeste, por la línea del Nilo y de los lagos, mientras que por el Oeste ensancha su jurisdicción colonial, avanzando hacia el corazón de Africa é interceptando la comunicación de las Colonias francesas de Túnez y Argel con las del Senegal, mediante la amplia aplicación del régimen de las llamadas *zonas de influencia colonial*. No menos cierto es que los Estados Unidos acentúan su aspiración á la hegemonía en América y rompen la tradición de Washington, creando un imperio colonial en Oceanía y corriendo los peligros señalados por el *primer Presidente*, á fines del siglo pasado. Sirven grandemente para este empeño las instituciones políticas y coloniales de Norte América y de Inglaterra.

Es sabido que la República norteamericana está formada por un distrito federal (el de Columbia, cuya capital es la residencia del Gobierno de los Estados Unidos,) 45 Estados federales y 5 Territorios. Allí rige la Constitución de 17 de Abril de 1787, con las 10 enmiendas de 1795, la 11^a de 1798, la 12^a de 1804, la 13 de 1865, la 14 de 1868 y la 15 y última de 1870. Respecto de los Territorios existe una legislación especial que descansa en las Ordenanzas de 1787, diferenciándose bastante su aplicación, porque mientras en los territorios de Nuevo Méjico, Arizona y Oklahoma, creados en 1850, 63 y 90 respectivamente, imperan las libertades fundamentales de la Constitución del 87, pero sin el disfrute de la representación en el Congreso federal, en los Territorios indios y de Alaska, creados en 1854 y 68 respectivamente, la condición de los ciudadanos es inferior, pues que Alaska está gobernada de modo semejante á una colonia de la Corona británica, y el Territorio indio se halla sometido á la administración particular del Departamento del interior del Gobierno federal. El distrito de Columbia está administrado conforme á un Acta del Congreso de 1878, por tres comisionados nombrados por el Presidente de la República.

Por tanto, la base de ésta se halla en los 45 Estados, de los cuales solo 7 entraron en la Federación con tal carácter y sin haber pasado por la condición de territorios. La conversión de estos últimos en Estados, principia en 1788. Los últimos convertidos (que son los de Wyoming, Ydaho y Utah), datan de 1890 y 1896.

Conforme á la Constitución, los Estados federales y el

pueblo de los Estados Unidos tienen todas las facultades que la Constitución no atribuye á la Federación. Y ésta asegura á cada Estado de la misma, la forma republicana y una eficaz protección contra todo género de invasiones y rebeliones interiores, si la piden sus autoridades locales.

De esta suerte, cada Estado no sólo tiene una administración propia, con autoridades sólo por él elegidas y con plenitud de facultades en el orden económico (fuera del régimen arancelario), sino poder suficiente para hacer sus Códigos civil, penal y procesal, en tanto que éstos no contradigan los derechos y principios taxativamente reconocidos y proclamados por la Constitución y las enmiendas constitucionales, tanto ó más considerables que la primera. Esos derechos son los fundamentales de la personalidad humana y las últimas conquistas de la democracia contemporánea.

Por eso dice la enmienda 1.^a «no hará el Congreso ley que se refiera al sostenimiento de una religión, ni que prohíba su ejercicio ó limite la libertad de la palabra y de la prensa, ó reduzca el derecho del pueblo á reunirse pacíficamente y á pedir al Gobierno la reparación de sus agravios.» Y la enmienda 9 establece «que no se dará jamás á la enumeración de los derechos consignados en la Constitución una interpretación que los niegue ó derogue.»

Mediante tales disposiciones se facilita lo indecible, el ingreso de regiones y pueblos extraños en la Federación norteamericana. Así pudieron agregarse á las trece primeras colonias que constituyeron, en 1776 y 1787, el núcleo de la Federación, regiones tan latinas como Luisiana, Florida, Tejas, y aun California. Y en este camino van hoy algunas de las tribus y naciones comprendidas dentro del Territorio indio.

Verdad es que después de la guerra de separación, y á contar desde las enmiendas 14 y 15 de la Constitución americana, la tendencia unitaria ha tomado gran fuerza en el orden político de aquel país y que á esta tendencia dará extraordinario y peligroso vigor el *expansionismo* consagrado por el excepcional éxito que acusa el Tratado de París de 1898.

También es cierto que lo que ha hecho el Gobierno de Washington en Puerto Rico, y aun en Cuba, dentro de los dos últimos años, no puede determinar muchas simpatías de parte de los países solicitados por la fuerza de atracción de

la política y la grandeza norteamericanas. Los éxitos de 1898, preparan quizá una modificación de la Constitución de los Estados Unidos; porque dentro de ésta seguramente no caben ni el protectorado indefinido que se ha establecido en Cuba, con las formas de la dictadura militar, ni la especie de colonia militar que se ha creado en Puerto Rico.

No se hablaba de esto cuando, desde 1848 á 1854, se popularizaba en los Estados Unidos la idea de la anexión de Cuba. Tampoco esto era de presumir por las declaraciones y los acuerdos del Congreso panamericano de 1889, al cual los iniciadores de los Estados Unidos (Mr. Blaine, singularmente), sometieron un vasto cuadro de proyectos y medidas inspirados en la idea de la mayor expansión posible dentro de América; en el sentimiento de un respeto absoluto á los prestigios y los intereses de los pueblos latinos del Nuevo Mundo y en una prevención manifiesta contra Europa. Se trataba de una unión aduanera americana; del establecimiento de grandes líneas de vapores subvencionadas por todos los Estados de América; de un sistema uniforme de tarifas sobre la importación y la exportación de mercancías; de la uniformidad de pesas y medidas; de la consagración de la propiedad literaria y artística; del arbitraje internacional americano...

Del Congreso de 1889, cerrado en Agosto de 1890, sólo resultaron las siguientes declaraciones: 1.º que el derecho de conquista debía quedar eliminado del derecho público americano, durante el tiempo del arbitraje que se proyectaba; 2.º que serían nulas las cesiones de territorio que se hicieran durante este tiempo, si se hacían con la amenaza de guerra ó bajo la presión de fuerza armada; 3.º que la nación cesionaria tendría derecho á apelar al juicio de árbitros; y 4.º que no podría renunciarse al derecho arbitral.

Estas declaraciones no han pasado del papel. Antes de la guerra de los Estados Unidos con España, contradicen las recomendaciones de Mr. Blaine, la conducta del Gobierno de Washington con Chile, en el triste período de la guerra civil chilena sostenida en 1891 por el Congreso de aquel país y el presidente Balmaseda. Algo análogo puede decirse de la conducta del Gobierno de los Estados Unidos en Haiti, hacia 1895, y en Guatemala y Salvador en 1890 y 91. De arbitraje no se ha vuelto á hablar, y eso que el precedente y los éxitos del Congreso de Montevideo de 1882, debían ayudar mucho.

Pero todo ha palidecido ante el Tratado de París de 1898. El problema ahora consiste en armonizar estas verdaderas extralimitaciones del derecho clásico norteamericano, con el sentido amplio y comprensivo de la Constitución de 1787, que favorecen lo indecible el ensanche y poderío de la Federación de los Estados Unidos por medios pacíficos y morales. En suma, el problema del día consiste en resolver, si de todo esto resulta un *Imperio norteamericano* ó un nuevo y espléndido desarrollo de la *República federal de los Estados Unidos*.

Por lo que hace á la tendencia expansionista ó absorbente de Inglaterra, que coincide con el actual movimiento norteamericano, hay que estimar la transformación que se ha operado dentro de los últimos diez años en el régimen colonial del Reino Unido.

Parecía que la última palabra de este régimen era la consagración de los Gobiernos coloniales *responsables* del Canadá, el Cabo y la Australia. La constitución del Dominio del Canadá (1867-97), era la fórmula más expresiva y regular de este sistema, que había que relacionar con las generosas y trascendentales explicaciones, dadas por el ministro lord John Russell en el Parlamento británico, en 1862, al desarrollar resueltamente la política de confianza que Inglaterra inició con raro acierto, en el mismo Canadá, hacia 1792. Esto es, poco después de perdidas las Colonias que hoy forman la República de los Estados Unidos de América, y aprovechando de modo admirable la terrible lección de aquel gran fracaso colonial.

La última fórmula de la colonización británica implicaba: 1.º, el derecho de las Colonias á gobernarse del modo que estimaran oportuno, sobre la base de la consagración de los derechos propios del ciudadano británico; 2.º, la facultad de las mismas de regular su trato mercantil con los demás pueblos, sin obligar á la Metrópoli á proteger la producción colonial con medidas fiscales y arancelarias de ninguna especie, tanto en el mercado metropolitico como en cualesquiera otros mercados; 3.º, el derecho de la Metrópoli de imponer libremente su veto definitivo á las disposiciones coloniales, cuando estimara que estas contradecían los principios fundamentales del Gobierno inglés ó comprometían los intereses de éste y en general de toda la Nación; 4.º, el derecho del Gobierno británico á imponer á las Colonias, por virtud de lo que se llamaba el *derecho imperial*, las

soluciones que estimara oportunas para salvar el interés común y defender la causa del derecho, el progreso y la civilización; 5.º, la exclusión de las colonias del Parlamento británico, que era el único capacitado para resolver todas las cuestiones que, así en las Colonias como en la Metrópoli, afectaran al vigor y el porvenir del Imperio.

Hacia 1884 comenzó en Inglaterra el nuevo movimiento reformista colonial, conocido después con el nombre de Federación Imperial Británica. Entonces se constituyó en Westminster la Liga de la Federación Imperial, presidida por el ilustre Forster, con la cooperación de personajes como sir John Lubbock, y de publicistas como Parkin, Dilke, Seeley, Robinson, etc., etc. En 1892, el Comité directivo, que había organizado sus huestes, tanto en la Metrópoli como en las principales Colonias (señaladamente en el Canadá y en Australia), presentó al público un plan de reforma, y en 1893 se disolvió la Liga para que pudieran formarse agrupaciones y sociedades distintas, que formularan desde su especial punto de vista, el modo y manera de llevar á efecto la idea fundamental.

De esta suerte, en 1893 y 94, se fundaron la *United Empire Trade Ligue* (que sostenía la Unión del Imperio por procedimientos económicos inspirados en la tendencia proteccionista) y *The City of London Branch, of The Imperial Federation League* (partidaria del libre cambio), y *The Imperial Federative defence* (de carácter militar), y *The Unity of the Empire Association* y *The Group of Lecturers*, sociedad de conferenciantes y propagandistas), etc., etc.

Por este camino se fueron preparando los ánimos, hasta que en 1897, y con motivo de haber concurrido á Londres, por segunda vez (la primera fué en 1887), los jefes de Ministerio de las Colonias de Gobierno responsable, se verificó un meeting especial de estos personajes, presididos por Mr. Chamberlain que á la sazón era Ministro de las Colonias de Inglaterra. En esta reunión se discutió, en vista de soluciones prácticas, ya sobre la conveniencia de modificar el régimen arancelario de la Metrópoli y de las Colonias, para asegurar el mercado de éstas y aquéllas á la producción británica y viceversa; ya respecto de las reformas políticas que habían de introducirse en el orden colonial, principiando por la concentración de las Colonias en grandes Dominios como el del Canadá; ya, en fin, sobre la mejor defensa militar y marítima de todo el Imperio británico.

La disposición favorable de la Conferencia de 1897, ha fortificado lo indecible la empresa iniciada en 1884, y desde entonces y singularmente por la presencia de Mr. Chamberlain en el Gobierno inglés, ha tomado gran aliciente y el aire de un empeño práctico y de política palpitante, la idea de reformar el régimen comercial de todo el Imperio británico, y dar mayor unidad á la dirección política del mismo. Para esto se piensa ora en crear un Tribunal Supremo que resuelva los conflictos de la Metrópoli y las Colonias; ora en establecer en Londres un Parlamento imperial, donde con la intervención de los representantes de aquellas Colonias y del Reino Unido, se ventilen y solucionen todos los grandes problemas políticos, económicos, militares é internacionales de la Federación.

A esto responden los trabajos hechos en estos últimos años en la Australia, para confederar las cinco colonias de aquella región, así como los proyectos de que ahora mismo entiende el Gobierno de Londres, para hacer más íntima la relación política de aquellas Colonias con la Madre Patria. Y éste es el espíritu que palpita en la cooperación que los colonos de la Australia y del Canadá han prestado á Inglaterra en la actual guerra del Transvaal.

Compréndese por esto el pensamiento final del Gobierno inglés en su actual lucha con las dos Repúblicas sudamericanas, destinadas, si Europa no se opone, á transformarse en colonias más ó menos autónomas de la Gran Bretaña; ó mejor dicho, en regiones más ó menos importantes, del nuevo y deslumbrador Imperio británico que sucederá y aun eclipsará en el siglo xx al asombroso Imperio español del siglo xvi. Porque si continúa el encogimiento europeo y se mantiene la buena inteligencia de Inglaterra y los Estados, á despecho de las reclamaciones de los boers en Washington, París y Berlín, la ocupación británica del Egipto tal vez se convirtiera en ocupación definitiva; las Colonias portuguesas del Este de Africa pasarían á ser Colonias inglesas y el derecho fundamental británico, los progresos de la gran industria inglesa y el desarrollo del imponente comercio del Reino Unido, tendrían por teatro de su esplendorosa acción la mayor parte del mundo conocido.

Por eso se ha dicho antes que la transformación del régimen colonial inglés de 1868 á 1874, es una condición del expansionismo británico, dentro de la teoría novísima de las grandes nacionalidades.

Basta lo indicado para que se comprendan los gravísimos y complicados problemas que pone sobre el tapete la evidente preocupación de Inglaterra y de los Estados Unidos de ensanchar su acción, abarcando al mundo todo con sus inmensos brazos. Es natural que la Europa continental se fije mucho en esto. Y prudente será pensar el modo de asistir á la resolución de esos problemas.

Ante esta eventualidad hay que fijarse en la situación de España.

Perdidas sus grandes Colonias, parece á primera vista que nuestros compromisos exteriores se han circunscrito, ya que no se han desvanecido. Pero no es dable prescindir:

1.º Del valor internacional que todavía tienen nuestras colonias del Oeste de Africa y del Golfo de Guinea, así como nuestros Presidios mayores y menores del Norte africano; tema obligado de nuestras preocupaciones de seguridad y expansión, desde época muy antigua y antes de la distracción de nuestra política por el descubrimiento de América.

2.º De lo que representa en la geografía política y comercial contemporánea, la posesión de las Canarias á la salida de Europa, camino de América y Africa; de Ceuta y Tarifa en el estrecho de Gibraltar y de las Baleares en el Mediterráneo.

3.º De lo que implica la dilatada y hermosa costa española del Mediterráneo, escenario probable de grandes hechos militares que correspondan á los que allí mismo tuvieron efecto en todas las edades de la Historia.

4.º De lo que entraña la contigüidad de Portugal y la vecindad de Marruecos, comarca objeto preferente de la atención, cuando menos de Francia é Inglaterra, y cuyos problemas ahora se avivan por la ocupación francesa del Tuat y por las gestiones del Sultán para un Congreso internacional que reforme el Convenio de Madrid de 1880.

5.º De lo probable que es que la creciente intranquilidad de Cuba y el acentuado descontento de Puerto Rico (víctimas de la injusticia y la despreocupación norteamericanas), junto con la alarma de las Potencias europeas que poseen colonias en el mar de las Antillas, y con la repugnancia de las Repúblicas latinas del Nuevo Mundo á la política de Blaine y Mac Kinley, planteen en período muy próximo, el problema de la neutralización de Cuba, como

transacción entre diversas tendencias y muy distintos intereses, americanos y europeos.

No es imposible que todavía haya ciegos que teniendo delante todos estos problemas crean que España puede desinteresarse en un conflicto bastante probable en plazo próximo. Pero también es verdad que por espacio de setenta años, apenas hubo en España quien pensara que la soberanía de ésta en las Antillas dependía, más ó menos, del apoyo de las grandes naciones europeas. La realidad se impuso y ahora se impondrá. El verdadero patriotismo veda la jactancia y obliga á la previsión en los planes y la prudencia en el obrar.

5

Precisando el Sr. Labra los resultados positivos y las aplicaciones prácticas de sus Conferencias del Ateneo, se esforzó últimamente en determinar el sentido y alcance de sus recomendaciones para que se procurase formar en España una *opinión pública* apercibida de los graves conflictos posibles y aun probables dentro de nuestro horizonte visible político—un tanto conocedora de las atenciones y los sacrificios que imponen el deseo, el deber ó la necesidad de sostener la personalidad española en el círculo de los grandes factores de la civilización moderna—creyente en punto á la imposibilidad de vivir en estos tiempos fuera del trato internacional—propicia á inspirarse en las corrientes dominantes de la época presente—y capacitada para estimar los objetivos racionales de la acción nacional y para comprender los recursos positivos, ordinarios y excepcionales del país, por cima de toda jactancia, toda fantasía y todo pesimismo.

Esta *opinión* debe formarse, primero, en los círculos políticos y en las clases directoras de la sociedad española. No hay que decir lo muy quebrantadas que aparecen estas últimas, desde hace treinta años. ¡Apenas semejan á las que implantaron el régimen constitucional en 1836 é hicieron la Revolución de 1868! Y resultan responsables, como quien más, de nuestros últimos desastres!

Después, hay que determinar esa *opinión* en la masa general del país, cuyo influjo pesa hoy más que otras veces por el carácter democrático de la vida política y social de la España contemporánea. Los procedimientos que para conseguir esto se han de seguir, han de ser muy distintos y de muy diverso alcance, según la diferencia de los elementos que hay que solicitar y reducir.

Con ello no se sirve sólo un interés particular de España siempre atractivo para españoles. si que también una obra de general cultura y de progreso universal, puesto que el Derecho Internacional, con su sentido novísimo, á pesar de las ironías de los pesimistas, de las protestas de los desgraciados y de sus positivas faltas y sus desesperantes eclipses, representa hoy lo más alto y glúeroso de la vida total de los pueblos y garantiza próximos adelantos en el orden de la libertad y la cultura humanas.

Conviene advertir que cuando se recomienda la formación de una *opinión pública en materia internacional*, no se predica una *política internacional* determinada. No es esto propio de academias y centros más ó menos docentes. Quizá tampoco está dentro de la jurisdicción de las grandes agitaciones políticas. Corresponde más especialmente á los empeños especiales de los Gobiernos, que son los que tienen datos suficientes y deben contar con las condiciones de información, asiduidad y tacto que exigen, una preparación discreta y una dedicación sostenida y bien inspirada. Pero los Gobiernos, poco ó nada pueden sin ambiente.

El antiguo *medio* diplomático es cada vez menos eficaz y respetable. En cambio, el falso patriotismo, la preocupación de los intereses más próximos y materiales, las arrogancias fortalecidas por una equivocada educación nacional, los rencores y exclusivismos tradicionales, las frases hechas respecto del destino manifiesto de cada pueblo y de la disposición de los demás, el jingoismo, la propaganda efectista á que se prestan grandemente la oratoria contemporánea y las pretensiones de mucha parte de la prensa favorecida tanto por la desorganización y el descrédito de los viejos partidos como por la insuficiencia de la instrucción pública... son factores poderosos de una situación que se impone desastrosamente á todos los círculos políticos y compromete de modo desfavorable á los Gobiernos que carecen de medios de resistir la influencia exterior, aun en el caso (no frecuente) de

que ellos mismos no compartan las inclinaciones y los prejuicios de los elementos que les rodean y constriñen.

Es bien sabido que el argumento más poderoso que los partidos gobernantes de España hacen valer para excusar su tremenda responsabilidad en lo tocante á los abrumadores sucesos de 1898, es la disposición general de la sociedad española respecto del problema colonial y del conflicto de España con los Estados Unidos.

Cierto que esto no es una eximente; pero no sería justo dejar de apreciarlo como atenuante. Máxime teniendo en cuenta que, aun ahora mismo, no faltan personas que piensan que quizá nuestras últimas desgracias podrían haberse excusado ó aplazado perseverando en una política colonial opuesta á las exigencias del mundo contemporáneo. Es decir, ¡partándonos todavía más de la corriente universal y corriendo el peligro de haber caído como caímos, en una lucha materialmente imposible, con una nación extraordinariamente más poderosa que España, pero entonces con la mayor desventaja de que nuestro fracaso fuera *celebrado* por todos los pueblos modernos, sin quedarnos el derecho de protestar, como ahora protestamos, contra el egoísmo europeo, en nombre de la solidaridad de los Pueblos y de los principios del Derecho!

Urge, por tanto, determinar en la *opinión pública* una orientación internacional que afirme cuando menos: 1.º la necesidad de vivir moral, política y socialmente en relación, todo lo íntima posible, con el resto del Mundo y señaladamente con los pueblos directores de la sociedad contemporánea; 2.º la conveniencia de precisar un objetivo de tendencias, aspiraciones y esfuerzos; 3.º la necesidad de armonizar las aspiraciones con los medios de que España quiere ó puede disponer y emplear.

La importancia de estas indicaciones se comprenderá si se las refiere á ideas y aspiraciones que ahora se proclaman en muchas partes, contradiciendo la recomendación de no pocas gentes que se dan por prudentes y reflexivas, respecto de la política que á España corresponde, en vista de los problemas iberoafricano y sudamericano.

El último parece ser el que en los momentos presentes se lleva la atención de los españoles, que creen que todavía España puede y debe hacer algo.—Buena prueba de ello los obsequios tributados en estos últimos días á los marinos ar-

gentinos y el Congreso hispanoamericano que, proyectado con apoyo decidido del Gobierno español y por las patrióticas y bien inspiradas gestiones de la sociedad titulada La Unión Ibero-Americana, ha de celebrarse en Madrid en Noviembre de 1900.

Seguramente todo eso tiene un positivo valor; pero hay que decir con toda lisura, que para dar cierta eficacia á lo que se siente y aun se proclama, con cierta vaguedad, sobre estos particulares, precisa que los españoles, y singularmente los que de estas materias tratan y los elementos directores de nuestra sociedad, varíen de actitud y de conducta.

No basta hablar de la unidad de la raza, de los vínculos de familia y de la necesidad de restaurar las antiguas íntimas relaciones morales, políticas, económicas y sociales de España con la América del Sur—supuesta siempre la existencia de las respectivas soberanías nacionales. Ya es indispensable decir *por qué, para qué y cómo* se ha de realizar esa restauración.

Tampoco es suficiente hacer hermosos discursos, celebrar expansivos banquetes y hasta organizar Congresos en honor de tan noble y transcendental idea. Es preciso demostrar la sinceridad y la robustez del deseo con hechos positivos é indubitables; con sentido práctico, con una decisión absoluta y con una perseverancia mantenida por la persuasión de que con la empresa que se intenta no vamos á hacer algo así como un favor á los pueblos de la América latina, sin rumbo ni progre o desde que se emanciparon del Gobierno español—como torpemente piensan ó dicen muchos, hiriendo la susceptibilidad de los mismos americanos, á quienes quieren atraer, lastimándolos.

Del mismo modo hay que conocer que, en este empeño muy delicado y que ha de encontrar no escasas dificultades, es indispensable renunciar á cuanto pueda servir de pretexto para que en América se diga ó tema que España pretende á toda costa, llevar la dirección del concierto hispanoamericano y restablecer con varios pretextos y tales ó cuales salvades, su antiguo carácter de Metrópoli.

Y no hay que decir de la absoluta imposibilidad de realizar esa simpática obra fuera del supuesto fundamental de la Independencia hispano americana y del criterio modernísimo y las soluciones expansivas que caracterizan la actual vida del nuevo Mundo, cuya representación pretende, por

modo exclusivo y sobre todo contra la vieja Europa, precisamente para dificultar y anular el empeño de la intimidad de los pueblos latino americanos, la República de los Estados. Tanto es esto, que si la colonización española fuera realmente la que la mayoría de nuestros gobernantes y colonistas de estos últimos tiempos ha entendido; si nuestro empeño colonizador estuviera realmente representado por la Real orden de 1825 sobre las onerosidades de los capitales generales y los aranceles prohibitivos en favor de las harinas de Castilla y los géneros de Cataluña, y los reglamentos centralizadores municipales de 1878, rayaría en lo cómico que España pretendiera ahora concentrar los esfuerzos de esa América, que cuantas veces se ha ocupado de cosas parecidas (en los Congresos de Panamá de 1822-26 y 1880-82, así como en los de Lima de 1847-48 y 1864-65), con la sola excepción del Congreso de Santiago de Chile de 1856, verificado bajo la amenaza del filibusterismo norteamericano, ha sido acentuando su protesta no sólo contra todo cuanto pudiera recordar el régimen colonial y el orden político económico é internaccional que desapareció en el continente americano á principios del siglo XIX, sino contra lo que pudiera acusar en aquellos países el propósito por parte de los españoles de reconquistar algo de lo perdido.

Por fortuna, la colonización española no es eso.

Pensando otra cosa, lo más cuerdo sería eludir el compromiso de una campaña cuyo fracaso final puede desde luego asegurarse y algunas de cuyas dificultades, hasta el momento presente, no son ajenas al error que ahora se combate.

Imaginar lo contrario es lícito tan sólo á los que viviendo y hablando dentro de las fronteras españolas, sin leer lo que en el resto del Mundo se publica, ni oír lo que todo el mundo, hasta con exageración por nosotros fomentada, dice á los pocos metros de la línea del Pirineo, insisten con cualquier pretexto, en fantasías y jactancias que debía haber aventado el Tratado de París de 1898, y cuya reproducción en estos momentos, nos pondría ante los espíritus viriles é imparciales del siglo XX, en posición mucho más triste que la del inmortal manchego acometedor de comediantes, cuadrilleros, trajineros y toda clase de gentes grandes y pequeñas, aun propugnando por la verdad, el honor y la justicia.

Para no caer en tales equivocaciones, conviene mucho tener en cuenta que nuestra tradición sobre el punto de la reanudación de las relaciones de España y América deja

bastante que desear, no obstante el hecho (quizá único en la historia colonial) de la reincorporación de Santo Domingo á España, en 1861. Otros datos, también favorables á nuestra intimidad con la América latina, son las declaraciones y disposiciones de muchas de las grandes figuras de la revolución hispano-americana, como Bolívar y Rivadavia, de ninguna suerte hostiles á España, aunque lo fueran al Gobierno español de 1810 á 1825. Pero en contra tenemos otros hechos de imposible excusa. Hay que señalarlos para evitar su repetición. Sobre todo cuando se habla otra vez, en términos vagos, de una política hispano-americana.

Tardamos once años (1825-36) en reconocer la independencia de Méjico. La iniciativa de la reconciliación de España con Venezuela y Montevideo la tomaron estas Repúblicas, que espontáneamente abrieron sus puertos á los buques españoles, por cuyo medio se llegó en 1845 al primer tratado de paz y amistad entre dichas Repúblicas y su antigua Metrópoli. De 1845 data también el reconocimiento de Chile. Hasta 1847 no reconocimos á Bolivia; en 1850 á Costa Rica; en 1855 á Santo Domingo; en 1859 á la Argentina; en 1863 á Guatemala; en 1865 á San Salvador y el Perú; en 1880 al Paraguay y en 1881 á Colombia. Muy al contrario, Inglaterra, el mismo día que resolvió el abandono de sus colonias de Norte América, base de la República de los Estados Unidos, reconoció la independencia de esta, consagrada por el Tratado de 1783. Bien puede aventurarse que hasta 1870, los tratados hispano-americanos fueron solo de paz y amistad, sin entrar en más honduras ni intimidades.

Por otro lado, contrariaron mucho las buenas relaciones de España con las Repúblicas referidas, 1.º, la determinación de la nacionalidad de los nacidos ó domiciliados en aquellos países, donde, luego de emancipados, continuaron viviendo muchas familias españolas y á donde fueron muchos emigrantes de la antigua Metrópoli, y 2.º, la participación excesiva que tomaron en las cuestiones políticas interiores de aquellos países ya independientes, muchos españoles, sin renunciar por esto á su propia nacionalidad, que les sirvió de escudo en no pocos conflictos.

En todo caso siempre habría sido un gran error de parte de España aparecer compartiendo la actitud soberbia y amenazadora que casi todas las Potencias europeas adoptaron respecto de las nacientes y agitadas Repúblicas sud-americanas, desde 1825 á 1870. España estaba en otro caso.

Pero las consecuencias de tal conducta hablan de ser peores para nosotros, por la circunstancia antes referida de la intervención de los españoles en la política propiamente americana; circunstancia que fué efecto, entre otras causas, de que los españoles nunca realmente creyeron que las guerras de América tenían otro carácter que el de guerras civiles y que ellos jamás podían pasar por extranjeros en territorio americano.

En el fondo esta es una razón más en favor de la intimidad de la América latina independiente y España. Pero esto no se entendió del modo conveniente y para una política eficaz, por espacio de muchos años, hasta que se verificó, en 1861, la retirada de las tropas españolas mandadas por el general Prim, que fueron á Méjico para una intervención felizmente fracasada.

La guerra de España con las Repúblicas del Pacífico, desde 1864 á 1866 y luego la primera insurrección de Cuba de 1868 á 78, que realmente tuvo á su favor á casi todas las Repúblicas sudamericanas, dificultaron grandemente la cordial inteligencia de éstas con su antigua Madre patria. Quizá las guerras del Pacífico debieran haberse concluido en 1871, de otro modo que por una suspensión ilimitada de hostilidades, que hizo aplazar la celebración de nuevos y definitivos tratados de paz con Bolivia, Perú, Chile y el Ecuador, desde 1879 á 1883. De muy distinta manera obró Inglaterra al terminar la guerra que sostuvo desde 1812 á 1814, con los Estados Unidos.

Afortunadamente, á partir de 1880, se allanan la mayor parte de nuestras dificultades con Sud-América. Desde entonces hasta la fecha celébranse muchos tratados de comercio, de propiedad industrial y literaria, de extradición judicial etcétera, etc. España, solicitada por algunas Repúblicas del Nuevo Mundo, interviene con acierto en la decisión de varios pleitos sobre límites é indemnizaciones pecuniarias suscitados entre los pueblos hispano americanos.

Después se han verificado dos hechos de positivo valor: la adhesión de Sud América á las fiestas del IV Centenario del descubrimiento del Nuevo Mundo y la actitud de los Gobiernos de la América latina ante la nueva insurrección de Cuba y la guerra de España con los Estados Unidos. Ambos hechos son por todo extremo favorables á España.

Pero, tampoco, estos hechos han sido aprovechados del modo deseable. El *Libro Rojo* publicado en 1899 por el Go

bierno español, demuestra claramente que éste cometió la gravísima falta de no requerir á los Gobiernos hispano-americanos como requirió á los europeos, para dar solución al conflicto internacional provocado ó planteado por la agresión de los Estados Unidos. De otra parte, todos los Congresos ibero americanos celebrados en Madrid en 1892 acordaron diferentes medidas para estrechar las relaciones de España y la América latina. Ninguna de esas medidas ha vuelto siquiera á ser recordada.

De esto, el orador se ha ocupado con repetición en el Parlamento, sin lograr de los Gobiernos contestaciones satisfactorias. Y esto lo ha tratado extensamente en su reciente libro *Cuestiones palpitantes de Política, Derecho y Administración*. De modo que el error tiene más arraigo de lo que pudiera creerse, por las meras apariencias.

Todavía hay otro hecho que se presta á muchas y tristes consideraciones. En 1888 y por iniciativa del Gobierno Uruguayo se verificó el Congreso de Montevideo para adoptar varios acuerdos de Derecho internacional privado. Asistieron los representantes de casi todos los Gobiernos sud-americanos y de él salieron ocho tratados de Derecho, á los cuales se adhirió en nombre de España y *ad referendum* el Ministro de España en el Uruguay. Esto sucedió en 1893. Desde entonces no ha vuelto á hablarse de este particular.

Tampoco se puede prescindir de otro error que ha privado mucho en los círculos políticos españoles y que ha trascendido grandemente al orden internacional de que ahora se trata. Y es el de considerar la cuestión colonial y particularmente la de Cuba y Puerto Rico como un modesto problema de política interior.

Oponiánse á esta consideración: 1.º, la naturaleza de Derecho colonial, 2.º, la condición especial de nuestras Antillas por efecto de su situación geográfica y de las disposiciones que con su motivo y respecto de ellas habían demostrado, desde 1825 hasta nuestros días, Francia, Inglaterra, los Estados Unidos y las Repúblicas sud-americanas, 3.º, la íntima relación que tenían la posesión de Cuba y Puerto Rico por España con la importancia política y social del considerable elemento español de las Repúblicas latinas del Nuevo Mundo.

Con este motivo el Sr. Labra hace constar que en larga y vigorosa campaña en favor de la reforma colonial autonomista, precedida de otra no menos enérgica (y al fin

coronada por éxito satisfactorio como pocos, en pró de la abolición inmediata de la esclavitud en las Antillas), jamás revistió el carácter de un empeño local, como pudiera serlo el de una campaña en favor de Galicia ó de Cataluña, por motivos circunstanciales y aun en demanda de reparación de injusticias históricas ó de solución á problemas gravísimos pero transitorios.

Aquella empresa tenía el triple fin de identificar á España con la corriente política y social contemporánea de la cual la separaban, entre otras causas importantes, el mantenimiento de la esclavitud y la privanza de la centralización en las colonias—provocar la intimidad de España con las Repúblicas latinas del Nuevo Mundo por la consagración en las Antillas de las ideas madres de la triunfante revolución americana,—y por último, fortificar la causa y los medios de España para que esta pudiera escapar del naufragio de las naciones desmembradas y decadentes, afirmando, por procedimientos progresivos y discretos, una gran personalidad ibérica, sobre la base de la libérrima y corriente voluntad de todos y cada uno de los pueblos interesados en la formación de esta personalidad. Desgraciadamente estas ideas no fueron estimadas por la generalidad de nuestros políticos, que con dificultad se emancipaban del antiguo concepto colonial.

Por esta reducción de perspectivas de nuestros colonistas se explica que hoy mismo sean muchos los partidarios de la liquidación completa de nuestro imperio colonial, renunciando ó vendiendo nuestras colonias de Africa, de modo parecido á como se han vendido, después del Tratado de París, las Marianas y las Carolinas á Alemania. Es decir, sin contar con los pueblos y con un criterio bastante aproximado al que los norteamericanos impusieron en París para *hacerse* con la isla de Puerto Rico. Por igual motivo se explica el hecho, por otro concepto inverosímil, de que después de la pérdida de las Antillas y de las Filipinas, se conserve la organización de nuestras Colonias de Africa, absolutamente del mismo modo que existían antes de aquel ejemplar suceso y contrastando desfavorablemente con lo que ahora sucede en el Congo, en las Colonias británicas de la Costa Occidental africana (vecinas de Fernando Póo) y aun en las colonias portuguesas de Santo Thomé y el Príncipe.

Sin embargo, un completo abandono de Africa por Espa-

ña, equivaldría á la renuncia absoluta de la representación española en uno de sus más característicos y tradicionales empeños, poniéndose además fuera de la inteligencia internacional, precisamente respecto de los problemas que más han de preocupar al porvenir.

Estas indicaciones bastan para demostrar que la empresa de la intimidad con el Sur de América impone una atención, un estudio, un plan y una perseverancia de que nadie se preocupa, por creer, quizá, el negocio fácil, corriente, de *buen ver* y de aquellos que, sin comprometer seriamente á nada, se prestan á grandes expansiones retóricas y á la estéril pero resonante y siempre aplaudida glorificación de nuestras empresas pasadas.

Con esto hay que relacionar un lamentable contraste que se ofrece á nuestra vista y que rebaja extraordinariamente la importancia positiva y el valor práctico de toda campaña de intimidad hispano-americana. Se trata, de un lado, de la aprobación que el Gobierno español ha dado á las plausibles gestiones de la Sociedad titulada *La Unión Ibérico Americana*, para celebrar dentro de seis meses, en Madrid, un Congreso Hispano americano que discuta y resuelva todos los problemas referentes al trato moral, intelectual, político y económico de España con las Repúblicas Sud-americanas, y de otra parte, de la desatención que ese mismo Gobierno tiene para los problemas pendientes en Cuba y Puerto Rico, después del Tratado de París.

Que estos problemas existen lo demuestran 1.º el del Tratado de 1898, 2.º los incidentes del registro de españoles que impone este Tratado, 3.º las disposiciones excepcionalmente favorables á las Antillas de cuantos españoles peninsulares han regresado á la Metrópoli por efecto de ese Tratado, que viven más ó menos temporalmente, en Asturias, Santander, Vizcaya y Cataluña, y que con su trato, sus ideas y sus capitales influyen poderosamente en el actual extraordinario desarrollo industrial de aquellas comarcas, y 4.º el movimiento de aproximación y concentración de cubanos y peninsulares residentes ahora en la Grande Antilla, que se opera en esta, frente á la política absorbente y dominadora de los Estados Unidos, muy sospechosos en punto al total cumplimiento del último artículo del bill de 18 de Abril de 1898.

Parecía natural que el Gobierno español se ocupase seria y urgentemente del punto relativo á la nacionalidad de los

que habiendo nacido en Cuba, en Filipinas ó en Puerto Rico no residen en estos países y no quieren perder la nacionalidad española. Los portugueses facilitaron la solución de este conflicto con el art. 18 de su Código civil, que establece que los extranjeros descendientes de sangre portuguesa que se domicilien en Portugal pueden ser naturalizados, sin necesidad de residir, por lo menos, un año en territorio portugués.

El Gobierno de Cuba ha decretado que son cubanos los que han nacido en Cuba ó son hijos de cubanos, aunque no residan en Cuba. Nuestro Gobierno acaba de resolver con motivo de la reclamación de una filipina (viuda de español) que por su regreso á Filipinas, perdió su nacionalidad española y no tiene derecho á viudedad ni pensión alguna. Además, ahora, algunos periódicos de Madrid, con motivo de la designación de nuevos senadores vitalicios, anuncian que no pueden serlo varias personas, porque habiendo nacido en Cuba, es dudosa su nacionalidad, á pesar de que residen en Madrid y no es discutible su voluntad de ser españoles. Al propio tiempo surgen serias dificultades respecto á la aplicación de la última ley y el último reglamento sobre el impuesto de derechos reales y traslaciones de dominio, tratándose de testamentos otorgados en España, por nacidos en Cuba, cuya nacionalidad parece equívoca.

No se comprende que el Gobierno español prescinda de todas estas cuestiones y abandone totalmente la causa de los españoles en sus últimas colonias. Quizá esto no influya poco en el hecho merecedor de particular estudio de que de los 200 mil peninsulares residentes en Cuba, solo 66 mil se hayan inscripto el registro de españoles. El Gobierno de Madrid ha recabado del de Washigton que el plazo para estas inscripciones le prorrogue por seis meses.

Pero hay que repetir lo que antes de ahora se ha dicho en estas Conferencias, respecto de la imposibilidad de atribuir á nuestro Gobierno la exclusiva responsabilidad de este abandono. Tal error es muy general en España ahora mismo. Aquí son poquísimas las personas que de estos particulares se ocupan. Nadie (fuera de los españoles que viven en el litoral peninsular) se acuerda de las Antillas y de Filipinas. No ha habido medio de que se discutan en las Cortes hechos de tanta gravedad como la pérdida de nuestras colonias, la guerra con los Estados Unidos, el término de ésta por el inverosímil Protocolo de 12 de Agosto de 1898 y el

Tratado de París de Diciembre del propio año. Los fallos del Tribunal Supremo de Guerra acreditan que cuantas culpas parecen imputables á nuestro ejército colonial y nuestra marina de guerra, no les corresponden, sino que se deben dirigir al Gobierno de España. Sin embargo, esto ni se discute en el Parlamento. La opinión pública, lo mismo que las representaciones de los partidos políticos, excusan esta cuestión, consintiendo en que fuera de España se forme una tan deplorable cuanto injusta idea de nuestro ejército y de las energías españolas.

Es evidente que aun después de la pérdida de nuestras Antillas, éstas deben ser consideradas como un dato esencialísimo de la política hispano americana. Los errores del Gobierno español en la administración de esas islas eran un terrible argumento contra el empeño iniciado por España para identificarse con la América libre é independiente. Hoy nadie estimará nuestra labor en este sentido como una empresa seria, si principiásemos por apartar la vista de los intereses de raza y de familia que viven en Cuba y Puerto Rico con mucha más energía de la que suponen y proclaman los norteamericanos, para realizar (con nuestro insipiente concurso) la anulación de todo lo español y lo latino en el mar de las Antillas.

Lo primero que hay que acreditar en esta campaña es sinceridad y formalidad. Después hay que abarcar la totalidad de la obra, bajo una idea y con un plan meditado y fijo. Y sería el colmo de la insania á comprometerse en una empresa como la de que se trata, acusando la privanza de resentimientos y prevenciones contra una parte de la familia hispano americana, al día siguiente de terminada una guerra, que ha costado á Cuba más de 150 mil habitantes y á la Península sobre 90 mil jóvenes soldados, y cuando se impone la necesidad de aunar los esfuerzos de toda esa familia frente á un peligro común y en obsequio de un interés superior de la política universal.

Porque es claro que la intimidad de que se trata, y aun el particular de la afirmación y ensanche de la personalidad ibérica, representan bastante más que un interés puramente español.

Puede hablar de esto el profesor del Ateneo con tanta mayor libertad y aun autoridad, cuanto que no fué partidario, más ó menos equívoco, de la separación de las Antillas y la independencia de Cuba. Antes bien, combatió estas solu-

ciones con toda franqueza; y para evitarlas sostuvo por espacio de muchos años á costa de muchos sinsabores y arrojando no pocos peligros, la solución autonomista, cuya excelencia han demostrado de modo decisivo, los sucesos posteriores á 1898. Pero hoy no se trata de la reforma colonial ni cabe discutir los hechos consumados, para rectificarlos ni combatirlos.

Lo hecho hecho está, y España deba partir de ello, como Ing'aterra partió de suceso análogo en Norte América. Máxime poniéndose sobre el tapete gravísimos problemas trasatlánticos é internacionales que afectan al prestigio y al porvenir de España y cuya mera inteligencia nos sería grandemente difícil, cuando no imposible, manteniendo una actitud desconsiderada respecto de nuestras Colonias de ayer mañana.

Hay que considerar la obra en conjunto. Una verdadera política internacional no consiente intermitencias, distracciones ni contradicciones. Y mucho menos la reducción de sus problemas á pretextos y motivos de frases y fantasías, para desahogos fáciles, trasportes oratorios y rebuscamientos y prospectos de especialistas.

6

No menos graves, ni menos atractivos, ni menos populares en España que la cuestión hispano-americana son el problema ibérico y el problema marroquí, que es un aspecto del problema africano. Basta la enunciación de estas cuestiones para que se comprenda que no pueden ser tratadas ligeramente y por pura referencia.

Su relación con la política internacional palpitante de la Europa contemporánea las dá por el momento una importancia quizá superior al problema americano. El *Statu quo* de Marruecos, sancionado por el convenio internacional de Madrid de 3 de Julio de 1880 y la equívoca situación de Portugal después del escandaloso atentado de Lourenzo Marques de 1890 y el convenio anglo-lusitano de

11 de Junio de 1891 entrañan conflictos, amenazas, intereses y tendencias que en plazo no lejano han de producir una nueva dirección en la política europea, y que por lo pronto inspiran extraordinario respeto á todas las grandes Potencias de nuestro tiempo, obligadas á seguir con particular y no afectada atención la marcha de las cosas en aquellas comarcas que en cierto día formaron parte del imperio de España.

La complejidad y el aparato de estos problemas ayudan mucho la propensión de nuestros Gobiernos á no tocarlos de ninguna suerte. Pero no por eso es menos vivo el instinto popular español que empuja á nuestro pueblo á pensar, y sobre todo á *sentir* respecto de Portugal y Marruecos, casi como de *cosa de casa*.

Contrarian la satisfactoria solución del problema ibérico varias causas. En primer término, la especie de Protectorado que en Portugal ejerce Inglaterra: protectorado casi tan efectivo (aun cuando la forma haya variado) como el que inauguró el Tratado de Methuen de 1703, y el más duro é intolerable del gobierno de lord Beresford, de 1816.

En segundo término están las positivas prevenciones de la masa general del país lusitano contra todo empeño de hegemonía castellana. En tercer lugar, las leyes que en estos últimos tiempos han venido á neutralizar la eficacia de los sentimientos producidos en España y en Portugal por los combinados esfuerzos de estos dos países para afirmar su independencia contra Napoleón I, y para instaurar el régimen constitucional. Por último está la forma equivocada que se ha dado á la campaña iberista, y la relativa habilidad con que los intereses creados y los partidos gobernantes portugueses han aprovechado esa equivocación para dar á la propaganda de intimidad ibero-americana, cierto aire de incompatibilidad con los fueros de la soberanía portuguesa; ni más ni menos que elementos y partidos análogos en España se esforzaron por explicar la teoría de la autonomía colonial, como opuesta á la unidad y la integridad de la Patria.

Todo es tan cierto, como que cuantas veces se ha invocado é invoca la idea de intimidad hispano-lusitana, ya en el Parlamento español, ya en la plaza pública, ya en la cátedra, así en el orden económico como en el literario y en el político, el clamor popular la saluda con verdadero entusiasmo.

Por lo mismo es más de lamentar que las gentes que de estas cosas se ocupan y con cierta elevación y medios, comparten estos sentimientos, se abstengan de poner en la campaña que aquella idea requiere, el tacto, la claridad y las condiciones de diversa especie necesarias para su éxito, dentro de un plazo más o menos próximo.

No eran comparables con las secundarias diferencias que separan á España de Portugal los antagonismos y los intereses que contrariaron por espacio de medio siglo dentro del actual, la Unión germánica, comprendida por hombres como Stéin, y popularizada por los estudiantes, los músicos, los poetas, los pedagogos, y los elementos populares de Alemania. Pero no hay que pensar en la intimidad ibera si ésta implica el predominio de cualquiera de las dos familias peninsulares ó se pretende realizarla desde luego con una fórmula determinada y casi definitiva, y fiando el éxito de la obra al esfuerzo centralizador.

Poco avisado será el que, tratando de esta materia, no advierta que no hay razón más substancial ni motivo más hondo, para que Cataluña esté unida á Castilla, que los que existen para recomendar la unión de Castilla á Portugal. Quizá las diferencias fundamentales de las comarcas catalana y castellana y los contrastes que á simple vista se señalan al reconocer las ciudades y los campos de una y otra región son de más valor que las diferencias y los contrastes que ofrecen Portugal y Castilla. Tampoco será lícito olvidar que el movimiento en favor de la independencia lusitana, casi coincidió con otro análogo de Cataluña; con proyectos de separación de Andalucía bajo la dirección de Medinasi-donia y con tentativas apenas esbozadas, pero de igual carácter, en Galicia.

Con motivo de las fiestas del Cuarto centenario del descubrimiento de América, tomaron muchos ilustres portugueses activa participación en los Congresos científicos internacionales de aquella fecha. Esa intervención fué considerable en el Congreso Pedagógico. De aquellas Asambleas salieron proyectos de aproximación moral y aun material. Se ideó la constitución de una *Sociedad libre de cultura general y vulgarización científica*, que había de celebrar grandes fiestas literarias en Lisboa, Madrid, Oporto, Barcelona, etc., etc. Pero con esto sucedió lo propio que con los demás proyectos respecto de la intimidad hispanoamericana. La prensa no volvió á ocuparse del asunto; los po-

líticos gobernantes se retrajeron; la masa se distrajo... y las pocas y centadísimas personas que perseveraron en el propósito de fundar la *Sociedad* indicada, con el principal apoyo de pedagogos y publicistas, pronto se dieron cuenta de que bregaban en el vacío. Sin embargo, la intimidad ibérica es casi una pasión española.

Es inútil decir lo que en la leyenda española representa la *guerra al moro*; pero sí hay que recordar que la extensión de España por Africa ha sido una de las notas de mayor viveza de nuestra política exterior desde el siglo XIV. Es decir, desde antes que estuviera constituida lo que se llama *España*. El libro de D. León Galindo y de Vera sobre este particular es de inexorable consulta para todo estadista español. La dirección americana y el interés de la política religiosa del centro de Europa se impusieron en el siglo XVI y luego la campaña definitiva sobre Africa declinó considerablemente.

Pero más que esto debe llamar la atención la limitación del empeño de los españoles á las costas de Africa, y el carácter exclusivamente militar que estos dieron á sus empresas, realizadas, sobre todo, cuando no exclusivamente, en el litoral mediterráneo de la costa septentrional africana. Contrasta esto lo indecible con todo lo que nuestros antepasados hicieron en América y en Asia.

Sin duda para esto hubo sus causas. Una de ellas, el fin principal de defensa y seguridad de la Península y la justa preocupación de hacer posible, ya que no segura, la frecuentación del Mediterráneo, cuya navegación aparecía amenazada, unas veces por los piratas berberiscos y los barcos de Argel, Túnez y Tánger, y otras, por las fuerzas regulares de las naciones europeas.

No menos atendida es la razón de la oposición que los africanos hicieron á la invasión del territorio por los europeos; oposición fortísima favorecida por las mismas Potencias de Europa, que en Africa pudieron hacer fácilmente, lo que les fué muy difícil y por mucho tiempo imposible, en el Nuevo Mundo.

Pero el resultado de todo esto es que la obra de la intervención española en Africa tuvo mucho menos valor que la realizada en América, la cual, aparte toda exageración patriótica, no se puede estudiar sin que su grandeza se imponga.

Hasta Portugal aventajó á España en la consideración

dada al problema africano. Y eso no solo en los primeros tiempos, cuando privaba el sentido de la Reina Isabel y del Cardenal Cisneros y aun después, cuando en Africa luchaban, vencían ó perecían hombres como el Marqués de Santa Cruz de Marcenado, D. Pedro Meneses, el conde de Alcaudete y los marqueses de Flores Dávila y de Algaba.

En época mucho más próxima, cuando por efecto de los Tratados hispano portugueses de 1787, España adquirió las islas de Fernando Póo, Annobón, Corisco, los dcs Elcboy y el territorio continental que riega el Muni, nuestro empeño careció de altura, de rumbo, de transcendencia y de perseverancia. Hoy mismo, á pesar de positivos, aunque lentos, progresos de aquellas colonias de la Costa de Guinea, nuestros gobernantes, nuestra prensa, nuestros políticos y el país todo no prestan atención á lo que allí se realiza, á despecho de la terrible lección de la última guerra de Cuba y Filipinas, y contrariando todo el sentido de la colonización contemporánea. La desconsideración llega al punto de que como se ha dicho varias veces en estas Conferencias, está bastante generalizada en ciertos círculos la idea de la venta ó el abandono de esas comarcas donde piden solución todos los problemas coloniales de otros tiempos y de nuestro mismo siglo.

Por eso hay que meditar sobre la transformación de nuestra obra en la costa africana. Resulta mezquino el papel de nuestros Presidios mayores y menores. No falta quien se preocupe de Ceta como de algo más que un puerto militar medianamente defendido y un grupo de cuarteles donde extinguen su grave condena algunos miles de presidiarios. Nadie, hasta hace veinte años, se fijó en que allí *había un pueblo* digno y trabajador, merecedor de muchas atenciones, base de una acción reflexiva y poderosa sobre el continente septentrional africano. Y algún hombre político, en la intimidad, ha discutido la necesidad de extender el campo de Ceta hasta Tetuán, trocando para esto nuestras posesiones del Rif, por alguna kilómetros de tierra fuera del campo neutral.

Esta dirección, apenas esbozada, tomará importancia por el desarrollo de los problemas generales políticos de Argel y el Magreb. Sería la mayor de las indiscreciones no estar preparados para sucesos que se anuncian como inminentes.

Porque á la importancia positiva que estos han de te-

ner, al valor que indiscutiblemente tiene para España (por muchos y muy diversos motivos que es innecesario concretar), todo cuanto pase en la costa meridional del Mediterráneo, debe agregarse la consideración que, respecto de los problemas marroquíes, han dado á España, de 50 años á esta parte, todas las Potencias europeas, bien porque estimaran los grandes é insuperables títulos que España tenía, por su historia y su posición geográfica, bien porque tuvieran en cuenta que, dados los medios, la situación y las aspiraciones de España, esta Nación era la menos temible en la hora no imposible del reparto del Imperio marroquí.

De todo lo dicho resulta que la obra de España en Africa tiene que ser distinta, bien que se desenvuelva en el Africa Occidental, bien que tenga por escenario el Africa del Norte.

En la costa de Guinea y en las islas próximas, la empresa parece definida. Las dificultades que se oponen son, de un lado, las aspiraciones de Francia, á extender su colonia del Gabón y á enseñorearse de las riberas del Muni: de otra parte, las vacilaciones y contradicciones de la política colonial que realiza nuestro Gobierno en aquellas comarcas. Tal vez dentro de poco surja una nueva dificultad: las aspiraciones de Inglaterra, que de hecho y por abandono del Gobierno español, poseyó la isla de Fernando Póo desde 1827 á 1832 y que en 1841 ofreció á España 60 mil libras esterlinas por la propiedad de aquella colonia.

En el Norte de Africa los principales obstáculos consisten en la disposición del Gobierno de Marruecos y en las prevenciones y las suspicacias de los Gobiernos europeos (sobre todo de Inglaterra y Francia) naturalmente preocupados de la libre navegación del Mediterráneo.

Las relaciones particulares de España con Marruecos han adquirido, en estos últimos tiempos, carácter de regularidad y descansan principalmente en el Tratado de 11 de Marzo de 1799 sobre protección á los españoles residentes en territorio marroquí; el convenio de 29 de Agosto de 1858 sobre términos jurisdiccionales de Melilla y seguridad de los presidios españoles de la costa de Africa; el tratado de Wad-Rás de 26 de Abril de 1860 que terminó la llamada guerra de Africa, con ventajas políticas y comerciales, no aprovechadas hasta ahora por España; el tratado de Tánger de 20 de Noviembre de 1872 sobre relaciones comerciales de España y Marruecos; el Convenio de 3 de Julio de 1880 sobre el derecho de protección á los europeos residentes en aquel

país y los Tratados de Madrid de 5 de Marzo de 1894 y 24 de Febrero de 1895 que pusieron término al conflicto de Melilla.

Las relaciones de España con las demás Potencias europeas, á propósito ó por razón de Marruecos, descansan en el ya citado Convenio ó Tratado de protección de 3 de Julio de 1880, que hay que completar y explicar con Tratados suscritos particularmente por Marruecos y algunas de esas Potencias, y aun los Estados Unidos de América.

Mr. Rouard de Card (profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Tolosa y asociado del Instituto de Derecho Internacional), ha escrito sobre este particular un libro de consulta: el titulado *Les Traités entre la France et le Maroc*. Allí son estudiados detenidamente los tratados y convenciones de 1767, 1827, 1829, 1845, 1865, y sobre todo de 1844 (Convención de Tánger), que constituyen (con el Convenio de Madrid de 1880) la base del trato de franceses y marroquíes.

Las relaciones con Inglaterra están determinadas por los tratados de 1801, 1856, 1861, 1864, 1865, 1875, 1880 y 1895. El trato con los Estados Unidos descansa en los convenios de 1865 y 1880.

No es necesario más para que se comprenda que la empresa de España en Africa es de una verdadera dificultad, y que para vencerla es un obstáculo evidente el anacrónico espíritu que imponía la *guerra al moro*.

Se debe reconocer que es grandemente simpática en España la idea de extenderse por el Africa Septentrional. Lo ha sido siempre. Pero no menos indiscutible es que nadie se cuida aquí de los medios eficaces para realizar esa expansión. Porque la ineficacia del medio exclusivo de las armas ya está demostrada. Las victorias españolas de este siglo no han producido nada definitivo.

Consecuencia de todo lo dicho es que aun tratándose de empeños que se imponen al país por el clamor de la masa y el instinto del pueblo, se necesita salir de la pasividad ó la indiferencia que nos dominan. No basta el deseo para convertir la aspiración en hecho. Y las cosas se han puesto de tal modo, que sería locura insigne pretender que, aun respecto de los puntos antes tratados, bastara la voluntad reflexiva y los medios positivos de España para lograr un éxito.

Por tanto hay que meditar sobre los problemas que nuestro gusto, nuestros intereses, la voluntad de otros ó circun-

tancias que no nos son imputables, han planteado á las puertas de nuestro país, y para cuya solución el voto de España, por modesto que sea el papel de esta, es indispensable. Hay que reflexionar sobre los procedimientos; sobre los medios posibles y los medios necesarios. Precisa, hoy como nunca, resistir las tentaciones y evitar los desvanecimientos. Urge estudiar la razón y el fin último de nuestra actitud y nuestras gestiones respecto de esos problemas. Pero sobre todo, hay que adquirir el convencimiento de que, hoy por hoy, ningún empeño de la naturaleza de los indicados y ningún esfuerzo transcendental de España son realizables sin la cooperación internacional.

De aquí resulta una nueva comprobación de la tesis de que si España no ha de quedar fuera del movimiento internacional, es indispensable que se forme en la Península una *opinión* pública sobre estos puntos; que se determine una *orientación* respecto de nuestra política exterior y en fin, que se preparen condiciones y medios de que España actúe como un *factor* de la vida total, política y social, del siglo xx.

Todo esto supone: 1.º la necesidad de que España, lo mismo en el orden político que en el científico, en el económico y en el social, no sea una excepción en la marcha general del Mundo contemporáneo, y 2.º la conveniencia de estudiar y aprovechar las lecciones que los pueblos más adelantados nos dan, mediante experiencias, tanto más valiosas, cuanto que, por regla general, todos esos pueblos han incurrido en defectos y pecados idénticos, cuando no superiores, á los de España, con la diferencia de que aquellas naciones, al revés de la española, han prescindido del inmenso error de perseverar en sus desastrosas equivocaciones.

A primera vista estas condiciones son tan sencillas como inexcusables. Nadie puede discutir las. Todo el mundo las acepta. Sin embargo, la realidad dista mucho de tales supuestos.

Todavía en España tiene gran fuerza la tendencia á representar, dentro del Mundo contemporáneo, lo mismo que representamos al principio de la Edad Moderna, pero en un *medio* totalmente opuesto á la eficacia de aquella representación. Por eso son tanto de temer la ingerencia del clericalismo (visible y palpable ahora como pocas veces) y la influencia de la intolerancia religiosa, que palpita en el fondo de nuestras costumbres.

No menos positiva y funesta es la propensión á mantener la *originalidad española* en ciertas fiestas populares que nos perturban y que fortifican cierta afición violenta y sanguinaria, que nos ha perjudicado lo indecible en el curso de la Historia. Lo propio puede decirse respecto de la *originalidad* escandalosa de la falsificación sistemática de la función electoral. Lo mismo de la prepotencia del caciquismo y del amor siempre vivo á la indisciplina y la guerra civil.

Como éstos pudieran citarse otros ejemplos, de que generalmente se habla con una benevolencia que bastaría para acreditar el arraigo de estos grandes obstáculos á la identificación de España con el medio social contemporáneo, sin el cual será perfectamente ocioso todo cuanto intentemos.

Por esto, por la complejidad de los fenómenos aludidos y lo profundo de sus causas, hay que decir, hasta la saciedad, que, para rectificar lo que ahora en España priva y ha dificultado y dificulta la cordial y fecunda relación de nuestra Patria con el resto del Mundo, es indispensable el concurso de varios elementos de la sociedad española.

En estas Conferencias hay que poner á un lado lo que corresponde especialmente al Gobierno español como director de nuestra política exterior. Pero, respecto de este particular, bien puede aquí decirse que conviene la reforma y reorganización de nuestro actual y un tanto anacrónico régimen diplomático y consular.

Con esto podría relacionarse la creación (por esfuerzo directo ó cooperación análoga á la que hoy el Estado presta á la *Escuela de Estudios Superiores del Ateneo* y que corresponde á una de las novísimas fórmulas de la política pedagógica contemporánea) de una Escuela de Derecho Colonial ó Internacional que favoreciera la formación de un cuerpo competente para representar á España, no sólo en el extranjero, sí que en sus colonias de África, contando con que han de variar el carácter, la organización y el destino de nuestras posesiones de Ceuta, Melilla, Chafarinas, etc., etc.

De la creación de esta Escuela se trató hace tres años (al amparo del Ateneo de Madrid) pero los buenos propósitos de entonces han quedado completamente en el olvido, aun cuando es notorio que nuestra deplorable y desacreditada Administración colonial ha entrado como factor potísimo en los últimos escandalosos fracasos y desastres de España, y que nuestra representación diplomática no nos ha valido para atenuar siquiera los efectos de nuestra actual crisis.

Dentro de la competencia del Gobierno se encuentra también la reanudación de uno de los más serios y menos estudiados procedimientos ideados y practicados por los Reyes Católicos en el momento de ser creada *España*: el envío al extranjero de jóvenes inteligentes y de maestros celosos que estudien lo que pasa en el resto del Mundo, y que, empapándose en las ideas y las tendencias de la época, contribuyan, después, á divulgarlas, implantarlas y desarrollarlas en nuestra Patria, por medios suaves, pero intencionados y perseverantes.

Claro está que esto es algo muy distinto de las comisiones con que el compadrazgo imperante favorece á los amigos y los desocupados que, sin resultado alguno para el país, hacen hoy viajes, de recreo por Europa, á costa del Estado.

7

Sobre todo esto deben ponerse los esfuerzos propios de los elementos libres é independientes de nuestra sociedad. Quizá la pasividad de esos elementos constituye la primer causa de nuestro actual abatimiento. Sería difícilísimo detallar en este instante aquellos esfuerzos. Sin embargo, es dable y conviene precisar algunos.

Desde luego, hay que recomendar y esperar que la prensa varíe el modo de considerar las cuestiones exteriores y la política internacional, que no es ni puede ser, como algunos periódicos independientes dicen en estos días, la manía de un sabio ó la preocupación de un excéntrico.

El periódico tiene hoy la ventaja de la fuerza de su voz y de la extensión de su auditorio. Además, momentáneamente, le dan valor extraordinario la desorganización y pasividad de los partidos políticos y las corruptelas y abandonos del Parlamento, que ni siquiera se decide á defenderse contra las agresiones de esa misma prensa, más pecadora que el mismo

Parlamento. Los partidos actuales todavía no ven, como vieron sus predecesores la necesidad de tener periódicos propios, como tienen representantes en las Cortes. Esa necesidad es mayor en España, por la visible decadencia de los *meetings* y las conferencias populares, cada vez más pujantes en el extranjero.

Luego, hay que solicitar y esperar una actitud más decidida y eficaz de parte de nuestras clases directoras. Esta acción puede demostrarse en círculos docentes, como el *Ateneo de Madrid*, cuya importancia y cuya eficacia en la superior cultura política de la España contemporánea es notoria, rivalizando, cuando no superando, á las Sociedades Económicas de Amigos del País de fines del siglo XVIII, que prepararon la vida parlamentaria del XIX.

En el *Ateneo de Madrid* (llamado, en 1860 y cuando imperaban en nuestro país la intolerancia religiosa y el prohibicionismo mercantil, la *Holanda de España*) comenzaron los estudios públicos de Derecho internacional, dentro del período contemporáneo. Lo demuestran las actas de los debates de sus Secciones y las lecciones que en la prestigiosa cátedra de las calles Carretas y de la Montera dieron, desde 1841 á 1850, los señores Ruiz López y D. Facundo Gofi. De tres años á esta parte, esos estudios figuran, con distintos nombres, en el cuadro de las cátedras permanentes del Ateneo, porque forman parte de la *Escuela de Estudios superiores* del mismo Instituto.

Pero sería de desear que esto se complementara incluyendo en el mismo cuadro de enseñanzas regulares, la de otras materias, como la Política comparada, la Historia política contemporánea y la Geografía política y comercial, que ó faltan completamente en el programa de la enseñanza superior oficial de nuestro país ó aparecen en éste de un modo accidental y muy por bajo de las necesidades intelectuales y políticas de nuestra atrasada Patria.

El ejemplo del *Ateneo* madrileño sería muy provechoso para aquellas comarcas que, como la catalana y vizcaína, representan dentro de España, la nota europea, ó para aquellas otras que, sin este carácter, muestran benévola disposición á empeños de vulgarización científica, como los realizados en estos dos últimos años, con alto sentido patriótico y admirable éxito, por los ilustres profesores de la Universidad de Oviedo, que en nuestro país secundan la meritisima empresa de la *expansión universitaria*, iniciada en

Inglaterra dentro del último tercio de nuestro siglo y desarrollada, después, espléndidamente, en Francia y Alemania.

Esto podría tomar mayor vuelo si los hombres capaces de nuestro país, aun fuera de la jurisdicción universitaria, se dispusieran á dar vida en España á las conferencias populares. hoy importantísimas. tanto por su número, como por su variedad, como. en fin, por el creciente número de sus asistentes, en Inglaterra, la Europa central y los Estados Unidos de América. La conferencia popular, libre ó sistemática, suelta ó formando parte de los llamados *Cursos breves*, es cosa perfectamente distinta del *meeting*, dedicado casi exclusivamente al sentimiento público. La conferencia, bien sostenida y extendida por la acción de grupos propagandistas ajenos á todo exclusivismo de partido, de escuela ó de iglesia, llenaría hoy un gran hueco de la sociedad española.

Quizá esto pudiera haberse realizado satisfactoriamente si se hubiera establecido la *Sociedad de cultura popular y vulgarización científica*, decretada por el Congreso Iberoamericano pedagógico de 1892.

También sería de bastante influencia la constitución de otra Sociedad, proyectada bajo los auspicios del Ateneo de Madrid y por recomendación del famoso Instituto de Derecho Internacional que en 1873 se fundó en Gante y que han presidido autoridades científicas como los señores Rolin Jacquemins, Asser, Westlake, Mancini, De Parieu, Rivier, Renault y otros.

Esta Sociedad habría de dedicarse al cultivo de la Política comparada y del Derecho internacional, por medio de debates públicos, conferencias populares é informes á los Gobiernos y á la opinión del país, complementando y ampliando la obra meritoria que ahora realiza en una determinada esfera, la Sociedad Geográfica de Madrid, que es, quizá, el único centro que en la España de nuestros días mantiene, con cierta elevación é insistencia, el interés de nuestra política exterior.

Para tal empeño servirían mucho los catedráticos de Derecho internacional público y privado que existen en todas las Universidades de España de quince años á esta parte, y que con frecuencia, publican discursos, memorias y aun libros, perdidos en medio de la indiferencia general y del desdén de nuestros políticos y nuestros literatos.

Tal obra alcanzaría mayor importancia si al cabo se realizara el transcendental empeño de un ilustre político sudamericano recientemente establecido en nuestro país, de hacer de éste, centro de una empresa internacional y base de la publicación de un gran periódico, cuyo carácter y cuya transcendencia indica bastante su título: *El Mundo Latino*.

Pero ahora se anuncia otra obra que podrá servir de mucho para avivar entre nosotros los estudios de Derecho Público, y señaladamente de Derecho Internacional. Esta obra es el *Congreso Social y Económico Hispano Americano*, que se inaugurará, en Madrid, en el próximo otoño.

Quizá, puesta la mirada exclusivamente en la eficacia total y el resultado inmediato de la empresa, pudiera tacharse de excesivo su programa. Los tiempos, y sobre todo la situación actual de España, no consienten hoy lo que no extrañaría en 1892, y parecía abonado al día siguiente de la Revolución de 1868.

Ese Congreso puede ser considerado desde tres puntos de vista. El político, el técnico y el de la propaganda.

La relación política es la más grave, la de superior transcendencia y la verdaderamente difícil, por circunstancias que no hay para qué detallar ahora. Es lo probable que ni Inglaterra ni los Estados Unidos vean con indiferencia cualquier cosa que pueda contrariar el sentido de la expansión anglosajona. Precisamente en estos momentos se prepara, por la iniciativa del Gobierno de los Estados Unidos (que no tiene la misma calma que el Gobierno de Madrid, respecto de las consecuencias del Tratado de París de 1898) un Congreso americano que se ha de celebrar dentro de pocos meses en Méjico, y donde es verosímil que se vuelvan a esouchar los acentos de Blaine. Y ya se anuncia que el Gobierno portugués (seguramente por alguna fuerza mayor que la de su propia espontaneidad), hará manifestación oficial, más ó menos precisa, de que ni admite que el próximo Congreso de Madrid sea *ibérico* ni está en su ánimo acudir á él con representación análoga á la que tuvo en los Congresos de 1892.

Se trata, pues, de algo verdaderamente serio: por lo pronto, delicado. Mas esto no puede ser un argumento en contra de ese Congreso que debe celebrarse, cualesquiera que sean sus resultados inmediatos y positivos.

Pero hay otro aspecto del asunto que no puede menos de interesar aun á los más desconfiados y meticolosos. Quizá

es la América latina la comarca donde, dentro de los últimos cincuenta años, se ha cultivado y cultiva con más amor y preferencia el Derecho Internacional; lo mismo en el círculo de los doctos y especialistas que en el mayor de los políticos.

También puede aventurarse la especie de que en esa América es donde con más fe se han iniciado el planteamiento de instituciones, y la proclamación de fórmulas jurídicas de mayor novedad y transcendencia, dentro del orden del Derecho público contemporáneo.

La demostración de lo primero es muy fácil para quien medianamente conozca la bibliografía jurídica de nuestro siglo.

Los nombres de Bello, Seijas, Alcorta, Sáenz Peña, Calvo, Toro, Berra, López, Sarmiento, Ceballos, Pereira y otros, excusan comentarios. Por otra parte, está justificada por los hechos, la pretensión de los hispano americanos de haberse adelantado á Europa en la noble empresa de dar realidad, en sus varias formas, á la idea del *arbitraje*, hasta aproximarse al ideal sostenido en nuestros días por los más calurosos propagandistas de esta avanzada fórmula del movísimo progreso jurídico.

Con efecto, más de un publicista trasatlántico ha dicho, sin réplica posible, que cuando en 1873 Mancini logró que la Cámara de diputados de Italia, antes que otras, se pronunciara en favor de la cláusula compromisoria de arbitraje, hacía medio siglo (1822 26) que esta cláusula, por inspiración de Bolívar, figuraba ya en los primeros pactos de las nacientes Repúblicas hispano-americanas. Y cuando en 1895, la Conferencia interparlamentaria de la Paz, reunida en Bruselas, recomendó la constitución de un tribunal permanente de arbitraje internacional entre los Estados europeos, hacía ya tres cuartos de siglo que esa institución había sido recomendada y hasta bosquejada, en la América latina, como lo demuestran las Actas del Congreso de Panamá de 1822 26, de los Congresos de Lima de 1847-48 y de 1865, del de Santiago de Chile de 1856, y de las Conferencias diplomáticas de los representantes de Méjico, Nueva Granada, Venezuela, Guatemala, Salvador y Costa Rica, reunidos en Washington, el propio año de 1856.

Aun, en orden más modesto, pero como demostración insuperable de simpatía al principio del arbitraje de carácter permanente, las Repúblicas hispano-americanas pue-

den presentar hechos tan plausibles como los acuerdos del Congreso de Panamá de 1880-81, sobre el convenio colombiano chileno de Bogota de 1880; la Conferencia celebrada en Caracas, con motivo del Centenario de Bolívar en 1883; y las convenciones de Panamá y de París de 1882 y 83 sobre el tema del convenio de Chile y Colombia de 1880. Esto, aparte de la disposición favorable á lo fundamental de la idea, acreditada en el Congreso pan-americano de Washington de 1889-90 y en el Congreso jurídico hispano-portugués-americano celebrado en Madrid en 1892.

En cuanto á la introducción de la cláusula especial compromisoria del arbitraje en los Tratados particulares, no se puede prescindir de que esa cláusula ya aparece en los Tratados de 1823 de Chile con el Perú, de 1829 del Perú con Colombia, de 1836 del Ecuador con la Argentina, de 1839 de Méjico con Bélgica, de 1848 de Méjico con los Estados Unidos del Norte, de 1850 de Méjico con Bélgica, de 1852 de Chile con Francia, de 1853 del Perú con España, etc., etc., hasta llegar á los Tratados recientes y excepcionalmente expresivos del Ecuador con España y Francia de 1888; de Colombia con España, de 1894; de España con el Perú, de 1898 y de la República Argentina con Italia de este propio año. Este último Tratado es quizá el que, hoy por hoy, supera á todo cuanto sobre el particular se ha hecho en el mundo internacional.

Pero todavía hay otro punto sobre el cual las pretensiones hispano americanas tienen que ser aceptadas, por mucho que cueste á los Gobiernos de la vieja Europa, que tan mal trataron á aquellos pueblos en los primeros días de su independencia. Se trata de los esfuerzos realizados por aquellas Repúblicas latinas para codificar sus leyes civiles, en relación con los nuevos rumbos del Derecho Internacional, y señaladamente, para codificar el Derecho Internacional privado.

Lo que Europa viene haciendo por iniciativa de Holanda en las Conferencias del Haya de 1893, 1896 y 1900, lo intentó antes, con más amplitud y quizá mayor éxito, el Congreso de Derecho Internacional Privado de Montevideo de 1888-92.

Ahora bien, sea el que fuere el éxito puramente político del Congreso Hispano Americano, convocado para el otoño de 1900, en Madrid, bien puede asegurarse que, si hay tacto y vigor en los directores de esta Asamblea, de allí puede salir

un gran adelanto para el Derecho público contemporáneo, y especialmente para el Derecho Internacional.

No ha de ser muy difícil aprovechar los datos antes indicados para, cuando menos, generalizar los recientes Tratados de la República Argentina con Italia, y del Ecuador y Colombia con España, ampliándolos y relacionándolos con los acuerdos de la Conferencia de la Paz del Haya.

Del mismo modo es dable realizar ahora con mayores complementos y efectos, lo que ya debió hacer el Gobierno español hace seis u ocho años, cuando, la adhesión condicional *ad referendum* de nuestro representante diplomático en el Uruguay á los ocho Tratados del Congreso de Montevideo, facilitó, de modo especial, la obra de concordia y progreso de que es otra muestra, aunque de mucho menor alcance que la americana, lo concertado en el Haya en 1896, y luego publicado en la *Gaceta Oficial de Madrid* de 1899, sobre Derecho internacional privado.

Esta empresa es relativamente fácil y no hay que ponderar su importancia. Tanto más cuanto que su feliz éxito no empece que, en el Congreso proyectado, se traten ampliamente otras cuestiones y se venga á resoluciones concretas sobre reformas postales y telegráficas, movimiento bancario, aranceles de Aduanas, propaganda mercantil y trato intelectual y literario de España y las Repúblicas latinas de América. Antes bien, lo que en el orden jurídico se logre será una fuerte preparación ó una garantía positiva de cuanto en otros órdenes de vida se consiga.

Pero todavía el anunciado Congreso se recomienda por otro concepto, muy relacionado con las consideraciones últimamente expuestas respecto de la alta conveniencia de formar en España una *opinión pública* sobre los problemas generales del Mundo, política exterior y cuestiones internacionales. El Congreso es una gran ocasión para la propaganda de todas estas ideas. Por sí mismo es un empeño propagandista de primer orden.

Hay, pues, que contribuir á él. De ninguna suerte sería excusable que nuestros hombres políticos, nuestra prensa y las personas que se interesan por la vida mora del nuestro país se desentiendan de esa obra, pretextando nuestra impotencia ó la inoportunidad y exageración del intento ó el escaso valor que, en crisis como la actual y en planes como el de que se trata, tienen los esfuerzos de puro carácter moral.

Sobre todo hay que combatir enérgicamente esta última alegación, por lo mismo que está muy generalizada. No es verdad que el vínculo más poderoso de los pueblos sean los intereses materiales. Tampoco es exacto que las grandes revoluciones y trasformaciones de la Historia, se hayan verificado por el impulso decisivo, ó por lo menos preferente, de esos mismos intereses. No hay que confundir las apariencias con las realidades.

Todos esos grandes hechos deben ser profundizados para reconocer la fuerza más ó menos oculta que lo agita y remueve todo, y que frecuentemente parece en una desproporción colosal con lo que empuja y momentáneamente produce. Esa fuerza siempre ha sido, es y será, una fuerza esencialmente moral. Por causas morales más que por la necesidad física, los hombres se agotan, se batan y mueren.

Indudablemente, sin dinero, sin recursos materiales, no hay empresa positiva. Eso deben meditarlo los políticos de los *buenos deseos*, y deben saberlo los que esperan que las cosas se hagan por sí solas ó caigan hechas del cielo. Pero la empresa supone siempre algo invisible, impalpable, alentador, fortificante, excitante, que responde al juego maravilloso de los *principios*, secreto de la vida universal.

Por eso y por otras muchas razones íntimamente relacionadas con la crisis presente de España, tenemos que preocuparnos ahora de la muy comprometida vida moral de nuestro país.

Hay que fiar en la virtualidad de las ideas y hay que cultivarlas con verdadero amor, aprovechando la dura experiencia de estos últimos años, muy relacionada con el triste espectáculo que se nos ha impuesto en estos últimos días, de una gran decadencia de los resortes morales de la sociedad española y una deplorable distracción del rumbo que ésta había tomado bajo la influencia de la Revolución de 1868, discutible ó no en el orden general político, pero indiscutible en cuanto nos puso en relación con el sentido progresivo y las ideas dominantes en el Mundo contemporáneo.

Lo expuesto en este *Curso* de la Escuela de *Estudios Superiores del Ateneo*, es una pequeña demostración de esta tesis. Además, constituye una demostración considerable de la que se enunció al principio de estas lecciones, relativa á la utilidad positiva y al interés práctico de toda obra que tenga por objeto hacer que España viva la vida internacio-

nal, y que para ello siga con atención, más ó menos reflexiva pero siempre despierta, lo que en el resto del Mundo pasa.

En tal concepto, á las razones fundamentales que acreditan la substantividad del Derecho Internacional (elemento de primer orden del Derecho Público Moderno), hay que agregar los hechos materiales que en España constituyen la materia de los últimos tristísimos desastres, cuya corrección ó subsanación no podrá verificarse sino saliendo de los antiguos rumbos y de las viejas preocupaciones.

Si esos desastres se consideran para algo más que para el lamento estéril ó la rebeldía étnica, deben servir para rectificar aquella ciega, aquella absurda y casi inexplicable confianza con que, por espacio de muchos años, se han visto formar sobre nuestro horizonte las tempestades, creyendo que para nuestra generación no se habían hecho ni la bancarrota de la Hacienda, ni los fracasos del Ejército y la Marina, ni el desmembramiento del territorio nacional, con que habían sido castigadas, á nuestra vista, otras Naciones, quizá más despiertas, pero comprometidas en la lucha con lo imposible, bajo la inspiración de lo arbitrario, lo anacrónico ó lo fantástico.

Lo que unánimemente se suponía que aquí no *había de pasar* ha pasado, y ha sucedido más, mucho más de lo que los hombres prudentes y perspicaces podían temer. Porque ha resultado que el fondo del país estaba bastante peor de lo que aventuraban los críticos tachados de visionarios y pesimistas.

Por otra parte, casi nada de lo sucedido es peregrino en la Historia. Al igual que España, han caído y van cayendo otras naciones de poder análogo al de esta. No se trata de una verdadera sorpresa. No hay que hablar de un infortunio inverosímil é incomparable. En cambio, hay que ver con serenidad é intención el fenómeno. Procede como nunca examinar sus causa. Porque la repetición del hecho acusa la existencia de una ley.

Discurriendo sobre este punto, pronúnciase en primer término, el acentuado contraste que ofrecen el estado actual de España y la situación que hoy tienen aquellas otras naciones que con la primera compartieron, dentro de la Edad Moderna, la dirección política y social del Mundo.

¿Cómo y por qué se ha realizado, y sobre todo se mantiene esta considerable, esta verdaderamente extraordinaria di-

ferencia, que, así en su contenido como en su respectivo valor, en relación con la cultura, la riqueza y el progreso general de la Humanidad, no es dable desvanecer ó atenuar con frases más ó menos retóricas, eufemismos, convencionalismos y otros recursos incompatibles con la realidad que entra por los ojos y los oídos de todos los contemporáneos?

De otra parte, los adelantos realizados, las instituciones creadas, las invenciones difundidas, las comodidades arraigadas, todo eso que constituye la sustancia y el esplendor de la civilización contemporánea y que es la razón del poder y el secreto de la arrogancia de los pueblos victoriosos, prósperos é imponentes de nuestros días, ¿todo eso se ha ideado y hecho para otros seres de naturaleza distinta de la de los españoles, condenados á ser, por ley de origen y compromiso de raza, una excepción vergonzosa de la nueva Europa?

Tema es este más de una vez tratado para combatir las vulgaridades y disparates con que, todavía no hace mucho tiempo, se pretendía por algunos cohonestar, ya que no defender, la esclavitud de los negros. De menos escándalo es lo que se dice para recomendar á los españoles blancos la resignación ante las fatalidades de la raza. Pero en el fondo el argumento es el mismo. Contra él protestan toda la Historia contemporánea y la Política comparada.

Las razas, las familias, los pueblos pueden distinguirse, y seguramente se distinguen por sus respectivas aptitudes: se distinguen más por su educación y sus prácticas. Pero en lo fundamental, en lo característicamente humano, todos los hombres son unos, y, por tanto, los progresos que realiza un pueblo pueden realizarlo los demás, siquiera varíen la forma y en las aplicaciones. Por eso la libertad no es *planta inglesa*, ni la democracia una *institución americana*.

Por esto, y por muchas otras razones que salen con facilidad de la historia política y social de España, puede negarse en redondo que el destino de nuestra Patria sea el vergonzoso abatimiento, disfrazado con una indiferencia desesperante que ahora parece amenazar á España, aumentando con una nueva sombra, las tristezas de nuestros últimos desastres. Mas por lo mismo, es necesario ahondar en la vida española para saber cuáles son las causas positivas de la decadencia de España, cuál la razón del retraso en que ha quedado respecto de otras naciones con quienes rivalizó

no hace mucho, y que en otra época compartieron sus errores y sus pecados.

De tal estudio no puede menos de resultar lo que con repetición se ha indicado en el curso de este trabajo. A saber: que las dos principales causas de nuestro actual quebranto consisten en nuestro apartamiento de la vida moral y política del Mundo contemporáneo, y nuestro ciego empeño en representar ideas, intereses, causas vencidas, de cuya tiranía se han emancipado las demás naciones.

Miradas de esta suerte las cosas, el problema resulta relativamente sencillo. Véase lo que todavía priva en la sociedad española é influye visible y superiormente en nuestro carácter y nuestra conducta, contribuyendo de modo particular á darnos tono y significación en el concierto del Mundo. Y luego relaciónese esto con nuestra decadencia creciente al compás del progresivo desarrollo de aquella prianza, hasta llegar al palpable abatimiento de estos días, que no puede explicarse sólo en vista y por razón de circunstancias secundarias y datos de última hora.

Por otro lado, obsérvese si lo que aquí priva impera también, en mayor ó menor grado, á la hora presente, en las naciones prósperas, y relaciónese la progresiva desaparición de los errores é injusticias que todavía padecemos y que también padecieron los demás pueblos, con el desenvolvimiento y la creciente riqueza moral, intelectual y material de las demás sociedades europeas; porque es evidente que poco ó nada de lo que en España ha influido ó influye ha dejado de influir en el resto del Mundo, produciendo en él los mismos ó análogos resultados.

Se trata de un doble trabajo de análisis y de comparación, para el que hoy sobran medios y elementos. Pero trabajo que hay que hacer sin prejuicios y con entera buena fe.

De aquí nuevos motivos para llevar la atención de nuestro público—sobre todo de nuestras clases directoras (las más capaces, obligadas y responsables)—á lo que pasa más allá de las fronteras españolas: á lo que por el general consenso y la práctica común, se impone como la ley del Mundo novísimo: á lo que se levanta por cima de todos los intereses, todas las tradiciones y todos los accidentes de la vida: la idea robusta y esplendorosa del Derecho.

ÍNDICE

I

Al lector.....Pág. 1.

II

Sanromá (1860-95).....Pág. 1.

SUMARIO:

Propagandista.—Catedrático.—Escrito:—Abogado.—El Parlamento español como tribuna y como medio de gobierno.—La representación parlamentaria de las Colonias en las Cortes españolas (1812-1836-1868-1873).—La diputación de Puerto Rico de 1870-73.—La Sociedad abolicionista española (1866-80).—La Asociación para la Reforma de Aranceles.

III

La Repúb'ica y las libertades de Ultramar.....Pág. 39.

SUMARIO:

Historia de la propaganda y de las reformas coloniales de España desde 1868 á 1887.—D. Nicolás Rivero en *La Discusión*, antes de 1868.—La Sociedad abolicionista española.—La Revolución del 68 y la situación de Cuba y Puerto Rico desde 1868 hasta 1873.—El partido radical en 1872.—La República en el 73.—Proyectos de Suñer y votos

de la Asamblea Nacional y de las Cortes Constituyentes del 78.—La abolición de la esclavitud en Puerto Rico (1878) y en Cuba (1881).—La política internacional de la República.—Sus éxitos.—Decretos y actos del Gobierno de la República en las Antillas.—El ensayo autonomista de Puerto Rico.—La obra colonial de la Restauración.—La de la Regencia.—La Paz del Zanjón.—Sus consecuencias y sus mistificaciones.—La propaganda autonomista.—Los partidos reformistas y autonomistas de Cuba y Puerto Rico.—La representación parlamentaria de las Antillas.—Los publicistas en Madrid.—El periódico *La Tribuna* (1881).—Los partidos republicanos y la cuestión colonial.—El programa de la Autonomía.

IV

La cuestión de Ultramar en 1871.. Pág. 327.

SUMARIO:

La cuestión colonial y la Revolución de Septiembre.—Mi entrada en la política activa.—Mi entrada en el Parlamento español.—Razón y alcance de mi campaña colonial en sus tres fases (abolición de la esclavitud, reforma democrática y régimen autonomista).—Mi primer discurso parlamentario de 10 de Julio de 1875.—A los 25 años, en Infesto.—El pacto del Zanjón.—La gran experiencia de Puerto Rico.

V

La cuestión de Cuba en 1898.. Pág. 487.

SUMARIO:

La situación política en la Península y en Ultramar, desde 1890 á 1897.—Mi discurso en el Senado, en 1896.—La última protesta de la propaganda autonomista en la oposición.—Apéndices.—Mi interview con la *Revue Internationale* de París, en 1895.—Las reformas del Sr. Cánovas en 1890.—Las declaraciones, del Sr. Sagasta.—Mis discursos en los meetings de Cádiz y León de 1897.—Mis cartas á los autonomistas

de Barcelona y de Puerto Rico, sobre la instauración del nuevo régimen, en 1897.

VI

Los problemas de Ultramar en 1898 Pág. 615.

SUMARIO:

Los viejos y los nuevos problemas de Ultramar.—Las Antillas.—Filipinas.—Fernando Póo.—La política internacional como garantía y complemento de la reforma colonial.—El «Libro Rojo» de España.—Ocho discursos pronunciados en el Congreso de los Diputados.—Primero: sobre el estado y disposición de Cuba.—Segundo: sobre el bill de indemnidad por los decretos autonomistas de Noviembre de 1897.—Tercero: sobre el presupuesto del Ministerio de Estado.—Cuarto: sobre la política exterior del Gobierno liberal de España.—Quinto: sobre nuestras colonias de Africa.

VII

Aspecto internacional de la Cuestión de Cuba.... Pág. 867.

SUMARIO:

Relaciones de las cuestiones coloniales con la política internacional.—El Gobierno norteamericano antes de 1897.—Las reformas coloniales españolas de Noviembre de 1897.—La intervención europea en las cuestiones de Cuba (1826-52-74-96).—El derecho de intervención.—Supuestos entrañados en las cuestiones de Oriente, de Italia y de Alemania.—La cuestión americana y la política Monroe.—La política Mac Kinley y su comparación con la del presidente Grant en 1875.—Motivos aparentes y motivos verdaderos de la guerra de los Estados Unidos con España en 1898.—Las Notas de Everett de 1852, de Olney de 1896 y de Woodford de 1897.—Enormidad jurídica del bill norteamericano de 18 de Abril de 1898.—Consecuencias doctrinales y políticas de las declaraciones del Gobierno norteamericano en 1897, y de su victoria sobre España.—Compromisos futuros de Europa en América.—Soluciones

posibles de la cuestión de Cuba.—Inverosimilitud de la que ha prevalecido.—Errores de España y desafueros y violencias de los Estados Unidos.—Quebranto del Derecho Internacional novísimo.

VIII

El Tratado de París de 1898.....Pág. 1.047.

SUMARIO:

Mis avisos y Conferencias públicas sobre el Marqués de la Senera y la política Monroe, desde 1894 á 1896.—Mis Conferencias sobre *Tratado de París* en el *Círculo Mercantil de Madrid* y en la *Universidad de Oviedo* de 1899.—Mi informe sobre las Colonias españolas de 1900 (publicado en la *Revue Internationale de Paris* y en el *Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid*).—Mis lecciones del Ateneo sobre el *Derecho público contemporáneo*.—Afirmaciones de éste respecto de la solidaridad internacional el derecho de intervención y el concierto de las naciones.—Resumen del *Tratado de París*.—Su juicio en relación con los principios del *Derecho Internacional contemporáneo* y con lo que los norteamericanos hacen hoy en Filipinas, Puerto Rico y Cuba.—Retroceso del *Derecho público*.—Quebranto del prestigio americano.—Trascendencia de este hecho.

4 f f f f
5/30/12

W. H. S.
4/23

